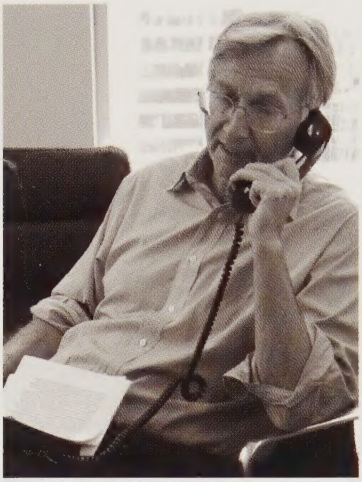
SEYMOUR M.
HERSH

OBEDIENCIA DEBIDA

Del 11 de septiembre a las torturas de Abu Ghraib

AGUILAR



Seymour M. Hersh escribió su primer artículo para *The New Yorker* en 1971 y ha sido colaborador habitual de esta publicación desde 1993. Además del premio Pulitzer, ha ganado cuatro veces el George Polk Award y otra docena de galardones, muchos de éstos por su trabajo en *The New York Times*. En 2004 obtuvo un National Magazine Award for Public Interest por sus trabajos sobre el espionaje y la guerra de Irak. Casado y padre de tres hijos, vive actualmente en Washington D.C. *Obediencia debida* es su octavo libro.

Fotografía del autor © Matt Dellinger

OBEDIENCIA DEBIDA

OBEDIENCIA DEBIDA

Del 11 de septiembre a las torturas de Abu Ghraib

OBEDIENCIA
DEBIDA

SEYMOUR M.
HERSH

OBEDIENCIA DEBIDA

Del 11 de septiembre a las torturas de Abu Ghraib

AGUILAR

AGUILAR

Copyright © 2004 by Seymour M. Hersh
Título original: *Chain of Command: The Road from 9/11 to Abu Ghraib*
Publicado de acuerdo con Harper Collins Publishers Inc.
Traducción: Isabel Murillo Fort y Luis Murillo Fort

De esta edición:
D. R. © Santillana Ediciones Generales, S. A. de C.V., 2004
Av. Universidad 767, Col. del Valle
México, 03100, D. F. Teléfono (55) 54207530
www.**aguilar**.com.mx

Distribuidora y Editora Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S. A.
Calle 80 Núm. 10-23, Santafé de Bogotá, Colombia.
Santillana Ediciones Generales S.L.
Torrelaguna 60-28043, Madrid, España.
Santillana S. A.
Av. San Felipe 731, Lima, Perú.
Editorial Santillana S. A.
Av. Rómulo Gallegos, Edif. Zulia 1er. piso
Boleita Nte., 1071, Caracas, Venezuela.
Editorial Santillana Inc.
P.O. Box 19-5462 Hato rey, 00919, San Juan, Puerto Rico
Santillana Publishing Company Inc.
2043 N. W. 87th Avenue, 33172. Miami, F1., E. U. A.
Ediciones Santillana S.A. (ROU)
Constitución 1889, 11800, Montevideo, Uruguay.
Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S. A.
Beazley 3860, 1437, Buenos Aires, Argentina.
Aguilar Chilena de Ediciones Ltda.
Dr. Aníbal Ariztía 1444, Providencia, Santiago de Chile.
Santillana de Costa Rica, S. A.
La Uruca, 100 mts. Oeste de Migración y Extranjería, San José, Costa Rica.

Primera edición: noviembre de 2004

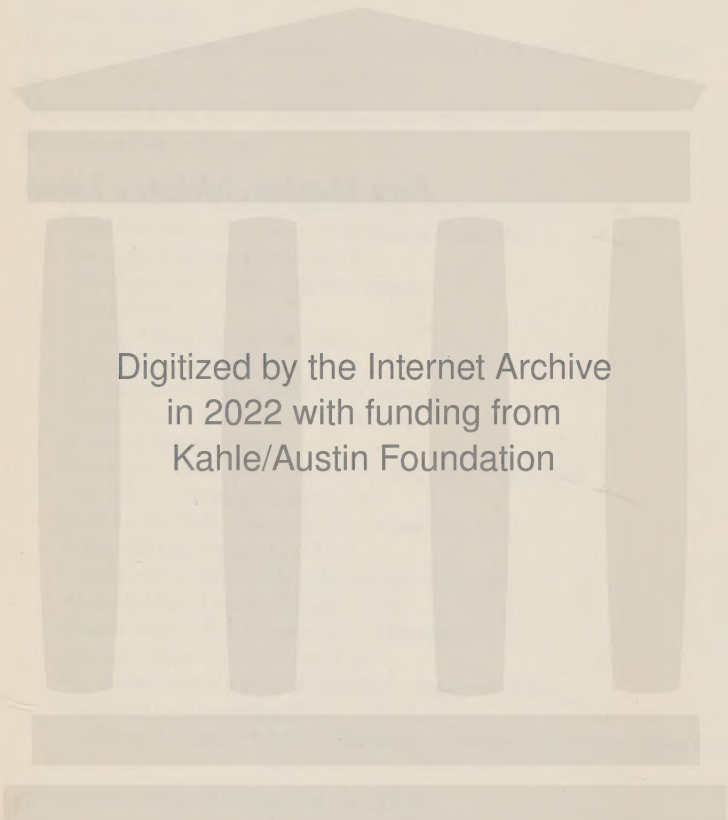
ISBN: 970-770-054-8

D. R. © Adaptación de cubierta: José Luis Trueba

Impreso en México

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo, por escrito, de la editorial.

Para Matthew, Melissa y Joshua



Digitized by the Internet Archive
in 2022 with funding from
Kahle/Austin Foundation

https://archive.org/details/obedienciadebida0000hers

Índice

Introducción de David Remnick *11*

Capítulo I. Torturas en Abu Ghraib **23**
El problema de Guantánamo 23
Fotografías de una prisión 43
Cruzar la frontera 69
La zona gris 87

Capítulo II. Fracaso de la inteligencia **97**
De cómo al espionaje norteamericano se le escapó el 11-S 97
Por qué el Gobierno no supo lo que sabía 112
El vigésimo hombre 129

Capítulo III. La otra guerra **147**
Las batallas secretas de Afganistán 147
La huida 154
El poder de los caciques 172

Capítulo IV. Los halcones de Irak **189**
El primer intento de acabar con Sadam Husein 189
Cada vez más cerca 202
Richard Perle va a almorzar 216

Capítulo V. ¿Quién mintió a quién? **229**
Marzo de 2003: «Estos documentos no son auténticos» 229

En el interior del conducto de la información 233
Detrás del «hongo atómico» 252

Capítulo VI. El secretario y los generales 279
Rumbo a Bagdad 279
La «caza del hombre» 292
Apuntar a la insurgencia 305

Capítulo VII. Un amigo más peligroso 321
La apuesta sobre Musharraf 321
El mercado negro definitivo 337
El acuerdo de Washington 346

Capítulo VIII. Oriente Próximo después del 11-S 359
Arabia Saudí: corrupción y compromiso 360
Siria: la oportunidad perdida 369
Irán: ¿la próxima potencia nuclear? 379
Israel, Turquía y los kurdos 389

Epílogo *399*

Agradecimientos *407*

Mapas *411*

Índice analítico *415*

Introducción

El 14 de noviembre de 1969, los lectores de diversos periódicos estadounidenses se encontraron con una noticia bajo este o parecido titular: «Teniente acusado de asesinar a 109 civiles». Llegaba por cortesía de Dispatch News Service, un servicio de distribución creado un año antes para reporteros que trabajaban en Vietnam, y firmado por Seymour M. Hersh, un ex periodista de agencia. Los primeros párrafos, escritos en un estilo directo y lacónico, describían la matanza que unos soldados de la 11ª Brigada de Infantería habían llevado a cabo el año anterior en el poblado vietnamita de My Lai:

> Fort Benning (Georgia), 13 de noviembre—. El teniente William L. Calley, Jr., de 26 años y apodado «Rusty», es un veterano de Vietnam con cara de niño y aspecto apacible. Se le acusa de haber asesinado premeditadamente a un mínimo de 109 civiles vietnamitas durante una misión de acoso y derribo efectuada en marzo de 1968 contra un reducto del Vietcong conocido como «Pinkville».
>
> A Calley se le imputan oficialmente seis cargos de asesinato múltiple. En cada uno se cita un número determinado de muertos, hasta un total de 109, y se le acusa de «asesinar con premeditación [...] a seres humanos orientales cuyos nombres y sexo se desconocen, disparándoles con un fusil». El ejército lo llama asesinato; su abogado y otras personas relacionadas con el incidente consideran que sólo se acataban órdenes.

> «Pinkville» es ya una palabra en clave entre los militares en un caso que, de creer a muchos oficiales y algunos congresistas, suscitará más polémica que las recientes acusaciones de asesinato contra ocho Boinas Verdes.

Finalmente se supo que soldados de la 11ª Brigada habían matado a quinientos o más civiles —sobre todo mujeres, niños y ancianos— en lo que se suponía una operación de búsqueda de guerrilleros del Vietcong. Mataron a unos desde helicópteros y a otros desde tierra y a quemarropa. Hubo violaciones y torturas, bebés y niños asesinados. Después de horas de matanza, los soldados prendieron fuego al poblado dejando a su paso un paisaje macabro.

Basándose en una información proporcionada por un abogado y con una modesta beca del Fondo para Periodismo de Investigación, Hersh llegó a la base de Fort Benning en busca del teniente Calley, que estaba a la espera de ser juzgado por un consejo de guerra. Después de llamar a muchas puertas, y eludiendo la persecución de algunos oficiales de la base, Hersh encontró finalmente a Rusty —que había sido guardagujas del ferrocarril— y le pidió que hablaran. Tras hacerlo por espacio de tres o cuatro horas, fueron a una tienda de comestibles, compraron carne, *bourbon* y vino y estuvieron comiendo y hablando un rato más en el apartamento de la novia de Calley. Éste le dijo a Hersh que en My Lai sólo cumplía órdenes, pero habló sin ambages de lo sucedido allí. Treinta y seis periódicos publicaron el reportaje, que causó verdadera sensación —y en algunos casos incredulidad— entre periodistas de todo el mundo. Cuando un corresponsal del *Washington Post* en el Pentágono fue acusado de escribir una continuación de My Lai, llamó a Hersh y le dijo, muy dolido: «Cabrón, ¿dónde has aprendido a escribir mentiras como ésas?».

Los celos y el desconcierto entre sus competidores eran, tal vez, comprensibles. Hersh tenía treinta y dos años cuando desveló la historia de My Lai y casi nadie le conocía. Tenía, eso sí, muchos contactos en la prensa, pero en el asunto My

Lai trabajaba como *freelance*. Con ayuda de un amigo, David Obst, envió el reportaje vía télex (a cobro revertido) a docenas de periódicos. A pesar de que varios soldados de la unidad hablaron con Hersh extensamente y en los más espeluznantes términos, y de que el propio abogado de Calley confirmó los detalles de su historia, algunos de los principales rotativos, incluido el *New York Times*, no lo publicaron. «Pero yo seguí escribiendo —ha dicho Hersh—, y cuando iba por el tercer artículo conocí a Paul Meadlo, un tipo asombroso nacido en un pequeño pueblo de Indiana, un chico de campo que había disparado contra muchos de aquellos chavales vietnamitas. No hacía más que disparar y disparar y al día siguiente perdió una pierna en combate. Mientras se lo llevaban en camilla, le dijo a Calley: "Dios me ha castigado y ahora te castigará a ti"». Después de que Hersh publicara esta entrevista, la CBS sacó a Meadlo en las noticias de la noche y el asunto explotó. Al año siguiente, Hersh ganó el Premio Pulitzer, toda una gesta para un *freelance*.

Hersh escribió el libro sobre la matanza, *My Lai 4*, después de haber entrevistado a docenas de participantes y oficiales y haber descubierto un sinfín de detalles macabros como, por ejemplo, que el coronel George S. Patton III —hijo del Patton famoso— mandó una postal navideña que rezaba «Paz en la tierra» con fotografías de «combatientes mutilados del Vietcong pulcramente amontonados unos sobre otros». En 1972 publicó en la revista *The New Yorker* un extenso informe sobre la investigación secreta del Gobierno y su ocultación de la matanza de My Lai.

En los círculos periodísticos es un secreto a voces que, como les pasa a velocistas y detectives, los periodistas pierden fuelle por las piernas. Al final cuelgan las botas, se jubilan, se buscan un trabajo de mesa y se dedican a escribir columnas o, peor aún, se convierten en jefes de redacción. Sy Hersh es colega y amigo mío, pero sé que su opinión general sobre los jefes de redacción queda perfectamente reflejada en lo que la difunta Shirley Povich, del *Washington Post*, solía decir de

esa raza: «Un jefe de redacción es un ratón que se entrena para ser rata». Hersh, con sesenta y tantos años, es un periodista y lo será siempre. Yo diría que incluso tiene más energía ahora que hace treinta años. Y los resultados están a la vista; su trabajo para *The New Yorker* durante el mandato de George W. Bush, reflejado en el presente libro, representa un logro periodístico, e incluso ético, tan notable como sus crónicas sobre My Lai.

Los padres de Hersh eran inmigrantes de Lituania y Polonia. Poco tiempo después de llegar a Chicago abrieron una tintorería en el South Side. Su padre, Isidore, murió cuando Hersh y su hermano mellizo tenían sólo diecisiete años. En la Universidad de Chicago, Hersh se especializó en Historia pero también se dedicó a hacer crucigramas, jugar al *bridge* y salir. Estuvo menos de un año en la Facultad de Derecho antes de que lo expulsaran por malas notas. Su primer empleo fue como dependiente en la sección de licores de Walgreens. Este trabajo no le resultó muy satisfactorio. Consiguió otro empleo en el City News Bureau, donde inició su ilustre carrera informando de noticias tan apasionantes como el incendio de una cloaca. Tras pasar por el ejército —estuvo encargado de la oficina de información en Fort Riley (Kansas)— trabajó para la agencia UPI y luego para Associated Press como corresponsal en el Pentágono. Dejó AP en 1967 a raíz de que sus editores adulteraron y cortaron un reportaje suyo sobre el desarrollo de armas químicas y biológicas por parte del Gobierno. Tras vender una versión de la historia a *The New Republic*, fue varios meses secretario de prensa de Eugene McCarthy (redactaba sus discursos), tras lo cual se replanteó en serio su carrera periodística.

Con sus escritos sobre My Lai, Hersh se sumaba a una tradición de *muckrakers* [los que airean escándalos y escarban en vidas ajenas] como Upton Sinclair, Ida Tarbell, Lincoln Steffens, Rachel Carson y I. F. Stone. Theodore Roosevelt había adaptado ese término de la novela de Bunyan *El peregrino* —el hombre a quien «le ofrecían una corona celestial a cambio de su rastrillo, pero en vez de perseguir o anhelar la

corona ofrecida continuaba rastrillando para sí el estiércol del suelo»— a fin de criticar a «periodistas temerarios», como David Graham Phillips, que estaban atacando a aliados de Roosevelt en el Senado por su presunta sumisión a intereses empresariales. Después de My Lai, Hersh se dedicó a escarbar en una gran variedad de campos de la gestión pública. En su carrera, como *freelance* y como redactor del *New York Times* y, desde 1998, de *The New Yorker*, ha escrito tantos reportajes de impacto que su único posible rival sería Bob Woodward, del *Washington Post*.

Durante el escándalo Watergate, cuando Woodward y Carl Bernstein se adelantaban, semana a semana, a la competencia, los editores del *New York Times* intentaron no perder terreno de la única manera posible: recurriendo a Seymour Hersh. Aunque el *Post*, en leyenda como en la realidad, estuvo por delante en el marcador hasta la dimisión de Nixon, Hersh se anotó muchos puntos y fue un acicate constante para Bernstein y Woodward. Durante los meses más intensos del escándalo los tres periodistas cenaron juntos varias veces; intercambiaban chismes y pullas, pero evitando siempre revelar pistas y secretos. En su libro *Todos los hombres del presidente*, Woodward y Bernstein escriben que Hersh se presentaba a esas cenas con unas viejas zapatillas de deporte, una camisa raída y «pantalones arrugados y descoloridos. No se parecía a ninguno de los periodistas que conocíamos. No dudaba en llamar en público a Henry Kissinger "criminal de guerra!", y el poder del *New York Times* lo atraía y lo repelía a la vez».

En el *Times*, Hersh escribió una serie de artículos sobre el espionaje ilegal de la CIA a «enemigos» nacionales, la vigilancia a la que Kissinger sometía a los empleados del Gobierno, la implicación de Estados Unidos en el golpe militar de Pinochet en 1973, y los bombardeos secretos sobre Camboya. Desde principios de los años noventa ha escrito largos trabajos de investigación para *The New Yorker*, entre ellos un clarividente artículo que explicaba cómo Pakistán había elaborado su programa nuclear, y otro en 1999 sobre el declive de los análisis de inteligencia en la NSA (Agencia Nacio-

nal de Seguridad). Es autor de ocho libros, entre ellos este *Obediencia debida*.

Durante muchos años, Hersh ha trabajado en un despacho de Connecticut Avenue, en Washington, una habitación y media repleta de libros y libretas con anotaciones y números de teléfono. Es el equivalente en despacho de un cuarto de estudiante, pero sin las cajas de pizza. En una pared conserva un memorándum escrito a máquina por Lawrence Eagleburger y Robert McCloskey y dirigido a Kissinger, su jefe en el Departamento de Estado, que lleva fecha de 24 de septiembre de 1974 y reza: «Creemos que Seymour Hersh pretende publicar nuevas acusaciones sobre el papel de la CIA en Chile. Él no piensa cejar en su campaña. Usted es su blanco final». Hersh escribiría después el libro *The Price of Power (El precio del poder)*, que sigue siendo la investigación más contundente sobre las actividades de Henry Kissinger durante la era Nixon. La mañana del 11 de septiembre, sólo dos horas después de que varios aviones secuestrados se estrellaran contra las Torres Gemelas, el Pentágono y un campo en el estado de Pensilvania, Hersh y yo estuvimos hablando. Convinimos en que tendría que investigar esta historia al margen de las conclusiones oficiales y que seguramente tendría que publicar más a menudo, centrándose en los militares, los servicios de inteligencia nacionales y extranjeros, el Departamento de Estado y la Casa Blanca.

Desde entonces ha escrito veintiséis artículos para *The New Yorker*, casi ciento diez mil palabras, una producción sorprendente teniendo en cuenta la intensidad del trabajo requerido en cada artículo, la cantidad de pistas que hubo de investigar y descartar. El trabajo que ha hecho en este período, tanto en la revista como para este libro, no pretende ser una historia enciclopédica del 11-S, la Administración Bush o las guerras de Afganistán e Irak. No obstante, lo que Hersh ha realizado desde aquella mañana fatídica es extraordinario: un verdadero cuerpo de investigación que ha arrojado luz, entre otros temas, sobre los fallos del espionaje que condujeron al 11-S; la corrupción de la familia real saudí; la

amenaza para la seguridad que representa el arsenal nuclear paquistaní; los lamentables errores de las guerras de Afganistán e Irak y sus secuelas; la torpeza en el caso contra Zacarias Moussaoui; los intentos de la Administración por fomentar dudosas informaciones acerca de un supuesto programa nuclear iraquí; la Oficina de Planes Especiales del Pentágono y cómo «coló» sus argumentos ideológicos a la Casa Blanca; y, por último, el escándalo de las torturas en Abu Ghraib.

Hersh es todo un personaje en Washington. Incluso como redactor del *New York Times* o de *The New Yorker*, ha sido siempre una especie de lobo solitario que va por delante de la jauría, unas veces viendo cosas antes que los otros, a menudo descubriendo detalles que darán pie a otras investigaciones. Es evidente, visto en retrospectiva, que ni siquiera un periodista tan dinámico y valeroso como él pudo obtener toda la verdad sobre la crisis posterior al 11-S en tiempo real. Nadie podía exponer en hechos y al completo, antes de la guerra, lo que los críticos de la Administración apuntaban acertadamente como posible o probable: que las afirmaciones de la Casa Blanca sobre una amenaza inminente eran falsas o exageradas, que no se encontrarían armas de destrucción masiva después de la invasión. Pero Hersh sí expuso pruebas claras de que la Administración estaba jugando a un juego muy peligroso con los servicios de inteligencia. Antes de la invasión de Irak publicó un artículo en el que exponía las implicaciones de la falsificación de documentos «probatorios» de que Irak había intentado comprar a Níger material nuclear. Una parte de lo que Hersh escribió es ahora dato aceptado —por ejemplo, que la información confidencial proporcionada por desertores iraquíes no era de fiar—; no está de más, pues, recordar que sus artículos suscitaron amplia polémica cuando fueron publicados por primera vez. Hersh demostró paso a paso que, manipulando el proceso de análisis de la información confidencial, la Administración Bush se engañaba a sí misma tanto como engañaba al pueblo estadounidense. Y pudo hacerlo gracias a su conocimiento de los servicios de inteligencia y a ha-

berse procurado, con los años, un extraordinario abanico de fuentes muy bien situadas e informadas que confían plenamente en él.

Hablando de fuentes, a lo largo de este libro el lector encontrará fuentes anónimas —funcionarios, analistas, embajadores, soldados y agentes secretos— descritas por su rango o su cargo, por su nivel de conocimientos o sus posibles motivaciones, pero no por sus nombres. Es algo que suele frustrar al lector, y es comprensible. Periodistas muy inferiores a Hersh suelen ocultar nombres porque es más fácil así, o incluso para dar la engañosa impresión de que el lector está ante una investigación de altos vuelos. El problema es que en el ámbito en el que se mueve Hersh, sobre todo los servicios de inteligencia, suele ser imposible que un funcionario proporcione información reveladora, por no decir clasificada, y al mismo tiempo esté dispuesto a dar la cara. Peligraría su puesto de trabajo e incluso se expondría a ser procesado. Por otro lado, contrariamente a lo que parece ser una creencia arraigada, los editores no acostumbran a leer la frase «un oficial de alta graduación me dijo...» y asentir muy serios con la cabeza. «Confía pero verifica», como solía decir un presidente. En todos los casos, hablo de *The New Yorker*, los editores de un determinado reportaje preguntan al periodista quiénes son las fuentes no nombradas, qué motivaciones pueden tener, y si es posible corroborar sus palabras.

«Yo no monto mis artículos basándome en lo que digan izquierdistas de pro, miembros de los Weathermen o la nueva hornada de la América con *K* —dijo una vez Hersh—. Me baso en datos de constitucionalistas anticuados. Aprendí hace tiempo que no puedes hacer juicios de valor basándote en las ideas políticas ajenas. El quid de la cuestión es: ¿son gente íntegra o no?».

Los reportajes de Hersh nunca gustaron al *establishment* militar ni a los servicios de inteligencia (y no digamos a George W. Bush), pero tampoco se le considera un «fuera de la ley». Oficiales de alta graduación, analistas de inteligencia y funcionarios de esto o de aquello no tienen por costumbre hablar

con periodistas de los que no se fían. Informar sobre los servicios de inteligencia es extremadamente difícil incluso para alguien del nivel de Hersh, y a veces se cometen errores. En marzo de 2003, iniciada la invasión de Irak, Hersh, como varios periodistas más, escribió que el ejército corría el peligro de quedar empantanado en su marcha sobre Bagdad, que sus vías de abastecimiento estaban escasamente aprovisionadas; poco tiempo después, el avance llegaba sin mayores problemas a la capital iraquí. Sin embargo, ese mismo artículo contenía otros puntos que buena parte de la prensa no había asimilado todavía: que no había suficientes tropas para estabilizar el país, que existía una brecha entre los militares de uniforme y la jefatura civil del Pentágono, y que el empeño de Donald Rumsfeld de «hacer una guerra en plan barato», como lo expresó una fuente, conduciría a problemas graves después de la caída de Sadam Husein.

El caso es que —y no pretendo retratar como un sentimental a un hombre duro como él— Hersh siente una gran estima por el estamento militar. «Los militares siguen siendo uno de los estratos más idealistas de nuestra sociedad —declaró una vez en una entrevista—. Muchos de ellos creen firmemente en la idea que Norman Rockwell tenía de Estados Unidos, actúan según esos principios y, además, con enorme integridad. Lo que me resulta más interesante de ellos es que les traen sin cuidado mis opiniones personales, si voto demócrata o republicano, si me gusta la guerra o no me gusta, o si soy halcón o paloma. Incluso durante la guerra de Vietnam, lo que les preocupaba era que yo entendiera bien las cosas y las escribiera bien, que me aplicase a ello con tesón y, a ser posible, que procurara protegerlos. Y después hablan, te dicen lo que piensan».

Sería pedir demasiado que esta clase de trabajo de investigación fuese valorado incluso por su objeto de análisis. El año pasado Hersh escribió un artículo sobre Richard Perle, presidente de la Defense Policy Board (Junta de Política de Defensa) y uno de los líderes del movimiento neoconservador en torno al Pentágono. Por lo visto, Perle tenía intereses

empresariales que podían beneficiarse de una guerra en Irak. Fue uno de esos artículos en los que Hersh se adelantó a todos, y el resto de los periodistas, no sólo del *New York Times*, fue pasándose el testigo hasta que finalmente Perle tuvo que dimitir de su cargo. Furioso y fuera de sí, salió en la CNN entrevistado por Wolf Blitzer y dispuesto a lanzar estiércol a quien estiércol rastrillaba.

«Mire —dijo—, la verdad, Sy Hersh es lo más cercano a un terrorista que podemos encontrar en la prensa de este país». Y aseguró a los medios informativos que demandaría a Hersh y a la revista. No lo hizo.

La primavera pasada, Sy me llamó a casa un sábado por la mañana para decirme que tenía en su poder una serie de fotografías horrorosas —«diez veces peor de lo que te puedas imaginar»—, además de un informe militar interno encargado por el general de división Antonio M. Taguba, que describía al detalle palizas, humillaciones sexuales y otras torturas que los norteamericanos estaban cometiendo en el penal de Abu Ghraib, en las afueras de Bagdad. Era la misma cárcel donde los baasistas de Sadam habían matado a innumerables presos políticos en ejecuciones con horca dos veces por semana. Yo sabía que Hersh estaba investigando una posible práctica de torturas con iraquíes. (Pocos días antes había cancelado bruscamente un viaje a Oriente Próximo para reunirse con una fuente que decía poseer fotografías y otro material). Ahora tenía datos concretos. Hersh había sabido también que los productores de *60 Minutes II*, el programa de la cadena CBS, habían conseguido las fotografías aunque no el informe de Taguba, y que habían ido aplazando su emisión a petición del Pentágono. Nosotros decidimos ignorar a la CBS y publicarlas inmediatamente, asumiendo que podíamos fiarnos de los datos que teníamos. (Naturalmente, existían riesgos. Un periódico sensacionalista británico, el *Daily Mirror*, publicaría después fotografías trucadas, lo que finalmente condujo a la dimisión de su director). Un miércoles por la tarde, el 28 de abril, Dan Rather sacaba en antena un excelente reportaje

sobre las fotografías y entrevistaba a un portavoz del ejército que se deshizo en disculpas; concluido el informe, Rather admitió que la cadena había demorado su emisión después de un «llamamiento» por parte del jefe del Estado Mayor Conjunto pero que, «habida cuenta de que otros periodistas —refiriéndose, de hecho, sólo a Hersh— estaban a punto de publicar su versión de la noticia, el Departamento de Defensa accedió a cooperar con nuestro programa». Dos días más tarde, el artículo de Hersh y todo un *book* con horripilantes fotografías de Abu Ghraib (incluidas varias que la CBS no había mostrado) salían en nuestra página web —www.newyorker.com—. El artículo fue la primera piedra de lo que se conocería como «el escándalo Abu Ghraib». Los rotativos más importantes del país dedicaron importantes espacios a las informaciones de Hersh, y muchos acabaron sacando también artículos sobre el propio Hersh y sus treinta y cinco años de carrera, desde My Lai hasta Abu Ghraib.

Hersh publicó tres artículos en otras tantas semanas («Torturas en Abu Ghraib», «Cadena de mando» y «La zona gris»), y en cada entrega era más evidente que Abu Ghraib no era un «incidente aislado», sino, más bien, un intento orquestado por el Gobierno y la jefatura militar de soslayar la Convención de Ginebra a fin de sonsacar información confidencial y sofocar a los insurgentes iraquíes. A estas alturas, la Administración Bush había convertido en hábito el arrojar dudas sobre el trabajo de Hersh de la forma más directa y grosera. En su libro *Bush at War* (trad. esp.: *Bush en guerra*, Península, 2003), Woodward relata el primer encuentro del presidente con el líder paquistaní general Pervez Musharraf. En un momento dado, Musharraf mencionó un artículo de Hersh publicado en *The New Yorker* donde decía que Estados Unidos, con ayuda de los israelíes, había redactado planes de emergencia para apoderarse del armamento nuclear paquistaní si Pakistán entraba en una peligrosa situación de inestabilidad. «Seymour Hersh es un embustero», dijo Bush a Musharraf, según escribe Woodward. Tras la tercera entrega de Hersh sobre Abu Ghraib, el portavoz del Pentágono

Lawrence di Rita se tomó la libertad de expresarse con mayor crudeza. Hersh, dijo, se limitaba a «tirar mierda contra la pared, esperando a que alguien venga y desentrañe lo que haya de verdad. Es un tapiz de disparates».

En semanas sucesivas, a medida que era cada vez más evidente que el reportaje de Hersh sobre Abu Ghraib, como su primer informe sobre My Lai, era una obra maestra del recato, Di Rita dejó de lanzar acusaciones contra la pared. Los reportajes de Seymour Hersh han resistido el paso del tiempo y han plantado cara a un presidente cuyas calumnias, curiosamente, han acabado convirtiéndose en una especie de apoyo involuntario.

David Remnick
Nueva York, agosto de 2004

Capítulo I

Torturas en Abu Ghraib

El problema de Guantánamo

A finales del verano de 2002, un analista de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) hizo una discreta visita a la prisión militar de la base naval estadounidense en la bahía de Guantánamo, Cuba, donde se calcula que estaban recluidos unos seiscientos presos, muchos de ellos, al principio, en jaulas de malla metálica que los dejaban a merced del sol implacable. La mayoría de los prisioneros había sido capturada en Afganistán, en el campo de batalla, durante la campaña contra los talibanes y Al Qaeda. Sin embargo, la Administración Bush había determinado que no eran prisioneros de guerra sino «combatientes enemigos», y que su reclusión en Guantánamo podía ser indefinida mientras equipos de la CIA, el FBI y militares trataban de sonsacarles información. En una serie de memorandos secretos redactados unos meses antes, abogados de la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Justicia habían acordado que los prisioneros no podrían acogerse a las leyes federales ni a la Convención de Ginebra. El presidente Bush ratificó el dictamen al tiempo que declaraba que los detenidos debían, no obstante, ser tratados de una manera acorde con la Convención de Ginebra, siempre y cuando ello fuera «compatible con las necesidades militares».

Poner en marcha el proceso de los interrogatorios era esencial. La guerra contra el terrorismo no se decidiría por el armamento ni por los efectivos militares, como la Segunda

Guerra Mundial, sino localizando a los terroristas y sabiendo cuándo y dónde podían producirse futuros atentados. «Ésta es una guerra en la que la información confidencial lo es todo —me dijo John Arquilla, profesor de Análisis de Defensa en la Naval Postgraduate School y asesor del Pentágono sobre terrorismo—. Ganar o perder depende de esa información». Y el presidente Bush y sus asesores seguían necesitando información sobre los secuestros aéreos del 11 de septiembre de 2001: ¿Cómo los planearon? ¿Quién estuvo implicado? ¿Había un comando de reserva dentro de Estados Unidos?

Pero los interrogatorios de Guantánamo estaban resultando un fiasco. Se obtenían muy pocos datos útiles, mientras prisioneros de todo el mundo seguían llegando a la base y las instalaciones eran ampliadas. El analista de la CIA había sido enviado allí para averiguar qué estaba pasando. Hablaba bien el árabe y conocía el mundo islámico. Era muy respetado dentro de la agencia y podía informar directamente, si así lo prefería, a George Tenet, director de la CIA. La suya fue más que una mera visita de inspección. Entrevistó a un mínimo de treinta prisioneros para averiguar quiénes eran y por qué habían acabado con sus huesos en Guantánamo. Como le confió después a un ex colega de la CIA, algunos de sus hallazgos fueron devastadores.

«Regresó convencido de que en Guantánamo estábamos cometiendo crímenes de guerra —me dijo ese colega suyo—. Según su muestra, más de la mitad de los que estaban allí encerrados no tenían por qué estarlo. Encontró gente tirada en el suelo sobre sus propias heces —incluidos dos cautivos (de ochenta años o más) indudablemente aquejados de demencia—. Le pareció que lo que allí ocurría era escandaloso». No existía un método racional para determinar quién era importante y quién no. Una vez capturados y llevados a Cuba, los prisioneros quedaban en un limbo legal permanente. El analista explicó a su colega que uno de los primeros presos a los que entrevistó era un muchacho a quien preguntó si «hacía la *yihad*» (si participaba en una guerra santa contra Estados Unidos). «Y el chico dijo: "Yo jamás he hecho *yihad* alguna.

Si hubiera podido, la habría hecho, pero no tuve oportunidad. Acababan de meterme en la cárcel"».

El analista elaboró un informe resumiendo lo que había visto y sabido por los prisioneros. Dos ex funcionarios de la Administración que leyeron el documento ultraconfidencial me dijeron que sus conclusiones eran inexorables: se estaba interrogando a quien no tocaba y de mala manera. «Las organizaciones que operan dentro de un país sin dirección desde el exterior son difíciles de ubicar, y tenemos que inventarnos la manera de combatirlas», dijo uno de los ex funcionarios, que había trabajado en la Casa Blanca. Pero el mensaje del informe era que «en lo tocante al terrorismo, estábamos empeorando las cosas para Estados Unidos». Los interrogatorios al azar de detenidos escogidos también al azar complicaban todavía más la obtención de información de los prisioneros que podían tener algo valioso que decir. Igualmente preocupante era la insinuación del analista, según explicaba el ex funcionario de la Casa Blanca, de que «si capturamos a personas que no eran terroristas en ese momento, ahora lo son».

En otoño de ese mismo año, el informe del analista recorrió los despachos de las altas instancias de la Administración Bush sin que nadie le hiciera caso, hasta que cayó en manos del general John A. Gordon, asesor auxiliar de seguridad nacional para combatir el terrorismo, a las órdenes de Condoleezza Rice, la consejera de seguridad nacional y confidente del presidente Bush. Gordon, que se había retirado en 2002 como general de cuatro estrellas, había sido jefe de operaciones del Mando de la Fuerza Aérea y subdirector de la CIA durante tres años. El informe le dejó muy preocupado, más aún por lo que se traslucía de un potencial desquite contra soldados estadounidenses capturados. Según un antiguo funcionario de la Administración, Gordon habría dicho a colegas suyos que le parecía «totalmente contrario al sistema de valores norteamericano» y que «si lo que ocurre en Guantánamo llegara a hacerse público, el presidente saldría malparado». El tema no era sólo las torturas, sino los deberes a que

estaba obligada la Administración por las leyes federales y la Convención Contra la Tortura, de Naciones Unidas, ratificada por Estados Unidos en 1994, que prohibía las torturas así como cualquier otro «trato o castigo cruel, inhumano o degradante». El informe, en opinión de Gordon, proporcionaba pruebas claras de un trato degradante. En Guantánamo las cosas se estaban desmandando.

Naturalmente, en aquellos días los norteamericanos estaban todavía traumatizados, y rabiosos, por los atentados del 11 de septiembre. Después de la captura de John Walker Lindh (el californiano de veinte años que se unió a los talibanes) en Afganistán en diciembre de 2001, sus interrogadores norteamericanos lo desvistieron, lo amordazaron, lo ataron a una tabla y lo exhibieron a la prensa y a todo soldado que deseara verle. Estas presuntas violaciones del Derecho Internacional apenas si suscitaron protestas. Documentos del Departamento de Justicia presentados a los abogados de Lindh revelaron que el comandante de la base de Mazar-i-Sharif, donde Lindh estaba preso, había declarado que «el consejero del secretario de Defensa le había autorizado a "quitarse los guantes" y preguntar lo que le diera la gana».

Como cabía esperar, hubo grandes discusiones en el seno de la Administración sobre lo que era y no era permisible. Pero los principales asesores legales de la Casa Blanca y el Departamento de Justicia parecieron competir por redactar un memorándum que zanjase la cuestión de manera contundente. (Varios de estos documentos fueron publicados por *Newsweek* en mayo de 2004). El más sugerente, en lo que respecta a lo que estaba pasando en las prisiones militares, lo escribió a primeros de agosto de 2002 Jay S. Bybee, jefe de la oficina de asesoría legal del Departamento de Justicia. En un aparente intento de minimizar la importancia de las obligaciones establecidas en la Convención de Ginebra y las leyes federales, el memorándum de Bybee redefinía la tortura. «Determinados actos pueden ser crueles, inhumanos o degradantes, pero no producir el dolor y el sufrimiento necesarios para ser incluidos en el ámbito de una proscripción [legal] contra

la tortura —escribió Bybee a Alberto R. Gonzales, consejero de la Casa Blanca—. Para que un acto constituya tortura [...] debe infligir un dolor difícil de soportar. El dolor físico que entraña tortura debe ser equivalente en intensidad al dolor que acompaña a lesiones físicas graves, tales como colapso orgánico, deterioro de funciones corporales o, incluso, la muerte». (Más adelante Bush nombró a Bybee juez federal, y actualmente preside el Tribunal de Apelaciones de la 9ª Jurisdicción). «Nos enfrentamos a un enemigo cuyo objetivo son civiles inocentes —diría Gonzales a los periodistas dos años después, en el apogeo del escándalo originado por los abusos cometidos en la prisión de Abu Ghraib, en Irak—. Nos enfrentamos a un enemigo que opera en la sombra, un enemigo que no firma tratados. Ellos no visten uniforme; es un enemigo que no profesa lealtad a ningún país, que no valora la vida humana. Un enemigo que no pelea, ataca o planifica conforme a las leyes aceptadas de la guerra, en particular la Convención de Ginebra».

Gonzales añadió que Bush no era responsable de nada de lo que allí hubiera ocurrido. «El presidente no autorizó, ordenó ni dirigió en modo alguno ninguna actividad que pudiera transgredir los convenios ni las leyes contra la tortura, como tampoco otras normas pertinentes», dijo. El presidente no había «firmado ninguna resolución oficial» invocando la Convención de Ginebra antes de la invasión de Irak en marzo de 2003, explicó, «porque era automático que la Convención sería aplicable», y se daba por supuesto que los mandos militares sobre el terreno se ocuparían de que los métodos de interrogatorio se ajustaran a la misma. Pero, en realidad, en una declaración secreta que Bush firmó el 7 de febrero de 2002 dejaba una rendija abierta: «Yo [...] determino que ninguno de los preceptos de la Convención de Ginebra sea relevante en nuestro conflicto con Al Qaeda en Afganistán ni en ninguna otra parte del mundo». Declaraba asimismo que tenía «autoridad, amparada por la Constitución, para suspender la aplicación de dicha Convención en lo que respecta a este conflicto, pero declino ejercer dicha autoridad en estos mo-

mentos». Dicho de otro modo, los detenidos no gozarían de la protección que ofrece la Convención de Ginebra; las condiciones de su reclusión —buenas, malas o lo que fuere— quedaban a la entera discrecionalidad del presidente.

John Gordon tuvo que saber a lo que se enfrentaba cuando solicitó una revisión de alto nivel de la situación en Guantánamo, lo cual no le privó de hacer algo impensable dentro de la Casa Blanca de Bush: enseñar el informe del analista a otros miembros del Consejo de Seguridad Nacional (CSN). Aparentemente, su objetivo era recabar apoyo para una revisión previa antes de presentar el plan a Condoleezza Rice. A petición de Gordon, el analista de la CIA informó personalmente a Elliott Abrams, por entonces director encargado de Democracia, Derechos Humanos y Operaciones Internacionales, y a John Bellinger, consejero del CSN. Ambos le dieron su apoyo. No ocurrió así con funcionarios de dos oficinas clave —la de Asesoría de la Casa Blanca y la del vicepresidente Dick Cheney—. David Addington, principal abogado de la oficina del vicepresidente, dejó bien claro a Gordon, dijo el ex funcionario de la Casa Blanca, que los prisioneros de Guantánamo eran combatientes ilegales y por tanto carecían de derechos de protección. La oficina de Asesoría de la Casa Blanca tampoco hizo nada por ayudar a Gordon.

Éste perseveró, recordaba el ex funcionario, y «se lo presentamos a Condi [Condoleezza Rice]».

A finales de 2002, mientras el informe del analista de la CIA se abría camino hasta Rice, en el FBI hubo una serie de acaloradas protestas por los métodos de interrogatorio en Guantánamo, ya que sus agentes habían estado interrogando a detenidos desde que se inaugurara la prisión. Algunos de dichos agentes empezaron a contar a sus superiores lo que habían presenciado, lo cual, a su entender, distaba mucho de tratar de conseguir buena información. «Me contaron —recordaba un importante funcionario de inteligencia— que los guardianes abofeteaban a los prisioneros, que los hacían desnudar, que les echaban agua fría por encima y los hacían

permanecer de pie hasta que daban síntomas de hipotermia. Los agentes estaban indignados. No sólo era injusto sino contraproducente». Los agentes pusieron por escrito sus quejas específicas, me dijo el funcionario, y éstas fueron transmitidas por *e-mail* y conversación telefónica a funcionarios del Departamento de Defensa como William J. Haynes II, principal abogado del Pentágono. En lo que respecta a la vida cotidiana de los prisioneros de Guantánamo, nada cambió.

También a finales de 2002 se tuvo noticia de nuevos informes sobre malas actuaciones por mediación de un abogado de la reserva del ejército que había servido en Guantánamo. Los oficiales que dirigían la prisión estaban violando la Convención de Ginebra y las leyes federales contra la tortura, explicó el abogado a sus entrevistadores. Dijo que él y un colega suyo habían redactado un pormenorizado memorándum dirigido a los oficiales de mayor graduación en Guantánamo, pero que no habían recibido ninguna respuesta. Se les animó a llevar sus quejas a los abogados del Pentágono. Una vez más, no sirvió de nada, me contó el funcionario de inteligencia.

El tema que más preocupaba al general Gordon y a quienes compartían su postura en la Administración no era el maltrato de los prisioneros, me dijo el ex funcionario de la Casa Blanca. «Se trataba de averiguar cuántos de los reclusos no deberían estar allí. ¿Hemos detenido a los que había que detener?». En esta cuestión los esfuerzos de Gordon encontraron respaldo donde menos cabía esperarlo: en el general de división Michael Dunlavey, reservista del ejército que mandaba el destacamento responsable de los interrogatorios en Guantánamo. Dunlavey no tenía simpatías por ningún prisionero que estuviera vinculado al terrorismo. En mayo de 2004, a su regreso de Erie (Pensilvania), pronunció un discurso en la sede local del Rotary Club en el cual dijo, según la crónica aparecida en el *Erie Times-News*, que «cubrirle la cabeza al preso con una bolsa durante tres días está mal, pero no puede considerarse tortura». Según el diario, Dunlavey «equiparaba los métodos de interrogatorio empleados por los soldados norte-

americanos a los castigos que él recibió de niño: quedarse sin cenar si volvía tarde a casa, unos azotes por contestar, quedarse encerrado en su cuarto sin ver la tele si era desobediente [...] "Imagino que [mi madre] debía de ser una criminal de guerra", dijo». Pero también él se sentía frustrado por lo que me describió como el «tortuoso método» aplicado a esa gente. «Si los prisioneros no son de utilidad —explicaba—, lo que hagas no tiene ningún valor».

En nuestra conversación, Dunlavey, que en la vida civil es juez estatal, negó que prisioneros de edad avanzada hubieran padecido abusos, y dijo que a Rice y otros en la Casa Blanca les había enseñado fotografías de hombres mayores vestidos con impolutas batas de hospital, recibiendo en la clínica tratamientos de última generación. El problema, dijo, es que «eran más viejos que matusalén. Y yo pensé: "Por favor, no os muráis de viejos mientras estéis aquí". Porque si se morían —añadió sonriendo—, habría que enterrarlos enseguida [según las costumbres musulmanas] y nos ganaríamos enemigos de por vida. "Aquí yace el bisabuelo, el más viejo del poblado, que sobrevivió tres generaciones y los norteamericanos lo metieron bajo tierra dentro de una caja"».

Las fotografías, trucadas o no, fueron vistas por algunos como pruebas de que algo grave estaba sucediendo en Guantánamo. «Eran realmente tan viejos —me dijo el ex funcionario de la Casa Blanca—, que costaba pensar que pudieran ser peligrosos». Y añadió que era bastante escéptico en cuanto a la autenticidad de las fotos, pues sabía lo que el analista de la CIA había descubierto.

La reunión informativa con Condoleezza Rice sobre los problemas en Guantánamo tuvo lugar en el otoño de 2002. No versó sobre el tema de las torturas ni sobre la posibilidad de que algunos prisioneros estuvieran recibiendo un trato cruel, inhumano o degradante. El tema principal, me dijo el ex funcionario, fue sencillamente: «¿Estamos consiguiendo información? ¿Qué proceso se sigue para escoger a estas personas?». Rice accedió a convocar una reunión de alto nivel en

la Casa Blanca. Y, lo más importante, le pidió al secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, que asistiera.

Rumsfeld, quien para entonces estaba animando —pública y privadamente— a sus soldados a mostrarse duros con los prisioneros, se presentó en la reunión pero apenas tuvo nada que decir. Uno de los participantes recordaba que en cierto momento Rice le preguntó «cuáles eran los temas, y él dijo que no los había mirado». Rice le instó a hacerlo y añadió: «Es preciso aclarar todo esto». Rumsfeld parecía opinar lo mismo, y Gordon y sus partidarios abandonaron la sala convencidos, según me dijo el ex funcionario, de que el Pentágono iba a tomar cartas en el asunto.

Rice convocó una nueva reunión para debatir los problemas en Guantánamo. Debía asistir la cúpula de la Administración, esto es, miembros del gabinete y hombres de confianza implicados en asuntos militares, de espionaje y de seguridad nacional. Pero, por lo visto, aclarar las cosas no era una de las prioridades de Rumsfeld. Marshall Billingslea, un funcionario recién nombrado que era ayudante del secretario de Defensa para Operaciones Especiales y Conflictos de Baja Intensidad (SOLIC), recibió orden de preparar el material para la reunión. Billingslea, de sólo treinta y un años, había trabajado como especialista en desarme para el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que por entonces dirigía Jesse Helms, senador ultraconservador por Carolina del Norte.

Cuando aceptó el puesto, Billingslea dejó claro a sus colegas que él sabía bastante sobre control de armamento pero no demasiado sobre prisiones o terrorismo internacional. Sabía que Guantánamo era un caos, dijo un funcionario de Defensa, por las continuas discusiones entre Dunlavey y otro comandante de la base, el general de brigada Rick Baccus, de la Guardia Nacional de Rhode Island, sobre técnicas de interrogatorio y otros asuntos administrativos. Según me dijo este funcionario, Billingslea y sus colegas creían que «en efecto, allí había algunos malos elementos, pero estaban mezclados con tipos que no movían los hilos ni tenían nada que ver. Los interrogatorios no estaban dando resultados». No estaba muy

claro, añadió, si Guantánamo «era un centro penitenciario o un centro de interrogatorios». Poco después de asumir el cargo en agosto de 2002, Billingslea le había confiado a un asesor de toda la vida del Pentágono que la Administración no estaba obteniendo información útil en Cuba. «Le recomendé —me dijo el asesor— que eligieran a unos cuantos prisioneros y los sometieran a interrogatorio de lento desgaste durante un período prolongado. Los interrogadores militares no tenían idea de qué les estaba hablando; lo suyo eran las situaciones de combate. Teníamos que encontrar la manera de que los prisioneros colaborasen. Billingslea estuvo de acuerdo en que lo que estábamos haciendo no tenía el menor propósito estratégico».

Billingslea sondeó también a un funcionario de la Casa Blanca antes de la siguiente reunión y mantuvo una charla confidencial sobre cómo enfocarla. Su idea, o lo que proponía la cúpula del Pentágono, me dijo el funcionario, parecía consistir en minimizar el alcance del problema de Guantánamo. «El mensaje fue: "Confiad en nosotros, estamos trabajando en ello, pero esos tipos son combatientes enemigos"». El funcionario respondió que eso no sería suficiente. «Le dije a Billingslea —recordaba— que lo que había que decir era: "Tenemos un problema y he aquí como vamos a solucionarlo"».

Billingslea captó el mensaje. En la reunión con la cúpula del Gobierno, incluido el secretario de Estado Colin Powell, Billingslea reconoció que «se trataba de separar el trigo de la paja» en Guantánamo, y luego «esbozó un plan para lograrlo». Este tono no fue del agrado de la Administración, y la reunión empezó a crisparse. El ex funcionario me dijo que «David Addington —el abogado de la oficina de Cheney— quería cortarle la cabeza a Billingslea por haber hablado del asunto», y formuló observaciones negativas, básicamente: «¿Por qué hace esto?».

Nada cambió. «El Pentágono hizo todo lo posible por dar largas al asunto —recordaba el ex funcionario—. Yo con-

fiaba en la bondad humana y pensé que conseguiríamos algo. Fui tan ingenuo como para creer que cuando un miembro del gabinete —se refería a Rumsfeld— dice que va a tomar medidas, es que piensa hacerlo». En los meses siguientes, mientras la Casa Blanca empezaba a estudiar la inminente guerra contra Irak, hubo otras discusiones acerca de los constantes problemas en Guantánamo y la ausencia de información útil. Sin embargo, nadie de la Casa Blanca iba muy lejos por temor a que se le considerase blando, en un sentido u otro, respecto a Al Qaeda. «¿Por qué Condi no hizo más? —se preguntaba el ex funcionario—. Ella cometió la misma equivocación que yo. Hizo decir al secretario de Defensa que él se ocuparía del asunto». Y añadió que tanto él como sus colegas dentro de la Casa Blanca estaban perplejos. «Tampoco conseguimos que se hiciera nada».

En una rueda de prensa convocada en junio de 2004 en la Casa Blanca, con el escándalo de Abu Ghraib en su apogeo, William Haynes, principal abogado del Pentágono, aseguró, al igual que otros hombres de confianza de la Administración, que ningún prisionero había sido torturado, ya fuese en Irak, Afganistán o Guantánamo. A una pregunta sobre cómo sabía el Gobierno que había capturado a las personas adecuadas, respondió que todos los que estaban en Guantánamo tenían que estar allí. «Hay mucho que hacer en Guantánamo», dijo. Y añadió que todos los prisioneros habían sido «filtrados» por autoridades estadounidenses en Afganistán antes de ser enviados a Cuba. Una vez allí, dijo, «se comprueba nuevamente que alguien es un combatiente enemigo, y a partir de ahí se hace una verificación anual [...] Todos los que están en Guantánamo han pasado por este proceso».

Había, evidentemente, una desconexión entre la realidad de la vida carcelaria en Guantánamo y cómo se la pintaba a la opinión pública en conferencias de prensa cuidadosamente orquestadas o en declaraciones oficiales. Las autoridades penitenciarias estadounidenses han asegurado repetidamente a los medios informativos y a la opinión pública, por ejemplo,

que los detenidos de Al Qaeda y los talibanes disfrutan de un mínimo de tres horas de recreo a la semana. Sin embargo, a los recalcitrantes, según un asesor del Pentágono que conocía las condiciones de los detenidos a mediados de 2002, se les ponía una especie de camisa de fuerza, con los brazos atados a la espalda y las piernas sujetas mediante correas. Se les cubrían los ojos con unas gafas y la cabeza con una caperuza. El prisionero era posteriormente conducido a algo similar a una perrera —el asesor me explicó que había fotografías de esto— y se le dejaba una hora de recreo. La camisa de fuerza lo obligaba a moverse, si decidía hacerlo, de rodillas y doblado en un ángulo de cuarenta y cinco grados. La mayoría se limitaba a quedarse sentados y sufrir el calor.

Muchos periodistas y delegaciones del Congreso que visitaron Guantánamo en 2002 informaron, no obstante, que no habían encontrado nada irregular. Vieron lo que a los militares les interesaba que viesen: una prisión modélica. Unos meses antes de la inspección del analista de la CIA, un grupo de senadores programó una visita a Guantánamo después de oír informes procedentes de los mandos militares sobre maltrato a los prisioneros. Los senadores lo encontraron todo en orden. «Todo estaba bien», me dijo uno de ellos encogiéndose de hombros, pero añadió que no habían obtenido autorización para hablar con ningún prisionero y que por tanto no habían podido formarse una opinión imparcial.

Uno de los marines destinados a tareas de vigilancia en Guantánamo en 2003 (a raíz de ello abandonó la vida militar) me dijo, tras prometerle yo que guardaría su anonimato, que los jefes de su pelotón los animaban a «hacer visitas a los prisioneros» una o dos veces al mes, cuando no hubiera equipos de televisión, periodistas ni visitantes ajenos a la prisión. «Tratábamos de joderlos tanto como podíamos, infligirles dolor en pequeñas dosis. No pudimos hacer mucho [por temor a ser descubiertos] —añadió el ex marine, que también sirvió en Afganistán—. Siempre había gente de la prensa. Por eso no podíamos dejarlos con una pierna rota o así. Además, si alguno moría, a mí me montarían un consejo de guerra».

Las palizas a los prisioneros eran una cosa improvisada, comentó. «Un jefe de pelotón decía: "Venga, todas las cámaras a descansar"». Un pasatiempo consistía en ponerles capuchas y «llevarlos de paseo en un vehículo Humvee, mareándolos de manera que no supieran dónde estaban». Los prisioneros hablaban durante el viaje pero «nosotros no entendíamos lo que decían. No se trataba de conseguir información. Sólo nos divertíamos un poco, jugando a controlar su mente». Para él, todos los reclusos que había en Guantánamo eran terroristas: «Yo pensaba que eran malos, del primero al último». Cuando pregunté a un importante funcionario del FBI por el relato del ex marine, me dijo que varios agentes asignados a tareas de interrogatorio en Guantánamo habían mencionado actividades similares a las descritas por sus superiores del cuartel general. En 2003, investigadores del Comité Internacional de la Cruz Roja realizaron una serie de visitas problemáticas a Guantánamo. El mes de noviembre anterior, el general de división Geoffrey Miller había relevado a los generales Dunlavey y Baccus, unificando el mando de la base naval. Baccus era considerado blando por el Pentágono, demasiado preocupado por el bienestar de los prisioneros. Se oponía a las técnicas de interrogatorio y distribuyó pósters de la Cruz Roja que recordaban a los prisioneros los derechos que les otorgaba la Convención de Ginebra. Los informes de la Cruz Roja suelen ser siempre privados, pero en junio de 2004 el *Washington Post* citaba una serie de memorandos del Pentágono sobre las visitas de la Cruz Roja en el sentido de que los inspectores estaban cada vez más preocupados por las condiciones de vida en la prisión y por la gestión de Miller, un oficial de artillería que no tenía experiencia en administrar prisiones.

En uno de los informes, la Cruz Roja criticaba duramente a la Administración Bush por seguir recluyendo a prisioneros en jaulas al aire libre, por mantener a los detenidos en «aislamiento excesivo» y por no haber fijado un proceso para catalogar y poner en libertad a aquellos a quienes no les correspondiera estar en Guantánamo. Después de otra visita en

octubre de 2003, la Cruz Roja alertó una vez más sobre la falta de avances en temas importantes, como el establecimiento de un marco legal para los detenidos. El informe lamentaba asimismo que Miller y sus subalternos recurrieran excesivamente al aislamiento como forma de someter a los prisioneros. El *Washington Post* informó que el general «se puso hecho una fiera al oír estos comentarios, y dijo a los representantes de la Cruz Roja que las técnicas de interrogatorio no eran asunto de ellos». Negó que se utilizara el aislamiento como forma de castigo para quienes se negaban a cooperar. El aislamiento, dijo, se utilizaba para castigar a aquellos que no seguían las normas de la prisión o trataban de atacar a los guardianes. (En audiencias del Senado posteriores al escándalo de Abu Ghraib, se supo que Miller tenía autorización previa para emplear dudosos métodos de interrogatorio, entre ellos la privación de sueño, la exposición a calor y frío extremados y poner a los prisioneros en «posturas forzadas» durante prolongados períodos de tiempo).

Después de la reunión de octubre, Christophe Girod, máximo responsable de la Cruz Roja estadounidense y canadiense, criticó públicamente el hecho de que Miller no estuviera repatriando a los detenidos. La incertidumbre sobre su destino ocasionaba un «preocupante deterioro de la salud mental en un buen número de ellos», dijo. «No se les puede tener indefinidamente en esta situación». Y añadió que hablaba con toda franqueza porque las negociaciones de la Cruz Roja con la Administración Bush no habían dado frutos. En mayo de 2004, el *New York Times* informó que el FBI había dado instrucciones a sus agentes para que evitaran estar presentes en los interrogatorios con presuntos miembros de Al Qaeda. El periódico decía que la información extraída mediante métodos severos no valdría como prueba ante ningún tribunal y que, por tanto, podían comprometer a los agentes en futuros procedimientos legales contra los sospechosos. «No creemos en la coerción —me dijo un funcionario del FBI—. Nuestra meta es obtener información, y tratamos de ganarnos la confianza de los prisioneros. Creemos que esto

dará resultado». Y añadió: «Siempre he pensado que a Rumsfeld deberían haberlo despedido hace tiempo».

«Hicieron lo que no tenían que hacer —me dijo un asesor del Pentágono con respecto a la guerra contra el terrorismo—, optar por una política de mano dura basada en la coerción en vez de en la persuasión, y se está demostrando que no funciona. Todo se reduce a la ira y la necesidad de devolver el golpe. No sólo es una maldad, sino también una estupidez. La delación no se consigue mediante la tortura, pero sí por la vía de la bondad. El método persuasivo es más lento pero consigue mucho mejores resultados».

El informe del analista de la CIA cuajó, al menos, en una pequeña victoria. El 26 de octubre de 2002, cuatro prisioneros de Guantánamo fueron puestos en libertad y devueltos a sus casas, tres de ellos a Afganistán. Posteriormente, un importante funcionario afgano declaró a periodistas en Kabul que las circunstancias de su detención habían sido irrisorias. El *New York Times* publicó que uno de estos detenidos, Faiz Muhamad, «a veces balbucía como un niño; era un viejo medio sordo y encogido, incapaz de responder a las preguntas más sencillas». Faiz dijo al periodista que no le molestaba que le hubieran detenido: «Me quitaron la ropa vieja que llevaba y me dieron ropa nueva». Otro liberado, Jan Muhamad, dijo que todavía no entendía cómo había había ido a parar a Guantánamo. Explicó que los talibanes lo habían obligado a combatir pero que él se rindió enseguida a los norteamericanos, junto con otros compatriotas. En un momento dado, un cacique afgano había señalado al grupo afirmando que eran importantes oficiales talibanes, y todos fueron apresados. «Vinieron y se llevaron a diez personas de aspecto fuerte —declaró Muhamad al *New York Times*—. Únicamente uno de esos diez era talibán».

Tres días después, en una reunión informativa en el Pentágono, Victoria Clarke, la ayudante del secretario de Defensa para asuntos públicos, aseguró a los periodistas que el Pentágono «está decidido a liberar más presos de Guantánamo».

Los representantes de la Cruz Roja, dijo, «tienen una significativa presencia en Guantánamo, y estoy segura de que entrevistarán a todos los detenidos que vayan a irse». Y añadió: «Una de las mejores cosas ocurridas en el último año es toda la información que hemos obtenido de los detenidos, incluidos los de Guantánamo, para que no se produzcan nuevos ataques terroristas». Las declaraciones del Pentágono y la Casa Blanca, confrontadas con lo que realmente estaba pasando, se reducían a un fraude estratégico. El objetivo de tanta doblez y tanto doble sentido no era, por supuesto, Al Qaeda u otras bandas terroristas, sino la prensa y el pueblo de Estados Unidos.

Unas semanas después de ser liberados los cuatro prisioneros, el analista de la CIA fue recibido calurosamente en la agencia por Stephen Hadley, mano derecha de Condoleezza Rice. «Debe de sentirse muy bien: ¡hacer un trabajo interesante y que encima influya en las decisiones políticas!», exclamó, y el analista replicó: «Habéis soltado a cuatro. Yo me habría sentido mejor si hubierais hecho realmente algo [por mejorar las condiciones de vida en la prisión]».

Sabemos ahora que los sesudos debates que tuvieron lugar en la Casa Blanca durante el año 2002 sobre lo bueno y lo malo de los interrogatorios en Guantánamo tenían algo de estrambótico. Rice y Rumsfeld sabían lo que muchos otros presentes en las reuniones no sabían: que a finales de 2001 o principios de 2002 el presidente había autorizado, mediante un documento legal ultrasecreto, al Departamento de Defensa a crear un selecto equipo clandestino de Fuerzas Especiales y otros servicios, que, dejando de lado el Derecho Internacional y las gentilezas diplomáticas, apresara —o matara, si era preciso— a agentes «muy valiosos» de Al Qaeda en cualquier parte del mundo. Asimismo, en países aliados se establecerían centros de interrogatorio secretos en los cuales se trataría duramente a los detenidos, fuera de toda restricción legal y de espaldas a la opinión pública. El programa, llamado SAP, estaba «oculto» dentro del Departamento de Defensa y sólo al-

gunos miembros del Pentágono, la CIA y la Casa Blanca conocían sus detalles operacionales.

El SAP debía su existencia al deseo de Rumsfeld, expresado repetidas veces, de consagrar las Fuerzas Especiales a lo que llamaba, tanto en público como en comunicaciones internas, la «caza del hombre», y a su desdén hacia la cúpula militar del Pentágono. En la intimidad de su despacho, Rumsfeld se impacientaba por lo que atribuía a renuencia de los generales y almirantes a actuar con agresividad. A mediados de 2002, Rumsfeld y sus hombres de confianza civiles estaban intercambiando informes secretos sobre cómo conseguir cambiar la postura de los jerarcas militares y animarlos a «correr mayores riesgos». Una de estas comunicaciones hablaba en tono burlón de los generales del Pentágono y decía: «Nuestro prerrequisito de "información contrastada" nos tiene paralizados. Debemos aceptar que probablemente habrá que pasar a la acción antes de que las preguntas puedan tener respuesta». El secretario de Defensa fue aconsejado a «romper esa actitud de máxima precaución que existe actualmente entre los militares [...]. Hemos de estar dispuestos a correr riesgos». En operaciones en las que podían morir enemigos extranjeros, proseguía el documento, la planificación debería ir por canales militares diferentes de los acostumbrados: «El resultado será una decisión por comité». La impaciencia de Rumsfeld ante el protocolo militar se hacía extensiva a las preguntas sobre el trato a los prisioneros capturados durante operaciones militares. Poco después del 11-S, había aireado repetidas veces su desdén por la Convención de Ginebra. Las protestas por el trato a los prisioneros, dijo a principios de 2002, no eran más que «casos aislados de hiperventilación internacional».

Uno de los objetivos de Rumsfeld era de tipo burocrático: dar a la cúpula civil del Pentágono, y no a la CIA, la dirección en la lucha contra el terrorismo. Desde el principio del SAP, que acabaría materializándose en la prisión de Abu Ghraib, «se informaba periódicamente al Consejo de Seguridad Nacional, con actualizaciones sobre resultados pero no

sobre métodos», me dijo un antiguo alto funcionario de inteligencia. ¿Preguntaba la Casa Blanca respecto a éstos? Contestó que creía que sí, y que «se le daban respuestas». La creación del SAP y la necesidad de proporcionar protección legal a la gente implicada en el mismo podría explicar el confuso lenguaje de la declaración secreta que el presidente hizo el 7 de febrero de 2002 sobre el trato a los detenidos en Guantánamo, donde afirmaba que respecto a Al Qaeda la aplicación de la Convención de Ginebra dependería de su exclusiva discrecionalidad. Algunas de las tajantes conclusiones contenidas en otros documentos de la Administración remiten también a los problemas que podría plantear el SAP. Por ejemplo, un análisis del Departamento de Defensa de marzo de 2002, y que el *Wall Street Journal* fue el primero en hacer público, concluía diciendo que la autoridad del presidente «para dirigir una campaña militar» estaba por encima de cualquier tipo de prohibición legal o tratado internacional contra la tortura: «Todo esfuerzo del Congreso para regular los interrogatorios a combatientes ilegales violaría las competencias del presidente, amparadas por la Constitución, como comandante en jefe». Paradójicamente, el documento decía también que un acusado «podía negar una intencionalidad específica en sus actos [...] demostrando que había actuado de buena fe y que no creía que su conducta pudiera violar la ley». Anthony Lewis, comentarista jurídico, señaló en *New York Review of Books* que éstos y otros informes «eran como los consejos de un abogado de la mafia a un padrino acerca de cómo esquivar la ley y no acabar en la cárcel. Se trataba, literalmente, de evitar un procesamiento —dijo—. Una de las sugerencias más chocantes es que si un interrogador hería a un prisionero podía acogerse a la eximente de "defensa propia"; defensa propia no de él como individuo, sino de la nación».

Eran constantes las protestas de grupos pro derechos humanos sobre el maltrato a prisioneros en Guantánamo y Afganistán en el principal centro de interrogatorio de la base

aérea de Bagram, pero la ausencia de fotografías convertía las protestas en papel mojado. Desde principios de 2002 la organización Human Rights Watch había impugnado públicamente la insistencia de la Administración Bush en que la Convención de Ginebra no era aplicable a los prisioneros capturados en Afganistán. Pero tampoco estas quejas tuvieron suficiente repercusión. En una carta del 28 de enero de 2002, Kenneth Roth, director de la organización, admitía ante Condoleezza Rice que muchos miembros de Al Qaeda tal vez no se ajustaban a la categoría de prisioneros de guerra. Pero añadía que «los talibanes, como gobierno *de facto* de Afganistán, estaban amparados» por la Convención de Ginebra. En consecuencia, señalaba Roth, la Administración estaba obligada a distinguir entre terroristas de Al Qaeda y talibanes, y no lo había hecho. Roth apuntaba asimismo que el presidente se equivocaba al proclamar que las leyes internacionales no eran aplicables a los detenidos en Guantánamo.

En febrero de 2003, semanas después de que el *Washington Post* aireara la «búsqueda de información con mano dura» de los detenidos en Afganistán, Holly Burkhalter, directora para Estados Unidos de la organización Physicians for Human Rights, y otras personalidades afines se reunieron con William Heynes, del Pentágono. «Heynes llegó hecho una fiera, estaba realmente enfadado —me dijo Burkhalter—. Comenzó la reunión diciendo: "Nosotros no torturamos", y luego nos endilgó un sermón. "Ustedes los defensores de los derechos humanos, que han insinuado que Estados Unidos tortura a sus detenidos, han trivializado el significado de la palabra tortura". Su mensaje era diáfano: si llaman tortura a lo que hacemos en los interrogatorios (como mantener a los presos despiertos y atados), están haciendo un mal servicio a las víctimas de torturas verdaderas».

La definición de tortura volvió a surgir, esta vez en la Casa Blanca, en junio de 2003, tres meses después de la invasión de Irak, cuando Roth fue invitado a reunirse con Rice y John Bellinger, el abogado del CNS. Las notas que Roth tomó de la reunión y que me proporcionó posteriormente muestran

que él les dijo que aplaudía la promesa de Bush de no recurrir a la tortura, pero pidió a la Casa Blanca que fuera más lejos. Señaló que el Día Internacional contra la Tortura había sido fijado por Naciones Unidas para finales de aquel mes, y sugirió que la Administración aprovechara la oportunidad para declarar públicamente que Estados Unidos se atendría a lo establecido por las leyes federales y la Convención contra la Tortura y no aplicaría un trato cruel, inhumano o degradante a los detenidos.

«No se está empleando la tortura», le dijo Rice a Roth, según las notas de éste. Pero añadió: «No voy a entrar en los detalles de la Convención. No es de mi competencia». Entonces Bellinger dijo que «degradante» era un término muy subjetivo. «Es difícil imaginar que no se nos acuse de ello por vendarles los ojos o sencillamente por encarcelarlos». Bellinger y Rice debían de saber que los problemas en Guantánamo iban más allá de «vendar los ojos», un eufemismo para la práctica de obligar a los prisioneros a permanecer encapuchados.

Finalmente, el presidente hizo la declaración del Día Internacional contra la Tortura que Roth pretendía; pero después éste comprobó con preocupación que la Administración tenía sus propios términos para definir las prácticas consideradas ilegales, definiciones tan escuetas y estrictas que los militares norteamericanos podrían seguir empleando muchas medidas coercitivas, tales como desnudar a los prisioneros, colocarlos en posturas forzadas y privarlos de sueño.

Cuando lo entrevisté en julio de 2004, Roth recordaba: «Básicamente les dije a Rice y Bellinger que si no era legal hacerlo en una comisaría, tampoco lo era en Guantánamo». En el momento de su reunión con Rice, el programa de Rumsfeld de apresar o tratar con mano dura a presuntos terroristas e interrogarlos en instalaciones secretas de Singapur, Tailandia y Pakistán, entre otros lugares, ya iba por su tercer año. La Casa Blanca combatía el terror con el terror.

A finales de agosto de 2003, como veremos, la guerra en Irak iba mal y la información obtenida en las muchas pri-

siones del país era escasamente relevante. El presidente y su equipo de seguridad nacional recabaron el consejo del general Miller, comandante en jefe de Guantánamo. Rememorando aquella decisión, uno de los funcionarios de la Casa Blanca que había apoyado los infructuosos esfuerzos del general Gordon por cambiar la actitud hacia los prisioneros me preguntó: «¿Por qué adoptar un método que no funcionó en Guantánamo y exportarlo a Irak?». La respuesta de la Administración a la creciente insurgencia en Irak y la falta de información al respecto fue, sin embargo, endurecer la mano con los iraquíes detenidos; tratarlos tras los muros de la prisión como si los hubieran capturado en los campos de batalla afganos.

Fotografías de una prisión

En la era de Sadam Husein, Abu Ghraib, situada treinta kilómetros al oeste de Bagdad, era una de las prisiones más tristemente célebres del mundo por sus torturas, sus ejecuciones semanales y sus infames condiciones de vida. Unos cincuenta mil hombres y mujeres (imposible dar la cifra exacta) llegaron a estar encerrados en un mismo momento en Abu Ghraib, en celdas de tres metros y medio de lado que eran poco más que pocilgas.

En los saqueos que siguieron a la caída del régimen en abril de 2003, el enorme complejo carcelario, a la sazón desierto, fue despojado de todo cuanto pudieron llevarse, incluidas puertas, ventanas y ladrillos. Las autoridades de la coalición hicieron embaldosar los suelos, limpiar y reparar las celdas y añadir lavabos, duchas y un centro médico. Abu Ghraib se había convertido en una prisión militar estadounidense. Sin embargo, la mayoría de los prisioneros —en otoño de 2003 eran ya varios millares, incluyendo mujeres y adolescentes— eran civiles, muchos de ellos apresados en redadas militares y en puntos de control de carreteras. Había tres categorías: delincuentes comunes, sospechosos de «crímenes

contra la coalición», y un pequeño número de presuntos «valiosos» líderes de la insurgencia.

En junio de 2003, Janis Karpinski, general de brigada en la reserva, fue nombrada comandante de la 800ª Brigada de la Policía Militar (PM) y puesta al mando de las prisiones militares. La general Karpinski, la única mujer con ese rango en la zona de guerra, era una experimentada oficial de operaciones que había servido en las Fuerzas Especiales y en la Guerra del Golfo de 1991, pero nunca había gobernado un centro penitenciario. Ahora tenía a su cargo tres grandes cárceles, ocho batallones y tres mil cuatrocientos reservistas del ejército, la mayoría de los cuales, al igual que ella, no estaban adiestrados para regentar una prisión.

Janis Karpinski, que desde los cinco años ya quería ser militar, es asesora financiera en la vida civil y su nuevo trabajo la tenía entusiasmada. En una entrevista con el *St. Petersburg Times* en diciembre de 2003 dijo que muchos reclusos iraquíes de Abu Ghraib «viven mejor aquí de lo que vivían en sus casas. Incluso empieza a preocuparnos que no quieran marcharse de la prisión».

Un mes más tarde, Karpinski fue oficialmente amonestada y subrepticiamente suspendida, y el teniente general Ricardo S. Sánchez, comandante en jefe de las fuerzas estadounidenses en Irak, autorizó una investigación sobre el sistema penitenciario militar. A finales de febrero de 2004, el general de división Antonio M. Taguba completaba un informe de cincuenta y tres páginas de carácter interno (algunas partes fueron clasificadas como secretas); yo lo conseguí en abril. Sus conclusiones sobre los fallos del sistema penitenciario militar fueron inequívocas. Concretamente, Taguba descubrió que entre octubre y diciembre de 2003 hubo en Abu Ghraib numerosos casos de «malos tratos flagrantes, gratuitos e incluso sádicos». Los abusos sistemáticos contra los detenidos, informaba Taguba, eran perpetrados por soldados de la 372ª Compañía de la Policía Militar, así como por miembros de los servicios de inteligencia. (La 372ª estaba agregada al 320º Batallón de la Policía Militar, a las órdenes directas

de Karpinski en el cuartel general de la brigada). El informe de Taguba enumeraba algunas de las fechorías:

> Romper lámparas de destellos [utilizadas por submarinistas, etcétera; del tamaño de un cartucho de dinamita] y verter el líquido fosfórico sobre los detenidos; derramar agua fría sobre reclusos desnudos; golpearlos con palos de escoba y sillas; amenazar a los varones con la violación; permitir que un policía militar le cosiera la herida a un herido tras ser arrojado contra la pared de su celda; sodomizar a un detenido con una lámpara de destellos y quizá con un palo de escoba, y utilizar perros adiestrados para asustar e intimidar a los reclusos amenazándolos con ser atacados, y en un caso concreto haciendo morder a uno de ellos.

Las acusaciones estaban respaldadas por pruebas concluyentes, añadía Taguba: «Declaraciones detalladas de testigos y pruebas fotográficas extremadamente explícitas». Las fotografías y videos tomados por los soldados cuando estos abusos tenían lugar no fueron incluidos en este informe, dijo Taguba, debido a su «carácter extremadamente sensible».

Las fotografías —varias de las cuales aparecieron en el programa *60 Minutes II* de la CBS el 28 de abril de 2004, unos días antes de que se publicara mi artículo en *The New Yorker*— muestran a soldados mofándose e insultando a prisioneros iraquíes desnudos y obligados a adoptar posturas humillantes. Seis sospechosos —el brigada Ivan L. *Chip* Frederick II, el suboficial de mayor graduación, el cabo Graner, el sargento Javal Davis, el soldado Megan Ambuhl, la soldado Sabrina Harman y el cabo Jeremy Sivits— se enfrentaban en ese momento a juicio en Irak por cargos que comprendían conspiración, quebrantamiento del deber, crueldad con prisioneros, malos tratos, acoso sexual y actos indecentes. Un séptimo sospechoso, la cabo Lynndie England, había sido destinada a Fort Bragg (Carolina del Norte) al quedar embarazada de Graner, y fue encausada más adelante.

En una de las fotografías, England, con un cigarrillo entre los labios, levanta el pulgar mientras señala apreciativamente los genitales de un joven iraquí —desnudo a excepción de la cabeza, cubierta por un saco— mientras éste se masturba. Otros tres prisioneros, con capucha y desnudos, aparecen también con las manos cruzadas sobre sus respectivos genitales. Un quinto prisionero tiene las manos a los costados. En otra foto, England está cogida del brazo del cabo Graner, ambos sonrientes y haciendo la susodicha señal con el pulgar detrás de un grupo de unos siete iraquíes desnudos, con las rodillas dobladas y apelotonados grotescamente formando una pirámide de cuerpos. Hay otra foto de un grupo de prisioneros desnudos, también apilados en pirámide. Cerca de ellos está Graner, sonriente y cruzado de brazos; frente a él está la soldado Sabrina Harman, doblada por la cintura, y ella también sonríe. Finalmente hay otro grupo de cuerpos encapuchados, con una soldado delante tomándoles fotos con una cámara. En otra foto se ve a un prisionero desnudo, de rodillas y sin capucha, en una postura que pretende aparentar que está practicando una felación a otro prisionero desnudo y encapuchado.

Tanta deshumanización es intolerable en cualquier cultura, pero más aún en el mundo árabe. Los actos homosexuales van contra la ley islámica, y para los hombres es humillante estar desnudos delante de otros hombres, según explicaba Bernard Haykel, especialista en Oriente Próximo de la Universidad de Nueva York. «Ser puestos unos encima de los otros y obligados a masturbarse, estar desnudos en presencia de otros, todo ello es una forma de tortura», dijo. Dos rostros iraquíes que aparecen en las fotografías pertenecen a sendos muertos. Se ve la cara maltratada del prisionero nº 153399 y el cuerpo ensangrentado de otro, envuelto en celofán y recubierto de hielo. Hay una fotografía de una sala vacía y salpicada de sangre.

Los abusos de la 372ª con los prisioneros parecían casi rutinarios, un hecho de la vida castrense que los soldados no

sintieron la necesidad de ocultar. El 9 de abril de 2004, en una audiencia judicial regida por el Artículo 32 (el equivalente militar de un gran jurado) en el caso contra el brigada Frederick, en Camp Victory, cerca de Bagdad, uno de los testigos, el policía militar Matthew Wisdom, explicó al tribunal lo que sucedió cuando él y otros soldados entregaron a siete prisioneros, encapuchados y maniatados, al llamado Sitio Duro de Abu Ghraib, siete galerías de celdas donde estaban los reclusos más conflictivos. Los siete hombres habían sido acusados de iniciar una revuelta en otra sección del penal. Wisdom dijo:

«La sargento primera Snider agarró a mi prisionero y lo lanzó a un montón [...] a mí no me pareció bien que los pusieran amontonados. Vi al brigada Frederick, al sargento Davis y al cabo Graner caminar alrededor del montón mientras golpeaban a los prisioneros. Recuerdo que el brigada Frederick golpeó a uno de ellos en las costillas. El prisionero no representaba ningún peligro para el brigada Frederick [...]. Después de eso me marché». Posteriormente, Wisdom testificó: «Vi a dos detenidos desnudos, uno masturbando a otro que estaba de rodillas, con la boca abierta. Pensé que lo mejor era largarme de allí. No me pareció bien todo aquello [...]. El brigada Frederick se acercó y me dijo: "Mira lo que hacen estos bestias cuando los dejas solos dos segundos". Oí que la cabo England gritaba: "Se le está poniendo dura"». Wisdom explicó que había comunicado lo sucedido a sus superiores, y que supuso que «habrían tomado medidas». Y añadió: «Yo no quería participar en nada que pareciese ilegal».

Los abusos se hicieron públicos gracias a la indignación del soldado Joseph M. Darby, un policía militar cuyo papel surgió durante la vista contra Frederick. Según la transcripción abreviada que pude conseguir, un testigo del Gobierno, el agente especial Scott Bobeck, miembro de la División de Investigación Criminal del ejército (CID), declaró al tribunal: «La investigación empezó después de que el soldado Darby [...] recibiera un CD del cabo Graner [...] que contenía fotos de detenidos desnudos». Bobeck dijo que Darby

«nos entregó una carta anónima pasándola por debajo de la puerta de nuestra habitación, y luego vino e hizo una declaración jurada. Se sentía muy inquieto por todo este asunto y pensaba que estaba muy mal». Darby logró lo que no pudieron conseguir las organizaciones de derechos humanos más influyentes del mundo. La Cruz Roja y Human Rights Watch se habían quejado repetidamente durante el año anterior del trato que se daba a los prisioneros iraquíes, con escasa respuesta por parte del *establishment*. En uno de los casos, revelado en abril por el *Denver Post*, tres miembros de la inteligencia militar fueron acusados de acosar sexualmente a una reclusa iraquí en Abu Ghraib. Tras una investigación administrativa, los tres fueron multados «con un mínimo de quinientos dólares y rebajados de rango», decía el periódico. Los mandos del ejército reaccionaron de diversa manera cuando se les mostró el CD de Darby con las explícitas fotografías. Enseguida se vio que las imágenes habían pasado de ordenador en ordenador por todo el 320° Batallón. Los mandos comprendieron de inmediato que tenían un problema: un inminente desastre político y de relaciones públicas que salpicaría a Estados Unidos y perjudicaría el avance de la guerra. Darby entregó las fotos a los investigadores el 13 de enero de 2004. Frederick escribió a continuación cartas a su familia sobre lo que pasó. Todo empezó a los dos y media de la mañana el 14 de enero, cuando unos agentes del CID llamaron a su puerta. «Fui escoltado [...] hasta la puerta principal de nuestro edificio, lejos de mi habitación —escribió—, mientras [...] dos hombres no identificados entraron en la habitación. Él preguntó si la iban a registrar. Le dijeron que sí. Frederick los autorizó formalmente a que hicieran un registro en busca de cámaras, ordenadores y dispositivos de almacenaje.

El 16 de enero, tres días después de que el ejército recibiera las fotografías, el Mando Central (CENTCOM) divulgó un comunicado de prensa de sólo cinco frases, mencionando en términos muy comedidos una investigación sobre malos tratos a prisioneros. El secretario de Defensa dijo que fue entonces cuando él tuvo la primera noticia de las acusaciones.

Poco después, Rumsfeld informó al presidente Bush. El 19 de enero, el general Sánchez ordenó una investigación secreta en Abu Ghraib. Dos semanas después, el general Taguba fue encargado de llevar a cabo las pesquisas. El investigador del ejército dijo en el tribunal que Frederick y sus colegas, que él supiera, no habían recibido «instrucciones» de ningún tipo. Los policías militares de la 372ª habían sido asignados a tareas policiales y de control de tráfico a su llegada a Irak en la primavera de 2003. Con treinta y siete años, Frederick era mucho mayor que sus camaradas y tenía madera de líder. Había trabajado como guardián durante seis años para la oficina de centros penitenciarios de Virginia. Bobeck explicó: «Lo que saqué en claro fue que el brigada Frederick y el cabo Graner eran policías militares de control de carreteras, pero habían sido destinados allí porque en la vida civil eran guardias de prisiones y sabían cómo hacer las cosas».

Bobeck declaró también que, según testigos, Frederick había «pegado a un detenido en el pecho con tanta fuerza que el hombre casi sufrió un paro cardíaco». En cartas y *e-mails* a familiares, Frederick contaba que los equipos de inteligencia militar, donde había agentes de la CIA, lingüistas y especialistas en interrogatorios contratados por empresas privadas —a su vez contratadas por el ejército para tal fin—, eran la fuerza dominante en Abu Ghraib. En una de las cartas a su familia, decía: «Pregunté sobre algunas de las cosas que veía [...] cosas como dejar a los reclusos en sus celdas sin ropa o con ropa interior femenina, esposarlos a la puerta de la celda... y la respuesta que me dieron fue: "Así es como lo quiere la inteligencia militar [...]". Ésta también nos dio instrucciones de recluir a un prisionero en una celda de aislamiento con apenas ropa, sin retrete ni agua corriente, sin ventilación o ventana, durante tres días».

Los de inteligencia militar «nos animaron y nos dijeron "buen trabajo"; estaban empezando a obtener resultados positivos e información valiosa —escribió Frederick—. Los del CID estaban presentes cuando se utilizaron perros amaestrados para intimidar a prisioneros a petición de la inteligencia

militar». En un momento dado, relataba Frederick a su familia, llevó a un aparte a su superior, el teniente coronel Jerry Phillabaum, comandante del 320º Batallón de la Policía Militar, y le preguntó por el maltrato a los prisioneros. «Su respuesta fue: "Por eso no se preocupe"». En la audiencia judicial regida por el Artículo 32 de abril, el ejército informó a Frederick y a sus defensores (el capitán Robert Shuck, abogado militar, y Gary Myers, civil) que dos docenas de testigos, entre ellos la general Karpinski y todos los denunciados por Frederick, no iban a presentarse. Algunos habían sido eximidos tras acogerse a la 5ª Enmienda; otros se creía que iban a estar físicamente muy lejos del tribunal. «El objetivo de una audiencia regida por el Artículo 32 es designar testigos y descubrir hechos —me dijo Gary Myers—. Acabamos con un agente del CID y ninguna presunta víctima que examinar». Después de la audiencia, el oficial que dirigía la investigación dictaminó que había pruebas suficientes para someter a Frederick a consejo de guerra.

Myers, que fue uno de los abogados de la defensa en los juicios por el caso My Lai en los años setenta, me dijo en abril de 2004 que la defensa de su cliente se basaría en que éste cumplía órdenes de sus superiores y, en concreto, las directivas de la inteligencia militar. «Voy a llevar a rastras al tribunal a todos los oficiales de inteligencia y civiles contratados que pueda encontrar —dijo—. ¿De veras cree usted que el ejército relevó a un general a causa de seis soldados? Ni por ésas». El capitán Robert Shuck, abogado militar de Frederick, concluyó su defensa en la audiencia arguyendo que el ejército estaba «intentando que estos seis soldados paguen por los pecados ajenos».

Naturalmente, la defensa de Frederick fue muy egoísta, pero las quejas expresadas en sus cartas y *e-mails* fueron reforzadas por dos informes internos del ejército, el de Taguba y uno del capitán preboste [máximo responsable del orden y las labores policiales en una unidad del ejército] Donald Ryder, general de división.

A principios de ese otoño, escribía Taguba, el general Sánchez, aparentemente preocupado por los informes que llegaban de las cárceles militares en Irak, había pedido al general Ryder que llevara a cabo una valoración de las mismas. El resultado, que cuando el informe de Taguba se hizo público todavía estaba clasificado, fue entregado el 5 de noviembre de 2003 y en sus conclusiones se decía que había aspectos relativos a derechos humanos, adiestramiento y recursos humanos que requerían atención inmediata. Expresaba asimismo seria preocupación por la connivencia existente entre la policía militar asignada a vigilar a los prisioneros y los equipos de inteligencia que los interrogaban. El reglamento del ejército limita las actividades de inteligencia por parte de la PM a una recopilación de datos pasiva. Pero en Abu Ghraib había ocurrido algo más.

Había pruebas ya desde la guerra de Afganistán, decía el informe Ryder, de que miembros de la PM habían trabajado con agentes de inteligencia: «La información confidencial obtenida recientemente con motivo de la operación *Libertad Duradera* da por cierto que la policía militar estableció las condiciones favorables para subsiguientes entrevistas», eufemismo por quebrantar la voluntad de los presos antes de los interrogatorios. «Tales acciones suelen ir en contra del buen funcionamiento de un centro penitenciario». Ryder exigía que «se defina el papel de los policías militares [...] separando claramente las competencias de los guardianes de las del personal de inteligencia militar». Los mandos que gestionaban la guerra en Irak habían sido notificados. Sin embargo, al final Ryder edulcoró sus observaciones asegurando que la situación todavía no era crítica. La brigada de la general Karpinski, informaba Ryder, «no ha recibido órdenes de modificar su actuación a fin de facilitar las condiciones para interrogatorios por parte de la inteligencia militar, ni de participar en dichos interrogatorios». Aunque en algunos casos los procedimientos eran defectuosos, dijo, no había encontrado «ninguna unidad de la policía militar que realizara a propósito prácticas de confinamiento inadecua-

das». Su investigación fue, en el mejor de los casos, un fracaso, y en el peor, una coartada.

En su informe, Taguba fue cortés pero directo a la hora de refutar a su colega. «Por desgracia, muchos de los problemas que surgieron durante la valoración [de Ryder] son exactamente los mismos temas objeto de esta investigación —escribió—. De hecho, los abusos sufridos por los detenidos ocurrieron en su mayoría durante, o alrededor de, esa valoración». El informe continuaba: «Contrariamente a los hallazgos del general Ryder, yo encontré que personal asignado a la 372ª Compañía de la 800ª Brigada de la Policía Militar había recibido órdenes de modificar las condiciones penitenciarias a fin de "facilitar" los interrogatorios de inteligencia militar». Oficiales de inteligencia del ejército, agentes de la CIA y civiles contratados «solicitaron enérgicamente que los guardias de la PM crearan las condiciones físicas y mentales para un favorable interrogatorio de los testigos». Taguba respaldó sus afirmaciones citando declaraciones juradas ante investigadores del CID. La soldado Harman, uno de los PM acusados, testificó que su tarea consistía en mantener despiertos a los detenidos, entre ellos un prisionero encapuchado que fue metido dentro de una caja con cables eléctricos sujetos a los dedos de pies y manos y al pene. Harman declaró: «La inteligencia militar quería hacerlos hablar. Era tarea de Graner y Frederick hacerles cosas para que luego la inteligencia militar y las OGA [siglas de Otras Agencias del Gobierno] consiguieran que desembuchasen».

El sargento Javal Davis, uno de los acusados, dijo a los investigadores del CID: «Vi cómo algunos prisioneros de la sección a cargo de la inteligencia militar [...] eran obligados a hacer cosas que me parecían moralmente dudosas [...]. Nos dijeron que ellos se regían por otras normas». Taguba escribió: «Davis afirmó asimismo que había oído a los de inteligencia militar sugerir a los guardianes que maltrataran a los reclusos. Cuando se le preguntó qué les habían dicho concretamente, Davis respondió: "Dejadnos a este tipo a punto", "Aseguraos de que pasa una mala noche", "Ocupaos de que reciba todo el tra-

tamiento"». Al parecer, los de inteligencia militar hicieron estos comentarios a Graner y Frederick. «Tengo entendido que la gente de inteligencia militar ha estado elogiando la conducta de Graner [...] con frases como: "Buen trabajo, se están derrumbando a marchas forzadas", "Responden a todo lo que preguntamos", "Están cantando buena información"».

Cuando le preguntaron por qué no había informado de los abusos a su superior, el sargento Davis respondió: «Porque imaginé que si estaban haciendo cosas que se salían de las normas, alguien lo habría autorizado. Además, esta ala —donde tuvieron lugar los malos tratos— pertenece a la inteligencia militar y parecía que ellos aprobaban los malos tratos». Otro testigo, el soldado Jason Kennel, que no estaba acusado, dijo: «Yo los vi desnudos, y los de inteligencia militar nos decían que nos lleváramos sus colchones, sábanas y ropa». (En cuanto a él, añadió, si los de inteligencia militar querían que hiciera eso, «tendrán que enseñarme una orden escrita».) Taguba citaba también una entrevista con Adel L. Nakhla, un intérprete a sueldo de Titan, una empresa civil. Dijo que una noche «un grupo de gente de la inteligencia militar» presenció cómo varios reclusos con esposas y grilletes eran sometidos a vejaciones por Graner y Frederick.

Taguba tuvo también acceso a un informe clasificado del general Geoffrey Miller, comandante en jefe de Guantánamo. A finales de agosto de 2003, Miller había llevado un grupo de expertos a Irak para analizar el sistema carcelario. Sus recomendaciones, que puso por escrito en septiembre, fueron demoledoras: como primera y principal medida, las prisiones del ejército debían ser equipadas para interrogatorios y obtención de información necesaria para la guerra. «Las instalaciones de detención deben facilitar los interrogatorios [...], proporcionar un entorno seguro y humano que posibilite la pronta obtención de información confidencial», escribió. La policía militar en tareas de vigilancia en las prisiones debería tener como prioridad allanar el camino a la inteligencia militar.

El general Sánchez estuvo de acuerdo y el 19 de noviembre su cuartel general ordenó dar a la 205ª Brigada de Inteligencia Militar el control táctico sobre la prisión. El general Taguba se atrevió a disentir de estas órdenes, las cuales, escribió en su informe, «equivalían a hacer responsable no a un oficial de la PM, sino a uno de inteligencia militar, de las unidades de la PM destacadas en ese centro. Esto no es teóricamente sensato debido a las distintas misiones y agendas asignadas a cada uno de esas unidades». La idea de Miller, como se supo después en audiencias del Senado, era *guantanamizar* el sistema penitenciario en Irak, centrarlo sobre todo en los interrogatorios. Estando en Irak, informó a los mandos militares sobre los métodos de interrogatorio utilizados en Guantánamo. Una versión completa del informe clasificado de Miller, proporcionado a algunos periodistas en agosto de 2004, dejaba claro que tenía un objetivo ambicioso: convertir Abu Ghraib en un centro de inteligencia para la guerra total contra el terrorismo. Por su parte, el general Sánchez imaginaba un sistema que pudiera «impulsar el rápido aprovechamiento de los reclusos para responder [...] a los requerimientos del contraterrorismo a nivel nacional y en el teatro de operaciones» así como capaz de reaccionar a las «necesidades de la guerra total contra el terrorismo». Aparentemente, Miller creía que los prisioneros de Irak, si se los interrogaba correctamente, podían proporcionar valiosa información estratégica sobre operaciones en todo el mundo. Si sus recomendaciones eran puestas inmediatamente en práctica, aseguraba el general, «en cuestión de un mes se conseguirá una mejora significativa en la información útil». Sobre el papel sonaba bien, pero Taguba expresaba en su informe un escepticismo bien fundado. Señalaba que «el valor de los detenidos en Guantánamo a efectos de la inteligencia es diferente del de los reclusos de Abu Ghraib y otras instalaciones similares en Irak [...]. En Abu Ghraib está recluido un número importante de delincuentes comunes; se cree que no son terroristas internacionales ni miembros de Al Qaeda». Taguba señalaba que los consejos de Miller parecían «estar

en conflicto» con otros estudios y con el reglamento del ejército, según el cual el sistema penitenciario debe estar controlado por la policía militar. Al asignar el mando a agentes de la inteligencia militar, por el contrario, las recomendaciones de Miller y los cambios en la estrategia de Sánchez desempeñaron sin duda un papel en los abusos cometidos en Abu Ghraib.

A finales de marzo, antes de que el escándalo de Abu Ghraib se hiciera público, el general Miller fue transferido de Guantánamo y nombrado jefe de operaciones penitenciarias en Irak. Después de que la CBS tirara de la manta, el Pentágono anunció que Miller había llegado a Bagdad y tomado el mando. El general Sánchez lo presentó a los medios informativos como el general que haría una limpieza del sistema penitenciario e infundiría respeto por la Convención de Ginebra: en otras palabras, que solucionaría el problema de los prisioneros de guerra. «Hemos cambiado: confíen en nosotros —dijo Miller a los periodistas a principios de mayo—. Se cometieron errores y los hemos enmendado. Nos aseguraremos de que no vuelvan a repetirse».

El general Taguba se reservó sus palabras más duras para los oficiales de la inteligencia militar y los civiles contratados. Recomendó que el coronel Thomas Pappas, comandante de una brigada de inteligencia militar, fuera amonestado y recibiera un castigo extrajudicial, y que el teniente coronel Steven Jordan, ex director del Centro Conjunto de Interrogatorios e Informes, fuera relevado del servicio y amonestado también. Insistió asimismo en que Steven Stefanowicz, civil contratado de CACI International, una empresa con sede en Virginia, fuese despedido de su empleo en el ejército y privado de sus acreditaciones de seguridad por mentir a los investigadores y permitir u ordenar que policías militares «que no tenían adiestramiento en técnicas de interrogatorio facilitaran interrogatorios al "establecer condiciones" no autorizadas» y que tampoco se ajustaban al reglamento. «Sin duda, sabía que sus instrucciones equivalían a abusos físicos»,

escribió Taguba. Recomendó también acciones disciplinarias contra un segundo civil contratado, John Israel.

«Sospecho», concluía Taguba, que Pappas, Jordan, Stefanowicz e Israel «fueron directa o indirectamente responsables de los abusos cometidos en Abu Ghraib», y recomendaba enfáticamente una acción disciplinaria con carácter inmediato.

Empresas privadas como CACI y Titan estaban, en ese momento, pagando sueldos de más de cien mil dólares por trabajos peligrosos en Irak, mucho más de lo que pagaba el ejército, y se les permitió (cosa insólita en la historia militar de Estados Unidos) ocuparse de asuntos confidenciales. Los empleados civiles de la prisión no estaban sujetos a las leyes militares, pero sí al Derecho Penal, aunque no está claro si al estadounidense o al iraquí. (En una sesión informativa en mayo de 2004, el general Miller confirmó que Stefanowicz había sido destinado a tareas administrativas. Ese mismo mes, un portavoz de CACI declinó hacer comentarios sobre ninguno de sus empleados destinados en Irak, alegando razones de seguridad, pero sí dijo que la empresa no había recibido notificación alguna del Gobierno relativa a Stefanowicz).

Stefanowicz y sus colegas efectuaron la mayoría de sus interrogatorios, si no todos, en las instalaciones de Abu Ghraib conocidas por los soldados como «el edificio de madera» y «el edificio metálico». Los centros de interrogatorio raramente recibían la visita de la PM, dijo una fuente que estaba al corriente de la investigación. Muchos prisioneros importantes —presuntos insurgentes catalogados como presos del más alto nivel— estaban confinados en Camp Cropper, cerca del aeropuerto de Bagdad, pero la presión sobre la tropa para que accediera a las peticiones de la inteligencia militar se dejaba notar en todo el sistema.

No todo el mundo tragaba. En mayo de 2004 entrevisté a un capitán de la policía militar en Bagdad, quien me habló de un incidente ocurrido el otoño anterior. Un oficial de baja graduación de la inteligencia militar lo había abordado para solicitarle que la policía militar de su compañía

mantuviera despiertos las veinticuatro horas a un grupo de detenidos, hasta que empezaran a hablar. «"No vamos a hacer eso", le dije. Entonces viene a verme el comandante de la inteligencia militar y me pregunta: "¿Qué problema hay? Vamos a tope de trabajo, lo único que le pedimos es que mantenga despiertos a los detenidos". Y yo le pregunto: "¿Pero cómo? Ustedes han recibido instrucción a este respecto, pero mis soldados no. Y si le pide a un chaval de dieciocho años que mantenga a alguien despierto y no sabe cómo hacerlo, seguro que se le ocurren malas ideas"». El comandante dirigió la solicitud al superior del capitán, pero, dijo éste, «él me apoyó».

«Es un problema humano. Los mandos, tanto de rango superior como inferior, les fallaron a los PM —concluyó el capitán—. El sistema no funciona, eso está clarísimo; pero el ejército se compone de personas, y dependemos de ellas para hacer las cosas como Dios manda».

En su informe, Taguba señalaba sólo tres militares dignos de elogio. Uno de ellos, el sargento de Marina William J. Kimbro, adiestrador de perros, debía ser felicitado, porque «conocía sus obligaciones y se negó a participar en interrogatorios incorrectos pese a las muchas presiones por parte de la inteligencia militar en Abu Ghraib». En el informe aclaraba aquello en lo que Kimbro no estuvo dispuesto a participar, esto es, «utilizar perros militares para asustar e intimidar a los detenidos amenazándolos con ser atacados; en un caso concreto, uno de los perros llegó a morder a un recluso».

La semana siguiente a que estallara el escándalo recibí una segunda serie de fotografías digitales remitidas por un miembro femenino de la 320ª. Después de un período de servicio en Abu Ghraib en la primavera de 2003, la reservista había vuelto a casa extrañamente taciturna y huraña. Un familiar, examinando un ordenador que ella había tenido consigo en Irak, se topó con imágenes de la prisión. Era una secuencia horripilante que parecía explicar, o al menos hacer comprensible, el estado anímico de la soldado.

Según los archivos digitales, las fotografías fueron tomadas por dos cámaras diferentes en un período de doce minutos la tarde del 12 de diciembre de 2003, dos meses después de que su unidad fuera asignada a Abu Ghraib. En una de ellas se ve a un soldado joven con una cazadora oscura sonriendo a la cámara, en el pasillo de la cárcel. En segundo plano hay dos hombres en uniforme de camuflaje de combate, sujetando de sus correas a dos pastores alemanes. Los perros ladran a un prisionero que queda parcialmente oculto al objetivo por el soldado que sonríe. Otra imagen muestra que el prisionero está desnudo. Tiene las manos enlazadas en la nuca y la espalda apoyada contra la puerta de una celda, encogido de pánico mientras los perros le ladran a unos pasos de distancia. En otra fotografía se ve a los perros tirar de sus correas y lanzar dentelladas al prisionero. En otra, tomada pocos minutos después, el iraquí está tendido en el suelo, retorciéndose de dolor, con un soldado sentado encima y presionándole la espalda con la rodilla; una pierna del recluso sangra copiosamente. Otra de las fotos es un primer plano de un prisionero desnudo de cintura para abajo, tumbado en el suelo. En su muslo derecho se aprecia lo que parece una mordedura o un rasguño profundo. En la pierna izquierda, ensangrentada, tiene una herida más grande.

Hubo como mínimo otro informe anterior de violencia similar, aunque no fue en Abu Ghraib. Cliff Kindy, de los Christian Peacemaker Teams, un grupo respaldado por la Iglesia que había estado contrastando la situación en Irak, me dijo que, en noviembre de 2003, soldados rasos soltaron a un perro militar contra un grupo de civiles durante una redada en Ramada, unos cuarenta kilómetros al oeste de Faluya. Al principio, me explicó Kindy, «los soldados fueron de casa en casa y arrestaron a treinta personas». (Una de ellas era Saad al Jashab, un abogado de la Organization for Human Rights en Irak, que informó a Kindy del incidente). Mientras los treinta detenidos eran esposados y obligados a echarse al suelo, se produjo un tiroteo en las cercanías. Cuando terminó, los iraquíes fueron arrojados al interior de una casa. Jashab dijo a

Kindy que los soldados «soltaron al perro en la casa y varias personas resultaron mordidas». Cuando pregunté al respecto al general de división Charles Hines, durante veintiocho años policía militar y ex comandante de la escuela de PM del ejército, reaccionó con consternación. «¿Soltar un perro en un lugar lleno de gente? ¿Dejar que un perro ataque a prisioneros de guerra? No sabía nada de eso; yo jamás lo habría permitido», dijo. Añadió que los perros amaestrados han estado presentes desde hace mucho tiempo en las prisiones militares, donde se les utiliza para buscar drogas y otros artículos de contrabando entre los presos, y, ocasionalmente, para sofocar disturbios. Pero, dijo, «yo nunca habría autorizado su utilización para interrogar o intimidar a prisioneros. De haberlo hecho me habrían metido en la cárcel o echado del ejército».

A medida que se ahondaba en la investigación, cada vez fue más evidente que el uso de perros para asustar e intimidar a prisioneros era una práctica común en Abu Ghraib, y que los guardianes la creían autorizada por los mandos. Los resultados de la investigación, publicados por el *Washington Post* en junio de 2004, mostraron que los perros eran utilizados repetidamente en los interrogatorios y no siempre para sonsacar información. Un miembro de la inteligencia militar, John Harold Ketzer, testificó haber visto a una pareja de perros acorralar a dos presos contra una pared, uno de ellos escondiéndose detrás del otro y gritando de miedo. No se estaba efectuando ningún interrogatorio. «Cuando pregunté qué estaba ocurriendo en esa celda, el que sujetaba a uno de los perros dijo que [...] él y otro adiestrador estaban haciendo un concurso para ver a cuántos detenidos podían hacer que se orinaran encima». El coronel Thomas Pappas, comandante de la unidad de inteligencia en Abu Ghraib, dijo a los investigadores que esa autorización provenía del general Sánchez. Pero éste, en su comparecencia ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado en mayo de 2004, negó haberla dado. Preguntado sobre cómo era posible que el comandante de una compañía hubiera creído que existía tal autorización, el general de tres estre-

llas escurrió el bulto. «Debería preguntárselo al comandante», contestó. No obstante, dos meses después, *USA Today* informó que había conseguido documentos clasificados donde quedaba claro que Sánchez había dictado órdenes el otoño anterior autorizando a los interrogadores militares el empleo de perros sin necesidad de su aprobación previa. La orden de Sánchez especificaba que en la sala de interrogatorios los perros tenían que llevar bozal y estar a cargo de un adiestrador, pero no ponía restricciones a su uso en otras situaciones o lugares.

Taguba dio a entender que existía una pauta común de actuación entre los interrogatorios efectuados en Afganistán y los malos tratos en Abu Ghraib. Un paralelismo, que Taguba no menciona, fue el caso de John Walker Lindh, acusado de entrenarse con terroristas de Al Qaeda y de conspiración para matar estadounidenses. Pocos días después de su arresto, según una alegación presentada por el abogado James Brosnahan ante el tribunal federal y que consta en acta, unos soldados armados «vendaron los ojos al señor Lindh y le sacaron varias fotografías, solo y con ellos. En una, los soldados posaron con el señor Lindh después de garabatear la palabra "gilipollas" en la venda que llevaba puesta [...]. Un soldado le dijo que lo "iban a colgar" por sus actos y que, cuando estuviera muerto, venderían las fotos y entregarían el dinero a una organización cristiana». Algunas fotografías llegaron posteriormente a manos de los medios estadounidenses. Lindh fue desnudado, atado con cinta adhesiva a una camilla y colocado dentro de un contenedor sin aberturas. Una vez más, se lee en el acta del tribunal, «personal militar fotografió al señor Lindh mientras yacía en el contenedor». El 15 de julio de 2002, Lindh accedió a declararse culpable de portar un arma de fuego durante su permanencia con los talibanes y fue sentenciado a veinte años de cárcel. A lo largo del proceso, me dijo Brosnahan, «el Departamento de Defensa insistió en que declarásemos que no hubo malos tratos "deliberados" contra John». Su cliente accedió a ello, pero, señaló el abogado defensor, «existe esa fotografía de John desnudo y atado a la camilla».

Fotografiar prisioneros, tanto en Afganistán como en Irak, no parece haber sido algo fortuito, sino, más bien, parte del proceso deshumanizador de los interrogatorios. El *New York Times* publicó con posterioridad una entrevista a Hayder Sabbar Abd, quien aseguraba de forma convincente ser uno de los prisioneros iraquíes maltratados que salían en las fotografías de Abu Ghraib. Abd explicó a Ian Fisher, informaba el periódico, que su padecimiento había sido casi constantemente registrado por cámaras, cosa que agravó aún más su humillación. Recordaba el destello de los *flashes* mientras los soldados le decían que se masturbara y le golpeaban al negarse a obedecer. Una de las cuestiones que algún día serán investigadas es por qué un grupo de policías militares de la reserva, en su gran mayoría procedentes de pequeñas poblaciones estadounidenses, atormentaron a los prisioneros de un modo tan humillante. (Gary Myers, abogado del brigada Frederick, me preguntó: «¿Usted cree que unos chicos de la Virginia rural decidieron hacer esto por su cuenta?, ¿que la mejor manera de hacer hablar a los árabes era tenerlos dando vueltas por ahí desnudos?»).

La idea de que los árabes son particularmente vulnerables a las humillaciones sexuales se había convertido en tema de conversación entre los conservadores de Washington partidarios de la guerra en los meses anteriores a la invasión. Un libro que se citaba con frecuencia era *The Arab Mind (La mentalidad árabe)*, un ensayo sobre la cultura y la psicología árabes publicado en 1973 por Raphael Patai, antropólogo cultural que enseñó, entre otras universidades, en Columbia y Princeton, fallecido en 1996. El libro incluye un capítulo de veinticinco páginas sobre los árabes y el sexo, donde se describe el sexo como un tabú revestido de vergüenza y represión. «La segregación de los sexos, el velo de las mujeres [...] y las mil y una reglas que gobiernan y restringen el contacto sexual entre hombres y mujeres tienen como efecto hacer del sexo una cuestión primordialmente mental en el mundo árabe», escribía Patai. La actividad homosexual, «o cualquier indicio de inclinaciones homosexuales, como ocurre con cual-

quier otra expresión de la sexualidad, jamás llega a hacerse pública. Se trata de asuntos privados y se mantienen en privado». El libro de Patai, me dijo un intelectual, era «la biblia de los neoconservadores sobre la conducta árabe». En sus conversaciones, comentó, dos temas destacaban: «Uno, que los árabes sólo comprenden la fuerza, y dos, que su punto débil es la vergüenza y la humillación».

Un asesor del Gobierno dijo que en un principio pudo haber un propósito serio detrás de la humillación sexual y las fotografías. Se creyó que algunos prisioneros harían cualquier cosa (incluido traicionar a sus compatriotas) con tal de impedir que las imágenes llegasen a manos de familiares y amigos. El asesor dijo: «Me explicaron que el propósito de las fotos era reclutar un ejército de informadores, gente a la que se podría reinsertar entre la población». La idea era que el miedo a ser descubiertos los motivaría a proporcionar información sobre posibles acciones insurgentes, continuó. En ese caso, el tiro les salió por la culata: la insurgencia ha ido en aumento.

Los problemas del sistema penitenciario militar no fueron ocultados a los mandos principales. Durante los siete meses de servicio de Karpinski, señalaba Taguba, hubo al menos una docena de incidentes oficialmente conocidos en relación con fugas, intentos de fuga y otros graves problemas de seguridad que fueron investigados por oficiales de la 800ª Brigada. Algunos de esos incidentes habían arrojado reclusos y policías muertos o heridos, dando pie a una serie de encuestas sobre «lecciones aprendidas» dentro de la brigada. Karpinski aprobaba todos los informes y firmaba órdenes con el objeto de mejorar los procedimientos del día a día. Pero Taguba descubrió que la general no hizo ningún seguimiento, nada para asegurarse de que sus órdenes se cumplían. Si lo hubiera hecho, «se podrían haber evitado muchos abusos».

El general Taguba descubrió también que Abu Ghraib estaba al límite de su capacidad y que su dotación de policías militares era escasa y estaba mal pertrechada. «Este dese-

quilibrio ha contribuido a las malas condiciones de vida, las evasiones y el deterioro en las responsabilidades», escribió. Había una notable diferencia, decía, entre el número real de prisioneros y el número oficialmente registrado. Muchos iraquíes inocentes permanecían encarcelados (en algunos casos, por lo visto, indefinidamente) debido a la ausencia de un proceso de selección.

La Convención de Ginebra, en su apartado cuatro, estipula que una potencia ocupante puede encarcelar a civiles que representen una amenaza «imperativa» para la seguridad, pero que debe establecer un procedimiento adecuado para garantizar que sólo permanezcan en prisión aquellos que sigan constituyendo una verdadera amenaza. Los prisioneros tienen derecho a recurrir toda decisión de internamiento y pedir una revisión de sus casos. En febrero de 2004, la organización Human Rights Watch se quejó a Rumsfeld de que muchos civiles iraquíes permanecían detenidos mes tras mes sin que hubiera cargos en su contra. Abu Ghraib se había convertido, en la práctica, en otro Guantánamo.

El estudio de Taguba señalaba que más del sesenta por ciento de los reclusos civiles en Abu Ghraib no estaba considerado una amenaza, lo que debería haber permitido su puesta en libertad. Karpinski se excusaba alegando que sus superiores rechazaban «rutinariamente» sus recomendaciones relativas a la liberación de dichos prisioneros. Pero la general raramente ponía el pie en las prisiones que se suponía que estaban bajo su responsabilidad, escribe Taguba, quien descubrió asimismo una amplia gama de problemas administrativos, algunos de los cuales considera «sin precedentes en mi carrera militar». Los soldados, añadía, estaban «mal preparados y desentrenados [...] antes del despliegue, en el punto de movilización, a su llegada al campo de operaciones y durante toda la misión». El general entrevistó durante cuatro horas a Karpinski, a quien describió como una persona extremadamente emotiva.

«Lo que me pareció muy preocupante de su testimonio fue su absoluta renuencia a comprender o aceptar que mu-

chos de los problemas intrínsecos de la 800ª Brigada de PM eran causados o agravados por una mala jefatura y por su negativa a establecer y hacer cumplir unos criterios y principios básicos entre sus soldados».

Taguba recomendó que Karpinski y siete oficiales de la brigada fuesen relevados del mando y formalmente sancionados. No hubo sugerencia de encausamiento criminal contra Karpinski; por lo visto, se consideraba suficiente castigo la pérdida de rango y la ignominia de una reprimenda pública.

El general entregó su informe el 26 de febrero de 2004. Para entonces, según el testimonio ante del Senado del general Myers, jefe del Estado Mayor Conjunto, la gente «de la casa» ya había hablado de las fotografías. Myers no había leído aún personalmente el informe de Taguba ni había visto las fotos, pero sabía lo suficiente acerca de los malos tratos como para convencer a *60 Minutes II* de que demorara la emisión del programa.

El 4 de mayo, en una rueda de prensa celebrada en el Pentágono, Rumsfeld y el general de marines Peter Pace, segundo del Estado Mayor Conjunto, insistieron en que la investigación realizada en Abu Ghraib había pasado rutinariamente por toda la cadena de mando. Si el ejército había sido lento, se debía a un sentido innato de la seguridad. Pace dijo a los periodistas: «Es importante saber que toda investigación, una vez completada, sube por la cadena de mando de manera escalonada. De esta forma, el individuo que informa por escrito [la envía] a su inmediato superior. Pero éste se toma el tiempo necesario, una semana, dos o incluso tres, para leer toda la documentación, recabar asesoría legal [y] tomar las decisiones que sean pertinentes a su graduación [...]. De este modo se protegen los derechos de todos y tenemos la oportunidad de echar una ojeada a todo el proceso».

Sin embargo, oficiales retirados o en activo y funcionarios del Pentágono declararon que el sistema no había funcionado. Uno de estos últimos dijo que varios de los generales con más estrellas del ejército habían sido excluidos del circuito en el caso Abu Ghraib. Y me confió que muchos ge-

nerales estaban convencidos de que, además de los civiles de la oficina de Rumsfeld, el general Sánchez y el general John Abizaid, jefe del Mando Central en Tampa (Florida), habían hecho todo lo posible por mantener el asunto en secreto durante los primeros meses del año. La cadena de mando va de Sánchez, en Irak, a Abizaid, y de éste a Rumsfeld y al presidente Bush. «Las acciones y las omisiones han de emparejarse con los intereses —dijo el funcionario del Pentágono—. ¿Qué motivo había para no ser francos? Pues que se preveían importantes problemas diplomáticos».

En las semanas posteriores a la divulgación de las fotografías hubo una lluvia de acusaciones dentro del Pentágono. Un general de varias estrellas le comentó a un colega que los mandos militares en Irak deberían haber volado Abu Ghraib con C4 (un potente explosivo) la primavera anterior, con todo su «bagaje emocional», en vez de convertirlo en una instalación norteamericana. «Esto sobrepasa los límites en cuanto a negligencia por parte de los mandos —me dijo un general de división retirado, hablando de los malos tratos en Abu Ghraib—. ¿Dónde estaban los comodoros? Y no estoy hablando de sólo una estrella —se refería a la general Karpinski—. Ha sido un error garrafal de la jefatura», sentenció.

A raíz del escándalo, en sus declaraciones públicas y ante el Congreso muchos generales de la cadena de mando han negado con firmeza cualquier conocimiento previo de mala actuación. Demostrar el mal desempeño de un general es un paso muy arriesgado para oficiales de menor graduación, y los que han hablado conmigo lo hicieron únicamente después de que les garantizase el anonimato. En noviembre de 2003, un oficial con un papel importante en la complicada guerra contra la insurgencia iraquí supo que había abusos sistemáticos contra los prisioneros de Abu Ghraib y otros centros penitenciarios. Llevó esa información a sus superiores, el general Abizaid, jefe del Mando Central, y su ayudante, el teniente general de la fuerza aérea Lance Smith. «Les dije que se producían abusos sistemáticos en las prisiones —me explicó el oficial—. Abizaid no dijo palabra, simplemente me miró

como diciendo: "Largo. No quiero hablar de ese asunto"». Smith tampoco abrió la boca. «Lo sabían desde el año pasado», añadió el oficial.

En el verano de 2004, un asesor militar muy vinculado a Operaciones Especiales me dijo que tenía conocimiento de que algunos oficiales en Irak habían presentado quejas por escrito sobre malos tratos en las prisiones antes de que se divulgaran las fotografías. Se les dijo que sus quejas tenían que ser dirigidas al general Sánchez. Se estaban cometiendo crímenes de guerra, añadió colérico, y no se tomaba ninguna medida. «Daban palizas espantosas. ¿Cómo hay que llamarlo cuando la gente es torturada y queda al borde de la muerte, y los soldados lo saben y no hacen nada por curarles las heridas?». Él mismo respondió a su pregunta: «Ejecución».

El general Antonio Taguba sufrió el destino de todos los que cuentan la verdad. «En ciertos círculos del Pentágono no se le considera precisamente un héroe —ironizó un general de división retirado—. Él fue quien tocó el silbato, y ahora el ejército tendrá que pagar el precio de su integridad. A la cúpula no le gusta que la gente vaya pregonando por ahí las malas noticias».

En su rueda de prensa del 4 de mayo, el martes siguiente a la aparición de las primeras fotografías, Rumsfeld, preguntado sobre si creía que las fotos y lo que se contaba de Abu Ghraib constituían un contratiempo para la política estadounidense en Irak, pareció empeñado en negar la evidencia. «Oh, yo no escribo historia instantánea», dijo. Sin embargo, el viernes 7, cuando algunos periódicos y congresistas pedían su dimisión, Rumsfeld testificó por fin ante el Congreso y pidió disculpas por lo que calificó de conducta «impropia de estadounidenses» en Abu Ghraib. Advirtió asimismo de que habría nuevas y peores revelaciones. Dijo que en realidad él no había visto ninguna de las famosas fotografías hasta que aparecieron en la prensa, y que no había echado una ojeada a las copias en poder del ejército hasta el día anterior. Cuando lo hizo, dijo, le parecieron «difíciles de creer. Hay otras fotos que

describen [...] actos que sólo pueden ser calificados de gratuitamente sádicos, crueles e inhumanos». Más adelante vaticinó: «Me temo que lo que vendrá será más horrible todavía». Y añadió: «No supe ver hasta qué punto era importante».

NBC News citó después a funcionarios militares, según los cuales las fotografías no publicadas muestran a soldados estadounidenses «golpeando salvajemente a un prisionero iraquí hasta dejarlo medio muerto, realizando el acto sexual con una prisionera iraquí y "actuando inadecuadamente con un cadáver". Los funcionarios dijeron que hay también un video, aparentemente grabado por personal norteamericano, donde se ve a guardias iraquíes violando a muchachos».

En mi primera aproximación vi más de cincuenta fotografías de los malos tratos en Abu Ghraib. En semanas sucesivas, otros medios informativos, sobre todo el *Washington Post*, obtuvieron y publicaron aún más. En julio de 2004, un abogado vinculado al caso me dijo que una de las declaraciones de testigos que había leído describía la violación de un muchacho por un empleado extranjero que ejercía de intérprete en Abu Ghraib. En la declaración, que no fue hecha pública, un prisionero afirmaba haber presenciado la violación y que una mujer estaba tomando fotos. El testigo añadió, según este abogado, que «el chaval hacía mucho ruido». En su informe, el general Taguba señalaba que las pruebas que había reunido incluían cintas de video además de fotografías. Decía también que ciertos miembros del personal iraquí «hacen gala de una dudosa ética del trabajo y constituyen un contingente potencialmente peligroso dentro del Sitio Duro». (La Cruz Roja contabilizó ciento siete jóvenes recluidos en seis prisiones militares estadounidenses en Irak durante las inspecciones que realizó en los cinco primeros meses de 2004, pero no pudo obtener información completa acerca de sus edades ni de las condiciones de su reclusión). En la primavera de 2004, un importante científico iraquí de armamento actualmente radicado en el extranjero me comentó el impacto traumático causado por las torturas. Me dijo que varias mujeres detenidas en Abu Ghraib habían «pasado mensajes a sus

familias implorándoles que les hicieran llegar veneno para poner fin a sus vidas, mientras que otras han pasado mensajes pidiendo que las maten inmediatamente a su salida de la prisión. Así es el código del honor en la mayor parte de Oriente Próximo. Vidas inocentes se inmolan [para que] sus familias puedan sobrevivir a la vergüenza».

El empeño por tener una idea clara de lo que sucedía en Abu Ghraib evolucionó hacia una serie de investigaciones afines, algunas de ellas apresuradas, incluyendo pesquisas sobre docenas de muertes sospechosas en todo el sistema penitenciario militar. A los investigadores les preocupaba el papel desempeñado no sólo por los militares sino también por los agentes de la CIA y los civiles contratados, como los intérpretes iraquíes. En una declaración, la agencia reconocía que el inspector general del ejército había puesto en marcha una investigación sobre malos tratos en Abu Ghraib que comprendía la muerte de un prisionero, un iraquí llamado Manadel al Jamadi. Una foto de Jamadi donde se ve su cuerpo destrozado y cubierto de hielo ha circulado por todo el mundo.

En una carta a su familia, Frederick escribió que en noviembre de 2003 un recluso (más tarde identificado como Jamadi) fue llevado a su unidad para ser interrogado por miembros de las OGA —en realidad, la CIA y sus contratados paramilitares—. «Lo trataron de tal mala manera que el tipo se desmayó. Metieron su cuerpo en una bolsa llena de hielo y lo tuvieron durante unas veinticuatro horas bajo la ducha [...]. Al día siguiente vinieron los sanitarios y lo pusieron en una camilla, le colocaron un falso gotero en el brazo y se lo llevaron». El iraquí muerto nunca pasó por el control de reclusos de la prisión, explicaba Frederick, «y por consiguiente nunca tuvo un número».

Posteriores testimonios en los procesos de Abu Ghraib corroboraron gran parte de lo relatado por Frederick. Un testigo que no fue acusado, el soldado Bruce Brown, habló de que habían rociado el cuerpo putrefacto de Jamadi «con un acondicionador para disimular la pestilencia». Otros testigos

declararon que agentes de la CIA habían entregado a Jamadi, encapuchado, en la prisión para su interrogatorio, que fue llevado a cabo —los testigos no se pusieron de acuerdo en esto— ya por la propia CIA, ya por la CIA y la inteligencia militar. Tras la muerte de Jamadi, otro testigo declaró que el coronel Pappas, jefe de la inteligencia militar en Abu Ghraib, se vio envuelto en una discusión sobre qué hacer con el cadáver. La solución inmediata fue cubrirlo de hielo. El testigo, el capitán Donald Reese, jefe de una de las compañías de la PM implicadas, testificó que oyó a Pappas decir: «No voy a pagar yo solo por esto». A finales de julio, investigadores del ejército estaban tratando de determinar si algunos oficiales y soldados habían participado en una conspiración para cometer asesinato.

A medida que crecía la indignación internacional por el caso Abu Ghraib, oficiales de alta graduación y el presidente Bush insistieron en que las acciones de unos pocos no reflejaban la conducta de los militares en su conjunto. Sin embargo, el informe de Taguba era un descarnado estudio sobre la mala actuación colectiva y el fracaso de la cúpula del ejército. Según su descripción de Abu Ghraib, el reglamento militar y la Convención de Ginebra eran violados rutinariamente, y la tutela de los prisioneros quedaba en manos de las unidades de inteligencia militar y de los civiles contratados. Todas las disculpas y sesgos políticos no pueden ocultar el hecho de que, desde los atentados del 11-S, el presidente Bush y sus hombres de confianza se habían embarcado en una guerra contra el terrorismo en la que las viejas normas no eran aplicables. Sonsacar información a los prisioneros, aun empleando la intimidación y la tortura, era la máxima prioridad.

Cruzar la frontera

Las raíces del escándalo de Abu Ghraib no están en los actos abominables de unos cuantos reservistas del ejército, sino en el hecho de que George Bush y Donald Rumsfeld re-

currieran a operaciones secretas y al uso de la coerción —la política del ojo por ojo— para combatir el terrorismo. La decisión más fatídica de Rumsfeld, aprobada por la Casa Blanca, llegó en un momento de crisis en agosto de 2003, cuando el secretario de Defensa amplió la aplicación del programa de acceso especial [restringido a muy pocas personas] SAP a las prisiones de Irak. La decisión de Rumsfeld causó resentimiento entre los servicios de inteligencia, menoscabó la efectividad de los comandos de élite y perjudicó las perspectivas de Estados Unidos en su guerra contra el terrorismo.

Según me comentaron varios funcionarios de inteligencia en activo y retirados, el SAP —aspectos del cual eran conocidos en los servicios de inteligencia con varios nombres en clave, entre otros Copper Green [Verde Cobre]— fomentaba la coerción física y las humillaciones sexuales de los prisioneros iraquíes con miras a obtener más información sobre la insurgencia. Un importante funcionario de la CIA confirmó los detalles de esta versión y dijo que el programa partía del deseo de Rumsfeld de arrebatar a la agencia el control de las operaciones clandestinas y paramilitares.

Supe inicialmente de la existencia del SAP por miembros de los servicios de inteligencia que estaban preocupados por las presuntas violaciones de la Convención de Ginebra; temían que tales actividades, en caso de ser descubiertas, pudieran socavar por completo la reputación moral de Estados Unidos y exponer a las tropas a una venganza. Después de que se publicara mi artículo sobre el SAP en mayo de 2004, un importante miembro del Congreso confirmó la existencia de dicho programa y me dijo que el presidente Bush lo había notificado oficialmente al Congreso. El congresista añadió que él, sin embargo, apenas había sido informado del programa. Sólo unos pocos miembros de la Cámara de Representantes y el Senado estaban autorizados por los estatutos a ser informados de ello, e, incluso así, se les proporcionó poca cosa más que información básica sobre su presupuesto. No está claro que estos senadores y representantes entendieran que Es-

tados Unidos se disponía a acometer la empresa de hacer «desaparecer» personas.

Un indicio de la importancia de tales programas para la Administración lo dio el propio Bush. En junio de 2002, la Administración se opuso a un artículo del presupuesto anual del Pentágono que establecía un plazo de treinta días para notificar al Congreso antes de poner en marcha programas como el SAP. «Pueden surgir situaciones, especialmente en tiempo de guerra —argumentó la Casa Blanca en una declaración oficial—, en las que el presidente deba restringir sin falta el acceso a información clasificada relativa a la seguridad nacional». El presidente no se salió con la suya, y el plazo de treinta días se mantuvo. En octubre, Bush, con aspecto disgustado, firmó el presupuesto, pero dijo básicamente al Congreso que él haría lo que le diera la gana. «El Tribunal Supremo ha dictaminado que la autoridad del presidente para clasificar y controlar el acceso a información relativa a la seguridad nacional emana de la Constitución y no depende de una autorización legislativa», dijo. Y avisó que interpretaría la legislación «de manera compatible con la autoridad constitucional del presidente».

Rumsfeld, que en mayo declaró sobre Abu Ghraib ante el Senado, estaba legalmente exonerado de mencionar asuntos ultrasecretos en una sesión pública. Sin embargo, transmitió el mensaje de que estaba diciendo todo cuanto sabía sobre el particular. «Cualquier insinuación de que no somos plenamente conscientes de lo sucedido y del daño que esto ha hecho, creo yo, sería una mala interpretación», dijo. Al preguntarle sobre el testimonio de Rumsfeld y el de Stephen Cambone, su subscretario para inteligencia, el funcionario de la CIA me comentó: «Hay gente que piensa que se puede engañar a cualquiera».

En cierto modo, la historia de Abu Ghraib comenzó pocas semanas antes de los atentados del 11-S, con los bombardeos estadounidenses sobre Afganistán. Casi desde el principio, la búsqueda de miembros de Al Qaeda en la zona de

guerra y de terroristas en todo el mundo se topó con importantes problemas de mando y control. Por ejemplo, las fuerzas de combate que tenían blancos de Al Qaeda a la vista tenían que conseguir una autorización antes de dispararles. El 7 de octubre de 2001, la noche en la que se iniciaron los bombardeos, un avión Predator no tripulado identificó un convoy terrestre en el que, según creían los servicios de inteligencia, viajaba el líder talibán, el mulá Omar. Un abogado de servicio en el cuartel general del Mando Central, en Tampa (Florida), se negó a autorizar el ataque. Para cuando se obtuvo el permiso, el blanco estaba ya fuera de alcance. Rumsfeld casi sufrió un ataque de nervios por lo que consideró una intolerable vacilación que sólo obedecía a la corrección política. Un funcionario me lo explicó aquel otoño diciendo que «pateó vasos y dio puñetazos a las puertas». En noviembre de 2001, el *Washington Post* publicó que, al menos en diez ocasiones desde primeros de octubre, pilotos de la fuerza aérea habían creído tener en el punto de mira a miembros de Al Qaeda y talibanes, pero no habían podido actuar a tiempo debido a obstáculos burocráticos. Problemas similares se producían en todo el mundo: las unidades de las Fuerzas Especiales que trataban de actuar con prontitud contra presuntas células terroristas eran obligadas a obtener aprobación previa de los embajadores estadounidenses y a informar a sus superiores en la cadena de mando.

Tras conocerse los abusos en Abu Ghraib, un ex alto funcionario de inteligencia con información de primera mano sobre el SAP me explicó cómo y por qué había nacido este programa ultrasecreto. Cuando la búsqueda de Al Qaeda y Bin Laden empezaba a atascarse, dijo, quedó en evidencia que el espionaje estadounidense en la zona no estaba consiguiendo información valiosa de manera oportuna. Bin Laden parecía muy lejos del alcance de Estados Unidos. «La Casa Blanca se preguntaba —recordó el ex funcionario— cómo armar todo ese embrollo. No había manera de organizarlo con eficacia». Mientras la presión iba en aumento, algunos datos confidenciales llegaban vía la CIA desde servicios de espionaje amigos

(aliados de Estados Unidos en Oriente Próximo y en el sureste asiático) que no temían emplear mano dura con sus prisioneros. Semanas después de la invasión de Afganistán, las tropas estadounidenses estaban saturadas de prisioneros. «Nuestra capacidad para realizar interrogatorios se colapsó —dijo el ex funcionario—. Entretanto, nuestros aliados nos decían: "A un prisionero le hemos arrancado dientes y dedos y hemos conseguido datos. Ahora está muerto, pero da igual"». Y añadió: «No está clara la frontera entre utilizar agentes de países amigos para aplastar cabezas y que lo hagan los propios norteamericanos». No obstante, las tácticas de mano dura parecían gustar a Rumsfeld y a sus hombres de confianza civiles.

Rumsfeld autorizó entonces la creación del programa ultrasecreto, que obtuvo una aprobación general anticipada, para eliminar o capturar y, si era posible, interrogar a individuos valiosos. El SAP —sujeto al más restringido nivel de seguridad del Departamento de Defensa— fue puesto en marcha con una oficina especial en una zona segura del Pentágono. El programa reclutaría agentes y conseguiría el equipo necesario, incluidos aviones, manteniendo sus actividades en secreto. Las operaciones de espionaje más exitosas llevadas a cabo por Estados Unidos durante la guerra fría habían sido SAP, como la penetración con submarinos del tendido de cables utilizados por el alto mando soviético y la construcción del bombardero antirradar de la fuerza aérea. Todos los llamados «programas negros» tenían un elemento en común: el secretario de Defensa, o su suplente, creían que las restricciones militares normales del material clasificado no proporcionaban suficiente seguridad.

«El objetivo de Rumsfeld era tener un equipo in situ para hacerse cargo de los elementos valiosos, un grupo de choque para actuar con la máxima rapidez —me dijo el ex alto funcionario de inteligencia—. Reunió a todas las agencias, la CIA y la NSA para conseguir una aprobación previa. Todo sería cuestión de pronunciar una contraseña y actuar». La operación tenía el visto bueno de Condoleezza Rice, la consejera de seguridad nacional.

Las personas asignadas al programa trabajaron según el procedimiento habitual, me dijo el ex funcionario. Crearon contraseñas y reclutaron, tras una criba minuciosa, a comandos y agentes muy bien entrenados entre las fuerzas de élite: los SEAL de la Armada, la Delta Force del ejército y los expertos paramilitares de la CIA. También formularon preguntas básicas: «¿La gente que trabaje en el tema deberá emplear alias? Sí. ¿Necesitamos tapaderas para el correo? Sí. No dejar rastros. Nada de presupuesto. Y algunos programas de acceso ultrarrestringido no requieren informar completamente de ello al Congreso».

En teoría, la operación facultaba a la Administración Bush para reaccionar rápidamente a informaciones de utilidad inmediata: los comandos cruzaban fronteras por las buenas y podían interrogar a sospechosos de terrorismo considerados demasiado importantes para ser transferidos a Guantánamo. Realizaban interrogatorios instantáneos, a menudo con la colaboración de servicios de inteligencia extranjeros —usando la fuerza si era preciso— en centros secretos de la CIA diseminados por todo el mundo. La información confidencial sería transmitida al mando central del SAP en el Pentágono en tiempo real, y examinada en busca de esos datos cruciales para el mundo «blanco», o no clandestino.

Menos de doscientos agentes y funcionarios, incluidos Rumsfeld y el general Myers, estaban «completamente al corriente del programa», me dijo el ex funcionario de inteligencia. El objetivo era proteger al máximo la operación: «No vamos a dar acceso a más personas de las necesarias a nuestro particular corazón de las tinieblas. Las normas son: "Atrapa a quien haga falta. Y luego haz lo que quieras"».

Un funcionario del Pentágono muy involucrado en el programa era Stephen Cambone, subsecretario de Defensa para Inteligencia. Había trabajado en estrecha colaboración con Rumsfeld en varios puestos del Pentágono desde los inicios de la Administración Bush, pero este cargo, para el que fue nombrado en marzo de 2003, era nuevo; fue creado como parte de la reorganización llevada a cabo por Rumsfeld.

Cambone era impopular entre los militares y los burócratas de la inteligencia del Pentágono, sobre todo porque tenía escasa experiencia en programas de inteligencia. Se le conocía sobre todo por su proximidad a Rumsfeld. «¿Se acuerda de *Enrique II?*: "¿Quién me librará de este clérigo entrometido?" —me dijo sonriendo el funcionario de la CIA en mayo de 2004—. Lo que a Rumsfeld se le ocurra decir, Cambone lo dirá diez veces más».

Cambone era un ferviente partidario de la guerra contra Irak. Le irritó, como a Rumsfeld, la incapacidad de la CIA antes de la guerra para afirmar de modo concluyente que Sadam Husein tenía armas de destrucción masiva. Cambone, que se doctoró en Ciencias Políticas por la Universidad de Claremont en 1982, había sido director de un comité, dirigido por Rumsfeld, que en 1998 advirtió sobre una emergente amenaza con misiles balísticos y argumentaba que las agencias de inteligencia debían ir en sus análisis más allá de los datos disponibles. En las audiencias previas a su nombramiento, Cambone dijo al Senado que los que evaluaban los servicios de inteligencia debían hacer preguntas a los analistas: «¿Cómo han llegado a estas conclusiones y cuáles han sido las fuentes de información?». Rumsfeld era uno de los principales defensores de esta manera de enfocar la cuestión. Sin embargo, tenía sus detractores desde que las predicciones de la Administración sobre las armas de destrucción masiva y el movimiento insurgente no se habían cumplido, y los civiles del Pentágono, como Cambone, fueron acusados de politizar la inteligencia. (Un mes después de la caída de Bagdad, Cambone fue el primer funcionario importante del Pentágono que afirmó públicamente —y erróneamente, como se vería después— que un camión militar iraquí capturado podía ser un laboratorio móvil de armas biológicas).

El ayudante militar de Cambone, el teniente general William G. Boykin, también era problemático. En el otoño de 2003 dio lugar a titulares poco propicios al conocerse que en un discurso pronunciado en una iglesia de Oregón había equiparado al mundo musulmán con Satanás. Después del revuelo que se organizó, alguien me dijo que Boykin había par-

ticipado, en representación de Cambone, en las adopción de las medidas que condujeron a las torturas en Abu Ghraib.

Tras su nombramiento, Cambone provocó una batalla burocrática en el Pentágono al insistir en que se le adjudicara el control de todo programa secreto de acceso especial que fuera significativo para la lucha antiterrorista. Esos programas, que muchos en el Pentágono consideraban sacrosantos, eran supervisados por Kenneth de Graffenreid, que tenía experiencia en contraespionaje. Cambone consiguió el control y De Graffenreid abandonó el Pentágono. Preguntado sobre mi artículo de mayo, un portavoz del Pentágono dijo que no hablaría de «ningún programa secreto» pero que Cambone «no tuvo nada que ver en el proceso de toma de decisiones en relación con los métodos de interrogatorio en Irak». A mediados de 2003, el SAP, al menos en el Pentágono, estaba considerado uno de los grandes éxitos de la guerra contra el terrorismo. «Era un programa eficaz», me dijo el ex alto funcionario de inteligencia, que conoce a fondo los programas de acceso especial, siempre y cuando estuviera bajo el control de «gente bien entrenada. Pero se metieron los políticos y las decisiones empezaron a basarse en la rapidez, no en la paciencia». Y añadió: «Es una tragedia griega. Los chicos me preguntan: "¿Cuándo hacemos sonar el silbato? ¿Cuándo se convierte en delito mayor una pequeña transgresión, un maltrato físico? ¿Dónde está la línea que separa los abusos a los prisioneros de los crímenes de guerra?"». «Cuando el monstruo empieza a cobrar vida —observó luego—, sus creadores se regocijan. El monstruo lo está haciendo bien, muy bien», al menos desde el punto de vista de aquellos implicados que, según este ex funcionario, empezaban a verse como «amos y señores del mundo en materia de inteligencia». Sin embargo, algunos métodos del SAP eran conflictivos y no superaban un examen a fondo.

«Cuando se está en plena acción —señaló el ex funcionario— la gente hace cosas extrañas que después, en retrospectiva, no puede explicar ni tolerar. Ahora tienen remordimientos de conciencia, y están cagados de miedo [por la posibilidad de una futura investigación]. En cuanto pase

la crisis de Irak, alguien hará sonar el silbato. La gente buena está empezando a comprender lo que no sabe».

El 18 de diciembre de 2001, agentes estadounidenses participaron en el secuestro de dos egipcios, Ahmed Agiza y Mohamed al Zery, quienes habían buscado asilo en Suecia. El espionaje norteamericano los creía vinculados a grupos militantes islámicos. Fueron raptados a media tarde y sacados de Suecia en un reactor privado Gulfstream 5 alquilado por el Gobierno de Estados Unidos y conducidos a El Cairo, donde se les sometió a brutales interrogatorios. «Los dos estaban sucios [o sea, directamente involucrados] —dijo el ex funcionario de inteligencia—, pero aquello fue totalmente gratuito».

Fuera de Suecia, la historia de Agiza y Zery llamó poco la atención pese a las reiteradas quejas de grupos pro derechos humanos, hasta que en mayo de 2004 un documental de la televisión sueca reveló que el Gobierno sueco había cooperado tras recibir garantías de que los egipcios no serían torturados ni sufrirían daño alguno una vez llegados a su país. Sin embargo, según el documental, titulado *Promesa rota*, Agiza y Zery fueron esposados de manos y pies y conducidos al aeropuerto por agentes suecos y —según un testigo ocular— norteamericanos, y entregados al pie del avión a un grupo de estadounidenses de paisano. En ese momento, «a los prisioneros se les quita la ropa cortándola con unas tijeras, sin aflojarles las esposas ni los grilletes. Desnudos, se les introduce en el ano alguna clase de supositorio y les colocan pañales. Luego les ponen sendos monos oscuros y les encadenan manos y pies a un arnés especial. Durante el vuelo, ambos viajan encapuchados y con los ojos vendados».

Una vez en Egipto, según han informado Agiza y Zery a través de diplomáticos suecos, familiares y asesores legales, fueron sometidos a torturas mediante *electroshock*, con electrodos aplicados a las partes más sensibles del cuerpo. Las autoridades egipcias dictaminaron finalmente, según este documental, que Zery tenía muy pocos vínculos con el terrorismo actual. Fue puesto en libertad en octubre de 2003, aunque continúa bajo vigilancia policial. En cuanto a Agiza, sus

abogados admitieron que había sido miembro de la Yihad Islámica Egipcia, un grupo ilegal en dicho país, y que tuvo contactos con Ayman al Zauahiri, el segundo hombre en importancia dentro de Al Qaeda. Agiza fue condenado en abril de 2004 a veinticinco años de prisión. Sus abogados insisten, sin embargo, en que cortó toda relación con Zauahiri hace diez años y que había denunciado públicamente el empleo de la violencia por los fundamentalistas islámicos, incluido Al Qaeda. No se ha hecho pública ninguna prueba que relacione a Agiza con un atentado terrorista.

Fredrik Laurin, periodista sueco que trabajó en *Promesa rota*, hizo una investigación a fondo del reactor alquilado que se utilizó para trasladar a El Cairo a Zery y Agiza. Laurin me dijo que pudo averiguar que el avión, en diferentes viajes, había estado en Pakistán, Kuwait, Egipto, Alemania, Inglaterra, Irlanda, Marruecos, así como en el área de Washington, DC. También hizo visitas a Guantánamo. La compañía declaró que el avión era alquilado casi exclusivamente por el Gobierno de Estados Unidos. Curiosamente, los datos obtenidos por Laurin indican que el Gulfstream suspendió sus viajes fuera de Estados Unidos desde el 5 de mayo de 2004 —una semana después de que estallara el escándalo de Abu Ghraib— hasta el 7 de julio, cuando despegó del aeropuerto de Dulles, en la periferia de Washington, con destino a El Cairo.

En público, el Gobierno sueco ha seguido manteniendo que tomó la decisión correcta. Kjell Jonson, abogado de Zery, me comentó: «No dijeron la verdad y hay muchas cosas que se mantienen en secreto, incluso ahora. No tengo acceso a documentos que necesito. Egipto le quería [a Zery], pero existe un procedimiento legal. Según la ley sueca, si un Estado solicita una extradición, el Gobierno debe solicitar a su vez el visto bueno del Tribunal Supremo. Se pone en marcha un proceso en el que se escucha a las dos partes».

En una declaración emitida en mayo de 2004, Human Rights Watch instaba a las Naciones Unidas a convocar una comisión internacional que investigase el papel de Suecia, Egipto y Estados Unidos en el secuestro y posterior tortura de los

dos hombres. «Es necesario que haya un informe completo —dijo Rachel Denber, de Human Rights Watch—. De lo contrario, estos casos servirán para enviar una señal más de que en la "guerra contra el terror" todo vale... incluyendo la tortura». En verano de 2004, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, que dispone de autoridad para iniciar una investigación de este tipo, no lo había hecho.

El Derecho Internacional prohíbe la entrega o el traslado obligado de cualquier persona, independientemente de su estatus o el crimen que se le impute, a un país donde pueda correr el riesgo de sufrir tortura o malos tratos. La CIA, en su testimonio ante el Congreso, reconoció que antes de 2001 había estado implicada en cerca de setenta «entregas extraordinarias» (deportaciones consideradas demasiado urgentes como para pasar por el procedimiento legal habitual). Desde el 11-S, la Administración Bush se ha negado a discutir estos traslados obligados, a pesar de los muchos informes que se han publicado sobre prisioneros enviados a países aliados para someterlos a interrogatorios intensivos. Durante la audiencia del Senado sobre Abu Ghraib que tuvo lugar el 11 de mayo de 2004, el senador Edward M. Kennedy, demócrata por Massachussets, intentó repetidamente, y con escaso éxito, discutir el asunto con Stephen Cambone. Fue un diálogo de preguntas y respuestas sin respuesta, o cuidadosamente postergadas y engañosas.

Kennedy citó informes publicados sobre las entregas, efectuadas por oficiales norteamericanos, de detenidos conflictivos a países cuyos Gobiernos torturan de modo rutinario a sus prisioneros, y preguntó acto seguido: «¿Podría usted asegurar que la Administración está cumpliendo enteramente las disposiciones legales y que todos los informes sobre funcionarios de Estados Unidos implicados en la práctica de estas entregas son falsos?».

Cambone: Por lo que sé, así es.

Kennedy: ¿Por lo que usted sabe, entonces, quiere decir que Estados Unidos no se ha visto implicado en ninguna entrega, en ningún traspaso de ninguna persona a otro país?

C: No, no... Usted se refería a personas que hubieran sido entregadas para recibir tortura o malos tratos. Hemos devuelto, por ejemplo, individuos al Reino Unido. Puede que haya tres o cuatro que hayan sido devueltos de Guantánamo.

K: ¿Han entregado sospechosos, que usted sepa, a Arabia Saudí, Jordania, Marruecos o Siria para sonsacarles información?

C: De entre los que están bajo custodia del Departamento de Defensa, no que yo sepa... Si los hay, se lo comunicaré. Por lo que me consta, no hay nadie bajo nuestra custodia que haya sido enviado a esos países.

Después del inicio de la guerra, en marzo de 2003, el programa SAP llevó a cabo unas cuantas misiones en Irak, dijo el ex funcionario de inteligencia. La CIA y las Fuerzas Especiales formaron un equipo ultrasecreto para dar caza a Sadam Husein y encontrar las armas de destrucción masiva. Pero no fueron capaces de detener el desarrollo de la insurgencia.

En los meses posteriores a la caída de Bagdad, Rumsfeld y sus colaboradores tenían todavía una visión limitada de la insurgencia, considerándola poco más que obra de baazistas «desahuciados», bandas criminales y terroristas extranjeros seguidores de Al Qaeda. La Administración calculaba su éxito en la guerra por el número de capturas de los cincuenta y cinco miembros del antiguo régimen más buscados (representados por la famosa baraja). Entonces, en agosto de 2003, las bombas terroristas destruyeron la Embajada jordana en Bagdad, matando a diecinueve personas, así como el cuartel general de las Naciones Unidas, acabando con la vida de veintitrés personas más, entre ellas Sergio Vieira de Mello, jefe de la misión de la ONU. El 25 de agosto, menos de una semana después, Rumsfeld reconoció, en un encuentro con los Veteranos de Guerras en el Extranjero, que «los desahuciados siguen aún con nosotros». Y prosiguió: «Hay quienes se sorprenden de que aún queden focos de resistencia en Irak, y sugieren que esto representa un fallo por parte de la coalición. Pero no es el caso». Rumsfeld comparó a los insurgentes con

los nazis fanáticos que «siguieron luchando durante y después de la derrota del régimen hitleriano». Unas semanas más tarde, cinco meses después de la caída de Bagdad, declaraba: «Desde mi punto de vista, es mejor combatir a los terroristas en Irak que en Estados Unidos».

En el Pentágono existía una creciente conciencia de que la guerra iba mal. La cada vez más asediada y desconcertada cúpula militar informaba a la prensa de que los insurgentes no eran más que cinco mil baazistas recalcitrantes. «Pero cuando ustedes comprendan que están organizados en estructuras celulares —declaró el general Abizaid—, que tienen acceso a mucho dinero y a mucho armamento, comprenderán entonces lo peligrosos que son».

El ejército y los servicios de inteligencia seguían sin lograr infiltrarse con éxito entre los insurgentes. Un informe interno preparado por el ejército, y que llegó a mis manos, decía que «las tácticas estratégicas y operativas de los insurgentes han demostrado ser muy buenas». Y explicaba: «Su capacidad para atacar convoyes, otros blancos vulnerables e individuos concretos es el resultado de una concienzuda labor de vigilancia y reconocimiento. Las células insurgentes poseen información sobre los movimientos de convoyes y tropas y sobre las costumbres diarias de los iraquíes que trabajan para la coalición, que les es proporcionada desde el interior de los servicios de seguridad iraquíes, principalmente la policía iraquí (entre cuyos miembros hay muchos simpatizantes de los insurgentes), de los ministerios iraquíes y de partidarios de la insurgencia que trabajan en la llamada Zona Verde de Bagdad». Y concluía: «Políticamente, hasta la fecha, Estados Unidos ha fracasado. Una insurgencia puede solucionarse o mitigarse afrontando la causa que la haya provocado. La principal causa de la insurgencia iraquí ha sido el desastre de la reconstrucción del país. El gobierno legítimo no existe, y la Autoridad Provisional de la Coalición (CPA) ha de asumir el triste pero simple hecho de que la mayoría de los iraquíes no considera que el Consejo de Gobierno Iraquí [el organismo nombrado por la CPA] sea una autoridad legíti-

ma. De hecho, saben que el verdadero poder está en manos de la Autoridad Provisional».

En otoño de 2003, un analista militar me dijo que el alcance de los errores políticos y militares cometidos por el Pentágono había quedado en evidencia. Entre los «desahuciados» de Rumsfeld había ahora no sólo baazistas, sino también muchos elementos marginales: matones y delincuentes que se encontraban entre los miles de presos liberados el otoño anterior por Sadam como parte de una amnistía general previa a la guerra. No era su desesperación lo que dirigía la insurgencia; sencillamente, eran fáciles de reclutar por aquellos que sí estaban desesperados. «Hemos matado y capturado a tipos que recibían doscientos o trescientos dólares por "rezar y repartir" —es decir, disparar al azar y esperar acertar—. No eran realmente insurgentes, sino vagabundos pagados por gente rica simpatizante de la insurgencia», dijo el analista. En muchos casos, quienes pagaban eran suníes que habían sido miembros del partido Baaz. Los insurgentes «pasaron tres o cuatro meses estudiando cómo operábamos y desarrollando sus propias estrategias. Si eso significaba enviar a un desventurado chico a que atacase un convoy para ver cómo respondían los norteamericanos, lo hacían». Entonces, dijo el analista, «los más listos entraban en acción».

Contrastando con eso, según el informe militar, las fuerzas de la coalición sabían poca cosa sobre la insurgencia: «La información sobre el terreno es escasa o nula [...] debido a la falta de competencia y experiencia [...]. El esfuerzo de la inteligencia no está coordinado, bien porque hay demasiados grupos implicados en obtener información, bien porque ésta no llega a tiempo a los soldados que están al pie del cañón». El éxito de la guerra estaba en peligro; algo tenía que hacerse para cambiar la dinámica.

La relación entre la policía militar y los servicios de inteligencia en el seno del sistema carcelario había alcanzado un punto crítico. «Se trata de una lucha por la información —comentó el brigadier general Martin Dempsey, comandante de la 1ª División Acorazada, en una rueda de prensa en

Bagdad en noviembre de 2003—. ¿Dispongo de soldados suficientes? La respuesta es un sí rotundo. Ahora bien, ¿cómo los utilizo y basándome en qué? La respuesta a eso radica en la información [...], en intentar discernir cómo absorber la información a medida que va llegándonos para luego convertirla en algo que nos permita pasar a la acción».

La solución, ratificada por Rumsfeld y orquestada por Stephen Cambone, fue ponerse duros con los prisioneros iraquíes sospechosos de pertenecer a la insurgencia. El sistema carcelario militar tendría ahora que aportar lo suyo. Una figura clave, como hemos visto, fue el general Geoffrey Miller, comandante de Guantánamo, cuya presencia había sido requerida en Bagdad a finales de agosto para revisar los procedimientos de interrogatorios carcelarios. Rumsfeld y Cambone, sin embargo, fueron un paso más allá de la pura imitación de Guantánamo; extendieron el alcance del SAP, trasladando a Abu Ghraib sus métodos poco convencionales. Los comandos tenían que operar en Irak tal como lo habían hecho en Afganistán. Los prisioneros podrían ser tratados con dureza y expuestos a la humillación sexual.

«No estaban obteniendo nada sustancioso de los detenidos en Irak —me dijo el ex funcionario de inteligencia—. Ningún nombre. Nada a lo que agarrarse. Entonces Cambone dijo: "Tengo que poner manos a la obra en esto y estoy cansado de trabajar a través de la cadena de mando normal. Tengo todo este aparato montado [el SAP] y no voy a seguir esperando". De modo que le dio al interruptor y, a partir del pasado verano, la electricidad se puso en marcha. Y funciona. Estamos obteniendo un buen retrato de la insurgencia en Irak y la información fluye hacia el mundo blanco [no clandestino]. Estamos obteniendo buen material. Pero tenemos más objetivos que gente capaz de manejarlos».

Cambone tomó entonces otra decisión crucial, me dijo el ex funcionario de inteligencia: no sólo llevaría los métodos del SAP a las cárceles iraquíes, sino que además pondría a trabajar dentro de las mismas a oficiales de la inteligencia militar bajo la cobertura del SAP. «De modo que, básicamente,

tenemos aquí a unos buenos chicos [los de inteligencia militar] a quienes se les ha dicho que todo vale», añadió el ex funcionario.

En otra entrevista, un asesor del Pentágono que pasó gran parte de su carrera relacionado con programas de acceso especial, repartió las culpas: «La Casa Blanca subcontrató todo esto al Pentágono, y el Pentágono lo subcontrató a Cambone. Es un asunto de Cambone, pero Rumsfeld y Myers aprobaron el programa». En cuanto a los interrogatorios de Abu Ghraib, dijo, Rumsfeld dejó los detalles en manos de Cambone. Puede que Rumsfeld no sea personalmente culpable, añadió, «pero es responsable de su control y corrección. El tema es que, desde el 11-S, hemos cambiado las reglas de juego para enfrentarnos al terrorismo y se han creado condiciones donde el fin justifica los medios».

La necesidad de comprender mejor la insurgencia fue aumentando a medida que la guerra se iba a pique. «Seguimos sin obtener suficiente información —continuó el ex funcionario—. Tenemos nuestras listas de objetivos de "valor elevado" y las Fuerzas Especiales están autorizadas para disparar primero y luego preguntar. Los chicos empiezan a pensar: "Mierda, si puedo dispararle en la calle [a un objetivo de valor elevado], ¿por qué no puedo hacer lo que quiera cuando lo tengo en la cárcel a mi disposición?". Sólo los soldados rasos, no las Fuerzas Especiales, están autorizados a comportarse con dureza. La distinción entre los objetivos de valor elevado y la población general carcelaria empieza a resquebrajarse». En cuestión de pocos meses, «añadimos al programa reservistas de Cumberland, Maryland. Eran malísimos. ¿A quién se le ocurre que esos chicos de Cumberland iban a enterarse de algo? La reserva no sabe nada». Los reservistas a los que se refería eran los miembros de la 372ª Compañía de la Policía Militar.

¿Quién era el responsable de Abu Ghraib —la PM o la inteligencia militar?— había dejado de ser la única pregunta relevante. En la cárcel estaban trabajando hombres durísimos, algunos de ellos con alias. La policía militar asignada a la vi-

gilancia de los prisioneros vestía uniforme, pero los demás (oficiales de la inteligencia militar, civiles contratados, funcionarios de la CIA y los hombres del SAP) iban de paisano. No estaba claro quién era quién, ni siquiera para la general Karpinski, por entonces aún comandante de la 800ª Brigada de la Policía Militar. «Creía que la mayoría de los civiles eran intérpretes, pero había algunos que no conocía —me dijo Karpinski—. Yo les llamaba "fantasmas". Los veía en Abu Ghraib de vez en cuando y no volvía a verlos hasta semanas o meses después. Eran simpáticos [...], siempre me llamaban y me decían: "Hola, ¿te acuerdas de mí? ¿Cómo te va?"». Esos misteriosos civiles, dijo, «siempre estaban trayendo a alguien para interrogar o esperando a alguien para llevárselo». Añadió que no tenía idea de quién estaba operando dentro de su sistema carcelario.

El personal de inteligencia militar asignado a Abu Ghraib vestía normalmente prendas «estériles» (uniformes sin distintivos) o ropa de paisano. «No podías diferenciarlos», dijo una fuente de información conocedora de la investigación. La confusión de identidades y organizaciones hacía imposible que los prisioneros o, aún más importante, los policías militares supieran quién estaba haciendo qué a quién y quién estaba autorizado para dar órdenes.

En otoño, según el ex funcionario de inteligencia, la cúpula de la CIA se había hartado. «Dijeron: "Hasta aquí hemos llegado. Nos apuntamos para el programa base en Afganistán [autorización preconcedida para operaciones contra objetivos terroristas de valor elevado], vale. Pero ahora queréis utilizarlo para taxistas, cuñados y gente sacada a rastras de las calles"», la clase de reclusos que pueblan las cárceles iraquíes. La CIA se plantó. «No utilizaremos a nuestros chicos para esto, dijeron. Ya sabemos cómo funciona». (Durante la guerra de Vietnam, la agencia había ejecutado el programa Phoenix, básicamente una operación de asesinatos que acabó descontrolándose y ocasionando la muerte de miles de civiles. «La agencia lo ha consultado con sus abogados y se

retira», dijo el ex funcionario, dando por finalizadas sus actividades en Abu Ghraib relacionadas con el SAP. (En una conversación posterior, un jerarca de la CIA confirmó este relato).

Las quejas de la agencia tuvieron eco en toda la comunidad de los servicios de inteligencia. Se temía que la situación en Abu Ghraib llevara a la revelación del ultrasecreto SAP y, en consecuencia, frustrara una operación encubierta inicialmente muy estimada. «Fue una estupidez —me dijo un asesor del Gobierno—. Coges un programa que estaba aplicándose en el caos de Afganistán contra Al Qaeda, un grupo terrorista apátrida, y lo trasladas a una zona de guerra tradicional y estructurada. Tarde o temprano, los comandos tenían que acabar chocando con los procedimientos legales y morales de una guerra convencional con ciento treinta y cinco mil soldados desplegados».

El ex funcionario de inteligencia culpó del desastre de Abu Ghraib al orgullo desmesurado. «No hay nada más estimulante para un insignificante civil del Pentágono que ocuparse de un asunto importante de seguridad nacional sin tener que tratar con estrategas militares, siempre mesurados y preocupados por los riesgos. ¿Qué podría ser más aburrido que requerir la cooperación de los estrategas logísticos?». Y añadió que temía que uno de los desastrosos efectos del escándalo fuera el hundimiento de las operaciones legítimas de la guerra contra el terrorismo, que habían sufrido ya debido a la escasez de recursos en Irak. Describió Abu Ghraib como un «tumor» en la guerra contra el terrorismo. «Mientras sea benigno y esté contenido, el Pentágono podrá afrontar la crisis de las fotografías sin poner en riesgo el programa secreto. Pero si crece sin que nadie lo diagnostique se convertirá en maligno». Y añadió: «Nunca nos hemos enfrentado a un caso en que un programa de acceso especial se estropease, ni siquiera remontándonos a la guerra fría».

La revelación de las condiciones de Abu Ghraib y la comisión de investigación que le siguió pusieron al Pentágono contra las cuerdas. Tenían que permitir que la División de In-

vestigación Criminal del Ejército (CID) siguiera adelante, dijo el ex funcionario de inteligencia. «No puedes encubrirlo. Tienes que procesar a estos chicos por desmandarse y esperar que tal vez así todo pase». La actitud del Pentágono en enero de 2004 fue: «Han sorprendido a algunos con unas fotografías. ¿Cuál es el problema? Encargaos de ello».

«Esta mierda lleva meses cociéndose —me dijo el asesor del Pentágono que estuvo involucrado en el SAP—. Nadie tiene a los prisioneros desnudos en las celdas y encima deja que un perro los muerda. Es inconcebible». Y añadió que él y sus colegas, todos con años de servicio activo en el ejército, estaban horrorizados por lo de Abu Ghraib. «No educamos a nuestros hijos para que hagan cosas así. Una cosa es ir a por el mulá Omar. Otra muy distinta es dar autoridad a chavales que no conocen las reglas».

La zona gris

Cuando declararon ante el Congreso, Rumsfeld y Cambone se esmeraron en convencer a los legisladores de que la visita de Miller a Bagdad a finales de agosto no había tenido nada que ver con los posteriores abusos en Abu Ghraib. Cambone se esforzó por garantizar al Comité de las Fuerzas Armadas del Senado que la interacción entre los generales Miller y Sánchez había tenido sólo una relación casual con su oficina. Miller comunicó a Sánchez sus recomendaciones, dijo Cambone. Su papel era básicamente asegurar que el «flujo de información que llegaba a las tropas» fuera «eficiente y efectivo». Añadió que el objetivo de Miller era «proporcionar a los detenidos un entorno seguro y humano que facilitase la recogida expeditiva de información».

Difícil de vender. La senadora Hillary Clinton, demócrata por Nueva York, planteó la cuestión esencial: «Si, en efecto, el general Miller fue enviado de Guantánamo a Irak con el objetivo de obtener de los detenidos información útil y valiosa, entonces cabe llegar a la conclusión de

que los actos que se describen en su informe [sobre los abusos de Abu Ghraib] están en cierto modo relacionados con la llegada del general Miller y sus órdenes concretas, comoquiera que fueran interpretadas por los policías militares y los oficiales de inteligencia militar implicados [...]. Por tanto, no creo disponer todavía de la información adecuada por parte del señor Cambone y del Departamento de Defensa respecto a cuáles fueron exactamente las órdenes del general Miller [...], cómo llevó a cabo dichas órdenes y la relación entre su llegada en otoño de 2003 y los abusos ocurridos posteriormente».

Un tiempo antes de que los abusos de Abu Ghraib se hiciesen públicos, el ex funcionario de inteligencia me dijo que Miller estaba «al tanto» del SAP. «Su trabajo consiste en salvar lo que pueda. Está allí para proteger el programa y limitar las pérdidas de capacidades básicas».

Un aspecto enigmático de la reacción inicial de Rumsfeld al enterarse de los resultados de la investigación de Abu Ghraib fue la ausencia de alarma y curiosidad. Tal vez se debió a que organizaciones como Human Rights Watch y la Cruz Roja habían expuesto ya numerosas quejas sobre los abusos a prisioneros y el Pentágono las había capeado sin despeinarse. Rumsfeld explicó al comité del Senado que no había tenido conocimiento de los detalles de los supuestos abusos hasta finales de marzo, cuando leyó las acusaciones concretas. «Leerlos, como digo yo, es una cosa. Pero ver estas fotografías me resultó increíble [...]. No por lo tridimensional. No por el vídeo. No por el color. Fue una cosa totalmente distinta». El ex funcionario de inteligencia dijo que, a su entender, Rumsfeld y los altos cargos del Pentágono no prestaron atención a las fotografías porque «pensaban que lo que aparecía allí estaba permitido por las reglas del combate». Pero las fotografías «eran la consecuencia de un programa secreto completamente desbocado». El ex funcionario dejó claro que no creía que Rumsfeld o el general Myers supieran que se cometían atrocidades como las registradas en las fotografías. Pero «habían concedido una autorización genérica para

que el SAP se llevase adelante, y contenía suficiente ambigüedad como para permitir los abusos».

Añadió que el SAP continuaba activo y que «Estados Unidos está escogiendo tipos para ser interrogados». El programa seguía siendo ultrasecreto y nadie de fuera conocía su existencia, y quien hablara de él corría el riesgo de perder sus credenciales, de las cuales muchos militares y personal de inteligencia retirados se sirven para obtener posteriormente un trabajo. A mediados de junio, dijo el ex funcionario, el Pentágono desmanteló por breve tiempo el equipo del programa de acceso especial y, en cuestión de días, lo reconstituyó con nuevas contraseñas y nuevos nombramientos.

Un asesor del Gobierno con estrechos vínculos conservadores defendió el continuado secretismo de la Administración sobre la aplicación del SAP en Abu Ghraib. «¿Por qué mantenerlo en secreto? —preguntó retóricamente—. Porque es un proceso desagradable. Es como hacer salchichas: te gusta el resultado pero no quieres saber cómo las han hecho. Y tampoco queremos que la opinión pública iraquí y el mundo árabe lo sepan. Recuerde, fuimos a Irak para democratizar Oriente Próximo. Lo último que querríamos es que ellos se enteren de cómo tratamos a los árabes encarcelados».

A mediados de 2003, la aparente indiferencia de Rumsfeld hacia la Convención de Ginebra en la guerra contra el terrorismo había llevado a un grupo de letrados del Cuerpo de Fiscales Generales del Ejército (JAG) a efectuar dos visitas sorpresa en cinco meses a Scott Horton, por entonces presidente del New York City Bar Association's Committee on International Human Rights (Comité del Colegio de Abogados de Nueva York para los Derechos Humanos). «Querían que preguntásemos a la Administración Bush sobre sus métodos de detención e interrogatorio —me dijo Horton en mayo de 2004—. Nos instaron a que nos implicáramos y habláramos alto y claro. Nos sorprendió un poco. El mensaje fue que las condiciones eran las adecuadas para la práctica de abusos y que iban a producirse». Los letrados militares, recordó Horton, eran los más preocupados por el aumento de

personal civil contratado para los interrogatorios. «Decían que había una atmósfera de ambigüedad legal como resultado de una decisión política tomada al más alto nivel del Pentágono. Los letrados del JAG habían sido excluidos del proceso de formulación política». Le comentaron que, con la guerra contra el terrorismo, cincuenta años de aplicación ejemplar de la Convención de Ginebra habían tocado a su fin.

Los malos tratos en Abu Ghraib han proporcionado escasa información útil. Willie J. Rowell, que sirvió treinta y seis años en el CID, me dijo que la utilización de la fuerza o la humillación con prisioneros resulta siempre contraproducente. «Te dirán sólo lo que quieras oír, verdad o mentira —dijo—. "Azótame hasta que te diga lo que sé que quieres que diga". Nunca obtienes información correcta».

A pesar de las promesas de una investigación exhaustiva sobre Abu Ghraib, pronto se hizo patente que nadie en el Pentágono ni en la Casa Blanca quería que la investigación fuera más lejos. Uno de los primeros que plantó cara a la Administración fue, sorprendentemente, el senador John Warner, presidente del Comité de las Fuerzas Armadas. Warner, de setenta y siete años de edad, es un republicano fiel y un incondicional de Bush y su guerra de Irak. Pero es también un antiguo oficial de los marines y ex secretario de la Marina, y no admitía que Abu Ghraib manchase el honor de las fuerzas armadas. A primeros de mayo, Warner convocó audiencias senatoriales públicas a pesar de la presión en contra de la Casa Blanca. Los objetivos inmediatos de Warner eran el general Miller y Stephen Cambone, convocados a testificar ante el comité el 11 de mayo. En su declaración de apertura, Warner se mostró seguro, elocuente y categórico en su planteamiento:

«Este maltrato de prisioneros representa una violación espantosa y totalmente inaceptable de las regulaciones y la conducta militar. El daño infringido a la reputación y la credibilidad de nuestra nación y sus fuerzas armadas puede socavar gravemente los sustanciales éxitos y los sacrificios de

nuestras tropas y sus familias, así como los de nuestros aliados en la causa de la libertad [...].

»Es necesario que, siguiendo los procedimientos legales y las garantías del Código de Justicia Militar, se investiguen a fondo los crueles y desgraciados abusos cometidos contra los detenidos iraquíes [...]. Es importante que afrontemos rápidamente estos problemas, garantizando que se haga justicia y emprendiendo acciones correctivas para que estos abusos nunca vuelvan a repetirse».

No tuvo éxito. Nadie afrontó los problemas y ningún comité de investigación independiente fue autorizado a revisar las políticas que habían provocado el escándalo. Warner empezó a echarse atrás. «Tiene buena intención —me dijo un colaborador demócrata del comité, refiriéndose a Warner—, pero su gente le ha convencido de que airear esto perjudicaría la seguridad nacional». (Warner le comentó a un colaborador que el Pentágono le había asegurado que «los malos asuntos han terminado» y que la cúpula militar tenía todo «bajo control».)

En una entrevista telefónica, Warner reconoció haber recibido «muchas presiones», pero aseguró que el Comité continuaría con las audiencias. «Desde mayo he tenido cinco audiencias públicas y cinco privadas —dijo—, y puede que tengamos testigos externos». Cuando escribí por primera vez en *The New Yorker* sobre el programa secreto SAP, Lawrence di Rita, un portavoz del Pentágono, dijo en una declaración: «Ningún funcionario responsable del Departamento de Defensa aprobaría un programa que ya en su concepción buscase como resultado abusos como los vistos en las recientes fotografías y videos». (Era el desmentido de algo no mencionado; mi artículo en *The New York* no sugería que el SAP se hubiera creado con la intención de generar los abusos vistos en Abu Ghraib). Warner me dijo que Rumsfeld y otros funcionarios también se lo habían expresado a él personalmente. Con posterioridad, un colaborador demócrata me contó que, en general, en sus testimonios a puertas cerradas, Rumsfeld, Cambone y otros miembros de la Administración no habían explicado al comité mu-

cho más de lo que habían explicado en público, y que los senadores no les habían presionado a hacerlo.

El siempre afable y ocurrente Warner es muy popular en los servicios de inteligencia, el ejército y el Senado. «Sabe que había culpables entre los integrantes de la cadena de mando —me dijo el ex funcionario de inteligencia—, pero se deja arrastrar por la corriente y quiere quedar como el chico que no lee el correo de los demás. Las apuestas están demasiado altas. Él preferirá que queden impunes algunos de los responsables del entuerto antes que poner en riesgo la seguridad nacional».

Los senadores demócratas y los miembros del Comité de las Fuerzas Armadas pronto se dieron cuenta de que la investigación sobre lo sucedido en Abu Ghraib sería meramente formal. A primeros de mayo, cuando Rumsfeld compareció ante el comité para expresar su consternación por los abusos, prometió proporcionar a sus miembros todos los informes confidenciales de la Cruz Roja sobre el régimen carcelario en Irak. El Pentágono tardó diez semanas en entregarlos a una sala segura del comité y solicitó que el acceso a los mismos quedara limitado estrictamente a los senadores. Los hombres de confianza de los senadores no podrían verlos, ni siquiera aquellos con credenciales de alta seguridad, a pesar de que por entonces muchos detalles destacados de las conclusiones de la Cruz Roja se habían publicado en el *Wall Street Journal*. «Escribí una nota secreta hace dos meses», me dijo el colaborador del comité. En ella había explicado a su senador que no había manera de que «el comité pueda hacer un buen trabajo. ¿Necesitaban diez semanas para enviarnos el material de la Cruz Roja? Para mí es evidente que aquello era un globo sonda». En otras palabras, el Pentágono, a quien el comité había pedido que le enseñase materiales mucho más sensibles, estaba tomando las medidas a la voluntad de los senadores. «Están moviendo las fichas de cara al futuro y querían ver cuánto resistíamos».

Cualquier duda que quedara sobre las intenciones del senador Warner se aclaró a mediados de julio, cuando comuni-

có a los periodistas que no solicitaría la presencia de más testigos hasta que el ejército concluyera los juicios contra los policías militares de Abu Ghraib. En ese momento no se esperaba que los seis consejos de guerra pendientes se iniciasen, como muy pronto, antes de octubre de 2004 (garantizando con ello que las futuras audiencias del Senado sobre Abu Ghraib no se celebrarían hasta después de las elecciones presidenciales en noviembre). Hubo pocas protestas. Una semana después, el comité fue convocado para escuchar el testimonio del teniente general Paul T. Mikolashek, el inspector general del ejército que había completado una de las muchas investigaciones ordenadas por el Pentágono sobre el trato a los prisioneros. Mikolashek, a pesar de las pruebas existentes, expuso que los demostrados abusos en Irak y Afganistán «no eran representativos de la política, doctrina o formación del soldado norteamericano. Estos abusos fueron acciones no autorizadas llevadas a cabo por individuos aislados, aunadas con el fracaso de unos pocos oficiales en ejercer el adecuado control, supervisión y mando». El informe fue puesto en entredicho por varios senadores demócratas y rechazado como un «lavado de cara» en editoriales del *New York Times* y el *Washington Post*, pero hubo escaso seguimiento por parte de la prensa y, tristemente, ninguna crítica pública del ejército, a pesar de que diversos oficiales con los que conversé en privado veían con escepticismo el informe. («Nadie se lo cree», me dijo un experimentado funcionario de inteligencia que había servido en un puesto estratégico en Irak). Muchos republicanos se tomaron el informe en sentido literal, convencidos de que la nación había salido adelante. «No he dudado ni por un instante, y lo dije repetidamente en casa y aquí, que ningún líder del ejército ni del Gobierno [...] toleraría la inhumanidad o la crueldad con los prisioneros —le dijo el senador James Talent, republicano por Misuri, al general Mikolashek—. Nunca lo dudé, y no me sorprende que ésa haya sido su conclusión».

Otro colaborador del comité me dijo que ningún demócrata había tenido oportunidad de analizar el informe Mikolashek antes de las audiencias. «Si hubiéramos sido realmente

exigentes al respecto, no habríamos tenido a nadie testificando sin que los miembros lo entrevistaran primero. Desenmascarar esta Administración requeriría el esfuerzo concertado de una mayoría del comité», algo que, dado el control republicano del mismo, no iba a suceder.

En julio de 2004 hablé de nuevo con Scott Horton, que ha mantenido contacto con los letrados del JAG. Me dijo que Rumsfeld y sus colaboradores civiles estaban presionando al ejército para que concluyera las investigaciones hacia primeros de septiembre, antes de la convención republicana de Nueva York. Horton añadió que los políticos actuaban con descaro. Las investigaciones del Pentágono, dijo, «suelen rehabilitar a todo el mundo, pero, incluso así, parece que las investigaciones en curso empiezan a regirse por nuevos parámetros». La oficina de Rumsfeld había establecido límites a la acusación que podría formular el investigador e impuesto además estrechos controles sobre los documentos que se darían a conocer. En otras palabras, dijo Horton, «Rumsfeld ha amañado por completo las investigaciones. Mis amigos dicen que debemos esperar algo muy similar al informe de la Inspección General del Ejército, el de "sólo unas pocas manzanas podridas"».

Abu Ghraib no desaparecerá, tengan lugar o no las audiencias. Las decisiones de la Administración Bush en cuanto al trato de los prisioneros han tenido graves consecuencias para los reclusos civiles iraquíes, muchos de los cuales no tenían nada que ver con la creciente insurgencia, para la integridad de las Fuerzas Armadas y para la reputación de Estados Unidos en el mundo.

Los funcionarios de la Casa Blanca tenían una explicación preparada para sus declaraciones públicas sobre los abusos: alguien en el ejército no había captado correctamente el mensaje. A finales de mayo de 2004, mientras el mundo se veía inundado por las noticias sobre Abu Ghraib, Kenneth Roth, director de Humans Rights Watch, mantenía un segundo y descorazonador encuentro con Condoleezza Rice y John Bellinger, consejero del CSN. El problema, dejó claro

la consejera de seguridad nacional, según las notas de Roth, no era la política del presidente, que explícitamente excluía esos abusos, sino la «implementación de dicha política. Existe una confusión evidente en el ejército —le dijo a Roth—. Es necesario aclarar si existe la necesidad de un mejor entrenamiento, y deben depurarse responsabilidades». Pero no en la Casa Blanca, desde luego, sino en el seno del ejército. «La cúpula del ejército —añadió Rice— tiene que averiguar dónde se produjo el fallo».

La tortura, tal como la definía la Casa Blanca, no era una alternativa, había dicho el presidente, pero Rice se negó a ser arrastrada hacia una discusión sobre qué otras técnicas de interrogatorio podían quedar fuera de la legalidad. «La Administración no puede echar por tierra todo el sistema de detención e interrogatorios», dijo, según las notas de Roth.

«Hasta la fecha —dijo Roth a finales de julio de 2004—, se aferran a la ficción de que existe un reino de coacción que no viola los convenios internacionales contra la tortura. Mientras la Administración no abandone formalmente todas las técnicas de interrogatorio coercitivas, estará invitando a los abusos que son moneda de cambio desde el 11-S».

Anteriormente, Roth había dicho: «Curiosamente, los abusos sexuales de Abu Ghraib se han convertido en una variante tolerada de abusos a prisioneros y violación de la Convención de Ginebra». Desde el 11-S, añadió, el ejército ha venido utilizando sistemáticamente técnicas de tercer grado con los detenidos. «A algunos miembros del JAG les horroriza que la tolerancia a los malos tratos pueda regresar y nos persiga en la próxima guerra. Estamos dando al mundo una excusa perfecta para ignorar todas las Convenciones de Ginebra que pueda haber. Rumsfeld ha bajado el listón».

El asesor del Pentágono, que pasó años en el servicio militar activo, coincidía con Kenneth Roth. El presidente, Rumsfeld y Cambone «crearon las condiciones que permitieron que tuvieran lugar las transgresiones». Temía que Abu Ghraib hubiera transmitido el mensaje de que el Pentágono era incapaz de manejar su poder discrecional. «Cuando

el asunto es descomunal, como ocurrió con el 11-S, ¿cómo respondes? Pues selectivamente y con inteligencia. Tienes que demostrar que en el sistema hay controles y correcciones. Cuando vives en un mundo de zonas grises, has de tener semáforos rojos muy claros».

Capítulo II

Fracaso de la inteligencia

De cómo al espionaje norteamericano se le escapó el 11-S

En los tres años que he dedicado a informar sobre el 11 de septiembre y sus secuelas, un tema recurrente ha sido la ausencia de datos fiables y oportunos por parte de los servicios de inteligencia sobre «los otros»: los terroristas de Al Qaeda que planearon y ejecutaron los atentados, los talibanes afganos, y los insurgentes que convirtieron los sueños neoconservadores sobre Irak en una realidad de violencia y víctimas diarias. Los problemas eran ya evidentes mucho antes del verano de 2004, cuando la Comisión del 11-S y el Comité de Inteligencia del Senado publicaron sus críticas. El espionaje norteamericano no disponía de la información vital cuando hacía falta: en tiempo real.

A finales de septiembre de 2001, tras dos semanas de investigaciones exhaustivas sobre los ataques terroristas a las Torres Gemelas y el Pentágono, estos servicios estaban confusos, divididos e inseguros sobre cómo habían actuado los terroristas, cuántos eran y cuál podía ser su siguiente paso. Sin embargo, había consenso respecto a dos puntos: los ataques habían sido brillantemente planeados y ejecutados, y los servicios de inteligencia no estaban en absoluto preparados para impedirlos.

El 23 de septiembre de 2001, en una entrevista televisiva, Colin Powell dijo que «mostraremos al mundo, y al pue-

blo norteamericano, sólidos argumentos» para demostrar que Osama bin Laden era el responsable del atentado. «Estamos confrontando toda la información de que disponemos, los datos de los servicios de inteligencia y los aportados por el FBI y otros organismos afines». Pero el tan cacareado libro blanco no llegó a aparecer. La Administración justificaba esta demora diciendo a la prensa que la mayor parte de la información era confidencial y de momento no podía darse a conocer. Un importante funcionario de la CIA me dijo entonces que los servicios de inteligencia no habían conseguido aún información lo bastante sólida acerca de las actividades de los terroristas, su financiación y sus planes. «Algún día lo sabremos —dijo el funcionario—, pero por ahora no».

En aquellos primeros días caóticos los investigadores estaban divididos en dos facciones. Una, centrada en el FBI, creía que los terroristas no formaban «un grupo cohesionado», en palabras de un funcionario involucrado, antes de empezar el adiestramiento para esta operación en concreto. «Estos tipos parecen un equipo de béisbol de barrio —dijo—. Un grupo de chavales que se reúnen para pasar el rato». El FBI no había averiguado todavía su identidad ni sus antecedentes, y el caso era que en aquel momento, como reconoció dicho funcionario, «no sabemos gran cosa sobre ellos».

En un principio, estos investigadores sospechaban que los comandos suicidas habían tenido suerte y nada más. «¿Usted piensa que ellos creyeron, siquiera por un momento, que podían llevar a buen término cuatro secuestros aéreos? Imposible —dijo el funcionario—. Apoderarse de uno solo de esos aviones y hacerlo aterrizar ya habría sido todo un éxito. No son superhombres». Argumentó que la mayor ventaja con que habían contado, aparte del elemento sorpresa, era la costumbre: hasta entonces, la mayoría de los secuestros aéreos terminaba sin mayores sobresaltos en algún aeropuerto del Tercer Mundo, de modo que los pilotos estaban adiestrados para cooperar.

La otra opinión, centrada en el Pentágono y la CIA, atribuía a los secuestradores años de planificación y práctica,

y una estudiada campaña de desinformación a posteriori. «Estos tipos han burlado todos los radares; son profesionales —me dijo un funcionario poco después de los atentados—. Un comando consta de cinco o seis personas. Tres conocen el plan, y tres no. Los hemos tenido ahí fuera agazapados durante años». Un estratega militar me confió que muchos de sus colegas estaban seguros de que los terroristas «se escondieron y borraron las pistas de sus actividades» mucho antes del 11-S. Se tenía por cierto que disponían de un equipo de respaldo, y el hecho de que el FBI fuera incapaz de localizar a los que permanecieron en Estados Unidos se consideraba una prueba más de que todo estaba planificado al detalle. «Mire —me dijo una persona que estaba al corriente de esta investigación—, si fuera tan sencillo como una operación que sale bien de chiripa, no habrían sembrado las semillas de la confusión como lo hicieron».

Muchos investigadores se preguntaban si algunas de las primeras pistas acerca de la identidad y preparación de los terroristas, como los manuales de vuelo, no habrían sido dejadas a propósito. Un ex jerarca de los servicios de inteligencia especulaba por entonces que «cualquier rastro que hayan dejado, lo dejaron adrede, para que lo encontrara el FBI».

Los atentados pusieron en cuestión lo que los investigadores creían saber sobre la capacidad de maniobra de Osama bin Laden. «¿Que este tipo dirigió la operación desde una cueva en Afganistán? —dijo un funcionario de la CIA—. Imposible. No pudo hacerlo él solo». Un militar de alta graduación me dijo que debido a los visados y otra documentación necesaria para infiltrar a miembros del comando en Estados Unidos, los investigadores se preguntaban si no habrían estado involucrados algunos servicios de inteligencia extranjeros. «Que un tipo se decidiera a pilotar un avión para suicidarse», dijo el militar, alimenta la hipótesis de que «alguien pagó muchísimo dinero a su familia». Un funcionario del Departamento de Justicia me dijo: «Todavía estamos analizando un montón de material», y añadió que el FBI estaba saturado de pistas.

«Para mí —añadió el funcionario de la CIA—, lo más alarmante es que a estos cabrones les salió la ronda gratis. Sabían que el procedimiento habitual ante un secuestro aéreo es tratar de ganar tiempo. Y sabían que después de su acción la seguridad en los aviones iba a aumentar. Sea lo que fuese lo que pensaran hacer luego, lo tenían ya calculado».

La preocupación respecto a un segundo atentado era compartida por muchos investigadores. En el FBI se sospechaba que los terroristas podían estar siguiendo un plan bélico ideado por el conspirador convicto Ramzi Ahmed Yusuf, supuesto cerebro del atentado con bomba de 1993 contra el World Trade Center. Yusuf estaba involucrado en actos terroristas que preveían, entre otras cosas, liberar gases tóxicos en la atmósfera y bombardear los túneles entre Nueva York y Nueva Jersey. La preocupación del Gobierno respecto a la amenaza potencial de los transportes de residuos tóxicos se acentuó con el caso Yusuf.

«¿Pasarán a los atentados químico-biológicos en dos o tres años? —preguntaba un general retóricamente—. Si antes confiábamos en los organismos de aplicación de la ley, ahora hay que pensar en la guerra preventiva. Es una transición difícil pero inevitable. ¿Podremos reclutar suficiente personal cualificado?». En estos últimos años, antes del 11-S, «hemos estado contratando a chicos recién salidos de la facultad y pirados por la informática». Y añadió: «Ahora se trata de volver al trabajo sucio puro y duro, con gente preparada que ronde por los callejones oscuros con los sentidos bien alerta».

La CIA del 2001 no estuvo a la altura. Desde la caída de la Unión Soviética una década antes, la agencia se había vuelto cada vez más burocrática y menos dispuesta a asumir riesgos, y había ascendido a los funcionarios que compartían dichos valores. («La conciencia del bien», la calificaba un ex funcionario). Había reducido progresivamente su dependencia de los recursos humanos en el extranjero, así como el número de *case officers:* agentes del servicio clandestino, dirigidos por el llamado Directorio de Operaciones (DO), cuya

misión incluye el reclutamiento de espías. (Era conocida como la sección de las «malas pasadas»). En su lugar, la CIA había recurrido a relaciones de enlace —informes de servicios de inteligencia amigos y departamentos de policía de todo el mundo— y a sistemas técnicos de recopilación.

No sería fácil poner agentes de nuevo sobre el terreno. Durante la guerra fría, la misión más importante de la agencia fue reclutar espías entre los militares y el cuerpo diplomático soviéticos. Se asignaban agentes de la CIA como funcionarios diplomáticos o culturales en embajadas estadounidenses de muchas ciudades importantes, y buena parte de su trabajo podía realizarse en funciones diplomáticas y otros eventos sociales. Para un agente con esta tapadera, la consecuencia de ser descubierto solía ser la mera expulsión del país y un puesto temporal en un despacho de Washington. Ahora, en Afganistán o en cualquier punto de Oriente Próximo o el sureste asiático, un agente de la CIA necesitaría hablar el idioma local y ser capaz de adaptarse al medio para ser operativo. En apariencia no debería mantener ninguna relación con ningún norteamericano ni con la Embajada de Estados Unidos, caso de existir una. Dicho estatus se conoce dentro de la agencia como «tapadera extraoficial». Ser descubierto podría significar la muerte.

En el momento de los atentados es muy posible que no hubiera un solo agente de estas características operando en los círculos fundamentalistas islámicos. En un trabajo publicado por *The Atlantic* en verano de 2001, Reuel Marc Gerecht, que sirvió durante casi una década como agente en la División Oriente Próximo de la CIA, citaba a un funcionario de la propia agencia: «Por el amor de Dios, la mayoría de los agentes vive en la periferia de Virginia. Esas cosas ya no las hacemos». Otro funcionario le dijo a Gerecht: «Ya no existen operaciones que comporten la diarrea como medio de vida».

Después del 11-S, la reputación de la CIA sufrió un nuevo revés debido a una serie de afirmaciones exageradamente optimistas acerca de la efectividad del Centro Antiterrorista de la agencia, fundado en 1986 tras una oleada de atentados en todo el mundo. La idea era reunir a expertos de todos los organismos

policiales del país, incluido el Servicio Secreto, en un «centro de fusión» capaz de coordinar toda la información confidencial sobre terrorismo. En octubre de 1988, después de que cuatro hombres vinculados a Bin Laden fueran acusados de participar en los atentados contra las Embajadas estadounidenses en Tanzania y Kenia, periodistas de *Newsweek* pudieron recorrer las instalaciones del centro. Los procesamientos de aquellos cuatro hombres, informó *Newsweek*, «estaban pensados como un mensaje inequívoco para Bin Laden y sus secuaces: Estados Unidos sabe quiénes son y dónde encontrarlos... La historia de cómo la CIA y el FBI, antaño acérrimos enemigos burocráticos, colaboraron para desbaratar la escurridiza red de Bin Laden es una novela de detectives puesta al día; pura chiripa y nada más».

Pero, de hecho, el Centro Antiterrorista no estaba autorizado a reclutar ni a manejar agentes fuera del país; esa tarea se reservó para el Directorio de Operaciones y sus puestos en Oriente Próximo, que tenían sus propias prioridades. En 1986, Robert Baer, conocedor del árabe y considerado quizá el mejor agente sobre el terreno de Oriente Próximo, fue llamado al Centro Antiterrorista, poco después de su creación, por su director Duane *Dewey* Clarridge. En sus memorias *See No Evil* (trad. esp.: *Soldados de la CIA*, Crítica, 2002), publicadas en enero de 2002, Baer describe lo que sucedió a su llegada, recién concluida una misión como agente en Jartum:

> Mis primeros meses como soldado raso en la guerra de Dewey contra el terrorismo fueron todo lo estimulantes que cabe esperar en el mundo de los espías [...]. Dewey gozaba de patente de corso presidencial: autoridad para hacer casi todo lo que quisiera contra los terroristas. Tenía todo el dinero que pedía [...]. Pero al poco tiempo los mandos políticos de los servicios de inteligencia arruinaron todo lo que Dewey intentaba hacer [...]. Era demasiado arriesgado. Una operación fracasada, o incluso exitosa, podía mosquear a un gobierno amigo. Alguien podía ser arrancado de su poltrona y enviado de vuelta a casa. Alguien, incluso, podía resultar muerto...

> Pedíamos a [al puesto de la CIA en] Bonn que reclutara unos cuantos árabes e iraníes para seguir la pista de la comunidad emigrante de Oriente Próximo en Alemania, y nos decían que no disponían de suficientes efectivos. Una vez, pedimos a Beirut que recibiera a un agente que iba a viajar a Líbano, y se negaron por no sé qué problema de seguridad. Por el amor de Dios, en Beirut la seguridad jamás fue un problema. En vez de luchar contra el terrorismo, luchábamos contra la inercia burocrática, un enemigo implacable [...]. Después de seis meses, [Dewey] sólo pudo contar con dos personas que hablaran árabe, una de las cuales era yo.

En sus memorias, Baer, que al jubilarse fue condecorado por su carrera en los servicios de inteligencia, describe también la «enfermedad mortal» que sobrevino al puesto de la CIA en París al inicio de los noventa: no se reclutaban nuevos agentes y «los que ya teníamos en cartera habían perdido sus contactos, y a nadie parecía importarle». Fueron cerrados muchos pisos de vigilancia y anuladas las escuchas telefónicas en toda Europa y Oriente Próximo. «Nunca sabremos las pérdidas que tuvimos por no saber aprovechar la debacle soviética», dijo un funcionario retirado. Antiguos funcionarios soviéticos de alto nivel con información privilegiada fueron rechazados sin más. «Se cerraron las puertas a los *walk-ins*[1]. Fue increíble. Y, que yo sepa, nadie puso la menor objeción».

Pocas cosas cambiaron con Bill Clinton. El Centro Antiterrorista fue reforzado con más dinero y más recursos humanos tras el atentado contra el World Trade Center en 1993, pero continuó siendo una unidad de papeleo cuyos funcionarios no necesitaban ser expertos en lenguas extranjeras. Baer, asignado ahora, a instancias de él mismo, al insignificante puesto de la CIA en Dushanbe (Tajikistán), cerca de la frontera con Afganistán, vio impotente cómo los fundamentalistas —los

[1] Espías que ofrecen sus servicios a un país hostil a cambio de asilo político. *(N. de los T.)*

precursores de los talibanes—, apoyados por Arabia Saudí, consolidaban bases de entrenamiento y empezaban a reclutar partidarios y a dirigir operaciones dentro de las ex Repúblicas Soviéticas.

En conversaciones mantenidas poco después del 11-S, varios antiguos agentes de la CIA me dijeron que el Centro Antiterrorista, pese a su pedigrí, no era una buena elección para un agente del DO (Directorio de Operaciones) joven y ambicioso. El Centro Antiterrorista y dos importantes centros más de la inteligencia —dedicados a asuntos de narcotráfico y no proliferación de armas nucleares— estaban tan consumidos por las luchas intestinas, que los analistas profesionales encontraban difícil hacer su trabajo. «Todos están luchando entre sí —dijo un mando que se jubiló anticipadamente y cuyo último puesto fue como director de uno de dichos centros—. No existe la menor concentración».

En 1995, la agencia fue muy criticada al conocerse que un informador a sueldo había participado en los asesinatos de un posadero norteamericano y el marido guatemalteco de una abogada norteamericana. El informador seguía estando en la nómina de la CIA a pesar de que sus actividades eran conocidas por el DO. John Deutch, el tercer director de la agencia en tres años, reaccionó a las protestas generales promulgando una directiva que exigía la aprobación previa del cuartel general antes de que alguien con problemas criminales o de derechos humanos pudiera ser reclutado. La aprobación, explicaba después Deutch, debía basarse en una sencilla pregunta: «¿Cree usted que la obtención potencial de datos confidenciales justifica el precio que podría comportar el trato con un posible asesino?».

La *scrub order* («orden de depurar»), como se la conoció, fue promulgada por Deutch y sus colegas con la mejor intención e incluía disposiciones para una revisión caso por caso. Pero, en la práctica, centenares de «elementos» fueron indiscriminadamente apartados de la nómina de la CIA, con efectos devastadores sobre las operaciones antiterroristas en Oriente Próximo. Y condujo a la creación de una serie de comités de valoración en el cuartel general. Antes de reclutar

a un nuevo elemento, un agente de la CIA tenía que pedir la aprobación a uno de estos comités. «Era como si un cardiólogo de California tuviera que decidir si un cirujano de Nueva York podía abrirle el pecho a un paciente», comentó un antiguo funcionario. Los encargados de valorar a agentes potenciales eran funcionarios que no tenían experiencia de primera mano en operaciones clandestinas. («Los norteamericanos odian los servicios de inteligencia; sencillamente los odian», recuerda Baer haber pensado). En opinión de los agentes de operaciones, las armas más importantes en la guerra contra el terrorismo internacional estaban siendo evaluadas por hombres y mujeres que, como dijo un agente retirado, «no irían a cenar a un restaurante de Washington por temor a la inseguridad ciudadana».

Empezaron a multiplicarse los comités burocráticos, «como conejos, uno detrás de otro», dijo un ex jefe de puesto. Agentes experimentados que se empeñaban en seguir reclutando espías vieron que conseguir el visto bueno para una nueva incorporación consistía ahora en ir de comité en comité. «En los viejos tiempos sólo te decían: "Consíguelos"», dijo el agente retirado. Pero aún había de llegar una última instancia de revisión, el Asset-Validation System (Sistema de Validación de Elementos Valiosos), más conocido por sus siglas, AVS. Otro funcionario retirado me dijo: «Tenías que llenar tanto papeleo que la gente se pasaba más tiempo sentada escribiendo informes que fuera en la calle».

«Era una estupidez —aseguró un tercer agente retirado—. Reclutábamos idiotas. Yo tenía a mi mando a auténticos inútiles que no sabían nada de nada». Y añadió: «Lo que hemos hecho con nosotros mismos es de juzgado de guardia. Hay media docena de tipos competentes tratando de hacer el trabajo por todos».

«Eso sí, hizo más llevadera la jornada laboral —ironizó Baer acerca de la *scrub order*—. Yo me pasaba el día viendo la CNN. A nadie le importaba». El vital Grupo Sur, formado por los ocho puestos de la agencia en Asia Central —todos amenazados por organizaciones integristas, sobre todo en Uz-

bekistán y Tajikistán, vinculadas a Bin Laden y los talibanes—, ya no tenía agentes mediada la década de 1990, dijo Baer. «La agencia estaba desapareciendo».

A diferencia de muchos funcionarios importantes de la CIA, que vivían en el cuartel general, Baer lo había hecho clandestinamente en Beirut y otros puntos de Oriente Próximo en los años ochenta, y conocía bien la habilidad de las organizaciones terroristas para borrar sus huellas. Me contó que cuando la CIA inició su acoso a la Yihad Islámica, un grupo radical libanés relacionado con una serie de secuestros en la época Reagan, «sus miembros se dedicaron a peinar Beirut en busca de documentos que pudiesen comprometerlos, destruyendo incluso los historiales académicos. Tenían el aeropuerto pinchado y podían detectar a los norteamericanos. Ya sabían a quién iban a raptar antes de que aterrizara». Los terroristas eludían la capacidad de la CIA para interceptar y descifrar conferencias telefónicas en todo el mundo mediante un constante cambio de códigos, muchas veces modificando apenas el significado de frases de uso común. «Estamos hablando de profesionales», dijo. Y refiriéndose a los terroristas del 11-S, comentó: «Esta gente sabe muy bien lo que se hace».

Llegado el año 2001, el Directorio de Operaciones estaba ya herido de muerte a causa de una serie de dimisiones y jubilaciones entre personas de alto nivel, incluidos cuatro hombres cuyos nombres eran poco conocidos del público pero que gozaban de amplio respeto dentro de la agencia: Douglas Smith, que pasó treinta y un años en el servicio clandestino; William Lofgren, que al jubilarse en 1996 era jefe de la División Eurasia Central; David Manners, que era jefe de puesto en Ammán (Jordania) cuando abandonó la agencia en 1998; y Robert Baer, que la abandonó en 1997. Como hicieron otros, los cuatro se reunieron repetidas veces con legisladores y personal afín y testificaron ante el Congreso en un esfuerzo por provocar cambios. No consiguieron nada.

Cuando se produjeron los hechos del 11-S, la CIA no contaba con suficientes agentes cualificados en sus numero-

sos puestos diseminados por todo el mundo. Dos agentes retirados tuvieron que hacerse cargo provisionalmente del pequeño puesto de Karachi (Pakistán), un foco de actividad terrorista. (En 1995 fueron asesinados allí dos norteamericanos, uno de ellos empleado de la CIA, supuestamente en venganza por el arresto en Pakistán de Ramzi Ahmed Yusuf). También un agente retirado dirigía el importante puesto de Dacca (Bangladesh), país musulmán que podía ser un semillero de reclutamiento de terroristas. En África, varios puestos eran dirigidos asimismo por agentes retirados.

Muchos miembros de los servicios de inteligencia, en conversaciones que mantuvimos a raíz del 11-S, se quejaron amargamente de lo difícil que era trabajar con el DO incluso en momentos de crisis. «Para tratar de algún problema con el DO, tienes que ser del DO», dijo un antiguo científico. Otras fuentes de la inteligencia me dijeron que las maquinaciones del directorio acabaron conduciendo a un enfrentamiento con la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) sobre quién controlaría el Special Collection Service (SCS), un proyecto conjunto de ambas agencias consistente en desplegar equipos de especialistas en electrónica por todo el mundo para controlar las comunicaciones diplomáticas y de otro tipo en momentos de crisis. Las operaciones supersecretas del SCS, que dieron como fruto valiosísimas informaciones durante la guerra fría, solían llevarse a cabo desde la seguridad de las embajadas estadounidenses. Pero las constantes disputas echaban por tierra su probada competencia y sofisticación tecnológica. Un militar que participó en una operación de señales en Oriente Próximo en 1998 me dijo que nunca consiguió hablar con representantes de la CIA y la NSA al mismo tiempo. «Me reunía con uno en un piso franco en Virginia, luego me iba a almorzar, y después me reunía con el otro —explicaba—. No había manera de sentarlos en la misma habitación».

«Nunca resolveremos el tema del terrorismo hasta que reconstituyamos el DO —me dijo un antiguo agente clandestino—. La primera línea de defensa, y la más crucial, es la inteligencia humana».

Acerca del fracaso de los servicios de inteligencia para prevenir los atentados del 11-S, algunos de sus miembros, con los que hablé en el otoño de 2001, estaban ya preguntándose hasta qué extremos debía actuar la CIA. En una entrevista, dos antiguos agentes citaron las tácticas empleadas a finales de los ochenta por los servicios de seguridad jordanos a fin de atrapar a Abu Nidal, el palestino que dirigió lo que en aquel momento se consideraba «la organización terrorista más peligrosa», según el Departamento de Estado. El grupo de Abu Nidal era particularmente conocido por su papel en dos sangrientos atentados con granadas y fuego de ametralladoras contra los mostradores de El Al, la compañía aérea israelí, en los aeropuertos de Roma y Viena en diciembre de 1985. En su apogeo, Abu Nidal llegó a amenazar al rey Hussein de Jordania (a quien llamaba «el rey pigmeo»), y el monarca, según antiguos funcionarios de inteligencia, respondió con esta orden a los servicios de seguridad: «Id por ellos».

Los jordanos no fueron directamente contra presuntos seguidores de Abu Nidal sino que apresaron a familiares cercanos: madres y hermanos. Después se ponían en contacto con el presunto terrorista, le daban un teléfono y le decían que llamara a su madre, quien, según palabras de un funcionario de la CIA, le decía: «Hijo, si no haces lo que piden, me matarán». (Según el funcionario, todos los sospechosos accedían a hablar con tal de que ninguno de sus familiares sufriese el menor daño). En los primeros años noventa, el grupo estaba ya tocado por las disputas internas y había dejado de ser una banda terrorista importante. (Abu Nidal, que padecía una mala salud, se trasladó a Bagdad, donde al parecer se quitó la vida en agosto de 2002). «Jordania es el único país que ha conseguido con pleno éxito infiltrarse en un grupo terrorista —añadió el funcionario—. Hay que tener controladas a las familias».

Respecto a Bin Laden y sus cómplices, el funcionario insistió en que «tenemos que hacerlo, tenemos que acabar con ellos uno a uno —dijo—. ¿Queremos realmente resolver el problema o nos dedicamos a hablar sobre la tolerancia?».

Estas tácticas, naturalmente, son contrarias a la ley y están lejos de los procedimientos autorizados a la CIA; muchos expertos dudan incluso de que sean efectivas. Sin embargo, en meses sucesivos y visto que Bin Laden y sus hombres resultaban muy escurridizos, Donald Rumsfeld y otros jerarcas civiles del Pentágono acabaron por convencerse de que para enfrentarse al terrorismo hacían falta medidas excepcionales, acciones por encima de la ley.

Días después de los atentados, el vicepresidente Dick Cheney defendió en televisión al director de la CIA, George Tenet, diciendo que sería «una tragedia» buscar «chivos expiatorios». El presidente Bush realizó posteriormente un gesto de apoyo con su visita al cuartel general de la CIA. En una entrevista concedida siete días más tarde, un alto funcionario de la agencia defendió asimismo a Tenet. «Sabemos que hay muchos listillos, pero la gente no acaba de entender cómo estaba la agencia cuando George asumió la dirección —me dijo—. No puedes infiltrarte en un comando de seis cuando todos son hermanos y primos... por más urdu que uno sepa hablar». Reconoció que la actuación de la CIA había generado mucho descontento, pero añadió: «A George le han reiterado una y otra vez que el presidente tiene plena confianza en él». Y añadió: «Él nunca dimitiría en una situación como ésta».

Sin embargo, un miembro del grupo republicano dijo poco después de los atentados que el senador por Alabama Richard C. Shelby, presidente del Comité de Inteligencia hasta principios de 2001, estaba convencido de que el problema radicaba en la jefatura de la agencia y en el propio Tenet. «Tenemos gente con grandes ideas trabajando sobre el terreno, pero no reciben el apoyo del *establishment*», dijo. Pero antes del 11-S, añadió, ninguno de los demócratas del comité quiso poner en aprietos a George Tenet planteando investigaciones o auditorías acerca de las distintas quejas. (Tenet había trabajado para los demócratas del comité del Senado y fue miembro del Consejo de Seguridad Nacional con Bill Clinton

antes de pasar a la cúpula de la CIA). Sin embargo, un demócrata entonó un *mea culpa* culpando al propio comité, el cual, dijo, había descuidado el terrorismo en favor de temas más políticos. «Tenet ha informado sobre Bin Laden durante años, pero no estábamos preparados para centrarnos en lo que constituyen verdaderas amenazas para Estados Unidos. Actuamos en función de lo que sale en las noticias».

En junio de 2001, tras una gira por el golfo Pérsico y una serie de sesiones informativas sobre temas de inteligencia, Shelby dijo a un periodista del *Washington Post* que Bin Laden «se ha dado a la fuga, y pienso que seguirá así porque nosotros no vamos a flaquear». Y añadió: «No creo que pueda decirse que nos tiene acobardados. Al contrario, es él quien tiene el rabo entre las piernas». Sin embargo, después del 11-S, Shelby fue de los primeros en insinuar públicamente que Tenet tenía que dimitir. «Creo que es un buen hombre y que ha hecho cosas buenas, pero ha habido muchos fracasos bajo su mandato —declaró en *USA Today*—. Carece de categoría suficiente para controlar todas las agencias. En cierto modo él es quien manda, pero en realidad no es así».

Un amigo y antiguo colega de Tenet dijo que su negativa a instar al Senado a afrontar los temas espinosos era sintomática de sus problemas como director de la CIA. «Tenet también es un político —dijo—. Por eso no debería haber estado ahí, porque no tiene estatus para decirles a los senadores: "No saben de qué están hablando"».

En septiembre de 2001, muchos funcionarios en Washington opinaban que los días de Tenet estaban contados. «Le han dicho que tiene que marcharse —aseguró uno de ellos—. Sólo está tratando de decidir si hacerlo con elegancia o dejar que parezca que lo han despedido». Incluso un buen amigo de Tenet me dijo: «Ya es historia». Aquel mes, un asesor de la Casa Blanca explicó el respaldo de Cheney a Tenet diciendo: «En Washington, tus amigos siempre te apuñalan por la espalda. Alguien tiene que asumir la responsabilidad». A su entender, «después de un tiempo prudencial, cuando con-

sigan encarrilar el problema, Tenet se marchará. He oído decir que en un plazo de tres a seis meses».

No ocurrió así. Tenet permaneció en el cargo y públicamente leal a George Bush hasta junio de 2004, cuando anunció su dimisión. Sus amigos me dijeron que razones de índole familiar (Tenet quería pasar más tiempo con su hijo adolescente) fueron un factor importante en su decisión. Pero reconocían también que Tenet era consciente de que su reputación había resultado perjudicada por la extendida creencia, dentro y fuera de la CIA, de que en sus tratos con la Casa Blanca había sido demasiado ambiguo acerca de Irak. En otras palabras, creían que no había sido claro al respecto. La dimisión de Tenet se produjo además unas semanas antes de que se hicieran públicos los informes del Comité de Inteligencia del Senado y de la Comisión Nacional sobre Atentados Terroristas contra Estados Unidos. (La Comisión del 11-S, como se la denominó, fue creada en noviembre de 2002, superando iniciales objeciones por parte de la Casa Blanca). Ambos informes eran muy críticos con la actuación de la CIA.

El ex senador por Nebraska Bob Kerrey, durante cuatro años uno de los principales demócratas del Comité de Inteligencia antes de integrarse en la Comisión del 11-S, fue inicialmente uno de los defensores de Tenet. Al final, Kerrey me dijo que ya no sabía «si hicimos bien nuestro trabajo» de vigilancia legislativa. «Nadie que tenga alguna responsabilidad puede negarlo. Algo se nos pasó por alto».

Kerrey se mantuvo contrario a la política del Gobierno respecto a Afganistán en los años posteriores a la caída de la Unión Soviética. «La guerra fría había terminado, y nosotros cerramos Afganistán», es decir, se suspendieron prácticamente las operaciones de espionaje. «De Bush padre a Clinton, lo que ocurrió fue una de las decisiones más vergonzosas en materia de política exterior, al nivel de lo de Vietnam», dijo Kerrey. Y citó una abortada conspiración de la CIA para derrocar a Sadam Husein: «También dejamos una operación a

medias en Irak, y de esa manera les enviamos señales de que no somos serios».

Kerrey llevó sus quejas a las audiencias televisadas de la Comisión del 11-S, donde se erigió en su miembro más cáustico al cuestionar la manera en que la Administración Bush había llevado los temas de política exterior e inteligencia. Especialmente efectivas fueron sus recusaciones a los testigos acerca de la atención que habían prestado —o no— a las primeras advertencias sobre la amenaza que suponía Al Qaeda.

Por qué el Gobierno no supo lo que sabía

El prometido libro blanco de Colin Powell de 2001, si hubiera llegado a aparecer, habría incluido quizá una referencia al ultrasecreto Resumen Diario al Presidente que Bush oyó el 6 de agosto, acerca de lo que se sabía sobre los planes de Al Qaeda contra objetivos en Estados Unidos. El resumen, preparado por la CIA diariamente, se tituló «Bin Laden decidido a atentar en Estados Unidos». En él se advertía que Al Qaeda pensaba «llevar la lucha a Norteamérica». Pero, en octubre de 2002, cuando las pruebas de la implicación de Bin Laden salieron a la luz —indirectamente, en un libro blanco promovido por el primer ministro británico Tony Blair—, nada se decía de las advertencias previas. De hecho, incorrectamente, el documento británico afirmaba que antes de los atentados no se disponía de semejante información: «Después del 11 de septiembre supimos que Bin Laden había afirmado, poco tiempo antes, que preparaba una ofensiva de gran envergadura contra Estados Unidos».

Aparte de la reunión informativa del 6 de agosto, había también un clarividente memorándum enviado en julio al cuartel general del FBI desde su oficina de Phoenix advirtiendo del peligro que representaba la presencia de alumnos árabes en academias de vuelo norteamericanas (Robert Mueller, director del FBI, no leyó ese informe hasta unos días después del 11-S), y había lo que Condoleezza Rice,

consejera de seguridad nacional, llamó «mucha verborrea en el sistema».

Las advertencias sobre las intenciones de Bin Laden y la preocupación en relación con las academias de vuelo no bastaron para entrever lo que ocurriría el 11 de septiembre de 2001. Y la Casa Blanca decidió mantener en secreto el alcance de lo que sabía en los meses previos a los secuestros aéreos. Sin embargo, lo que el presidente sabía y cuándo lo supo no era lo más importante. El FBI, la CIA y demás organismos afines no han estudiado todavía a conciencia lo que probablemente constituye el mayor reto del 11-S: ¿cómo encara una sociedad democrática las advertencias sobre posibles futuros atentados? Los terroristas de Al Qaeda estaban allí, bien visibles, pero no había ningún sistema para detectarlos.

Un tema era hasta qué punto Al Qaeda debía su éxito no sólo a los defectos de la CIA, sino también a las flaquezas del FBI y a su crónica incapacidad para sintetizar informes de inteligencia, sacar conclusiones y trabajar en colaboración. A decir verdad, estos defectos eran ya notorios mucho antes de que George W. Bush llegara al poder.

Las quejas contra el FBI eran bien conocidas por el Comité Judicial del Senado, cuyo entonces presidente Patrick Leahy, demócrata por Vermont, venía reclamando desde hacía años una reforma a fondo del Bureau. «Esto no es un problema de financiación —dijo en julio de 2001 durante el trámite de confirmación de Robert Mueller como nuevo director del FBI—. Hemos invertido mucho dinero en el FBI. Es un problema de administración».

Los sistemas informáticos del FBI han sido un caos durante más de una década, haciendo muy difícil, cuando no imposible, que analistas y agentes pudieran correlacionar e interpretar la información. La debilidad tecnológica del FBI merma asimismo su capacidad para resolver delitos. En marzo de 2002 el comité de Leahy tuvo noticia de que las fotografías de los diecinueve sospechosos de los secuestros aéreos no pudieron enviarse por medios electrónicos en los días in-

mediatamente posteriores al 11-S a la oficina del FBI en Tampa (Florida) porque los sistemas informáticos no eran compatibles. Robert Chiradio, el agente especial encargado de ello, dijo en una audiencia en marzo de 2002: «No tenemos manera de volcar material escaneado o multimedia [a los sistemas informáticos del FBI]. Tuvieron que pasarlas [las fotografías] a un CD-ROM y enviármelas por correo».

Parte del problema, según me comentaron ex agentes del FBI, radicaba en la arraigada costumbre de la jefatura de «reprogramar» los fondos destinados a mejorar los sistemas informáticos. I. C. Smith, responsable del presupuesto del FBI para programas de seguridad nacional, me explicó que su departamento estaba «chupando constantemente de los programas tecnológicos» para compensar las deficiencias en otras áreas, entre ellas el presupuesto para viajes.

Mueller, que llevaba sólo una semana en su puesto antes del 11-S, reconoció en abril de 2002 que muchos de los ordenadores portátiles con que contaba el FBI eran material desechado por otras agencias que «nosotros aceptábamos como una mejora». Y continuó: «Tenemos ordenadores que no pueden comunicarse con otros ordenadores dentro del FBI, y no digamos ya con otras agencias federales. Estamos trabajando para crear una base de datos que podamos utilizar para compartir información, secreta o no, con el mundo exterior. Esperamos probarla el año que viene», es decir en 2003. (En junio de 2004, el *New York Times* informó que el sistema aún no estaría a punto a finales de año, y varios funcionarios dijeron que no podían predecir cuándo se iba a instalar).

Un informe preliminar de la Comisión del 11-S divulgado en 2004 apuntaba que, incluso entonces, «muy pocos agentes o analistas [del FBI] tienen acceso a Interlink, una red mundial de información ultrasecreta». Y añadía: «La conectividad básica sigue siendo un problema para algunas oficinas del FBI. El director de la oficina de Washington nos dijo en agosto de 2003 que aún no podía mandar *e-mails* a nadie del Departamento de Justicia, y que su oficina, la segunda en im-

portancia de todo el país, sigue teniendo una sola terminal de internet en cada planta».

Es evidente que los agentes desplazados y sus superiores en el cuartel general del FBI no tenían las herramientas adecuadas para afrontar el complejo mundo del terrorismo árabe, ni el flujo de información secreta y de avisos sobre actividades terroristas dentro del territorio nacional. Al FBI le resultaba asimismo muy complicado infiltrar agentes dentro del movimiento fundamentalista islámico. Mucho después del 11-S, la situación seguía sin cambios, según me contaron personas allegadas. «Son incapaces de hacerlo —me dijo un ex funcionario de inteligencia acerca de la falta de experiencia del FBI en operaciones encubiertas—. Es mucho más alarmante que la incapacidad de la CIA para infiltrarse en ciertos países. No tenemos ojos ni oídos en las comunidades musulmanas. En esto estamos en cueros».

Durante la primavera y principios del verano de 2001, los servicios de inteligencia inundaron al Gobierno con advertencias sobre posibles ataques terroristas contra objetivos norteamericanos, incluida la aviación comercial, por parte de Al Qaeda y otros grupos. Las advertencias eran vagas pero lo bastante alarmantes para que la FAA (Administración Federal de Aviación) remitiera cuatro circulares informativas a las compañías de aviación entre el 22 de junio y el 31 de julio, alertando sobre posibles actos terroristas. La de finales de julio decía, según Condoleezza Rice, que «no hay un blanco específico, y tampoco información fiable sobre posibles ataques a intereses de la aviación civil, pero se sabe que grupos terroristas están planeando secuestros aéreos, por tanto les pedimos que extremen la cautela».

Sin embargo, durante años, las líneas aéreas han hecho prácticamente caso omiso de las circulares informativas de la FAA. «Estas notificaciones no implican tomar medidas concretas —me dijo un ex funcionario de la FAA—. Para que las compañías reaccionen, tienes que enviarles una directiva de seguridad», un mensaje de alta prioridad que, según la nor-

mativa de la administración, exige una respuesta inmediata. Sin esa directiva, las compañías aéreas continuaron actuando como si no pasara nada.

Unas semanas antes de los atentados, el actor James Woods, que viajaba en primera clase a bordo de un vuelo a Los Ángeles, alertó a una azafata sobre la conducta sospechosa de cuatro pasajeros, hombres bien vestidos que parecían árabes y sin duda viajaban juntos. Woods me contó que la azafata le aseguró que redactaría un informe sobre los pasajeros sospechosos. Si lo hizo, su informe debió de acabar en alguna oficina regional de la FAA, en Tulsa o en Dallas, y perderse entre el papeleo. «Si usted visitase una de esas oficinas, vería que no tienen secretarias —me dijo Clark Onstad, ex asesor legal en jefe de la FAA—. Esa gente trabaja sepultada bajo una montaña de papeles, y las probabilidades de que llegara [un informe sobre pasajeros sospechosos, incluso viniendo de un famoso como James Woods] a un nivel más alto son muy escasas». Cuando hablé con Onstad ocho meses después de los secuestros aéreos, me dijo que la pregunta «¿adónde enviaría usted un informe de estas características para que alguien le prestara atención?» aún no tenía respuesta práctica.

Después del 11-S, el FBI encontró pruebas de que los terroristas de los cuatro aviones habían volado juntos anteriormente, en diversas combinaciones, para «comprobar vuelos», como dijo un agente. El Bureau calculaba que los secuestradores debieron de tomar una docena de aviones, juntos o separados, durante el verano de 2001.

La decisión de los secuestradores de volar juntos pone en duda el supuesto de que los terroristas de Al Qaeda son brillantes profesionales, eso que I. C. Smith, que se jubiló en 1998 tras veinticinco años en el FBI, gran parte de ellos en el contraespionaje, llamaba «el argumento supermán». En una insólita aparición pública en la Universidad de Duke en abril de 2001, James Pavitt, subdirector de la CIA para operaciones —el superespía de la agencia—, describía en estos términos lo que según él era el *modus operandi* de Al Qaeda:

> Los comandos terroristas a que nos enfrentamos son muy reducidos, y todos sus miembros tenían su tapadera. El número de personas al corriente de información vital, objetivos, fechas concretas, métodos para llevar a cabo las acciones, tenía que ser más reducido todavía. Contra tanta compartimentación, disciplina y fanatismo, yo personalmente dudo (y me remito de nuevo a mis treinta años de experiencia en esto) que, salvo que uno de los secuestradores o terroristas con acceso a información se hubiera entregado a nosotros, hubiésemos conseguido suficientes datos previos para haber impedido la espantosa matanza que tuvo lugar el día 11.

La razón de actuar en comandos es asegurarse de que si uno es apresado sólo pueda informar sobre los de su propio comando, porque no sabe nada de los demás. La operación no corre riesgo en su conjunto. Al parecer, contrariamente al análisis de Pavitt, los terroristas de Al Qaeda habían violado una regla fundamental de las operaciones clandestinas. Lejos de trabajar aisladamente y de mantener una rígida seguridad en las comunicaciones, incluso el verano mismo de los atentados se habrían mezclado abiertamente sin haber decidido aún qué vuelos iban a secuestrar.

Hacia la primavera de 2002, muchos investigadores estaban convencidos de que la planificación del 11-S parece haber sido mucho más ad hoc de lo que se suponía al principio. Un funcionario del FBI me insistió en que los ataques habían sido «cuidadosamente orquestados y planeados», pero concedió que los terroristas cometieron serios errores. Otro funcionario dijo: «Al principio pensamos que los del vuelo número uno no sabían nada de los otros vuelos, pero pudimos averiguar que hubo comunicación cruzada en viaje y coordinación. Si tan buenos son, ¿por qué se mezclaron entre ellos?».

El hecho de que los terroristas lograran abatir las Torres Gemelas puede significar simplemente que secuestrar un avión era más sencillo de lo que se ha hecho creer a los norteamericanos. Las oportunidades perdidas, como la de James Woods,

tal vez nos indiquen que, incluso en un momento en el que los servicios de inteligencia habían dado la alarma, las palabras seguían siendo sólo palabras, ruido difuso. No existían mecanismos para analizar las pistas, advertencias e incidentes sospechosos, o para traducirlos en un plan de acción a fin de impedir que Al Qaeda atacara.

En 1990, a raíz del atentado contra el vuelo 103 de Pan Am, las comisiones del Congreso habían llegado a la conclusión de que la FAA necesitaba acceso más inmediato a la información de los servicios de inteligencia, e insistían en que se asignara un funcionario de seguridad de la FAA a oficinas importantes de la CIA, el FBI y el Departamento de Estado. Leo Boivin, a la sazón el primer analista de seguridad de la agencia aeronáutica, me dijo: «Entrar en la CIA y el Departamento de Estado no fue problema, pero el FBI dijo claramente que no, que por ahí no pasaban». En 1996, tras el accidente del vuelo 800 de la TWA, una comisión presidida por el vicepresidente Al Gore reclamó también una más estrecha colaboración. Esta vez, según Boivin, que se retiró un mes antes del 11-S, el FBI se negó a dar al representante de la FAA un pase que le facilitara acceso sin restricciones a su cuartel general. «El problema con los servicios de inteligencia es que tú no sabías qué no sabías —añadió Boivin—. "Si surge un problema te lo haremos saber", decía el Bureau». Las dificultades continuaron más allá del 11-S. Boivin dijo que el cuartel general del FBI trataba de quitárselo de encima, porque «yo les parecía demasiado insistente a la hora de pedir información».

Las líneas aéreas, siempre ávidas de recortar gastos, se aliaron para que no prosperara la propuesta de mayores medidas de seguridad recomendada por la comisión Gore, tales como controles más estrictos a los empleados y mayor vigilancia sobre los equipajes de los pasajeros. El ex director del FBI William Webster sirvió de portavoz de las compañías. «Las líneas aéreas nunca han querido gastar mucho dinero en seguridad», dijo David Plavin, que estaba en la Comisión Gore y es presidente de Airports Council International, el

brazo político de los más de quinientos aeropuertos comerciales de Estados Unidos. «Siempre les preocupaba que el Gobierno pudiera pasarles luego la factura». Todo esto, me dijo Plavin, cambió sustancialmente después del 11-S con la aprobación del procedimiento legal para crear la Transportation Security Administration (Administración para la Seguridad del Transporte), que asigna la responsabilidad en materia de seguridad al Gobierno federal, pero la nueva legislación no resolverá el problema más grave: las peleas burocráticas. «Hay más de media docena de organismos implicados en el transporte aéreo, y su incapacidad para trabajar en común es manifiesta —dijo Plavin—. Sólo les importa su propio territorio».

A finales de la década de 1990, la CIA supo que una red de Al Qaeda con base en el norte de Alemania se había infiltrado en el Departamento de Seguridad del aeropuerto de Amsterdam y planeaba atentar contra aviones comerciales norteamericanos colocando bombas en la carga, me contó un ex funcionario de seguridad. La fuente era lo bastante buena como para que la FAA emitiese una directiva de seguridad, y la CIA, en colaboración con la policía alemana, organizó redadas preventivas que se saldaron con éxito. «Los alemanes arrestaron a un montón de gente», añadió el ex funcionario. CIA y FAA trabajaron en estrecha colaboración y la incidencia se mantuvo en secreto. «Mientras la amenaza fue real, la CIA llegó a proporcionar tres resúmenes diarios a la FAA», explicó. Por el contrario, en operaciones donde el FBI llevó la iniciativa, «la FAA no recibió ni las sobras. Los del Bureau decían: "Si hay una amenaza ya avisaremos, pero lo que no vamos a deciros es cómo van las investigaciones". La FAA respondió que obtenía más información sobre posibles amenazas en Hamburgo y Beirut que en Detroit, y ellos dijeron: "Así son las cosas". Venían y nos montaban un numerito de circo».

Como no es de extrañar, algunos agentes del FBI opinan de otra manera sobre quién tuvo la culpa de que fallara la colaboración. En junio de 2004 recibí una llamada de Myron Fuller, ex agente especial jubilado en junio de 2001 tras trein-

ta años de servicio. En su último destino había tenido a su cargo a doscientos hombres del FBI repartidos por cuarenta y seis países de Asia y el Pacífico, incluidos Pakistán y Afganistán, y cuya principal misión era frenar el terrorismo internacional. Fuller me dijo que su equipo había logrado desenmarañar gran parte de la trama fundamentalista islámica hacia la primavera de 1999, pero que en Washington nadie parecía hacerles caso. Me contó que a raíz del asesinato en Karachi de cuatro ejecutivos norteamericanos, interventores de Union Texas Petroleum, y de su chofer, en 1997 recibió un chivatazo de que el cuartel general del FBI tenía «información de la CIA que revelaba quién era el responsable de los asesinatos». Fuller telefoneó a un subdirector del FBI, quien le confirmó que los datos habían sido retenidos durante varios meses porque la CIA le había pedido que no se lo contara a nadie del ramo. Fuller dijo que la información «revelaba quiénes eran los autores del asesinato y mucho más», por ejemplo, «un país en concreto que apoyó el atentado. Posiblemente era la pista que conducía al 11-S». Antes de los atentados, añadió Fuller, que trabaja actualmente como asesor de empresas, «no disponíamos de una estrategia global, y tampoco ahora estamos seguros de tener una que funcione. Pero si los terroristas poseen una estrategia, ¿no deberíamos tener una también nosotros?».

Historias parecidas a ésta inundaron la Comisión del 11-S, cuyos informes censuraban a los servicios de inteligencia por su incapacidad institucional de trabajar en colaboración. Un estudio de la comisión apuntaba que George Tenet «era el responsable de una comunidad no muy bien avenida de agencias y oficinas ministeriales que carecían de incentivos para cooperar, colaborar y compartir información». Y el informe concluía: «[...] en consecuencia, la pregunta sigue en pie: ¿quién manda en los servicios de inteligencia?».

Sin embargo, mucho antes del 11-S los servicios de inteligencia tenían una importante cantidad de información acerca de amenazas terroristas concretas contra líneas aéreas

comerciales en Estados Unidos, incluida la posibilidad de que un avión pudiera ser utilizado como arma. En 1994, un grupo terrorista argelino secuestró un aparato de Air France y amenazó con estrellarlo contra la Torre Eiffel. En 1995, la policía de Manila frustró planes terroristas de poner bombas con temporizadores en nada menos que doce aviones norteamericanos de pasajeros. Encontró asimismo información que facilitaría el arresto de Ramzi Ahmed Yusuf, el hombre que dirigió en 1993 el atentado contra el World Trade Center. Abdul Hakim Murad, uno de los colaboradores de Yusuf, dijo a la policía filipina y, más tarde, a funcionarios del espionaje estadounidense que había conseguido su licencia de piloto en una escuela de vuelo norteamericana y que planeaba apoderarse de un avión pequeño, llenarlo de explosivos y lanzarlo contra el cuartel general de la CIA. Murad confesó, según una crónica publicada en el *Washington Post* en diciembre de 2001, que había asistido a la academia de vuelo «como preparativo para una misión suicida». En 1996, el director del FBI, Louis Freeh, pidió ayuda a funcionarios destacados en Qatar —nación sospechosa de acoger terroristas de Al Qaeda— para apresar a otro presunto cómplice de Yusuf, Jalid Sheij Mohamed, a quien se creía entonces en este país. En un despacho diplomático de Freeh se afirmaba que Mohamed estaba involucrado en un complot para «atentar contra aviones de Estados Unidos» y que, según todos los indicios, estaría «fabricando un artefacto explosivo».

A finales de diciembre de 1999, un grupo de terroristas de Al Qaeda armados de cuchillos secuestraron un avión de pasajeros hindú y lo desviaron hacia Kandahar, en Afganistán. Mantuvieron el control de los pasajeros y la tripulación degollando a un joven y dejando que se desangrara hasta morir, táctica que se cree que utilizaron los terroristas del 11-S con las azafatas. (Poco después del secuestro del aparato hindú, el FBI abrió una oficina en Nueva Delhi y empezó a trabajar en estrecha colaboración con las autoridades de la India). En su informe anual para el año 2000, la FAA advirtió que Bin Laden y Al Qaeda constituían «un peligro importante para la aviación civil». La

FAA había avisado anteriormente, según el *New York Times*, de que existía un informe de un líder islámico exiliado en Gran Bretaña según el cual Bin Laden planeaba «abatir un avión de pasajeros, o secuestrarlo, y humillar así a Estados Unidos».

La presencia de terroristas potenciales en academias de vuelo estadounidenses tampoco era un fenómeno nuevo. Ya en 1975, según un documento inédito del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Raymond Winall, por entonces subdirector del área de espionaje del FBI, reveló que un presunto miembro de Septiembre Negro, el grupo terrorista palestino responsable de la muerte de once atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Munich en 1972, había justificado su presencia en Estados Unidos diciendo al FBI que había sido aceptado para un curso de pilotaje, la misma explicación que dieron varios de los terroristas implicados en el 11-S. El sospechoso fue encausado, pero logró huir del país antes de ser procesado. En años sucesivos, según Bill Carroll, un ex director de zona del Servicio de Inmigración y Naturalización, millares de árabes jóvenes procedentes de Oriente Próximo han conseguido visados para matricularse en programas de instrucción de vuelo.

En primavera y verano de 2002 se produjo una oleada de informaciones sobre advertencias desatendidas, y la Administración pasó a la ofensiva para minimizar las repercusiones políticas. El vicepresidente Dick Cheney advirtió contra «la retórica incendiaria», y dijo que las críticas de los demócratas acerca de una supuesta negligencia eran «absolutamente irresponsables viniendo de dirigentes nacionales en época de guerra». Otros miembros del gabinete divulgaron espeluznantes advertencias sobre un aumento de la amenaza terrorista, advertencias basadas no en informes concretos, sino más bien en «conversaciones» mantenidas en diversos puntos del mundo islámico. Miembros de la División Antiterrorista del FBI a los que entrevisté insistieron en criticar estas vagas advertencias. «Cuando algunos hablan de amenazas a centrales de suministro de energía, bancos o centros comer-

ciales, ¿están lanzando un mensaje tipo "sálvese quien pueda"? —se preguntó un alto funcionario del FBI—. Por supuesto que sí».

Y añadió: «Dar bombo a las amenazas por un interés político es un mal servicio». Cuando dichas amenazas no se concretan en nada, el resultado es que «el país baja la guardia. Y lo que menos nos conviene ahora es esta falta de seriedad. Los norteamericanos se están durmiendo otra vez».

Otro empleado del FBI comentaba sobre la cuestión de cuándo advertir a la opinión pública de una situación adversa. «Supongamos que nos llega un informe de que tres tipos de Al Qaeda vienen en coche desde México para atentar contra unas galerías comerciales en Dallas, sin especificar cuáles. ¿Qué podemos decirle a la gente?». Y añadía: «Sabemos la reacción exagerada que puede tener la población. ¿Hace falta llamar al FBI si tu vecino llega en coche a casa a las dos de la madrugada?». El FBI recibió más de trescientas llamadas acerca de paquetes sospechosos entre el 1 de enero y el 10 de septiembre de 2001. A partir del 11-S, dijo el mismo empleado, «recibimos más de cincuenta mil llamadas y, de hecho, respondimos a catorce mil». Incluso meses después, según otro funcionario, diariamente llegaban docenas de soplos desde el extranjero, muchos de ellos vía fuentes de la CIA, que como es sabido pagan a cambio de información. «Y la CIA tan contenta de ir pasándonos soplos —comentó—. Así el problema ya no es de ellos».

En el transporte aéreo, como un ingrediente de su particular folclore post 11-S, empezaron a abundar las alertas sobre presuntos terroristas. Una de las historias más socorridas es la de una azafata que coincide en un vuelo con un hombre vestido de capitán. Al parecer, él ha pedido que lo lleven, una especie de autostop, práctica habitual entre las tripulaciones. Y después ella lo identifica como Mohammed Atta. Parece ser que en el mundo del transporte aéreo mucha gente conoce a alguien que conoce a alguien que vio a tal o cual terrorista del 11-S vestido de capitán en el asiento auxiliar de la cabina de mando.

En entrevistas realizadas meses después de los atentados, tres importantes funcionarios del FBI no defendieron la actuación del Bureau, y además reconocieron que muchas de las quejas de toda la vida tenían fundamento. Insistieron, sin embargo, en que desde el 11 de septiembre muchas cosas habían cambiado para bien. El FBI había invertido enormes recursos para rastrear las actividades viajeras de los terroristas, afirmaron, y se había progresado mucho en el sentido de cortar el flujo de dinero internacional hacia Al Qaeda. Sin embargo, admitieron que la fiabilidad de una parte de la información recabada en los días inmediatamente posteriores al 11-S era más que dudosa. Y aún no se sabía cuántos de los diecinueve secuestradores habían sido conscientes de que la misión encomendada entrañaba la inmolación de todos los que iban a bordo.

Los funcionarios sostenían haber establecido correctamente la verdadera identidad de los diecinueve consultando expedientes y yendo a sus países de origen. Casi un año después, sin embargo, todavía no se estaba seguro de varios de ellos. Por ejemplo, el FBI había identificado a uno de los secuestradores a bordo del vuelo 77 de United Airlines que se estrelló contra el Pentágono: se trataba de Nawaf Alhazmi. Un motel de Maryland en el que se había registrado con ese nombre disponía de un número de carné de conducir expedido en Nueva York y una dirección de Manhattan que el terrorista había dado como suya. La dirección resultó ser de un hotel, donde dijeron no tener ningún dato sobre Alhazmi. Y el Departamento de Tráfico de Nueva York dijo que el número no era válido y que ellos no habían expedido ningún carné a nombre de Nawaf Alhazmi. Del mismo modo, Waleed Alshehri, que iba en el vuelo 11 de American Airlines, fue identificado por el FBI como un universitario de Florida cuyo padre era un diplomático saudí. Sin embargo, el diplomático declaró a un periódico saudí que su hijo no había muerto y que trabajaba como piloto para las líneas aéreas nacionales.

La prensa saudí informó también de que a cuatro individuos, o quizá más, cuyos nombres coincidían con los presun-

tos secuestradores de la lista del FBI les habían robado el pasaporte. Un secuestrador identificado como Abdulaziz Alomari, que también iba en el vuelo 11, se llamaba exactamente igual, según *The Rocky Mountain News*, que un graduado de la Universidad de Colorado que no se parecía en nada a la foto del secuestrador. El tal Alomari había sido detenido varias veces por la policía de Denver por delitos menores mientras estudiaba en la universidad, y había dado tres fechas de nacimiento diferentes. Una de ellas concuerda con la dada por el secuestrador. Posteriormente se supo que en 1995 el estudiante de Colorado había denunciado un robo en su apartamento; entre los objetos robados se encontraba su pasaporte.

Newsday informó que otro de los secuestradores, que utilizaba el nombre Said Alghamdi e iba en el vuelo 93 de United Airlines, había cogido el número de la Seguridad Social de una mujer de Vermont fallecida en 1965. El nombre Alghamdi es muy común en Arabia Saudí. Al menos otros cuatro hombres con ese mismo nombre han aparecido en los archivos de la escuela de vuelo de Florida donde el supuesto Alghamdi, según el FBI, habría recibido clases. La academia había tenido más de mil seiscientos alumnos con el nombre de pila de Said y más de doscientos apellidados Alghamdi. Funcionarios de la Seguridad Social dijeron también que seis de los diecinueve secuestradores estaban utilizando carnés de otras personas.

En abril de 2002, la policía de Milán efectuó una redada en el apartamento de Essid Sami Ben Jemais, el presunto jefe de un grupo extremista con base en Italia que ha sido vinculado a Al Qaeda. Una declaración jurada del fiscal, informaba el *Baltimore Sun*, describía lo que encontraron: un escondrijo con pasaportes falsos tunecinos y yemeníes, carnés de identidad italianos y fotocopias de permisos de conducir alemanes. Según el fiscal, «una de las principales actividades ilegales del grupo es la obtención y utilización de documentos falsos para garantizar una identidad nueva a los "hermanos" que necesitan ocultarse o eludir una investigación». Y añadía que la policía había grabado conversaciones telefónicas en

las que Jemais hablaba con miembros de Al Qaeda sobre el procedimiento para falsificar documentos. (El informe preliminar de la Comisión del 11-S, basado en buena parte en el trabajo realizado por el FBI, no mencionaba la posibilidad de que algunos secuestradores hubieran sido identificados erróneamente).

En una conversación mantenida a mediados de 2002, un alto funcionario del FBI explicaba una vez más que no había habido «ningún avance significativo» en términos de establecer cómo estaban organizados y cómo operaban los comandos suicidas. «Es evidente que no hemos terminado nada», me dijo entonces un asesor de la CIA.

«Tradicionalmente, cuando los norteamericanos entran en guerra van en busca del enemigo, lo derrotan en el campo de batalla y vuelven a casa para replantar», dijo un funcionario del FBI. Pero la guerra contra el terrorismo es una batalla a largo plazo y carece de fronteras. «Hace falta madurez si queremos proteger nuestra sociedad —prosiguió—. No deberíamos hacer cambios profundos en nuestro sistema, pero necesitamos un cierto equilibrio. La democracia es una cosa muy complicada». Mientras tanto, los terroristas no se marchan. Otro alto funcionario del FBI dijo: «Nada les gustaría tanto como reagruparse y volver a atacar».

«Estos tipos no eran sobrehumanos —me dijo el ex agente I. C. Smith—, pero estaban actuando en un sistema que era más inepto que ellos. Si pensamos en los secuestros aéreos de principios de los noventa, no recuerdo que hayamos apresado a nadie —anticipadamente— que realmente intentara secuestrar un avión». Pero hombres como Mueller, añadía Smith, «no pueden permitirse decir que los terroristas tuvieran algún tropiezo».

Al testificar ante el Comité Judicial del Senado en mayo de 2002, Robert Mueller recalcó lo difícil que habría sido frustrar los ataques del 11-S, teniendo en cuenta que cincuenta millones de personas entraron y salieron de Estados Unidos en agosto de 2001. «Los terroristas aprovecharon la liber-

tad de que se goza en este país y la utilizaron contra nosotros —dijo—. Y mientras continuemos atesorando esas libertades siempre correremos el riesgo de ataques futuros [...]. Debemos replantear nuestras prioridades, mejorar nuestra manera de contratar, controlar y adiestrar a nuestro personal, colaborar con otros, y administrar, analizar, compartir y proteger nuestra información». Y añadió: «Soy más impaciente que muchos, pero debemos hacer las cosas bien, no sólo rápido».

Mueller tenía asignado uno de los cometidos más difíciles del Gobierno. Ha estado intentando reorganizar una burocracia que se ha opuesto a cambios —y a «intrusos»— durante decenios. En sus declaraciones, Mueller no elogió los viejos tiempos ni los viejos usos. Un hombre de confianza del Senado me dijo a mediados de 2002 que la disposición de Mueller a airear los problemas —incluso a riesgo de una publicidad adversa— le había granjeado pocos amigos dentro de la Administración Bush. «El Departamento de Justicia le ha dado una regañina y ahora tiene problemas con la Casa Blanca», añadió.

«Heredó un desastre —me dijo el senador Leahy—. El FBI ha mejorado desde los tiempos de Edgar Hoover. Ya no se dedica a chantajear a miembros del Congreso, pero sigue teniendo esa cultura del "nosotros no cometemos ni reconocemos errores". Mueller parecía empeñado en cambiar esa actitud. Su mejor defensa, y su mejor delito, es ser lo más comunicativo posible con el Congreso». Y añadió: «Los presidentes cambian, pero él tiene un mandato de diez años».

Sin embargo, en lo que a personal se refiere, el FBI tiene mucho camino por recorrer. Según uno de los hombres de confianza de Mueller, el Bureau está experimentando un profundo cambio en el día a día de sus investigaciones. «La misión, ahora, no es sólo esposar a delincuentes y meterlos en la cárcel, sino también prevenir actos terroristas. Claro, a la gente le cuesta cambiar radicalmente su manera de hacer las cosas y resulta frustrante para muchos de nuestros agentes, con su manera simplista de ver el mundo, pero ahora nuestra prio-

ridad es obtener información para adelantarnos a los hechos, incluso si eso significa perder el caso ante un juez». La transición provocará muchas jubilaciones forzosas anticipadas. Un problema ineludible es que los cambios más importantes auspiciados por Mueller —el reclutamiento y contratación de expertos en idiomas extranjeros, estudios de área y tecnología informática— no darán fruto hasta dentro de unos años. «No ha habido tiempo de crear un cuadro de personas suficientemente preparadas», reconoció el ayudante de Mueller.

«El FBI es muy bueno para resolver crímenes una vez cometidos —dijo un hombre de la CIA—, pero no sabe infiltrarse. Eso hemos de hacerlo nosotros». Otro experimentado agente se mostraba igualmente escéptico respecto de la capacidad de transformación de la agencia rival. «Ellos son *polis* —dijo—. Se pasan la vida tratando de atrapar ladrones de banco, y nosotros tratando de robar bancos».

Robert Baer dijo: «No puede hacerse una idea de lo mal que está. Lo que salvó a la Casa Blanca del vuelo 93 fue un grupo de jugadores de rugby». (Éstos atacaron a los secuestradores obligando al avión a estrellarse en Pensilvania, cerca de su objetivo). «¿Para eso pagamos treinta mil millones de dólares?». (Se refería al presupuesto federal para servicios de inteligencia). Después de los secuestros, el FBI y la CIA hicieron un esfuerzo por mejorar su cooperación, y personal de la CIA fue asignado a varias oficinas del FBI. Sin embargo, una declaración de la Comisión del 11-S publicada el 14 de abril de 2004 afirmaba, después de elogiar los esfuerzos de Mueller, que el FBI seguía siendo, como dijo un hombre de confianza de la Casa Blanca, el «agujero negro» de la información compartida. Toda la comunidad de los servicios de inteligencia, añadía el informe, «coincide en que sigue habiendo pocos avances en el proceso de compartir información. No existe una estrategia a nivel nacional de información compartida para combatir el terrorismo».

En vez de resultados, la Administración difundió nuevas alarmas por parte de las autoridades sanitarias y la Oficina de Seguridad Interior. El Consejo de Seguridad Nacio-

nal se ocupaba de valorar la importante amenaza representada por la guerra bacteriológica o la posible utilización de sustancias fisionables por parte de los terroristas, pero en la Oficina de Seguridad Interior estaban abrumados por el peligro que correrían la red eléctrica, el suministro de agua, los depósitos de hidrocarburos e incluso el procesamiento industrial de la leche. «¿Por dónde empezamos? —dijo—. Las amenazas son tan numerosas... Somos como ciervos deslumbrados por los faros de un coche».

El vigésimo hombre

Cuando escribí sobre el caso de Zacarias Moussaoui en septiembre de 2002, el tema en realidad era el fiscal general John Ashcroft. Mis fuentes dentro de los servicios de inteligencia estaban estupefactas ante la insistencia de Ashcroft de que el Departamento de Justicia solicitara la pena de muerte para Moussaoui, quien se hallaba incomunicado en una prisión norteamericana el 11 de septiembre y negó toda implicación con los atentados. La intransigencia del fiscal general impidió un acuerdo tácito. Por supuesto, Moussaoui, que reconoció ser miembro de Al Qaeda, no despertaba ninguna simpatía, pero mis fuentes me dijeron que ciertas escuchas electrónicas daban a entender que los organizadores del 11-S le consideraron poco apto para el trabajo. Dado que a principios de 2002 era difícil conseguir información fiable sobre Al Qaeda, en el FBI y la CIA había quienes opinaban que Moussaoui diría lo que sabía sobre cómo operaba Al Qaeda si se le proporcionaba un aliciente. Pero Ashcroft se negó a reconsiderar su postura, y de este modo se perdió una primera oportunidad de obtener información fidedigna.

A mediados de la década de 1990 —la fecha exacta se desconoce—, Zacarias Moussaoui, que se enfrenta actualmente a un proceso acusado de ser el vigésimo hombre en los secuestros aéreos del 11-S, viajó a Chechenia con un amigo

de la infancia para unirse a los separatistas en su lucha contra el dominio ruso. En ese momento, jóvenes de todo el mundo islámico estaban llegando a una región que, tras la derrota rusa en Afganistán, estaba considerada el foco de una nueva *yihad*. Moussaoui era francés de ascendencia marroquí y su amigo pertenecía también a una familia de emigrantes. Parece evidente que Moussaoui no impresionó a sus superiores. Cuando los chechenos decidieron que los voluntarios extranjeros causaban más problemas que ventajas, recibió el aviso de abandonar el país. (Su amigo fue invitado a quedarse y resultó muerto más adelante, al parecer mientras filmaba escenas de combate para una página web islámica).

En febrero de 2001, Moussaoui se presentó en la academia de pilotos Airman, en Norman (Oklahoma). Tenía treinta y dos años y había seguido viajando en busca de causas fundamentalistas. Había recalado en Afganistán (donde se supone que estuvo un tiempo en un campamento de Al Qaeda), Pakistán y Malaisia, teniendo como base una mezquita radical en el norte de Londres. Cuando llegó a Estados Unidos dos semanas después de regresar a la capital británica tras un viaje a Pakistán, Moussaoui dijo en la aduana que tenía treinta y cinco mil dólares en efectivo. Su repentino interés por volar le llevó a pagar cinco mil dólares por adelantado para un cursillo que le permitiría obtener la licencia de piloto. Durante los tres meses siguientes recibió cincuenta y siete horas de instrucción de vuelo, muchas más que las veinte horas que la mayoría de alumnos necesita para pilotar en solitario. Pero dejó la academia a finales de mayo sin haber obtenido la licencia.

Los viajes de Moussaoui y sus vínculos con el integrismo islámico habían llamado la atención de los servicios de inteligencia franceses. Después de su arresto en Estados Unidos por cargos relacionados con la inmigración a mediados de agosto de 2001, los franceses entregaron al FBI un *dossier* sobre Moussaoui, que, según un funcionario que revisó el expediente, documentaba algunos de sus contactos pero no aportaba pruebas concretas en su contra. Sin embargo, el informe fue considerado una oportunidad perdida de prevenir la tra-

gedia. Los norteamericanos se preguntaron si el FBI y otras agencias del Gobierno, con el «vigésimo secuestrador» bajo custodia, no habrían desaprovechado la ocasión de completar el rompecabezas y quizá evitar los atentados.

La opinión de que el Gobierno habría fallado se basaba en la suposición de que Moussaoui era, en efecto, el vigésimo secuestrador. (En cada uno de los tres aviones que alcanzaron su objetivo iban cinco secuestradores, pero sólo cuatro en el que se estrelló en Pensilvania). Inicialmente, ante un tribunal federal, Moussaoui se declaró miembro de Al Qaeda, pero negó cualquier implicación en los atentados. Muchos funcionarios, en activo o retirados, del FBI y la CIA me dijeron que en su opinión Moussaoui era «un quiero y no puedo», como lo expresó uno de ellos, y demasiado veleidoso e inestable para participar en una operación terrorista clandestina a largo plazo. Sin embargo, podía tener información crucial sobre Al Qaeda. «Sabía cómo funcionaba la organización y cómo ponerse en contacto», dijo un ex funcionario de la CIA. La verdadera chapuza, creen estos funcionarios, fue la manera de llevar el asunto Moussaoui y el pliego de cargos que se le imputan. Como la guerra contra el terrorismo, el caso Moussaoui era mucho más complejo de lo que dejó entrever el Gobierno.

Tras su fracaso en la academia de vuelo de Oklahoma, Moussaoui decidió probar de nuevo, esta vez en Minnesota. El 11 de agosto de 2001 llegó a la academia internacional de pilotos de la Pan Am, en Eagan, cerca de St. Paul. Según su monitor, Clancy Prevost, parecía otro extranjero adinerado con pasión por volar, un tipo «simpático y afable». Prevost, que fue piloto de la Armada y de Northwest Airlines, dijo: «Me lo hizo pasar muy mal porque no sabía nada. No tenía ni idea. Carecía del menor talento para pilotar. Pero al fin y al cabo era un cliente y había pagado por sus clases, de modo que acabé por contarle anécdotas. Almorzábamos y nos liábamos a hablar. Nada hacía pensar que fuera otra cosa que un simpático empresario al que le gustaba juntarse con pilotos y poder decir luego a las chicas que pilotaba un 747».

Moussaoui había sido noticia por haber dicho supuestamente a su monitor que sólo quería aprender a mantener un avión en el aire, no a despegar ni a aterrizar. Según Prevost, sin embargo, «él nunca dijo tal cosa. Lo que dijo fue: "Quiero despegar de Heathrow en Londres y aterrizar en el JFK de Nueva York". Pero no tenía destreza suficiente, ni siquiera en el simulador de vuelo».

Había un detalle inquietante. Después de varios días de clase, Prevost le dijo a Moussaoui que su objetivo como monitor de vuelo era poner al alumno en situación de hacer un vuelo transoceánico en caso de emergencia. «Moussaoui me contestó: "Yo preferiría coger un paracaídas y saltar"». A Prevost le hizo gracia, y entonces le dijo que la presión de la cabina haría imposible que pudiera abrir la puerta. Le contó a Moussaoui una anécdota, muy conocida entre los pilotos, acerca del incendio que habían provocado unos pasajeros al preparar té en un hornillo de butano en la cabina de un avión de pasajeros saudí. Iban en viaje de peregrinación durante el Ramadán y, al no poder abrir la puerta de la cabina, perecieron quemados. «Aproveché entonces para preguntarle por el Ramadán, del que yo no sabía nada: "¿De qué se trata? ¿Tú eres musulmán?". Y Moussaoui contestó: "Yo no soy nada", y se ruborizó un poco. No fue una reacción normal. Ahí fue cuando me dije: un momento. ¿Qué está pasando aquí? Es un tipo simpático pero no tiene ni idea de aviones. No tendríamos que admitirlo». Prevost comunicó sus recelos a sus superiores de Pan Am, los cuales, tras dudarlo un poco, llamaron al FBI.

El 16 de agosto Moussaoui fue arrestado cerca de la academia de vuelo por agentes del FBI y del Servicio de Inmigración, y se le acusó de sobrepasar el tiempo de estancia legal en el país establecido en su visado. Como muchos detenidos por esta causa, lo condujeron a la prisión del condado. Cuando los agentes federales empezaron a interrogarle, en principio se mostró dispuesto a hablar. (Su inglés era lo bastante bueno para haberle permitido obtener un máster de negocios internacionales en la Universidad de South Bank, en Lon-

dres). Según uno de sus interrogadores, Moussaoui cooperó hasta que se le preguntó si planeaba un atentado terrorista en un avión. «Su respuesta fue: "Quiero un abogado"», me dijo el agente. No consiguió ninguno. Los agentes interrumpieron el interrogatorio y decidieron enfocar el caso como un asunto de visado. (Los detenidos por la ley de Inmigración no tienen derecho a abogado propio). Sin embargo, en días sucesivos, los agentes de Minnesota trataron de conseguir del cuartel general del FBI una orden especial, al amparo de la ley de Vigilancia del Espionaje Extranjero (FISA), para realizar un registro del ordenador de Moussaoui y de sus pertenencias, basándose en que tenían motivos para creer que era un agente extranjero. (Moussaoui les había negado el acceso). El cuartel general del FBI denegó la solicitud, una decisión que luego iba a levantar polvareda. No hubo más intentos de interrogarlo hasta después del 11-S, cuando, junto con otros centenares de sospechosos musulmanes, fue declarado testigo de importancia y enviado a Nueva York.

Los cargos contra Moussaoui fueron anunciados el 11 de diciembre de 2001 por el fiscal general John Ashcroft, quien calificó el auto de procesamiento —impuesto por un gran jurado de Virginia— de «una crónica del mal». Moussaoui fue acusado «de recibir la misma preparación, los mismos fondos y de jurar el mismo compromiso para matar norteamericanos que los secuestradores». Se le imputaban seis cargos diferentes: conspiración para cometer terrorismo internacional, para destruir aviones, para cometer piratería aérea, para emplear armas de destrucción masiva, para asesinar a funcionarios federales y para destruir propiedad privada y pública. Los primeros cuatro comportaban la pena capital.

Las pruebas presentadas hasta entonces por el Gobierno eran en gran parte circunstanciales. El registro de su ordenador —el mandato se obtuvo la misma tarde del 11 de septiembre— no aportó aparentemente nada que pudiera haber presagiado el ataque ni su vinculación al mismo. El acta de acusación explicaba que Moussaoui había seguido una pauta

de actividad similar a la de muchos de los secuestradores. Al igual que ellos, recibió instrucción de vuelo durante meses, compró vídeos de cabina de vuelo para aparatos comerciales en una tienda especializada de Ohio, y se apuntó a un gimnasio. Se cree que dos secuestradores habían visitado la misma academia de vuelo de Oklahoma un año antes que Moussaoui. En el otoño de 2000 había recibido una carta de Infocus Tech, una empresa de Malasia, informándolo de que seguían contando con él como «asesor de *marketing*»; más tarde, el director de dicha empresa fue relacionado por la prensa con algunos de los secuestradores.

La prueba más concreta de la vinculación de Moussaoui, según el acta de acusación, con los conspiradores del 11-S era que en agosto de 2001 alguien que utilizó el nombre de Ahad Sabet le envió un giro de catorce mil dólares desde estaciones de tren en Hamburgo y Düsseldorf. Sabet era el alias de Ramzi bin al Shibh, un conocido intermediario de Al Qaeda, quien también pasó dinero al menos a uno de los secuestradores y aparecía como cooperante de los terroristas en el acta de acusación de Moussaoui. Antes del 11-S, Sabet habría tratado en cuatro ocasiones de conseguir un visado para entrar en Estados Unidos, y en una emisión de la cadena televisiva Al Yazira, el día después del aniversario de los atentados, afirmó que él tenía que haber sido el vigésimo secuestrador. El acta señala asimismo que Moussaoui y Al Shibh estuvieron en Londres al mismo tiempo, en diciembre de 2000, justo antes de que el primero volara a Pakistán. La teoría del Gobierno es que los problemas de Al Shibh con el visado obligaron a los conspiradores a recurrir a Moussaoui.

Si la hipótesis del Gobierno tenía que fundarse en las similitudes entre las actividades de Moussaoui y las de los secuestradores, debía tener en cuenta el hecho de que, aun cuando compartía la lealtad de los otros hacia Al Qaeda y su líder, su comportamiento en Estados Unidos era notablemente distinto del de sus presuntos compinches. El Gobierno encontró pruebas de *e-mails* y reuniones entre los diecinueve, pero ninguna entre cualquiera de ellos y Moussaoui. Los se-

cuestradores intentaron adaptarse al estilo de vida norteamericano y, entre cosas, bebían en bares. Sin embargo, Moussaoui, mientras estuvo en Oklahoma, se mantuvo aislado e inflexible respecto a sus creencias islámicas. Criticó a miembros de una mezquita de Norman por no bajar la vista cuando se encontraban con mujeres y por mirar a animadoras ligeras de ropa. «Siempre estaba fastidiando a los demás —dijo Frank W. Dunham, Jr., el abogado de oficio al frente de la defensa de Moussaoui—. Su actitud no fue en absoluto discreta».

El 28 de marzo de 2002, Ashcroft anunció que había dicho a Paul J. McNulty, el fiscal federal que intervenía en el caso, que solicitara la pena de muerte para Moussaoui. Si lo declaraban culpable, el jurado oiría entonces los testimonios y deliberaría sobre la sentencia en una etapa posterior. En una comunicación al tribunal resumiendo las alegaciones del Gobierno, McNulty escribió que la pena de muerte era procedente porque Moussaoui, si bien no estuvo presente el 11-S, participó intencionadamente y con premeditación en la planificación de los atentados, «de manera especialmente atroz, cruel y depravada» y con «osada desconsideración para con las vidas humanas».

Al solicitar la pena capital, el Departamento de Justicia ponía el listón muy alto. Acusaba a Moussaoui de un nivel de implicación que comprendía un conocimiento anticipado de los planes y del alcance y objetivo de la misión. Desde este punto de vista, no era sólo candidato a ser el vigésimo secuestrador, sino un auténtico secuestrador en todo salvo en la ejecución final, al que sólo su arresto le había impedido hacer efectivas sus intenciones.

En otoño de 2002, un funcionario del Departamento de Justicia me dijo que cuando el Gobierno presentara sus argumentos ante el jurado recalcaría «el indecible horror de aquel día y lo que vino después». Los fiscales estimaban que la defensa intentaría «minimizar su importancia y su implicación» en el 11-S, y argumentar que Moussaoui «no valía la pena». Pero, añadió el funcionario, «todo lo que sabemos asocia a Moussaoui con el 11-S, y eso ya dice mucho: no hay na-

da comparable a ese crimen, es un crimen de lesa historia. El camino tomado por Moussaoui es el núcleo de este caso, y al final de la sesión el jurado conocerá pruebas que respaldan lo que afirma el acta de acusación». También me dijo que en los meses posteriores a los atentados no se pensó en ningún momento en buscar un acuerdo con Moussaoui ni en acusarlo de cargos menores que pudieran ser más fáciles de probar. En aquel momento, explicó, la opinión pública y el Gobierno «sólo querían que el sistema judicial hiciera aquello para lo que está pensado: impartir justicia ante un crimen de gran envergadura».

Los funcionarios de inteligencia que en aquel momento se mostraban escépticos respecto al enfoque del Gobierno, precisaron que no creían que Moussaoui fuese en absoluto un espectador inocente. Según ellos, habría estado en permanente contacto con Al Qaeda, como sugería el dinero que le envió Al Shibh, y que se trasladó a Estados Unidos dispuesto a hacer todo el daño posible si se lo pedían. Pero meses después del acta de acusación, no existía aún prueba alguna de tal solicitud por parte de sus superiores.

El juicio, presidido por la magistrada Leonie M. Brinkema, del tribunal federal del distrito de Alexandria (Virginia), se fijó para enero de 2003. A lo largo de la primavera de 2002, el equipo de abogados de Frank Dunham llegó a la conclusión de que el estado mental de su defendido, ya precario, estaba deteriorándose a causa de las condiciones de su reclusión y cayendo rápidamente en la paranoia. Por su parte, Moussaoui se mostraba cada vez más disconforme con la forma en que estaban llevando el caso.

El 22 de abril, la jueza Brinkema le permitió hablar sin límite de tiempo en una vista preliminar de la causa, y Moussaoui sorprendió al tribunal cargando contra sus abogados y el sistema judicial estadounidense. Pronosticó «la destrucción de los Estados Unidos de América», entre otros enemigos del fundamentalismo islámico, y dijo que Estados Unidos estaba «orquestando mi envío a un refugio seguro, como hacían

en Bosnia. Muerto, herido. El juez, el fiscal y mis supuestos abogados defensores son todos lacayos del Gobierno». Sus abogados, remachó, eran «expertos en el engaño». Solicitó formalmente autorización a la jueza Brinkema para representarse a sí mismo en el juicio.

El exabrupto de Moussaoui se produjo durante una audiencia promovida por la defensa para protestar por las condiciones de su encarcelamiento. Estaba recluido en régimen de aislamiento bajo extraordinarias medidas de seguridad. No podía recibir visitas a solas, hacer llamadas telefónicas ni recibir correo que no fuera de sus abogados. Su celda estaba iluminada las veinticuatro horas del día. Todos los visitantes, incluidos sus abogados, tenían que ser acreditados por el FBI, y todo el material escrito, incluso los documentos de sus letrados, estaba sujeto a censura. Tampoco se le permitía el menor contacto con periodistas, debido al temor de que pudiera comunicar un mensaje cifrado a Al Qaeda. El Departamento de Justicia había justificado estas restricciones como «necesarias para evitar el considerable riesgo de que el acusado se comunique con personas de fuera de la prisión a fin de propiciar o incitar a nuevos actos de terrorismo». Uno de los abogados de Moussaoui me dijo después, muy enfadado, que la acusación, pese a su inquietud por el peligro inherente a una comunicación libre de trabas, «le dejó hablar en sesión pública durante cincuenta minutos y no dijo ni pío» cuando sus exabruptos parecieron socavar la propia defensa del acusado.

La jurisprudencia de los tribunales federales ha determinado que acusados como Moussaoui tienen derecho a defenderse a sí mismos si su renuncia al patrocinio jurídico es «consciente, voluntaria e inteligente». La jueza Brinkema contaba con un informe elaborado por el doctor Raymond Patterson, psiquiatra asignado por el tribunal. Patterson consideró que muchas de las notas y cartas de Moussaoui a la magistrada «estaban bien preparadas», y concluyó que su decisión de renunciar a la representación jurídica no era fruto de ninguna patología mental. Atribuyó gran parte de su extraño comportamiento a la «subcultura» a la que pertenecía.

Dos expertos en salud mental contratados por la defensa, el doctor Xavier Amador, de la Universidad de Columbia, y el doctor William Stejskal, de la Universidad de Virginia, determinaron que las conclusiones de Patterson eran infundadas y que Moussaoui necesitaba ser examinado más a fondo. Después de leer los informes, Brinkema, el 13 de junio, sin oír alegaciones, dictaminó que el acusado se ajustaba al estándar legal de capacidad mental.

Amador y Stejskal no habían hablado directamente con Moussaoui, pero sí se habían entrevistado tres veces con su madre, Aicha el Wafi, que había viajado a Virginia desde Francia (contra los deseos de su hijo, estaba colaborando con el equipo de la defensa), y habían examinado su historial académico y los datos aportados por los servicios sociales franceses. Dichos documentos mostraban una historia familiar de violencia doméstica y enfermedad mental. Dos hermanos de Zacarias sufrieron graves trastornos psicológicos en edad adulta y uno de ellos fue hospitalizado tras diagnosticársele esquizofrenia.

La madre, que se divorció del padre de Moussaoui cuando el niño tenía dos años, dijo a los periodistas que su hijo empezó a relacionarse con grupos radicales islamistas después de mudarse a Londres en 1992. En 1997 viajó a Francia para visitarla y, pese a que de niño había mostrado escaso interés por la religión, se presentó con el atuendo tradicional musulmán y la recriminó por no ser lo bastante religiosa. Ella culpaba a la mezquita de Londres de haber convertido a su hijo, un «muchacho feliz y despreocupado», en una persona «irreconocible».

Farhad Josrojavar, sociólogo de la Universidad de París, llama a hombres como Moussaoui «los nuevos mártires»: jóvenes árabes alienados de clase trabajadora, procedentes de Francia, que se consideran a sí mismos «inexistentes», desde luego no franceses ni norteafricanos. Se habían sentido atraídos por el integrismo islámico y por las guerras religiosas en Bosnia, Afganistán y Chechenia. En Narbona, la ciudad donde se crió Moussaoui, existe un arraigado sentimien-

to de desprecio por la inmigración. En el colegio, creía él, se le obligó a seguir un camino vocacional determinado por los prejuicios contra los árabes. Josrojavar, que entrevistó a más de una docena de terroristas convictos o presuntos para un libro que publicó en Francia en 2002, describe a los jóvenes como Moussaoui en estos términos: «... dispuestos a llegar a cualquier extremo con tal de librarse de esa sensación de ser "menos que nada"».

«El islam es la única identidad creíble para ellos —me explicó Josrojavar—. Aceptar su identidad como franceses podría significar aceptar la inferioridad que sienten en su vida diaria como ciudadanos de segunda clase. El resultado, inevitablemente, es un odio hacia Francia y, por extensión, hacia Occidente». Estos jóvenes, muchos de los cuales nunca llegan a aprender árabe, son ya conocidos entre las ONG francesas pro derechos humanos como «carne de cañón»: fanáticos fáciles de reclutar y dispuestos a luchar —y morir— por una causa religiosa de la que, en principio, poca cosa saben.

El 21 de mayo de 2002, Coleen Rowley, una abogada adscrita a la oficina del FBI en Minneapolis, envió una carta de protesta a Robert Mueller, director del Bureau. La carta apareció publicada en *Time* y provocó una oleada de nuevas sesiones en el Congreso para debatir si se habían desatendido posibles pistas sobre los atentados. La carta de Rowley era fundamentalmente una queja por la negativa del cuartel general del FBI a apoyar, tras el arresto de Moussaoui, la solicitud de la oficina de Minneapolis del mandato especial para registrar sus pertenencias. En aquel momento, la FISA, que dio origen a la creación de un tribunal federal secreto para casos de espionaje, requería que el Gobierno demostrara causa probable de que el sujeto estuviera trabajando, bien para un grupo terrorista internacional, bien para una organización de espionaje extranjera —por ejemplo, un topo ruso dentro de la CIA—, o que estuviera ayudando y encubriendo a una potencia extranjera. El presidente del Tribunal Supremo nombra un tribunal, con carácter rotatorio, formado por siete jueces

de distrito. El tribunal de la FISA ha emitido unas trece mil órdenes, un millar sólo en el año 2000; cuando se produjeron los hechos del 11-S, se sabía que solamente había rechazado una solicitud de registro. Sin embargo, el cuartel general del FBI supuso que los recelos del monitor de vuelo y las sospechas de los franceses no serían motivo suficiente para este tribunal.

Rowley admitió que sus colegas del FBI tenían otra opción: podían haber presentado sus pruebas al fiscal general de Minnesota y pedirle que solicitara una orden de registro rutinaria a un juez federal. Sin embargo, escribía Rowley, ella pensó que «por numerosos motivos, incluida la cautela», la oficina del fiscal general «podía rechazarnos».

Desde la promulgación en 1978 de la ley de Vigilancia del Espionaje Extranjero, las organizaciones pro derechos civiles han temido que el Gobierno se valiera de los mandamientos judiciales que autorizan escuchas telefónicas como mecanismo para burlar las prohibiciones establecidas por la Constitución en materia de registros infundados. (La 4ª Enmienda establece el derecho inviolable a la privacidad y la intimidad). Las pruebas descubiertas mediante una orden de registro de la FISA pueden ser presentadas en una causa criminal, pero las órdenes mismas sólo pueden ser concedidas a investigadores de los servicios de inteligencia. Después de que el Congreso ampliara en 1994 el ámbito de la ley, permitiendo registros de casas y ordenadores además de la vigilancia electrónica, los investigadores tuvieron un nuevo incentivo para utilizar la FISA —como Rowley aparentemente pensaba hacer— como una alternativa útil a acudir a un juez ordinario. Esa opinión era alimentada por el hecho de que la oficina del FBI en Minneapolis hubiese recurrido al tribunal de la FISA antes incluso de consultar a la oficina del fiscal general del Estado.

Jonathan Turley, uno de los principales críticos de esta ley y profesor en la Universidad George Washington, describió la carta de Rowley como «la primera vez que veo por escrito lo que hemos venido observando durante años: cuan-

do no puedes conseguir una mandamiento normal, acudes a la FISA. Sospechamos desde hace tiempo que la FISA está siendo utilizada en casos en los que no se puede alegar un motivo legítimo. Rowley es la encarnación de los temores que provocaron serias críticas a la FISA». Turley, que fue abogado defensor en numerosos casos de espionaje y seguridad nacional antes de pasar a la docencia, ha escrito que los funcionarios de los cuerpos policiales «derivan cada vez más solicitudes de registros prohibidos por la 4ª Enmienda hacia un tribunal seguro que ni es mencionado por la Constitución ni es compatible con ésta».

En la primavera de 2002, John Ashcroft impartió nuevas pautas al declarar que la aprobación del Acta Patriótica después del 11 de septiembre facultaba a las autoridades federales para solicitar órdenes de registro al tribunal de la FISA, «principalmente a efectos de aplicación de la ley y siempre que existan sospechas fundadas de espionaje extranjero». Muchos investigadores policiales se inquietaron ante la suposición —surgida de las quejas públicas de Rowley— de que el cuartel general hubiera cometido un grave error al no solicitar la orden para registrar las pertenencias de Moussaoui.

Este sentir apenas afloró cuando Mueller dio las gracias públicamente a Rowley por su carta y aseguró más tarde al Comité Judicial del Senado que no habría represalias de ninguna clase. «De alguna manera Rowley está reescribiendo la historia —me dijo en el otoño de 2002 un funcionario de inteligencia que revisó el material francés—. No hay nada en los informes del espionaje francés que señale a Moussaoui como agente de una potencia extranjera. No es que los franceses no pensaran que es un mal bicho; a nosotros también nos lo parece. La cuestión es: ¿los franceses tenían algo que permitiese aplicar la FISA? En sus informes no está, desde luego». (Éste y otros funcionarios reconocieron que muchas de las quejas expuestas por Rowley sobre los anticuados sistemas informáticos del FBI y el control centralizado en Washington eran muy meritorias).

«Los de la oficina de Minneapolis se mueren de ganas de decir la suya —me aseguró B. Todd Jones, un ex fiscal general de Minnesota—, pero a Rowley la han descrito como a una Juana de Arco».

A lo largo del verano de 2002, Moussaoui redactó a mano una serie de alegaciones que dejaban pocas dudas sobre su deterioro mental. Había en ellas algún que otro destello de lucidez e inteligencia, pero por lo general se perdía en divagaciones airadas. En uno de estos escritos reiteraba que el FBI «matará a Zacarias Moussaoui para hacerle callar». En otro, aseguraba que el FBI estaba ocultando el hecho de que él y los diecinueve secuestradores permanecieron bajo vigilancia todo el tiempo que él estuvo en Estados Unidos, lo cual, decía, demostraba su inocencia. Según Moussaoui, el FBI había llegado a colocar un micrófono en un ventilador en su apartamento de Oklahoma. En una petición archivada el 15 de junio, exigió a la jueza que obligara al FBI a hacer entrega del ventilador, según él, «una prueba concreta de su actuación clandestina».

Aunque le asistía el derecho a defenderse a sí mismo, Brinkema dictaminó que sus abogados actuaran como defensores de reserva, y la relación de Moussaoui con ellos se deterioró todavía más. Cada vez que su salud mental se ponía en duda, armaba un escándalo. Los abogados con los que tuve oportunidad de hablar me dijeron que este tipo de reacción era un problema habitual en la defensa de clientes mentalmente desequilibrados. El 18 de julio de 2002 Moussaoui intentó declararse culpable en una audiencia procesal, después de que la jueza Brinkema denegara su insistente afirmación de que no aceptaría ningún documento, incluso si eran exculpatorio, que procediera de sus antiguos abogados. Como acusado de terrorismo, Moussaoui no tiene autorización para ver ninguna de las pruebas clasificadas que el Gobierno tiene en su contra; sólo podrían hacerlo, en su nombre, los abogados designados por el tribunal. «Si decide no aceptar esa información —le dijo la magistrada—, será bajo su propia responsabilidad y después no podrá alegar que se le ha negado un juicio justo».

Ante la perspectiva de tener que trabajar con los defensores, Moussaoui anunció repentinamente que quería declararse culpable. «A ellos se les permite todo, y a mí se me negará poder defenderme —le dijo al tribunal—. Estaré amordazado durante el juicio y ustedes llevarán a cabo eso que llaman justicia». Una semana más tarde, después de que la jueza Brinkema le comunicara que no podía declararse culpable, como él había supuesto, de los cargos de conspiración y luego, en una etapa posterior del proceso, alegar que no había tenido nada que ver con los atentados del 11-S, Moussaoui cambió de parecer. Evidentemente no había entendido que, como explicó Brinkema, «lo que usted no podrá hacer más adelante es comparecer y decir que no fue culpable del delito». Moussaoui respondió: «¡Ésa es su... su interpretación!».

Su desconcierto y su incapacidad para comprender las consecuencias de declararse culpable instaron nuevamente a los abogados a plantear la incapacidad de su cliente para defenderse a sí mismo. A finales de julio, Amador y Stejskal, los expertos en salud mental, dijeron al tribunal que habían observado «un acusado deterioro en su estado mental desde que se le permitió proceder *pro se*». Las peticiones de Moussaoui, añadieron, estaban llenas de reflexiones obsesivas sobre la CIA, el FBI y «esa jueza de las SS».

En agosto, Moussaoui reaccionó con renovado rencor ante los esfuerzos de Frank Dunham y los demás defensores. Hizo llegar a la magistrada un escrito titulado «Dunham, métete en tus puercos asuntos». Al mismo tiempo, según un memorándum presentado por los abogados, Moussaoui se negaba a presentar una serie de vitales alegaciones preliminares, entre ellas la recusación de ciertas pruebas del Gobierno.

El 16 de agosto, Brinkema admitió una petición de la defensa para posponer el proceso hasta enero de 2003, pero se mantuvo firme en su decisión de permitir que Moussaoui se defendiera a sí mismo. Sin embargo, dos semanas más tarde, la jueza, fundándose en la «retórica insultante, incendiaria e impertinente» de Moussaoui, ordenó el secreto de sumario

para cualquier nueva comunicación del acusado que incluyese «amenazas, difamaciones racistas, llamamientos a la acción u otros contenidos irrelevantes e inapropiados». Ante la protesta de los medios informativos, los fiscales declararon que Moussaoui estaba «tratando presumiblemente de comunicarse» con Al Qaeda en lenguaje cifrado.

La conducta frenética de Moussaoui dentro y fuera del tribunal, me dijo un antiguo defensor de oficio que ha seguido el caso, estaba «sirviendo munición en bandeja a los del tribunal militar», refiriéndose a quienes alegan que los tribunales civiles no están preparados para impartir justicia en casos de terrorismo internacional. El caso originó también descontento en el seno del FBI, pues se consideraba que el Departamento de Justicia, politizado, estaba más interesado en conseguir farragosas victorias judiciales que en amparar a los servicios de inteligencia. Un funcionario del FBI confirmó este malestar, añadiendo que la Administración Bush sigue buscando «el equilibrio entre la lucha tradicional contra el crimen y los métodos de la inteligencia para prevenirlo».

Dicho equilibrio, según todos los indicios, está todavía por alcanzar en el caso Moussaoui. Continúa siendo la única persona acusada por un tribunal norteamericano de conspiración en la muerte de unas tres mil personas. Los abogados de Moussaoui y algunos funcionarios del FBI estaban perplejos ante el hecho de que el Gobierno no hubiera buscado un acuerdo con el acusado. Frank Dunham, que fue fiscal federal antes de convertirse en defensor federal de oficio, me dijo: «Nunca he intervenido en un caso de conspiración en que el Gobierno no estuviera interesado en saber si el acusado tenía alguna información, en averiguar qué más había detrás de esa conspiración».

Todo posible acuerdo habría girado en torno a renunciar a la pena máxima a cambio de cooperación, algo que, como ya se ha dicho, Ashcroft no estaba dispuesto a hacer. «Estamos bloqueados por el Departamento de Justicia —dijo el funcionario del FBI—. Es muy frustrante». Otras personas conocedoras del caso creen que el Gobierno simplemente se ha extralimitado.

Moussaoui estaba sin duda vinculado a Al Qaeda, pero su verdadera importancia para Estados Unidos probablemente radique en tanto que informador y no como sustituto simbólico de los secuestradores muertos, a quienes ya no se puede castigar. Sin embargo, se ha preferido la segunda opción, promoviendo un juicio sonado que se espera resulte satisfactorio política y emocionalmente.

«Este hombre está acusado de participar en el peor crimen cometido en suelo americano —me dijo en otoño de 2002 Martin Sabelli, antiguo defensor de oficio en San Francisco que ha escrito sobre el tema del *pro se*—. Es el tipo de caso en que tenemos que estar muy alerta y muy convencidos de que el habitual procedimiento de confrontación implica a verdaderos adversarios, no a un Goliat y a un David sin honda. Parece ser que Moussaoui no está capacitado para defenderse a sí mismo, porque se diría que ni siquiera comprende los fundamentos de los cargos que se le imputan, pero empiezo a pensar que los demás estamos más locos que él. Quiero decir, no hemos sido capaces de establecer un sistema legal en el que las vidas no estén pendientes de un hilo. Pese a toda nuestra pericia profesional, podemos dejar que este individuo se condene a sí mismo a muerte para mitigar nuestro sentido de la vulnerabilidad».

El 11 de septiembre de 2002, tras una búsqueda de todo un año, Ramzi bin al Shibh fue arrestado en Karachi por fuerzas paquistaníes después de un tiroteo. Fue entregado a Estados Unidos para su interrogatorio y llevado después a una base militar no revelada, y se espera que sea procesado por un tribunal militar. La captura de Al Shibh complicó el caso Moussaoui. Según Edward B. MacMahon, Jr., uno de sus abogados, la defensa, a la cual se le había negado acceso a miembros de Al Qaeda capturados, pensaba solicitar su comparecencia.

«Están haciendo preparativos —dijo en su momento Eugene R. Fidell, experto en Derecho Militar—. El caso puede tardar meses en resolverse, sobre todo si Al Shibh puede aportar elementos que exculpen a Moussaoui; probablemen-

te ambas partes pedirán una prórroga. Al Shibh debería estar disponible, pero ¿y si se acoge a la 5ª Enmienda para no declarar contra sí mismo? Para la jueza Brinkema será el momento de la verdad . Es la partida de póquer con apuestas más altas que uno pueda imaginar».

Fidell estaba en lo cierto. El 1 de marzo de 2003, Jalid Sheij Mohamed, presunto cabecilla del 11-S, fue arrestado en Rawalpindi (Pakistán), y durante todo el año siguiente la defensa de Moussaoui insistiría en que su cliente tenía derecho, amparado por la Constitución, a interrogar a Bin al Shibh y Jalid Sheij Mohamed para obtener información exculpatoria. La Administración se negó a que ningún miembro de Al Qaeda capturado testificase, alegando razones de seguridad nacional.

En octubre de 2003, la jueza Brinkema dictaminó que la acusación, sin proporcionar dicho acceso, no podía solicitar la pena máxima para Moussaoui ni alegar que el acusado tuviera la menor vinculación con el 11-S. La revista *Time* calificó la actitud del Gobierno de «caótica». La decisión de Brinkema fue revocada en abril de 2004 por el conservador Tribunal de Apelaciones de Richmond (Virginia), que ordenó a la magistrada buscar un compromiso que permitiera a Moussaoui tener acceso al testimonio de los hombres de Al Qaeda pero preservando el derecho del Gobierno a seguir interrogándolos sin interrupción. El tribunal no decía cómo hacerlo. Los fiscales fueron nuevamente autorizados a solicitar la pena de muerte, pero este fallo quedó en un limbo jurídico tras una audiencia celebrada en junio de 2004, cuando salió a relucir un posible pacto que habría dado a la defensa «resúmenes neutrales» de los interrogatorios a los detenidos. El juicio, previsto para enero de 2003 cuando empecé a escribir al respecto, ha sido aplazado indefinidamente.

Moussaoui ha seguido deteriorándose, y, después de presentar una serie de incoherentes alegatos en otoño pasado, se mostró cada vez más perturbado y fue privado del derecho a defenderse a sí mismo. Desde entonces sólo se ha entrevistado esporádicamente con sus abogados.

Capítulo III

La otra guerra

Las batallas secretas de Afganistán

El 20 de octubre de 2001, a primera hora de la mañana, más de cien Rangers se lanzaron en paracaídas sobre un aeródromo en poder de los talibanes, cien kilómetros al suroeste de Kandahar, en el sur de Afganistán. Las incursiones aéreas se sucedían desde hacía dos semanas y los bombardeos habían conseguido elevar la moral en Estados Unidos y disparar la popularidad del presidente Bush. La ofensiva de los Rangers era el primer ataque directo por tierra de las fuerzas estadounidenses. Un cámara del ejército grabó en video la acción con ayuda de un objetivo para visión nocturna, y sus granuladas imágenes, teñidas de verde, de comandos aguerridos y paracaídas esponjosos dominaron las noticias televisadas de aquella noche. La misma mañana, una segunda unidad de Operaciones Especiales, compuesta por Rangers y un escuadrón de la Delta Force, atacó un complejo a las afueras de Kandahar utilizado por el mulá Omar, el líder talibán que había salvado la vida en la primera noche de los ataques aéreos —a juicio de Donald Rumsfeld y sus hombres de confianza— gracias a una torpe y excesivamente cauta estructura de mando militar.

En una rueda de prensa celebrada en el Pentágono aquel mismo día, el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Richard Myers, informó que las unidades de Operaciones Especiales «pudieron desplegarse, maniobrar y operar

dentro de Afganistán sin interferencia notable por parte de las fuerzas talibanes». En ambos casos los soldados encontraron resistencia, pero la vencieron. «Supongo que podríamos calificarla de resistencia *light* —dijo—. Naturalmente, para los que estuvieron allí no debió de ser muy *light*». Y concluyó: «En conjunto, la misión ha sido un éxito. Logramos los objetivos buscados». Luego añadió que los comandos estaban «equipándose y posicionándose para posibles operaciones contra objetivos terroristas». Pero en una segunda sesión informativa, dos días más tarde, se negó a confirmar si habría más operaciones de comandos. «Algunas cosas serán visibles, otras no», se limitó a decir.

Visibles o no visibles, la opinión pública no supo todo lo que había que saber. Varios oficiales de alto rango me dijeron que hubo malestar en la Delta Force por lo que consideraban una teatralización del asalto al aeródromo y las excitantes imágenes televisivas que éste proporcionó. «Todo parecía muy emocionante y muy bonito», dijo un general. Pero la operación fue menos arriesgada de lo que el Pentágono quiso hacer creer. Los Rangers se limitaron a caer en paracaídas después de que un equipo de Pathfinder —unidad especializada en operar tras las líneas enemigas— hubiera penetrado en la zona y confirmado que el aeródromo estaba despejado de tropas talibanes. «Fue puro *show* televisivo —me dijo una fuente bien informada—. Los Rangers no llegaron los primeros».

Varios oficiales con los que hablé opinaron que la operación era importante, incluso sin contacto con el enemigo, ya que podía proporcionar «confianza» a los Rangers novatos, muchos de los cuales se habían alistado recién terminada la secundaria y aún no habían recibido su bautismo de fuego. «Llegan los Rangers y llegan los helicópteros y todo el mundo se siente de maravilla —dijo un militar que sirvió en las Fuerzas Especiales—. Sin embargo, ¿para qué filmarlo? Yo soy partidario de mantener las cosas en secreto; pero esto venía auspiciado por la propia opinión pública».

En el caso del asalto al complejo del mulá Omar, Myers no dijo a la prensa que casi se había producido una catástro-

fe, ni que, a tenor de ello, el Pentágono estaba reconsiderando futuras operaciones de las Fuerzas Especiales en territorio afgano. La Delta Force, que se ufana de su sigilo, fue contraatacada por los talibanes y más de un estadounidense tuvo que combatir duramente para ponerse a salvo. Doce integrantes del comando resultaron heridos, tres de ellos de gravedad.

La Delta Force, que tiene su base en Fort Bragg (Carolina del Norte), posee un halo sin parangón en cualquier otra unidad del ejército. Su mera existencia es asunto clasificado, e invariablemente sus actividades sólo llegan a conocimiento del público a posteriori. *Black Hawk Down* (trad. esp.: *Black Hawk derribado*, RBA, 2002), un libro de Mark Bowden sobre el desastre de la Delta Force en Mogadiscio (Somalia) en 1993, donde murieron dieciocho Rangers y miembros de la Delta Force, tomaba nota del estatus especial de la unidad. «Operaban en el más estricto secreto», escribió Bowden.

> Te encontrabas a un tipo en un bar cerca de Bragg, bien bronceado, luciendo bíceps, un cuello grueso como una boca de incendios y un enorme reloj Casio, y te decía que trabajaba como programador para una agencia de contratación del ejército. Se llamaban unos a otros por sus apodos y pasaban de saludos y demás parafernalia de la vida castrense. Oficiales y cabos se trataban como iguales. Su impronta era el desdén por el clásico exhibicionismo militar. Sencillamente estaban por encima de rangos.

Según Bowden, en misiones de combate los hombres de la Delta Force preferían no trabajar con los Rangers, más jóvenes y menos experimentados.

Acerca de la incursión del 20 de octubre al complejo del mulá Omar, algunos miembros de la unidad dijeron a un colega que había sido «un completo *goat fuck*» —en el argot militar, que todo lo que podía salir mal había salido mal—. Según informó el *Observer* londinense, el «complejo» estaba formado por unas cuantas calles llenas de baches, la casa de ladrillo utilizada por el mulá Omar y una serie de chozas de pa-

ja a modo de guarnición. El Pentágono disponía de informes según los cuales Omar pernoctaba allí de vez en cuando; una misión exitosa podría significar su muerte o su captura y, en cualquier caso, proporcionaría importante información. La Delta Force confiaba en hacer lo que se le da mejor: situar un pequeño grupo de cuatro a seis hombres sobre el terreno y atacar sin previo aviso. (Un funcionario de inteligencia me aseguró que un miembro de la Delta Force le había dicho: «Enviamos cuatro o seis tipos y si los perdemos, mala suerte, nos pagan para eso»). El plan de ataque del Mando Central, sin embargo, preveía un asalto masivo al complejo del mulá. La misión fue iniciada por un helicóptero (tal vez más) de combate AC-130 que acribilló el área circundante, dejando deliberadamente intacta la casa del mulá. La idea era no dañar posible documentación secreta de los talibanes, o bien, con suerte, que Omar se creyera a salvo y no se moviera de allí. Una compañía reforzada de Rangers —unos doscientos hombres— fue lanzada en paracaídas sobre una zona cercana para servir de apoyo en caso de que la Delta encontrara una resistencia encarnizada. Helicópteros Chinook, los más grandes del ejército, desembarcaron un escuadrón Delta reforzado —un centenar de hombres— y sus vehículos de asalto 6x6, artillados con ametralladoras especiales. Los Delta entraron a saco en el complejo, pero encontraron poca cosa de valor: ni el mulá Omar ni documentos importantes.

«Cuando salieron de la casa —contaba un oficial— la cosa se jodió del todo. Fue una especie de emboscada. Los talibanes nos disparaban con armas ligeras, RPG —granadas propulsadas por cohete— y morteros». El caos fue espantoso. Un oficial de alta graduación que tuvo acceso a informes de la misión me dijo que los talibanes hacían fuego sin cesar y parecían disponer de reservas ilimitadas de munición. La Delta Force, añadió, se encontraba en medio de «un desastre táctico, y los talibanes llevaban ventaja». Varios norteamericanos fueron heridos y el equipo evacuado. Parte de los Delta se dispersó en grupos de cuatro a seis hombres mientras el grueso de la fuerza se retiraba hacia los helicópteros. Según

normas establecidas, los grupos pequeños debían aguantar para proporcionar fuego de cobertura. Llegaron entonces los helicópteros y barrieron todo el recinto con fuego pesado.

La Delta Force fue obligada a abandonar uno de sus objetivos —la infiltración de un equipo clandestino en la zona— y los soldados de cobertura escaparon hacia un punto de encuentro fijado previamente, según un plan de contingencia conocido como E&E (huida y evasión). Un Chinook perdió parte de su tren de aterrizaje al huir de las granadas y el fuego cruzado. Los talibanes lo enseñarían después como un trofeo, afirmando, en contra de la verdad, que habían abatido un helicóptero. (Según el Pentágono, el aparato «tomó contacto con una cerca»). El ataque fallido de las Fuerzas Especiales en Mogadiscio en 1993, con la imagen de un norteamericano muerto siendo arrastrado por las calles de la capital, había provocado furor y acusaciones de que las tropas habían sido enviadas allá sin un apoyo adecuado. Los estrategas del Mando Central estaban, qué duda cabe, ansiosos por evitar el mismo error y su inquietud era mayor aún debido al hecho de que aquéllos iban a ser los primeros ataques por tierra. Pero la operación recibió duras críticas, de gente con mucha experiencia en operaciones especiales, por ser demasiado ruidosa («Hasta los muertos debieron de despertarse», me dijo un funcionario) y excesivamente lenta, dando tiempo a los talibanes para organizar su resistencia. Un soldado Delta le comentó a un camarada: «Los estrategas piensan que podemos hacer juegos malabares. Pues no. Que no nos metan en un entorno para el que no estamos preparados. La próxima vez perderemos una compañía entera».

La Delta Force viene quejándose de falta de creatividad en la cúpula militar, pero lo inesperado y la ferocidad de la respuesta talibán «hizo que todos se ensuciaran los pantalones», me dijo un oficial, y provocó una revisión de tácticas y procedimientos en el Mando Central, situado en la base aérea de MacDill (Florida), cuartel general para la guerra de Afganistán. «Ésta no es una guerra para Operaciones Especiales», dijo un oficial, al menos tal como la orquestaron el

Mando Central y su comandante en jefe, el general Tommy R. Franks, el 20 de octubre.

En ruedas de prensa posteriores a la incursión, Rumsfeld y el general Myers no dejaron traslucir en ningún momento la fiereza de la resistencia encontrada en el complejo del mulá Omar. Rumsfeld se permitió reprender al gabinete de prensa del Pentágono por fiarse de fuentes militares anónimas a la hora de elaborar los primeros informes de los ataques, antes de que los comandos regresaran. Dijo: «Pueden estar seguros de que responderé directamente a sus preguntas cuando pueda, y de que haremos cuanto esté en nuestra mano para proporcionarles tanta información como nos sea posible aportar. Ésta es una sociedad abierta y la prensa (ustedes) sabe casi todo lo que pasa y casi tan pronto como ocurre. La idea de que por ahí hay un iceberg desconocido, acechando bajo el agua, sencillamente no es cierta».

En días sucesivos y a medida que se iban filtrando detalles de las incursiones, el Pentágono no dio indicios del acre debate interno que la operación había provocado. Sin embargo, existían pistas de que algo había salido mal. El domingo 21 de octubre, un día después del ataque, el periódico londinense *Sunday Telegraph* informó que Estados Unidos había solicitado el inmediato envío a Afganistán de todo el regimiento de comandos de élite británicos, el llamado Special Air Service o SAS. Oficiales norteamericanos me dijeron ese mismo mes que las autoridades militares británicas asignadas al Mando Central estaban instando al Pentágono a abandonar sus operaciones aerotransportadas dentro de Afganistán y llevar la guerra al terreno de los talibanes mediante el establecimiento de grandes bases de artillería. La postura británica, explicaba un oficial, era: «Tenemos que decirles a los talibanes: "Ahora formamos parte de vuestra cuadrícula —es decir, estamos en vuestro territorio—. ¿Qué vais a hacer al respecto?"».

En las discusiones que siguieron a la acción militar, muchos oficiales de la Delta Force se mostraron, en palabras de

un militar, «todavía indignados». El Pentágono no podía explicar a los norteamericanos lo que había pasado realmente en Kandahar, añadió airadamente, «porque no quiere que parezca que no saben lo que se hacen». Otro oficial de alto rango me dijo: «Es el mismo *modus operandi* de los últimos diez años». Calificó de torpe la manera en la que el Mando Central había planificado la misión y dijo: «Franks no tiene ni puñetera idea». De la Delta Force dijo: «Estos tíos están escaldados desde Mogadiscio. Quieren hacerlo bien y se entrenan a fondo. No deberían encargarles una estupidez. —Hizo una pausa y añadió—: Iremos allí, pero la cosa se va a poner fea».

El 26 de octubre, el líder guerrillero afgano Abdul Haq, héroe de la guerra contra la Unión Soviética y posteriormente uno de los elementos más destacados en la guerra contra los talibanes, era asesinado. Según informó la prensa, Haq fue objeto de una emboscada y ejecutado dos días después en el este de Afganistán. Los talibanes dijeron que Haq trabajaba para Estados Unidos y que llevaba consigo una gran suma de dinero, presumiblemente para inducir a la deserción a cabecillas talibanes. Una crónica aparecida en un diario afgano citaba a un portavoz de los talibanes diciendo que cincuenta seguidores de Haq, entre los que podría haber habido «extranjeros», habían sido cercados también.

La muerte de Haq representó un serio revés para la campaña antitalibán norteamericana. Un amigo íntimo de Haq, Kurt Lohbeck, corresponsal que había cubierto la guerra afgano-soviética para CBS, reconoció en entrevista telefónica aquella misma semana que Haq, un hombre que se ufanaba de su independencia, estaba cumpliendo una misión para la CIA en el momento de la emboscada, aunque «él nunca trabajó con ellos ni para ellos, y tampoco le caían bien». Lohbeck me explicó que Haq «tenía a dos o tres jefes talibanes dispuestos a desertar, e iba a ofrecerles dinero y el respaldo de la CIA». Sin embargo, los talibanes lo engañaron. «Estoy furioso con la CIA —añadió—. No le proporcionaron seguridad operacional».

Octubre tocaba a su fin y Bin Laden continuaba eludiendo a las fuerzas norteamericanas; en el Pentágono y la Casa Blanca corrían rumores de que las expectativas de atraparlo se habían reducido. Un antiguo alto funcionario de inteligencia dijo que los ataques por aire habían «contenido» a Bin Laden y la cúpula talibán, pero no habló de las perspectivas de capturarlo. Bin Laden, me dijo un general, «está escondido en una guarida a casi dos mil metros de altitud muriéndose de frío». Un ex funcionario de inteligencia añadió: «Lo que me preocupa es que, dentro de un mes, Bin Laden salga en la cadena Al Yazira haciéndonos cuchufletas. Sería una enorme pérdida de prestigio para Estados Unidos».

Un alto funcionario con quien hablé al mes de haber empezado la guerra reconoció que habían tenido serios problemas hasta ahora, pero añadió: «Es como leer una novela de misterio de seiscientas páginas. El asesinato se resuelve en las cuatro o cinco últimas, pero para eso tienes que leerte las quinientas y pico anteriores».

La huida

En noviembre de 2001, la Alianza del Norte, con el respaldo de las Fuerzas Especiales y envalentonada por la precisión de los bombarderos estadounidenses, obligó a millares de talibanes y guerrilleros de Al Qaeda a retroceder hacia la ciudad de Kunduz, en el norte montañoso del país. Con ellos había también paquistaníes: oficiales del ejército, asesores de espionaje y voluntarios que combatían del lado talibán. Pakistán había respaldado militar y económicamente a los talibanes desde el inicio de su larga guerra contra la Alianza del Norte, y mucho militares paquistaníes mantienen vínculos personales y religiosos con ellos que se remontan a la guerra contra la Unión Soviética. Muchos de los combatientes habían huido de derrotas previas en el oeste del país (Mazar-i-Sharif), el este (Taloqan) y el sur (Pul-i-Jumri). La carretera a Kabul, posible punto de retirada, estaba cortada y era blan-

co recurrente de los bombarderos americanos. Kunduz era un lugar seguro contra las bombas y les permitiría negociar la rendición en términos indoloros, como tienen por costumbre las tribus afganas.

Las negociaciones para la rendición empezaron de inmediato, pero la Administración Bush se opuso a ellas tajantemente... y con éxito. El 25 de noviembre, la Alianza del Norte tomó Kunduz e hizo unos cuatro mil prisioneros, entre talibanes y gente de Al Qaeda. Un día después, el presidente Bush decía: «Los estamos asfixiando. Están saliendo de las cuevas por piernas, y ahora los vamos a llevar ante los tribunales».

Sin embargo, con el asedio todavía no concluido, el *New York Times* y otros medios publicaron una serie de desconcertantes reportajes en los que se citaba a oficiales de la Alianza del Norte afirmando que aviones paquistaníes habían aterrizado en Kunduz para evacuar a sus compatriotas. Oficiales de Estados Unidos y Pakistán se negaron a confirmar dichas informaciones. El 16 de noviembre, cuando los periodistas preguntaron a Rumsfeld sobre estos supuestos rescates, él les quitó importancia. «Si los vemos [a los aviones], los abatiremos». Cinco días después el propio Rumsfeld declaraba: «La idea de que estas personas puedan tener la menor posibilidad de abandonar Afganistán para llevar el terror a otros países y desestabilizarlos es absolutamente errónea». En una rueda de prensa convocada en el Pentágono el lunes 26 de noviembre, tras la caída de Kunduz, el general Myers fue interpelado acerca del mismo punto. El general eludió la pregunta pero declaró: «La pista del aeródromo está inservible. Aunque algunos tramos se pueden utilizar, son demasiado cortos para aviones de transporte normales. No sabemos con certeza de dónde salen esas informaciones».

Funcionarios paquistaníes negaron la veracidad de tales rescates, e insistieron, como hicieron durante toda la guerra de Afganistán, en que no había personal militar paquistaní en dicho país. Anuar Mehmood, portavoz del Gobierno, declaró a los periodistas que las informaciones sobre un supuesto puente aéreo paquistaní eran «pura bazofia».

Sin embargo, en entrevistas posteriores, funcionarios del espionaje estadounidense y militares de alta graduación me aseguraron que los paquistaníes fueron evacuados de Kunduz mediante un puente aéreo nocturno autorizado por la Administración Bush. Dijeron también que lo que en principio debía ser una evacuación restringida acabó siendo una operación descontrolada, y que, en medio del revuelo, un número desconocido de talibanes y miembros de Al Qaeda logró sumarse al éxodo. Como me dijo un alto funcionario de inteligencia: «Se nos coló tierra por el tamiz».

El general Pervez Musharraf, hombre fuerte de Pakistán tras el golpe de Estado de 1999, había puesto en peligro su posición respecto a los fundamentalistas islámicos —y quizá también su vida— al respaldar la ofensiva norteamericana contra Afganistán y el apoyo de Estados Unidos a la Alianza del Norte. Con ocasión de la crisis de Kunduz, su decisión pareció aún más peligrosa. El principal objetivo norteamericano en Afganistán había sido, no tanto eliminar por completo la presencia talibán, sino socavar al régimen y a Al Qaeda dejando intactos a los elementos talibanes «moderados», que tendrían un papel en el nuevo Gobierno que se instalase después de la guerra. De este modo, Pakistán no acabaría teniendo en sus fronteras un régimen dominado completamente por la Alianza del Norte. A mediados de noviembre de 2001 no había ninguna duda de que ésta conquistaría rápidamente Afganistán. Algunos temían que, tan pronto la Alianza tomase Kunduz, se producirían ejecuciones en masa de los vencidos, en especial de los combatientes extranjeros.

Musharraf consiguió el apoyo estadounidense al rescate aéreo aduciendo que la humillación de perder a cientos —quizá millares— de militares y agentes de inteligencia paquistaníes podía poner en peligro su propia supervivencia política. «Hablando en plata, existe muy buena disposición para ayudar a Musharraf», me dijo un hombre vinculado a la inteligencia estadounidense. Un analista de la CIA comentó que tenía entendido que la decisión de permitir el puente aéreo surgió de

la Casa Blanca y que, efectivamente, respondía a un deseo de proteger al líder paquistaní. Según un ex alto funcionario de Defensa, el puente aéreo se autorizó debido a la insistencia de los paquistaníes en que «había personas —agentes del espionaje y personal clandestino— que necesitaban salir de aquella ratonera».

Una vez en marcha, dijo un asesor del Departamento de Defensa, el puente aéreo fue un verdadero caos. «Todo el mundo se traía a sus amigos —dijo, refiriéndose a afganos con los que los paquistaníes habían trabajado y a quienes habían adiestrado o utilizado para operaciones de espionaje—. No ibas a dejarlos en tierra para que les cortaran el cuello». Rememorando la evacuación de norteamericanos en las postrimerías de la guerra de Vietnam, en 1975, añadió: «Cuando salimos de Saigón nos llevamos con nosotros a nuestros muchachos —survietnamitas de relevancia—. ¿Cuántas personas caben en un helicóptero? ¿Diez? Pues nosotros metíamos catorce».

Algunos analistas de la CIA creían que Bin Laden eludió ser capturado al inicio de la guerra gracias a la ayuda de elementos del espionaje paquistaní. A finales de octubre, un alto funcionario de la Administración me había dicho que, pese a las bombas y los esfuerzos de la CIA sobre el terreno por persuadir a los jefes talibanes de que desertaran, «nos preguntamos cómo es que no ha habido una deserción significativa». En una entrevista posterior, un ex agente de la CIA proporcionó un motivo concreto para dicho fracaso. La agencia, dijo, no tenía apenas a nadie en la zona que hablara pastu, la lengua de los talibanes, y había tenido que recurrir a agentes del ISI (el servicio de inteligencia paquistaní) para comunicar sus ofertas a posibles desertores. De este modo, dijo, «los mismos agentes paquistaníes que formaron a los talibanes hacen de traductores para la CIA. Es como usar a los Gotti para traducir una conversación con los Luchese»[2]. Otro funcionario de inteligencia describía el problema del idioma en Afganistán como una «cosa de locos».

[2] Gotti y Luchese. Dos familias mafiosas rivales. *(N. de los T.)*

Y añadió: «Nuestro mayor error es permitir que el ISI sea nuestros ojos y nuestros oídos».

El puente aéreo «tuvo sentido en su momento —dijo el analista de la CIA—. Muchas de las personas que evacuaron pertenecían a la jefatura talibán», y los paquistaníes confiaban en que desempeñarían un papel en el futuro Gobierno de Afganistán. «Musharraf quería tenerlos en su poder a fin de poner otra carta sobre la mesa» en futuras negociaciones políticas. «Se suponía que íbamos a tener acceso a ellos, pero luego no fue así». Y el espionaje norteamericano se quedó con las ganas de interrogar a los talibanes rescatados.

Ninguno de los funcionarios de la inteligencia norteamericana con los que tuve oportunidad de hablar pudo decirme con certeza cuántos talibanes y miembros de Al Qaeda fueron evacuados por aire o consiguieron escapar de Kunduz por otros medios. Agentes de la principal unidad de espionaje hindú —la RAW, por Research and Analysis Wing (Ala de Investigación y Análisis)— informaron ampliamente sobre la evacuación de paquistaníes de Kunduz. La RAW tiene excelente acceso a la Alianza del Norte y cuenta con medios extremadamente sofisticados para interceptar comunicaciones electrónicas. Un asesor militar hindú se jactaba de que cuando empezó la evacuación, «nosotros lo supimos a los pocos minutos». En entrevistas realizadas en Nueva Delhi poco después de la evacuación, funcionarios de la inteligencia y seguridad nacional hindúes me dijeron repetidamente que se había rescatado no sólo a militares paquistaníes, sino también a civiles de dicho país que habían ido como voluntarios para luchar contra la Alianza, además de talibanes y miembros de Al Qaeda no paquistaníes. Brajesh Mishra, asesor para seguridad nacional de la India, dijo que su Gobierno había calculado en aproximadamente cinco mil el número de paquistaníes y talibanes rescatados.

Según un analista de la RAW para asuntos afganos y paquistaníes, los evacuaciones más importantes se llevaron a cabo en tres noches consecutivas en el momento de la caída de Kunduz. La inteligencia hindú había llegado a la conclu-

sión de que ocho mil o más hombres permanecían atrapados dentro de la ciudad en los últimos días del asedio, de los que aproximadamente la mitad eran paquistaníes. (Afganos, uzbekos, chechenos y mercenarios árabes completaban la otra mitad). Al menos cinco vuelos fueron específicamente «confirmados» por informadores hindúes, me dijo el analista de la RAW, pero se daba por hecho que había habido muchos más.

Según la valoración hindú, tres mil trescientos prisioneros se rindieron a una facción tribal de la Alianza liderada por el general Abdul Rashid Dostum. Varios centenares de talibanes fueron asimismo entregados a otros jefes tribales. Se desconocía, por tanto, la suerte de entre cuatro y cinco mil hombres. «¿Dónde está el resto?», se preguntaba el funcionario hindú. Según su opinión, dos generales del ejército paquistaní iban en esos vuelos.

La Administración Bush pudo hacer algo más que dar su visto bueno al rescate: en el punto culminante del asedio, según un funcionario de la CIA y un analista militar que ha trabajado con la Delta Force —la unidad de élite que estaba atacando a los talibanes sobre el terreno—, la Administración Bush ordenó al Mando Central que organizara un pasillo aéreo para garantizar la seguridad de los vuelos de rescate paquistaníes desde Kunduz hasta el extremo noroccidental de Pakistán, a unos trescientos kilómetros de distancia. La orden produjo un gran descontento en algunos miembros de la Delta Force. «Estos chicos participaron en la operación *Tormenta del Desierto* y estuvieron en Mogadiscio —dijo el analista—. Para ellos las cosas son o blancas o negras. "Descontento" no es la palabra. Se supone que están ahí para acabar con los terroristas». El puente aéreo también incomodó a la Alianza del Norte, cuya jefatura, según Reuel Gerecht, ex agente de la CIA para Oriente Próximo, había intentado sin éxito durante años «hacer que la gente tomara conciencia del elemento paquistaní» entre los talibanes. La Alianza estaba ansiosa por capturar en Kunduz «a militares y agentes del espionaje paquistaní de primera línea —dijo Gerecht—. Cuando empezaron los vuelos de evacuación, eso tocó una fibra».

Diciembre de 2001 resultó el momento álgido de la intervención estadounidense en Afganistán. Las tropas de la Alianza, respaldadas por la aviación y las unidades especiales norteamericanas, tomaron Kabul obligando a los talibanes a dejar el poder. En una conferencia de diversas facciones afganas celebrada en Bonn, el candidato de la Administración Bush, Hamid Karzai, fue nombrado presidente del Gobierno interino. (Su nombramiento sería confirmado seis meses más tarde en un consejo tribal afgano, la Loya Jirga, cuidadosamente orquestado). Fue un hecho significativo, pero hubo fallos importantes en el acuerdo. No hubo consenso sobre cuestiones tan importantes como el establecimiento de una fuerza policial internacional, los procedimientos para recaudar impuestos, la estrategia para desarmar a las milicias y a los civiles afganos, y una resolución concreta sobre los talibanes.

«La lucha contra Bin Laden sigue en pie como el primer día —me dijo un analista en enero de 2002—. Ha escapado. Durante semanas hemos buscado objetivos para bombardear, pero todo ha sido en vano».

Ese mismo mes, Donald Rumsfeld dijo a los periodistas que creía que Bin Laden seguía en Afganistán. Al mismo tiempo, un alto funcionario de la CIA me comentó que en la agencia había opiniones encontradas acerca del paradero de Bin Laden. «Realmente no sabemos dónde está —dijo—. Daremos con él, pero quien diga que conocemos su paradero se está tirando un farol».

Hay cosas que quedan por escribir y que deberían haber sido escritas. Lo que sigue trata de una operación militar estadounidense realizada en marzo de 2002 en las montañas lindantes con Pakistán. Tanto la prensa como los militares se sentían frustrados respecto al avance de las operaciones en Afganistán. Osama bin Laden seguía en libertad y los talibanes, lejos de ser aplastados, habían conseguido retroceder y reagruparse en las montañas. El Pentágono presentó esta operación a la opinión pública como un ejemplo de la tenacidad norteamericana y de su determinación a ampliar la guerra por

tierra a todos los reductos, incluso los más inaccesibles, de Al Qaeda. En esto, la Administración Bush se anotó varios puntos en su partida con la prensa norteamericana.

Durante mi investigación, algunas personas me dijeron que la operación no había sido coser y cantar, como la había pintado el Pentágono. Comenté mis datos con el general retirado Wesley Clark, ex comandante en jefe de la OTAN, que luego sería candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Clark, como de costumbre, estaba al corriente de lo sucedido en las montañas —sus contactos dentro del ejército eran excelentes— y tenía una opinión clara al respecto. Cuando, dos años después, me topé con él en un estudio de televisión, me sorprendió al preguntarme cómo era que *The New Yorker* no había publicado nada al respecto. Me salí por la tangente y el ex general me fulminó con la mirada. Entonces, en términos muy enfáticos, me dijo que yo debería haber hecho lo posible por dar a conocer la verdad de la historia y que, a su entender, si la opinión pública hubiera comprendido la falta de recursos que el ejército tenía en Afganistán, «después se habrían podido salvar muchas vidas».

Semanas antes de que el 2 de marzo de 2002 el ejército lanzara una ofensiva por tierra contra las fuerzas de Al Qaeda atrincheradas en las montañas de Shah-i-Kot, en el este del país, se produjo una encendida disputa interna sobre tácticas, según cuentan militares y funcionarios de inteligencia en activo y retirados. El ataque, bautizado como operación *Anaconda* y elogiado como un triunfo por el Pentágono, se saldó con ocho estadounidenses muertos y cuarenta heridos, además de una cifra desconocida de bajas entre afganos que colaboraban con los norteamericanos.

El plan, elaborado por oficiales del Mando Central, en ese momento a cargo del general Tommy Franks, preveía que un convoy de fuerzas afganas y estadounidenses recorriera la única carretera de montaña que enlaza la localidad de Gardez con el valle de Shah-i-Kot, donde en los meses previos se había ido agrupando un nutrido contingente de fuerzas tali-

banes y de Al Qaeda. Pude saber que oficiales de alta graduación del Cuerpo de Marines se opusieron firmemente a la operación *Anaconda* y que, visto que los planes para la ofensiva no eran modificados, al final tomaron la difícil decisión de no participar activamente.

La disputa entre los marines y el Mando Central se remontaba a diciembre de 2001, me informaron algunos oficiales, cuando el general Franks hizo público que quizá ordenaría a una compañía reforzada de marines (en ese momento su misión era proteger un aeródromo cercano a Kandahar) que empezara a peinar las cuevas próximas a Tora Bora con ayuda del ejército. Un portavoz del Mando Central declaró a la prensa el 26 de diciembre que los marines «están entrenados para cumplir este tipo de misiones, y si él [Franks] cree necesario llamarlos, lo hará». La compañía de marines, parte de una Unidad Expedicionaria independiente, no llegó a ir a Tora Bora. Donald Rumsfeld quitó hierro al asunto en una rueda de prensa celebrada en el Pentágono: «Eso que dicen los periódicos, de que primero hubo una decisión de enviar quinientos marines y luego otra de no enviar quinientos marines, es pura rumorología periodística».

De hecho, tanto en círculos militares como de la inteligencia se decía que la idea de Franks de enviar marines a Tora Bora fue en su momento muy mal recibida por el Cuerpo de Marines, que desde la Segunda Guerra Mundial ha insistido en operar como una unidad independiente. Al final, ambas partes elaboraron un insólito memorándum de entendimiento que resumía las condiciones en las que los marines habrían de operar. «Se trata de saber cuál es la misión», dijo un asesor del Pentágono. «Nosotros no somos el ejército —me dijo un antiguo estratega de marines—, ya que no sólo realizamos operaciones por tierra. Tampoco somos la fuerza aérea, puesto que no operamos únicamente por aire. Nosotros actuamos con artillería y blindados propios, y con nuestro propio apoyo aéreo. Si siempre ganamos es porque lo hacemos todo».

La insistencia del Mando Central en utilizar marines en lo que éstos consideraban una misión de alto riesgo avivó las

rencillas entre cuerpos. Un problema notorio, me dijeron varios funcionarios, era la falta de información fidedigna. Un ex funcionario de inteligencia me comentó que los estrategas del Mando Central eran incapaces de decir a los marines si Al Qaeda «plantaría cara o echaría a correr. Eso sacó de quicio a los marines. ¿Se puede ser tan tonto? El Mando Central dijo: "Puede que peleen o que echen a correr". La respuesta de los marines fue: "Iros al infierno. Nosotros pasamos. No estamos dispuestos a jugar con la vida de nuestros chavales". Por eso me gustan tanto los marines».

«Si intentáis obligarnos a hacerlo —les dijo un alto mando de los marines—, lo haremos público y explicaremos todo el asunto, incluida la existencia de ese memorándum de entendimiento. La opinión pública se pondrá de nuestra parte». Los marines no fueron incluidos en el plan definitivo.

Otro de los puntos de fricción fue la negativa inicial del Mando Central a modificar su plan de ataque para incluir un informe de última hora de un equipo SEAL (las Fuerzas Especiales de la Armada) que había descubierto otra red de cuevas en el valle de Shah-i-Kot. Dicho complejo parecía estar ocupado por Al Qaeda. Los SEAL sugerían que las cuevas «debían incluirse en los objetivos, pero el Mando Central no estaba dispuesto a retrasar el ataque», dijo el ex funcionario. Los estrategas habían fijado la operación al detalle, añadió, y «su actitud es que vosotros tenéis que ejecutar el plan, aun cuando una vez sobre el terreno haya que hacer cambios. Los coroneles [del Mando Central] se obstinaban en no cambiar nada». Según este ex funcionario, los SEAL insistieron en que «no podrían avanzar más hasta que se bombardeara la zona». Sus quejas obtuvieron escasa respuesta, dijo, hasta que el teniente general T. Michael *Buzz* Moseley, comandante del sector aéreo del Mando Central, intervino para decir: «Podemos hacerlo». «Al final —comentó el ex funcionario— prevaleció la lógica. Todavía no entiendo cómo pudo producirse un debate por una cosa así».

Muchos miembros de la fuerza aérea consideraban confusas, y hasta hostiles, las acciones del general Franks y el co-

mandante en jefe del ejército en Afganistán, el general de división Frank Hagenbeck. Meses después de la operación, conseguí una copia de un informe de la fuerza aérea sobre *Anaconda* en el que básicamente se acusaba al ejército de poner en peligro a los soldados al excluir a la fuerza aérea del proceso de planificación. «La exclusión del componente aéreo fue deliberada y tuvo como consecuencia una operación conjunta por debajo de lo óptimo», decía el informe. El estudio apuntaba también que había «grandes riesgos» en las zonas de aterrizaje de helicópteros donde serían desembarcadas tropas de combate de la 10ª División de Montaña y la 101ª Aerotransportada, porque el ejército se había negado a autorizar incursiones aéreas previas que sofocaran y tal vez eliminaran el fuego enemigo. A los estrategas de la fuerza aérea se les dijo, según este estudio, que los generales Franks y Hagenbeck rechazaban el bombardeo anticipado porque querían «mantener el elemento sorpresa... Querían hacerlo ellos sin ayuda de nadie». La presentación de este informe de la fuerza aérea, que tuvo lugar en el Mando de Combate Aéreo de Langley (Virginia), concluía con un lacónico comentario sobre que «la sorpresa era muy problemática», puesto que en la zona ya se sabía que iba a haber una ofensiva. Un estratega de la fuerza aérea me comentó después, enfadado, que el general Franks no había querido utilizar el poderío aéreo.

Un asesor del Pentágono me dijo que algunos aspectos clave del plan de batalla, estudiados previamente por el Mando Central, no habían sido decididos por el Estado Mayor Conjunto sino por funcionarios civiles de la oficina de la Secretaría de Defensa; por ejemplo, la insistencia en emplear una fuerza reducida. Y añadió que las diversas unidades de Fuerzas Especiales —incluidos equipos SEAL y la Delta Force— habían estado evitando la cadena de mando militar y llamando directamente a la oficina en la Casa Blanca de Wayne Downing, un general retirado que había dirigido las Fuerzas Especiales durante la guerra del Golfo y después del 11-S se convirtió en asesor presidencial en temas de antiterrorismo. «Necesitaban un supervisor adulto que dijera "Basta de ton-

terías"», dijo el asesor del Pentágono. Un funcionario de inteligencia retirado describió el sistema del Mando Central como «defectuoso. Todo el mundo está acobardado, no saben cómo actuar».

Los hechos justificarían la cautela de los marines. Los primeros camiones que enfilaron la carretera repletos de combatientes afganos, que acababan de pasar por un cursillo de adiestramiento con las Fuerzas Especiales estadounidenses, fueron castigados con fuego de mortero en un punto concreto del trayecto, con el resultado de cuarenta heridos o muertos. Los de Al Qaeda habían «chequeado» su fuego de mortero —es decir, lo habían calibrado previamente para golpear determinados tramos de la carretera— con la máxima eficacia, dijo el empleado del Pentágono. Tras batirse en retirada, los afganos pusieron el grito en el cielo cuando se les ordenó volver a tomar la carretera monte arriba. «Sabían que la primera oleada había sido machacada», dijo un ex funcionario de la CIA.

«Era evidente que el enemigo tenía tiempo para volver a situar sus emplazamientos de mortero. Tan evidente como que estaban preparados para nuestro avance; lo estaban desde hacía dos meses e iban a luchar hasta el final. Nosotros sabíamos que estaban allí, pero por lo visto desconocíamos el emplazamiento y dirección de sus morteros», dijo el ex funcionario de la CIA.

El asesor del Pentágono explicó que el Mando Central, al planificar su estrategia, no había tenido en cuenta «ir tragando sistemática y paulatinamente secciones de terreno» con fuego de mortero y artillería. «Aquello fue simplemente saltar a los camiones, subir una cuesta y decir: "Joder, nos disparan"». (El ex funcionario de la CIA dijo: «No hace falta ser militar para entender que antes de una ofensiva por tierra hay que barrer el camino a bombazos»).

El general Franks, en rueda de prensa el 4 de marzo, dijo: «No es cuestión de bombardear arbitrariamente, creo yo». La operación *Anaconda* era un trabajo para el ejército con-

vencional, afirmó. «En definitiva —dijo—, la manera más segura de luchar contra el enemigo es tener gente sobre el terreno, y eso es lo que hemos hecho en este caso, el motivo de que lo hiciéramos de esa manera y no de otra».

La ofensiva por tierra fue sincronizada con un ataque de helicópteros en las montañas. Los helicópteros desembarcarían dos compañías de la 2ª Brigada de la 10ª División de Montaña en una zona despejada en un extremo del valle; su misión era destruir las fuerzas de Al Qaeda que, si todo salía como estaba previsto, huirían del ataque por tierra de las Fuerzas Especiales y el contingente afgano. No fue así. Los norteamericanos fueron atacados mientras descendían de los helicópteros —de nuevo con fuego de mortero «chequeado»— y sufrieron bajas inmediatamente. Un ex funcionario de antiterrorismo de la CIA me dijo entonces: «A nivel táctico fue un completo desastre. Un fracaso total». Un ex oficial de marines comentó: «La cadena de mando se colapsó. Los soldados jóvenes gritaban y arrojaban sus armas. Aquello fue una desbandada». La zona de aterrizaje quedó sembrada de armas, mochilas, gafas de visión nocturna y radios, mientras los soldados corrían montaña abajo para ponerse a cubierto.

El general retirado Wesley Clark defendió a los soldados y criticó a los mandos por enviar tropas a combatir con escaso adiestramiento y conocimiento de las condiciones a las que se enfrentarían. «Se perdieron unas cuantas gafas de visión nocturna, bueno, ¿qué más da? ¿Qué es peor, que maten a nuestra gente o perder unas cuantas gafas? Que unos cuantos muchachos se descontrolaran no es bueno, pero la mayoría se comportó estupendamente».

Mucho más preocupante, dijo Clark, fue que la 2ª Brigada de la 10ª División de Montaña no estuviera bien preparada para entrar en combate. «Ha sido una parodia durante años —dijo Clark—. Hay unidades ineptas por todas partes. Es lo que pasa por querer hacer las cosas en plan chapucero. ¿Y quién sufre las consecuencias? Nuestros muchachos».

Un ex agente de inteligencia confirmó que los mandos estacionados en Afganistán conocían de sobra las flaquezas

de la 10ª de Montaña en materia de efectivos y adiestramiento. En el último momento, unas semanas antes de la ofensiva de marzo, dijo, sargentos de la Delta Force fueron destinados a la 2ª Brigada como oficiales de adiestramiento. Estos instructores descubrieron que los soldados «no sabían qué era seguridad perimétrica, ni siquiera cómo limpiar sus armas». La advertencia al alto mando del ejército fue clara: «Si entran en combate los harán papilla».

Siete de los ocho americanos muertos en la operación *Anaconda* eran miembros de un equipo SEAL cuya misión inicial, junto con otras unidades de Fuerzas Especiales, era sacar a los de Al Qaeda de sus escondites y ponerlos al alcance de las unidades del ejército. Ese aspecto del plan de ataque fue descartado a primera hora de la mañana después de que un SEAL cayera accidentalmente de un helicóptero y al punto fuese blanco del fuego de Al Qaeda. El comando, que sólo llevaba un arma corta, se defendió valerosa pero inútilmente. Un pelotón de las Fuerzas Especiales acudió en su rescate, sin saber que ya estaba muerto. Uno de los helicópteros, en su esfuerzo por mantener la velocidad y la maniobrabilidad, fue seriamente tocado por fuego de tierra. En las horas siguientes, otros seis estadounidenses resultaron muertos y once fueron heridos antes de que los helicópteros pudieran sortear el fuego enemigo y acercarse al lugar donde estaban los rescatadores desperdigados.

Lo que ocurrió durante aquellas horas «sigue envuelto en un velo de misterio», informó el *Los Angeles Times*. A mí, sin embargo, me contaron que quienes habían rescatado a los supervivientes no fueron norteamericanos, sino un comando del SAS australiano que varios días antes se había situado más arriba del escenario del combate para ayudar en la coordinación del ataque y aportar reconocimiento estratégico en las montañas. «De hecho, los australianos se salieron de su misión y atacaron y ahuyentaron a los afganos —dijo un ex oficial de marines—. De no ser por ellos habríamos perdido a todo el equipo». Un funcionario del Pentágono confirmó posteriormente la ayuda australiana, que no llegó a hacerse pública.

«El ejército no quiere hablar de eso porque les da vergüenza», dijo el oficial, aunque añadió que también agradecían la ayuda. El ex funcionario de antiterrorismo de la CIA dio otra razón para ese silencio: «Hay mucha gente que lo sabe, pero piensa que no es patriótico sacar a relucir los trapos sucios».

Los funcionarios del Pentágono se mostraron reacios a proporcionar la cifra de bajas afganas aliadas y han tenido poco que decir respecto a las afirmaciones afganas —hechas a periodistas en el lugar de los hechos— sobre numerosas bajas en la carretera.

En los días y semanas siguientes a la batalla, el ejército hizo todo lo posible por convertir la operación *Anaconda* en una carrera triunfal. Varios periodistas hablaron con soldados de la 10ª División de Montaña, algunos de los cuales contaron la verdad sobre el caos y el pánico de aquella primera mañana. Una de las pocas crónicas detalladas apareció en un artículo de Charles Clover para el *Financial Times* el 11 de marzo de 2002: «En muchos casos, los hombres tuvieron que correr para ponerse a salvo, a menudo desembarazándose de sus mochilas con misiles portátiles para correr más rápido. Los hombres de Al Qaeda se reían de ellos cuando trataron de disparar con fusiles y ametralladoras. En muy pocos casos los estadounidenses pudieron acercarse lo suficiente para saber contra quién estaban luchando».

Pero la mayoría de la prensa compartía el interés del ejército en destacar la parte positiva. Una crónica del *Los Angeles Times*, publicada el 24 de marzo, apuntaba que «gran parte del plan había acabado en una retirada desordenada» con numerosas bajas. Pero los mandos de la división, añadía, «no se desanimaron». Y citaba al teniente coronel David Gray, jefe de operaciones de la división: «La situación era espantosa, pero los helicópteros habían conseguido concretar dónde estaba exactamente el punto decisivo del campo de batalla. Encontramos al enemigo el primer día». Desde luego, una manera novedosa de explicar el haber caído en una emboscada.

El mal sabor de boca era persistente. «Opino que para los marines es una verdadera vergüenza tener que negarse a

una operación de combate —me dijo Wesley Clark—. No existe la alternativa de rechazar una misión. No debería existir esa alternativa». El estratega de la fuerza aérea dijo: «El ejército habla de determinación porque envió a un puñado de chavales sin ningún plan y sin saber cómo combatir en la alta montaña, y por eso murieron».

La operación *Anaconda* terminó oficialmente el 18 de marzo. En las dos semanas siguientes las fuerzas del ejército se reagruparon y, con el apoyo de los bombarderos, consiguieron desalojar a la resistencia talibán y Al Qaeda y tomar cuevas y túneles. Hubo numerosas informaciones en la prensa en el sentido de que la mayor parte de las fuerzas enemigas había eludido lo más duro de la ofensiva norteamericana escabulléndose por las montañas hasta la vecina Pakistán, como habían hecho meses antes en Kunduz. Los mandos del ejército en Afganistán elogiaron la operación como una batalla muy importante que ponía de manifiesto la determinación de Estados Unidos, y aseguraron que al menos setecientos miembros de Al Qaeda y aliados suyos habían muerto. Sin embargo, según la revista *Newsweek*, al término de la batalla se encontraron en las montañas menos de diez cadáveres.

En el momento de la operación *Anaconda*, el coste de la guerra era ya mucho mayor de lo que creía la opinión pública. El ex funcionario de los servicios de inteligencia me dijo que la CIA y los militares habían pagado muchos millones de dólares a los jefes de la Alianza del Norte y otras facciones tribales a cambio de apoyo constante en la guerra. A mediados de noviembre de 2001, un alto mando de la Alianza recibió de la CIA a primera hora de la mañana un pago de un millón de dólares antes de enviar sus tropas a una batalla contra los talibanes cerca de Mazar-i-Sharif. Fueron derrotadas y hubieron de retirarse. Entonces la CIA le pagó otro millón aquella misma tarde para que reagrupase sus efectivos y los obligara a volver al campo de batalla. Un análisis realizado en 2002 por Desmond Ball, experto en inteligencia de la Universidad Nacional en Canberra (Australia), afirmaba

que Estados Unidos había centrado casi cincuenta satélites de inteligencia, comunicaciones, navegación y meteorológicos en Afganistán, con un coste total de veinticinco mil millones de dólares. Miles de millones más para sistemas de satélites ultrasecretos se añadieron al presupuesto de Defensa del siguiente año.

El ex funcionario de antiterrorismo de la CIA me dijo que en la agencia muchos veían la operación *Anaconda* como un último grito de victoria en lo que respecta a la intervención directa estadounidense en el conflicto de Afganistán. «La idea era hacer eso y largarse de allí —dijo—. Venía a ser el acto final de la obra». El ex funcionario, que a principios de 2002 había trabajado en el puesto clandestino de la agencia en Kabul, añadió que había una creciente preocupación por la seguridad, incluso en el propio Kabul, donde el personal de la Embajada y de la CIA tenía que consultar al servicio de seguridad antes de salir a la calle. En otras partes de Afganistán las condiciones eran mucho peores, pues varios clanes tribales se disputaban el control de la situación. Y añadió: «El castillo de naipes —el régimen talibán— se vino abajo antes de lo esperado, y nosotros no teníamos ni idea de qué hacer después».

El mismo ex funcionario de la CIA me contó que un importante espía de la agencia le había confesado, mientras tomaban unas copas en Kabul, que estaba «abrumado por lo ignorantes que son en la plana mayor» y por lo difícil que era proporcionar información al complicado engranaje de la agencia. «Todo lo basan en sesiones informativas que te dan lo esencial de lo esencial de lo esencial. La plana mayor no se entera absolutamente de nada, pero en las altas esferas la lealtad es más importante que la eficacia». Cuando regresó, dijo, él mismo se quedó anonadado ante la desconexión entre lo que percibían los agentes en Afganistán y la idea que se hacían de la situación en Washington. «Lo que me preocupa es que el presidente y el propio Cheney no estén siendo bien asesorados. Lo que está pasando es difícil de manejar, y nosotros —refiriéndose a la gente de la CIA sobre el terreno— tene-

mos que llevar a la práctica decisiones tomadas antes de que nadie haya verificado todos los datos. No hay una idea clara respecto a dónde se quiere llegar y qué se supone que se encontrará una vez allí», dijo el antiguo funcionario.

«Esto pasa de preocupante —prosiguió—. La guerra contra el terrorismo es un fracaso total... con todas las letras».

En entrevistas concedidas a principios de 2002, militares y funcionarios de inteligencia en activo o retirados —hombres que están lejos de ser disidentes— se preguntaban si la Administración tenía previsto un final coherente para la guerra de Afganistán. Cuestionaban también la creencia de la Administración de que una victoria rotunda sobre el resto del contingente de Al Qaeda en Afganistán sería decisiva para la guerra contra el terrorismo. «Hemos perdido de vista nuestro objetivo —frenar la extensión del terrorismo— y hemos redoblado nuestros esfuerzos —me dijo un ex alto funcionario de inteligencia—. Ahora nos dedicamos a eliminar elementos de tercera fila. Esto nos está absorbiendo, como les pasó a los rusos».

El consejero del Pentágono, que se retiró del servicio activo con las más altas distinciones, me dijo que la operación *Anaconda* planteó serios problemas de mando y control: «¿Quién coño mandaba?». Pero añadió que los fallos en la cadena de mando no tenían por qué ser un «problema grave» en relación con el conjunto de la intervención en Afganistán. «No son tantos como para que debamos preocuparnos. Podemos arrojarles bombas más potentes que la de Hiroshima en el 45 —dijo—. Por suerte es un enemigo de tercera división». No lo veía tan claro, añadió, en cuanto a la capacidad del sistema para afrontar una crisis de verdad, y temía que el resultado inevitable fuesen futuros ataques terroristas en Estados Unidos. «Con Bush padre, Powell y Cheney formaban una unidad compacta y funcionaban como equipo», dijo. Por el contrario, la actual Administración «no es un grupo coherente. Hay demasiadas luchas internas».

El consejero continuaba así: «Lo que no sé es si ellos saben cómo va a terminar esto de Afganistán». En una reunión

le preguntó a un alto funcionario (miembro del gabinete e implicado en la guerra contra el terrorismo) sobre su visión estratégica del conflicto. El funcionario no respondió enseguida. El consejero explica que le presionó, preguntándole qué final le gustaría ver. El miembro del gabinete dijo, muy vagamente, que quería «que ganen los buenos». La Administración Bush había «perdido el norte, y la actividad militar se está desconectando de los mandatos políticos —concluyó el consejero—. Es como un ciego guiando a otro ciego».

El poder de los caciques

El 18 de diciembre de 2002, Donald Rumsfeld hizo una valoración optimista del futuro de Afganistán en una entrevista con Larry King, de la CNN. «Han elegido un Gobierno. Los talibanes se han marchado y Al Qaeda también. El país no es del todo estable todavía y necesita muchos fondos para su reconstrucción. Hay gente que lanza granadas y dispara cohetes para matar personas, pero también hay gente que trata de matar en Nueva York o San Francisco; éste no va a ser un país completamente tranquilo. No obstante, tengo esperanzas, tengo ánimos». Y concluyó: «Que les vaya bien».

Transcurrido un año y medio, los talibanes seguían presentes en muchas partes de Afganistán y el país continuaba proporcionando refugio seguro a miembros de Al Qaeda. Tropas norteamericanas, de las cuales más de diez mil hombres permanecieron en el país, fueron desplegadas ampliamente en las zonas montañosas próximas a Pakistán, buscando todavía a Osama bin Laden y al mulá Omar. Hamid Karzai, el presidente respaldado por Estados Unidos, ejercía escaso control político fuera de Kabul y pugnaba por mermar la autoridad de los jefes militares locales, que eran quienes controlaban de hecho las provincias. La producción de heroína iba en aumento y, fuera de Kabul y pocas ciudades más, la gente estaba aterrorizada por la violencia y el crimen. Un informe del programa de desarrollo de Naciones Unidas, publicado

en marzo de 2004, afirmaba que el país corría el peligro de convertirse otra vez en «caldo de cultivo terrorista» a menos que hubiera un aumento significativo de la ayuda para el desarrollo. La situación en Afganistán se estaba convirtiendo en un problema político para la reelección de Bush, y la gestión de la guerra antiterrorista por parte de la Administración era puesta en entredicho por Richard A. Clarke, ex asesor para terrorismo del Consejo de Seguridad Nacional, en su libro *Against All Enemies* (trad. esp.: *Contra todos los enemigos*, Taurus, 2004), así como en las audiencias de la Comisión del 11-S. El Gobierno continuaba hablando de Afganistán como de una operación exitosa, un ejemplo de la determinación del presidente. Sin embargo, hacía esta afirmación a pesar de las renovadas advertencias, por parte de organizaciones internacionales, aliados y los propios militares estadounidenses —en especial un informe encargado por el Pentágono que quedó en el limbo burocrático cuando sus conclusiones se demostraron negativas—, de que la situación en Afganistán se deterioraba rápidamente.

En su libro, Clarke considera la victoria en Afganistán mucho menos decisiva de lo que la Administración ha querido hacer creer y critica duramente las tácticas del Pentágono, en particular su decisión de confiar la iniciativa, durante las primeras semanas, a la fuerza aérea y no a las tropas de tierra. La guerra empezó el 7 de octubre de 2001, pero sólo siete semanas después Estados Unidos «envió una unidad terrestre para tomar y ocupar una antigua instalación de Al Qaeda y talibán [...]. La operación de finales de noviembre no incluyó ninguna acción de las fuerzas norteamericanas para cerrar la frontera con Pakistán, apresar a los jefes de Al Qaeda o cortarles la retirada».

En abril de 2004, Clarke me dijo que el Gobierno veía Afganistán como un remanso político y militar, un rodeo en el camino hacia Irak, la guerra que más importaba al presidente. Él y algunos colegas suyos, dijo, habían advertido repetidas veces a los responsables de la seguridad nacional que «no se puede ganar la guerra de Afganistán con tan poco esfuerzo».

Y añadió: «Había más policías en Nueva York que soldados en Afganistán. Deberíamos tener una presencia en materia de seguridad al tiempo que un programa de desarrollo en todas las regiones y quedarnos allí varios meses».

Visto con retrospectiva, Clarke opina que el presidente y sus hombres de confianza no reaccionaron por tres razones: «Una, no querían verse implicados en Afganistán como le ocurrió a Rusia. Dos, estaban ahorrando efectivos para la guerra en Irak. Y tres, Rumsfeld quería disponer de un laboratorio para probar su teoría de que un pequeño contingente de tropas de tierra que cuente con suficiente apoyo aéreo puede ganar batallas decisivas». El resultado, dijo Clarke, fue que «Estados Unidos ha conseguido estabilizar solamente dos o tres ciudades. El presidente de Afganistán es tan sólo el alcalde de Kabul».

Joseph Collins, ayudante del secretario de Defensa y experto del Pentágono en Afganistán, reconoció que sólo a partir de finales de 2003 «empezaron a llegar sumas importantes» a Afganistán para seguridad y reconstrucción. «Vimos que en el aspecto seguridad estábamos haciendo bien las cosas, pero no lo bastante rápido», me dijo. El resurgimiento de los talibanes y de Al Qaeda no empezó hasta principios del año pasado, cuando se dieron cuenta de que «fomentar la inestabilidad era vital para socavar el régimen de Karzai, y que la manera de hacerlo no era combatir a nuestros soldados, sino a los funcionarios y voluntarios de la ONU». A la larga, añadió Collins, «estas tácticas son contraproducentes, tanto en Afganistán como en Irak».

La opinión de Clarke estaba apoyada en un análisis militar interno de la guerra de Afganistán que se concluyó a principios de 2004. Poco más de un año antes, el Departamento de Defensa, a través de su oficina de Operaciones Especiales y Conflictos de Baja Intensidad (SOLIC), había pedido a Hy Rothstein, coronel retirado del ejército y legendario experto en guerra no convencional, que hiciera un informe sobre la planificación y ejecución de la guerra en Afganistán. La idea era que se centrara en las Fuerzas Especiales. Rothstein se

desplazó a Afganistán para entrevistarse con muchos oficiales de alta graduación, tanto de las Fuerzas Especiales como de las unidades regulares. Habló también con docenas de suboficiales y reclutas que combatían allí. Su informe criticó duramente la estrategia de la Administración Bush. Según Rothstein, la campaña de bombardeos aéreos no fue la mejor manera de dar caza a Bin Laden y sus lugartenientes, y los éxitos tácticos iniciales no se tradujeron en una victoria estratégica. En realidad, escribió, a largo plazo la victoria en Afganistán no era en absoluto una victoria.

En marzo de 2004 fui a ver a Rothstein a su despacho en la Escuela Naval de Posgraduados en Monterey (California), de la que es profesor de Análisis de Defensa. Rothstein, de cincuenta y pocos años, atlético y de hombros anchos, sirvió durante más de veinte años en las Fuerzas Especiales del Ejército, tres de ellos como director de planes y ejercicios para el Mando Conjunto de Operaciones Especiales en Fort Bragg, antes de retirarse en 1999. Según sus colegas, es cualquier cosa menos un disidente. Destacaba allá donde le enviaban, me dijo Robert Andrews, un ex director de la SOLIC, refiriéndose a las misiones de Rothstein en Centroamérica, que le valieron una medalla al valor, y en la ex Yugoslavia. Rothstein sólo accedió a hablar conmigo, y no sin renuencia, después de que yo hubiera conseguido por mi cuenta el informe antes citado, y no quiso entrar en detalle sobre su investigación. «Me pidieron que hiciera esto —dijo del Pentágono—, y mi propósito era mejorar algunas cosas. Lo único que pretendo es que la gente estudie el informe, no a mí. Yo le diré lo bueno y lo malo».

Rothstein describe el abismo que medió entre el modo en el que Donald Rumsfeld pintaba la guerra y lo que estaba ocurriendo de verdad. En el inicio de la campaña de bombardeos Rumsfeld había declarado a la prensa que «a los terroristas no se les combate con medios convencionales, sino con medios no convencionales». Sin embargo, escribe Rothstein, Estados Unidos seguía poniendo énfasis en los bombardeos y en la guerra convencional mientras «el conflicto empezaba a ser cada vez menos convencional», con combatientes

talibanes y de Al Qaeda «operando en pequeñas células que sólo aparecían para poner minas terrestres, lanzar ataques nocturnos con cohetes y desaparecer otra vez». Y añade:

> Lo que hacía falta después de diciembre de 2001 era un mayor énfasis en las tropas de Operaciones Especiales, respaldadas por infantería ligera, para llevar a cabo operaciones de contrainsurgencia. Los bombardeos aéreos deberían haber sido algo esporádico [...]. El no saber adaptar las operaciones militares a los cambios postalibanes en el teatro de operaciones costó a Estados Unidos algunos de los frutos de la victoria y significó, para Afganistán, costes humanitarios adicionales y evitables [...]. En verdad, los efectos inadvertidos de esta guerra son quizá más importantes de lo que pensamos. A finales de 2001 la guerra en Afganistán se había convertido, básicamente, en un asunto de contrainsurgencia.

Llegado este punto, era importante pasar a un tipo de guerra no convencional: «Las Fuerzas Especiales fueron creadas para combatir justamente a este tipo de enemigo —escribe Rothstein—. Pensar de manera no ortodoxa, tener un profundo conocimiento de la guerra, la demografía, la naturaleza humana, la cultura y la tecnología, forma parte de este enfoque... La guerra no convencional requiere que los soldados de las Fuerzas Especiales sean diplomáticos, médicos, espías, antropólogos culturales y buenos amigos... todo ello antes de realizar su trabajo principal». Pero, en lugar de eso, «el mando evolucionó hacia una estructura grande y compleja que no pudo, o no quiso, reaccionar al nuevo escenario no convencional». La consecuencia ha sido «una campaña que destruyó, sí, a los talibanes, pero que ha tenido mucho menos éxito a la hora de conseguir el principal objetivo político: asegurar que Al Qaeda no pudiera seguir operando en Afganistán».

Rumsfeld esquivaba rutinariamente las críticas acerca de las bajas civiles diciendo que «en la guerra es inevitable cierta cantidad» de daños colaterales. Se calcula que más de mil

civiles afganos resultaron muertos en la primera fase de la guerra. Rothstein sugiere que esta cifra podría haber sido mucho menor, y que habrían podido evitarse mayores incidentes si se hubiera permitido a las Fuerzas Especiales librar una verdadera guerra no convencional, reduciendo así el uso del fuego masivo. La decisión de tratar a los talibanes como si todos ellos se identificaran con, y lucharan para, Al Qaeda fue otro de los grandes errores iniciales. «Entre los talibanes había profundas divisiones que podrían haber sido explotadas mediante un esfuerzo político-militar, que es la esencia de la lucha no convencional. Unos meses de intensas gestiones diplomáticas, militares y de espionaje entre las Fuerzas Especiales y las fuerzas antitalibanes habrían dado un giro decisivo al conflicto».

Las condiciones bajo las que el nuevo Gobierno llegó al poder «sacaron a flote el caciquismo, el bandidaje y la producción de opio», asegura Rothstein, y dejaron un vacío de poder en Afganistán. Su informe concluye: «Derrotar a un enemigo en el campo de batalla no suele ser sinónimo de ganar una guerra. Ganar una guerra requiere algo más que vencer al enemigo en el campo de batalla». En 1975, recordaba Rothstein, cuando Harry G. Summers, un coronel del ejército de tierra que luego escribiría una historia de la guerra de Vietnam, le dijo a un coronel norvietnamita: «Ustedes no nos derrotaron en el campo de batalla», el interpelado respondió: «Es probable, pero también es irrelevante».

Rothstein entregó su informe en enero de 2004; le fue devuelto con una nota donde se le decía que usara generosamente la tijera y suavizara sus conclusiones. Cuando hablé con él meses más tarde, no había tenido más noticias. «Es un escrito peligroso», me comentó un asesor militar. El Pentágono, preguntado al respecto, confirmó que se le había dicho a Rothstein que «nosotros no respaldábamos todas sus conclusiones» y que le enviarían unas notas sobre el informe. Por otra parte, Joseph Collins, del Pentágono, me dijo: «Puede que haya un poquito de verdad en ese estudio, pero nuestros expertos lo encuentran divagador y muy poco informativo». Sin embargo, en entrevistas, varios funcionarios (presentes y

pasados) de la Administración Bush han respaldado las tesis clave de Rothstein. «Él no se inventó nada —dijo un alto funcionario de inteligencia—. La razón de que estén petrificados es que es verdad, y no querían verlo en letras de molde».

Para entonces, la Administración tenía ya a Irak en el punto de mira y daba la impresión de que quería olvidarse de Afganistán. En entrevistas con intelectuales, voluntarios y miembros de organizaciones no gubernamentales, se me dijo repetidamente que las condiciones políticas y de seguridad en Afganistán se deterioraron rápidamente en cuanto Estados Unidos empezó a acumular tropas en el Golfo. A principios del verano de 2002, un asesor militar, haciéndose eco de las opiniones de varios mandos de las Fuerzas Especiales sobre el terreno, trasladó al Pentágono la advertencia de que los talibanes y Al Qaeda estaban adaptándose rápidamente a las tácticas norteamericanas. «Su determinación se ha reforzado mientras que la nuestra se debilita —decía su informe aludiendo a los talibanes—. Ellos pueden vernos, pero nosotros cada vez los vemos menos». Sólo unos cuantos generales de alto nivel le prestaron atención, y el informe de este asesor no cambió nada. Algunos de nuestros mejores expertos estaban siendo evacuados de Afganistán. Richard Clarke apunta en su libro: «Las Fuerzas Especiales que recibieron clases de árabe, la lengua de Al Qaeda, han sido retiradas de Afganistán y enviadas a Irak». También algunos equipos paramilitares de la CIA estaban siendo transferidos a Irak.

Estados Unidos continuó financiando y trabajando estrechamente con los caciques locales, muchos de los cuales estaban involucrados en el tráfico de heroína y opio. Su lealtad no estaba en venta, sólo en alquiler. Jefes militares como Hazrat Alí en el este de Afganistán, cerca de la frontera con Pakistán, y Mohammed Fahim habían sido vitales para el éxito militar inicial de Estados Unidos, y, de entrada, habían prometido aceptar a Karzai. Hazrat Alí sería uno de los varios jefes militares acusados de engañar a las tropas norteamericanas en un primer intercambio, que no llegó a producirse, con Al

Qaeda en 2002. Fahim, que en diciembre de 2001 se convertiría en ministro de Defensa, estaba muy involucrado en varios negocios ilícitos.

En enero de 2003, Paul Wolfowitz, subsecretario de Defensa, realizó una visita de quince horas a Kabul y anunció: «No hay duda de que estamos entrando en una nueva etapa en la que la prioridad para Afganistán será la estabilidad y el proceso de reconstrucción. Y cuanto más rápido se avance, mejor». Se hablaba de mejorar la seguridad y de reorganizar el ejército afgano a tiempo para las elecciones presidenciales y parlamentarias, pero poco se hizo para proporcionar recursos económicos a los militares. «Creo que la Administración no comprendió la necesidad de ganarse los corazones de la gente», me dijo un ex funcionario.

Los resultados de la negligencia, una vez terminada la guerra, son palmarios. Uno de los mayores expertos en Afganistán, Barnett R. Rubin, escribió en el número de abril de 2004 de *Current History* que Afganistán «no tiene instituciones estatales que funcionen. No existe un verdadero ejército ni una policía eficiente. Su descalabrada administración provincial apenas tiene contacto con el Gobierno central. Los magros ingresos fiscales del país están en su mayoría controlados por funcionarios locales que son poco más que caciques con cargos oficiales». La meta de la política estadounidense en Afganistán «no fue instaurar un régimen más conveniente para el pueblo afgano, sino librarse de la amenaza terrorista». Estados Unidos reclutó a estos caciques en su lucha contra el terrorismo y «el resultado ha sido un Gobierno afgano creado en Bonn que se basa en el poder de los caciques regionales».

Un asesor militar con amplia experiencia en Afganistán me dijo: «La verdadera acción está en las aldeas, pero nosotros no tenemos presencia allí. Deberíamos estar allí todos y cada uno de los días. Ahora estamos operando al margen del conflicto. Es lo mismo que pasó en Vietnam. No podemos luchar contra lo que no vemos». Y añadió: «Desde enero de 2002 estamos embarcados en un proceso de arrebatar la derrota de las fauces de la victoria».

En el verano de 2003, una coalición de setenta y nueve organizaciones de beneficencia y pro derechos humanos remitió una carta abierta a la comunidad internacional pidiendo más seguridad en Afganistán y advirtiendo que las elecciones presidenciales en dicho país, previstas para junio de 2004, estaban en peligro. La carta añadía: «Para la mayoría del pueblo afgano, la seguridad es precaria y está controlada por los caciques, traficantes de drogas o grupos con vínculos terroristas. La situación está empeorando y no existe un plan de conjunto para frenar la espiral de violencia». Estadísticas realizadas por CARE International mostraban que once voluntarios fueron asesinados en cuatro incidentes durante un período de tres semanas que finalizó a primeros de mayo de 2004, y el índice de ataques a voluntarios se duplicó en enero y febrero con respecto al mismo período del año anterior. Dichas agresiones han conducido inevitablemente a un recorte en los programas humanitarios y de reconstrucción de Afganistán. Según el *Chicago Tribune*, a principios de 2003 había veintiséis organizaciones humanitarias trabajando en Kandahar, la principal ciudad del sur del país. A principios de 2004 había menos de cinco.

Incluso uno de los logros más celebrados del nuevo Gobierno, la mejora en las condiciones de vida de las mujeres, ha sido cuestionado. Judy Benjamin, que en 2002 y 2003 trabajó en Kabul como asesora de la Agencia Internacional para el Desarrollo, me dijo en una entrevista realizada en marzo de 2004: «Las oportunidades legales han aumentado, pero la vida cotidiana para las mujeres, incluso en Kabul, no ha mejorado en absoluto. A las chicas se les permite ahora estudiar y trabajar, pero en lo que respecta a las relaciones dentro de la familia la gente tiene miedo de dejarlas salir sin el *burka*». Fuera de Kabul las condiciones son aún peores, aseguró. «Las familias no permiten que las mujeres viajen, que vayan al trabajo o a la escuela. Hay pocas carreteras a salvo de bandidos. La gente dice que se sentía más segura con el régimen talibán, y por eso están recuperando adeptos: por la falta de seguridad».

Nancy Lindborg, vicepresidenta de Mercy Corps, una de las principales ONG que trabajan en Afganistán, opinaba algo parecido. Fuera de Kabul, dijo, «adondequiera que voy, sea Kunduz o Kandahar, no veo el menor cambio para la mayoría de las mujeres, y la seguridad en general ha mermado mucho desde noviembre de 2002». Y añadió que los anuncios del Pentágono sobre un mayor compromiso en materia de seguridad y reconstrucción son vistos allí «como una pantomima. Durante dos años, Estados Unidos ha dejado que Afganistán se vaya pudriendo».

Las organizaciones humanitarias no son las únicas que están preocupadas. En febrero de 2004, el vicealmirante Lowell E. Jacoby, jefe de la inteligencia militar, reconoció en una audiencia del Comité de Inteligencia del Senado que los talibanes estaban centrando sus acciones en las organizaciones humanitarias y de reconstrucción. En conjunto, dijo, los ataques talibanes habían «alcanzado su punto más alto desde la caída del régimen».

La heroína es uno de los problemas sociales, económicos y políticos más inmediatos, y el más grave. «Es un problema demasiado grande para que podamos abordarlo solos», declaró Hamid Karzai en una conferencia de donantes internacionales celebrada en Berlín en abril de 2004, en la que solicitó nuevas ayudas.

«Las drogas están amenazando la existencia misma del Estado afgano». El narcotráfico y la criminalidad asociada al mismo produjeron unos beneficios de 2 300 millones de dólares el año pasado, según un estudio anual de la Oficina para Drogas y Crimen de las Naciones Unidas, una suma equivalente a la mitad del producto interior bruto, legal, de Afganistán. «Los terroristas también lo están notando —apunta el informe de la ONU, y añade—: cuanto más dure esta situación, mayor será la amenaza contra la seguridad interior del país».

El informe de la ONU, publicado el pasado otoño, considera que la producción de opio, que tras la prohibición im-

puesta por los talibanes había bajado a 185 toneladas en 2001, subió a 3 600 toneladas, un aumento de veinte veces. El informe declara que el país está «en una encrucijada: o se toman enérgicas medidas de prohibición, o el cáncer de la droga seguirá extendiéndose como una metástasis de corrupción, violencia y terrorismo, dentro y fuera de las fronteras del país». Según la ONU, Afganistán está produciendo otra vez las tres cuartas partes del opio ilícito del mundo, y nada sugiere que esto vaya a cambiar a corto plazo. El informe dice que el cultivo de opio ha seguido extendiéndose hasta comprender, según los datos que se manejan, veintiocho de las treinta y dos provincias del país.

Lo más alarmante, según un estudio de la ONU, es que casi el setenta por ciento de los agricultores se proponía aumentar (doblar, en la mayoría de los casos) su cosecha de opio en 2004. Sólo un pequeño porcentaje se planteaba una reducción, pese a la constante presión internacional. Muchas de las áreas que podrían incrementar su producción son regiones en las que Estados Unidos tiene una importante presencia militar. Pese a dichas estadísticas, los militares suelen hacer la vista gorda, fundamentalmente por temor a que los caciques los entreguen a los talibanes y Al Qaeda. Un importante funcionario de una ONG me dijo: «Todo el mundo sabe que Estados Unidos tiene en su nómina a los caciques afganos. Hemos vuelto a darles el poder. No podía haber ido peor». Joseph Collins, del Pentágono, me dijo: «La lucha contra el narcotráfico en Afganistán ha sido un fracaso». Y añadió que la cosecha de 2004 era, según los cálculos, la segunda en importancia de la historia.

La gran disponibilidad de heroína constituye también una amenaza para las tropas estadounidenses. Desde el otoño de 2002, diversos militares y funcionarios de la CIA en activo o retirados me han hablado de informes sobre un aumento del consumo de heroína entre el personal militar en Afganistán, gran parte del cual lleva meses allí con escasos medios de distracción. Un ex espía de alto nivel me dijo que el problema no eran las Fuerzas Especiales o las unidades de

combate en activo, sino «los chicos de logística», es decir, conductores de vehículos de transporte y trabajadores de cocina y mantenimiento en la base militar de Bagram, cerca de la capital. Sin embargo, me dijeron que existe preocupación por el consumo de heroína también entre los marines. En la primavera de 2004, el mismo ex agente me comentó que aunque por motivos de seguridad los soldados destinados en Bagram estaban en principio confinados en la base, las drogas llegaban a través de afganos de la zona contratados para tareas domésticas. La jefatura del Pentágono adopta la actitud «del avestruz». «No existe el propósito de abordar el problema y hacer cumplir la ley. Esto es muy jodido», añadió, hablando de la heroína.

Tradicionalmente, los señores de la droga sólo procesaban hachís dentro de las fronteras afganas, enviando el opio a las plantas de producción de heroína en el norte de Pakistán y a otros países. Un alto funcionario de narcóticos de la ONU me dijo que desde 2002 «la mayor parte de la heroína se procesa en Afganistán, a fin de que los beneficios sean netos». Sólo una pequeña parte de la producción se consume en el país, añadió. No obstante, un funcionario de un organismo gubernamental de ayuda me dijo que la «preocupación principal» es que el aumento de la producción incrementará el riesgo de adicción entre la tropa. Un ex agente de la CIA que sirvió en Afganistán dijo que la división de narcóticos de la agencia estaba investigando independientemente el consumo entre los militares.

Afganistán volvió a reclamar la atención de la Administracion Bush en la primavera de 2004, debido en parte a que el empeoramiento de la situación en Irak ha aumentado la necesidad de un éxito en política exterior. Funcionarios de inteligencia y del Departamento de Estado que habían trabajado en Kabul me dijeron que, a su entender, las elecciones presidenciales y parlamentarias en Afganistán, que ya habían sido aplazadas hasta septiembre, tendrían que celebrarse a ser posible antes de las presidenciales de Estados Unidos, el 2 de noviembre. El lado positivo del calendario político fue un nue-

vo compromiso por parte de Estados Unidos de enviar fondos (más de dos mil millones de dólares, cuatro veces más que el año anterior) para escuelas, hospitales y construcción de carreteras. «¿Por qué nos mandan dinero ahora? —preguntaba riendo el funcionario del organismo de ayuda—. Hace dos años que lo pedimos y nadie en su sano juicio habría esperado recibir semejante suma».

Al insistir en que las elecciones se celebraran en otoño, la Administración estaba desoyendo el consejo de muchos de sus aliados y depositando toda su confianza en Hamid Karzai. La conferencia internacional celebrada en Berlín respaldó al régimen de Karzai, y su probable elección como presidente, prometiendo más de cuatro mil millones de dólares en ayuda y créditos de interés bajo para el siguiente año, si bien en esa cifra están incluidos más de mil millones prometidos anteriormente. La mitad de esta ayuda procedía de la Administración Bush. Colin Powell elogió a Karzai por haber conseguido que Afganistán dejara de ser «un Estado feudal gobernado por terroristas y extremistas» para convertirse en «un país libre con una economía en crecimiento y una democracia emergente».

Sin embargo, Hamid Karzai estaba inseguro de sí mismo y dependía totalmente de Estados Unidos en materia de seguridad y finanzas. Uno de sus principales antagonistas era su propio ministro de Defensa, Mohammed Fahim. En 2003, la Administración Bush recibió un memorándum privado de manos de un funcionario afgano aliado de Estados Unidos, en el cual se advertía que Fahim estaba maquinando desbancar a Karzai y que para ello se valdría de su control sobre el dinero procedente de los negocios ilegales y los impuestos de aduanas. Y añadía que Fahim había creado nuevas milicias reclutando a más de ocho mil hombres.

La tolerancia de Estados Unidos hacia caciques como Fahim y el general Abdul Rashid Dostum —presunto criminal de guerra y traficante de armas que, tras recibir de Washington una oferta millonaria, contribuyó a derrotar a los talibanes en otoño de 2001— deja perplejas a muchas perso-

nas con larga experiencia en Afganistán. «Fahim y Dostum son parte del problema, no la solución —dijo Milton Bearden, que dirigió las operaciones de la CIA en ese país durante la guerra con la Unión Soviética—. Esta gente posee el gen de la inteligencia y son capaces de hacer que nosotros peleemos por ellos. Sólo nos están enseñando el camino. Les ha ido de perlas que nosotros acabáramos con la resistencia a golpe de bombardeos y Fuerzas Especiales».

El comodín podría ser los talibanes. Wakil Ahmed Muttawakil, quien fuera ministro de Asuntos Exteriores con el régimen talibán y que pasó meses bajo custodia estadounidense, se ofreció repetidas veces a abrir un canal con la jefatura talibán para iniciar conversaciones. «Pero la Administración sólo quiere ayuda para encontrar a Bin Laden —dijo un senador demócrata—. Su único interés es la información táctica». La influencia de los talibanes creció a principios de 2004 por todo el sur y el este de Afganistán, desafiando —o tal vez gracias a— los continuos ataques estadounidenses por tierra y aire que inevitablemente produjeron bajas en la población civil.

Paralelamente, en un intento de reforzar a Karzai, el mando militar estadounidense estaba tratando de reducir su dependencia de ciertos caciques regionales. Uno de los objetivos era Ismail Khan, el popular gobernador independiente de Herat, una extensa provincia fronteriza con Irán en el oeste del país. Khan, enemigo acérrimo de los talibanes, apoyó la invasión norteamericana. Luego desafió al Gobierno central y se negó a entregar a Kabul gran parte de los impuestos fiscales y aduaneros. (Herat es un antiguo centro comercial). Khan personificaba la dificultad de Estados Unidos para distinguir entre enemigos y aliados en Afganistán. «Si Mohammed Fahim es un ministro del Gobierno e Ismail Khan es un jefe militar —me dijo un funcionario estadounidense—, estamos maltratando el lenguaje». Según este funcionario, Khan había proporcionado más seguridad y más estabilidad a la población local que los jefes de muchas otras provincias afganas, y observadores internacionales creían que podía ga-

nar fácilmente unas elecciones provinciales. Pero Khan tenía Herat como su feudo privado, y alarmó a gran parte de la Administración Bush apoyando verbalmente a Irán; en otoño de 2003, al parecer, Khan lo habría calificado de «el mejor modelo de país islámico en todo el mundo».

Un experto regional me dijo que en la primavera de 2003, durante una breve visita de Donald Rumsfeld a Kabul, Karzai —receloso de Ismail Khan desde un principio— planteó la pregunta de cómo quitarlo de en medio. «Le pidió apoyo a Rumsfeld —recordaba el experto—. Éste le deseó suerte pero dijo que Estados Unidos no podía intervenir. Y a Karzai le entró miedo». El mando de la base de Bagram, según me dijo un ex asesor de la CIA, volvió a estudiar el tema en febrero siguiente, solicitando a su sección de espionaje un plan operacional para Khan. El ex asesor supo por miembros de los servicios de inteligencia que existía un acuerdo sobre la necesidad de neutralizar a Khan. Preguntado sobre el significado de estas palabras, aseguró que le habían dicho: «Khan tiene que ser eliminado; hemos de poner fin a su influencia». (El Pentágono negó que hubiera semejante plan).

El 21 de marzo de 2004 estalló un conflicto armado en Herat entre las fuerzas de Khan y las leales al Gobierno central. Las versiones de lo sucedido difieren y no está nada claro quién empezó y cómo. Según el informe de unos funcionarios de la ONU enviado a la sede de Nueva York, la tensión entre Ismail Khan y uno de sus principales rivales, el general Abdul Zaher Naibzadah, sobre el control de la guarnición militar de Herat había ido en aumento. El hijo de Khan se enteró de que había habido un intento de asesinar a su padre y se dirigió a casa del general, donde los guardaespaldas de Naibzadah lo abatieron a tiros junto a varios de su escolta. Según la ONU, Khan se desquitó violentamente de sus adversarios, incendiando el cuartel general de la milicia afgana en la zona y dejando un rastro de muerte. (Tras el sangriento enfrentamiento algunas informaciones hablaron de cien o más muertos; otras, surgidas de Kabul, de menos de dos docenas). La versión de la ONU mencionaba una llamada telefónica de

Karzai a Khan que habría servido para reducir la tensión. A los pocos días, una división del ejército nacional afgano, enviada por el Gobierno central, entró en Herat para restaurar el orden.

No hay pruebas de que los mandos militares estadounidenses estuvieran implicados en ningún intento de atentar contra Khan, me dijo el asesor de la CIA. No obstante, según algunos funcionarios, en las unidades militares afganas presentes en Herat había agregados estadounidenses. «Está claro que teníamos instructores y asesores entre las tropas afganas —me comentó—. Ellos sabían lo que estaba pasando». La consecuencia de todo ello, según la ONU, era que Khan «puede volverse más inflexible todavía en sus tratos con el Gobierno central». Por lo visto, el plan para desafiar el liderazgo de Khan y fortalecer la posición de Karzai había servido para convertir al primero en un enemigo más osado.

El funcionario del organismo de ayuda me habló de sus varias semanas de viaje por Afganistán, incluidos el sur y el este, zonas escasamente vinculadas a Kabul. «La gente te decía: "Los talibanes no nos gustan, pero ellos nos dieron una seguridad que ustedes no han sido capaces de darnos". Entendían que nos habíamos aliado con quienes no debíamos —los caciques— a causa de nuestra guerra contra el terrorismo». Mencionó que mucha gente le preguntaba por la guerra en Irak. «Estaban preocupados por Irak, querían saber si nos quedaríamos allí. Se acordaban de cuando nos marchamos de Afganistán», es decir, tras la derrota, auspiciada por Estados Unidos, de la Unión Soviética. «Te decían: "Nos vais a dejar solos, como hicisteis en el 92. Si tuviéramos confianza en el aguante de los norteamericanos, llegaríamos a un acuerdo con vosotros". Irak, a su modo de ver, significaba que Estados Unidos tenía otras prioridades».

Un trabajador de la ONU que ayudaba en los preparativos de las elecciones en Afganistán me dijo que los fondos para la reconstrucción, fueran cuales fuesen los motivos de la Administración Bush para enviarlos, eran esenciales para el futuro del país. «Tenemos una oportunidad de oro que ter-

minará el 2 de noviembre». Era el colmo del cinismo, añadió. «Un factor clave para las elecciones será la no interferencia de los caciques narcotraficantes de todo el país, y frenar el comercio de drogas no va a ser una prioridad». El mensaje que estaban recibiendo de los caciques, dijo, era que si Estados Unidos intentaba imponer un programa «radical» de erradicación del opio, ellos boicotearían las elecciones. Y añadió que los afganos veían al presidente Karzai como «un dirigente débil con muy poca credibilidad en la calle». Cada vez que por motivos de su trabajo hablaba con la gente mayor de las aldeas, todos le decían: «Karzai es un buen hombre. Él no mata gente. No roba. No trafica. ¿Cómo se les ocurre pensar que podría ser un líder para Afganistán?».

Capítulo IV

Los halcones de Irak

A finales de 2001 y principios de 2002 escribí dos artículos para *The New Yorker* donde explicaba los agrios debates dentro de la Administración Bush sobre la necesidad de derrocar a Sadam Husein y la relación, si es que la había, entre Irak y la guerra contra el terrorismo. Lo que sigue a continuación indica que la lucha por fijar una agenda sobre Irak no era secreta, y que neoconservadores como Richard Perle tenían ciertas dificultades para oír las críticas o aprender de ellas. Los pasos en falso que se darían en Irak eran predecibles y quizá inevitables. Como veremos, Perle tenía sus propios problemas.

El primer intento de acabar con Sadam Husein

En noviembre de 1993, Ahmad Chalabi, el líder del Congreso Nacional Iraquí (CNI), grupo de oposición consagrado al derrocamiento de Sadam Husein, presentó a la Administración Clinton un completo y escalonado plan bélico titulado «The End Game» (La fase final), junto con una petición urgente de fondos para financiarlo. «El momento es ahora —escribió Chalabi—. Irak está a punto de una combustión espontánea. Sólo necesita un detonador para desencadenar una reacción en cadena que desembocará en la caída de Sadam». Fue un mensaje que Chalabi repetiría —con creciente efectividad— durante los diez años siguientes.

Nacido en el seno de una rica familia de banqueros chií, Chalabi llevaba viviendo fuera de Irak varias décadas. Había emigrado a Inglaterra con sus padres en 1958, cuando tenía trece años, y posteriormente se doctoró en Matemáticas por la Universidad de Chicago. En 1992 había sido condenado *in absentia* por fraude en Jordania. (Él siempre ha proclamado su inocencia). Sin embargo, Chalabi recibió dinero y autorización por parte de la Administración Clinton para llevar adelante su plan, y en octubre de 1994 la CIA instalaba un pequeño puesto de avanzada en una zona de Irak controlada por los kurdos. El cuartel general de Chalabi estaba cerca de allí. Su plan preveía insurrecciones simultáneas en Basora, la ciudad más grande del sur iraquí, dominada por chiíes desafectos (Sadam es suní, como muchos de sus partidarios), y en Mosul y Kirkuk, ciudades kurdas del norte. A ello seguirían levantamientos en otras ciudades. Y las deserciones en las fuerzas armadas no se harían esperar. «Lo hemos llamado el "efecto dominó" de Chalabi», explicaba Robert Baer, agente de la CIA al mando del puesto.

En aquel momento, escribe Baer en sus memorias *Soldados de la CIA*, «la CIA no tenía un solo informante en Irak. Y no sólo eso, tampoco en los países vecinos (Irán, Jordania, Turquía, Siria y Arabia Saudí) había nadie que informara sobre Irak. Como el resto del Gobierno estadounidense, su aparato de espionaje estaba completamente a ciegas en lo que respecta a Irak».

En marzo de 1995 la insurrección de Chalabi inició su andadura… y fracasó estrepitosamente. «No se consiguió nada —me dijo Baer—. Nadie dio un solo paso excepto un líder kurdo que actuó por su cuenta, pero tres días demasiado tarde. No pasó nada». Y en cuanto a reclutar agentes entre los militares iraquíes, «Chalabi no consiguió ni un simple teniente, no digamos ya un coronel o un general».

No obstante, Baer recalcó que Chalabi «hacía lo que podía». Aunque «se tiraba faroles, creía que era mejor tirarse un farol y seguir pensando en la victoria, pero se vio obligado a jugar la partida sin ases. Chalabi siempre creyó que era una

guerra psicológica y que si Clinton se plantaba y decía: "Ya es hora de que ese tipo se largue", la gente se decidiría».

Chalabi había advertido que si no se hacía algo y Sadam finalmente era autorizado a exportar petróleo, «el sentimiento del pueblo experimentará un cambio. Parecerá que Sadam les está ofreciendo esperanzas de futuro. Si eso ocurre, se nos habrá escapado». Al mes de las insurrecciones fallidas, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó a Irak a reanudar la venta de crudo bajo el programa Petróleo por Alimentos, asegurando un flujo de dinero para el régimen. Hacia finales de 1996, el ejército iraquí había acabado con la insurrección de Chalabi en el norte del país. Ciento treinta miembros del Congreso Nacional Iraquí fueron ejecutados.

Chalabi logró conservar el liderazgo del Congreso pese a las repetidas acusaciones de mala gestión, autobombo y corrupción por parte de miembros de su coalición. Tras su fracaso sobre el terreno, sus planes fueron en esencia desestimados por el Departamento de Estado y la CIA, y Chalabi trasladó su base anti Sadam a Londres. El objetivo norteamericano sería buscar la destitución de Sadam mediante un golpe militar o político, no mediante una rebelión abierta. «No veo ningún grupo de la oposición que tenga posibilidades de derrocar a Sadam», declaró en 1998 ante un comité del Senado el general de marines Anthony Zinni, jefe del Mando Central que más tarde sería enviado especial de Estados Unidos en Oriente Próximo. «Aunque echáramos a Sadam, podríamos acabar teniendo quince, veinte o noventa grupos compitiendo por el poder», añadió.

Chalabi encajó su caída en desgracia con desenvoltura. Desdeñoso de la Administración Clinton, que según él lo había abandonado en el norte de Irak, llevó su campaña a la prensa y al Congreso norteamericano. El CNI se convirtió en un punto de reunión para políticos conservadores y muchos ex altos funcionarios que habían coordinado la guerra del Golfo para el primer presidente Bush.

En febrero de 1998, cuarenta destacados estadounidenses —entre ellos los ex secretarios de Defensa Caspar Weinberger

y Frank Carlucci, así como Donald Rumsfeld, futuro titular de la cartera— firmaron una carta abierta dirigida al presidente Clinton en la que se afirmaba que Sadam Husein seguía constituyendo una amenaza porque tenía un arsenal de armas químicas y biológicas. Instaban al Gobierno a considerar de nuevo el apoyo a un levantamiento popular contra el régimen iraquí. Haciéndose eco del antiguo plan de Chalabi, los firmantes argumentaban que el talón de Aquiles de Sadam era su falta de apoyo popular: «Gobierna mediante el terror. La misma brutalidad que hace inviable que cualquier golpe o conspiración pueda triunfar hace que Sadam sea odiado por su pueblo. Irak está preparado para una insurrección de amplio espectro». Las dos primeras recomendaciones eran que el CNI fuese reconocido como Gobierno provisional de Irak y reinstalado en el norte del país. Y se instaba a la Administración Clinton a desbloquear capital iraquí (más de 1 500 millones de dólares) congelado en el momento de la guerra del Golfo, para subvencionar al Gobierno provisional.

La carta, como similares comunicaciones por parte de congresistas republicanos, no logró persuadir a los demócratas de la Casa Blanca. Ocho meses después el presidente Clinton, presionado por el Congreso, firmaba el decreto Liberación de Irak, por el cual se destinaban noventa y siete millones de dólares a instrucción y equipamiento militar de la oposición iraquí. Debido al reiterado escepticismo del Gobierno, a finales de 2001 el CNI había recibido menos de un millón de dólares de ese dinero, pero el Departamento de Estado proporcionó a la coalición unos diez millones en concepto de fondos para operaciones ordinarias. (Aquel otoño, el Departamento de Estado realizó una auditoría sobre cómo había manejado el CNI dos donaciones que ascendían a más de cuatro millones de dólares. La inspección descubrió que la contabilidad y los controles internos del CNI eran inadecuados, y planteó preguntas sobre más de dos millones en gastos).

Según uno de los asesores de Chalabi, el plan bélico del CNI antes del 11-S se centraba en tres puntos: adiestramiento, fomento de la deserción y aplicación por Estados Unidos de

la zona de exclusión aérea al sur de Irak. La idea era reclutar a doscientos instructores y ponerlos a trabajar con una fuerza de cinco mil o más disidentes iraquíes reforzada con mercenarios, algunos de los cuales, inevitablemente, serían ex miembros de las Fuerzas Especiales norteamericanas. Se pediría asimismo a Estados Unidos que instituyera una zona de exclusión terrestre, respaldada por ataques aéreos, a fin de evitar que los rebeldes fueran atacados por los tanques iraquíes.

Un asesor de Chalabi explicaba: «Introduces este contingente en el sur de Irak —donde está la mayoría de pozos petrolíferos del país—, utilizando quizá una base aérea abandonada al oeste de Basora, y esperas a que venga Sadam. Y si él no viene, te vuelves a casa y dices que la cosa ha salido mal. Esto no es Bahía de Cochinos. Pero si los insurgentes toman Basora, entonces es el fin de Sadam. No hace falta ir a Bagdad. Te apoderas de los pozos y el dictador cae».

Durante las presidenciales de 2000, tanto George W. Bush como Al Gore prometieron apoyar a la oposición de Sadam —Bush dijo que lo «echaría»— si éste continuaba desarrollando armas de destrucción masiva. Tras las elecciones, la consejera de seguridad nacional Condoleezza Rice dejó bien claro, según un ex funcionario del Gobierno, que Irak no era a su entender una prioridad para la nueva Administración. «Opinaba que Sadam era un problema menor y que sólo necesitábamos acorralarlo para seguir adelante con las cuestiones importantes: Rusia, China, la ampliación de la OTAN, nuevas relaciones con India y, ya que estamos, con África», dijo el ex funcionario.

Pero para otros miembros de la nueva Administración, librarse de Sadam Husein había sido prioritario desde el final de la primera guerra del Golfo. Varios de los firmantes de la carta abierta a Clinton ahora ocupaban cargos importantes, entre ellos el secretario de Defensa Donald Rumsfeld, su ayudante Paul Wolfowitz y Douglas Feith, uno de los subsecretarios de Defensa.

La conservadora y dogmática jefatura civil del Pentágono, aglutinada en torno a Wolfowitz, cobró extraordinaria

influencia, especialmente después del 11-S. Estos civiles eran los más ardientes defensores de adoptar medidas contra Sadam Husein y aplicar acciones militares preventivas para combatir el terrorismo. La guerra preventiva iba a ser la idea predominante de la política exterior de Bush.

Uno de los redactores de la carta de 1998 era Richard Perle, subsecretario de Defensa con Ronald Reagan y asesor de política exterior en Washington. Perle fue nombrado presidente de la Junta de Política de Defensa, organismo asesor del Pentágono sobre temas estratégicos, y convirtió la hasta entonces oscura Junta en un agresivo púlpito desde el cual promover el derrocamiento de Sadam Husein y la política de guerra preventiva. Había además un vínculo personal entre Chalabi, Wolfowitz y Perle que se remontaba a muchos años. Su relación se intensificó a partir de la toma de posesión de Bush, y los vínculos de Chalabi se extendieron a otros miembros de la Administración, incluidos Rumsfeld, Feith e I. Lewis Libby, asesor en jefe del vicepresidente Dick Cheney. Durante años, Chalabi ha contado con el apoyo de destacados miembros del American Enterprise Institute y otros conservadores, y también con algunos partidarios demócratas, entre ellos James Woolsey, el ex director de la CIA.

A principios del verano de 2001, un oficial de carrera asignado a una oficina de planificación del Pentágono realizó una evaluación rutinaria de la hipótesis, avalada por halcones como Wolfowitz y Feith, de que el CNI podía jugar un papel decisivo en un golpe de Estado contra Sadam. El oficial analizó asimismo la suposición de que Chalabi, después del golpe, sería recibido como un héroe por los iraquíes. Un funcionario al corriente de la evaluación explicó que ésta sometía dicho supuesto al principio de lo que los estrategas llaman «ramas y secuelas», es decir, «planifica en función de lo que esperas que no ocurra». El funcionario dijo: «Era un estudio tipo "¿Qué puede fallar?". ¿Y si luego resulta que Chalabi no es tan popular? ¿Cuál es el plan B si descubrimos que Chalabi y sus muchachos no son capaces de tumbar a Sadam?».

Los políticos del Pentágono no parecieron darse por enterados. Cuando el funcionario preguntó por la evaluación, un colega le dijo que la nueva cúpula quería centrarse en lo que iría bien, no en lo que podía ir mal. Y que estaban estudiando alternativas que casi equivalían a planificar para el fracaso. «Aplicaban una metodología análoga a lanzar una moneda al aire cinco veces y suponer que siempre saldrá cara —me dijo el funcionario—, cuando lo que hay que pensar es qué sucederá si sale cruz».

A finales de 2001, Perle y Woolsey inspiraron una oleada de reacciones en los medios informativos al pedir la extensión a Irak de la guerra en Afganistán. Sus argumentaciones ofrecen un primer vislumbre de lo que se convertiría en un debate nacional sobre la inminencia de una amenaza por parte de Irak. En noviembre, durante una reunión en Filadelfia del Instituto de Estudios de Política Exterior, un grupo conservador de expertos, Perle dijo: «La pregunta que me hago es: ¿Esperamos a Sadam y confiamos en lo mejor? ¿Esperamos y confiamos en que no haga lo que sabemos que es capaz de hacer, distribuir armas de destrucción masiva a terroristas anónimos, o bien tomamos medidas preventivas? No debemos contemplar la oposición a Sadam tal como está hoy, sin ningún tipo de respaldo exterior y sin expectativas realistas de acabar con ese terrible régimen, sino contemplar la que se podría crear con el poder y la autoridad de Estados Unidos».

Los funcionarios del Pentágono estaban reñidos con el Departamento de Estado, cuyos planes eran ahora mucho más modestos, y acusaban a la cúpula del Pentágono de confundir discrepancia con deslealtad; a su vez, los funcionarios del Pentágono acusaban al secretario de Estado Colin Powell y a su segundo, Richard Armitage, de falta de coraje. Armitage, uno de los firmantes de la carta abierta de 1998, se había vuelto, de puertas adentro, contrario al plan revisado de Chalabi. «He de creer que Wolfowitz y Feith están molestos con Armitage —me dijo por entonces un amigo de los

tres—. Opinan que ha traicionado una convicción fundamental que ellos compartían».

Uno de los partidarios de Armitage en el debate interno, un ex funcionario de espionaje de alto nivel, se preguntaba con cierta sorna si el entusiamo del círculo de Perle por el plan de Chalabi no habría surgido de su inquietud ante la decisión de la primera Administración Bush, a principios de 1991, de no buscar la muerte de Sadam al término de la guerra del Golfo. «Es la venganza de los empollones», dijo en una entrevista a finales de 2001. «Vencieron en Afganistán cuando todo el mundo decía que iba a salir mal, y eso los ha llevado a un estado de euforia y chulería. Cargaron contra los expertos en Oriente Próximo que vaticinaron que la guerra en Afganistán provocaría graves disturbios en Arabia Saudí y en toda la región. No fue así, y ahora se burlan de todos cuantos abogan por resolver los problemas por la vía diplomática. No hay quien los pare».

Armitage veía en la impaciencia del CNI por enfrentarse a Sadam un error de planteamiento, me dijo el ex funcionario. «No tenemos ni idea de lo que podría pasar en Irak si esos chalados se apoderan del país —dijo—. Mejor demonio conocido que demonio por conocer». Y añadió que Armitage, en ese momento, estaba convencido de poder bloquear el plan de Chalabi, pero también frustrado por la cantidad de tiempo que le requería esta cuestión. «Richard dice que ni hablar, que piensa salirse con la suya. De lo contrario, sabe que va a ser un desastre político».

Un importante funcionario del Departamento de Estado, que calificaba a Chalabi de «absolutamente encantador», dijo que la Administración no pensaba permitir que «un hatajo de ineptos envíe extranjeros al combate». De Chalabi y sus partidarios dentro y fuera del Gobierno norteamericano, comentó: «¿Alguno de ellos sabe cómo huele la cordita? No, son gente de poca monta que echa las culpas a los demás porque el presidente no les hace caso. No vamos a permitir que manden a otros a criar malvas». El CNI, añadió, no era el único grupo opositor iraquí subvencionado por la Administración Bush.

Según un general de varias estrellas, Colin Powell, conocido por su escepticismo hacia el CNI, «se desmarcó de las luchas internas» a finales de 2001, dejando que su fiel colega Armitage «los mantuviera a raya durante cuatro o cinco meses». Y añadió: «Hay muchas maneras de apretarle las tuercas a Sadam sin recurrir a la fuerza». Un paso lógico sería establecer nuevas sanciones, pero aquel mes de noviembre la Administración accedió a postergar medio año su insistencia en «sanciones inteligentes» que permitieran a las Naciones Unidas aplicar medidas enérgicas para evitar que Irak adquiriese materiales con aplicaciones tanto civiles como militares, pero sin obstaculizar el flujo normal de medicinas, alimentos y otros artículos de primera necesidad. Al mismo tiempo, el régimen iraquí exportaba unos dos millones de barriles de crudo diarios bajo el programa Petróleo por Alimentos. Los principales compradores eran ExxonMobil, Chevron y otras compañías norteamericanas que normalmente adquirían el crudo a través de intermediarios. Nada menos que ochocientos mil barriles de ese petróleo terminaban en el mercado estadounidense.

El éxito inicial de Estados Unidos en su campaña para echar a los talibanes mejoró la posición de Chalabi ante ciertos miembros de los organismos de defensa. En diciembre de 2001, Chalabi había entregado a la Administración Bush un plan bélico puesto al día que preveía no sólo bombardeos, sino el despliegue de miles de soldados de las Fuerzas Especiales.

El plan tenía asimismo un importante añadido: contemplaba la participación de Irán, que había librado una prolongada guerra contra Irak en la década de 1980. Se creía que el Gobierno del presidente Mohamed Jatamí, el nuevo socio de Estados Unidos en la guerra contra los talibanes, permitiría que las fuerzas del CNI entraran en el sur de Irak cruzando la frontera iraní con todos sus pertrechos. A finales de 2001, un funcionario del CNI me dijo que varios meses antes la Oficina de Control de Capitales Extranjeros del Departamento del Tesoro había dado al consejo su aprobación para

abrir una oficina de enlace en Teherán. (Las leyes federales prohíben a las empresas estadounidenses hacer negocios con Irán). La oficina se inauguró en abril de 2001. «Lo hicimos con dinero del Gobierno norteamericano, y eso es lo que convenció a Teherán —me contó el funcionario—. Lo interpretaron como una señal por parte de Estados Unidos de que había un interés común: acabar con Sadam. Y la manera de llegar a él es a través de Irán».

Una vez dentro de Irak, según este supuesto táctico, el Consejo Nacional Iraquí establecería una base de artillería y anunciaría la creación de un Gobierno provisional, reconocido rápidamente por la Administración Bush. Casi dos tercios de la población iraquí son chiíes, y tanto Estados Unidos como el CNI los veían como aliados potenciales en una sublevación política. Estados Unidos iniciaría entonces una intensa campaña de bombardeos, como hizo en Afganistán, y transportaría millares de soldados de las Fuerzas Especiales al sur de Irak. Paralelamente, partidarios del CNI en el norte, en las zonas bajo control kurdo, empezarían a dar muestras de que preparaban una ofensiva. Según el plan, la disidencia cundiría entre los militares iraquíes y Sadam Husein se enfrentaría a un dilema: o bien enviar sus fuerzas de élite al sur para frenar a los estadounidenses, o bien, para salvaguardarse, mantener a todos sus efectivos cerca en previsión de una invasión desde el norte.

Este plan de ataque fue elaborado con ayuda de Wayne Downing, general de cuatro estrellas retirado, y Duane *Dewey* Clarridge, ex agente de la CIA, que hicieron de asesores honorarios para el CNI. Downing fue elegido por el presidente Bush en octubre de 2001 como segundo consejero de seguridad nacional para combatir el terrorismo. Downing, que mandó un comando de Fuerzas Especiales durante la guerra del Golfo, estaba convencido de que el CNI, con apoyo aéreo y un pequeño contingente de Fuerzas Especiales bien entrenadas, podía hacer el trabajo dentro de Irak. Él había conocido de primera mano una de las acciones más asombrosas de la guerra del Golfo: a mediados de febrero de 1991, un pe-

lotón Delta Force formado por dieciséis hombres en patrulla nocturna al sur de Al Qaim, cerca de la frontera siria, en el oeste de Irak, fue atacado por una fuerza muy superior y los iraquíes hirieron a dos norteamericanos. Los Delta, que iban en vehículos fuertemente artillados, contraatacaron con lanzagranadas y ametralladoras (una maniobra conocida como «fuego protector final») y mataron o hirieron a unos ciento ochenta iraquíes, sin registrar más heridos en su propias filas. Un veterano de esa guerra me dijo: «En el oeste —zona de operaciones de la Delta Force— había muy poca resistencia y teníamos libertad de movimientos»; en otras palabras, las tropas operaban a su aire. «A Downing le encantaba», añadió.

«Creen haber encontrado el modelo perfecto, y funciona —dijo un analista de defensa sobre el plan bélico remozado—. El modelo es: bombardeos, una modesta inserción de Fuerzas Especiales y luego una sublevación». En términos parecidos se expresaba Tim McCarthy, antiguo inspector de armas de la ONU, cuando admitía que «lo único que el CNI tiene claro es que, una vez hechas las apuestas, los iraquíes tendrán que ir a por ellos. Para frenarlos, Sadam tendrá que enviar a su Hammurabi», la división acorazada de élite de la Guardia Republicana. En cuanto Sadam diera ese paso, explicaba McCarthy, sus fuerzas estarían expuestas a la aviación estadounidense, «y entonces estarán fritos».

El plan de Chalabi, ampliado y modificado por un grupo de estrategas con la autorización de Paul Wolfowitz, llegó a los despachos del Estado Mayor Conjunto. Algunos militares reaccionaron con indiferencia, pero suscitó un debate sobre las lecciones aprendidas en Afganistán y su posible aplicación a la guerra en Irak. «Podemos acabar con él, de eso no hay duda —me dijo un ex funcionario del Gobierno en diciembre de 2001—, pero ¿qué se necesita para ello? El CNI está notando la presión. Se los está estrujando de mala manera».

Robert Pape, experto en Ciencias Políticas de la Universidad de Chicago y autor de numerosos trabajos sobre potencial aéreo, concretó algunas de estas preocupaciones. «La lec-

ción de Afganistán no es algo apreciable a simple vista —me dijo—. El potencial aéreo es cada vez más efectivo, sí, pero la verdadera lección está en que son necesarias fuerzas terrestres para que la estrategia funcione. Los talibanes, que disponían de unos cincuenta mil hombres, estaban dispersos y nunca tuvieron el control de todo del país. Pero en Irak no tenemos el apoyo de una resistencia armada como la Alianza del Norte», el mayor aliado de Estados Unidos en Afganistán.

Un ex funcionario del Departamento de Estado describió también la propuesta del CNI como «sumamente arriesgada, porque tienen que pasar dos cosas que no dependen de ellos. Una, tiene que haber un levantamiento contra Sadam, y dos, nuestros aliados deben unirse a nosotros dentro del país». Un alto funcionario de inteligencia criticaba en parecidos términos la suposición de que si funcionó en Afganistán funcionaría en Irak, diciendo que era como «llevar un espectáculo de provincias directamente a Broadway».

Generales y almirantes se contaban entre los críticos más explícitos del plan Chalabi. En sus años como estratega del Mando Central, el general Zinni opinaba, según un funcionario de la Administración Clinton, que para que una invasión de Irak se saldara con éxito se requería prudencia y la intervención de dos cuerpos —seis divisiones de combate, unos ciento cincuenta mil soldados—, así como la capacidad de realizar misiones de bombardeo desde aeródromos cercanos. En un trabajo publicado en el año 2000 por el Naval Institute Proceedings, Zinni, por entonces a punto de retirarse, escribió sobre lo que costaría «clavar una estaca» en el corazón de alguien como Sadam Husein:

> Hay que tener voluntad política, y eso quiere decir la voluntad de la Administración, del Congreso y el pueblo norteamericano. Todos deben estar unidos en el deseo de pasar a la acción. Sin embargo, estamos tratando de conseguir resultados baratos. Actualmente hay congresistas que quieren subvencionar el decreto Liberación de Irak y dejar que unos tipos bien vestidos y con Rolex

en la muñeca nos organicen una expedición desde Londres. Equiparemos a un millar de soldados, les daremos AK-47 por valor de noventa y siete millones de dólares y los meteremos en Irak. ¿Y qué pasará? Probablemente, algo parecido a Bahía de Cochinos.

Uno de los funcionarios actualmente implicados en los planes del Pentágono dijo que él también tenía dudas sobre la eficacia de una insurrección armada del CNI, incluso respaldada por Fuerzas Especiales y aviones norteamericanos. «Si entras en guerra y no vas al fondo del problema político, ¿qué sentido tiene? —preguntaba—. Lo único que vamos a conseguir es que dentro de cinco años aparezca otro tirano. Si esta guerra pretende acabar con todas las *yihads* —guerra santa islámica—, tiene que tener detrás una agenda política completa».

Uno de los hombres de confianza de Zinni me dijo: «Nuestra pregunta era: "Y el día siguiente ¿qué?". ¿Cómo abordar los aspectos de la seguridad a largo plazo en Irak? Por ejemplo, ¿habría que desarmar a la Guardia Republicana? —el cuerpo militar más leal a Sadam—. ¿O sería preferible que en vez de proteger a Sadam se dedicara a proteger al pueblo iraquí? Hay kurdos en el norte, chiíes en el sur y el partido Baaz en el centro, con grandes divisiones tribales internas. Una guerra civil en ciernes. Si añadimos la oposición exterior, tenemos un enorme potencial de inestabilidad. Soy un estratega militar y pienso siempre en la peor de las situaciones. Por malo que sea este individuo, mejor un Irak estable que el caos de la inestabilidad».

Cuando pregunté a James Woolsey, ex director de la CIA, acerca de estos temores, me dijo: «Irak tiene sus facciones tribales y sus lealtades regionales, pero también un sector social muy culto y extremadamente refinado. No hay razón para que no puedan establecer en el país una democracia más o menos federalizada».

«Sí, por supuesto, sería bonito librarse de Sadam —me dijo un ex alto funcionario del Departamento de Defensa—. En Oriente Próximo todos se alegrarían de su caída. Pero el problema es la viabilidad».

A finales de 2002 el mismo funcionario me dijo que, según su parecer, el presidente Bush aún no había decidido qué hacer respecto a Irak. Hasta que lo decidiera, añadió, el Departamento de Estado continuaría prestando apoyo financiero a los grupos de la oposición, incluido el CNI. En una entrevista publicada por el *Washington Post* en otoño, Condoleezza Rice empleó una metáfora deportiva para indicar que todas las opciones estaban abiertas. «Le pasaremos la pelota al jugador mejor situado», le dijo al columnista Jim Hoagland.

Hay pruebas de que el ruido de sables en Washington puso nervioso a Sadam. «Los iraquíes están muertos de miedo», dijo una fuente del espionaje. Según un ex funcionario, los servicios de inteligencia habían recibido indicios —por increíbles que parezcan— de que los iraquíes podrían estar dispuestos a colaborar en la captura de Bin Laden. Mensajes conciliatorios llegaron a la Casa Blanca a través de canales diplomáticos en Canadá.

En la Administración existía consenso sobre un solo tema, me dijeron varios funcionarios: la oposición a un nuevo régimen de inspección de la ONU en Irak. Los inspectores habían sido retirados a finales de 1998 tras siete años de conflictivas —y a veces muy fructíferas— inspecciones, e Irak se negaba a aceptar una nueva remesa de inspectores. «He oído decir que las altas esferas tienen muy poca fe en la viabilidad del nuevo régimen de inspección», me dijo un experto en desarme.

Un oficial superior de la Marina, retirado, calificó de «disuasoria» la estrategia de la Administración: «Hemos de asegurarnos de que Sadam sepa que si asoma la cabeza recibirá un palo».

Cada vez más cerca

A principios de la primavera de 2002, la Administración Bush seguía muy dividida respecto a Irak. El convencimiento de que Sadam iba a ser derrocado era general, pero no así el mo-

do en que se lograría ese objetivo. El presidente había dado de plazo hasta el 15 de abril de 2002 para que las agencias en disputa elaboraran un «plan coagulado» —como lo expresó un alto funcionario del Departamento de Estado— para acabar con el régimen. El presidente debía reunirse ese mes con Tony Blair, primer ministro británico, cuyo apoyo para la operación iraquí era considerado esencial.

Había mucha polémica acerca de las tropas estadounidenses que serían necesarias, si el blanco inmediato tenía que ser Bagdad, qué líder de la oposición iraquí debería erigirse en líder interino y, lo más importante, cómo responderían al ataque los militares iraquíes: ¿se batirían en retirada e incluso se volverían contra Sadam, o combatirían?

Los procedimientos estratégicos normales se dejaron de lado, según muchos militares y funcionarios de inteligencia con los que hablé en su momento. Estos procedimientos incluían normalmente una serie de estudios preliminares bajo el control del Consejo de Seguridad Nacional y el Estado Mayor Conjunto. Pero me informaron que el Estado Mayor Conjunto y su jefe, el general de la fuerza aérea Richard Myers, se habían implicado muy poco. Como lo expresó un asesor del Gobierno, la estrategia militar para Irak estaba operando «bajo la directriz VFR», es decir, bajo «reglas de vuelo visual», término empleado por los controladores aéreos cuando deben proceder con un mínimo de orientación.

La disputa entre el Pentágono y el Departamento de Estado había tomado un cariz más personal. «Es el regreso de los malditos fanáticos derechistas —me dijo un ayudante de Armitage, refiriéndose al equipo de Wolfowitz—. Las bayonetas están caladas». Y con tono airado añadió que estaba dispuesto a «verme las caras con ellos —sus detractores "de poca monta" del Pentágono— en cualquier momento». Por su parte, uno de estos detractores calificó la conducta del Departamento de Estado de «increíblemente personal y vitriólica. Su postura es que nosotros somos idiotas, sobre todo los que venimos de la extrema derecha. El American Enterprise Institute es para ellos como el buque nodriza de Darth Vader».

Altos funcionarios del Departamento de Estado estaban especialmente descontentos con William Luti, el ayudante del subsecretario de Defensa para Oriente Próximo y sur de Asia. Luti, capitán retirado de la Armada y veterano de la guerra del Golfo que trabajó en el equipo del vicepresidente Cheney en el verano de 2001, era visto como alguien obsesionado con el inmediato derrocamiento de Sadam, hasta el punto de no haber reflexionado sobre sus consecuencias. Sin embargo, entre los partidarios de Luti se encontraba Richard Perle.

En anteriores Gobiernos, estas luchas intestinas solían resolverse con la mediación del asesor de seguridad nacional. Pero con Condoleezza Rice la capacidad de maniobra del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) se había visto reducida por una serie de dimisiones y movimientos de cargos que en parte parecen resultado de disputas internas. Ese mes de marzo, el CSN no tenía ningún experto cualificado sobre el tema de Irak. Bruce Riedel, durante mucho tiempo el mayor experto en Oriente Próximo, había viajado al extranjero en un año sabático y la persona que había ocupado el puesto de experto en Irak dentro del CSN, un agente de la CIA, volvió a la agencia tras unos pocos meses en la Casa Blanca. Un tercer experto regional había dejado el consejo tras una serie de disputas políticas con funcionarios civiles del Pentágono. A falta de un sustituto, me dijo un antiguo funcionario, el CSN se había visto obligado a «confiar a terceros» —léase la CIA y el Departamento de Estado— documentos sobre temas importantes.

Wayne Downing, el ex general —y consejero del CSN— nombrado por el presidente Bush asesor de seguridad nacional para combatir el terrorismo, había empezado a llenar el vacío creado en el CSN por la falta de expertos de alto nivel sobre Irak. Downing contrató a Linda Flohr, veterana que había estado veintisiete años en el servicio clandestino de la CIA, la cual, tras retirarse en 1994 (su última misión fue para el ultrasecreto Grupo de Operaciones Iraquí) entró a trabajar para el Rendon Group, una empresa de relaciones pú-

blicas cuyos servicios contrató la CIA en 1991 para llevar temas de prensa relacionados con la oposición iraquí, incluidos Chalabi y el Congreso Nacional Iraquí. La empresa, presidida por John Rendon, que había sido director ejecutivo del Comité Nacional Demócrata, recibió cerca de cien millones de dólares de la CIA en los cinco años siguientes, según un funcionario del CNI. En otoño de 2001, el Rendon Group fue contratado por el Departamento de Defensa para asesorar sobre cómo contrarrestar lo que el Gobierno consideraba «desinformación» acerca de las acciones bélicas norteamericanas en Afganistán. El Rendon Group fue contratado asimismo por la Oficina de Influencia Estratégica del Pentágono, que fue suprimida en febrero de 2002 cuando el *New York Times* publicó que proporcionaría a los corresponsales extranjeros «informaciones, tal vez incluso falsas». (El contrato de Rendon con el Pentágono, sin embargo, no fue cancelado). Flohr trabajaba también para una empresa privada —de fabricación de chalecos antibalas— fundada por Oliver North, ex marine y asesor del CSN en la Administración Reagan que fue despedido por su implicación en el escándalo Irán-Contra.

Los halcones y sus adversarios estaban absortos en discusiones sobre la utilidad futura de Chalabi. La jefatura civil del Pentágono seguía insistiendo en que sólo el CNI podía liderar la oposición. Un ex funcionario de la Administración me dijo: «Todos, salvo el Pentágono y la oficina del vicepresidente, quieren hundir al CNI». Los críticos del CNI apuntaban que Chalabi, pese a los años de esfuerzos y los millones de dólares que Estados Unidos le había proporcionado, conservaba una notable impopularidad en muchos sectores iraquíes. «Si Chalabi es el elegido, podría haber una guerra civil tras la caída de Sadam», me dijo un ex agente de la CIA.

Un ex funcionario de alto nivel del Pentágono añadió: «Hay cosas que un presidente no puede ordenar, y una de ellas es una oposición interna. Deme una Alianza del Norte —el grupo opositor afgano que, con ayuda de Estados Unidos, consiguió victorias iniciales contra los talibanes— y entonces hablaremos de lo que puede costar respaldarlos». Un ex jefe

del puesto de la CIA en Oriente Próximo me dijo: «Sería ridículo subirnos al carro de Chalabi. No tiene la menor credibilidad en la región».

La CIA y el Departamento de Estado aceleraron sus esfuerzos por forjar una coalición de antiguos militares iraquíes y grupos de la oposición con el objetivo de convencer a los tenaces partidarios de Chalabi de que el problema se podía enfocar de otra manera... sin la implicación del CNI. Las facciones opositoras iraquíes se reunían de manera regular en Londres, y la idea de una oposición de amplio espectro, sin Chalabi, estaba «ganando enteros», según un ex agente de la CIA, debido en parte a las críticas de otros iraquíes a su actitud supuestamente arrogante y despótica. «Chalabi estaba consiguiendo galvanizar a la oposición en su contra», comentó un funcionario de inteligencia. Los elementos clave, conocidos por algunos como la «banda de los cuatro», incluían a representantes de la Unión Patriótica del Kurdistán, de tendencia claramente anti-Sadam; al Consejo Supremo para la Revolución Islámica, pro-iraní, grupo de la resistencia chií; y el Pacto Nacional Iraquí con base en el Reino Unido, liderado por Iyad Alaui, un neurólogo que abandonó Irak en la década de 1970.

Transcurrido medio año del 11 de septiembre, Alaui y varios ex militares iraquíes asistieron a reuniones —más bien audiciones— con funcionarios de la CIA en diversos hoteles de Virginia. Las credenciales de Alaui comprendían sus veinte años de militancia anti-Sadam como fundador del Pacto Nacional Iraquí. Pero su papel como agente del partido Baaz en los años sesenta y setenta, cuando Sadam pugnaba por alzarse con el poder —alcanzó la presidencia en 1979—, era bastante menos conocido. «Alaui ayudó a Sadam a conseguir el poder —me dijo un funcionario de inteligencia—. Era un agente muy serio y un creyente auténtico». Reuel Gerecht, el ex agente de la CIA, lo describía en estos términos: «Dos hechos destacan en Alaui. Primero, le gusta considerarse un hombre de ideas; y segundo, su mayor virtud es ser un gánster».

A principios de 2004 una antigua compañera de Alaui de sus tiempos en la Facultad de Medicina, la doctora Haifa al

Azaui, publicó un artículo en un periódico árabe de Londres planteando preguntas sobre su personalidad y su buena fe profesional. Azaui lo describía como un «hombre muy corpulento y rudo que llevaba una pistola en el cinturón y aterrorizaba a los estudiantes empuñándola de vez en cuando». Su título de médico «se lo otorgó el partido Baaz». Alaui se trasladó a Londres en 1971, aparentemente para continuar sus estudios de medicina; allí estuvo a cargo de las operaciones en Europa de la organización baazista y de las actividades locales de la Mujabarat, la agencia de espionaje iraquí, hasta 1975.

«Si me pregunta si Alaui tiene las manos manchadas de sangre de sus días en Londres, la respuesta es sí —me dijo el ex agente de la CIA Vincent Cannistraro—. Era un espía iraquí pagado por la Mujabarat y estuvo metido en asuntos sucios». Un diplomático árabe de alto nivel me dijo que Alaui tuvo que ver con un «comando ejecutor» de la Mujabarat que perseguía y mataba a disidentes baazistas por toda Europa. (La oficina de Alaui no respondió a una solicitud de comentarios al respecto). Por motivos que no están claros, Alaui cayó posteriormente en desgracia y los baazistas orquestaron varios intentos de acabar con su vida. El tercero de ellos —un hombre irrumpió en su casa de Londres en 1978 armado con un hacha— se saldó con una estancia de un año en el hospital.

El principal candidato de la CIA, me dijeron varios funcionarios, era Nizar al Jazrayi, antiguo jefe del Estado Mayor iraquí que desertó a mediados de la década de 1990. Como suní y ex general, Jazrayi era visto por la CIA como mucho más aceptable para el cuerpo de oficiales iraquí que Chalabi, que carece de historial militar. Los partidarios de Chalabi en el Pentágono abogaban por éste señalando que no sólo era chií, como la mayoría de la población iraquí, sino además «un hombre de negocios completamente occidentalizado», precisamente una de las razones por las cuales el Departamento de Estado dudaba de que pudiese recabar apoyo entre los iraquíes.

Chalabi y sus aliados respondieron subvencionando una campaña de relaciones públicas contra Jazrayi, alegando que

éste estaba implicado en un crimen de guerra —los iraquíes gasearon en 1988 una ciudad kurda, afirmación que Jazrayi negaba— y sugiriendo que podía ser un agente doble. (En noviembre de 2002, Jazrayi fue acusado de crímenes de guerra en Dinamarca, donde residía, y puesto bajo arresto domiciliario. Posteriormente desapareció).

«Sobre Chalabi hay una gran tormenta de fuego que nos está impidiendo llegar a los militares iraquíes —me dijo a principios de 2002 un ex agente de la CIA—. Entender este *impasse* es poco menos que imposible para quien no esté en el ajo».

Más de quinientos mil soldados estadounidenses tomaron parte en la primera guerra del Golfo, y a principios de 2002 los estrategas del Mando Central, reunidos en Tampa, insistían en que para otra invasión serían necesarias al menos seis divisiones de combate —unos ciento cincuenta mil hombres—. En un artículo publicado por *Foreign Affairs* en su número de marzo/abril de 2002, Kenneth Pollack, director de la sección Golfo Pérsico del CSN durante la Administración Clinton, hizo la siguiente valoración:

> Será necesaria infantería ligera en caso de que las fuerzas leales a Sadam resistan en las ciudades. Harán falta fuerzas aerotransportadas para apoderarse de los pozos petrolíferos en el inicio de las hostilidades y para ocupar los emplazamientos desde los que Sadam podría lanzar misiles contra Israel o Arabia Saudí. Y será necesario tener tropas disponibles para tareas de ocupación una vez terminados los combates. En conjunto, los efectivos deberían ser de doscientos a trescientos mil hombres; para la invasión, entre cuatro y seis divisiones más unidades de apoyo, y para la campaña aérea de setecientos a mil aviones y entre uno y cinco transportes de tropa. [...]. Reunir semejante ejército en el golfo Pérsico llevaría de tres a cinco meses, pero la campaña en sí sería de aproximadamente un mes, incluyendo las primeras operaciones por aire.

Los halcones de dentro y fuera de la Administración, incluidos Paul Wolfowitz y Richard Perle, argumentaban sin embargo que cualquier demostración de fuerza provocaría inmediatamente un levantamiento popular contra Sadam, y que la revuelta se extendería rápidamente. Cuando hablé con él a principios de 2002, Perle quitó importancia a la muy divulgada inquietud de los vecinos regionales de Irak, quienes preveían el caos y una prolongada guerra civil si el ejército iraquí plantaba cara. «Los árabes son como la mayoría de la gente —me dijo—. Les gustan los ganadores, y siempre se pondrán del lado de los ganadores». Y el general Downing, que dirigió un comando de Fuerzas Especiales durante la guerra del Golfo, criticaba al Pentágono por su compleja planificación y sus exagerados cálculos de fuerzas, diciendo a sus amigos del CNI que si con cinco mil soldados se podía solucionar el problema, el Pentágono insistiría en quintuplicar el número, tirando a la baja.

Un elemento clave en el debate sobre el número de efectivos necesarios era el general del ejército Tommy Franks, quien, como jefe del Mando Central, dirigiría la guerra. (De hecho, había dirigido la cada vez más complicada operación en Afganistán). A principios de 2002, importantes funcionarios de la Administración me dijeron que Franks seguía en la senda de su predecesor, el general Zinni, insistiendo, pese a la presión de los civiles del Pentágono, en una metódica concentración de tropas en la región antes de lanzar la ofensiva. «Franks está aguantando mecha», me dijo en febrero de 2002 uno de los socios de Armitage. Los estrategas del Cuerpo de Marines parecían menos optimistas que sus homólogos de los demás cuerpos militares acerca de la capacidad de un contingente reducido para derrocar al régimen de Sadam. «El ejército de tierra y la fuerza aérea están dispuestos a ir —prosiguió el socio de Armitage—. Así que ahora toca "comerles el coco" a los marines. Ellos se han cerrado en banda y no piensan ir», esto es, en un número menor del que estimaban necesario.

«Hay un montón de gente que cree que va a ser fácil, pero puede que nos llevemos una gran sorpresa», me dijo

un oficial de alta graduación, recientemente retirado, que elaboraba supuestos tácticos con los mandos del Cuerpo de Marines. Y un ex embajador de Estados Unidos en Oriente Próximo me dijo: «Si hemos de esperar tres meses de bombardeos, con bajas civiles, tendremos problemas serios con el mundo árabe». Scott Ritter, el ex marine que dirigió a los inspectores de la ONU en la década de 1990 e insistió antes de la guerra en que Irak no disponía de armas de destrucción masiva, dijo que el ejército iraquí podía responder a una invasión dispersándose por la campiña. Si se diera el caso, se preguntaba Ritter, «¿qué vamos a hacer? ¿Arrasar los pueblos?».

En los primeros meses de 2002 Chalabi y sus partidarios en el Pentágono declaraban a la prensa que el ataque podría producirse aquella misma primavera. Las posibles objeciones de Francia y Rusia, los dos principales clientes petrolíferos de Sadam, serían suavizadas, según me dijo un alto funcionario del CNI, con la garantía de que tendrían acceso a los riquísimos yacimientos del sur de Irak. Chalabi había estado en contacto con empresas petrolíferas norteamericanas, añadió el funcionario, a fin de asegurarles que los yacimientos acelerarían la producción y serían una fuente de ingresos para el nuevo Gobierno interino que el CNI confiaba en dirigir. Las compañías francesas y rusas «tendrían que ser socios menores de los americanos».

Sin embargo, un importante funcionario del Departamento de Estado me dijo entonces: «El presidente tiene una agenda, pero no encaja con lo que dicen esos chicos. Lo último que queremos es atacar Bagdad y que Al Qaeda ataque Chicago. Quedaríamos muy mal». Y añadía: «Cuando vayamos a Irak haremos las cosas bien. Hay un antes y un después, y queremos tener el después bien preparado». Refiriéndose a Afganistán, un alto funcionario de inteligencia se expresaba en términos similares: «No hemos acabado lo que estamos haciendo, y bastante trabajo tenemos como para meternos en otro lío». Un ex funcionario de inteligencia lo expresaba más gráficamente: «Somos una enorme boa constrictor y estamos

estrujando a esos terroristas. Vamos a digerir a estas ratas antes de pensar en zamparnos otra».

Israel, aliado entusiasta e impulsor de un acción norteamericana contra Irak, constituía también uno de los obstáculos más difíciles de salvar. Había que llegar —y se llegó... en secreto— a ciertos compromisos de seguridad. El tema aparente de la visita oficial a Washington del primer ministro israelí en febrero de 2002 era el conflicto palestino, pero hubo también una agenda privada para la Casa Blanca: informar a Sharon de la determinación del presidente de derrocar a Sadam y persuadirle de que demorara una respuesta, como lo hizo en la guerra del Golfo, en caso de un ataque iraquí con misiles Scud. Israel cae dentro del radio de acción de los Scud que Irak tiene en el oeste del país. (En 1991 Israel recibió treinta y nueve de estos misiles; y, pese a la extensa búsqueda por aire y tierra y pese a que se repitió públicamente lo contrario, no había pruebas de que las Fuerzas Especiales norteamericanas hubieran encontrado y destruido ninguna rampa móvil de lanzamiento de misiles Scud en la guerra del Golfo).

Durante la visita de Sharon, según me dijeron funcionarios estadounidenses e israelíes, el primer ministro y Binyamin ben Eliezer, ministro de Defensa israelí, consiguieron de Washington la garantía de que serían avisados con tiempo de cualquier invasión inminente, e instaron a la Administración Bush a hacer lo necesario —por ejemplo, estacionar un contingente de tropas de tierra en el oeste de Irak— a fin de destruir posibles rampas de lanzamiento de Scuds en el inicio de la ofensiva. Pero los líderes israelíes se negaron a garantizar a Washington que Israel no se tomaría la revancha. Poco después de las conversaciones, un alto funcionario israelí me comentó: «Básicamente hemos dicho que Estados Unidos, en sus consideraciones, debe tener en cuenta que si es atacada, Israel responderá al ataque. Nos atacaron en 1991 y no hicimos nada porque podríamos haber malogrado la coalición árabe-americana. Occidente vio nuestra postura como un

gesto de inteligencia, pero en el mundo árabe tuvo un grave efecto negativo sobre la capacidad disuasoria de Israel. Que alguien piense que puede atacarnos y no ser atacado de manera diez veces peor, es un serio problema. No volverá a ocurrir. El mensaje es claro: si un misil Scud toca Tel Aviv con su asquerosa ojiva y mueren docenas de personas, ¿espera alguien que Israel se cruce de brazos? ¿Se atreverán a pedirnos que no respondamos al ataque?».

En las conversaciones, la Administración Bush hizo saber a los israelíes que cabía la posibilidad de que la jefatura iraquí ordenase cargar sus lanzaderas móviles con cabezas químicas y biológicas. «Nadie descarta la posibilidad de una guerra bacteriológica —dijo el funcionario israelí—, pero nosotros creemos más probable que venga por aviones iraquíes, no por Scud, así que eso no nos preocupa demasiado. Ningún aparato iraquí sobrevoló Israel en 1991, y Sadam no tiene tantos aviones como entonces, aparte de que nuestra defensa antiaérea ha mejorado bastante». Sin embargo, añadió, «si Sadam cree que el objetivo de la invasión es un cambio de régimen y que él es el blanco, irá a por todas».

Uno de los socios de Richard Armitage describía la amenaza a Israel, y la capacidad de ésta para contraatacar, como factores que había que tener en cuenta en la planificación de la guerra, dada la conocida capacidad nuclear de Israel: «Si Sadam ataca a Israel a tope y ellos se ponen de nuestra parte a tope, tendremos a todo el mundo árabe en nuestra contra, no sólo al terrorismo islamista».

Cuando lo entrevisté por esa época, Richard Perle discrepó de la preocupación israelí acerca de un bombardeo iraquí. Puesto que era probable que la respuesta de Israel fuese devastadora, dijo, Sadam sólo se decidiría a atacar si no le quedaba otra opción. «La coyuntura apocalíptica sería que Sadam, desesperado, lanzara armas de destrucción masiva contra Israel —me dijo—. Asumiendo que sería un acto demencial, habría que preguntarse hasta qué punto serían obedecidas las órdenes de un maníaco como Sadam». Eso, suponiendo que las tropas y los ciudadanos iraquíes, alentados por los bombardeos

norteamericanos, se hubiesen rebelado contra la cúpula del poder. «Si recibes esa orden y estás al mando de una unidad Scud, ¿la ejecutas? Si lo haces, te ahorcan o te matan. De todos modos, cuando Sadam se decida a hacerlo —ordenar el ataque contra Israel— significará que está derrotado».

«Nadie podrá decir que esto no implica un riesgo —añadió Perle, refiriéndose a un ataque de Estados Unidos—. Desde el punto de vista de Israel, ¿estarán más seguros pasado un tiempo? Si los dirigentes israelíes se sienten ya preocupados por las amenazas de Sadam, ¿qué pasará cuando tenga armas nucleares?». Y, haciéndose eco de la opinión de Wolfowitz y de muchos colegas suyos en el Pentágono, concluyó: «En cuanto desafiemos en serio a Sadam, el tirano pasará a la historia».

Sin embargo, varios partidarios de la Administración veían pocas pruebas de que se estuviera planificando a largo plazo. «La principal premisa es que hay que pensar en Irak, y lo demás irá encajando solo», declaró Geoffrey Kemp en una entrevista a principios de 2002. Kemp, principal experto en Oriente Próximo del CSN durante la primera Administración Reagan, estaba examinando alternativas para Oriente Próximo después-de-Sadam en su calidad de director de Programas Estratégicos Regionales en el Nixon Center. «Siria se aviene a negociar. Los saudíes se conforman. Irak queda rodeado por fuerzas estadounidenses y los mulás se ven obligados a hacer concesiones. Habrá un acuerdo entre Israel y Palestina. El fin de Sadam conducirá a un renacimiento económico de Irak. Bueno, si todo eso ocurre, yo daría saltos de alegría».

«Pase lo que pase, Bush no puede permitirse fallar. Inmediatamente después de la victoria hemos de tener un gobierno estable y pro-occidental en Bagdad. Pero también es importante que pensemos en la peor posibilidad. Por ejemplo, que Sadam emplee armas de destrucción masiva contra Israel y que esto acabe siendo una guerra de Estados Unidos e Israel contra Irak. Nadie sabe cuánto podría costar. Podría haber una interrupción del suministro de petróleo. Mientras tanto, ahí está Afganistán... El propósito de la invasión es

limpiar Irak de armas de destrucción masiva. Si Sadam y sus hijos son neutralizados y expulsados, todavía hará falta una cosa: cooperación completa entre quien dirija la operación y los inspectores para limpiar hasta el último rincón de los palacios. Irak es un país orgulloso que ha sido humillado, y es de locos pensar que porque odian a Sadam estén enamorados de Estados Unidos. El nacionalismo latente surgirá antes o después, y habrá quienes no querrán soltar las armas que hayan logrado conservar. El peligro es que estas armas puedan surgir en otra parte, en poder de algún pequeño grupo de militares con planes propios».

A mediados de marzo de 2002, el vicepresidente Cheney realizó una prolongada gira por Oriente Próximo, donde un importante contingente de fuerzas estadounidenses estaba ya de camino sin que apenas se supiera. Oficialmente, el Pentágono anunció en su momento que unos cinco mil soldados estaban estacionados en Kuwait, pero un asesor de la Administración me dijo que a mediados de febrero había en esa zona un número mucho mayor, además de una numerosa presencia de la Armada. El contingente militar, explicaban funcionarios de inteligencia, estaba pensado para proteger Kuwait y otras naciones aliadas del Golfo en caso de que Sadam decidiera atacar primero. El mensaje del presidente sobre el Eje del Mal en su discurso sobre el Estado de la Unión y el creciente arsenal acumulado habían suscitado muchas preguntas de diplomáticos en Oriente Próximo y Europa. Uno de los objetivos de Cheney era explicar la postura de Estados Unidos a sus aliados y tratar de formar una coalición para una nueva invasión de Irak, tarea harto desalentadora. En ese momento, el único aliado probable era Tony Blair.

Con respecto al ataque a Irak, no todas las personas cercanas al presidente pensaban que pudiera alcanzar sus dos objetivos: un derrocamiento con escasas bajas estadounidenses y un régimen pro-occidental. «Estamos a un paso de ponerlo en marcha —dijo un ex funcionario de inteligencia antes del viaje de Cheney—, pero ¿cómo va a terminar?». En cuan-

to a la idea de Bush de librarse de Sadam, dijo: «Es como un alud: va cobrando impulso a medida que baja por la ladera. Cada vez es más grande, pero nadie sabe qué harán ellos».

Entre las personas cercanas a la Casa Blanca había pocas dudas sobre lo que el presidente pretendía y sobre cuándo había tomado esa decisión. «Llegué a la Casa Blanca a principios de 2002 y empecé a asistir a reuniones informativas del CNS con el presidente —me dijo un ex miembro del Consejo de Seguridad Nacional—. Cada vez que el presidente hablaba de Irak, sabíamos que era algo que queríamos que pasara». Siempre se dejaba claro que no había ninguna decisión en firme, añadió el miembro del CSN, pero todos los enterados sabían que era cosa hecha. En febrero de 2002, dijo, «la decisión de ir a la guerra ya se había tomado».

Esto tuvo un efecto devastador en la lucha contra el terrorismo. La Administración Bush redirigió al golfo Pérsico muchas operaciones de espionaje que habían sido enfocadas contra Al Qaeda y otros grupos terroristas en todo el mundo. Lingüistas y agentes especiales fueron asignados bruscamente a nuevos puestos, y varios programas del espionaje contraterrorista fueron recortados.

En mayo de 2002, la ONU revisó las sanciones económicas contra Irak. Las nuevas sanciones «inteligentes» perseguidas por la Administración Bush dificultarían que Irak comprara materiales con aplicaciones tanto civiles como militares pero permitirían la llegada de más medicinas y otros materiales, aliviando así los problemas de la población. Por supuesto, en cualquier momento las sanciones podrían ser suspendidas si Irak aceptaba nuevas inspecciones de las Naciones Unidas en busca de sus supuestos emplazamientos de armas nucleares y bacteriológicas. El plan estadounidense, convinieron varios funcionarios, era exigir tantas cosas —entre otras, acceso sin restricciones a los palacios— que a Sadam le resultase casi imposible acceder. Los europeos, en especial Francia, estaban tratando de persuadir a Sadam de que «se abriese», como lo expresó un importante asesor de la Admi-

nistración, a otra inspección de la ONU y no diera así «una excusa a Estados Unidos para bombardear».

La inminente guerra significaba gastar (y ganar) dinero, mucho dinero; algunos de los más ardientes paladines de la guerra contra Irak eran también los que más beneficios podían obtener de ella.

Richard Perle va a almorzar

En el punto culminante de su carrera como comisionista en la década de 1970, el empresario saudí Adnan Khashoggi consiguió colocar a la familia real saudí armas y aviones por valor de miles de millones de dólares, ganando cientos de millones en porcentajes y honorarios. Aunque jamás se le condenó por malversación, Khashoggi se vio envuelto en muchas disputas con fiscales federales y la Comisión de Cambios y Valores norteamericana, y en estos últimos años ha tenido, entre otros, pleitos en Tailandia y Los Ángeles, en relación con supuestos fraudes y manipulación de acciones. Durante la Administración Reagan fue uno de los intermediarios entre Oliver North, de la Casa Blanca, y los mulás de Irán en lo que se conoció como el escándalo Irán-Contra. Posteriormente, Khashoggi afirmó haber perdido diez millones de dólares que había aportado para conseguirle a Irán armas embargadas que debían ser trocadas (con la aprobación presidencial) por rehenes norteamericanos. Los escándalos de aquella época parecían alimentarse los unos a los otros: una investigación del Congreso reveló que Khashoggi había pedido prestado gran parte del dinero para armas al Bank of Credit and Commerce International (BCCI), cuya bancarrota en 1991 defraudó a millares de clientes y originó investigaciones y litigios que duraron años.

Khashoggi continúa ejerciendo de intermediario. En enero de 2003 organizó un almuerzo privado, en Francia, para reunir a Harb Sale al Zuhair, industrial saudí cuya fortuna familiar incluía conglomerados de empresas de la cons-

trucción, electrónica e ingeniería por todo Oriente Próximo, y a Richard Perle.

Perle había trabajado como asesor de política exterior en la campaña presidencial de George W. Bush, pero decidió no aceptar un puesto más importante en la Administración. Sin embargo, a mediados de 2001 sí aceptó una oferta de Rumsfeld para presidir la Junta de Política de Defensa. Este organismo consta de una treintena de miembros, en su mayoría antiguos funcionarios del Gobierno muy respetados, militares retirados e intelectuales, incluidos ex secretarios de Defensa y directores de la CIA, que trabajan sin cobrar. La Junta se reúne varias veces al año en el Pentágono para revisar y evaluar la política de defensa estratégica del país. Puede que no formen parte del Gobierno, pero tienen acceso a información clasificada y a legisladores de categoría, y prestan asesoramiento sobre temas tales como la adquisición de armas. Las actas de la Junta son en su mayoría confidenciales.

Perle era además socio gerente de una empresa financiadora de operaciones de alto riesgo llamada Trireme Partners L.P., dada de alta en Delaware en noviembre de 2001, dos meses después de los atentados del 11-S. El principal negocio de Trireme, según una carta de dos páginas que un representante de la firma envió a Khashoggi en noviembre del siguiente año, era invertir en empresas relacionadas con tecnología, bienes y servicios valiosos para la seguridad interna y la defensa. La carta alegaba que el temor al terrorismo aumentaría la demanda de tales productos en Europa y en lugares como Arabia Saudí y Singapur.

También destacaba las importantes conexiones de la empresa con el Gobierno: «Tres de los miembros de la gerencia de Trireme son actualmente asesores del secretario de Defensa a través de la Junta de Política de Defensa, cuyo presidente, Richard Perle, es uno de nuestros directivos». Los otros dos miembros de la Junta relacionados con la empresa eran Henry Kissinger, el ex secretario de Estado (que, en realidad, era únicamente miembro del comité consultivo de Trireme y no estaba involucrado en su gerencia), y Gerald Hillman,

inversor y socio de Perle que administraba los asuntos de la sucursal neoyorquina de Trireme. La carta decía que se habían recaudado ya cuarenta y cinco millones de dólares, incluidos veinte millones de Boeing. El objetivo era, sin duda, atraer nuevos inversores, como Khashoggi y Zuhair.

Como presidente de la Junta, Perle estaba considerado un empleado especial del Gobierno y por tanto sujeto a un código de conducta federal. Estas reglas prohíben a un empleado especial participar, oficialmente, en ningun asunto en el que tenga intereses financieros. «Una de las normas generales es no aprovecharse de un cargo federal para sacar un beneficio financiero», me dijo un ex abogado del Gobierno que contribuyó a formular el código de conducta. La cuestión, añadió, era «proteger las actividades del Gobierno de conflictos reales o aparentes».

Organismos consultivos como la Junta de Política de Defensa permiten a expertos ajenos al Gobierno aportar sus conocimientos y su experiencia para tratar, de manera confidencial, temas políticos de importancia. Sin embargo, debido a los vínculos de tales expertos con la industria de la defensa estos conflictos son inevitables. Un miembro de la Junta me dijo que la mayoría de sus integrantes participaban activamente en empresas y finanzas, y al menos en una ocasión un miembro había abandonado una reunión cuando se había sometido a discusión un producto militar o de inteligencia en el que tenía intereses.

Cuando, a raíz de un artículo que debía publicarse en marzo de 2003, me puse en contacto con miembros de la Junta para preguntar acerca de Perle y Trireme, cuatro de ellos me dijeron que la Junta, que se había reunido hacía poco, el 27 y el 28 de febrero, no había sido informada de la relación de Perle con Trireme. Un miembro de la Junta, al conocer la reunión de Trireme y Perle con Adnan Khashoggi, exclamó: «No me joda. ¡Perle es el presidente! Si usted escribiera que estoy montando una empresa de seguridad y que he metido en la Junta a personas con las que estoy haciendo ese nego-

cio, estaría listo». Se refería a Gerald Hillman, que apenas tenía experiencia militar o política en el Gobierno antes de que le ofrecieran un puesto en la Junta. Y continuó: «Opino que esto está en los límites o fuera de lo que permite la ética. Creo que apestaría a perro muerto».

Hillman, ex consejero de McKinsey, sorprendió a más de un miembro de la Junta en febrero de 2003 al plantear preguntas sobre la validez de los contratos petrolíferos con Irak. «Hillman dijo que los viejos contratos son un mal asunto, que deberíamos dar una lección a franceses y rusos —me explicaba el miembro de la Junta—. Fue una conversación seria. Nosotros seríamos los intermediarios. Después venderíamos futuros en la compañía petrolífera iraquí. Y yo pensé: "Vaya, hombre, no sigas por ese camino"». (Hillman negó haber hecho esas afirmaciones en la reunión).

Larry Noble, director ejecutivo del Center for Responsive Politics, con sede en Washington, una organización sin ánimo de lucro, dijo de la implicación de Perle en Trireme: «No es ilegal, pero tiene toda la apariencia de una incompatibilidad. Suficiente para preguntarse sobre los consejos que está dando al Pentágono y por qué el mundo empresarial tiene tratos con él. La cuestión es si Perle está comerciando con su comité asesor. Si es un punto de partida para conseguir contratos para su empresa, significa que es un *closer*, alguien a quien traes no para que hable de dinero sino que es el verdadero motivo de que estés cerrando un trato».

La conexión de Perle con Trireme no era su primer encontronazo en lo que respecta a los vínculos entre las altas finanzas y la política de campanillas. Perle nació en Nueva York y se graduó por la Universidad del Sur de California en 1964. Posteriormente tuvo varios puestos en el Senado antes de dejar el Gobierno en 1980 para trabajar en una firma de consultoría militar. El año siguiente volvió al Gobierno como subsecretario de Defensa. En 1983 fue objeto de una investigación del *New York Times* por haber presuntamente recomendado al ejército que comprara armas a una empresa israelí de la cual había aceptado, dos años antes, unos honorarios

de cincuenta mil dólares. Perle reconoció después que había aceptado esos honorarios, pero negó enérgicamente cualquier tipo de malversación. No se había recusado, dijo, porque los honorarios eran por un trabajo realizado antes de aceptar el cargo en el Departamento de Defensa. Y añadió: «El tema de fondo, por supuesto, era la adquisición de armas, y yo no me dedico a eso». Nunca fue acusado oficialmente de ninguna violación ética en este asunto. Perle estuvo en el Pentágono hasta 1987 y luego participó activamente en el mundo empresarial y de los grupos de presión. Entre otros compromisos empresariales, es actualmente director de una empresa que hace negocios con el Gobierno federal: Autonomy Corporation, una compañía británica que se adjudicó recientemente un contrato federal de seguridad interior. Cuando le pregunté por dicho contrato, Perle me dijo que no existía ningún tráfico de influencias porque el contrato se ganó mediante subasta y «yo no hablé con nadie del asunto».

Un ex alto funcionario de inteligencia habló en términos casi reverenciales de la capacidad de Perle, a fin de cuentas un ciudadano privado, para «cambiar radicalmente la política del Gobierno. Es todo un logro que un *outsider* pueda tener tanta influencia, y que incluso se le haya proporcionado una base institucional para canalizarla».

La autoridad de Perle en la Administración Bush estaba cimentada sobre la estrecha relación, política y personal, con muchas figuras importantes de la misma, como Wolfowitz y Douglas Feith. En 1989 Feith creó International Advisors Incorporated, una compañía dedicada al cabildeo cuyo principal cliente era el Gobierno turco. La firma tuvo contratado a Perle como asesor entre 1989 y 1994. Feith, según un antiguo funcionario del Departamento de Defensa, consiguió su puesto actual gracias a que Perle intercedió por él ante Donald Rumsfeld, que era escéptico respecto a Feith. Perle y Rumsfeld comparten las mismas opiniones sobre muchos temas de política exterior. Ambos habían pedido durante años el derrocamiento de Sadam Husein, mucho antes del 11 de

septiembre; ambos habían insistido en el Departamento de Estado respecto a Irak, y eran decididos partidarios de Chalabi. También habían trabajado juntos, en 1996, para elaborar una lista de iniciativas políticas para Benjamin Netanyahu poco después de que éste fuera elegido primer ministro israelí. Entre las sugerencias estaba colaborar para un cambio de régimen en Irak.

Perle ha sido también un crítico acerbo del Gobierno saudí y de los estadounidenses que cobran de él. Ha cargado pública y repetidamente contra antiguos funcionarios del Gobierno relacionados con centros de investigación y fundaciones subvencionados por los saudíes, y en el verano de 2002 declaró a la *National Review:* «Yo creo que es un deshonor. Son personas que salen en la tele, que escriben artículos de opinión. Los saudíes son una fuente importante del problema que tenemos con el terrorismo. Sería mucho más evidente para la opinión pública si no fuera por esta comunidad de ex diplomáticos que trabajan denodadamente para ese Gobierno extranjero». En agosto de 2002, el Gobierno saudí quedó consternado cuando el *Washington Post* reveló que el 10 de julio la Junta de Defensa había escuchado en sesión informativa a un analista de Rand Corporation llamado Laurent Murawiec, que calificó a Arabia Saudí de enemigo de Estados Unidos y recomendó al Gobierno que diera un ultimátum a los saudíes: o dejaban de apoyar el terrorismo, o sus activos financieros en Estados Unidos les serían incautados. Se supo después que Murawiec había sido director de *Executive Intelligence Review*, una revista controlada por Lyndon H. LaRouche, Jr., eterno candidato a la presidencia, teórico de la conspiración y criminal. Según *Time*, fue el propio Perle quien había invitado a Murawiec a hacer esa presentación ante la Junta de Política de Defensa.

La hostilidad de Perle hacia el régimen saudí no le privó de reunirse con posibles inversores saudíes para Trireme. Khashoggi y Zuhair me dijeron que, a su entender, uno de los objetivos de Trireme era buscar la ayuda de saudíes influyentes a fin de conseguir contratos de seguridad interior con la familia

real saudí para los negocios que ésta financiaba. Los beneficios de dichos contratos podían ser cuantiosos. Arabia Saudí había gastado ya cerca de mil millones de dólares en vigilar y demarcar sus 1 360 kilómetros de frontera con Yemen, y la segunda fase de este proceso supondría miles de millones más. Aparentemente, Trireme buscó ayuda en Adnan Khashoggi.

En febrero de 2003 hablé con Khashoggi, que, a sus sesenta y siete años, estaba recuperándose de una operación a corazón abierto en el ático de lujo con vistas al Mediterráneo que tiene en Cannes. «Yo hice de intermediario», me dijo. Y añadió que el primero en hablarle del asunto fue un delegado de Trireme, Christopher Harriman. Khashoggi dijo que Harriman, un empresario norteamericano a quien conocía de su época en la *jet-set*, cuando ambos eran figuras indispensables en la escena social europea, le envió la carta de contacto de Trireme. (Harriman no respondió a mis llamadas para confirmar este dato). Khashoggi explicó que antes de Navidad él y Harb Zuhair, el industrial saudí, se habían entrevistado con Harriman y Gerald Hillman en París y hablado de la posibilidad de una importante inversión en la empresa.

A Zuhair le interesaba algo más que el aspecto financiero; también quería compartir sus opiniones sobre la guerra y la paz con alguien que tenía influencia en la Administración Bush. Aunque era saudí, había nacido en Irak y confiaba en que pudiera encontrarse una solución negociada, «paso a paso», para evitar la guerra. Zuhair recuerda que les dijo a Harriman y Hillman: «Si hay paz, sería fácil recaudar cien millones. Llevaremos el desarrollo a la región». La esperanza de Zuhair era combinar el esfuerzo por la paz con el esfuerzo inversor. Según Khashoggi, Harriman y Hillman dijeron que esa reunión se podía arreglar. En virtud de su posición en la Junta de Política de Defensa, Perle era el elemento ideal; fue «el anzuelo», dijo Khashoggi, para conseguir que Zuhair invirtiera. Khashoggi accedió a tratar de reunir un grupo de posibles inversores para un almuerzo privado con Perle.

El almuerzo tuvo lugar el 3 de enero de 2003 en un restaurante de Marsella, a orillas del mar. (Perle tenía una casa

de veraneo en el sur de Francia). Quienes asistieron difieren sobre cuál era su propósito. Khashoggi y Zuhair afirman que había dos temas en cartera. El primero, darle a éste la oportunidad de proponer una alternativa pacífica a la guerra de Irak; Khashoggi dijo que Perle y él sabían que dicha alternativa era harto improbable, pero Zuhair había estado recientemente en Bagdad y estaba ansioso por hablar de su visita. El segundo, y más importante según Khashoggi y Zuhair, allanar el camino para que éste reuniera a un grupo de diez empresarios saudíes que invertirían en Trireme diez millones de dólares cada uno.

«Para nosotros era normal ver a Perle —me dijo Khashoggi—. En Oriente Próximo estamos habituados a los políticos que utilizan sus despachos para cualquier tipo de negocio. Organicé el almuerzo a fin de que Zuhair expusiera su postura ante Perle. Éste le escuchó educadamente, y la comida se dio por terminada». Zuhair, en una conversación que mantuvimos por teléfono, dijo que Perle había dejado claro en el almuerzo que «estaba por encima del dinero. Dijo que le interesaba más la política, y el negocio es a través de la empresa», o sea, Trireme. Durante la comida, Perle «se ciñó a su idea de que "hemos de librarnos de Sadam"». Cuando hablamos a primeros de marzo, Zuhair me dijo que, por lo que él sabía, Trireme aún no había recibido ningún dinero saudí.

En mi primera conversación telefónica con Gerald Hillman a mediados de febrero de 2003, antes de que yo supiera de su relación con Khashoggi y Zuhair, me aseguró que Trireme no tenía «nada que ver» con los saudíes. «No sé qué se puede hacer con ellos —dijo—. Lo que vimos el 11 de septiembre fue una grotesca manifestación de su ideología. Los norteamericanos creen que los saudíes apoyan el terrorismo. Nosotros no tenemos ninguna inversión suya, ni trato con ellos». (Unas semanas después Hillman reconoció que se había entrevistado con Khashoggi y Zuhair, pero dijo que la reunión había sido organizada por Harriman y que él no sabía que asistiría Zuhair). E insistió en que Perle «no va de ese palo. No es hombre que tenga deseos de lucro».

En una serie de conversaciones telefónicas mantenidas en ese mismo período, Perle admitió que se había visto con dos saudíes en Marsella, pero no divulgó la identidad de ninguno de ellos. (Por entonces, yo aún no sabía quiénes eran). «Sí, había dos saudíes en el almuerzo —dijo—, pero no se habló para nada de Trireme. Ni se mencionó ni salió a colación». Y afirmó tajante: «El almuerzo no iba de dinero. A mí no se me habría ocurrido hablar de inversiones, dadas las circunstancias». Añadió que uno de los saudíes tenía información de que el dictador iraquí estaba listo para rendirse. «Su mensaje fue un ruego para que negociáramos con Sadam».

Cuando le pregunté si los empresarios saudíes presentes en el almuerzo estaban considerados posibles inversores de Trireme, replicó: «No me interesan los saudíes en sí, pero la firma está abierta a cualquier inversor y nuestros socios europeos dijeron que ellos, a través de la banca de inversiones, habían tenido tratos con inversores saudíes». Tanto Perle como Hillman afirmaron categóricamente que, en ese momento, no tenían ningún inversor saudí.

A Khashoggi le hacían gracia las actividades de Perle y Hillman como integrantes de la Junta. Tal como él lo veía, el potencial de negocios de Trireme dependía de que hubiera una guerra con Irak. «Si no estalla la guerra —me dijo—, ¿qué necesidad hay de seguridad? Por supuesto, si hay guerra será necesario gastar miles de millones de dólares. —Y comentó—: ustedes, los norteamericanos, se ciegan con su gran integridad y sus principios democráticos contra el tráfico de influencias, pero ellos no estaban haciendo otra cosa».

Cuando el almuerzo en Marsella y la relación de Perle con Trireme llegaron a oídos de la familia real saudí, ésta reaccionó con ira y perplejidad. Aquella reunión dejaba a Perle, uno de los críticos más vehementes del Gobierno saudí, expuesto a un feroz contraataque.

El príncipe Bandar bin Sultán, que ha sido embajador de Arabia Saudí en Estados Unidos durante veinte años, me dijo que le habían llegado rumores del almuerzo de Perle y de

su conexión con Trireme. El príncipe, con cincuenta años cumplidos, es un destacado miembro de la familia real (su padre es el primer ministro). Según parece, le explicaron que los contactos entre Perle y Trireme y los saudíes eran puramente profesionales por ambas partes. Después de la guerra del Golfo de 1991, me dijo el príncipe, Perle había tenido que ver en un intento malogrado de vender sistemas de seguridad al Gobierno saudí, «y Trireme produce sistemas de seguridad». (Perle confirmó que había pertenecido al consejo de direccion de una compañía que intentó hacer dicha venta, pero dijo que él no estuvo directamente implicado en el proyecto).

«Perle tiene una personalidad escindida —dijo Bandar—. Por un lado intenta hacer un negocio de cien millones de dólares, y por el otro hay elementos que hacen pensar en un chantaje. Algunas personas que estuvieron en la reunión me informaron que si hay trato, él apoyará a Arabia Saudí».

En cuanto al encuentro de Perle con Khashoggi y Zuhair y la afirmación de que su objetivo era hablar de política, el príncipe dijo: «Es lógico que nieguen el verdadero motivo de la reunión. Y una posible iniciativa de paz en Irak les proporciona una buena coartada. Pero yo creo que no tuvo nada que ver con Irak; fue una reunión de negocios».

Sin embargo, Zuhair parecía convencido de que tendría una oportunidad de hablar seriamente de paz con Perle. Pocos días después del encuentro en París, Hillman había remitido a Khashoggi un informe de doce puntos, con fecha de 26 de diciembre de 2002, enumerando las condiciones que Irak tendría que aceptar. «Tengo el convencimiento —decía en el encabezamiento— de que si Estados Unidos obtuviera los siguientes resultados, no declararía la guerra a Irak». Sadam tendría que admitir que «Irak ha desarrollado y posee armas de destrucción masiva». Luego se le permitiría dimitir y abandonar el país de inmediato con sus hijos y algunos de sus ministros.

Una semana después, Hillman envió a Khashoggi otro informe, justo un día antes del almuerzo con Perle en Marsella.

«A tenor de nuestras recientes conversaciones —rezaba—, hemos estado pensando en una prueba para cerciorarnos de que Irak es sincero en su deseo de rendirse». Pasaba a enumerar cinco pasos, y luego formulaba una ambiciosa petición: que Khashoggi y Zuhair organizaran un encuentro con el príncipe Nauaf Abdul Aziz, jefe del espionaje saudí, «de forma que podamos vernos en Washington».

Khashoggi era tan escéptico como Zuhair respecto a los informes. Zuhair los encontraba «absurdos» y a Khashoggi le parecían divertidos, casi tontos. «¿Esto era lo que pensaban? —recuerda que se preguntó—. No había nada que decir. Mientras Harb cabildeaba para Irak, ellos lo hacían para Perle».

En mi primera conversación con Hillman, éste me dijo: «Richard no tuvo nada que ver con la redacción de esos documentos. Yo le informé de ello después, y no dijo una sola palabra ni siquiera cuando se los envié. Yo creía tener las ideas muy claras, pero no veía a Sadam dimitiendo ni resignándose al exilio. Estoy seguro de que Richard no cree que nada de eso pueda pasar». Hillman dijo que había redactado los memorandos con ayuda de su hija, estudiante universitaria. Por su parte, Perle me dijo: «Yo no los escribí ni aporté nada. No supe de su existencia hasta después de que fueran redactados».

Las opiniones contenidas en los informes eran, efectivamente, muy diferentes de las de Perle —quien había dicho públicamente que Sadam sólo dejaría el poder si le obligaban— y sus colegas de la línea dura en la Administración Bush. Dado el peso de Perle en el proceso de toma de decisiones y el riesgo que entrañaba confiar en un intermediario con los antecedentes de Khashoggi, aún no está claro que Hillman redactara tan pueril propuesta de paz para Zuhair. No es fácil desestimar la afirmación del príncipe Bandar: que hablar de la paz era sólo un pretexto para cerrar un trato de muchos millones.

Mientras tanto, las propuestas de Hillman empezaron a cobrar vida propia. Un mes después del almuerzo las propuestas llegaron a manos de *Al Hayat*, un periódico de propie-

dad saudí que se publica en Londres. Si Perle había tenido la intención de desligarse del asunto, no lo consiguió. El periódico, en un suelto titulado «Washington se ofrece a evitar la guerra a cambio de un acuerdo internacional para exiliar a Sadam», calificaba los memorandos de Hillman como documentos «americanos», y afirmaba que las nuevas propuestas llevaban el sello de Perle. El periódico añadía que Perle y los otros habían asistido a una serie de «reuniones secretas» a fin de evitar la inminente guerra con Irak, y que «se habló de la posibilidad de que Sadam Husein reconociera personalmente que su país intentaba adquirir armas de destrucción masiva pero que accedería a no adquirirlas mientras espera el exilio».

Unos días después, el diario *Al Safir* de Beirut publicó traducciones en árabe de los memorandos, atribuyéndolos a Richard Perle. Se suponía que las propuestas habían sido presentadas por Perle y que eran «un boceto de lo que Washington pensaba para el futuro de Irak». El almuerzo de Perle con dos empresarios saudíes se convertía, en la versión de *Al Safir*, en una serie de «recientes negociaciones americano-saudíes» en las que Estados Unidos «estuvo representado por Richard Perle». Y añadía: «La publicación de estos documentos es importante porque arrojan luz sobre cómo podía haberse evitado la guerra». Los documentos, por supuesto, no arrojaban ninguna luz al respecto.

Cuando se le preguntó a Perle si sus tratos con Trireme podían rozar el tráfico de influencias, él dijo que quienquiera que viese en ello un conflicto de esa índole estaba pensando «con malicia». Pero Perle, en sus idas y venidas entre el sector público y el privado, se colocaba en una posición difícil —algo nada inusual entre los hombres públicos—. Se le atribuía haber sido el elemento intelectual detrás de una guerra que no todo el mundo deseaba y que muchos sospechan, injustamente o no, que fue impulsada por intereses empresariales estadounidenses. No hay duda de que Perle creía que darle la patada a Sadam era lo correcto, pero al mismo tiempo montaba una empresa que iba a beneficiarse de la guerra.

Con ello daba munición no sólo a los saudíes sino también a sus otros oponentes ideológicos.

Perle respondió a mi artículo sobre sus negocios, aparecido en *The New Yorker* en marzo de 2003, comparándome con un terrorista y anunciando que pensaba demandarme por calumnias. En noviembre de 2003, el Pentágono puso en circulación un retórico informe de Inspección General donde se reconocía que Perle «con pocas excepciones [...] participó en las actividades externas que se le atribuían», o sea que representó a empresas privadas que buscaban contratos a nivel federal. Pero el informe de la Inspección General dictaminaba que Perle no violó los estatutos federales que prohíben dichas representaciones porque esas leyes se circunscriben a empleados especiales del Gobierno que trabajaran sesenta días al año o más. Como presidente de la Junta de Política de Defensa, Perle sólo fichaba ocho días al año, decía el informe. Sobre el tema «más escurridizo» de si Perle violó, o dio la impresión de violar, el reglamento ético del Gobierno, la Inspección General dictaminaba que no había «base suficiente» para afirmar que las actividades profesionales de Perle constituyeran una violación.

Poco tiempo después, Perle se enredaba en una serie de escándalos financieros que entrañaban posible tráfico de influencias, como en el caso Trireme, así como posibles transgresiones de las normas de la Comisión de Cambios y Valores. Unas semanas después de que apareciera mi artículo, Perle dimitió como presidente de la Junta de Política de Defensa; un año más tarde, cesaba también como miembro de dicha Junta. No ha habido demanda por calumnias.

Capítulo V

¿Quién mintió a quién?

Marzo de 2003: «Estos documentos no son auténticos»

El 24 de septiembre de 2002, mientras el Congreso se preparaba para votar la resolución que autorizaría al presidente Bush a emprender la guerra en Irak, un grupo de altos cargos de los servicios de inteligencia, entre ellos George Tenet, director de la CIA, informaba al Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre la capacidad armamentística de Irak. Era una presentación importante para el Gobierno. Algunos demócratas estaban cuestionando públicamente la afirmación de Bush de que Irak seguía en posesión de armas de destrucción masiva que suponían una amenaza inmediata para Estados Unidos. Justo el día antes, el anterior vicepresidente, Al Gore, había criticado duramente la defensa que la Administración había hecho de la guerra preventiva, calificándola de doctrina que sustituiría «un mundo en el que los Estados se consideran sujetos a la ley» por «el concepto de que no existe ley, sino la discrecionalidad del presidente de Estados Unidos». Unos cuantos demócratas se planteaban asimismo presentar al Congreso una resolución alternativa.

Según dos personas presentes en la sesión informativa, estrictamente confidencial y que tuvo lugar en la sala de audiencias del comité, Tenet declaró, como ya había hecho antes, que el envío de tubos de aluminio reforzado interceptado de camino a Irak tenía como objetivo la construcción de cen-

trifugadoras que podrían ser utilizadas para la obtención de uranio enriquecido. Se había puesto en duda la posibilidad de que dichos tubos fueran a destinarse a ese objetivo, pero la hipótesis de que Irak tuviera en marcha un programa nuclear fue sostenida esta vez por una nueva y llamativa afirmación: la CIA había recibido recientemente información que demostraba que, entre 1999 y 2001, Irak había intentado comprar a Níger, uno de los principales productores mundiales, quinientas toneladas de óxido de uranio. Este tipo de mineral, conocido como *pasta amarilla*, puede utilizarse para la fabricación de combustible para reactores nucleares. También es posible convertirlo, si se procesa de manera distinta, en uranio enriquecido para la producción de armamento nuclear. Cinco toneladas serían suficientes para fabricar una bomba.

El mismo día, en Londres, el Gobierno de Tony Blair hacía público un *dossier* que contenía parte de la información que el comité del Senado estaba recibiendo en secreto: que Irak había pretendido adquirir «cantidades importantes de uranio» a un país africano no mencionado, «a pesar de no tener activo ningún programa civil de energía nuclear que pudiera requerirlo». La alegación atrajo la atención de inmediato; un titular del *Guardian* londinense declaraba: «Bandas africanas ofrecen una ruta al uranio».

Dos días después, Colin Powell, en una comparecencia a puerta cerrada ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, citó también como prueba de las ambiciones nucleares de Irak su intento de obtener uranio en Níger. El testimonio de Tenet y Powell ayudó a apaciguar a los demócratas y la resolución fue aprobada abrumadoramente dos semanas después, otorgando al presidente un mandato del Congreso para iniciar el ataque contra Irak. (Cuando se publicó mi artículo, en marzo de 2003, William Harlow, portavoz de la CIA, negó inicialmente que Tenet hubiera informado a los senadores sobre el asunto de Níger. Posteriormente me enteré de que se había iniciado una investigación interna en el Senado para identificar mi fuente de información).

Un ex alto funcionario de inteligencia me contó que la información sobre Níger fue considerada lo bastante relevante como para incluirla en el Resumen Diario al Presidente, uno de los documentos más sensibles de todo el sistema norteamericano. Se supone que la información que contiene es analizada con detalle o al menos «peinada». La lista de distribución de este informe de dos o tres páginas, preparado por la CIA y repartido a primera hora de la mañana, queda limitada al presidente y a unos pocos altos cargos. Ni los miembros del Senado ni los de los comités de inteligencia del Congreso, por ejemplo, tienen acceso a ello. «No creo que nadie de aquí lo vea —me comentó un analista del Departamento de Estado—. Sólo conocemos los contenidos del resumen diario por el efecto eco... la gente habla de ello».

El 19 de diciembre de 2002, Washington señaló públicamente y por vez primera a Níger como el supuesto vendedor de los materiales nucleares, y lo hizo en un documento del Departamento de Estado que retóricamente preguntaba: «¿Por qué esconde el régimen iraquí sus compras de uranio?». Tanto Irak como Níger negaron las acusaciones. El presidente Bush citó la transacción del uranio, así como los tubos de aluminio, en su mensaje sobre el Estado de la Unión del 28 de enero de 2003, atribuyendo a Gran Bretaña el origen de la información: «El Gobierno británico ha sabido que Sadam Husein trató de obtener recientemente en África cantidades importantes de uranio». Y comentó: «Sadam no ha explicado estas actividades de forma verosímil. Es evidente que tiene mucho que esconder».

Pero la historia se desinfló muy pronto. El 7 de marzo, a menos de dos semanas del inicio de la guerra contra Irak, Mohamed el Baradei, director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), con sede en Viena, explicó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que los documentos que atribuían la compra de uranio a Níger eran falsos.

«El OIEA ha llegado a la conclusión, con la conformidad de expertos independientes, de que estos documentos no

son auténticos», dijo Baradei. Un funcionario del OIEA fue todavía más lejos. Me dijo: «Estos documentos son tan malos que no puedo imaginarme que procedan de unos servicios de inteligencia serios. Me decepciona que, dada su baja credibilidad, la investigación no se desechara ya en sus inicios. Habría esperado más verificaciones, llegando hasta el nivel que llegaron».

El OIEA empezó a pedir los documentos en otoño, poco después de que el Gobierno británico publicara su *dossier*. Tras meses de peticiones, Estados Unidos se los entregó a Jacques Baute, el francés que dirige el equipo de inspectores nucleares en Irak. La gente de Baute necesitó muy pocas horas para determinar la falsedad de los documentos. La agencia analizó media docena de cartas y otras comunicaciones entre funcionarios de Níger e Irak, muchas de ellas escritas bajo membrete del Gobierno nigerio. La chapuza saltaba a la vista. Una carta, fechada el 10 de octubre de 2000, aparecía firmada por Allele Habibou, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de Níger, que había abandonado el cargo en 1989. Otra carta, supuestamente del presidente Mamadou, presentaba una firma evidentemente falsificada y un texto con inexactitudes tan obvias que un funcionario del OIEA dijo que «podrían ser detectadas por cualquiera que utilizara Google en internet». Baute, según este funcionario, «expuso la falsificación al Gobierno norteamericano. "¿Qué tienen ustedes que decir?", les preguntó. No tenían nada que decir».

Colin Powell, preguntado por la falsificación durante una entrevista televisiva dos días después de la aparición del informe Baradei, eludió la cuestión: «Si ese tema está solucionado, es que ese tema está solucionado». Días después, en una audiencia del Congreso, negó que ningún miembro del Gobierno tuviera algo que ver con la falsificación. «Procedía de otras fuentes —declaró Powell—. Los documentos fueron entregados a los inspectores de buena fe». El 8 de marzo, el *Washington Post* citaba la contundente conclusión de un funcionario norteamericano que había revisado los documentos: «Nos dejamos engañar».

En Europa, y en todas partes, los documentos apócrifos se convirtieron en objeto de muchas y duras preguntas sobre la credibilidad del Gobierno norteamericano. Pero en Estados Unidos sólo provocaron la aparición de unos cuantos artículos de prensa y muy pocas preguntas sobre cómo la Casa Blanca pudo ratificar una falsedad tan burda. Básicamente, el vicepresidente Cheney respondió al informe Baradei atacándolo. El 16 de marzo, en una aparición en *Meet the Press*, Cheney afirmó sin ningún género de dudas que Estados Unidos tenía motivos para creer que Sadam Husein había reemprendido su programa de armas nucleares. Y continuó: «Francamente, creo que el señor Baradei se equivoca. Y si mirásemos el historial del Organismo Internacional para la Energía Atómica en cuanto a este tipo de episodios, en particular en lo que respecta a Irak, veríamos que han infravalorado o ignorado reiteradamente lo que Sadam estuviera haciendo. No tengo ningún motivo para suponer que ahora tengan mayor credibilidad que en el pasado». Tres días después empezaba la guerra de Irak.

¿Qué es lo que fue mal? ¿Cómo un fraude tan evidente consiguió abrirse paso, sin que nadie lo pusiera en entredicho, a través de las capas superiores de la inteligencia norteamericana hasta alcanzar los más sacrosantos informes presidenciales? ¿Quién permitió que se incluyera en el discurso sobre el Estado de la Unión? ¿Estaría la Administración mintiéndose a sí misma? ¿O, en éste y en otros casos, ofreció deliberadamente al Congreso y a la opinión pública lo que le constaba que era una información errónea? ¿Cuándo y cómo se convirtió ese mensaje, la amenaza que Irak representaba, en algo más importante que la seriedad del análisis previo de la información?

En el interior del conducto de la información

Se autodenominan, burlándose de sí mismos, la Cábala: un reducido grupo de asesores políticos y analistas con base en

la Oficina de Planes Especiales del Pentágono. Sus actividades en el debate que desembocó en la guerra de Irak, concebidas por Paul Wolfowitz, dieron lugar a un crucial cambio de dirección en los servicios de inteligencia. Estos asesores y analistas, que iniciaron sus labores en las jornadas posteriores al 11-S, produjeron una madeja de informes que ayudaron a conformar la opinión pública y la política estadounidense con respecto a Irak. Confiaron para su elaboración en los datos recabados por otros servicios de inteligencia, así como en información proporcionada por el Congreso Nacional Iraquí de Ahmad Chalabi. En otoño de 2002, esta organización rivalizó tanto con la CIA como con la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA), del Pentágono, como principal fuente de información del presidente Bush en cuanto a la posible posesión por parte de Irak de arsenales de armas de destrucción masiva y de su conexión con Al Qaeda.

El director de la Oficina de Planes Especiales era Abram Shulsky, un erudito experto en la obra del filósofo político Leo Strauss. Shulsky llevaba tres décadas trabajando en silencio en asuntos de inteligencia y política exterior; fue miembro del Comité de Inteligencia del Senado a principios de los ochenta y, durante la Administración Reagan, trabajó en el Pentágono a las órdenes de Richard Perle, por entonces secretario adjunto de Defensa, después de lo cual se incorporó a la empresa Rand Corporation. La Oficina de Planes Especiales estaba supervisada por el subsecretario de Defensa William Luti, capitán de Marina retirado y uno de los primeros en abogar por una acción militar contra Irak. A medida que la Administración fue avanzando hacia la guerra y el poder político fue trasladándose hacia los jerarcas civiles del Pentágono, Luti fue también adquiriendo responsabilidades cada vez más importantes. W. Patrick Lang, anterior jefe de la inteligencia para Oriente Próximo del DIA, dijo que el Pentágono se había «cerrado en banda para dominar la política exterior del Gobierno y lo han logrado. Están manipulando a Chalabi. Han intimidado al DIA y le han dado una buena paliza. En la CIA no tienen agallas».

La hostilidad iba en ambos sentidos. En abril de 2003, un funcionario del Pentágono que trabajaba para Luti me dijo: «Yo llevé a cabo el trabajo que los servicios de inteligencia no realizaban. Comprobamos que ellos no habían desarrollado el análisis y le proporcionamos a Wolfowitz información que jamás había visto antes. Los servicios de inteligencia siguen añorando misiones como las que tenían en la guerra fría, cuando los políticos comían de su mano».

En una entrevista durante esa primavera, un asesor del Pentágono que había trabajado con Planes Especiales me comentó de modo similar que, a su entender, Shulsky y Luti sencillamente habían «ganado el debate político». Dijo: «Los derrotaron; se pusieron las botas frente al Gobierno y la CIA. Y por qué ganaron no es ningún misterio: porque fueron más efectivos en la construcción de su discurso. Luti es más listo que sus oponentes. Wolfowitz también. Los superaron en el discurso. Fue una justa lid. Convencieron al presidente de la necesidad de crear una nueva política de seguridad. No obstante, los perdedores son muy buenos intentando socavar a los ganadores». Y añadió: «Me encantaría ser el historiador que escriba sobre cómo este pequeño grupo de ocho o nueve personas presentó el caso y lo ganó».

La Oficina de Planes Especiales fue creada para encontrar pruebas de lo que Wolfowitz y su jefe, el secretario de Defensa Donald Rumsfeld, consideraban la verdad: que Sadam Husein tenía fuertes vínculos con Al Qaeda y que Irak poseía un arsenal enorme de armas químicas, biológicas e incluso nucleares. La posible posesión de armas de destrucción masiva por parte de Irak era un asunto que preocupaba a la comunidad internacional desde antes de la guerra del Golfo. Sadam había utilizado armas químicas en el pasado. En cierto momento había llegado a acumular miles de cabezas químicas, junto con armas biológicas, y había intentado muy seriamente desarrollar un programa nuclear. Lo que estaba en discusión era cuánta de esa capacidad, si es que existía alguna, había sobrevivido a la guerra de 1991 y a los años de

inspecciones de la ONU, de zonas de exclusión aérea y de sanciones. Además, desde los sucesos del 11-S se han formulado preguntas recurrentes sobre los vínculos de Irak con los terroristas. Una encuesta de febrero de 2003 mostraba que el setenta y dos por ciento de los norteamericanos creía probable que Sadam hubiese estado personalmente involucrado en el 11-S, aunque no se hubiera presentado ninguna prueba de ello.

Rumsfeld llevaba tiempo quejándose de las limitaciones de los servicios de inteligencia. A finales de la década de 1990 había presidido una comisión sobre programas balísticos que criticaba la falta de voluntad de los analistas de inteligencia «para realizar estimaciones que vayan más allá de las pruebas puras y duras de que disponen». Incluso antes del 11-S, Richard Perle elaboraba un discurso similar sobre los conocimientos que los servicios de inteligencia tenían con respecto a las armas de Irak. En una audiencia de un subcomité del Senado, en marzo de 2001, dijo: «¿Posee actualmente Sadam armas de destrucción masiva? Seguro que sí. Sabemos que tiene armas químicas y sabemos que tiene armas biológicas. [...] No creo que podamos saber realmente hasta dónde ha llegado en cuanto a armas nucleares. Supongo que más lejos de lo que creemos, porque en este punto solemos remitirnos a lo que hemos comprobado y demostrado. Pero, a menos que crean ustedes que lo hemos averiguado todo, debemos asumir que hay más cosas de las que hemos descubierto».

En otoño de 2002, Rumsfeld se enfrentó públicamente a la CIA debido a que la agencia no conseguía documentar vínculos importantes entre Al Qaeda e Irak. Él y sus aliados consideraban que la CIA era incapaz de percibir la realidad de la situación en Irak. «La agencia aspiraba a refutar los vínculos entre Irak y el terrorismo —me contó el asesor del Pentágono—. Eso era lo que les guiaba. Si has trabajado alguna vez con este tipo de datos, te das cuenta de que en la CIA hay puntos de vista arraigados que matizan su forma de percibirlos». En cambio, el objetivo de Planes Especiales era «examinar los datos bajo el microscopio para revelar lo que

los servicios de inteligencia no pueden ver. Shulsky está cargando con la parte más pesada».

En octubre de 2002, el *New York Times* informaba que Rumsfeld había ordenado una operación de inteligencia «para buscar información sobre las intenciones hostiles de Irak o sobre sus vínculos terroristas» que podía haber sido supervisada por la CIA. Rumsfeld se mostró vago cuando fue preguntado al respecto durante una reunión informativa en el Pentágono. «Me han dicho que después del 11 de septiembre se ordenó a un pequeño grupo, creo que inicialmente formado por dos personas y ahora quizá por cuatro, que empezara a estudiar detenidamente la montaña de información que estábamos recibiendo sobre cuestiones típicas de la inteligencia». Y continuó: «Lo que no se sabe, no se sabe. Con el responsable del Resumen Diario al Presidente lo repasamos punto por punto. Y yo le formulo preguntas. "Caramba, ¿y qué me dices de esto o de aquello"». En la misma sesión informativa, Rumsfeld dijo que había sido informado de la existencia de «pruebas sólidas de la presencia en Irak de miembros de Al Qaeda». (En su informe, la Comisión del 11-S descubrió que no existían pruebas de un vínculo operativo entre Irak y Al Qaeda).

Un antiguo alto cargo de inteligencia me dijo: «Rumsfeld tenía que desacreditar los análisis de la CIA para que sus servicios de inteligencia resultaran más creíbles». Otro ex funcionario de la CIA dijo que Rumsfeld «quiere tener su propio GRU —los antiguos servicios de inteligencia militar soviéticos—. No quiere depender de la información de la CIA para preparar el campo de batalla para sus tropas».

Un memorándum interno del Pentágono de diciembre de 2001 llegó incluso a sugerir que expertos en terrorismo, tanto del Gobierno como externos, habían «minimizado la importancia o tratado de refutar» deliberadamente el vínculo entre Al Qaeda e Irak. «Durante muchos años los servicios de inteligencia han recelado de los datos aportados por desertores iraquíes», comentaba el memorándum. Y recomendaba encarecidamente que dos analistas del equipo de Shulsky re-

cibieran autorización para «investigar las vinculaciones de Al Qaeda con Irak» teniendo acceso a «los informes necesarios de desertores iraquíes».

En su búsqueda de nueva información, la Oficina de Planes Especiales se volcó en el Congreso Nacional Iraquí de Chalabi, que buscaba constantemente desertores iraquíes. La Oficina desarrolló una estrecha relación de trabajo con el CNI y se convirtió en un conducto para pasar informes de inteligencia de éste a la Casa Blanca. Esto reforzó su postura en las disputas con la CIA y proporcionó a los jerarcas civiles del Pentágono, que estaban a favor de la guerra, mayor influencia en sus continuas disputas con el Departamento de Estado (a pesar de las fundadas dudas que existían respecto al CNI). Hasta mediada la década de 1990, la CIA había estado canalizando en secreto millones de dólares anuales hacia el CNI. Esas transferencias finalizaron en torno a 1996, me comentó un ex funcionario de la CIA, básicamente porque se dudaba sobre la integridad de Chalabi.

«Tenías que mirarlos con recelo —dijo otro antiguo funcionario, refiriéndose a la gente de Chalabi—. El CNI tiene un historial reconocido de manipulación de la información porque lo suyo es una agenda política. Son una organización política, no una agencia de inteligencia».

El CNI no estaba solo en lo que a la desvirtuación y manipulación de la información se refiere. La Casa Blanca alteraba también los hechos e ignoraba pruebas indeseadas en su empeño por convencer a los norteamericanos de la amenaza nuclear que suponía Sadam. Uno de los casos más flagrantes fue el relacionado con el desertor más famoso de Irak, el general Husein Kamel. En agosto de 1995, el general Kamel, responsable del programa armamentístico de Irak, huyó a Jordania junto con su hermano, el coronel Sadam Kamel. Se llevaron consigo cajas de documentos que contenían información detallada sobre los esfuerzos iraquíes para desarrollar armas de destrucción masiva (gran parte de la cual era desconocida para los inspectores de la ONU que llevaban trabajan-

do en ello desde 1991) y fueron interrogados a fondo por los inspectores. En 1996, Sadam atrajo de nuevo a los hermanos con la promesa del perdón, y los hizo asesinar. La información de los hermanos Kamel se convirtió en un elemento destacado de la campaña emprendida por la Administración Bush para convencer a la opinión pública del fracaso de las inspecciones de la ONU. En octubre de 2002, en un discurso pronunciado en Cincinnati, el presidente citó las deserciones de los Kamel como el momento en el que el régimen de Sadam «se vio obligado a admitir que había producido más de treinta mil litros de ántrax y otros agentes biológicos mortales. [...] Se trata de un arsenal masivo de armas biológicas que nunca ha sido encontrado y que tiene capacidad para matar a millones de personas». Un par de semanas antes, el vicepresidente Cheney había declarado que la historia de Husein Kamel «debería servir a modo de recordatorio de que a menudo se descubren más cosas como resultado de las deserciones que como resultado del régimen de inspección».

Sin embargo, el documento completo de la entrevista de Husein Kamel con los inspectores revela que también dijo que el arsenal de armas químicas y biológicas fabricadas antes de la guerra del Golfo había sido destruido, en muchos casos como respuesta a las continuas inspecciones. La entrevista, celebrada el 22 de agosto de 1995, fue llevada a cabo por Rolf Ekeus, por entonces director de los equipos de inspección de la ONU, y por dos de sus principales colaboradores, Nikita Smidovich y Mauricio Zifferaro. «Tienen ustedes un importante papel en Irak —dijo Kamel, según el informe redactado a partir de las notas tomadas por Smidovich—. No deberían infravalorarse. Son ustedes muy efectivos en Irak». Cuando Smidovich observó que los equipos de la ONU no habían encontrado «ningún rastro de destrucción», Kamel respondió: «Sí, fue llevada a cabo antes de que ustedes llegaran». Y añadió que también se había destruido el arsenal de cabezas de misiles. «Dimos instrucciones de no fabricar armas químicas».

Posteriormente, Kamel remachó: «No recuerdo que se reanudara la fabricación de armas químicas después de la gue-

rra del Golfo. Todas las armas químicas fueron destruidas. Yo mismo ordené su destrucción. Todas las armas (biológicas, químicas y nucleares) fueron destruidas».

Kamel puso asimismo en duda el testimonio del doctor Jiyir Hamza, un científico nuclear iraquí que desertó en 1994 y se estableció en Estados Unidos con la ayuda del CNI y se convertiría en un testigo muy ruidoso en relación con las supuestas ambiciones nucleares de Irak. Kamel explicó a los inspectores de la ONU que Hamza era un «mentiroso profesional. Trabajó con nosotros, pero era un inútil que sólo iba tras los ascensos. Me asesoraba, pero no podía aportarme nada. [...] Antes de marcharse fue incluso interrogado por un equipo que luego le dio permiso para irse».

Después de su deserción, Hamza se convirtió en miembro del Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional, un grupo pro desarme con sede en Washington cuyo presidente, David Albright, había sido inspector de armas de la ONU. En 1998, éste me contó que él y Hamza habían remitido a distintas editoriales una propuesta de libro titulada «Efervescencia: Irak y la bomba atómica», y que describiría el fracaso de Irak en su empeño de fabricar un dispositivo nuclear. Nadie se mostró interesado, dijo Albright, y Hamza finalmente acabó «exagerando sus experiencias en Irak». Los dos hombres rompieron relaciones. En 2000, Hamza publicó *Sadam's Bombmaker (El fabricante de bombas de Sadam)*, un pintoresco relato que afirma que en 1991, cuando empezó la guerra del Golfo, Irak estaba mucho más cerca de lo que se creía respecto a fabricar un arma nuclear.

El 14 de noviembre de 2001, mientras los talibanes eran derrotados en Afganistán, Richard Perle citaba en un discurso el relato de Hamza, incluyendo su afirmación de que Sadam, como respuesta al bombardeo israelí de 1981 sobre el reactor nuclear de Osirak, cerca de Bagdad, había ordenado que las futuras instalaciones nucleares se dispersaran por todo el país en cuatrocientas localizaciones distintas. «Cada día —dijo Perle— estas instalaciones fabrican una pequeña cantidad de material nuclear». Y preguntó a su público: «¿Espera-

mos a Sadam y confiamos en lo mejor, esperamos y confiamos en que no haga aquello de lo que sabemos que es capaz... o llevamos a cabo alguna acción preventiva?».

Cuando en mayo de 2003 hablé con Jeff Stein, un periodista de Washington que colaboró en el libro de Hamza, me dijo que el relato de éste era «absolutamente honrado, teniendo en cuenta que cualquier detalle pone al autor en el punto de mira y, por tanto, invita a alguna exageración». James Woolsey, ex director de la CIA, me dijo también aquel mismo mes: «Lo tengo en muy buen concepto y carezco de motivos para no creer las afirmaciones que ha realizado». En aquel momento me fue imposible contactar con Hamza para recabar sus comentarios; acababa de regresar a Irak como miembro de un grupo de exiliados nombrado por el Pentágono para ayudar en la reconstrucción del país. Fue designado responsable de energía atómica. (El contrato de Hamza con la Autoridad Provisional no fue renovado en 2004).

Las ventajas y desventajas de confiar en desertores ha sido un perenne motivo de disputas en el seno de la inteligencia norteamericana, tal como el mismo Shulsky destacó en un manual de inteligencia publicado en 1991 y del que fue coautor. A pesar de su importancia, escribió, «resulta difícil estar seguro de que sean sinceros [...]. La información contradictoria proporcionada por diversos desertores soviéticos a Estados Unidos [...] nunca fue completamente aclarada y complicó la vida a nuestros servicios de inteligencia durante un cuarto de siglo». Los desertores pueden proporcionar una perspectiva tendenciosa o parcial de un régimen represivo. Estas fuentes de información voluntarias «pueden ser avariciosas; o puede tratarse de personas desequilibradas que buscan añadir un poco de emoción a su vida o vengarse de lo que consideran un tratamiento injusto por parte de su Gobierno; incluso pueden estar sometidas a chantaje». Existe una marcada tendencia a contar a los interrogadores lo que éstos quieren escuchar.

Un funcionario retirado de la CIA me comentó que el examen previo de un posible informador es particularmente importante cuando se trata de extranjeros (cuya información puede desencadenar decisiones políticas de envergadura). En teoría, nunca debería elevarse a las altas esferas ninguna solicitud para tomar medidas prácticas —un proceso conocido como «pasar por el conducto»— sin que la información en que se basa dicha solicitud se haya sometido previamente a un escrutinio riguroso.

Los servicios de inteligencia no querían participar y la Oficina de Planes Especiales burló el proceso de examen previo. En la primavera de 2002, me comentó el antiguo funcionario de la Casa Blanca, Rumsfeld y Wolfowitz instaron al presidente a que entregase a Chalabi más de noventa millones de dólares de los fondos federales, que habían sido autorizados por el decreto Liberación de Irak de 1998 pero aún no entregados debido a las dudas del Departamento de Estado sobre las prácticas contables del CNI. «El vicepresidente llegó a la reunión furioso porque no habíamos dado el dinero a Chalabi», recordó el ex funcionario. Y Cheney dijo: «Aquí estamos, negándoles el dinero, cuando ellos [el CNI] son quienes nos proporcionan información privilegiada sobre las armas de destrucción masiva en Irak».

Con el apoyo del Pentágono, el grupo de Chalabi se ocupó de poner en contacto a desertores con atractivas historias que contar con diversos periodistas de Estados Unidos y Europa. Los artículos resultantes eran dramáticos relatos sobre avances en armas de destrucción masiva o hablaban de relaciones con grupos terroristas. En algunos casos, estas historias fueron cuestionadas en análisis elaborados por la CIA. Después de la ronda final de las inspecciones de la ONU, finalizadas pocos días antes de la invasión, se descubrieron también falsas declaraciones e incongruencias en los relatos de los desertores reunidos por el CNI. El doctor Glen Rangwala, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Cambridge, examinó la información publicada hasta el momento de la invasión y llegó a la conclusión de que los inspectores

de la ONU no habían encontrado pruebas que apoyaran las afirmaciones de los desertores.

Por ejemplo, muchos periódicos publicaron extensas entrevistas con Adnan Ihsan Said al Haideri, un ingeniero civil que, con la ayuda del CNI, huyó de Irak en 2001 y posteriormente afirmó haber visitado veinte instalaciones secretas que suponía construidas para la fabricación de armas biológicas y químicas. Una, dijo, se encontraba en el subsuelo de un hospital de Bagdad. Haideri fue una de las fuentes de información en las que se basó Colin Powell para afirmar, en su presentación al Consejo de Seguridad de la ONU el 5 de febrero de 2003, que Estados Unidos poseía «descripciones de primera mano» de laboratorios móviles capaces de producir grandes cantidades de armas biológicas. Los equipos de la ONU que regresaron a Irak en noviembre de 2002 fueron incapaces de verificar ninguna de las afirmaciones de Haideri. En una declaración realizada en marzo ante el Consejo de Seguridad, en vísperas de la guerra, Hans Blix, jefe del equipo de inspectores, destacó que sus hombres habían registrado el hospital y otras localizaciones con la ayuda de radares de detección subterránea. «Hasta el momento no hemos encontrado instalaciones subterráneas para la producción de armas químicas o biológicas o para su almacenamiento», dijo.

Casi inmediatamente después del 11-S, el CNI dio a conocer declaraciones de desertores que afirmaban poseer información que relacionaba a Irak con los atentados. En una entrevista realizada conjuntamente por el *New York Times* y *Frontline*, un programa de la televisión pública, Saba Jodada, capitán del ejército iraquí, dijo que la operación de 11 de septiembre «fue llevada a cabo por personas entrenadas por Sadam» y que Irak tenía un programa para entrenar terroristas para realizar secuestros aéreos. Otro desertor, identificado únicamente como general de los servicios de inteligencia iraquíes, dijo que en el año 2000 había sido testigo de lecciones sobre secuestros impartidas a estudiantes árabes con la ayuda de un Boeing 707 aparcado en un campamento de instrucción cerca de la ciudad de Salman Pak, al sur de Bagdad.

Sin embargo, en otras entrevistas mantenidas conmigo durante la primavera de 2003, un ex jefe del puesto de la CIA y un antiguo analista de la inteligencia militar me dijeron que el campamento próximo a Salman Pak se había construido no para la formación de terroristas, sino de contraterroristas. Mediados los ochenta, los terroristas islamistas secuestraban aviones de forma rutinaria. En 1986, extremistas pro iraníes secuestraron un aparato de una aerolínea iraquí que acabó estrellándose después de que estallara en su interior una granada de mano, acabando con la vida de un mínimo de sesenta y cinco personas. (Por entonces Irán e Irak estaban en guerra y Estados Unidos favorecía a este último país). Irak buscó luego el apoyo de Occidente y consiguió lo que quería en el MI6 británico. La CIA ofrecía formación contraterrorista similar por todo Oriente Próximo. «Ayudábamos a nuestros aliados en cualquier lugar donde tuviéramos un enlace», me explicó el ex jefe de puesto. Los inspectores de la ONU recordaban haber visto el fuselaje de un avión (al parecer utilizado para la formación contraterrorista) cuando en 1991, diez años antes del 11-S, visitaron una instalación de armas biológicas próxima a Salman Pak. Naturalmente, existe la posibilidad de que un campamento de este tipo se reconvirtiera para servir al propósito contrario. El ex agente de la CIA destacó, sin embargo, que los terroristas nunca practicarían con aviones a cielo descubierto. «Eso son patrañas hollywoodienses —dijo—. Se entrenan en instalaciones subterráneas. No es necesario disponer de un avión de verdad para ejercitarse en practicar secuestros. Los terroristas del 11-S iban al gimnasio. Pero para hacerlo de verdad tienes que practicar con la realidad».

Salman Pak fue tomada por las tropas norteamericanas el 6 de abril de 2003. Ni el campamento ni las antiguas instalaciones destinadas a la producción de armas biológicas han aportado pruebas que sostengan las afirmaciones hechas antes de la guerra.

A lo largo de 2002, los informes que fluyeron directamente del Pentágono al despacho del vicepresidente, y luego al del presidente, lo hicieron con escasa evaluación previa por

parte de los servicios de inteligencia. Cuando los analistas consiguieron echarles un vistazo se quedaron muy preocupados. «Elegían cualquier informe al azar y descubrían que la información estaba equivocada o que la fuente no disponía de acceso a la información que proporcionaba —me explicó Greg Thielmann, experto en desarme de la Oficina de Inteligencia e Investigación del Departamento de Estado—. En los servicios de espionaje había bastante escepticismo con respecto a la fiabilidad de las fuentes de Chalabi, pero los informes de los desertores llegaban constantemente. Acababas con uno y te llegaba otro. Y mientras tanto, la basura era barrida directamente hacia el despacho del presidente».

Se estableció una rutina: los informes elaborados por el Pentágono a partir de los desertores, y clasificados como «secretos», se canalizarían hacia la prensa, pero los posteriores análisis de los informes llevados a cabo por los servicios de inteligencia (mordaces, pero también clasificados) seguirían siendo secretos. «Se convirtió en un conflicto de personalidad —dijo un asesor del Pentágono a propósito de la manera en que la Administración gestionaba la información—. Mi hecho es mejor que el tuyo. Todo el proceso fue erróneo. Nadie acudía a las fuentes de información originales».

Un ex agente de inteligencia de la Administración Bush recordaba un caso en que el grupo de Chalabi, en colaboración con el Pentágono, presentó un desertor iraquí que fue entrevistado en el extranjero por un agente de la DIA. El agente contó con un intérprete proporcionado por la gente de Chalabi. En verano de 2002 se produjo una filtración del informe de la DIA, que era clasificado. En un relato detallado, el *London Times* describía cómo, a finales de los noventa, el desertor se había entrenado con terroristas de Al Qaeda en campamentos secretos iraquíes, cómo los iraquíes recibían instrucción sobre la utilización de armas químicas y biológicas, y cómo el desertor había acabado con una nueva identidad y trasladado a un nuevo destino. Un mes después, sin embargo, un equipo de la CIA entrevistó al mismo hombre con su propio intérprete. «Dijo: "No, no fue eso lo que dije"

—me explicó el ex funcionario de inteligencia—. Y añadió: "Estuve entrenándome en un campamento de fedayines, no de Al Qaeda". Nunca fue testigo de ningún entrenamiento con armas químicas o biológicas». Posteriormente, el ex agente contó: «La CIA envió un escrito explicando que la información era incorrecta. Lo pusieron por escrito». Pero la refutación de la agencia, igual que el informe original, fue clasificada. «Recuerdo haberme preguntado si se filtraría también, como el informe original, y corregiría la anterior filtración incorrecta. No fue así, por supuesto».

El ex agente prosiguió: «Uno de los motivos por los que me marché fue por la sensación de que utilizaban los servicios de la CIA y otras agencias sólo cuando encajaban en sus planes. Como no les gustaba la información que estaban obteniendo, buscaron a gente que se la escribiera como ellos querían. Actuaban con tanta locura, con tanto extremismo y era tan difícil razonar con ellos... Resultaban estrambóticos. Dogmáticos, como si estuvieran llevando a cabo una misión encomendada por Dios. —Y añadió—: si no encajaba con su teoría, no lo aceptaban».

El trabajo de Shulsky y sus colegas tenía profundas bases teóricas. En sus escritos académicos y estratégicos, Shulsky, hijo de un periodista (su padre, Sam, escribía una columna de opinión sobre el mundo de los negocios a nivel nacional), se ha mostrado muy crítico con los servicios de espionaje norteamericanos. Durante la guerra fría se especializó en las técnicas de desinformación soviéticas. Igual que Wolfowitz, fue un estudioso de Leo Strauss en la Universidad de Chicago. Ambos se doctoraron en 1972 con tesis sobre Strauss, un refugiado de la Alemania nazi que llegó a Estados Unidos en 1937; fue un filósofo político y se convirtió en uno de los más destacados eruditos emigrantes conservadores. Era ampliamente conocido por defender que las obras de los filósofos de la Antigüedad ocultan deliberadamente significados esotéricos cuyas verdades pueden únicamente ser asimiladas por muy pocos, y que las masas nunca podrían comprenderlos. Las te-

sis de Strauss tienen muchos seguidores dentro y fuera de la Administración Bush. Además de Wolfowitz, destacan entre ellos William Kristol, editor del *Weekly Standard*, y Stephen Cambone.

La influencia de Strauss sobre el proceso de toma de decisiones en política exterior (nunca escribió explícitamente sobre el tema en sí) suele debatirse a partir de su visión del mundo como un lugar donde las democracias liberales viven en constante peligro debido a elementos hostiles extranjeros, y afrontan amenazas que deben ser contraatacadas con vigor y fuerte liderazgo. Resulta menos evidente la manera en que los puntos de vista de Strauss podrían aplicarse al proceso de recopilación de información. Da la casualidad de que en 1999 el mismo Shulsky estudió esa cuestión en el ensayo escrito conjuntamente con Gary Schmitt *Leo Strauss and the World of Intelligence (By Which We Do Not Mean Nous) [Leo Strauss y el mundo de la inteligencia (con lo que no nos referimos a nosotros)]* (en la filosofía griega, el término *nous* indica la forma superior de racionalidad). Shulsky y Schmitt escriben que «la sutileza de Strauss, su habilidad para concentrarse en el detalle, el éxito consiguiente que obtiene al mirar debajo de la superficie y leer entre líneas, y su aparente espiritualidad [...] podría decirse que recuerdan, aunque sea tenuemente, al George Smiley de las novelas de John Le Carré». Haciéndose eco de uno de los principales temas de Strauss, los autores critican a los servicios de espionaje de Estados Unidos por su fracaso en la apreciación de la naturaleza de doble filo de los regímenes con que tratan, por su reticencia a los conceptos demostrados de las ciencias sociales y por su incapacidad de hacer frente a la ocultación deliberada.

Los analistas de la CIA, sostienen Shulsky y Schmitt, «se mostraron en general poco dispuestos, a lo largo de la guerra fría, a creer que pudieran ser engañados por la Unión Soviética o por otros Estados comunistas en cuestiones cruciales. La historia ha demostrado que este punto de vista era extremadamente ingenuo». Sugerían que la filosofía política, con

su énfasis en la diversidad de los diversos regímenes, proporcionaría un «antídoto» a los errores de la CIA y ayudaría a comprender a los líderes islámicos, «cuyo mundo intelectual es muy distinto al nuestro».

El concepto de Strauss de significado oculto, añadían Shulsky y Schmitt, «nos advierte sobre la posibilidad de que la vida política pueda estar estrechamente vinculada al engaño. De hecho, sugiere que el engaño es la norma en la vida política, y que la excepción es la esperanza, por no decir la expectativa, de establecer una política que pueda administrarse sin dicho engaño».

Robert Pippin, presidente de la Asociación para el Estudio del Pensamiento Social, de Chicago, y crítico de Strauss, me comentó: «Strauss creía que los buenos estadistas deben confiar en su círculo interno. La persona que le susurra al oído al rey es más importante que el rey. Si posees este talento, lo que hagas o digas en público nunca será tenido en cuenta de la misma manera». Otro crítico de Strauss, Stephen Holmes, profesor de Derecho en la Universidad de Nueva York, me explicó de la siguiente manera la postura de los seguidores de Strauss: «Creen que el enemigo los engaña y aparentan estar de acuerdo con él, pero luego, secretamente, siguen su propio punto de vista. La idea de Strauss (de Platón, en realidad) de que los filósofos tienen que contar mentiras nobles no sólo al pueblo, sino también a los políticos poderosos, complica toda la historia».

Cuando le pregunté a uno de los incondicionales de Strauss, Joseph Cropsey, profesor emérito de Ciencias Políticas en Chicago, sobre la aplicación de las ideas del filósofo en la política, me dijo que el sentido común por sí solo sugería ya que una pequeña dosis de engaño es inherente a los gobiernos. «Es evidente que los gobernantes tienen que ser prudentes cuando se expresan en público: "Si te cuento la verdad, lo único que consigo es ayudar al enemigo"». Pero nada hay en la obra de Strauss, añadió, que «favorezca la acción preventiva. Lo que él favorece es la prudencia y el buen criterio. Por supuesto, de habernos podido librar de Hitler en la

década de 1930, ¿quién no habría estado de acuerdo con ello? No necesitamos a Strauss para llegar a esta conclusión».

Algunos ex funcionarios de inteligencia creen que Shulsky y sus superiores eran prisioneros de sus propias convicciones y que simplemente estaban engañándose. Vincent Cannistraro, antiguo jefe de operaciones contraterroristas y análisis de la CIA, se encontró con Shulsky en una reunión de estrategia en Washington. Y en una entrevista realizada en la primavera de 2003 me dijo: «Abe es muy amable y le cuesta enfadarse, tiene un gran sentido de la ironía. Pero su política es la típica de ese grupo, el punto de vista de la escuela de Strauss». Los miembros del grupo, añadió, «se refuerzan mutuamente porque ellos son los únicos amigos que tienen y trabajan todos juntos. Esto ha sido así desde la década de 1980, aunque nunca habían sido capaces de conjuntarse como lo han hecho ahora. El 11 de septiembre les dio la oportunidad y ahora viven en el cielo. Creen que la información está allí. Quieren creerlo. Tiene que estar allí».

La creciente influencia de la Oficina de Planes Especiales durante al año anterior a la guerra fue inversamente proporcional al declive de la influencia de la CIA y la DIA. «Feith y Luti consideran que nadie está al cien por cien con ellos, sino al cien por cien contra ellos. Se trata de un mundo muy maniqueísta», dijo un asesor de Defensa. Un antiguo experto de la agencia que pasó la última década inmerso en asuntos de exiliados iraquíes dijo de los miembros de la Oficina de Planes Especiales: «Se consideran un mundo aparte. Existe un grado elevado de paranoia. Se han autoconvencido de que están del lado de los ángeles y que el resto de los miembros del Gobierno son tontos».

Los neoconservadores de Planes Especiales no estaban solos en cuanto a saltarse las verificaciones previas y las opiniones de los servicios de inteligencia. Unos meses después de que George W. Bush asumiera el poder, Greg Thielmann, de la Oficina de Inteligencia e Investigación (INR) del Departamento de Estado, fue asignado como contacto diario con los servicios de inteligencia de John Bolton, sub-

secretario de Estado para Control de Armas y Seguridad Internacional y destacado conservador. Thielmann comprendió que su puesto había sido asignado por el propio Colin Powell, quien considera que toda oficina importante del Departamento de Estado debe contar con un funcionario de inteligencia que informe a diario. «Bolton era la persona con quien yo tenía que tratar —dijo Thielmann—. Íbamos a proporcionarle toda la información que él estuviera autorizado a conocer. En esto consiste ser un funcionario de los servicios de inteligencia». Pero, añadió, «Bolton parecía molesto porque la INR no estaba diciéndole lo que él deseaba escuchar».

Thielmann se encontró muy pronto despedido de las reuniones vespertinas que Bolton celebraba con su personal a primera hora. «Fui interceptado en la puerta de su despacho y me dijeron: "El subsecretario ya no necesita que asista usted a estas reuniones"». Thielmann protestó diciendo que estaba allí para proporcionar información de los servicios de inteligencia, y el ayudante le dijo: «El subsecretario quiere mantener todo esto en familia».

Finalmente, Bolton exigió que él y su personal tuviesen acceso electrónico directo a la información más sensible, como informes de los agentes extranjeros e interceptaciones electrónicas. En anteriores Gobiernos, estos datos habrían estado disponibles para los subsecretarios sólo después de ser analizados, habitualmente en las instalaciones de la INR, dotadas de medidas especiales de seguridad. Según Thielmann, la finalidad de este sistema era «evitar que información sin tamizar llegara a personas que pudieran extraer de ella conclusiones erróneas». Bolton, sin embargo, quería que sus asistentes recibieran y asignaran análisis y valoraciones de los servicios de inteligencia utilizando los datos en bruto. En resumen, el subsecretario pretendía dirigir su propia operación de inteligencia sin ningún tipo de directriz o apoyo. «Se rodeó de elementos leales elegidos personalmente y encontró una manera de obtener directamente la información de la CIA», dijo Thielmann.

En una entrevista posterior, Bolton reconoció que había cambiado los procedimientos para gestionar los servicios de inteligencia y con ello aumentar el alcance de los materiales clasificados disponibles en su oficina. «Descubrí que había mucho material que no recibía y que los analistas de la INR no estaban incluyendo —me dijo—. No quería filtros. Quería verlo todo tal cual, para estar completamente informado. Lo siento mucho si con ello he descolocado a alguien». Y añadió que él quería tender la mano a los servicios de inteligencia, pero que Thielmann «se había invitado» a sus reuniones de personal diarias. «Es la reunión que mantengo con los cuatro asistentes que me informan directamente y que sirve para preparar la reunión de personal de la Secretaría de las 8.30 —explicó—. Es mi reunión de familia. Allí no hay cabida ni para la INR ni para nadie... ni para el Departamento de Recursos Humanos ni para la Oficina de Edificios Extranjeros».

Es probable que Bolton y sus colegas de Planes Especiales no distorsionaran conscientemente la información. Lo que estaba teniendo lugar era algo mucho más sistemático... y potencialmente igual de problemático. Kenneth Pollack, antiguo experto en Irak del Consejo de Seguridad Nacional, cuyo libro *The Threatening Storm (La tormenta amenazante)* apoyaba en términos generales el empleo de la fuerza para derrocar a Sadam Husein, me comentó que lo que hizo la gente de Bush fue «desmantelar un proceso de filtraje ya existente que llevaba cincuenta años evitando que los políticos recibieran mala información. Crearon conductos de donde sacar la información que querían para llevarla directamente hasta el máximo liderazgo. Creen que la burocracia profesional está privándoles de información de forma deliberada y maliciosa».

«Siempre han tenido información que respaldara sus declaraciones públicas, pero a menudo se trataba de información muy mala —continuó—. Forzaron a los servicios de inteligencia a defender su buena información y sus buenos análisis de una manera tan agresiva que los analistas de inteligencia

no tuvieron ni el tiempo ni la energía suficiente para ocuparse de la mala información». (A propósito del control de Rumsfeld sobre la DIA, a principios de 2002 un ex funcionario me comentó: «Si llegaran a enterarse de que Rummy deseaba relacionar el Gobierno de Tonga con el 11-S, en cuestión de pocos meses aparecerían con fuentes de información que así lo confirmarían»).

Un antiguo mando de un destacamento especial de la CIA y ex asesor de la Administración Bush, dijo que muchos analistas de la agencia estaban convencidos de que los informes de los desertores del grupo de Chalabi sobre las armas de destrucción masiva y Al Qaeda tenían escaso valor, pero dijo que la agencia «no se preocupaba de desacreditarlos». Dijo que la DIA también había estudiado la información. «Y ni siquiera ellos le encontraron ningún valor», añadió.

En diversas entrevistas, antiguos funcionarios y analistas de la CIA dijeron que los miembros de los servicios de inteligencia estaban cada vez más desmoralizados. Un antiguo funcionario dijo de Tenet: «George sabe que están derrotándolo y sus analistas están asustados. Él solía proteger a su gente, pero se está viendo obligado a hacer las cosas a la manera de los demás». La actitud defensiva de los analistas de la CIA les llevó a redactar «informes que justificaran su información más que a explicar lo que sucedía. El Departamento de Defensa y la oficina del vicepresidente redactaron sus propios informes, basados en su propia ideología. Llegamos a reunir tanto material que era posible encontrar todo lo que quisiéramos».

La Administración acabó saliéndose con la suya, dijo un antiguo funcionario de la CIA. «Los analistas de la agencia fueron derrotados defendiendo sus valoraciones. Jamás he visto un Gobierno así».

Detrás del «hongo atómico»

En octubre de 2001, la Oficina de Inteligencia e Investigación llevó a cabo un análisis concienzudo de los avances de

Irak en el desarrollo de armas de destrucción masiva. El análisis fue presentado al secretario de Estado, Powell, en diciembre de 2001. Según Greg Thielmann, uno de los que trabajaron en el estudio, «básicamente decía que no existían pruebas de que el programa nuclear iraquí estuviese siendo reconstituido». Noticia que no fue muy bienvenida. Los miembros del Gobierno empezaban ya a articular el que se convertiría en su más convincente argumento para ir a la guerra: la posibilidad de que, con tiempo suficiente, Sadam Husein sería capaz de atacar Estados Unidos con un arma nuclear.

De hecho, las mayores probabilidades de éxito de los inspectores de la ONU en Irak estaban en el área de las armas nucleares. En octubre de 1997, el Organismo Internacional para la Energía Atómica publicó un informe definitivo declarando que Irak estaba básicamente libre de armas nucleares. Los inspectores dijeron: «No hay indicios de que Irak siga teniendo capacidad para la obtención de las cantidades de material nuclear necesarias para la producción de armas». El informe destacaba que los bombardeos norteamericanos de 1991, con motivo de la guerra del Golfo, habían destruido las instalaciones nucleares iraquíes.

El principal autor del informe, el británico Garry Dillon, un ingeniero nuclear especialista en seguridad que había trabajado veintitrés años para el OIEA y que se retiró siendo jefe de inspección, me dijo que era «muy improbable» que Irak hubiera logrado mantener un programa secreto u oculto para la fabricación de armamento nuclear, teniendo en cuenta los notables progresos técnicos de que disponían los inspectores del OIEA para detectar radiactividad en localizaciones terrestres y fluviales. «No se trata de recetas de cocina —añadió Dillon—. Estamos hablando de fabricación de armamento, y en cualquier operación de este tipo se producen filtraciones».

La Administración disponía de poca información reciente de primera mano que pudiera contradecir las conclusiones a las que llegó el OIEA en 1997. Durante la Administración Clinton se había producido un flujo constante de informes

preocupantes de los servicios de inteligencia sobre armas de destrucción masiva iraquíes, pero la mayoría partía del análisis de las peores posibilidades (lo que Irak podría hacer si no hubiera inspecciones de la ONU) e incluían pocos, si acaso alguno, informes fiables de agentes sobre el terreno. Los inspectores se marcharon en 1998. La Administración Bush siguió recibiendo nuevos informes de desertores, relatos que no podían ser corroborados por los servicios de inteligencia.

En otoño de 2001, sin embargo, poco después del 11-S, la CIA recibió un informe del Servicio de Inteligencia Militar y Seguridad (SISMI) italiano sobre una visita pública que Wisam al Zahauie, por entonces embajador de Irak en el Vaticano, había realizado dos años y medio antes, en febrero de 1999, a Níger y otros tres países africanos. La visita fue cubierta en su momento por la prensa local del país y por una agencia de prensa francesa. El embajador norteamericano, Charles O. Cecil, redactó un informe rutinario sobre dicha visita que remitió a Washington, y lo mismo hicieron los servicios de espionaje británicos. La visita de Zahauie no tenía nada de funesto. «Informamos de ella porque su imagen apareció publicada en el periódico junto al presidente», me explicó Cecil, actualmente retirado. La fotografía no iba acompañada de ningún artículo, sólo de la leyenda al pie, sin nada significativo que informar. En aquella época, Níger, que en 1991 había enviado centenares de soldados para apoyar la guerra del Golfo liderada por los norteamericanos, estaba buscando ayuda económica de Estados Unidos. Ninguno de los informes de aquella época, que se sepa, hizo referencia alguna al uranio, a pesar de que Níger es el principal exportador de la forma del mineral conocida como *pasta amarilla*. Pero luego, y según parece como parte de una investigación de mayor envergadura en busca de cualquier información sobre terrorismo, el SISMI desempolvó de sus archivos el informe del viaje de Zahauie y lo distribuyó, sugiriendo que su verdadera misión era coordinar la adquisición de *pasta amarilla*.

Lo que hizo que el informe que se remontaba dos años y medio destacase en Washington fue su relativa oportunidad.

Un intento de Irak de comprar uranio en 1999, en caso de ser verificado, parecería demostrar que Sadam había obrado con la intención de reconstruir su programa nuclear... y desacreditaría completamente al OIEA y a los informes de la CIA que afirmaban lo contrario.

Pero el informe del SISMI no era convincente. Fue ignorado en los servicios de inteligencia norteamericanos por poco profesional y no corroborado. Un ex funcionario de la agencia me explicó que el informe italiano no contenía ningún documento ni ninguna prueba, únicamente una serie de consideraciones. «Me creo perfectamente que el SISMI pudiera redactar un documento como éste —me comentó un asesor de la CIA—, pero se me escapa el motivo por el cual alguien llegó a otorgarle credibilidad». Desde entonces no han aparecido documentos creíbles para corroborarlo. El informe pasó rápidamente por el conducto y llegó a aquellos que tenían un enorme interés en construir un caso contra Irak, entre ellos el vicepresidente Cheney. «El vicepresidente vio una prueba donde se decía que Irak estaba intentando comprar uranio», me dijo Cathie Martin, portavoz de Cheney. Un tiempo después de haberlo leído, Cheney lo sacó a relucir en su sesión informativa diaria con la CIA. «Formuló una pregunta al respecto a su informador. Éste regresó uno o dos días después y le dijo: "Tenemos un informe, pero carece de detalles"». Se le comunicó además que se sabía que Irak había comprado uranio a Níger a principios de los ochenta, pero que el OIEA, que era quien lo controlaba, lo había almacenado en lugar seguro. «Fin de la historia —añadió Martin—. Eso es todo lo que sabemos».

Según un antiguo alto funcionario de la CIA, Cheney no quedó satisfecho con la respuesta y solicitó a la agencia que revisara el tema una vez más. Era el principio de lo que resultó ser un año de tira y afloja entre la CIA y la oficina del vicepresidente.

Un ex asistente de Cheney me contó que a medida que se intensificaba la campaña para presentar un caso contra Irak, la oficina del vicepresidente, dirigida por su jefe de personal

Lewis *Scooter* Libby, se tornó cada vez más secretista en todo lo relacionado con la información sobre las armas de destrucción masiva iraquíes. Igual que con Wolfowitz y Bolton, había un rechazo a permitir que los analistas militares y civiles analizaran previamente la información. «Era un grupo increíblemente cerrado y pequeño», me dijo el ex asistente. Los procedimientos de los servicios de espionaje eran bastante más abiertos durante la Administración Clinton, dijo, y sus miembros participaban mucho más en la valoración y evaluación de los datos más sensibles. «Hay tanta información que resulta fácil mostrarse exigente a la hora de elegir un caso —añadió—. Elegir según un criterio de éste-me-gusta-éste-no-me-gusta sirve para revelar cosas». (Y Cathie Martin comentó: «Hay informes lo bastante sensibles como para que su conocimiento *quedase* restringido a los más altos cargos del Gobierno...»).

A principios de 2002, la información del SISMI, incluso sin verificar, había empezado a desempeñar un papel importante en las advertencias que la Administración lanzaba sobre la amenaza nuclear iraquí. El 30 de enero, la CIA dio a conocer a los miembros del Congreso un informe desclasificado que afirmaba: «Bagdad podría estar intentando adquirir materiales que servirían para reconstruir su programa de armas nucleares». Una semana después, Colin Powell informó al Comité de Relaciones Exteriores del Congreso: «Con respecto al programa nuclear, no hay duda de que los iraquíes están en ello».

La valoración de la CIA reflejaba tanto las profundas divisiones en el seno de la agencia como la posición de su director George Tenet, que estaba muy lejos de ser segura; al fin y al cabo, los servicios de inteligencia se habían visto duramente criticados por no haber sabido proporcionar alertas concretas sobre los atentados del 11-S. Según muchos analistas y funcionarios de la CIA, el director estaba demasiado enfrascado en granjearse las simpatías de los halcones del Gobierno y en mejorar su posición ante al presidente y el vicepresidente. La oficina del vicepresidente solicitaba sin cesar a los analistas de la CIA que proporcionaran valoraciones so-

bre los asuntos de las armas iraquíes basándose en las peores posibilidades. «Los machacaban día tras día», me explicó un alto funcionario de la Administración, y no recibían ningún respaldo firme por parte de Tenet y de los altos cargos. «Así que muy pronto acabas diciendo: "Que os jodan". Y así fue como empezaron a proporcionar la información que el Gobierno quería oír».

A finales de febrero de 2002, la CIA convenció al ex embajador Joseph Wilson para que viajara a Níger a fin de verificar discretamente la historia del uranio. Wilson, que trabajaba entonces como asesor en el mundo de los negocios, poseía unas credenciales excelentes: jefe de delegación en Bagdad y diplomático en África, y había trabajado en la Casa Blanca para el Consejo de Seguridad Nacional. Era conocido como un diplomático íntegro que incluso había puesto en peligro su seguridad para ayudar a ciudadanos norteamericanos residentes en el extranjero. Wilson me explicó que, según le explicaron, la misión había surgido porque la oficina del vicepresidente estaba interesada en el informe del espionaje italiano. Antes de su partida, fue convocado a una reunión en las dependencias de la CIA con un grupo de expertos en los Gobiernos de Irak y Níger y en uranio. No se le mostró ningún documento, pero le dijeron, me explicó, que los chicos de la CIA «habían obtenido recientemente un informe sobre un supuesto acuerdo escrito [entre Irak y Níger]. —Y añadió—: nunca me quedó claro, y creo que tampoco a las personas que me lo explicaron, si nuestros chicos habían visto en realidad el acuerdo o sólo el supuesto documento del acuerdo».

El viaje de Wilson, que duró ocho días, no aportó nada. Se enteró de que cualquier documento de acuerdo para la compra de *pasta amarilla* habría requerido las firmas del primer ministro de Níger, del ministro de Asuntos Exteriores y del ministro de Minas. «Me reuní con todos ellos —dijo Wilson—, y todos negaron haber firmado ningún documento de ese tipo. Así pues, un documento de venta que contuviera estas firmas, no sería auténtico». Wilson se enteró también de

que no había uranio en venta: todo se había vendido por anticipado a los socios japoneses y europeos del consorcio de Níger. Wilson regresó a Washington y redactó su informe, que circuló, pero «no tuve noticias de lo que la oficina del vicepresidente opinó de él».

A principios de marzo de 2002, un ex funcionario de la Casa Blanca me dijo que muchos miembros del Gobierno daban por sentado que el presidente tenía ya decidido, personalmente, ir a la guerra. A finales del verano, la Casa Blanca incrementó abruptamente la retórica nuclear. Había al menos dos objetivos inmediatos: las elecciones del Congreso a medio plazo y una resolución legislativa que autorizaría al presidente a emprender en Irak las acciones que considerara necesarias para salvaguardar la seguridad nacional de Estados Unidos.

El 7 de agosto de 2002, el vicepresidente Cheney, en California, dijo de Sadam: «Lo que actualmente sabemos, de varias fuentes, es que sigue persiguiendo un arma nuclear». El 26 de agosto sugirió que Sadam poseía una capacidad nuclear capaz de amenazar directamente «a quienquiera que elija, en su propia región o lejos de ella». Añadió que los iraquíes seguían «dedicados al programa nuclear que empezaron hace tantos años». El 8 de septiembre, en una entrevista televisiva comentó: «Sabemos con absoluta certeza que está utilizando su red de proveedores clandestinos para adquirir el equipamiento necesario para enriquecer uranio y fabricar un arma nuclear». El presidente en persona, en su audición radiofónica semanal del 14 de septiembre, afirmó: «Sadam Husein dispone de los científicos y de la infraestructura necesaria para un programa de armas nucleares y ha tratado de comprar ilegalmente el material necesario para fabricar un arma nuclear». Ninguna información refrendaba esta afirmación tajante.

El Gobierno del primer ministro Tony Blair, el aliado más sólido de Bush, entró también en liza. Tal como explicaría posteriormente a una comisión de investigación británica, él y Bush comentaron por teléfono aquel verano la necesidad

de «revelar lo que sabíamos, o al menos todo lo que pudiésemos revelar de lo que sabíamos». Blair, lealmente, tomó la iniciativa: el 24 de septiembre, el Gobierno británico publicó un *dossier* en el que se dramatizaba la amenaza planteada por las armas de destrucción masiva de Irak. En el prólogo, Blair proclamaba que «la información valorada ha establecido sin duda alguna que Sadam [...] persiste en sus esfuerzos por desarrollar armas nucleares». El *dossier* destacaba que la información —basada sobre todo, una vez más, en el informe del SISMI italiano— demostraba que Irak había «buscado en África cantidades importantes de uranio». Una posterior comisión de investigación parlamentaria determinaría que esta última afirmación había sido marcadamente rebajada de tono después de que la CIA alertara a sus homólogos británicos de que no la incluyeran en el *dossier*, y en la versión final no constaba mención alguna a Níger ni al SISMI.

La Casa Blanca, mientras tanto, se había embarcado en una escalada de retórica tremendista. En una entrevista televisiva emitida el 8 de septiembre, Condoleezza Rice respondió en estos términos a las preguntas sobre la firmeza de la postura de la Administración contra Irak: «No queremos que nuestra arma del delito tenga forma de "hongo atómico"», una formulación que fue pergeñada por los halcones de la Administración. Y en un discurso del 7 de octubre, el presidente Bush dijo: «Frente a las claras evidencias de peligro, no podemos esperar que la prueba definitiva, el arma del delito, llegue en forma de "hongo atómico"».

En aquel momento, principios de octubre de 2002, apareció de repente una serie de documentos que prometían proporcionar pruebas sólidas de que Irak estaba intentando reconstruir su programa nuclear. La primera noticia de la existencia de los documentos llegó cuando Elisabetta Burba, periodista de *Panorama*, un elegante semanario italiano propiedad del imperio editorial del primer ministro Silvio Berlusconi, recibió una llamada de un hombre de negocios y asesor de seguridad italiano, a quien ella supone relaciona-

do con los servicios de espionaje italianos. Le dijo que poseía una información que relacionaba a Sadam Husein con la compra de uranio en África. Ella consideró creíble al informador. En 1995, cuando la periodista trabajaba para la revista *Epoca*, el mismo hombre le había proporcionado información detallada, al parecer procedente de los servicios de inteligencia occidentales, con la que ella luego publicó artículos sobre el proceso de paz en Bosnia y una organización benéfica islámica vinculada al terrorismo internacional. La información, parte en inglés, resultó ser exacta. *Epoca* le había autorizado a pagar cerca de cuatro mil dólares por los documentos (una práctica periodística común en Italia). Ahora, años después, «vuelve otra vez a mí —me dijo Burba—. Sabía que se trataba de una persona informada y que tenía contactos en todo el mundo, incluyendo Oriente Próximo. Trabaja en temas de inversión y seguridad». Cuando Burba se reunió con el hombre, él le enseñó los documentos de Níger y se los ofreció por unos diez mil dólares.

Los documentos que le entregó eran fotocopias. Se trataba de veintidós páginas, la mayoría en francés, algunas con el membrete del Gobierno o la Embajada de Níger, y dos en papel oficial de la Embajada iraquí en la Santa Sede. Había también mensajes de télex. Cuando Burba preguntó cómo podía autentificar los documentos, el hombre le presentó lo que parecía una fotocopia del libro de claves cifradas de la Embajada de Níger, junto con otros objetos. «De lo que podía estar segura es de que tenía acceso —dijo Burba—. Aquellos documentos no le habían caído del cielo».

Los documentos trataban principalmente de la supuesta venta de uranio. Burba informó a sus editores y les enseñó las fotocopias. Se dispuso a preparar una visita a Níger para verificar lo que parecía una historia asombrosa. En ese punto, sin embargo, el editor de *Panorama*, Carlo Rossella, conocido por sus relaciones con el Gobierno de Berlusconi, le sugirió que entregara los documentos en la embajada norteamericana para que fueran autentificados allí. Burba, obedientemente, entregó una copia de los documentos el 9 de octubre.

Una semana después viajó a Níger. Visitó las minas y los puertos por los que debía pasar cualquier exportación, habló con hombres de negocios y funcionarios europeos sobre la industria del uranio en Níger, y no encontró ni un indicio de la venta. Averiguó también que la empresa de transportes y el banco que se mencionaban en los documentos eran demasiado pequeños y con infraestructuras incapaces de manejar ese tipo de transacción. Igual que el embajador Wilson ocho meses antes, llegó a la conclusión de que no existían pruebas de una venta reciente de *pasta amarilla* a Irak. El artículo de *Panorama* quedó en punto muerto y Burba y sus editores afirmaron no haber pagado ningún dinero. Los documentos, sin embargo, estaban ahora en manos de los norteamericanos. Y era justo lo que los halcones de la Administración habían estado esperando.

Dos antiguos funcionarios de la CIA ofrecieron versiones algo distintas sobre lo que sucedió a continuación. «La embajada fue alertada de la llegada de los documentos —me dijo uno— y los pasó directamente a Washington sin ni siquiera someterlos a un somero análisis previo». Una vez en Washington, la CIA los remitió al Pentágono. «A lo largo de los pasos del recorrido todo el mundo sabía que eran falsos... hasta que llegaron al Pentágono, donde se los creyeron», añadió. Y el otro, Vincent Cannistraro, ex jefe de operaciones y análisis contraterrorista, me dijo que las copias de los documentos fueron entregadas a la embajada y que ésta las pasó al jefe del puesto de la CIA en Roma, quien a su vez las remitió a Washington. Meses después telefoneó a un contacto que tenía en el cuartel general de la CIA y le dijeron que «el jurado aún está pendiente de decisión» sobre la autenticidad de los documentos.

En la CIA sabían que los documentos no eran fidedignos. «No es una cuestión de si algo de su contenido valía la pena. No eran "un poco" malos o "un poco" ambiguos. Sabíamos que era un fraude... que no valían para nada. Pero todo el mundo se mordió la lengua y dijo: "¿No sería estupendo que lo confirmase el secretario de Estado?". Pero Powell

nunca vio los documentos». Y el ex funcionario añadió: «Está terriblemente furioso al respecto». Otro antiguo funcionario de inteligencia me dijo que incluso en el seno del Gobierno y entre los analistas del Departamento de Energía y del Departamento de Estado hubo recelos sobre la autenticidad de los documentos de Níger. Pero nadie tuvo en cuenta esas advertencias.

George Tenet se mostró claramente ambivalente al respecto. A principios de octubre intervino para evitar que el presidente se refiriese a Níger en un discurso que iba a ofrecer en Cincinnati, pero posteriormente pareció claudicar y el supuesto deseo de Sadam de obtener uranio de Níger se convirtió en el argumento número uno de la Administración para ir a la guerra. El 7 de diciembre, el régimen iraquí proporcionó al Consejo de Seguridad de la ONU doce mil páginas de documentos en los cuales negaba poseer un arsenal de armas de destrucción masiva. Fueron muy pocos los que lo creyeron, tanto en la prensa y la opinión pública como en la Casa Blanca. En una columna de opinión del *Times*, titulada «¿Por qué sabemos que Irak miente?», Condoleeza Rice escribió que «los documentos presentados por Irak [...] omiten responder o explicar sus esfuerzos para obtener uranio del extranjero». El 26 de enero, en el seno del Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), el secretario Powell preguntó: «¿Por qué Irak intenta todavía obtener uranio?». Dos días después, el presidente Bush se refirió a la supuesta venta en su discurso sobre el Estado de la Unión: «El Gobierno británico ha averiguado que Sadam Husein estuvo intentando adquirir recientemente en África cantidades muy importantes de uranio».

El discurso de Bush dejó perpleja a Elisabetta Burba, la periodista italiana. Los documentos se los habían entregado a ella y ella los había llevado personalmente a la Embajada de Estados Unidos y, después de su viaje a Níger, sabía que eran falsos. Burba se reunió de nuevo con su informador. «Quería saber qué había sucedido —explicó—. Él me aseguró que

no sabía que los documentos eran falsos, y afirmó que también a él le habían engañado».

Burba, convencida de tener en sus manos el artículo del año, quiso publicar la historia inmediatamente, pero Carlo Rossella, editor jefe de *Panorama*, se lo impidió. Rossella me contó: «Cuando escuché el discurso sobre el Estado de la Unión, pensé que quizá el Gobierno norteamericano poseía otra información. No creía que aquellos documentos fueran tan importantes... no eran de fiar». (Finalmente, en julio, después de que su nombre apareciera en la prensa, Burba publicó un artículo sobre su papel en todo el asunto. A principios de septiembre de 2003 fue interrogada por tres agentes del FBI en el Consulado de Estados Unidos en Milán).

El discurso sobre el Estado de la Unión resultó confuso y sorprendente para muchos miembros de los servicios de inteligencia, que no alcanzaban a comprender cómo una información de ese tipo podía haber llegado al presidente sin análisis previo. Y de pronto sintieron miedo. Según me contó un ex agente: «Dijeron: "¡Mierda, de pronto aparece el presidente y se pone a hablar de ello en el discurso del Estado de la Unión!". Se preguntaban quién demonios iba a desenmarañar todo aquello».

Cuando escribí por primera vez sobre los documentos apócrifos, Harlow, el portavoz de la CIA, dijo que la agencia no los había obtenido hasta después del discurso sobre el Estado de la Unión y que, por lo tanto, no habían podido evaluarlos en el momento oportuno. Esto no fue así, como posteriormente admitió la CIA. Verdad o no, la primera declaración de Harlow colocó a la CIA en una posición lamentable: básicamente, estaba escabulléndose de una acusación de incompetencia. Y no explicó por qué, como se ha mencionado al principio de este capítulo, la agencia dejó en manos del OIEA la tarea de revelar la incómoda falsificación.

En su memorándum de julio de 2004 sobre la información previa a la guerra relacionada con las armas de destrucción masiva, el Comité de Inteligencia del Senado, liderado por los republicanos, reveló, sin ningún comentario, que la CIA

tardó más de tres semanas en traducir los documentos italianos, que estaban escritos en francés, y unos cuantos días más en redactar un informe interno en el que se advertía que los documentos «pueden ser fraudulentos». El 11 de marzo, cuatro días después de que Baradei desacreditara públicamente en la ONU los documentos de Níger, la CIA remitió una valoración a Donald Rumsfeld en la que mostraba su conformidad con las conclusiones del OIEA. (Como ya hemos comentado, el investigador del OIEA tardó escasas horas en determinar, con la ayuda de Google, la falsedad de los documentos). La valoración de la CIA comunicaba también a Rumsfeld que la restante información disponible sobre la pretendida compra de uranio era «fragmentaria y no confirmada». Sorprendentemente, la valoración concluía diciendo que «nos preocupa que estos informes puedan indicar que Bagdad ha intentado abastecerse de *pasta amarilla* para un programa de armas nucleares mediante algún proveedor que aún no tenemos confirmado». Para la CIA, al parecer, la falta de información fiable no era la prueba de la ausencia de un programa nuclear activo en Irak, sino la prueba de que Irak se mostraba especialmente enrevesado y engañoso a la hora de enmascarar sus esfuerzos nucleares.

Sin embargo, el informe del comité senatorial, descrito mayoritariamente en la prensa como una velada acusación contra las estimaciones anteriores a la guerra realizadas por los servicios de inteligencia, mostraba también —quizá inadvertidamente— hasta qué punto la CIA, como un niño que ha sufrido malos tratos, era sensible a los deseos y exigencias de la Casa Blanca. En su análisis del episodio de Níger, el informe del Senado reproducía una serie de documentos en los que la CIA, a través de su Centro de Inteligencia de Armas para la No Proliferación Nuclear y Control de Armas, maquillaba la información disponible en un esfuerzo por complacer al vicepresidente Cheney. El Centro minimizó o ignoró repetidamente el escepticismo de otras agencias, sobre todo del INR del Departamento de Estado, y lo hizo remitiendo valoraciones que sugerían la existencia de pruebas fide-

dignas, obtenidas a partir de informes de terceros, de la intención de Irak de comprar uranio a Níger. En su conclusión, el comité declaraba que, de un modo u otro, «era razonable» que los analistas hubieran concluido que Irak podía haber buscado uranio en África. Sin embargo, poco había que pudiera apoyar esta conclusión y el comité ha aplazado varios meses —sin duda hasta después de las elecciones— la publicación de su análisis sobre el uso, o mal uso, de los servicios de inteligencia por parte de la Casa Blanca.

En marzo de 2003 me reuní con un grupo de altos funcionarios del OIEA en Viena, ciudad donde se encuentra su sede central. En la entrevista, que tuvo lugar durante una cena, me dijeron que hasta el mes anterior, unos días antes de que el presidente pronunciara su discurso, no habían sabido de la existencia de los documentos. El OIEA había solicitado a Washington y a Londres desde septiembre, cuando apareció la mención en el *dossier* británico, pruebas de la adquisición de uranio africano por parte de Irak, sin recibir respuesta. El OIEA insistió más a raíz de que Níger apareciera mencionado en el informe del Departamento de Estado del 19 de diciembre de 2002. «Empecé a acosar a Estados Unidos», recordó Jacques Baute. Mark Gwozdecky, portavoz del OIEA, añadió: «Pedíamos pruebas sobre las que poder actuar, pero Jacques no obtenía prácticamente nada».

El 4 de febrero de 2003, mientras Baute se encontraba en un avión rumbo a Nueva York para asistir a la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en la que se discutiría el asunto de las armas iraquíes, la Embajada de Estados Unidos en Viena informó repentinamente a los miembros del equipo de Baute sobre los documentos de Níger, aunque declinando todavía su entrega. «Insistí en ver personalmente los documentos —dijo Baute—, y me los proporcionaron a mi llegada a Nueva York». Al día siguiente, Colin Powell defendió en el Consejo de Seguridad los argumentos para ir a la guerra. En su exposición no mencionó a Níger, hecho que no se le pasó por alto a Baute. Funcionarios del OIEA me expresaron su per-

plejidad por el momento en que los norteamericanos habían decidido facilitarles los documentos, respecto a los cuales Baute llegó rápidamente a la conclusión de que eran falsos.

Durante las siguientes semanas, funcionarios del OIEA llevaron a cabo más investigaciones. Aparte de la evidencia de una falsificación chapucera que debería haber resultado obvia para cualquiera que dispusiera de las mínimas referencias, había datos, como los comprobados por Wilson y Burba, que convertían en inverosímiles no sólo los documentos sino también el asunto en sí. Por ejemplo, la enorme cantidad de uranio mencionada debería haber disparado las alarmas. La *pasta amarilla* de Níger se obtiene únicamente en dos minas de uranio controladas por una empresa francesa y la totalidad de su producción se vende de antemano a plantas de energía nuclear de Francia, Japón y España. «No es posible malversar quinientas toneladas sin que nadie se dé cuenta», me comentó un funcionario del OIEA. Asimismo, comunicaron sus hallazgos a funcionarios norteamericanos y británicos para darles una oportunidad de réplica. No hubo respuesta, de modo que el director general del OIEA, Mohamed el Baradei, confirmó públicamente el fraude en su siguiente comparecencia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el 7 de marzo. Entonces empezó la guerra y, durante un tiempo, la falsa historia de la conexión africana del uranio se perdió de vista.

¿Quién falsificó en realidad los documentos de Níger? Cuando en la primavera de 2003, unas semanas después de que el fraude saliera a la luz, se lo pregunté al funcionario del OIEA, éste me dijo que su organización no había conseguido responder a esa pregunta. «Pudo ser alguien que interceptara mensajes de fax en Israel, o alguien de la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores nigerio, en Niamey. No lo sabemos —admitió—. Alguien tenía en su poder membretes y firmas antiguas y se dedicó a cortar y pegar».

Los documentos falsificados y las falsas acusaciones han sido un elemento característico de la política de Estados Uni-

dos y Gran Bretaña con respecto a Irak desde otoño de 1997, después de que una paralización de las inspecciones de la ONU colocara a británicos y norteamericanos en desventaja en su batalla por la opinión pública internacional. Un antiguo funcionario de la Administración Clinton me dijo que, entre otras cosas, Londres había recurrido a difundir información falsa sobre Irak. El programa británico de propaganda (parte de sus Operaciones de Información o I/Ops) era conocido por unos pocos altos cargos de Washington. «Sabía que estaban en marcha —añadió respecto a las iniciativas británicas—. Estábamos listos para entrar en acción en Irak y queríamos que los británicos se prepararan».

Un ex funcionario de la inteligencia norteamericana me dijo que, durante el año siguiente, hubo al menos un miembro del equipo de inspección de la ONU, que apoyaba la postura angloamericana, que preparó docenas de informes y advertencias (la llamada «información que no se puede controvertir») no comprobados y no comprobables, para que fueran canalizados hacia los agentes del MI6 y comunicados discretamente a la prensa de Londres y a todas partes. «Era información de mierda y que no nos llevaba a ninguna parte, pero los británicos querían sembrar Inglaterra y el mundo con esas historias», dijo el ex funcionario. Tuvieron lugar entonces diversas reuniones clandestinas con el MI6, y en ellas se proporcionaron documentos, además de otras reuniones discretas, normalmente en viviendas seguras de la zona de Washington. La estrategia de propaganda británica acabó finalmente siendo conocida por algunos de los miembros del equipo de inspección de la ONU. «Sabía algo —reconoció en marzo de 2003 un funcionario que seguía trabajando en la sede de la ONU—, pero nunca me lo contaron oficialmente».

Además de las especulaciones en torno al MI6, la prensa ha sugerido otras posibles fuentes: la comunidad de exiliados iraquíes, los franceses. Una de las teorías, apoyada por algunos periodistas italianos, es que fue el SISMI quien pergeñó los documentos falsos y los pasó a *Panorama* para su publicación.

Un antiguo funcionario de inteligencia ofreció otra explicación. «Alguien los dejó colar expresamente —dijo en marzo de 2003, cuando escribí por primera vez sobre los documentos falsos—. Es imposible que penetraran en el sistema sin que estuviera involucrada la agencia. Por tanto, fue un proyecto interno. Alguien se los proporcionó a alguien». En entrevistas que mantuvimos durante los meses posteriores, culpó de todo el asunto a un pequeño grupo de agentes retirados de la CIA que se sentían contrariados por alguna razón.

«Los chicos de la agencia estaban hartos de Cheney y su camarilla —me aseguró—. Entonces dijeron: "Muy bien, les daremos una lección"». Mi confidente dijo que la primera vez que oyó hablar de ello fue a finales de 2002, en una de las muchas reuniones navideñas que se celebran en la zona de Washington y que congregan a funcionarios de la CIA tanto en activo como retirados. «Todo el mundo fanfarroneaba al respecto. "Mira lo que hicimos. Les hemos metido un gol"». Añadió que estos funcionarios fuera de servicio tenían excelentes contactos entre sus camaradas en activo que estaban al corriente sobre la información del SISMI. La idea, dijo, era que los halcones posicionados en la cima de la Administración ratificaran los documentos y que luego quedaran como unos imbéciles cuando los analistas de la agencia señalaran que aquello era una falsedad evidente. Pero les salió el tiro por la culata, dijo, porque los documentos recibieron amplia aceptación en el seno de la Administración. «La cosa se les fue de las manos».

Como en todas las grandes instituciones, el cuartel general de la CIA en Langley (Virginia) bulle de chismorreos y rumores de café, y un agente retirado me dijo en verano de 2003 que en todos los corrillos se comentaba que un ex funcionario de operaciones había estado implicado en la falsificación de los documentos. «Lo que es muy fuerte —añadió— es que se creyeran una historia presentada tan chapuceramente, con independencia de que sea cierta o no», un comentario revelador del nivel de desconfianza, amargura y desmoralización que existe en el seno de la CIA bajo la Administración Bush.

El 14 de marzo de 2003, Jay Rockefeller, senador por Virginia Occidental y el demócrata más veterano del Comité, solicitó formalmente a Robert Mueller, director del FBI, que investigara los documentos falsos. Rockefeller había votado en otoño de 2002 a favor de la resolución que autorizaba el empleo de la fuerza, pero ahora le escribió a Mueller: «Existe la posibilidad de que estos documentos falsos formen parte de una amplia campaña de fraude destinada a manipular la opinión pública y la política exterior respecto a Irak». E instaba al FBI a averiguar el origen de los documentos, el nivel de calidad de la falsificación, los motivos de sus responsables y «por qué los servicios de inteligencia no reconocieron que se trataba de un fraude».

Meses después, con la investigación todavía abierta, un funcionario del FBI me dijo: «Esta historia podría ir en varias direcciones. No hemos obtenido nada sólido, pese a que lo hemos buscado». Añadió que los agentes del FBI asignados al caso están poniendo mucho esfuerzo en la investigación, pero «alguien está ocultando algo, y lo está ocultando muy bien». En lo que se coincidía, según me comentó el antiguo funcionario de inteligencia, era en que «algo tan exótico como Níger levanta sospechas en cualquier parte».

El cada vez más amargo debate sobre el valor y la veracidad de la información relacionada con las armas de destrucción masiva se interrumpió en marzo, cuando el presidente Bush autorizó la guerra contra Irak. El régimen de Sadam Husein se derrumbó tras pocas semanas de combate, permitiendo que las tropas norteamericanas declararan la victoria con el desorden y la incertidumbre sobre el futuro del país como telón de fondo.

El posterior fracaso en el hallazgo de armas de destrucción masiva en los lugares que el Pentágono había dado por seguros reanimó el debate sobre la calidad de la información proporcionada por la agencia. Un antiguo jerarca de los servicios de espionaje me dijo que hacia mitad de marzo, antes del inicio de la guerra, varias unidades de las Fuerza Especia-

les se desplazaron a Irak con la misión de investigar las localizaciones sospechosas de albergar almacenamiento de misiles o de armas químicas y biológicas. «Volvieron con las manos vacías —dijo—. Jamás encontraron nada, ni siquiera un Scud».

A ello siguieron diversas falsas alarmas, pero ninguna prueba de las armas que los norteamericanos esperaban encontrar. El 22 de abril de 2003, Hans Blix, horas antes de solicitar al Consejo de Seguridad de la ONU que volviera a enviar su equipo de inspectores a Irak, declaró a la BBC: «Creo que uno de los elementos perturbadores ha sido que la información sobre la que los mandatarios construyeron sus argumentos era muy inconsistente».

En cambio, en el Pentágono había poca desconfianza o contrariedad por no haber encontrado las armas inmediatamente. En mayo de 2003, el asesor de la Oficina de Planes Especiales me dijo que el retraso «no significa nada. Tendremos que esperar a obtener todas las respuestas de los científicos iraquíes, que nos dirán dónde están». Ese mismo mes un funcionario del Pentágono que trabaja para Luti dijo: «Creo que están escondidas en las montañas o que las han llevado a algunos países amigos. Sadam dispuso de tiempo suficiente para realizar el traslado». El Pentágono empezaba a sugerir que Sadam podría haber sacado las armas por la frontera con Siria.

«Es como hacernos tragar el anzuelo y luego tirar hacia el otro lado —explicó el antiguo jerarca de los servicios de espionaje—. Tragar primero el anzuelo de Irak y las armas de destrucción masiva. Y luego, cuando no las encuentran, vienen con todas esas monsergas de que las armas están en Siria».

En el Congreso, un mes y medio después de que se iniciara la guerra, un destacado jurista me dijo: «Algunos legisladores empiezan a preguntar y a cuestionarse, pero con cautela». De momento, añadió, «los legisladores no poseen la certeza suficiente como para decir que la Administración se ha equivocado totalmente». No obstante, «a muchos prácticamente les da igual. Derrotamos al malo y liberamos al pueblo iraquí. Los hay lo bastante astutos como para compren-

der que la supuesta amenaza inminente de las armas de destrucción masiva era un pretexto. A veces, cuando amigos o familiares me preguntan con incredulidad por qué no se encuentran las dichosas armas, tengo que darme un pellizco y recordarme que el ciudadano medio cree que allí las hay a montones, listas para ser lanzadas. Cuanto más tiempo pase, más gente se cuestionará al respecto, pero no creo que eso haga variar mucho la opinión pública norteamericana. A todo el mundo le encanta estar en el lado ganador».

Si bien el avance norteamericano no desvelaba la existencia de escondites de armas de destrucción masiva, sí tropezaba con pruebas gráficas de la brutalidad del régimen. Pero la crueldad de Sadam Husein había sido documentada mucho antes del 11-S y no era el principal motivo que la Administración Bush ofreció al mundo para convencer de la necesidad de la guerra. El ex senador Bob Kerrey, un acérrimo partidario de la decisión de Bush de derrocar a Sadam, me explicó: «Creo que construir un Estado secular democrático en Irak justifica todo lo que hemos hecho. Pero han cogido la información sobre las armas y la han inflado más allá de lo que estaba justificado». Hablando de los halcones dijo: «Al parecer creían que para obtener el apoyo del pueblo norteamericano necesitaban algo más que simplemente decir: "Liberaremos Irak y nos desharemos de un tirano". De modo que se les ocurrió sacar a la palestra las armas de destrucción masiva y estuvieron dispuestos a permitir que la mayoría de la opinión pública llegara a la conclusión errónea de que la invasión de Irak tenía algo que ver con las Torres Gemelas. El hecho de subrayar en exceso la amenaza a la seguridad nacional dificultó que el resto del mundo se pusiera de nuestro lado. Era el argumento más débil y que a más conclusiones erróneas podía llevar. Creo que los halcones poseían la información verdadera, pero no les gustaron las conclusiones».

Joseph Wilson evocó su historia más de un año después de viajar a África para investigar el asunto de Níger. Estaba

enfadado por lo que consideraba una falta de honestidad de la Casa Blanca respecto a aquel país africano y, a principios de mayo de 2003, mencionó su misión, y sus comprobaciones, durante una breve charla sobre Irak en una conferencia que tuvo lugar en la ciudad de Washington patrocinada por el Comité Demócrata del Senado (Wilson es demócrata). Otro orador era el columnista del *New York Times* Nicholas Kristof, que obtuvo el permiso de Wilson para mencionar en un artículo su viaje a Níger. Unos meses después, el 6 de julio, Wilson escribió sobre el viaje en la página de opinión editorial del *Times*. «Les di meses para desacreditar los documentos —me dijo, refiriéndose a la Casa Blanca—, pero siguieron adelante con la mentira».

La Casa Blanca respondió culpando a los servicios de inteligencia de la referencia a Níger en el discurso sobre el Estado de la Unión. Condoleezza Rice comentó en una entrevista televisiva el 13 de julio: «Si hubiera habido la menor indicación de que la agencia o el FBI no querían incluir dicha frase [...] se habría eliminado». Cinco días después, un funcionario de la Casa Blanca fue un paso más allá, explicando a los periodistas que habían obtenido una impresión equivocada del viaje de Joseph Wilson a Níger y de la información resultante. «No se puede afirmar que el embajador Wilson nos alertara de que todo esto era dudoso —dijo el funcionario, según una trascripción de la Casa Blanca—. Eso no es exacto».

Pero el relato que Wilson hizo de su viaje forzó a una conmocionada Casa Blanca a reconocer, por primera vez, que «esta información no debería haber alcanzado la altura de un discurso presidencial». Desencadenó además filtraciones vengativas a la prensa por parte de funcionarios de la Casa Blanca que señalaron a la esposa de Wilson como colaboradora de la CIA y desencadenaron una investigación del FBI. En verano de 2004, el fiscal general John Ashcroft había designado a un fiscal federal de Chicago para investigar las filtraciones, y habían sido interrogados muchos altos cargos de la Administración, incluido el presidente.

Entre los mejores testigos potenciales sobre el tema de la capacidad nuclear real de Irak se encuentran los hombres y las mujeres que trabajaron en el sector armamentístico iraquí y para el Directorio Nacional de Seguimiento, la organización creada por Sadam para tratar con los inspectores de la ONU. Más de seis meses después de la invasión, muchos altos funcionarios del sector armamentístico, incluso aquellos que voluntariamente se rindieron a las tropas norteamericanas, seguían todavía en cautividad en el aeropuerto de Bagdad y en otros lugares, inaccesibles para los periodistas. Las autoridades norteamericanas apenas habían informado a sus familiares. Ansiosos por obtener información, éstos llamaron a amigos y otros contactos en Estados Unidos en busca de ayuda. Un emigrante iraquí que recibió la llamada de las familias de los científicos fue Shakir al Kha Fagi, que abandonó Irak siendo joven y que regentaba con éxito un negocio en Detroit. «Las personas relacionadas con los servicios de inteligencia y el negocio de las armas de destrucción masiva siguen encarceladas —dijo—. Los norteamericanos los buscan uno por uno hasta dar con ellos. Nadie los representa y ningún abogado norteamericano se ocuparía de sus casos».

Pero no todos los científicos destacados estaban en la cárcel. Jafar Dhia Jafar, un físico que había cursado estudios en Gran Bretaña y que coordinó los esfuerzos de Irak por construir la bomba en la década de 1980, y que además había tenido acceso directo a Sadam, huyó de Irak a principios de abril, antes de la caída de Bagdad, y con la ayuda de su hermano Hamid, director general de una importante empresa energética, consiguió llegar a los Emiratos Árabes Unidos. Jafar se negó a regresar a Bagdad y aceptó informar a la CIA y los servicios de inteligencia británicos. Hubo una veintena de reuniones, en las que participaron hasta quince expertos norteamericanos y británicos. La primera reunión, el 11 de abril, se inició con la pregunta de un funcionario de la CIA: «¿Posee Irak un dispositivo nuclear? El ejército quiere saberlo. Están muy preocupados». La res-

puesta de Jafar, según las anotaciones de un testigo presencial, fue echarse a reír.

Jafar se mostró tajante en que no había bomba y tampoco armas de destrucción masiva. «Su respuesta fue: "No hay nada"». Explicó que la cúpula iraquí había nombrado un nuevo comité después de la guerra del Golfo de 1991, tras la implantación del régimen de inspecciones de la ONU, y «el Hombre Principal [Sadam] remitió las siguientes instrucciones: "Entregádselo todo"». Las notas dicen que la siguiente pregunta fue: «¿Se refiere a todas las armas de destrucción masiva? ¿Cómo puede estar seguro?». Su respuesta fue clara: «Conozco a todos los científicos implicados, y hacen comentarios. No hay armas de destrucción masiva».

Jafar explicó también por qué Sadam había decidido entregar sus preciadas armas: «Hasta la guerra del Golfo nuestros adversarios eran de la región. [...] Pero después de la guerra, cuando quedó claro que el adversario era Estados Unidos, Sadam comprendió que estas armas eran superfluas. "Es imposible intimidar a Estados Unidos". Por tanto, las armas de destrucción masiva no le servían a Irak estratégicamente para nada».

Jafar tenía su propia explicación, según las notas, para uno de los enigmas insolubles del régimen de inspecciones de la ONU: la diferencia de seis mil cabezas entre el número de armas químicas que se creía que Irak había fabricado antes de 1991 y el número contabilizado por los inspectores. Fue esta disparidad la que llevó a los servicios de inteligencia occidentales y a los estrategas militares a realizar supuestos basados en la peor posibilidad. Jafar explicó a sus interrogadores que el Gobierno iraquí simplemente había mentido a las Naciones Unidas sobre el número de armas químicas utilizadas contra Irán durante la brutal guerra librada en los años ochenta. Irak, dijo, lanzó muchos más misiles a los iraníes de lo que reconoció. Por ese motivo, Sadam prefirió no mencionar estas armas.

La credibilidad de los testigos de un régimen derrotado siempre es problemática. Cualquiera que hubiera estado im-

plicado en la creación u ocultación de armas de destrucción masiva tendría motivos para negarlo. Pero la confirmación de la veracidad de Jafar llegó de una fuente inhabitual: Jacques Baute, del OIEA, que pasó gran parte de la última década librando una duelo personal con Jafar y los demás científicos y técnicos iraquíes especializados en armas de destrucción masiva. «Soy desconfiado por naturaleza y más en estas circunstancias —me dijo—, pero lo que Jafar nos contó a partir de 1995 es sumamente exacto».

En junio de 2003, el Comité de Inteligencia del Senado inició una investigación llena de carga política sobre la divergencia entre la valoración de las armas de destrucción masiva hecha por la Administración Bush antes de la guerra y lo que en realidad se descubrió. Unos meses después, un funcionario de inteligencia me dijo que las averiguaciones preliminares del comité eran inquietantes. «Los servicios de inteligencia cometieron todo tipo de errores y manejaron las cosas de manera poco sistemática», añadió. Los problemas iban desde falta de rigor hasta distintas agencias aportando simultáneamente valoraciones contradictorias. Se constató que los informes sobre Irak proporcionados por los inspectores de la ONU eran mucho más exactos que las estimaciones de la CIA. «Algunos veteranos de la agencia están horrorizados por lo malo que era el análisis —dijo—. Si comparas la CIA con la ONU, los servicios de ésta ganan por goleada».

A primeros de octubre de 2003, David Kay, el ex inspector de la ONU que actualmente encabeza el Grupo de Investigación para Irak, presentó al Congreso un informe provisional sobre la búsqueda de las armas de destrucción masiva. «Todavía no hemos encontrado arsenales de armas —informó—, pero aún no nos hallamos en el punto en que podamos concluir que tales arsenales de armas no existen ni existieron antes de la guerra». En el campo de las armas nucleares, dijo, «a pesar de las pruebas de la continua ambición de Sadam por conseguir armas nucleares, hasta la fecha no

hemos descubierto pruebas de que Irak diera pasos, después de 1998, hacia la producción de armas nucleares o de material fisionable».

Prácticamente todo el mundo coincidió en que Kay había hecho lo imposible por respaldar las declaraciones de Bush previas a la guerra, en las que afirmaba la existencia de una amenaza inminente con armas de destrucción masiva. Pero su informe, en lugar de avalar dichas afirmaciones, fue considerado un bofetón a la Administración. El presidente Bush, sin embargo, veía las cosas de otra manera. Declaró a los periodistas que se sentía satisfecho con el informe, en el que, según sus palabras, se demostraba que «Sadam Husein constituía una amenaza, un grave peligro».

La respuesta del presidente generó la pregunta de qué había aprendido la Administración, si es que había aprendido algo, de su fracaso a la hora de encontrar armas de destrucción masiva en Irak. Cualquier presidente depende estrechamente de su equipo para que lleve a cabo el análisis previo de la información y realice un resumen razonable y juicioso de los acontecimientos mundiales. La competencia en estos asuntos corresponde al consejero de seguridad nacional del presidente, en este caso, Condoleezza Rice. El ex funcionario de la Casa Blanca me dijo: «Puede que el secretario de Defensa y su gente estén interrumpiendo el proceso y creando un canal separado para el vicepresidente. Aun así, al final, todas las decisiones políticas tienen que ser analizadas a fondo por las distintas agencias, coordinadas por la consejera de seguridad nacional». Pero lo que se produjo, en cambio, dijo, «fue una auténtica abdicación de sus responsabilidades por parte de Condi».

El vicepresidente Cheney siguió imperturbable ante la confianza que la Administración había depositado en los documentos de Níger, a pesar de que hubiera salido a la luz su falsedad. En una entrevista en *Meet the Press*, en septiembre de 2003, Cheney declaró que las advertencias contenidas en el *dossier* británico (en esencia, que Sadam estaba intentando adquirir uranio en África) habían sido «revalidadas».

Y añadió: «Así que puede que estemos ante una diferencia de opiniones. No conozco la verdad sobre el terreno [...]. Tampoco conozco al señor Wilson y probablemente no debería juzgarle».

El vicepresidente defendió también su forma de involucrarse en asuntos que competen a los servicios de inteligencia: «Se trata de un área muy importante. Un área en la que el presidente me ha pedido que trabaje [...]. Si se trata de hacer preguntas, me declaro culpable. Formulo una barbaridad de preguntas. Es mi trabajo».

Capítulo VI

El secretario y los generales

Rumbo a Bagdad

La guerra contra Irak se inició el 19 de marzo de 2003. En su primera semana, la campaña terrestre fue confusa, con líneas de suministro insuficientes y carencia de refuerzos inmediatos. La primera reacción del Pentágono fue de enfado.

Varios estrategas militares, en diversas entrevistas realizadas en aquel momento, me expresaron sus quejas de que el secretario de Defensa y su círculo interno de colaboradores civiles, los principales responsables de convencer al presidente Bush para llevar el país a la guerra, habían insistido en gestionar los detalles de la operación bélica. El equipo de Rumsfeld asumió la responsabilidad en los aspectos cruciales de la planificación logística del día a día —un área tradicionalmente asignada a militares uniformados—, y el propio Rumsfeld rechazó repetidamente la presencia de los estrategas del Pentágono en la Junta de Estado Mayor, el brazo operativo del Estado Mayor Conjunto. «Pensaba que él lo hacía mejor —dijo un estratega—. Era él quien tomaba las decisiones en cada momento».

El estratega me explicó que al menos en seis ocasiones, durante las presentaciones de los planes de operaciones a las que asistían Rumsfeld y sus delegados (el ataque a Irak fue designado como «plan 1003»), éste insistió en que el número de efectivos terrestres fuera reducido sustancialmente. Su confianza en los bombardeos de precisión y su insistencia en lle-

var a cabo operaciones militares eficientes han tenido profundas consecuencias en la capacidad de combate efectivo de nuestras fuerzas armadas en el extranjero. «Nuestros hombres no tenían recursos —dijo un antiguo jerarca de los servicios de inteligencia—. Rumsfeld estaba empeñado en demostrar que tenía razón, que los iraquíes se desmoronarían a las primeras de cambio». (En aquel momento, Rumsfeld no respondió a mi solicitud para conocer sus comentarios).

El momento crítico, dijo un estratega, fue en el otoño de 2002, durante la elaboración de la guerra, cuando Rumsfeld decidió que no se ceñiría al documento más sofisticado de estrategia de guerra del Pentágono, el *time-phased forces-deployment list* (relación de despliegue escalonado de fuerzas), o TPFDL. Una TPFDL es una minuciosa relación que incluye el inventario de efectivos que se enviarán a una batalla, la secuencia de su despliegue y el del apoyo logístico. «Es el compendio de todos los planes, con todos los detalles —me explicó Roger J. Spiller, profesor de Historia Militar en el US Command and General Staff College—. Todo el mundo se entrena y practica con él. Se le hacen modificaciones constantes y siempre se ajusta en el último minuto. Es un elemento imbuido de cultura burocrática y operativa». Un estratega de la fuerza aérea retirado destacó: «Esto es lo que mejor sabemos hacer, pasar de A a B, y el truco está en dónde empiezas, en cómo preparas el plan para salir a escena». Otro antiguo estratega dijo: «Una vez que lo pones en marcha, todo se mueve ordenadamente». Un ex funcionario de inteligencia añadió: «Si te lo cargas, te cargas la estrategia militar centralizada. El ejército no es como una empresa, que puede buscar sobre la marcha la perfección de su operativa. El ejército es la máquina más ineficiente conocida por el hombre. Lo que salva vidas es ceñirse a las directrices».

La TPFDL para la guerra de Irak llenaba más de cuarenta hojas de cálculo que incluían todo, desde las armas hasta el papel higiénico. Cuando se presentó inicialmente a Rumsfeld en 2002 para su aprobación, se solicitaba la participación de un amplio espectro de fuerzas de las distintas armas,

incluyendo cuatro o más divisiones del ejército de tierra. Rumsfeld rechazó el paquete por demasiado «grande», dijo un estratega del Pentágono. Se obstinó en que sería suficiente con una fuerza de ataque reducida y que avanzara a mayor velocidad, combinada con una fuerza aérea aplastante. Rumsfeld dejó posteriormente perpleja a la Junta de Estado Mayor insistiendo en que él controlaría el movimiento y el flujo de efectivos hacia la zona de combate. Tales decisiones son conocidas en el ejército como RFF (solicitud de efectivos). Él, no los generales, decidiría qué unidad iría, dónde y cuándo.

La TPFDL recomendaba llevar por mar centenares de tanques y vehículos pesados (apoyo suficiente para tres o cuatro divisiones). Pero Rumsfeld decidió confiar en el equipo pesado que se encontraba ya en Kuwait, sólo válido para apoyar una división de combate completa. En consecuencia, la 3ª División de Infantería, de Fort Stewart (Georgia), la única división mecanizada del ejército de tierra que estuvo activa en Irak durante la primera semana de la guerra, llegó al Golfo sin su propio equipo.

«Estos chicos están moviéndose en tanques que ya estaban allí. Sus tanques siguen en Fort Stewart —dijo el estratega—. Para conseguir mayor efectividad, debemos embarcarlos de inmediato. De nada nos sirve enviar soldados por avión porque allí no tienen nada que conducir. En los seis últimos meses podríamos haber enviado todo por barco en noventa días, material suficiente para cuatro o más divisiones». Y añadió: «Éste es el lío en el que se metió Rumsfeld por querer hacerlo a su manera».

El «plan 1003» fue repetidamente actualizado y presentado a Rumsfeld, y en cada ocasión, según el estratega, el secretario de Defensa dijo: «Demasiados efectivos terrestres. Id y rehacedlo de nuevo». En opinión de este estratega, Rumsfeld tenía dos objetivos: demostrar la eficacia de los bombardeos de precisión y «hacer una guerra en plan barato». Él y sus dos principales asesores para la estrategia de la guerra, Paul Wolfowitz y Douglas Feith, «estaban tan enamorados del elemento "sorpresa y temor" que la victoria les parecía

asegurada —dijo el estratega—. Creían que el tiempo siempre estaría despejado, que el enemigo sería siempre localizable y que, por tanto, los bombardeos de precisión funcionarían siempre».

El desprecio personal que Rumsfeld sentía hacia muchos generales y almirantes que fueron promovidos a altos cargos durante la Administración Clinton era de sobra conocido. Se mostraba especialmente crítico con el ejército de tierra por su insistencia en mantener divisiones mecanizadas muy costosas. En esos apuntes que suele sacarse de la manga («copos de nieve», los denominan en el Pentágono) se mostraba impaciente con los generales por «lentos» (una referencia a la caracterización que Lincoln hizo del general McClellan, quien le llevó a la derrota por sus vacilaciones). «En estas condiciones, en un ambiente de mofa y contrariedad, los oficiales no ofrecen sus mejores consejos», dijo un general de alto rango que sirvió más de un año a las órdenes de Rumsfeld. Un testigo presencial de una reunión recuerda al secretario enfrentándose al general Eric Shinseki, jefe del Estado Mayor del Ejército, delante de muchos oficiales de rango inferior. «Miraba al jefe y movía la mano —dijo el testigo—, como si quisiera decirle: "¿Lo has captado ya?, ¿lo has captado por fin?"».

Gradualmente, Rumsfeld sustituyó con éxito a aquellos oficiales que ocupaban cargos destacados en la Junta de Estado Mayor y desafiaban su punto de vista. «Todos los componentes actuales de la Junta han sido elegidos personalmente y fabrican productos en serie para que el secretario de Defensa se sienta feliz —dijo el estratega—. No emiten opiniones militares, sólo se limitan a responder a sus "copos de nieve"».

En los meses que precedieron a la guerra se produjo una división en el seno del ejército, con los estrategas y sus superiores inmediatos por un lado, que advertían sobre que el plan de guerra era peligrosamente escaso en cuanto a hombres y material, y, por el otro, los generales más destacados —entre ellos Tommy Franks, comandante en jefe del Mando Central, y Richard Myers, jefe del Estado Mayor Conjunto—, que

apoyaban a Rumsfeld. Después de que a primeros de marzo el Parlamento turco dejara boquiabiertos a los estrategas de la guerra negando a Estados Unidos autorización para que la 4ª División de Infantería desembarcase en Turquía, Franks argumentó, según un ex funcionario de los servicios de inteligencia, que la guerra tendría que retrasarse hasta que los soldados pudieran llegar por otras rutas. «Rummy rechazó la propuesta».

Muchos de los actuales y antiguos oficiales con los que hablé se mostraron decepcionados con Franks por no haber mantenido su postura ante sus superiores civiles. Un ex senador me dijo que Franks era visto como un comandante que «hará lo que se le diga». Un antiguo funcionario de los servicios de inteligencia preguntó: «¿Por qué no acudió al presidente?». Un oficial del Pentágono recordó que había un general que solía preparar a sus delegados para las reuniones con Rumsfeld diciéndoles: «Cuando vayáis a hablar con él, tenéis que demostrarle que estáis dispuestos a dejar vuestras estrellas sobre la mesa y marcharos. De lo contrario, os pasará por encima».

Según un funcionario del Pentágono, a primeros de febrero de 2003, Rumsfeld compareció en la Conferencia de Comandantes del Ejército, un acto de negocios y de carácter social que reúne bianualmente a todos los generales de cuatro estrellas. Rumsfeld fue invitado a cenar con los generales y a pronunciar un discurso. Todo fue bien hasta que Rumsfeld, durante el turno de ruegos y preguntas, fue inquirido por su implicación personal en el despliegue de las unidades de combate, a las que, en algunos casos, se había dado un plazo de sólo cinco o seis días. Para asombro y consternación de los generales, Rumsfeld negó toda responsabilidad. Según el funcionario, dijo: «Yo no participé. Fue la Junta de Estado Mayor».

«Pensábamos que serviría para limar fisuras, pero fue un desastre —comentó el funcionario a propósito de la cena—. Todo el mundo sabía que él estaba detrás de esas órdenes de despliegue. Y echarle la culpa a la Junta de Estado Mayor...

—vaciló un momento y a continuación dijo—: todo se reduce a Rummy y la verdad».

Según la docena aproximada de militares que entrevisté, Rumsfeld, simplemente, no anticipó las consecuencias de una guerra prolongada. En los primeros días puso sobre el terreno unidades del ejército y la marina con escasas reservas y un número insuficiente de tanques y vehículos blindados. (Los militares dijeron que los vehículos de que disponían habían sido muy forzados y funcionaban mal). Las líneas de suministro, como era de esperar, se extendieron rápidamente y se hicieron vulnerables a los ataques, provocando escasez de combustible, agua y munición durante aquella primera semana. Los funcionarios del Pentágono hablaban con desdén de las optimistas ruedas de prensa que ofrecía la Administración. «Estamos en punto muerto —me dijo en su momento el ex funcionario de inteligencia—. Y empeorará si no podemos conservar las líneas de suministro. Los portaviones se quedarán sin sus JDAM», las bombas guiadas por satélite que alcanzaban sus objetivos en Bagdad y otros puntos con extraordinaria exactitud. Gran parte de las reservas de misiles Tomahawk se había agotado. «Los marines están muy preocupados —prosiguió—. Están todos dando el callo, sin tropas de reemplazo, y nunca habían manejado blindados ligeros tan grandes y tan intratables. —Se refería a los que utilizaron la primera semana en Irak, que presentaban serios problemas de mantenimiento—. La única esperanza es que puedan aguantar hasta que lleguen refuerzos», concluyó.

No se esperaba que la 4ª División de Infantería (la división mecanizada más moderna del ejército), cuyo equipo pasó semanas esperando en el Mediterráneo antes de ser desviada hacia el agobiado puerto norteamericano de Kuwait, pudiera ser operativa hasta finales de abril. La 1ª División de Caballería estaba lista para partir en Texas, dijo el estratega, pero el viaje por mar hasta Kuwait se prolongaría semanas. «En estos momentos sólo disponemos de pertrechos

en la línea del frente —me dijo el ex funcionario de inteligencia—. Todo lo demás falta».

Aquella primera semana, mientras se atascaban los planes del asalto a Bagdad, las seis divisiones de la Guardia Republicana, de las que se esperaba la principal resistencia iraquí, no habían tenido todavía ningún encuentro significativo con soldados norteamericanos o británicos. La escasez obligó al Mando Central a «buscar suministros en los alrededores», explicó el ex funcionario de inteligencia. El objetivo inmediato para los efectivos del ejército y la marina, añadió, era «resistir y esperar que las divisiones de la Guardia Republicana se harten» de los bombardeos. El estratega coincidió con esta opinión y dijo: «La única salida que existe en este momento es replegarse y esperar algún tipo de milagro, que la Guardia Republicana dé un paso en falso y quede expuesta a los ataques aéreos». Posteriormente, un general de cuatro estrellas retirado me comentó: «La esperanza no es una línea de conducta válida».

El 28 de marzo, el comandante en jefe del Ejército de Tierra, el teniente general William S. Wallace, declaró a los periodistas: «El enemigo al que ahora nos enfrentamos es distinto de aquel contra el que estuvimos jugando a la guerra». (Un funcionario de la Administración me comentó, refiriéndose a los iraquíes: «No están asustados. ¿Significará algo?»). En una rueda de prensa que tuvo lugar al día siguiente, Rumsfeld y Myers fueron preguntados sobre los comentarios de Wallace, pero se limitaron a defender el plan de guerra, Myers calificándolo de «brillante» y «según lo previsto». Destacaron que la guerra apenas llevaba más de una semana.

Scott Ritter, antiguo marine e inspector de armas de la ONU, destacó que gran parte del bombardeo inicial fue poco efectivo o contraproducente. Por ejemplo, machacar los palacios de Sadam liberó de su misión a una brigada de élite de la Guardia Republicana asignada para protegerlos. «Además, en todas las casas de Bagdad hay reservas de munición y suministros», añadió.

«Esto es una tragedia —se lamentó un estratega—. Estamos perdiendo vidas de norteamericanos». El ex funciona-

rio de inteligencia me explicó: «Todo el mundo dijo: "Podemos hacerlo desde el aire". Y se creyeron su propia propaganda». El ex general de cuatro estrellas describió la actitud de Rumsfeld hacia la estrategia de guerra propuesta por la Junta de Estado Mayor como «una intimidación al estilo McNamara, sólo que con la intervención de una pequeña célula», una referencia al secretario de Defensa Robert S. McNamara, conocido por sus continuos desafíos al Estado Mayor Conjunto durante la guerra de Vietnam. El ex general comparó el actual Estado Mayor Conjunto con *Las viudas de Stepford.* «Han abdicado de sus responsabilidades», dijo.

Es posible que el mayor fiasco de la primera semana de guerra fuese el fracaso de las facciones chiíes del sur de Irak en dar apoyo a la invasión norteamericana y británica. Desde la década de 1980, diversas ramas de la facción Al Dawa, que operaba clandestinamente, habían estado llevando a cabo actos de terrorismo contra el régimen iraquí. Pero Al Dawa se había mostrado también hostil a los intereses norteamericanos. Algunos agentes de los servicios de inteligencia habían implicado al grupo en el bombardeo de los barracones de los marines en Beirut, en 1983, que costó la vida a 241 norteamericanos. A pesar de ello, en los meses anteriores a la guerra, la Administración Bush había cortejado a Al Dawa incluyéndola entre los grupos de la oposición que controlarían el Irak de la posguerra. «Al Dawa es un grupo que podría asesinar a Sadam —me dijo entonces un antiguo miembro de los servicios de inteligencia—. Lo odian porque reprimió a los chiíes. Viven para matarlo». Y añadió que si, como parecía entonces, habían decidido permanecer leales al régimen iraquí, sería un desastre para Estados Unidos. «Son como el Vietcong».

Aquella semana hubo también informes de que exiliados iraquíes, entre ellos chiíes fervientes, estaban entrando en Irak procedentes de Jordania y Siria a bordo de coches y autobuses para combatir en el bando iraquí. Robert Baer, antiguo funcionario de la CIA en Oriente Próximo, me dijo durante

una llamada telefónica desde Jordania: «Todo el mundo quiere combatir. Toda la nación iraquí lucha por defender a Irak. No a Sadam. Se les ha dado la más alta consigna y vamos directos al desastre. Aunque nosotros tengamos cincuenta o sesenta bajas al día y ellos mueran por millares, siguen ganando. Es una *yihad* y por ella merece la pena morir. Ha dejado de ser una guerra secular». Aparecieron artículos en la prensa describiendo la llegada de muyaidines procedentes de Pakistán, Afganistán y Argelia para «operaciones de martirio».

Desde antes de la guerra se esperaba que Irán, antiguo enemigo de Irak, se pusiera del lado norteamericano en la batalla. El CNI de Chalabi había mantenido contacto regular con el Consejo Supremo de la Revolución Islámica en Irak, o SCIRI, una organización que abarca los diversos grupos chiíes opositores a Sadam. La organización había tenido su base en Irán y mantiene estrechas relaciones con los servicios de inteligencia iraníes. Chalabi había predicho repetidamente que Teherán proporcionaría apoyo, incluyendo hombres y armas, en caso de que Estados Unidos invadiese Irak. Sin embargo, antes de que finalizara la primera semana, quedó claro que eso era algo muy poco probable. En una rueda de prensa celebrada aquel viernes, Rumsfeld advirtió a las autoridades iraníes que no interfiriesen con las tropas angloamericanas y acusó a Siria de enviar equipamiento militar a los iraquíes. Un hombre de negocios de Oriente Próximo que mantiene relaciones desde hace mucho tiempo con Jordania y Siria, y en cuya información siempre he confiado, me explicó aquella semana que el Gobierno religioso de Teherán «ahora respalda a Irak. En territorio iraquí no existe ningún grupo de combate árabe que apoye a Estados Unidos».

Pocos días después de la publicación de mi artículo en *The New Yorker* sobre la primera semana de guerra, la 3ª División de Infantería llevó a cabo su exitosa carrera por el desierto hacia la capital. En cuestión de pocos días, una Bagdad

repentinamente tranquila cayó y la estatua gigante de Sadam, con la ayuda de un tanque norteamericano, fue derribada delante de los telespectadores de todo el mundo. Las quejas sobre la falta de efectivos y la excesiva confianza en la fuerza aérea parecían carecer de fundamento y fueron ridiculizadas por Rumsfeld y sus subordinados. El ejército iraquí y su tan cacareada Guardia Republicana se habían hundido... o eso parecía. Y luego empezaron los saqueos al por mayor de oficinas del Gobierno, negocios y casas, y no había suficientes soldados sobre el terreno para impedirlo. Los siguientes días presenciaron los primeros atisbos de una insurgencia bien armada; una vez más, no había suficientes soldados sobre el terreno para detenerla. Resultaba que la Administración Bush había ganado una importante batalla, pero todavía le quedaba toda una guerra por delante.

Hasta finales de diciembre de 2003, y gracias a una estancia de tres días en Siria en compañía de Ahmad Sadik, un general de brigada iraquí que había trabajado en los servicios de inteligencia de transmisiones durante la guerra Irán-Irak, no me quedó claro lo poco que en Estados Unidos comprendemos la naturaleza de la insurgencia. Sadik, que habla un inglés excelente, fue asignado a principios de los noventa para tratar con los inspectores de las Naciones Unidas, de quienes sabemos ahora que, tras siete años en el país, desmantelaron, destruyeron y/o inventariaron el arsenal iraquí de armas químicas, biológicas y nucleares. Con Sadik quedamos en reunirnos en un hotel de Damasco.

Me contó que en junio de 2003 había sido interrogado por tres agentes del espionaje norteamericano. No lo habían encarcelado, aunque varios conocidos suyos sí estaban entre rejas, y tampoco se habían cebado mucho sobre su etapa como funcionario de los servicios de inteligencia especializado en comunicaciones. Durante los meses que siguieron a aquello se enteró por antiguos colegas y por documentos clasificados (muchas dependencias del régimen fueron saqueadas después de la caída y parte del material confidencial fue pu-

blicado en la prensa árabe) de que en 2001, poco después de que la elección de Bush llevara al Pentágono a muchos de los oficiales que habían dirigido la guerra del Golfo en 1991, Sadam había trazado planes para que, en caso de invasión, tuviera lugar una insurgencia de vasto alcance. En todo el país se reunió un arsenal de armas ligeras y de todo tipo para uso de los insurgentes. En enero de 2003, cuando parecía inminente una invasión más que anunciada, Sadam Husein redactó un documento de cuatro páginas ordenando a su policía secreta, la Mujabarat, que ante cualquier ataque norteamericano fuesen a las principales dependencias del Gobierno y los ministerios, destruyeran todos los documentos y prendieran fuego a los edificios. Ordenó asimismo que la Mujabarat lo dispusiera todo para repeler la entrada en Irak de los diversos grupos de exiliados iraquíes que sin duda arribarían con la ayuda de Estados Unidos tras la invasión.

Una de las fechas más críticas de la guerra, según Sadik, fue el 7 de abril de 2003, cuando las tropas norteamericanas habían ocupado los barrios periféricos de Bagdad y se preparaban para una dura batalla urbana puerta a puerta por la conquista de la ciudad. Los mandos norteamericanos temían un sitio de Bagdad prolongado y habían hecho planes para ello. Pero las tropas, en las que se incluían miembros de la jerarquía del partido Baaz, las unidades especiales de la Guardia Republicana, la Organización Especial de Seguridad (SSO) y la Mujabarat, recibieron la orden de regresar a sus casas e iniciar la resistencia desde allí. «En mi barrio —recuerda Sadik— había barricadas en cada esquina, custodiadas por hombres armados. Estaban allí por la mañana y se fueron por la tarde. Enfrentarse al ejército norteamericano a pecho descubierto es inútil». (Un antiguo jerarca de la inteligencia estadounidense me había comentado meses atrás que la tarde del 7 de abril Bagdad se quedó de repente en silencio: los seguidores de Sadam habían dejado de comunicarse mediante teléfonos móviles y otros artilugios y se esfumaron como por ensalmo. Fue sólo entonces, dijo, cuando quedó claro que no habría enfrentamientos sangrientos en la ciudad).

Sadik me explicó además que en los planes de 2001, Sadam había ordenado la creación de tres divisiones de insurgentes que operarían clandestinamente y por separado bajo el control directo de un oficial iraquí que habría elegido él personalmente. Las divisiones estarían integradas por entre dos y cuatro mil miembros y se organizarían en pequeñas células. La primera división, dijo Sadik, comandada por Izzat al Duri, uno de los delegados de Sadam, «estaba compuesta por baazistas desconocidos públicamente en aquel momento». Su misión consistía en operar independientemente y permanecer escondidos en casas seguras debidamente protegidas. La segunda división, al mando de Taha Yasin Ramadan, estaba compuesta por miembros del partido Baaz cuya tarea consistía en respaldar a la primera división proporcionándole instrucciones operacionales a través de una serie de escondrijos secretos. Ramadan fue capturado por soldados kurdos en Mosul en agosto, pero su captura, dijo Sadik, no llevó a la revelación de las operaciones porque Ramadan, por la misma naturaleza con que se había concebido la organización de la insurgencia, no sabía qué célula estaría operando ni dónde. La tercera división estaba compuesta por tecnócratas, «doctores, juristas, ingenieros, administradores —aclaró Sadik—, en fin, la gente que dirige el país... las plantas eléctricas, el agua, las depuradoras, los ministerios de Comercio y de Finanzas». Los tecnócratas abandonaron también Bagdad la noche del 7 de abril, dijo Sadik. Las instrucciones de Sadam sobre su paso a la clandestinidad fueron explícitas: «Por separado y en ningún caso dejándose ver juntos».

En opinión de Sadik, el líder iraquí organizó la insurgencia basándose en los métodos de la facción Al Dawa. En 1980, Sadam respondió a un intento de asesinato por parte de Al Dawa contra Tariq Aziz, su primer ministro, ejecutando al ayatolá Muhamad Baqir al Sáder, un líder de Al Dawa que era en aquella época uno de los más destacados chiíes en Irak. (Su sobrino, Muqtada al Sáder, se presentó en 2004 como el principal oponente a la ocupación norteamericana). Además, expulsó del país a treinta mil iraquíes con antepasados iraníes,

muchos de ellos inocentes. Pero fue incapaz de erradicar a Al Dawa y el grupo prosiguió con sus continuos ataques al azar contra la cúpula iraquí. «La facción Al Dawa utilizaba escondrijos y operaba a través de mensajeros —me explicó Sadik—. La comunicación entre las células era inexistente y la seguridad iraquí no tenía ni idea de qué hacer. Nunca habían visto antes una cosa así». Cuando eran capturados, los Dawa poseían poca información que ofrecer y además resistían las torturas más extremas. «No sabían nada. Era un método muy efectivo».

A lo largo de nuestras conversaciones, Sadik me dejó claro que toda la planificación previa de Sadam no era más que uno de los muchos factores de la creciente insurrección. Hubo también miles de nacionalistas iraquíes y líderes religiosos —gente que había luchado contra el régimen de Sadam— que los días posteriores a la caída de Bagdad decidieron resistir la ocupación norteamericana. El enemigo definitivo, me explicó Sadik, fue la ocupación en sí: el fracaso de los norteamericanos en cuanto a comprender a los iraquíes y las tácticas cada vez más duras de los soldados para intentar aplacar la continua violencia. «La gente reaccionaba a lo que veía ante sus ojos», dijo Sadik. Incluso el más normal de los actos de caridad norteamericanos traía consecuencias inesperadas. Por ejemplo, la vigilia del día de Acción de Gracias, en noviembre de 2003, los soldados se presentaron en su barrio inesperadamente, abandonando la seguridad de sus vehículos Humvees para llamar a las puertas y ofrecer pavos asados en cada casa. Es evidente que los soldados iban con buenas intenciones, pero «nadie explicó nada sobre la festividad. Todo el mundo salía y preguntaba: "¿Y esto qué es? ¿Por qué nos dan esto?". Las autoridades no habían hecho nada para prepararnos».

«Así es como lo hacen todo en Bagdad —añadió con exasperación, recordando las caóticas escenas callejeras—. No explican nada».

Ahora sabemos que la Administración Bush decidió a finales de 2001 o principios de 2002 asesinar, capturar o «ha-

cer desaparecer» a los elementos sospechosos de pertenecer a Al Qaeda y otros grupos terroristas, y hacerlo en secreto, sin ninguna formalidad jurídica. Pero a finales de ese año, cuando empecé a escribir para *The New Yorker* sobre la obsesión de Donald Rumsfeld con la «caza del hombre», e incluso a finales de 2003, cuando escribí un segundo artículo sobre el tema, parecía difícil dar crédito a la existencia formal de tales consignas. Yo estaba a punto de comprobarlo, según muestra lo que sigue a continuación, pero no percibí que existiera un plan organizado, de alto secreto, dedicado exclusivamente a eliminar la insurgencia, real o no. Algunos agentes estaban intentando decírmelo desde dentro, pero yo carecía de la historia completa.

En una entrevista de finales de 2002, un agente recién licenciado de las Fuerzas Especiales, un coronel que había servido en grupos de alta estrategia en el Pentágono, me dijo que los civiles que dirigían el Pentágono habían dejado de intentar «evitar la zona oscura». Y prosiguió: «No es ilegal, pero la ética consiste en lo que deberíamos hacer como el país más poderoso de la historia. Los planes de engaño estratégico, los asesinatos masivos llevados a cabo por el ejército... todo eso marcará quiénes somos y en qué queremos convertirnos como nación. Las consecuencias inesperadas pueden ser enormes». Y añadió: «La implantación de una fuerza global de vigilancia para dejar fuera de juego a los enemigos de Estados Unidos no puede ser dirigida por ninguna política de engaño estratégico».

La primera señal de algo nuevo apareció en Yemen.

La «caza del hombre»

En algún momento del domingo 3 de noviembre de 2002, un avión de reconocimiento American Predator, que había despegado de una base en Yibuti, disparó en territorio yemení un misil Hellfire contra un coche. Se creía que el pasajero era un líder de Al Qaeda llamado Qaed Salim Sinan al Harethi.

Un equipo conjunto de los servicios de inteligencia norteamericanos y yemeníes había estado siguiendo la pista de Harethi, y la orden de disparar no fue dada hasta que el coche estuvo aislado, lejos del tráfico (y de cualquier testigo), mientras viajaba por una extensa zona de desierto en la provincia de Marib. Harethi iba en el coche junto con otros cinco hombres. Todos murieron.

La operación suponía un elevado nivel de cooperación técnica y confianza entre norteamericanos y yemeníes. El equipo conjunto, trabajando desde una sala de localización en Yemen (un funcionario yemení diría simplemente que se trataba de un lugar no visible desde el aire), había rastreado durante semanas el teléfono móvil de Harethi, que era consciente del peligro y cambiaba a menudo de teléfono y número; en su cadáver se encontraron cinco teléfonos móviles. Los oficiales yemeníes llegaron a la escena poco después de la explosión (un helicóptero había permanecido a la espera) y retiraron el coche bombardeado. Llevaron los cuerpos a un hospital militar en Saná, la capital de Yemen, donde los norteamericanos recogieron muestras de ADN para su análisis en un laboratorio militar de Estados Unidos.

Al día siguiente, la Administración Bush informó a la prensa de que se había eliminado por primera vez a un miembro de Al Qaeda fuera de Afganistán. Diversos periodistas recibieron además el dato de que Harethi, buscado desde hacía tiempo por su intervención en el bombardeo del *USS Cole* en el puerto de Adén, en el otoño de 2000, estaba en la lista de objetivos de «alto valor» cuya eliminación, por captura o muerte, había ordenado el presidente Bush.

El misil Hellfire apuntaba a Harethi aunque, según informaron los funcionarios yemeníes y norteamericanos, los cinco ocupantes del coche tenían también vínculos terroristas. Cuatro de ellos pertenecían al Ejército Islámico de Adén-Abyan, una secta terrorista relacionada con Al Qaeda, y el quinto había sido identificado como Kamal Derwish, un árabe norteamericano crecido cerca de Buffalo y que, según el FBI, reclutaba musulmanes estadounidenses para instruirlos

en campamentos de Al Qaeda. No había ningún indicio de que los funcionarios norteamericanos o yemeníes supieran de antemano quién acompañaba en el coche a Harethi. Un funcionario yemení me contó que en ningún momento se plantearon bloquear la autopista e intentar capturar a Harethi y sus acompañantes, porque ya había conseguido evadirse en anteriores intentos y porque «se sospechaba que se dirigían hacia un objetivo. —Y añadió—: teniendo en cuenta las experiencias anteriores, éste era el método más efectivo».

Los servicios de inteligencia habían tenido una notable actuación aquel día, pero el funcionario yemení me contó que anteriormente se habían producido dos «errores» que casi provocaron que el blanco fueran dos beduinos inocentes. En un caso, la sala de localización detectó un grupo de beduinos entre cuyas furgonetas de reparto (principal medio de transporte en el desierto) iba al menos un vehículo con una ametralladora instalada. Los norteamericanos estuvieron a punto de dispararle desde el Predator, dijo el yemení, «pero nosotros también teníamos a alguien siguiéndolos y le preguntamos por teléfono: "¿Quiénes son ésos?". Y contestó: "Beduinos. No son de Al Qaeda"».

Y añadió que la operación había proporcionado valiosa información. Por ejemplo, el coche bombardeado tenía matrícula saudí, lo que llevó a los investigadores a creer que Harethi había estado yendo y viniendo por la frontera yemení con Arabia Saudí. Según el funcionario, Harethi habría obtenido fondos de los saudíes, que al parecer no eran los únicos que suministraban dinero en metálico a los terroristas. La última llamada conocida que Harethi realizó, una hora antes de su muerte, fue a un número de los Emiratos Árabes Unidos, un aliado de Estados Unidos del que se sabe también que es un centro de apoyo a extremistas musulmanes. «Reciben mucho dinero de los Emiratos», dijo el funcionario.

La muerte de Harethi representó un dividendo en la batida contra elementos sospechosos de pertenencia a Al Qaeda huidos de Afganistán para instalarse en Arabia Saudí, Yemen,

Somalia y otros países, algo que preocupaba a la inteligencia norteamericana desde la caída de los talibanes. La Administración elogió al Predator por su precisión y por la eficaz utilización de los servicios de inteligencia en el lugar de los hechos. «Tenemos que seguir manteniendo la presión en todos los lugares donde seamos capaces», dijo Paul Wolfowitz en la CNN. El ataque del Predator fue «una operación táctica de mucho éxito».

La operación marcó además una escalada dramática en la guerra contra el terrorismo. Los asesinatos aprobados por el Gobierno habían sido un anatema en Estados Unidos durante más de una generación. En 1975, después de que la CIA revelara sus intenciones de eliminar a Fidel Castro y otros líderes extranjeros hostiles durante los años sesenta, un comité del Senado dirigido por Frank Church llegó a la conclusión de que ese tipo de confabulaciones «violan los preceptos morales fundamentales de nuestra forma de vida [...]. Rechazamos absolutamente cualquier pretensión de que Estados Unidos deba guiar sus acciones siguiendo los estándares de los regímenes totalitarios [...]. Tenemos que defender nuestra democracia, naturalmente. Pero al hacerlo, debemos resistirnos a socavar los valores que estamos defendiendo». En 1976, el presidente Gerald Ford firmó una orden ejecutiva que prohibía el asesinato político, una norma que sigue en vigor.

Sin embargo, durante el año siguiente al 11-S, la Administración Bush llegó a considerar que tener como objetivo y asesinar a miembros de Al Qaeda expeditivamente era una acción militar justificable en un nuevo tipo de guerra que implicaba a organizaciones terroristas internacionales y países inestables. Los abogados del Departamento de Defensa llegaron a la conclusión de que el asesinato de individuos seleccionados no resultaba ilegal bajo la Ley de Poderes de Guerra, siempre y cuando el objetivo fuera «un combatiente de otra nación, un miembro de una guerrilla, un terrorista o alguien perteneciente a una organización cuyas acciones supongan una amenaza para la seguridad de Estados Unidos».

El 22 de julio de 2002, el secretario de Defensa Ronald Rumsfeld redactó una directiva secreta en la que ordenaba al general de la fuerza aérea Charles Holland, el comandante de cuatro estrellas del grupo de Operaciones Especiales, que preparase «un plan para encontrar y gestionar a los miembros de organizaciones terroristas». Añadió: «El objetivo es capturar terroristas para ser interrogados o, en caso de necesidad, eliminarlos, no simplemente arrestarlos conforme a los cauces legales». La «caza del hombre» tendría un alcance global, precisó Rumsfeld, y Holland tendría que abrirse paso entre la burocracia del Pentágono para ordenar su cumplimiento «en minutos y horas, no en días y semanas».

Cuando después de haber obtenido la orden, en diciembre de 2002, pedí a la oficina de Rumsfeld sus comentarios al respecto, me remitieron a la nota de prensa difundida a principios de ese mismo mes en la que el secretario de Defensa respondía a preguntas acerca de la política del Pentágono en cuanto a la utilización del Predator «para asesinar a un miembro de Al Qaeda». Rumsfeld había contestado inicialmente con uno de sus chistes habituales: «Me estoy devanando los sesos para encontrar la forma de no responder a eso». Luego se puso serio y dijo que la política «es todo lo que ustedes saben que es. No tiene ningún misterio. Reclutamos, organizamos, equipamos y desplegamos jóvenes hombres y mujeres, de uniforme, que prestan servicio como miembros de las fuerzas armadas. No están entrenados para realizar lo que designa esa palabra que han utilizado ustedes [asesinato], que ni siquiera repetiré. Están entrenados para servir al país y contribuir a la paz y la estabilidad del mundo».

A pesar de ello, muchos militares y funcionarios de inteligencia, en activo o retirados, expresaron sus reservas ante la política del Pentágono de señalar como objetivo a los miembros de Al Qaeda incluso entonces. Su preocupación tenía menos que ver con la legalidad del proyecto que con su sabiduría, su ética y, por supuesto, su eficacia. Algunas de las críticas más oídas llegaron del seno de las Fuerzas Especiales.

Rumsfeld empezó a quejarse a sus colaboradores de las precauciones del general Holland muy poco después del 11-S. Apenas transcurridos unos días, solicitó a Holland que elaborara una lista de objetivos terroristas para tomar represalias de inmediato. El general regresó dos semanas más tarde con cuatro posibles objetivos: reductos de probables fundamentalistas islámicos en Somalia, Mauritania, Filipinas y la Triple Frontera (el punto donde se encuentran Brasil, Paraguay y Argentina). Pero el militar añadió que no era posible llevar a cabo un ataque inmediato porque, según un asesor de Defensa, el ejército no disponía de «información practicable» sobre los objetivos propuestos. La venganza tendría que esperar hasta que la guerra de Afganistán estuviera en marcha. El secretario de Defensa no quedó satisfecho. Durante los meses siguientes, la «información practicable» se convirtió en una muletilla irónica entre los funcionarios civiles del Pentágono.

Algunos funcionarios vinculados al Estado Mayor Conjunto sostenían que los planes de Rumsfeld convertirían a la más destacadas Fuerzas Especiales (el SEAL de la marina y la Delta Force de la fuerza aérea) y a la unidad clandestina conocida como Gray Fox, en equipos de cazadores asesinos. Estos efectivos se entrenan duramente en un amplio espectro de especialidades, entre ellas el reconocimiento estratégico, la acción directa, la guerra no convencional y las operaciones psicológicas. (En la región del Golfo hay efectivos de Delta Force y Gray Fox). Un asesor de Defensa que ha mantenido estrecha relación con las Fuerzas Especiales dijo: «Existe la preocupación de que el énfasis en esa lista de objetivos las convierta en una fuerza contraterrorista y atrofie sus demás atributos».

«Quieren convertir a estos chicos en asesinos —me comentó un ex jerarca de inteligencia a finales de 2002—. Quieren basarse en rumores, no en hechos, y buscar el efectismo político, y eso es lo que más teme el Mando de las Fuerzas Especiales. Rummy anda pregonando que la política está por encima de la guerra. Necesitamos alejar a los chicos de este efec-

to político, de la creencia de que para llegar a Hitler tienes que matar a Goebbels». Con respecto a Rumsfeld, añadió: «Los militares dicen: "¿Quién es ese tipo?". En lo que se refiere al futuro de las Fuerzas Especiales, hay un choque de voluntades».

Un funcionario de la Administración reconoció que los planes de Rumsfeld para Operaciones Espaciales iban «en contra de la doctrina militar convencional». Rumsfeld jugaba con ventaja, añadió, porque la cúpula del ejército padecía de falta de voluntad. El funcionario destacó que el secretario de Defensa fue capaz de conseguir lo que quería en gran parte porque lo convirtió en un tema personal. «Es el tipo más raro con que me he tropezado en mi vida —observó—. No delega».

En un encuentro con periodistas en septiembre de 2002, Rumsfeld dijo con respecto a la utilización de las acciones preventivas en Irak y otras partes: «A todos nos gustaría la perfección, a todos nos gustaría tener todos los puntos bien atados y envueltos con una cinta». Los norteamericanos, añadió, «quieren pruebas más allá de cualquier duda razonable, quieren estar seguros de saberlo todo antes de castigar a nadie». Pero, continuó, «esto no es un castigo. Tenemos en la cabeza un patrón equivocado y pensamos en castigos. No es así. Esto no es ni venganza ni desquite».

En notas internas del Departamento de Defensa el año anterior al 11-S, Rumsfeld y su entorno presentaban un nuevo enfoque de la guerra contra el terrorismo, un enfoque que se basaría, en parte, en la eliminación de determinados individuos. Los documentos reflejaban su escepticismo hacia los generales y almirantes que dirigían las Fuerzas Armadas. En uno de ellos se leía: «La peor forma de organizarse para la caza de hombres es planificarla desde el Pentágono [...]. Nuestro prerrequisito de perfección para la "información practicable" nos ha paralizado». En otro se le dice a Rumsfeld: «Hemos "sobreplanificado" todas las contingencias [...]. Esto nos niega la agilidad y la sorpresa táctica tan necesarias para la caza de hombres, los secuestros y las incursiones de represalia.

Tenemos que estar dispuestos a aceptar los riesgos de hacerlo según nuestras convicciones».

El documento instaba al secretario de Defensa a «procurar que la cúpula militar comprenda por completo el cambio cultural que se persigue». Los equipos de caza de hombres debían ser «pequeños y ágiles», apuntaba el texto, y «capaces de operar clandestinamente en diversos países mediante un amplio abanico de métodos secretos, ya sean lícitos o ilícitos».

En una rueda de prensa celebrada en septiembre de 2002, un periodista comentó la creciente implicación de los militares en la política y en las actividades de los servicios de inteligencia en el interior de Afganistán, y preguntó a Rumsfeld si la misión seguía siendo perseguir a Al Qaeda. «Bien, nuestras fuerzas armadas no han sido precisamente organizadas, entrenadas y equipadas para practicar la caza de hombres —respondió—. Puede que tengamos que aprender a hacerlo y, de hecho, estamos en ello». Paul Wolfowitz, en una discusión sobre futuras operaciones militares que mantuvo en el transcurso de una entrevista con Bill Keller, publicada en el *New York Times Magazine* aquel mismo mes, anotó también tangencialmente que «a lo mejor en algún momento tendríamos que disponer de una fuerza voluntaria concebida específicamente para misiones distintas a la de defender el país». La idea de Wolfowitz fue matizada por Keller como «lo contrario a los Cuerpos de Pacificación, quiere usted decir».

La eliminación de Harethi en Yemen fue aplaudida por muchos norteamericanos, y también por los medios de comunicación, como un avance en la guerra contra el terrorismo. Sólo hubo algunos rechazos públicos. Anna Lindh, ministra sueca de Exteriores, declaró que aquel episodio, incluso con la aprobación del Yemen, «constituye una ejecución sumaria que viola los derechos humanos. —Y añadió—: incluso los terroristas deben ser tratados con arreglo a las leyes. De lo contrario, cualquier país puede empezar a ejecutar a aquellos que considere terroristas». Amnistía Internacional cues-

tionó también «el asesinato deliberado de sospechosos en lugar de su arresto, en circunstancias en las que no suponían una amenaza inmediata».

Sin embargo, en conversaciones mantenidas a finales de 2002, ni siquiera los juristas norteamericanos que se habían mostrado críticos con esta clase de acciones para perseguir a Al Qaeda pusieron en entredicho su legalidad. «No es una cuestión de leyes —dijo Michael Glennon, profesor de Derecho Internacional en la Universidad Tups—. Es una cuestión de política. ¿Es inteligente? ¿Aumenta este tipo de acciones el riesgo de venganza, en nuestro país y en el extranjero, como consecuencia de la política y el liderazgo militar de Estados Unidos?». Philip Heymann, profesor de Derecho en Harvard, hizo un comentario similar: «No creo que Richard Nixon firmara el tratado que prohibía la guerra biológica sólo porque tenía una profunda aversión a los agentes biológicos —me dijo—. Lo firmó porque tener un montón de enanos corriendo por ahí con agentes biológicos que no podían ser contrarrestados con nuestro arsenal nuclear perjudicaba los intereses de Estados Unidos. Con los terroristas, el asesinato cae dentro del mismo esquema, ya que a ellos no les costaría mucho matar al secretario de Estado o a otro miembro del gabinete». El objetivo norteamericano, añadió, debería ser la prohibición de «cualquier arma que un país pequeño pudiera utilizar contra los grandes». Jeffrey H. Smith, graduado de West Point y asesor de la CIA durante la Administración Clinton, dijo: «No me opongo a disparar a los terroristas, pero tendría que ser el último recurso. Si están muertos no hablan, y de esa manera podemos crear nuevos mártires».

Otros oficiales con los que hablé manifestaron preocupaciones similares. «Tendría que poderse llevar a cabo en cinco o seis meses —dijo un asesor del Pentágono—. En las Fuerzas Especiales hemos creado una cultura, son chicos de veinte o veintiún años que necesitan el liderazgo de un adulto. Suponen que la autoridad legal la tienes tú, y lo harán», esto es, eliminar obedientemente cualquier objetivo que se les asigne.

Pero siempre acaba apareciendo información errónea, añadió, y por eso mueren inocentes. «Y entonces los colgarán». En cuanto a Rumsfeld y su gente, dijo: «Estos tipos quieren abarcar demasiado y se autodestruirán».

Se sabe que, al menos en una ocasión, se cometió un error fatal con un Predator en Afganistán. En febrero de 2002, funcionarios de la CIA y del Mando Central observaron como un Predator, a miles de pies de altitud, captaba imágenes de un hombre muy alto mientras era saludado efusivamente, o así lo parecía, por un pequeño grupo. Rápidamente se llegó a la conclusión de que aquel hombre podía ser Bin Laden y a través de la cadena de mando se solicitó el lanzamiento de un misil Hellfire. Antes de que el permiso fuera concedido transcurrieron varios minutos. Por entonces, el grupo se había dispersado y, poco después, el Predator captó la imagen de quien parecía el hombre alto y dos más saliendo de una zona boscosa. Dispararon el Hellfire, que devastó el lugar y mató a las tres personas... una escena terrible vivamente registrada por las cámaras de infrarrojos del Predator. Posteriormente, los periodistas informaron que las víctimas eran tres lugareños que estaban rastreando los bosques en busca de metal de desecho.

La experiencia previa del ejército con programas de asesinato sugiere algunas de las dificultades implícitas. A finales de la década de 1960, durante la guerra de Vietnam, unidades de las Fuerzas Especiales trabajaron con la CIA en lo que llegó a conocerse como «programa Phoenix». Empezó como algo pequeño: aquellos a quienes se consideraba colaboradores del Vietcong eran sacados de sus cabañas y aniquilados. La elección de los objetivos a capturar o eliminar se basaba en la información que oficiales del ejército survienatmita, informadores y jefes de los poblados proporcionaban a los norteamericanos. Hacia 1970, el programa se había multiplicado: en sólo aquel año fueron eliminados más de ocho mil sospechosos de simpatizar con el comunismo. El mando militar empezó a establecer cotas elevadas de objetivos. Según las estadísticas oficiales de Vietnam del Sur, el «programa Phoenix»

produjo cerca de cuarenta y una mil víctimas entre 1968 y 1972; Estados Unidos contabilizó más de veinte mil en el mismo período. Las investigaciones posteriores determinaron que muchas víctimas se convirtieron en objetivos no por sus convicciones políticas, sino por motivos personales: para vengar una deuda de juego, para solucionar una disputa familiar, etcétera.

«La cosa fue inclinándose en una dirección —me explicó en 1971 Patrick McGarvey, un agente de la CIA relacionado con el «programa Phoenix»—. Me refiero a que no podemos demostrar que alguien dijera: "Muy bien, vamos a salir y a ponernos a matar gente"; sencillamente empezó a suceder». Aquel mismo año, William E. Colby, el funcionario de la CIA que dirigió el programa y que más tarde se convertiría en director de la agencia, explicó al Congreso que los primeros días de la operación habían sido un «período agitado e inestable en el que se hicieron muchas cosas que no deberían haberse hecho».

Un asesor del Pentágono que trabajó estrechamente con el equipo de Rumsfeld defendió enérgicamente su postura a finales de 2002, diciéndome: «Tenemos una cúpula militar de tiempo de paz *clintonizada*. Y ahora estamos en una guerra que no entienden. Lo que Rumsfeld quiere es que combatan de forma distinta, y su estilo hace que resulte irrelevante la forma de entender la guerra que tiene la mayoría de nuestra cúpula militar. Lo que quiere transmitir a la cúpula militar es lo siguiente: "Las respuestas no las tenéis vosotros", y eso, ellos, no quieren escucharlo. El argumento de que Rumsfeld es malvado con los jefes y que los trata mal es, creo, una operación política para hacerle parecer un pistolero».

El objetivo de Rumsfeld al autorizar una lista de terroristas buscados, dijo el asesor, era «evidentemente ir a por la estructura de mando de Al Qaeda». Y continuó: «¿Capturarlos? Lo haríamos de poder hacerlo. Pero imaginemos que hubiéramos aislado un grupo de Al Qaeda en el valle de Bekaa, en el Líbano. Sería complicado capturarlos». Hacerlos prisioneros exigiría efectivos terrestres y una importante ope-

ración aérea; para eliminarlos, sin embargo, basta con un misil Hellfire. En cuanto a las críticas sobre la insistencia de Rumsfeld de tener como blanco a miembros individuales de Al Qaeda, dijo el asesor: «Sé que de esto se ha enterado usted por la Junta de Estado Mayor. Algunos necios de las Fuerzas Especiales también están en contra. Por supuesto que he oído eso de "esto no es norteamericano" entre la cúpula militar. Pero no lo dicen por cuestiones de legalidad, sino porque no quieren hacerlo». Y añadió: «La idea de no querer perseguir al mando de un grupo paramilitar que te ha declarado la guerra es una perversión de tal calibre que resulta pasmosa. El problema de un ejército en tiempo de paz es que sus miembros son incapaces de concebir que tienen que hacer aquello para lo que se les paga. Perseguir a los líderes de Al Qaeda... vaya problemón. ¡Dios mío!».

A principios de 2002, continuó el asesor, Rumsfeld había propuesto que el Mando de Operaciones Especiales se convirtiera en un «mando global» responsable de todas las actividades antiterroristas a nivel mundial. Lejos de aprovechar la oportunidad de ser obediente y «agachar la cabeza», el general Holland, comandante de las Fuerzas Especiales, «no quiso hacerlo». Pero los civiles del Departamento de Defensa estaban convencidos de que «en el Mando de Operaciones Especiales hay unos cuantos oficiales de cuatro estrellas que agacharán la cabeza». El asesor añadió: «Tendremos que soltar una asquerosa bomba atómica para que se den cuenta de lo serio que es todo esto». Lo que se necesitaba, dijo, era reevaluar a todos los generales y almirantes que alcanzaron la cima durante la presidencia de Clinton. «Tenemos que encontrar generales más combativos».

Después del 11 de septiembre, uno de los objetivos de Rumsfeld fue dotar al Pentágono de la capacidad de realizar el tipo de operaciones clandestinas tradicionalmente asignadas a la CIA. Las comunicaciones internas del Pentágono incluían comentarios mordaces sobre los servicios de inteligencia. En una de ellas se instaba al secretario a mantener la

unidad Gray Fox «lejos de las manos» de la CIA. El documento decía: «De todas las organizaciones del Departamento de Defensa, sólo Gray Fox tiene el potencial, si se cultiva, para librar el tipo de guerra que el secretario prevé [...]. Dejemos que los de inteligencia muerdan el anzuelo de Gray Fox y luego controlaremos qué operaciones pueden y no pueden hacer».

Una de las recomendaciones que se le daban a Rumsfeld era la reestructuración de Operaciones Especiales para convertirla en una agencia específica bajo el mando personal del secretario de Defensa. La nueva agencia, que tendría que ser aprobada por el Congreso, recibiría órdenes únicamente del secretario y, en consecuencia, superaría la inercia burocrática interna «para implementar los cambios que usted desea».

A finales de 2002, algunos de los colaboradores de mayor confianza de Rumsfeld habían organizado reuniones privadas con oficiales del ejército y funcionarios de los servicios de inteligencia, retirados y en activo, para discutir la extensión de la guerra contra el terrorismo. «Ahí fuera hay quinientos tipos que tenéis que matar —dijo un ex funcionario de la CIA—. No hay manera de endulzarlo: tenéis que matarlos. Y nunca podréis estar seguros de la información al cien por cien. A veces tendréis que dejarlo en un noventa y cinco por ciento».

La realidad sigue siendo que la acción provoca reacción, y en noviembre de 2002, la escaramuza del Predator en Yemen tuvo sus consecuencias. El Gobierno yemení había planeado retrasar su anuncio para emitir un comunicado conjunto con Washington. Pero cuando la Administración norteamericana, por motivos de calendario electoral, dio a conocer por su cuenta la noticia, los yemeníes se sintieron burlados y se enfadaron. Yahua al Mutawakel, secretario general del Congreso General del Pueblo, el partido en el poder, se quejó amargamente de que la Administración Bush había tenido excesivas prisas en airear su éxito. «Por esta razón es tan difícil cerrar tratos con Estados Unidos —declaró al periódico digital *Christian Science Monitor*—. Por esta razón nos sentimos

poco dispuestos a trabajar con ellos. Nunca tienen en cuenta las circunstancias internas de Yemen».

Unas semanas después, el 29 de noviembre de 2002, una potente explosión sacudió los edificios gubernamentales en la provincia de Marib, informó el *Yemen Times*, enviando un mensaje inequívoco. «Esto es algo más que una explosión —comentó un jeque tribal al periódico—. Es un mensaje de Al Qaeda en el que nos dice: "Estamos aquí y podemos atacar". Esto es muy grave».

Apuntar a la insurgencia

En diciembre de 2003, la Administración Bush había autorizado una importante escalada de la guerra clandestina que las Fuerzas Especiales libraban en Irak. En entrevistas celebradas en noviembre y principios de diciembre, oficiales norteamericanos dijeron que el principal objetivo era los baazistas, a los que se suponía detrás de gran parte de la insurgencia clandestina que luchaba contra las tropas de la coalición. Con efectivos de la Delta Force, el SEAL y grupos operativos paramilitares de la CIA se creó un nueva unidad de Fuerzas Especiales, la Task Force 121, a la que se sumaría más personal en enero de 2004. Su principal prioridad era la neutralización de los elementos del partido Baaz, mediante su captura o asesinato. La revitalización de la misión de las Fuerzas Especiales suponía una victoria política para Rumsfeld, que llevaba dos años luchando por conseguir que la cúpula militar aceptara la estrategia que él denominaba «caza de hombres». Había tenido que reemplazar la mayor parte de la cúpula del Pentágono para salirse con la suya. «Derribar a dos regímenes nos permite hacer cosas extraordinarias», me dijo un asesor del Pentágono en aquel momento, refiriéndose a Afganistán e Irak.

El punto crítico, y en eso coincidían todos, era la información. Había mucho debate sobre si poner en el punto de mira a un número considerable de individuos era una mane-

ra práctica, o políticamente efectiva, de devolver la estabilidad a Irak, teniendo en cuenta los frecuentes fracasos en obtener en ese país información consistente y fiable. Los norteamericanos que se encontraban sobre el terreno esperaban solucionar ese problema procurándose una nueva fuente de información: reclutarían y entrenarían oficiales de los antiguos servicios de inteligencia iraquíes para luego infiltrarlos entre los insurgentes. La idea era que los infiltrados proporcionaran información precisa para que los norteamericanos pudieran afinar la puntería. Un antiguo jefe de puesto de la CIA con el que hablé a finales de noviembre de 2003, describió la estrategia en términos muy sencillos: «Tiradores estadounidenses e inteligencia iraquí. —Y añadió—: hay iraquíes que conocen muy bien el negocio de la inteligencia, y estamos tanteándolos. Tenemos que resucitar la inteligencia iraquí, taparnos la nariz y dejar que los tiradores de Delta y la agencia los saquen de sus escondrijos [a los insurgentes]».

Un ex funcionario de los servicios de inteligencia dijo que penetrar en la cúpula de los baazistas era comparable a «intentar abrir un coco: lo aporreas y lo aporreas hasta que encuentras un punto blando y ya puedes abrirlo limpiamente». Un norteamericano que había asesorado a las autoridades civiles de Bagdad dijo algo similar: «La única manera de ganar es utilizando un estilo nada convencional. Tendremos que jugar con sus reglas. Guerrilla contra guerrilla. Terrorismo contra terrorismo. Tenemos que meterles miedo hasta conseguir su rendición».

En Washington todo el mundo estaba de acuerdo en una cosa: era necesario que Estados Unidos encarase la cuestión de Irak de otra forma. Había también una crítica unánime hacia la tibia respuesta que el ejército estaba dando a la creciente lista de bajas norteamericanas. Un ex funcionario del Pentágono que trabajó en el Mando de las Fuerzas Especiales, y que estaba a favor de la nueva iniciativa, dijo: «Hemos desplegado una colosal fuerza convencional y la tenemos cruzada de brazos, permitiendo que les disparen en el culo. Y eso es contraproducente. Estamos enviándoles señales confusas».

El problema en la forma en que Estados Unidos ha combatido la cúpula baazista radica en que «no disponemos de suficiente información y somos demasiado remilgados para operar en esa zona del mundo».

Refiriéndose al ataque norteamericano contra un lugar sospechoso de albergar un arsenal de morteros, el antiguo funcionario dijo: «En lugar de destruir un campo de fútbol vacío, ¿por qué no me sorprendéis infiltrándoos en un grupo de francotiradores y matándolos mientras preparan su mortero? Necesitamos dar una respuesta menos convencional, pero no será fácil».

Por entonces, en el Pentágono se tenía asumido que con sólo encontrar o matar a Sadam y su círculo inmediato —los naipes de aquella famosa baraja— no se acabaría con la insurgencia. La nueva operación de las Fuerzas Especiales apuntaba, en cambio, a la amplia base de baazistas clandestinos. Pero muchos de los funcionarios con los que hablé se mostraron escépticos con respecto a los planes de la Administración. Varios temían que la operación propuesta —denominada «caza de hombres preventiva» por un asesor del Pentágono— podía acabar convirtiéndose en otro «programa Phoenix». Algunas voces advirtieron que el problema de cazar cabezas es que tienes que estar seguro de «estar cazando las cabezas correctas». Hablando de los ahora cooperadores ex funcionarios de los servicios de inteligencia iraquíes, un ex oficial de las Fuerzas Especiales dijo: «Estos tipos van a lo suyo. ¿Estarán dando salida a sus propios rencores? Cuando te sirves de elementos del país invadido es difícil impedir que se guíen por sus propias motivaciones. Tienes que controlarlos muy de cerca».

Y añadió que al parecer la cúpula baazista se basa en los «contactos cara a cara» para la preparación de sus ataques. Esto hace a los insurgentes menos vulnerables a los Gray Fox, especializados en la interceptación de comunicaciones y otros medios técnicos de recopilación de información. «Estos tipos son demasiado listos para servirse de teléfo-

nos móviles o radios —dijo—. El éxito o el fracaso dependerá de la inteligencia humana».

Un funcionario de la CIA con amplia experiencia en Oriente Próximo dijo que uno de los principales jugadores del nuevo equipo norteamericano-iraquí a finales de 2003 era Faruq Hijazi, un incondicional de Sadam que sirvió durante años como director de operaciones externas de la temida Mujabarat. Había permanecido en custodia desde finales de abril. El hombre de la CIA dijo que en los meses anteriores, Hijazi había «cerrado un trato» y que los norteamericanos estaban «utilizándole para reactivar la vieja red de la inteligencia iraquí». Y añadió: «Mis fuentes iraquíes dicen que cumplirá con su parte del trato, pero sólo sobre el papel, no de espíritu». Dijo que a pesar de que la Mujabarat era un buen servicio de seguridad, capaz, nada menos, de proteger a Sadam Husein del derrocamiento o el asesinato, era «malísima como servicio de inteligencia». Y concluyó con este comentario: «No es que nosotros acostumbremos a jugar así, pero las cosas cambian cuando ves caer a tus hombres. Antes nos comportamos como norteamericanos, como buenos chicos. Ahora seremos los malos, y ser chicos malos funciona».

Cuando le di a conocer estos comentarios al asesor del Pentágono, un experto en guerra no convencional me expresó su consternación: «Hay gente que opina todo tipo de animaladas sobre la caza de hombres, pero afortunadamente no están situados en un nivel político. Ésta no es una política sin restricciones, y no debería serlo. Yo soy más duro que nadie, pero no debemos olvidar que somos una sociedad democrática y no combatimos el terror con terror. Eso sí, habrá muchos controles estrictos, esto se puede hacer y esto no, y reglas de compromiso». Y concluyó: «El problema está en que no nos hemos infiltrado entre los malos. El partido Baaz está dirigido como un sistema de células. Es como infiltrarse en el Vietcong, cosa que nunca conseguimos».

Stephen Cambone, subsecretario de Defensa para Inteligencia, cuya estrella brillaba en el Pentágono de Rumsfeld

a finales de 2003, estuvo plenamente implicado en el desarrollo de la nueva misión de las Fuerzas Especiales. Cambone compartía los puntos de vista de Rumsfeld sobre cómo combatir el terrorismo. Ambos creían que Estados Unidos necesitaba mostrarse mucho más activo en la lucha antiterrorista, perseguir a los líderes terroristas por todo el mundo y eliminarlos. Y ambos se habían sentido frustrados por el rechazo de la cúpula militar a aceptar la «caza del hombre». Desde su nombramiento había bregado por conseguir autoridad operacional sobre las Fuerzas Especiales. «Rumsfeld buscaba a alguien que le diese todas las respuestas, y ese chico era Steve —me dijo un ex alto funcionario del Pentágono—. Es quien tiene un acceso más directo a Rummy».

Uno de los principales estrategas de la «caza de hombres» que se encomendaría a las Fuerzas Especiales fue el general Boykin, asistente militar de Cambone. Después de una reunión con Rumsfeld a principios de ese verano —se reunieron «como dos viejos guerreros», dijo el asesor del Pentágono—, Boykin pospuso su jubilación, que tenía prevista para junio, y aceptó el puesto en el Pentágono, que le aportó una tercera estrella. En ese puesto, Boykin se convirtió en «una pieza importante» de la escalada planeada. En octubre de 2003, *Los Angeles Times* informó que Boykin, dando sermones dominicales a la congregación de su iglesia vestido de uniforme, había equiparado repetidamente al mundo musulmán con Satán. En junio, según el periódico, ante una congregación en Oregón había dicho: «Satán quiere destruir esta nación, quiere destruirnos como nación y quiere destruirnos como ejército cristiano», y elogiado a Bush como un «hombre que reza en el Despacho Oval» y que no ha sido «elegido» presidente sino «designado por Dios». El mundo musulmán odia a Norteamérica, remachó, «porque somos una nación de creyentes».

Hubo llamadas a la prensa y desde el Congreso solicitando la destitución de Boykin, pero Rumsfeld dejó claro que lo mantendría en el puesto. Respecto al reportaje del *Los Angeles Times*, respondió elogiando el «sobresaliente historial» del general y diciendo a los periodistas que ni había leído el

texto con las palabras de Boykin, ni visto la grabación de uno de sus sermones. «La gente dice muchas cosas en el ejército, en la vida civil, en el Congreso, en el mundo empresarial, y no son más que sus opiniones —dijo—. Somos un pueblo libre, y eso es lo más maravilloso de nuestro país. —Y añadió, refiriéndose a la grabación—: no puedo comentar sus palabras porque no la he visto». Cuatro días después, Rumsfeld declaró que había visto la grabación. «Contiene muchas palabras difíciles de discernir y el subtitulado no se distingue con claridad —dijo en una conferencia de prensa, según la transcripción oficial—. De modo que me considero un neófito [la transcripción destaca que en ese momento "ríe entre dientes"] respecto a lo que dijo exactamente». Los comentarios de Boykin fueron remitidos a la oficina del Inspector General del Pentágono para su revisión; en agosto de 2004, según el *Washington Post*, estaba todavía pendiente de publicación un informe, inicialmente prometido para abril.

Boykin se ha visto implicado también en otras controversias. Fue el comandante del ejército de tierra en Mogadiscio, en 1993, cuando dieciocho norteamericanos fueron abatidos durante la desastrosa misión que luego Mark Bowden describiría en su libro *Black Hawk derribado*. Al principio de aquel año, Boykin, coronel por entonces, mandaba una pequeña unidad Delta integrada por ocho hombres que fue asignada para colaborar con la policía colombiana en el seguimiento del célebre narcotraficante Pablo Escobar. Boykin recibió prohibición expresa de intervenir en acciones directas sin autorización previa, pero hubo sospechas de que, con el apoyo de algunos funcionarios de la embajada estadounidense, planeaba participar en el asesinato de Escobar. El libro *Matar a Pablo Escobar*, también de Mark Bowden, describe cómo en el Pentágono acabaron convencidos de que Boykin, con el conocimiento de sus superiores de las Fuerzas Especiales, se había excedido en su misión y quebrantado la ley. Pidieron la retirada de su unidad, pero no ocurrió así. Escobar fue abatido en el tejado de un edificio de un barrio de Medellín. La policía colombiana recibió todo el mérito pero,

según escribe Bowden, «en el seno de la comunidad de las operaciones especiales [...] la muerte de Pablo fue considerada una exitosa misión de Delta y la leyenda dice que sus agentes estuvieron presentes en el tiroteo».

«A eso se dedicaban estos chicos —me explicó el general retirado que controlaba las actividades de Boykin en Colombia—. He visto fotografías del cadáver de Escobar que no se obtienen con un objetivo telescópico de largo alcance. Fueron tomadas por los miembros del equipo asaltante». (Ni la Casa Blanca, ni el Departamento de Estado ni el Pentágono, incluyendo al general Boykin, respondieron a mis solicitudes de comentarios). Morris Busby, embajador de Estados Unidos en Colombia en 1993 y actualmente jubilado, defendió con convicción a Boykin. «Conozco a Jerry Boykin y siento el mayor respeto hacia él. Lo conozco desde hace quince años y he pasado horas y horas con ese chico, y nunca escuché ninguna mención religiosa o de Dios». También lo elogió como «uno de esos chicos que te encantaría tener en una guerra porque no teme morir». Pero, añadió, «una vez que tienes tres estrellas, has de pensar en lo que estás haciendo». Refiriéndose a Boykin y los demás implicados en la planificación de las Fuerzas Especiales, añadió: «A estos chicos los va a matar un puñado de gente y luego les darán un puñado de medallas».

Otro de los pasos que dio el Pentágono para combatir la insurgencia iraquí fue buscar la colaboración activa y secreta de Israel, el aliado más próximo de Estados Unidos en Oriente Próximo. Según funcionarios de los servicios de inteligencia de ambos países, comandos y unidades de inteligencia israelíes han estado trabajando estrechamente con sus colegas norteamericanos en la base de las Fuerzas Especiales en Fort Bragg (Carolina del Norte), así como en Israel, preparándose para realizar operaciones en Irak. Se esperaba que los comandos israelíes actuaran a modo de asesores en misiones especiales (en secreto, naturalmente) una vez que se iniciaran las operaciones sobre el terreno. (Ni el Pentágono ni la di-

plomacia israelí accedieron a hacer comentarios). «Nadie quiere hablar de esto —me dijo un funcionario israelí a finales de 2003—. Es una cuestión muy espinosa. Ambos Gobiernos han decidido al más alto nivel que lo mejor para sus intereses es no llamar la atención respecto a la cooperación entre Estados Unidos e Israel en el tema Irak».

La conexión norteamericana-israelí en Irak equivalió a un cursillo sobre cómo desmantelar una insurgencia. Un ex funcionario de la inteligencia militar israelí resumió de la siguiente manera el tema de la lección principal: «Cómo eliminar objetivos fijos, cuestión muy relevante para el éxito de la guerra, y qué tendrá que hacer Estados Unidos para conseguirlo». Me dijo que se había instado a los norteamericanos a emular las pequeñas unidades de comando israelíes, las Mistaravim, que operan clandestinamente en Cisjordania y la Franja de Gaza. «Su eficacia es muy alta», explicó. Desde el punto de vista israelí, añadió, las unidades de las Fuerzas Especiales deben aprender «a mantener una red de informadores». Una red de este tipo, dijo, es lo que ha hecho posible que Israel se infiltre en las organizaciones de Cisjordania y Gaza controladas por grupos como Hamás, y eliminar o capturar a potenciales terroristas suicidas junto con gente que los recluta y entrena. Por otro lado, «Israel, en muchos sentidos, ha tenido un éxito tan sobresaliente y ha eliminado o capturado a tantos mandos intermedios que Hamás está ahora formada principalmente por células aisladas que atentan contra Israel por cuenta propia. No existe ningún control centralizado sobre la mayoría de estos suicidas. Estamos intentando explicarles a los norteamericanos que no se empeñen en eliminar el centro de todo. La clave está en que no haya gente que actúe por su cuenta».

Muchos expertos estaban convencidos de que los baazistas seguían al mando de la insurgencia, aunque creían que tenían escasa conexión directa con Sadam Husein. Un analista militar norteamericano que trabaja en Bagdad con la Autoridad Provisional dirigida por la coalición, me dijo que en diciembre de 2003 había llegado a la conclusión de que «los car-

gos intermedios del partido Baaz, antes amordazados por la naturaleza rígidamente jerarquizada del régimen de Sadam, ahora controlaban la insurgencia gracias a la desaparición de los cargos más elevados». Añadió que después de la invasión y de varias semanas de confusión, los baazistas habían conseguido reorganizarse y estaban dirigiendo operaciones contra la coalición. Durante una entrevista en Washington a finales de 2003 —unas semanas antes de la captura de Sadam el 14 de diciembre—, un diplomático árabe me dijo: «No creemos que la resistencia sea leal a Sadam. Los baazistas no se han reorganizado por razones políticas, sino debido a la terrible decisión tomada por Bremer. Lo que quieren en realidad los iraquíes es haceros pagar por todo esto. Matar a Sadam no acabará con la insurgencia».

De modo parecido, un hombre de negocios de Oriente Próximo que había asesorado a la Administración Bush, me dijo que el reorganizado partido Baaz era «extremadamente activo, trabaja clandestinamente y mantiene comunicaciones internas permanentes. Y todo eso sin Sadam».

Había desacuerdo, inevitablemente, en cuanto al alcance del control baazista sobre la insurgencia. El ex funcionario de la inteligencia militar israelí dijo: «La mayoría de las armas las proporcionan los baazistas, porque ellos saben dónde están almacenadas. Pero gran parte de los que las disparan son elementos tribales. Irak está actualmente lleno de facciones, y estas facciones aumentan entre la comunidad suní». Y añadió: «A menos que ustedes arreglen esto, cualquier esfuerzo de reconstrucción en el centro será inútil».

El analista militar norteamericano coincidió en que, incluso entonces, el énfasis puesto sobre el control baazista no dejaba ver «el aspecto nacionalista y tribal» de la insurgencia. Por ejemplo, dijo, los insurgentes en Faluya, uno de los principales centros de revulsión, estaban «dirigidos principalmente por los jeques y las mezquitas, por el islam, los imanes y el nacionalismo». En la región, continuó, hay «miles de antiguos oficiales del ejército y reclutas desempleados que pasan las horas en las cafeterías y los restaurantes de sus parientes; ma-

quinan, planifican y dan y reciben instrucciones; de noche, salen a realizar sus misiones».

Este analista militar, como muchos funcionarios con quienes hablé, se cuestionaba las tácticas militares convencionales (el agresivo programa que estaba en marcha en aquel momento, cuyo nombre en clave era «Martillo de Hierro», consistía en bombardeos, incursiones nocturnas y arrestos masivos en los puntos más conflictivos de la zona central de Irak, dominada por los suníes). Los insurgentes, me dijo, habían desarrollado rápidamente una respuesta a todo eso. «Su *modus operandi* consiste en alejarse, incluso en desplazarse a otras ciudades, para que las represalias no caigan sobre su localidad. Pero los norteamericanos la toman con la ciudad donde el incidente ha ocurrido y con ello sólo consiguen crearse más enemigos».

Los descarados ataques sobre dos convoyes norteamericanos en Samarra, el 30 de noviembre, proporcionaron más pruebas sobre la diversidad de la insurgencia. Samarra había sido una localidad con intensos sentimientos contra Sadam, según Ahmed S. Hashim, experto en terrorismo y profesor de Estudios Estratégicos en el US Naval War College. En un ensayo publicado el anterior mes de agosto por el Middle East Institute, Hashim escribía: «Muchos nativos de Samarra, que sirvieron con distinción en el partido Baaz y en las fuerzas armadas, fueron liquidados o ejecutados durante las tres décadas de Gobierno de Sadam y sus compinches de la ciudad rival de Tikrit». El profesor escribió también: «El tipo de fuerza que Estados Unidos tiene desplegada (tanques pesados y unidades mecanizadas) y la baja disposición psicológica de los efectivos que llevan meses en Irak no favorecen el éxito contra la insurgencia».

Un asesor de las Fuerzas Especiales me dijo que las luchas internas entre los diversos mandos habían dificultado que las unidades estuvieran alerta para aprovechar de inmediato cualquier información en la que el factor tiempo fuese crucial. Después de soportar repetidas críticas por parte de Rumsfeld por su rechazo a autorizar operaciones de comandos sin

disponer previamente de información concreta o «practicable», el general Holland se retiró en noviembre de 2003. Rumsfeld realizó asimismo un esfuerzo sistemático para designar en puestos militares destacados a funcionarios que habían trabajado estrechamente con las Fuerzas Especiales. Un antiguo comandante de estas fuerzas, el general Peter Schoomaker, abandonó su retiro en julio y fue nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército. Thomas O'Connell, veterano del ejército que había trabajado en el «programa Phoenix» en Vietnam y que a principios de los ochenta mandó los Gray Fox, se convirtió en el subsecretario civil para operaciones especiales del Pentágono. A principios de noviembre de 2003, el *New York Times* informó de la existencia de la Task Force 121 y dijo que estaba autorizada a emprender acciones en toda la región para encontrar a Sadam, Bin Laden y otros terroristas. (La operación estaba al mando del general Lyle Koening, un experimentado piloto de helicóptero de las Fuerzas Especiales que fue sustituido en la primavera de 2004 por el vicealmirante William McRaven, que había sido recientemente miembro del Consejo de Seguridad Nacional). En aquel momento, me dijo el asesor, los soldados seguían todavía «persiguiendo los naipes de la baraja. Su trabajo consistía en encontrar a Sadam, y punto». Otras Fuerzas Especiales, éstas en Afganistán, estaban ocupadas apuntando hacia lo que se conoce como AQSL (Lista de Líderes de Al Qaeda).

La búsqueda de Sadam fue, desde el principio, desalentadora. «El círculo de alto nivel que rodeaba a Sadam eran los *murafaquin*, sus compañeros más leales, y si por ellos fuera, seguirían a su lado perfectamente», me explicó a finales de 2003 Scout Ritter, antiguo inspector de armas que, de 1994 a 1998, había dirigido una unidad especial de la ONU que realizó escuchas clandestinas de las conferencias telefónicas privadas de Sadam. «Pero ahora se han trasladado a las tribus. Sadam ha ordenado a sus mejores hombres que regresen a sus tribus, y no sabemos dónde están ni cómo encontrarlos. No hay ningún indicio, nada, lo han destruido todo». Y añadió: «Un tipo como Faruq Hijazi podría llevarnos has-

ta algunas células del partido Baaz, y sabe dónde se encuentran algunos miembros de los servicios de inteligencia. Pero no puede conducirnos a la jerarquía tribal». Las Fuerzas Especiales, en cualquier caso, reajustaron rápidamente la mira y pasaron de la caza de Sadam a la cada vez más extendida guerra de guerrillas.

Entretanto, en el seno de la Administración se producía un debate en torno a información norteamericana e israelí que sugería que el Gobierno de Irán, dominado por los chiíes, podría estar colaborando activamente con la insurgencia iraquí liderada por los suníes. «Tirando de las cuerdas de la marioneta», como lo expresó un ex funcionario de inteligencia. Muchos miembros de estos servicios se mostraban escépticos con respecto a este análisis (el asesor del Pentágono lo comparó con el «asunto Chalabi», refiriéndose a la información desacreditada que antes de la guerra habían proporcionado desertores iraquíes sobre armas de destrucción masiva). Pero aquel invierno, diversos funcionarios me dijeron que la cúpula civil del Departamento de Defensa consideraba altamente improbable la veracidad de la información. Un ex funcionario de inteligencia dijo que una de las posibles respuestas que se planteaba en aquellos momentos era que Estados Unidos entrenara y equipara una fuerza iraquí capaz de realizar incursiones al otro lado de la frontera. El objetivo, dijo, era «encarecer hasta tal punto el coste de apoyar a los baazistas, que los iraníes tuviesen que acabar replegándose. Si la cosa adquiriese visos de otra guerra Irán-Irak, entonces sería otro asunto».

La exigencia de que las Fuerzas Especiales operaran en secreto, me dijo un ex asesor de la coalición en Bagdad, proporcionó un incentivo adicional para aumentar su presencia en Irak. Los miembros de estas fuerzas que se encuentran en el país no suelen incluirse en el inventario de los efectivos. Bush y Rumsfeld insistían en que no era necesario desplazar más soldados, pero muchos altos mandos militares criticaban esta postura en conversaciones privadas. «Se necesita más gente —me dijo el ex asesor, un almirante retirado—. Pero como

no es posible porque Rummy ha tomado una postura, se sacan de la manga una fuerza que no está contabilizada».

Actualmente no existe ley alguna que exija al presidente notificar previamente al Congreso una misión de las Fuerzas Especiales en el extranjero. Estas fuerzas han aumentado notablemente durante la Administración Bush. El presupuesto para 2004 del Pentágono cuenta con más de seis mil quinientos millones de dólares para sus actividades (un treinta y cuatro por ciento de incremento con respecto a 2003). Un estudio llevado a cabo en el Congreso en agosto de 2003, contabilizó en cuarenta y siete mil el número de integrantes de las Fuerzas Especiales en activo y en la reserva, y sugirió que los correspondientes comités del Congreso y el Senado deberían debatir «el papel, en términos generales», de las Fuerzas Especiales en la guerra global contra el terrorismo. En una conversación a finales de 2003, un ex funcionario de inteligencia describió las unidades Delta y SEAL como «multiplicadores de fuerza»: pequeñas unidades capaces de realizar el trabajo de unidades mucho mayores y que, como consecuencia, aumentan el poder de la operación en su totalidad. Reconoció además implícitamente que tales operaciones serían cada vez más habituales; cuando las Fuerzas Especiales disparan a los baazistas, dijo, «no es técnicamente un asesinato, sino una operación normal de combate».

El secretismo y las esperanzas eran las características del Pentágono de Rumsfeld, me comentó un funcionario del mismo en la primavera de 2004. «Siempre quieren retrasar la comunicación de malas noticias, con la esperanza de que ocurra algo bueno», dijo. La costumbre de dar largas a las malas noticias condujo a desconexiones entre Rumsfeld y los oficiales que planificaban las necesidades de efectivos en Irak. Hacia mediados de 2003, cuando se hizo evidente que el ejército necesitaría más unidades de la reserva para hacer frente a la insurgencia, el funcionario me dijo: «Teníamos órdenes de llamada a filas que habían estado varadas treinta o cuarenta días en las dependencias del Departamento de Defensa».

El equipo de Rumsfeld parecía esperar constantemente que algo sucediera para que el problema se solucionase por sí solo, sin necesidad de tropas adicionales. «Esperaban no tener que tomar una decisión». El retraso significó que los soldados de algunas unidades a punto de embarcar dispusieran sólo de unos días para preparar testamentos y ocuparse de otros temas familiares y económicos.

La misma indiferencia deliberada frente a las malas noticias quedó patente aquel año, dijo el funcionario del Pentágono, cuando el ejército efectuó una serie de juegos de guerra sofisticados. Los estrategas tenían que presentar escenarios favorables, normales y poco favorables para así evaluar hacia dónde iba la guerra y estimar las necesidades futuras. En todos los casos, el número de soldados requerido excedía el análisis del escenario menos favorable. A pesar de ello, el Estado Mayor Conjunto y la cúpula política del Pentágono siguieron insistiendo en que la planificación del futuro debía basarse en el escenario más optimista. «En aquel momento —mediados de 2004— la estimación optimista era que en Irak sólo se necesitarían unas pocas brigadas —dijo el funcionario del Pentágono—. Ahora hay casi veinte y la coalición empieza a agotarse. Estaban terriblemente desfasados. Desde el principio el ejército insistió en que las proyecciones y las estimaciones no eran realistas». Ahora, concluyó, «estamos luchando por mantener ciento treinta y cinco mil efectivos y permitir a los soldados que disfruten del necesario descanso cuando vuelven a casa».

Ninguna de las maquinaciones de la Administración Bush con las operaciones y las fuerzas secretas pudieron evitar que Irak se precipitase hacia el caos, con la insurgencia aumentando sin cesar durante la primera mitad de 2004. A finales de junio, cuando Estados Unidos, a través de la Autoridad Provisional, devolvió formalmente la soberanía —por pequeña que fuera— a los iraquíes, el estado de ánimo reinante era de pesimismo. Muchos iraquíes ricos y sus familias se marchaban de Bagdad anticipando la continuación, y quizá el aumento, de los ataques suicidas y los bombardeos terroristas.

«Veremos marcharse a cristianos, chiíes y suníes —vaticinó Michel Samaha, ministro de Información libanés—. Lo que está haciendo la resistencia es apuntar a la pobre gente que trabaja en la burocracia, a los que no pueden permitirse pagar guardias de seguridad privados. Hace un mes, unos amigos míos terratenientes iraquíes se desplazaron a Bagdad por cuestiones de negocios. El coste de su seguridad diaria rondó los doce mil dólares».

Whitley Bruner, un funcionario de inteligencia retirado que participó en las operaciones de la CIA en Irak hace una década, me dijo que el nuevo Gobierno provisional estaba buscando con urgencia maneras de proporcionar medidas de seguridad asequibles a funcionarios de segundo nivel —los hombres y las mujeres que hacen funcionar el Gobierno—. A principios de ese mes, dos de dichos funcionarios —Kamal Jarrah, del Ministerio de Educación, y Basam Salih Kubba, del Ministerio de Exteriores— eran abatidos al salir de sus casas por francotiradores no identificados. «Va a ser un verano caliente —dijo Bruner en junio, al regreso de un viaje a Bagdad—. Mucha gente ha decidido marcharse a Líbano, Jordania o el Golfo, y esperar fuera a que esto acabe».

Capítulo VII

Un amigo más peligroso

La apuesta sobre Musharraf

Hay unas cuantas cosas importantes que se deben saber sobre Pakistán. Es una potencia nuclear que acoge a algunos de los activistas islámicos antiamericanos más entregados y potencialmente desestabilizadores del mundo. Y su presidente, el general Pervez Musharraf, está considerado por la Administración Bush un aliado indispensable y fiel en la guerra contra el terrorismo: alguien dispuesto a emprenderla contra los mulás. La realidad es que Musharraf, que llegó al poder en 1999 mediante un golpe de Estado incruento contra el Gobierno electo de Pakistán, ha estado expandiendo constantemente su autoridad sobre una población, un ejército y unos servicios de inteligencia que no confían en él o que no lo apoyan plenamente. En diciembre de 2003 sobrevivió por los pelos a dos intentos de asesinato. El peligro más grave para Musharraf viene de dentro: muchos de sus problemas políticos parten de la percepción de que es un hombre de Bush. Después del 11-S proporcionó al consumidor norteamericano un discurso duro contra el terrorismo, pero hizo mucho menos en casa.

La duplicidad de Musharraf fue asumida sin rechistar por Washington: la Administración creía tener pocas alternativas. El resultado es que una política exterior miope está sirviendo para mantener en el poder a un hombre cercano al despotismo y haciendo muy poco, si es que hace algo, para mejorar la vida diaria del pueblo paquistaní y, como consecuencia, alen-

tando las condiciones que generan más terroristas. Desde el 11-S he escrito varias veces sobre Pakistán, la más reciente en marzo de 2004, y la constante del régimen de Musharraf ha sido su inconstancia. El sur de Asia sigue en peligro.

A finales de octubre de 2001, la caza de Bin Laden y Al Qaeda a la que se había entregado la Administración Bush evolucionó hacia una crisis regional que puso en riesgo el arsenal nuclear paquistaní, agudizó la inestabilidad del Gobierno de Musharraf e incrementó la posibilidad de un conflicto nuclear entre Pakistán y la India. A medida que la campaña aérea norteamericana en Afganistán producía más bajas civiles, la presión política sobre Musharraf se intensificaba: externamente con manifestaciones en las calles de Islamabad, Quetta, Peshawar y otras ciudades, lideradas por los fundamentalistas, e internamente por parte de miembros de su propio ejército y de sus influyentes Inter-Servicios de Inteligencia (ISI). Estas inesperadas consecuencias de la decisión del presidente Bush de librar batalla contra el Gobierno talibán generaron graves desavenencias entre los servicios de inteligencia, los diplomáticos expertos en el sureste asiático y la cúpula de la Administración.

Un diplomático paquistaní con quien hablé en aquella época reconoció que la situación era «explosiva». Gran parte de la preocupación provenía de la decisión de la Administración Reagan de financiar muchos de los actuales líderes talibanes en su exitosa guerra contra el invasor soviético. Pakistán era el principal conducto para el apoyo norteamericano. «Hubo un momento en que era un juego a tres bandas —dijo el diplomático—. La CIA, el ISI y los muyaidines estaban creando estos Frankenstein [los talibanes]. Ahora la CIA se ha retirado, pero es imposible destruir totalmente a los Frankenstein».

La Administración Bush consideraba que la amenaza para Musharraf era peligrosa pero manejable. «Al principio sentí preocupación —me comentó un estratega militar a finales de 2001—, pero Musharraf había hecho un buen trabajo. Ha-

bía metido en un cofre a los partidarios de la línea dura y los tenía encerrados bajo llave». El oficial se refería a la decisión de Musharraf, tomada el mismo día en que se inició la guerra aérea, de forzar la dimisión o la reubicación de un grupo de oficiales del ejército y funcionarios de los servicios de inteligencia que consideraba de poca confianza. «Nadie irá contra Musharraf a menos que se produzca un levantamiento en las calles —me dijo otro diplomático paquistaní—. Y la forma de prevenir el levantamiento es dejando de bombardear objetivos civiles».

Un ex diplomático paquistaní con quien hablé poco después disentía de la convicción de que Musharraf hubiese solucionado el conflicto de la lealtad sustituyendo a los altos mandos por oficiales menos ideologizados. «Obligar a dimitir a los dos o tres más destacados no significa nada —dijo—. La filosofía sigue ahí. El ISI es un gobierno en paralelo por sí solo. Si pasáramos lista a sus funcionarios, veríamos que prácticamente todos sus miembros dirían, con respecto a los talibanes, "ésos son mis chicos"».

Otros funcionarios con quienes hablé sospechaban que Musharraf pretendía aplacar a los fundamentalistas haciendo la vista gorda ante los ataques terroristas, supuestamente patrocinados por el ISI, sobre objetivos hindúes en la conflictiva región de Cachemira, dominada por India pero con una población mayoritariamente musulmana, un conflicto de elevada carga emocional para los fundamentalistas del ISI y los talibanes. (Los talibanes y Al Qaeda han declarado que uno de sus principales objetivos es la eliminación de la presencia hindú en Cachemira). Un ex funcionario del Gobierno que había tenido conocimiento directo de la situación, dijo: «La Administración Bush está tan centrada en el blanco y el objetivo que pierde su visión periférica. Si derrocan a Musharraf mediante un golpe de Estado, o si teme que le derroquen, o si, como precio por no ser derrocado, da permiso al ISI para estrangular a Cachemira, será muy peligroso».

El dilema de la Casa Blanca quedó claramente expuesto en un discurso pronunciado el 22 de noviembre de 2001

por el senador Joseph R. Biden, Jr., demócrata y, por entonces, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. «El presidente no ha sido tan franco como voy a serlo yo —dijo en una reunión del Comité—. Cabe la posibilidad de que Pakistán y Musharraf se derrumben. Si ése fuera el caso, nos encontraríamos con muchas más fuerzas hostiles en la región que las que tenemos ahora». Refiriéndose a la guerra en Afganistán, en pleno auge en aquel momento, Biden preguntó retóricamente: «¿Cuánto tiempo más continuarán los bombardeos? Porque en el mundo musulmán vamos a pagar un precio cada vez más alto. Vamos a pagar un precio cada vez más alto en aquella región. Y eso hará más difícil la gestión de nuestra "victoria" [...]. Espero por Dios que acabe más pronto que tarde». Dedicó también estas palabras al régimen de Musharraf: «Tenemos que dejar claro a los paquistaníes lo siguiente: que a pesar de lo mucho que los necesitamos ahora, si piensan seguir fomentando el terrorismo en Cachemira, estarán obrando contra sus propios intereses a corto plazo, porque esa víbora puede volverse contra ellos».

Biden se acercó más que ningún otro demócrata desde el 11-S a la crítica abierta de las intenciones de guerra del presidente Bush. La Casa Blanca no tenía una respuesta concreta, pero su portavoz, Dennis Hastert, un republicano de Illinois, calificó el escepticismo público de Biden de «completamente irresponsable». En unas declaraciones dijo que «el pueblo norteamericano quiere que llevemos estos terroristas ante la justicia. No quiere comentarios que sirvan para aportar consuelo a nuestros enemigos».

Simultáneamente, algunos de los expertos en el sureste asiático más veteranos del Gobierno dudaban sobre la capacidad de Musharraf para mantener el control sobre el ejército y mostraban una preocupación muy concreta: ¿quién controlaría el arsenal nuclear de Pakistán si se producía un golpe de Estado? Había también el temor de que un grupo de funcionarios fundamentalistas intentara apoderarse de una cabeza nuclear.

Pakistán tiene la bomba desde 1987, cuando sus laboratorios nucleares lograron fabricar con éxito una cabeza nuclear. El doctor Abdul Qadeer Khan, gestor del programa paquistaní de uranio enriquecido, es reverenciado hoy en día por sus compatriotas como el padre de su bomba. Khan había dedicado más de una década a establecer en Europa una red de contactos que le permitió obtener las centrifugadoras de gas necesarias para producir uranio con la calidad necesaria. El programa de Khan era de alto secreto, aunque no para la CIA, cuyos agentes proporcionaron a la Administración Reagan profusos y exactos informes durante los años ochenta. Pakistán era entonces el más importante aliado de Estados Unidos en la lucha para expulsar a la Unión Soviética de Afganistán, y la Casa Blanca decidió no actuar. En 1989, aun sabiendo que mentía, Bush padre aseguró al Congreso que Pakistán no poseía el arma nuclear para así conseguir la aprobación de apoyo militar para ese país. La proliferación nuclear y un mercado negro nuclear eran problemas secundarios. En 1998 Pakistán probó con éxito su dispositivo nuclear, proclamado como la primera bomba atómica del mundo islámico. Se estima que en la actualidad este país posee docenas de cabezas nucleares que podrían ser lanzadas mediante misiles de medio alcance, y una flota de aviones F-16.

Dos semanas después del 11-S, Bush levantó las sanciones impuestas a Pakistán por su programa nuclear. Según los expertos en desarme norteamericanos, las sanciones no habían conseguido solucionar un preocupante tema: los estrechos vínculos entre algunos científicos de la Comisión de Energía Atómica Paquistaní y grupos radicales islámicos. «En el seno del programa nuclear paquistaní existe una pavorosa simpatía hacia Al Qaeda», me explicó un funcionario de inteligencia. Un experto en no proliferación nuclear dijo: «Si nos incineran la semana próxima, será porque Al Qaeda recibió de manos de Pakistán uranio enriquecido».

Un funcionario de la inteligencia norteamericana expresó una particular alarma ante el interrogatorio de dos científicos nucleares jubilados que tuvo lugar en Pakistán, en octu-

bre de 2001, y de quienes las autoridades informaron que tenían conexiones con los talibanes. Ambos hombres, Sultán Bashiruddin Mahmood y Chaudry Abdul Majad, habían consagrado su carrera a la Comisión de Energía Atómica Paquistaní, trabajando en proyectos armamentísticos. El funcionario de inteligencia, especialista en proliferación nuclear en el sureste asiático, describió esta revelación como «la punta de un enorme iceberg» y me dijo que demostraba que los sentimientos pro talibanes se extendían más allá del ejército paquistaní y llegaban a los supuestamente muy disciplinados laboratorios de armas nucleares del país. Los investigadores nucleares paquistaníes son conocidos por su nacionalismo y su fervoroso patriotismo. El hecho de que se descubriera que dos de los científicos más veteranos habían llevado a cabo tratos no autorizados con los talibanes, sugeriría que la atracción del fundamentalismo ha superado, en algunos casos, la fidelidad al país.

En octubre de 2001, un antiguo jerarca del Departamento de Estado que mantuvo estrecho contacto con los acontecimientos de Pakistán me dijo que, según tenía entendido, Musharraf había asegurado a la Administración Bush que «el control del arsenal estaba exclusivamente en manos de personal de la máxima confianza y que, en caso de existir la menor preocupación real, lo desarmaría. No quiere que unos locos precipiten una guerra de verdad». Por entonces, sin embargo, el Gobierno estaba revisando y «refrescando» sus planes de contingencia para asegurar o posiblemente «extirpar» las cabezas nucleares paquistaníes en caso de que Musharraf perdiera el poder.

Algunos funcionarios gubernamentales me comentaron que una unidad clandestina de élite —dependiente del Pentágono y en colaboración con la CIA—, entrenada para adentrarse en países extranjeros, encontrar armas nucleares y desactivarlas en caso de necesidad, estaba entrenándose para llevar a cabo una operación secreta en Pakistán. «Son buenos —me dijo uno de ellos—. Si la fastidian, mueren. Presentan una buena tasa de éxito en resultados negativos», es

decir, en confirmar que instalaciones sospechosas de países tercermundistas no almacenan material ni registran actividad nucleares.

Al parecer, el equipo norteamericano estaba obteniendo ayuda de la unidad de operaciones especiales israelí de mayor éxito, la famosa Sayeret Matkal, conocida también como Unidad 262, una unidad de penetración que había intervenido en asesinatos, robo de material de comunicaciones de servicios de inteligencia extranjeros y robo y destrucción de armamento nuclear extranjero. Sus miembros llegaron a Estados Unidos pocos días después del 11-S, me dijo una fuente de información, y estuvieron entrenándose con las Fuerzas Especiales en un lugar no revelado.

Pero este tipo de operaciones depende de la información, y en la Administración no había acuerdo sobre la calidad de los datos aportados por la CIA. Ésta no estaba segura, entre otras cosas, de conocer el número exacto de cabezas nucleares paquistaníes, o de si todas las encontradas eran auténticas. «Han informado de algunas localizaciones falsas —me dijo un funcionario—. Sólo dispones de una oportunidad, y si fallas, el gato se escapa del saco».

Algunos funcionarios confiaban en que los servicios de inteligencia pudieran realizar su trabajo a pesar de los esfuerzos del ejército paquistaní por camuflar su arsenal nuclear. «Se nos ha pedido que gestionemos el problema y disponemos de un plan para dicha contingencia —me explicó un asesor militar de Bush aquel octubre—. No podemos excluir la posibilidad de que los paquistaníes nos compliquen la vida, pero eso es un detalle operativo. Tendremos que trabajar mucho más para conseguirlo rápidamente. Todavía tenemos buen acceso».

Entre los funcionarios de inteligencia y del ejército con los que hablé, los escépticos desafiaban este punto de vista. La CIA, destacaban, había proporcionado información efectiva sobre las cabezas nucleares a finales de los ochenta y principios de los noventa, cuando trabajaba estrechamente con el ejército paquistaní en Afganistán. En aquella época, Estados Unidos era el principal proveedor de armas y tecnología mi-

litar de Pakistán. Entonces, la agencia reclutó informadores dentro de la Comisión de Energía Atómica Paquistaní, y el espionaje encontró la manera de interceptar las comunicaciones del doctor Khan. Pero cuando la guerra en Afganistán se inició, estos activos ya no existían. «Perdimos nuestro interés por esa zona y ahora no poseemos el mismo nivel de contacto o conocimiento que tuvimos en su día —dijo un ex jerarca de la CIA—. En la actualidad existe todo un conjunto de información que, bien mirado, no poseemos. No podemos contabilizar cabezas nucleares. Nunca hemos tenido la capacidad para hacerlo. La idea de que en todo momento podemos saber dónde están esas cabezas nucleares es errónea. Y se hace más difícil a medida que la operación se acerca y nos preguntamos hasta qué punto estamos seguros. La realidad es que normalmente lo sabemos horas después. Nunca pudimos hacerlo en tiempo real».

Otros funcionarios expresaron su preocupación sobre lo que cualquier equipo enviado a Pakistán pudiera realmente conseguir sin arriesgarse a sufrir bajas importantes. «¿Cómo vamos a realizar una operación de comando en medio del país? —dijo el antiguo funcionario del Departamento de Estado—. No sabemos dónde está el material y necesitaríamos mucho más que un comando para encontrarlo».

Un experto en la capacidad nuclear paquistaní describió el asunto en términos estratégicos: «Estados Unidos tiene que encontrar una nueva doctrina. Nuestra estrategia nuclear ha de incorporar la posibilidad de que en el futuro podríamos tener en Pakistán un régimen fundamentalista con armamento nuclear. Aunque ahora supiésemos dónde se encuentran las armas, no significa que seguiríamos sabiéndolo si los fundamentalistas toman el poder. Y después de Pakistán podrían ser Irán e Irak. Son países que apoyan el terrorismo de Estado».

Un militar, después de confirmar que estaba en marcha un plan para una posible «extirpación» de cabezas nucleares, dijo que lo preocupante no era un golpe de Estado sino una insurrección protagonizada por una pandilla de funcionarios

del ISI que tuvieran acceso a alguna instalación de almacenamiento nuclear. «Los paquistaníes tienen un interés tan personal como el nuestro en asegurarse de que ese material esté a buen recaudo, porque si ellos [los disidentes del ISI] lanzan uno contra la India, son carne asada». Se refería a la certeza de la represalia nuclear hindú. Funcionarios de inteligencia me dijeron que, al parecer, una unidad especial del ejército hindú estaba preparada para, en caso de amenaza inminente, lanzar un ataque sobre las cabezas nucleares paquistaníes.

Durante una entrevista con Larry King en la CNN el 22 de octubre de 2001, Musharraf descartó la preocupación norteamericana por el arsenal nuclear paquistaní, calificándola de meras suposiciones de aquellos que en Occidente «no conocen verdaderamente la realidad de Pakistán [...]. Tenemos un excelente sistema de mando y control que hemos ido perfeccionando, y no existe ninguna posibilidad de que caiga en manos de ningún fundamentalista». Sin embargo, en una entrevista que mantuvo en 2000 con Jeffrey Goldberg, Musharraf describió el mecanismo de mando y control del arsenal como «una separación geográfica entre la cabeza nuclear y el misil [...]. Para armar el misil, la cabeza nuclear debe ser trasladada en camión a lo largo de cierta distancia. No veo cómo podría burlarse esta medida de seguridad». No mencionó la distancia que separaba la cabeza nuclear de su misil de lanzamiento, ni quién vigilaba el sistema minuto a minuto.

«Eso no es ningún sistema de mando y control —me dijo posteriormente un experto de la inteligencia norteamericana—. Los componentes de las armas siempre se almacenan por separado». La explicación de Musharraf, añadió, fue «una actualización del argumento que los paquistaníes solían utilizar a finales de los ochenta y principios de los noventa, cuando decían que no tenían la bomba porque aún no habían unido sus componentes». Otro experto coincidió en que la explicación no era nada seria: «¿Qué sucedería en caso de crisis? ¿Tendrían que transportar las cabezas nucleares en camiones y así quedar vulnerables al fuego enemi-

go? Un sistema de mando y control de verdad te permite tenerlas listas para su lanzamiento, aunque siempre bajo una estricta vigilancia».

Durante la pasada década, oficiales paquistaníes se dirigieron varias veces al Pentágono en un intento infructuoso de conseguir apoyo para mejorar sus mecanismos de mando y control nuclear. Sin embargo, la Administración Clinton decidió que el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares —ratificado en 1968 y que prohíbe a los Estados declarados «nucleares» proporcionar ayuda o guía a cualquier fuerza nuclear emergente— no permitía este tipo de apoyo. Un antiguo funcionario del Pentágono describía cáusticamente el debate sobre el mando y control paquistaníes que tuvo lugar en la Administración Clinton como algo similar a los debates sobre los preservativos y el intercambio de jeringuillas en los institutos: «Si regalas preservativos, ¿estás tolerando el sexo adolescente? Si regalas jeringuillas, ¿estás tolerando las drogas? Si ayudas en el proceso de mando y control, ¿estás tolerando las armas nucleares?».

Un veterano agente secreto de la CIA que prestó servicio en el sureste asiático argumentó que Musharraf estaba simplemente diciéndole a Washington lo que allí querían oír: «¿Por qué debería decirnos la verdad? —preguntó retóricamente—. Está luchando por salvar el pellejo. Pero nosotros nos quedamos sentados sin abrir la boca, y nos equivocamos».

Después de la invasión norteamericana de Afganistán, la prensa hindú empezó a especular sobre la postura política de Musharraf: ¿habría comprado el apoyo, y el tiempo, de sus antagonistas en el ISI mostrándose condescendiente con las incursiones guerrilleras en Cachemira? Mis entrevistas con diplomáticos hindúes en esa época se decantaron, inevitablemente, hacia el conflicto de las armas nucleares.

Las cabezas nucleares hindúes son más numerosas, más sofisticadas y más potentes que las de Pakistán: poseen entre sesenta y noventa, mientras que a Pakistán se le suponen entre treinta y cincuenta. (Pakistán se ve también superada en

fuerzas convencionales: el ejército hindú es dos veces mayor y su población es siete veces superior en número). Un funcionario de la CIA retirado, que fue jefe de puesto en el sureste asiático, me dijo que lo que le resultaba especialmente turbador en la eterna confrontación entre ambos países era la «información imperfecta» que cada uno de ellos tenía sobre las intenciones del otro. «Súmele a eso el hecho de que esa gente tiene la tendencia a creer lo peor de los demás, y a que disponen de armas nucleares, y acabará diciendo: "Dios mío, me largo pitando de aquí"».

Cuando viajé a Nueva Delhi a finales de 2001, percibí lo peligroso de la situación. Durante una conversación, un diplomático hindú del más alto nivel me dijo que, a su entender, su país optaría por una guerra convencional contra Pakistán antes que recurrir al armamento nuclear. «Cuando Pakistán aseguró estar dispuesto a utilizar la bomba lo consideramos un farol. —Se refería a aquel tenso momento de 1990 en el que el ejército hindú fue trasladado en masa a la frontera paquistaní—. Los servicios de inteligencia nos confirmaron que había mucho de fanfarronería». Él y otras personalidades de su país llegaron a la conclusión de que Pakistán no iniciaría una confrontación nuclear. «Existe mucho espacio estratégico entre una guerra de poco calibre y la amenaza nuclear —dijo—. Por tanto, estamos utilizando alternativas militares convencionales sin preocuparnos por la supuesta amenaza nuclear». Si resultara que es un fallo de cálculo y Pakistán diese el primer paso en la utilización del arma nuclear, dijo, la India respondería con la misma moneda. «Y Pakistán desaparecería del mapa».

Resultó un fallo de cálculo. La Agencia Nacional de Seguridad controlaba la situación en 1990 cuando una interceptación de comunicaciones reveló que el Gobierno de Pakistán se encontraba en estado de «pánico», según lo expresó un funcionario del espionaje, ante la perspectiva de un ataque preventivo por parte de India y había preparado su pequeño arsenal de cabezas nucleares. La crisis se solucionó con la intervención diplomática de Estados Unidos. Posteriormente,

los analistas de inteligencia llegaron a la conclusión de que los líderes de ambas naciones estaban dispuestos a correr cualquier riesgo, incluyendo la guerra nuclear, con tal de evitar una derrota política o militar en Cachemira. La situación no se estabilizó en los años siguientes. En enero de 2001, una declaración del secretario de Defensa concluía desoladamente: «Dada la prolongada hostilidad entre los dos países, incluso un conflicto menor corre el riesgo de una escalada hasta convertirse en un intercambio de misiles nucleares».

Cachemira sigue siendo un polvorín que podría encender una guerra generalizada en el sureste asiático. El territorio, situado en la frontera norte de la India y extendido hacia la cordillera del Himalaya, ha sido objeto de disputa desde 1947, cuando la retirada británica del subcontinente llevó a la partición del Raj entre India y Pakistán. Ambos países han estado dos veces en guerra por la cuestión de Cachemira, en 1948 y en 1965, ambas sin una resolución clara del conflicto. En 1949, un alto al fuego negociado por Naciones Unidas colocó dos terceras partes de Cachemira, cuya población era musulmana en un setenta y cinco por ciento, bajo el control de la India, y otorgó el control nominal del tercio restante a Pakistán. Una resolución de la ONU exigió la celebración de un plebiscito para que el pueblo de Cachemira decidiese su destino político, pero la India puso como condición que Pakistán debía retirar primero sus tropas. Pakistán se negó a menos que la India se retirara también. Con el paso de los años, la India ha tomado ventaja en ese callejón sin salida aumentando el control militar y político sobre el territorio que domina en Cachemira, enloqueciendo a los musulmanes que allí residen, y Pakistán ha respondido patrocinando actos terroristas con la intención de fomentar una revolución.

Cachemira, hogar ancestral del antiguo primer ministro Nehru, posee para los hindúes un estatus reverencial y muchos creen que su país necesita conservar esa región musulmana para mantener su identidad como nación secular. Los paquistaníes creen que Cachemira, por su predominante población musulmana, debería haber formado parte de su na-

ción en la partición. Para la mayoría de hindúes y paquistaníes es un conflicto que va más allá de la política. En la actualidad, el territorio se encuentra dividido mediante una línea de alto al fuego cuidadosamente trazada y vigilada, aunque se producen a diario incursiones fronterizas, muchas de ellas sangrientas.

El 1 de octubre de 2001, un grupo de terroristas islamistas hizo estallar un coche bomba cerca del edificio que alberga la legislatura del Estado en Srinagar, acabando con la vida de al menos treinta y ocho personas, más de la mitad de ellas civiles, e hiriendo a muchas más. Dos semanas después del atentado, los hindúes respondieron bombardeando diversas posiciones militares paquistaníes a lo largo de la línea de alto el fuego. En una rueda de prensa, el ministro de Defensa de la India, George Fernandes, advirtió: «En lo que se refiere a castigar al enemigo, no nos contendremos en nada».

Los hindúes ya estaban resentidos con la Administración Bush por haber designado a Pakistán como su principal aliado en la guerra de Afganistán. El antiguo funcionario del Departamento de Estado dijo que Musharraf, impaciente por encontrar una manera de justificar la guerra ante la opinión pública paquistaní, había ofrecido el apoyo de Pakistán a cambio del compromiso norteamericano de ratificar la postura paquistaní en Cachemira. El analista de la CIA confirmó que los hindúes se habían enfadado mucho por el silencio de la Administración Bush ante el atentado con bomba del 1 de octubre en Cachemira. «He presenciado mensajes muy duros a los paquistaníes, "mantened a esos chicos [los terroristas] bajo control"», comentó, pero aquella vez ese mensaje no se emitió. Y continuó: «Musharraf permite que el ISI se mueva a su antojo, que dirija la política afgana y la política de Cachemira. Y ahí es donde está el peligro, en seguir presionando a los hindúes». Refiriéndose a la cúpula de la Administración Bush, dijo: «Los norteamericanos han infravalorado el enfado de los hindúes».

«Musharraf les ha traicionado —me dijo en Nueva Delhi a finales de 2001 un diplomático hindú recién retirado—. ¿Qué

han ganado ustedes? ¿Acaso han capturado a Bin Laden?». Dijo que a pesar de que la India no haría nada que entorpeciera la campaña norteamericana en Afganistán, «empezaremos a ejercer presión sobre Musharraf. Él volverá a coquetear con el terrorismo tan pronto como se le deje de presionar».

Milton Bearden, ex jefe del puesto de la CIA en Pakistán, que ayudó a dirigir la guerra afgana contra la Unión Soviética a finales de los ochenta y trabajó estrechamente con el ISI, se mofó de esa apreciación. «Musharraf no tiene tiempo para traicionar a nadie. Se levanta cada mañana y tiene que salir con un bastón para intentar no pisar una mina —dijo—. ¿Qué puede hacer? ¿Le apoya en realidad su ejército? Sí, pero quizá sólo entre el cuarenta y ocho y el cincuenta y dos por ciento».

Un diplomático paquistaní con quien hablé unos meses después del 11-S me dijo que la India era un país que sufría el «síndrome del amante despechado», refiriéndose a la enorme cantidad de atención norteamericana y apoyo financiero que el Gobierno de Musharraf estaba recibiendo. Añadió que la pregunta crítica para Pakistán, la India y el resto del sureste asiático era: «"¿Permanecerán comprometidos los norteamericanos a la larga, o desviarán su atención hacia Somalia o Irak?". No lo sé», se respondió.

El 22 de octubre de 2001 se produjo un atentado frustrado, esta vez contra una base aérea hindú en Cachemira. Fracasó porque los potenciales terroristas suicidas fueron abatidos en un tiroteo, pero el hecho —era la primera vez que una base aérea se convertía en objetivo— llevó al primer ministro hindú, Atal Behari Vajpayee, a rechazar una oferta de Musharraf de iniciar conversaciones. Éste respondió con una enigmática advertencia: Pakistán «no es un país pequeño».

El 13 de diciembre, cinco terroristas islamistas fuertemente armados superaron el perímetro de seguridad del Parlamento hindú, en Nueva Delhi, y se precipitaron en el interior del edificio principal. En cierto momento estuvieron a escasos metros de la escalera que conduce al despacho del vicepresidente de la India, Krishan Kant. En el tiroteo murieron nueve personas, además de los terroristas, y muchas

más resultaron heridas. El asalto al Parlamento fue considerado algo comparable al 11-S. Los políticos y la prensa del país tuvieron la sensación de que se había evitado por los pelos una gran tragedia. Los servicios de inteligencia hindúes confirmaron rápidamente que el ataque había sido preparado por dos organizaciones terroristas que llevaban tiempo implantadas en Cachemira y a las que se suponía respaldadas en su mayor parte por el ISI.

Brajesh Mishra, consejero de seguridad nacional, me dijo que si el ataque al Parlamento hubiese arrojado un número mayor de víctimas «la población habría enloquecido». India desplegó cientos de miles de soldados a lo largo de su frontera con Pakistán y exigió públicamente que Musharraf diera los pasos necesarios para acabar con el apoyo de su país a los grupos terroristas. «Nadie en la India quiere la guerra, pero no se excluye como opción», dijo Mishra.

Bearden, el hombre de la CIA, creía que el Gobierno indio estaba utilizando de manera cínica el asalto al Parlamento para recabar apoyo internacional en el conflicto con Pakistán. «Los hindúes están jugando a la política del palo y la zanahoria, aproximando efectivos a la frontera —dijo—. Hasta el 11 de septiembre pensaban que lo tenían todo ganado, que tenían a Pakistán contra las cuerdas, ya que éste, debido a su programa nuclear, estaba aislado y sancionado por Estados Unidos y el único aliado que le quedaba era China. No nos importaba que fuese el único país del sureste asiático que hizo siempre todo lo que le pedimos —añadió—. Musharraf no es un nuevo Kemal Ataturk [el fundador del Estado turco], pero mientras pueda mirar por encima del hombro y ver que Armitage y Rumsfeld están con él, conseguirá contener el extremismo».

«Los hindúes son mucho más fuertes que los paquistaníes», dijo un ex alto funcionario del Gobierno norteamericano, pero una invasión de Pakistán iría contra sus intereses porque «forzaría la mano de Musharraf»: en caso de que respondiera, desencadenaría una guerra mayor y, en caso de no hacerlo, podría provocar un golpe que lo derrocaría. «Sea co-

mo fuere, la India saldría mal parada». Y añadió que el Gobierno hindú, su ejército y sus servicios de inteligencia permanecían profundamente divididos en cuanto a cómo proceder en Cachemira. «La India podría sentirse lo bastante provocada como para adelantarse militarmente», dijo.

Con la presión de la Administración Bush, a finales de 2001 Musharraf emprendió algunas acciones contra las organizaciones fundamentalistas de su país, incluyendo la congelación de cuentas bancarias. «Musharraf no ha hecho tanto como pretendían los hindúes —dijo un experto en asuntos del sureste asiático—, pero ha hecho más de lo que se pensaba que haría. Sin embargo, tiene que hacer algo más, porque los hindúes están muy agitados». No obstante, prosiguió, Musharraf tendría los días contados si claudicaba ante la India en la cuestión de Cachemira, y que por eso no lo haría en ningún caso. «No es un fundamentalista, sino un nacionalista paquistaní. Cree de verdad en el lema "Cachemira es nuestra"». Y añadió que Musharraf saldría adelante si pudiera librarse de los terroristas paquistaníes y de Cachemira, si pudiera sobrevivir a esos dos asuntos que «han consumido los recursos vitales de Pakistán».

No todo el mundo en los servicios de inteligencia creía que Musharraf conseguiría detener la actividad terrorista en la frontera aunque se lo propusiera. «Dudo que esté fomentando esos ataques en Cachemira —dijo un ex funcionario—, pero le resulta muy complicado controlarlos. No puede desmantelar el ISI, lo necesita para sofocar la disidencia interior. El pobre tiene menos control que Arafat sobre los terroristas de Cisjordania».

Un funcionario del espionaje norteamericano me dijo que el régimen de Musharraf, al mejorar las condiciones para lanzar un ataque nuclear, había aumentado la precariedad del punto muerto en que se encontraba con la India. A principios de 2002, dijo, el tiempo necesario para lanzar las cabezas nucleares fue recortado a sólo tres horas, «y eso es muy poco. Ambos bandos tienen sus bombas a punto y listas para ser lan-

zadas». El experto en asuntos del sureste asiático añadió: «Ambas naciones necesitan sentarse y solucionar las líneas rojas [puntos de no retorno]. Nunca lo han hecho».

«Aquí se mezcla nitrógeno con nitroglicerina —dijo el ex alto funcionario del Gobierno—. Los paquistaníes son los pequeños, los asustados, y podrían utilizar el arma nuclear para compensar su desventaja. El peligro es que la dinámica de cincuenta años entre la India y Pakistán actúa de telón de fondo de un escenario en el que cualquiera podría pulsar el botón».

El mercado negro definitivo

En junio de 2002, la CIA entregó al presidente Bush y a sus principales asesores un exhaustivo análisis sobre las ambiciones nucleares de Corea del Norte. El documento fue clasificado de alto secreto y su distribución entre los miembros del Gobierno estuvo estrechamente restringida. En sus páginas se afirmaba que Corea del Norte había violado la legalidad internacional —y los acuerdos con Corea del Sur y Estados Unidos— obteniendo ilícitamente medios para producir uranio utilizable en la fabricación de armamento.

Sin embargo, la información más sensible desde el punto de vista político estaba relacionada con Pakistán. Desde 1997, decía la CIA, Pakistán había estado compartiendo con el régimen de Pyongyang tecnología sofisticada, información sobre diseño de cabezas nucleares y datos de pruebas de armamento. Pakistán, uno de los más importantes aliados de la Administración Bush en la guerra contra el terrorismo, estaba ayudando a Corea del Norte a construir la bomba.

En 1985, Corea del Norte firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear y abrió la mayoría de sus instalaciones nucleares para ser sometidas a la inspección internacional. A principios de los noventa, el espionaje norteamericano y los inspectores internacionales empezaron a tener claro que los norcoreanos estaban reprocesando más combustible gastado del que habían declarado y que podían haber separado

plutonio (un subproducto reactor) suficiente para fabricar una o dos armas nucleares. La consecuente crisis diplomática se resolvió cuando en 1994 el líder de Corea del Norte, Kim Jong Il, llegó con la Administración Clinton al acuerdo de suspender su programa nuclear a cambio de ayuda económica y de la construcción de dos reactores nucleares de agua ligera que, bajo vigilancia, generarían electricidad.

En cuestión de tres años, sin embargo, Corea del Norte había empezado a aplicar un segundo método para conseguir material fisionable. Esta vez, en lugar de utilizar combustible gastado, los científicos intentaban producir uranio para la fabricación de armamento a partir de uranio natural... con tecnología paquistaní. Un funcionario de inteligencia norteamericano dijo: «Antes lo hacían furtivamente —se refería al programa de plutonio desarrollado a principios de los noventa—. Ahora lo hacen con descaro. Sabemos que pueden hacer mucho más y mucho más rápido. —Y añadió—: el informe apunta sin duda hacia los paquistaníes. El tema técnico está más claro que el agua: ni evasivas ni ambivalencias».

En el momento de la crisis de 1994, sin embargo, no se sabía si Corea del Norte había empezado a montar cabezas nucleares y, según la CIA, seguía sin saberse. Los que leyeron el informe dijeron que incluía estimaciones independientes y contradictorias por parte de la CIA, el Pentágono, el Departamento de Estado y el de Energía, sobre el número de cabezas nucleares que Corea del Norte podía fabricar, y no se aclaraba si el régimen de Pyongyang estaba o no fabricándolas.

Corea del Norte está sometida al aislamiento económico. Una de sus principales fuentes de ingresos de exportación es la venta de armas, y su producto más buscado son los misiles. Y uno de sus clientes era Pakistán, que necesitaba misiles para que sus cabezas nucleares alcanzaran con mayor efectividad el territorio de su rival, India. En 1997, según el informe de la CIA, Pakistán empezó a pagar parte de los misiles norcoreanos compartiendo sus secretos relacionados con armas nucleares. Según el informe, Pakistán envió a Corea del Norte pro-

totipos de máquinas centrifugadoras de alta velocidad. Y en algún momento de 2001 los científicos norcoreanos empezaron a enriquecer uranio en cantidades significativas. El informe añadía que Pakistán también les proporcionó datos sobre cómo fabricar y probar un arma nuclear.

Un antiguo funcionario paquistaní reconoció que los contactos de su Gobierno con Corea del Norte se habían incrementado significativamente en 1997; la economía paquistaní se iba a pique y «no había más dinero» para pagar los misiles norcoreanos, de modo que el Gobierno paquistaní empezó a pagarlos con «parte del conocimiento y los detalles». Pakistán ayudó a Corea del Norte a llevar a cabo una serie de «pruebas frías» (explosiones nucleares simuladas) utilizando uranio natural, pruebas necesarias para determinar si un dispositivo detonará adecuadamente. Pakistán asesoró también a los servicios de inteligencia norcoreanos a «volar bajo radar», es decir, a ocultar la investigación nuclear de los satélites y del espionaje norteamericano y surcoreano).

Pakistán había necesitado una década de experimentación y una importante inversión económica antes de ser capaz de fabricar centrifugadoras fiables, pero con su ayuda los norcoreanos «recortaron en muchos años» el proceso de desarrollo, destacó el funcionario paquistaní. No se sabe cuántas centrifugadoras operan en estos momentos en Corea del Norte, ni dónde se encuentran las instalaciones. (Se supone que están en cuevas subterráneas). Las centrifugadoras paquistaníes son cilindros muy finos, me explicó, de apenas tres metros de altura, que podrían transportarse «a centenares» en aviones de carga, pero «todo lo que Pakistán tuvo que hacer fue entregar los anteproyectos a los norcoreanos. Ellos disponen de una ingeniería muy sofisticada». Y con unos cuantos miles de centrifugadoras, «Corea del Norte podría tener suficiente material fisionable como para fabricar dos o tres cabezas al año, y todavía le sobraría algo para vender».

A lo largo de los años han ido apareciendo informes esporádicos sobre los contactos entre Corea del Norte y Pakistán, la mayoría relacionados con la venta de misiles. Se co-

nocen bastante menos sus relaciones nucleares. Durante la última década, el espionaje norteamericano tuvo constancia de un mínimo de trece visitas del doctor Khan, el científico nuclear paquistaní, a Corea del Norte. Khan fue puesto bajo vigilancia norteamericana debido a estas visitas clandestinas, durante las cuales solía utilizar disfraces. A finales de los noventa apareció información más preocupante, cuando se supo que había realizado al menos una visita secreta a una instalación nuclear iraní. Los funcionarios norteamericanos creen que a Irán no llevó materiales, sólo sus años de experiencia práctica en la fabricación de bombas. «Este tipo se mueve —dijo un funcionario de los servicios de inteligencia—. Siempre te lo encuentras en malos lugares en malos momentos».

En octubre de 2002, después de conocerse las noticias sobre el programa de uranio de Corea del Norte, el *New York Times* publicó un artículo en el que se sugería que Pakistán era un posible proveedor de centrifugadoras para Corea. Musharraf replicó el artículo alegando que no tenía «base alguna», y añadió: «La colaboración con Corea del Norte en el área nuclear no existe». La Casa Blanca pareció aceptar la afirmación del líder paquistaní. En noviembre, Colin Powell declaró a la prensa que Musharraf le había asegurado que su país no mantenía ningún tipo de transacción nuclear con los norcoreanos. «Le he dejado claro que cualquier [...] contacto entre Pakistán y Corea del Norte lo consideraríamos impropio e inadecuado y tendría consecuencias —dijo Powell—. El presidente Musharraf comprende la gravedad del tema».

Un funcionario de inteligencia norteamericano con quien me entrevisté, calificó el comportamiento de Pakistán como la «peor pesadilla» de la comunidad internacional en cuanto al control de armamento: un país del Tercer Mundo que se convierte en instrumento de proliferación. «El principal control que Occidente tenía sobre la proliferación nuclear se basaba en la denegación de tecnología y en la diplomacia —dijo—. Nuestro temor era, primero, que un país tercermundista desarrollara armas nucleares por su propia cuenta; y, segundo,

que luego proporcionara esa tecnología a otros países. Es algo muy grave. Puede cambiar el mundo». El programa nuclear de Pakistán floreció en la década de 1980, en un momento en que su ejército y sus servicios de inteligencia trabajaban estrechamente con Estados Unidos contra la invasión soviética de Afganistán. «La transferencia de la tecnología para enriquecer el uranio es resultado directo del fracaso de Estados Unidos respecto a gestionar el programa paquistaní cuando podríamos haberlo hecho. Ya no tenemos el control».

El informe de la CIA permaneció secreto a lo largo del verano y principios de otoño de 2002, mientras la Administración se centraba en los preparativos de la guerra contra Irak. Incluso en las propias oficinas de control armamentístico se desconocía su existencia. «Se mantuvo muy restringido —me explicó un funcionario—. La compartimentación se aplica para proteger fuentes que podrían resultar eliminadas si su información se diera a conocer, pero también para controlar la información sensible por motivos políticos».

El desprecio que el presidente Bush siente hacia el Gobierno de Corea del Norte era de todos conocido e hizo que la intención de la Casa Blanca de no hacer público el informe de la CIA o emprender acciones al respecto fuera aún más sorprendente. En su discurso sobre el Estado de la Unión en enero de 2002, Bush citó a Corea del Norte, junto con Irak e Irán, como parte del Eje del Mal. Bob Woodward, en *Bush en guerra*, su libro sobre la respuesta de la Administración al 11-S, recoge una entrevista realizada en agosto en el rancho que el presidente posee en Texas. «¡Aborrezco a Kim Jong Il! —exclamó Bush agitando un dedo en el aire—. Si reacciono de forma visceral ante ese tipo es porque está matando de hambre a su pueblo». Woodward escribe que el presidente despotricó contra Kim Jong Il de forma tan vehemente que «pensé que acabaría cayéndose de la silla».

La Administración había sido informada sobre Corea del Norte incluso antes de recibir el informe de la CIA. En enero de 2002, John Bolton, subsecretario de Estado para el Control

de Armas, declaró que aquel país tenía un programa de armas nucleares clandestino y que estaba violando el Tratado de No Proliferación. En febrero, el presidente fue instado por tres miembros del Congreso a interrumpir la ayuda para los dos reactores que Clinton había prometido a los norcoreanos, basándose en que se decía que el Gobierno de Pyongyang estaba intentando secretamente «obtener uranio enriquecido». En mayo, Bolton acusó de nuevo a Corea del Norte de no cooperar con el Organismo Internacional para la Energía Atómica. A pesar de ello, el 5 de julio, Condoleezza Rice, quien como consejera de seguridad nacional había presumiblemente recibido semanas antes el informe de la CIA, dejó claro en un memorándum a los congresistas que la Administración seguiría suministrando a Corea del Norte los envíos de combustible pesado y tecnología nuclear para los dos reactores prometidos.

La equívoca política de la Administración respecto a Corea del Norte, con su mezcla de enfado y aparente complacencia, era en muchos sentidos una consecuencia de su obsesión por Irak. A finales de 2002, la Casa Blanca expidió una directiva de estrategia de seguridad nacional autorizando al ejército «a detectar y destruir los activos de armas de destrucción masiva del enemigo antes de que dichas armas sean utilizadas». El documento añadía que las fuerzas armadas «deben estar capacitadas para defenderse de enemigos provistos de armas de destrucción masiva [...] porque la disuasión podría no funcionar». Lógicamente, la nueva estrategia debería haberse aplicado en primer término a Corea del Norte, cuyo programa de armas nucleares estaba mucho más avanzado que el iraquí. Sin embargo, el objetivo de la Administración era movilizar a la opinión pública para la invasión de Irak. Un funcionario de inteligencia me dijo en aquel momento: «La doctrina Bush cree que la "destrucción mutua garantizada" no sirve para estas naciones delincuentes y que, por tanto, tenemos que actuar preventivamente cuando las negociaciones fracasan. Pues bien, la gente de Bush sabía que los norcoreanos habían reactivado su programa nuclear y eran más peligrosos que Irak. Pero no se lo contaron a nadie. De mo-

mento, pues, al no hacer lo que su doctrina les indica han desacreditado su propia política».

La capacidad militar de Irak se vio drásticamente reducida por su derrota en la guerra del Golfo y por los años de inspecciones, pero Corea del Norte era uno de los países más militarizados del mundo, con más del cuarenta por ciento de su población movilizada. Su artillería era especialmente temible: tenían apuntados hacia Seúl, la capital de Corea del Sur, más de diez mil cañones, junto con dos mil quinientas lanzadoras de cohetes capaces de disparar quinientos proyectiles por hora. El Pentágono estimaba que una guerra total contra los norcoreanos provocaría más de un millón de bajas militares y civiles, incluyendo cien mil norteamericanos. Un funcionario de la Administración Clinton recordó haber asistido a una sesión informativa en el Congreso a mitad de los noventa en la que el general Gary Luck, comandante de las fuerzas estadounidenses en Corea, dijo con laconismo: «Senador, podría ofrecerle esta victoria... pero no inmediatamente».

A principios de octubre de 2002, James A. Kelly, subsecretario de Estado para Asia, se desplazó a Pyongyang con un nutrido séquito para mantener conversaciones sobre el programa de enriquecimiento de uranio. Kelly recibió autorización para explicar a sus anfitriones que a Estados Unidos le constaba la existencia de dicho programa, aunque sus detalladas instrucciones no le dejaban espacio para la negociación. La esencia de su mensaje era terminante: Corea del Norte debía suspender el programa como condición previa e ineludible para que se pudiese entablar cualquier negociación. El informe de la CIA predecía que, en el caso de que Corea del Norte tuviese que enfrentarse a las evidencias, no se arriesgaría a una ruptura abierta del acuerdo de 1994 y desistiría de seguir violando el Tratado de No Proliferación. «Completamente equivocado —me dijo un funcionario de los servicios de inteligencia—. Espero que en la agencia haya personas que comprendan a los norcoreanos mejor que los que escribieron esto».

«Los norcoreanos se quedaron pasmados —me dijo un diplomático japonés que habló con uno de los participantes—. No sabían que Estados Unidos sabía lo que sabía». Después de una reunión secreta de toda una noche en Pyongyang, Kang Suk Ju, viceministro de Relaciones Exteriores norcoreano, pareció confirmar la acusación al alegar que su país tenía derecho a desarrollar armas nucleares. Pero no dijo una palabra sobre si en realidad ya las poseían. Kang Suk Ju acusó también a Estados Unidos de «amenazar la supervivencia de Corea del Norte». Kang extrajo entonces una lista con los supuestos incumplimientos norteamericanos de las obligaciones del tratado de 1994 y se ofreció a suspender el programa de enriquecimiento de uranio a cambio de la promesa de que Estados Unidos no atacaría a Corea del Norte y normalizaría las relaciones. Kelly, limitado por las instrucciones recibidas, no pudo hacer otra cosa que atenerse a las mismas: los norcoreanos debían dar el primer paso. El callejón sin salida estaba servido.

Pero, igual que sucedió con el informe de la CIA, la Administración guardó silencio sobre las conversaciones de Pyongyang. No informó al público hasta el 16 de octubre, cinco días después de que el Congreso autorizara el empleo de la fuerza contra Irak. Incluso entonces, según fuentes de la Administración citadas por el *Washington Post*, lo hizo público sólo después de conocer que la reacción norcoreana —con las evidentes implicaciones para el debate sobre Irak— se había filtrado a la prensa. El 20 de octubre, en el programa de la CBS *Face the Nation*, Condoleezza Rice negó que las noticias relacionadas con la reunión de Kelly se hubieran retenido deliberadamente hasta después de la votación. Sencillamente, el presidente Bush, dijo, no había tenido ante sí todas las alternativas hasta el 15 de octubre. «Lo que nos sorprendió fue que los norcoreanos admitiesen la existencia del programa», añadió.

«¿Acaso queríamos que la negaran? —me dijo posteriormente un ex funcionario de inteligencia experto en Corea del Norte—. Nunca llegué a comprender qué sucedía con la

política hacia los norcoreanos». Refiriéndose a las relaciones entre los servicios de inteligencia y la Administración Bush, dijo: «No logramos concitar la atención del Gobierno e, incluso lográndolo, nunca se mostraron sensibles al tema. Era una Administración profunda y perversamente ideológica». Se mostraba despectiva no sólo respecto a Pyongyang, sino respecto a los anteriores esfuerzos realizados por el Gobierno de Clinton para abordar el problema de la proliferación nuclear... un problema que lo único que podía hacer era empeorar si Washington seguía ignorándolo. El ex funcionario me contó: «Cuando llegó el momento de enfrentarse a Corea, no disponíamos de plan, ni de contactos... de nada con lo que negociar. Es necesario mantener contacto diplomático constante y, de este modo, comprometerse y situarse en la mejor posición para resolver el problema. Pero permitimos que fracasase».

El resultado fue que en octubre, igual que en junio, la Administración no tenía otra alternativa que negar la existencia de una crisis. Cuando se dieron a conocer los primeros informes de la reunión de Kelly, Rice subrayó repetidamente que Corea del Norte e Irak eran casos distintos. «Sadam Husein se sitúa en una categoría por sí mismo», declaró en el programa *Nightline*, de ABC. Un funcionario de control armamentístico me dijo: «La Casa Blanca no quiere afrontar una segunda crisis».

Durante los meses siguientes, la política norteamericana fue alternando el discurso duro en público (promesas de que la Administración no sería «chantajeada», o incluso de que ni se reuniría con los líderes norcoreanos) con los esfuerzos privados, a través de terceros, para abrir una línea indirecta de comunicación con Pyongyang. Corea del Norte, mientras tanto, expulsó a los inspectores de la ONU, renunció al Tratado de No Proliferación y amenazó con empezar a reprocesar combustible nuclear gastado.

En un discurso en junio de 2002, el diplomático Robert Gallucci, que en 1994 negoció el acuerdo con Pyongyang y actualmente es decano de la School of Foreign Service de la

Universidad de Georgetown, recordó que la primera postura de Bush ante Corea del Norte había sido convertir ese país en «un niño de anuncio» para los argumentos de la Administración en favor de un sistema de defensa con misiles. «Fue la demostración de la amenaza contra la que estábamos planificando y conformando nuestra defensa —dijo—. Se creía que con Corea del Norte no se podía negociar».

«Pero luego llegó el 11 de septiembre, y ese día aciago demostró que un sistema de misiles no podía defender a Estados Unidos porque la amenaza no vendría exclusivamente en forma de misiles, sino también de muchísimas formas más —añadió—. Y así cerramos el círculo [...]. Corea del Norte y otros Estados delincuentes nos amenazan con armas de destrucción masiva, y lo hacen no sólo porque es muy posible que resulte muy difícil disuadirlos, sino porque podrían transferir esta capacidad a aquellos que no pueden ser disuadidos».

En una entrevista que me concedió a principios de 2004, Gallucci llamó al doctor Khan «el Johnny Appleseed» de la carrera nuclear. Gallucci, que también era asesor de la CIA en asuntos de proliferación, me dijo: «Ya es bastante malo que Irán, Corea del Norte y Libia tengan armas nucleares, pero es mucho peor que puedan transferir su tecnología a una organización que no sea un Estado. Ésa es la mayor preocupación, y lo que más miedo da de todo esto... que Pakistán pudiera ayudar a los peores terroristas del mundo a fabricar armas nucleares. No hay nada más importante que evitar que las organizaciones terroristas obtengan armamento nuclear. En estos momentos, el país más peligroso para Estados Unidos es Pakistán, y el segundo es Irán». Y agregó: «No éramos tan vulnerables desde que los británicos incendiaron Washington en 1814».

El acuerdo de Washington

El 4 de febrero de 2004, en Islamabad, el doctor Khan apareció en el canal televisivo estatal y reconoció haber sido el úni-

co responsable de dirigir un mercado negro internacional de materiales para armamento nuclear. La noticia llegó después de una serie de revelaciones sobre los programas nucleares de Irán y Libia, entre ellas pruebas de que ambos países habían recibido material nuclear de Pakistán. La confesión de Khan fue recibida por un Musharraf de expresión pétrea, que para la ocasión vestía no las prendas civiles que habitualmente lleva como presidente, sino uniforme militar de campaña.

Al día siguiente, de nuevo en televisión, Musharraf, que afirmó estar sorprendido por las fechorías de Khan, lo perdonó de todos modos, recordando los servicios que había prestado a Pakistán (se refirió a Khan como «mi héroe»). El presidente declaró al *New York Times* que hasta el anterior mes de octubre no había recibido por parte de Estados Unidos un informe detallado sobre las actividades de Khan en Irán, Corea del Norte y Malasia. «Si lo sabían antes, deberían habérnoslo dicho —afirmó—. Quizá entonces muchas cosas no habrían sucedido».

Fue una actuación de «mentirijillas» en una capital de «mentirijillas». En entrevistas realizadas poco después en Islamabad, una ciudad planificada y construida hace sólo cuatro décadas, políticos, diplomáticos y expertos nucleares rechazaron la confesión de Khan y el perdón de Musharraf con expresiones de mofa e incredulidad. Durante dos décadas, tanto periodistas como servicios de inteligencia norteamericanos y europeos habían relacionado a Khan y el ISI con transferencias de tecnología nuclear, y resultaba difícil dar crédito a que el Gobierno al que servía Khan no se hubiese enterado de nada.

«Es propaganda de Estado», me dijo Samina Ahmed, directora de la sucursal paquistaní de una organización no gubernamental que estudia la resolución de conflictos. «El trato consiste en que Khan no explique lo que sabe. Todo el mundo miente. La tragedia de todo este asunto es que no sirve a las necesidades de nadie». Mushahid Husain Sayed, senador paquistaní, soltó una carcajada y dijo: «Estados Unidos necesitaba una ofrenda a los dioses... sangre derramada

en el suelo. Así que Musharraf le dijo a Khan: "Agáchate que te daré una zurra"».

Un funcionario de inteligencia norteamericano, con años de experiencia en asuntos de no proliferación nuclear, me dijo: «Una cosa sí sabemos: no fue la operación de un delincuente aislado. Supongamos que Edward Teller decidiera de repente difundir tecnología y material nuclear por todo el mundo. ¿Cree que podría hacerlo sin que el Gobierno se enterase? ¿Cómo transportaría los misiles de Corea del Norte a Pakistán? ¿Cree que Khan envió las centrifugadoras por Federal Express? El ejército tiene que haberse implicado, y a muy altos niveles». Y prosiguió: «Hace quince años tuvimos todas las oportunidades para desarticular la red de Khan. Algunos de los actuales implicados en el contrabando son los hijos de los que conocimos en los años ochenta. Ahora estamos con la segunda generación».

La Administración Bush aceptó públicamente el perdón. Horas después de la comparecencia de Musharraf en televisión, el subsecretario de Estado Richard Armitage lo elogió como «el hombre adecuado para el momento adecuado». Y añadió que Pakistán había sido «muy terminante en los últimos años con respecto a la proliferación nuclear». Un portavoz de la Casa Blanca dijo que la Administración valoraba las garantías ofrecidas por Musharraf de que «Pakistán no está involucrado en ninguna actividad de proliferación nuclear». Un portavoz del Departamento de Estado dijo que la manera en que se procedería con Khan era «una cuestión que tenía que decidir Pakistán».

Musharraf, naturalmente, era un aliado en la guerra contra el terrorismo. Sin embargo, según funcionarios de los servicios de inteligencia, la conformidad de Washington al perdón de Khan se fundó en lo que Musharraf había aceptado hacer a continuación: mirar hacia el otro lado mientras Estados Unidos daba caza a Bin Laden en una zona tribal del noroeste de Pakistán dominada por la imponente cordillera del Hindu Kush, desde donde se creía que operaba. Los mandos norteamericanos llevaban tiempo esperando recibir el per-

miso para desarrollar extensas batidas en el Hindu Kush pero Musharraf lo había negado repetidamente. Pero ahora, con su consentimiento, la Administración podía autorizar una importante ofensiva de primavera que implicaba el movimiento de miles de soldados norteamericanos. Musharraf ofreció también otra ayuda. Según el ex funcionario de inteligencia, «Musharraf nos dijo: "Tenemos infiltrados en esa zona. La gente que les proporciona fruta fresca y verduras y que cuidan los rebaños de cabras". Es una compensación: podremos introducir tropas en Pakistán y contar con su ayuda a cambio de no obligar a Musharraf a castigar a Khan».

«Va a haber presión en todo el terreno de juego», me comentó un estratega del Pentágono a principios de 2004. Los planes exigían que las unidades más aguerridas de las Fuerzas Especiales, como la Task Force 121, fueran trasladadas de Irak a Pakistán. Miembros de las Fuerzas Especiales repartidos por todo el mundo recibieron información sobre su nuevo destino, me dijo un asesor militar, y en algunos casos «órdenes de alerta» (fase previa a la entrada en combate).

Una presencia militar norteamericana a gran escala en Pakistán podía generar un levantamiento en el país y debilitar la ya delicada posición de Musharraf. La operación representaba una arriesgada apuesta personal para él y, por extensión, para la Administración Bush: si él caía, su sucesor sería mucho menos amistoso con Estados Unidos. Una de las voces más críticas contra Musharraf en el interior de Pakistán es el general retirado Hamid Gul, un musulmán fundamentalista que dirigió el ISI entre 1987 y 1989, el momento cumbre de la guerra afgana contra los soviéticos. Si las tropas americanas empiezan a operar desde Pakistán, habrá «una ruptura en la relación —me dijo Gul a principios de 2004—. Los norteamericanos piensan que los demás son sus esclavos». Y con respecto al escándalo de Khan, añadió: «Puede que estemos en un aprieto, pero somos una nación muy honorable. No permitiremos que los soldados norteamericanos entren. Esto sería el límite». En cuanto a que Musharraf hubiera llegado a un acuerdo para permitir que las

tropas norteamericanas actuaran en Pakistán, dijo: «Les está mintiendo».

El mayor riesgo no sería para Musharraf, ni para la estabilidad del sureste asiático, sino para la posibilidad de que las instituciones internacionales de control nuclear desarrollaran su trabajo. Muchos expertos temen que con la ayuda de Khan el mundo se haya acercado más a un punto de no retorno nuclear. Después de su perdón, me explicó el funcionario de inteligencia, los analistas se preguntaron: «¿Cómo es posible que Pakistán hiciera todas estas cosas —desarrollar una segunda generación de armas de tamaño más reducido y mayor potencia— y que a la vez nosotros recortáramos las investigaciones?». Su valoración fue muy franca. Me dijo: «Khan estaba dispuesto a vender anteproyectos, centrifugadoras y lo último en armamento. Era el peor proliferador de armas nucleares del mundo y ha sido perdonado... sin que la Casa Blanca diga ni pío».

En diciembre de 2003, Bush y Tony Blair anunciaron conjuntamente que Muammar el Gaddafi, el líder libio, había decidido abandonar su programa de armas nucleares y que permitiría que los inspectores del OIEA entraran en su país. El anuncio sorpresa, la culminación de nueve meses de conversaciones secretas, fue seguido de inmediato por una inspección de seis días por parte del OIEA, la primera de muchas inspecciones, y por el descubrimiento público de todavía un país más, Malasia, en el mercado negro nuclear. Libia había conseguido adquirir a una empresa de este país componentes nucleares por valor de cientos de millones de dólares, entre ellos centrifugadoras avanzadas diseñadas en Pakistán, y utilizando como principal punto de embarque una zona de libre comercio en Dubai. Un nuevo participante en una vieja carrera armamentística: Malasia, una nación de alta tecnología sin ambiciones nucleares que comerciaba con sofisticados equipos nucleares basados en diseños facilitados por Abdul Qadeer Khan.

Los materiales de centrifugación que los inspectores encontraron en Libia no habían sido ensamblados y en la ma-

yoría de los casos, de hecho, la mercancía seguía aún en sus embalajes originales. «No me siento impresionado por lo que he visto —me dijo un funcionario—. No era un programa bien desarrollado, no existía ningún plan serio de investigación y desarrollo para utilizar todo lo adquirido. No servía para nada. Pero me quedé muy sorprendido por todo lo que los libios habían sido capaces de comprar. Lo que hay en el mercado es absolutamente horrendo. Es un negocio tipo mafia, con corrupción y secretismo».

Para su consternación, los inspectores encontraron en Libia incluso los anteproyectos exactos para el diseño y la construcción de un arma nuclear de media tonelada. «Un "bombón" de bomba, preparada por ingenieros que saben cómo ensamblar un arma —me dijo un funcionario en Viena, sede del OIEA—. Sin duda alguna funcionará. Limítese a cavar un hoyo y pruébela. Es demasiado grande y pesada para un Scud, pero entraría perfectamente en un coche familiar. Es el sueño de cualquier terrorista».

En un discurso pronunciado el 5 de febrero de 2004 en la Universidad de Georgetown, George Tenet aplaudió los cambios en Libia como un triunfo de los servicios de inteligencia norteamericanos. «Nos hemos enterado de todo esto a través de una eficaz combinación de información técnica, detallado y laborioso trabajo analítico, atrevimiento operacional y, sí, esa clase de inteligencia humana que cierta gente les ha dado a entender que ya no poseemos». Pero algunos funcionarios de la CIA y dos hombres que trabajaron estrechamente con los servicios de inteligencia libios ofrecían una historia distinta.

Gaddafi llevaba años buscando, con poco éxito, la reconciliación con Occidente. Un antiguo funcionario de operaciones de la CIA me contó que Musa Kusa, jefe durante mucho tiempo del espionaje libio, instó a Gaddafi a reunirse con los servicios de inteligencia occidentales y a abrir su arsenal de armas a la inspección internacional. A medida que la guerra con Irak se aproximaba, Kusa había advertido a Gaddafi diciéndole: «Estás chiflado si piensas que puedes derrotar a

Estados Unidos. Acaba con esto ya. Ríndete ahora y espera que acepten tu rendición».

Un funcionario árabe me dijo que los servicios de inteligencia libios, con la aprobación de Gaddafi, se prestaron entonces rápidamente a ofrecer a sus homónimos norteamericanos y británicos los detalles de un acuerdo en curso para adquirir una centrifugadora. Los componentes serían transportados en un carguero alemán, el *BBC China*. En octubre, el carguero fue detenido y el incidente se celebró como un gran éxito de los servicios de inteligencia. Pero, según dijo el funcionario, fueron «los libios quienes vendieron a los paquistaníes» y airearon el papel de Khan en el mercado negro. Los norteamericanos, añadió, hicieron «preguntas sobre esos pedidos y Libia dijo que los tenía». Fue la típica puñalada por la espalda, y como tal fue percibida por Musharraf, que se enfureció por lo que denominó, en un discurso televisado (pronunciado en urdu y sin traducción oficial por parte del Gobierno paquistaní), la traición de sus «hermanos musulmanes». Hubo poca lealtad entre comprador y vendedor. «Los paquistaníes recibieron gran parte del dinero de Libia y les dieron material de segunda categoría —dijo el funcionario árabe—. Lo hicieron sin entusiasmo».

Y comentó: «Gaddafi es muy pragmático y estudió el momento. Era el momento adecuado. Estados Unidos buscaba arrogarse un triunfo y el líder libio se benefició de ello».

En el transcurso de una entrevista celebrada en la sede central del OIEA en Viena, a principios de 2004, Mohamed el Baradei, director general del organismo, me dijo que el principal problema de la no proliferación nuclear había pasado a ser la amenaza por parte de grupos terroristas y otros partícipes que no eran Estados. «Tengo la pesadilla de que la diseminación de uranio y material nuclear pueda acabar en una pequeña planta de enriquecimiento en un lugar como el norte de Afganistán —dijo—. ¿Quién sabe? Para alguien que no es un Estado no es difícil esconderse, especialmente si cuen-

ta con la connivencia de un país. Algunas de estas organizaciones terroristas son muy sofisticadas».

La mayoría de los diplomáticos con los que me entrevisté en Viena expresaron su frustración ante la imposibilidad de que el OIEA, por culpa del perdón de Musharraf, tenga acceso a Khan. «No lo conseguiremos —dijo uno—. Estamos obteniendo algo de cooperación por parte de Pakistán, pero lo que necesitamos son nombres. ¿Quién tiene el material? Nos interesa saber qué otras naciones pueden tenerlo». El diplomático me comentó que, a su entender, Estados Unidos no estaba dispuesto a declarar públicamente lo evidente: que era imposible que el Gobierno paquistaní desconociera la existencia de los envíos. «Por supuesto que es horroroso, pero Musharraf estará en deuda con ustedes», añadió.

La autoridad del OIEA para realizar inspecciones es limitada. Las naciones firmantes del Tratado de No Proliferación Nuclear están obligadas a permitir que el organismo realice inspecciones sistemáticas de sus instalaciones nucleares destinadas a la investigación y la producción de energía, pero no se prevé ningún mecanismo para la inspección forzosa de instalaciones sospechosas de albergar armas nucleares. Muchos miembros del OIEA creen que el tratado debería modificarse en ese aspecto. «Existe una red de mercado negro para el diseño de centrifugadoras y armas nucleares que el mundo tiene todavía que descubrir», me comentó otro diplomático en Viena. En el pasado, dijo, el OIEA trabajaba bajo el supuesto de que los países intentarían burlar el tratado a fin de «fabricar y vender su propio material nuclear. Pero con lo que nos enfrentamos ahora es con una red de mercado negro no estatal capaz de fabricar materiales y dispositivos nucleares utilizables. Tenemos mercaderes nucleares operando delante de nuestras narices y no podemos ejercer ningún control sobre ellos... por buenos que seamos a la hora de inspeccionar».

Es decir, ya no es imprescindible que un Abdul Qadeer Khan o cualquier otra persona vinculada a un Gobierno deba intervenir necesariamente en el suministro de tecnología nuclear. Los dispositivos nucleares de cualquier tipo están dis-

ponibles para cualquier país —o persona o grupo— que tenga suficiente dinero en metálico para adquirirlos. «Se trata de una cuestión de supervivencia —dijo el diplomático con una sonrisa cínica. Y añadió—: Irak es un chiste si lo comparamos con este asunto. La Administración Bush estaba cazando sombras en lugar de acosar a la presa».

Otro inspector describió el reto al que se enfrentaba el OIEA como «un cambio sísmico, la globalización del mundo nuclear». Y añadió: «Tenemos que pasar de inspeccionar instalaciones declaradas a preguntarnos: "¿De dónde viene esta mierda?". Si seguimos centrándonos en lo declarado, pasaremos por alto la matriz del suministro nuclear». Llegado este punto, me preguntó con toda seriedad: «¿Por qué Israel o Estados Unidos no se han llevado a Khan?».

Husain Haini, que colaboró como asesor con tres primeros ministros antes de que Musharraf llegara al poder y que es profesor visitante del Carnegie Endowment for International Peace, destacó con cierto orgullo cuando nos entrevistamos, a principios de 2004, que su país había conseguido fabricar la bomba a pesar de las sanciones norteamericanas. Pero, añadió, Khan y sus colegas la habían vendido al mayor: «Se hicieron con una lista de la compra de lo que tenían que adquirir y dónde. Khan podría anotarme en un papel cómo fabricarla: los países, los contactos y los números de teléfono. "Éste es el tipo en Rusia que puede conseguirte pequeñas cantidades de uranio enriquecido. Éste, en Malasia, te fabricará el chisme. Aquél te fabricará una cabeza nuclear de tamaño reducido. Y luego te vas a Corea del Norte a que te consigan el maldito misil"». Y añadió: «No se trata de unos cuantos científicos que se meten el dinero en el bolsillo y se hacen ricos. Se trata de una política de Estado».

Haini describió a Musharraf como sinceramente «del lado norteamericano» en cuanto a su oposición al extremismo islámico, pero «no sabe cómo estar en ese lado. Espera que los tipos del ISI, que se han ocupado del tema durante los últimos veinte años, sean sus socios. Pero esa gente no ha hecho otra cosa que operaciones secretas: uno, fastidiar a India;

dos, engañar a Estados Unidos; tres, extender la influencia de Pakistán en la comunidad islámica; y cuatro, continuar diseminando la tecnología nuclear». Hizo una pausa. «Musharraf está intentando apagar el fuego con la ayuda de la gente que lo inició», concluyó.

«El espionaje norteamericano tiene conocimiento de esto desde hace décadas —añadió—. Pero a veces sabes cosas y no quieres hacer nada con ellas. Los norteamericanos tienen que saber que su Gobierno no sólo está minimizando la importancia de todo esto, sino además ocultándolo. Se meten en la cama con el ISI, y éste sabe cómo embaucarte. Nos dejáis marcharnos con todo. ¿Por qué no podéis ser más honestos? Decirnos la verdad no hace daño a nadie: "Mira, tú eres un aliado, pero un aliado muy molesto". Algunas de estas cosas tienen que cortarse de raíz».

En enero de 2004, Musharraf reiteró, esta vez ante el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), que no permitiría que tropas norteamericanas buscaran miembros de Al Qaeda en territorio paquistaní. «No existe ninguna posibilidad —dijo—. Es un tema muy delicado. No tiene ningún sentido que entren soldados extranjeros a ayudarnos. No necesitamos ayuda».

Sin embargo, un asesor del Pentágono me dijo que la ofensiva de primavera estaba en marcha a mitad de febrero. Estaba previsto que la operación supondría un nuevo despliegue en el sureste asiático de miles de soldados norteamericanos, entre ellos miembros de la Task Force 121. La concentración logística empezó a mediados de febrero, cuando más de una docena de aviones de carga C-17 iniciaron sus vuelos diarios, transportando helicópteros, vehículos y otro equipamiento a bases militares de Pakistán. Pequeñas unidades de las Fuerzas Especiales estaban estacionadas en el noroeste del país desde el inicio de la guerra de Afganistán en otoño de 2001.

El asesor del Pentágono, igual que otros militares y funcionarios de inteligencia con los que hablé en aquella época,

se mostró cauteloso respecto a las probabilidades de conseguir lo que la Casa Blanca quería: la captura o muerte de Osama bin Laden. «Es lo que piensa todo el mundo», dijo, y añadió que la seguridad operacional para apoyar la ofensiva era escasa. El ex funcionario de inteligencia destacó de modo similar que en el Mando de Operaciones Especiales en Fort Bragg, Carolina del Norte, reinaba preocupación sobre la fiabilidad de las llamadas telefónicas interceptadas a Al Qaeda. «¿Y si es un fraude? —dijo—. Esos tipos no son sordos, y en cuanto empiece a aparecer toda la logística aérea [los C-17 norteamericanos que aterrizaban en las bases paquistaníes] sabrán que hay algo en marcha».

«Tenemos que encontrar a Bin Laden y sabemos dónde está», dijo en aquel momento el ex funcionario de inteligencia. Bin Laden estaba «comunicando a través de SIGINT [inteligencia de señales mediante teléfonos móviles y similares] y le han cortado las alas. Está en su propio Álamo en el norte de Pakistán. Nuestro avance ha sido correcto, ir reduciendo progresivamente las distintas localizaciones y luego apuntar al blanco. No es, en teoría, nada de "vamos a ver qué ocurre". Han visto a quien suponen que es él». Pero añadió que había motivos para mostrarse cauteloso sobre los informes, teniendo en cuenta que hacía mucho tiempo que no se veía a Bin Laden.

Dos antiguos funcionarios de la CIA con conocimiento de primera mano del área fronteriza entre Pakistán y Afganistán dijeron que el asalto norteamericano, en caso de producirse, comportaría enormes problemas logísticos. «Es un lugar impenetrable —dijo Robert Baer, que visitó la zona del Hindu Kush a principios de los noventa, antes de ser puesto al mando de las operaciones anti-Sadam en el norte de Irak—. No hay carreteras y no puedes avanzar con blindados. Allí fue donde Alejandro el Grande perdió toda una división. Los rusos ni siquiera se molestaron en intentarlo. Todo el mundo va armado. Esa zona es peor que Irak». Milton Bearden recordó: «He recorrido toda esa zona. Su población pastún lleva más tiempo viviendo allí que cualquier otro gru-

po étnico pueda llevar viviendo en otra zona de la tierra». Y añadió: «Nuestros servicios de inteligencia tienen que ser mejores de lo que han sido hasta ahora. Siempre que nos metemos en algo dirigido enteramente por políticas electorales, no funciona».

Un asesor de inteligencia destacó que en operaciones previas efectivos estadounidenses en Afganistán habían pasado a Pakistán para «perseguir muy de cerca» a supuestos miembros de Al Qaeda, sin recibir por ello queja alguna por parte del Gobierno paquistaní. Si los efectivos norteamericanos dieran un golpe rápido y decisivo contra Bin Laden desde el interior de Pakistán, «Musharraf diría que no dio autorización para el avance. Avanzaríamos con tanta fuerza y artillería, imponiendo tanta sorpresa y pavor, que seriamos demasiado rápidos para él. La cuestión es hasta qué punto de Pakistán podemos adentrarnos para atraparlo. Musharraf está en una posición muy complicada».

En casa, Musharraf estaba todavía entre la espada y la pared respecto a la gestión del tema nuclear. Chaudry Nisar Ali Khan, antiguo ministro del Gobierno que actualmente encabeza un partido de la oposición, dijo: «La opinión pública paquistaní tiene la sensación de que Abdul Qadeer Khan se ha convertido en un chivo expiatorio, y la opinión internacional piensa que es una amenaza. En ambos casos, Musharraf lleva las de perder. El hombre de la calle piensa que habrá una reducción de nuestra capacidad nuclear y que la fuerza disuasoria de Pakistán desaparecerá. Todo se resume en un desastre absoluto para Musharraf. Ha abierto la caja de Pandora y nunca será capaz de cerrarla».

Las unidades especiales estadounidenses llegaron a Pakistán en la primavera de 2004, como he mencionado, pero muy secretamente (y sólo después de que Musharraf organizara una sorprendente ofensiva por su propia cuenta en el Hindu Kush). A mitad de marzo, el Gobierno paquistaní anunció que tenía centenares de soldados librando una dura batalla contra fuerzas de Al Qaeda y otros terroristas. El mismo

Musharraf explicó a un periodista de la CNN que estaba seguro de que en la zona «existe un objetivo de elevado valor», y que hombres de confianza del Gobierno fomentaban la especulación en torno a que el doctor Ayman al Zauahiri, el colaborador más veterano de Bin Laden, estaba a punto de ser capturado... si no el propio Bin Laden.

Durante las dos semanas siguientes, el ejército paquistaní libró una serie de batallas contra lo que se dijo que eran centenares de extremistas, con numerosas bajas en ambos bandos. Al final no se capturó a ningún miembro importante de Al Qaeda y, a pesar de las muchas especulaciones de la prensa internacional, no quedó claro quién combatía contra quién ni por qué. Tal como lo expresó el *New York Times:* «Lo que había sucedido exactamente en ese rincón aislado de Pakistán donde se desarrolló la batalla era un misterio [...] y la pregunta fundamental se centraba en el ejército paquistaní: ¿con cuánto empeño intentaron realmente capturar y eliminar terroristas?». Una posibilidad, naturalmente, era que el siempre cuidadoso Musharraf había desplegado una pantalla de humo para camuflar las Fuerzas Especiales norteamericanas. Esos comandos, de la Task Force 121 del vicealmirante McRaven, seguían a la caza de Bin Laden en el interior de la frontera paquistaní durante la primavera y el verano de 2004, pero con gran discreción, y mientras tanto Musharraf era capaz de sobrevivir a la presión política del ejército y el ISI. Sin embargo, a medida que los meses fueron pasando y que las elecciones presidenciales norteamericanas se acercaban, la pregunta básica seguía ahí: ¿dónde estaba Osama bin Laden?

Capítulo VIII

Oriente Próximo después del 11-S

El fantasma de un fracaso norteamericano en Irak, además de provocar nuevas preocupaciones y nuevas alianzas, ha reorganizado el tablero político en Oriente Próximo. Antes de la guerra, los neoconservadores de la Administración Bush se habían convencido a sí mismos —y al presidente y al vicepresidente— de que el camino hacia la democratización de Oriente Próximo pasaba por Bagdad. Una vez que el régimen de Sadam Husein fuese derrocado, la democracia se extendería por Irak y pasaría a Irán, Siria, Arabia Saudí y Líbano. Los países de la región renunciarían al terrorismo y abrazarían a Occidente. Por su parte, los israelíes acogieron de buen grado la invasión porque de esa manera Estados Unidos, su mejor valedor, tendría mucha mayor presencia en la zona.

Pero las cosas no salieron tal como se esperaba: lo que se extiende actualmente por la región es el terrorismo, no la democracia. En este capítulo se habla de países que tienen un importante elemento en común: presentan retos que la Administración Bush, obsesionada con Irak, no ha estado dispuesta a abordar. En Arabia Saudí, una familia real corrupta está implicada en su propio movimiento de oposición; Irán, el actual poder dominante en la región, está en los límites de convertirse en una potencia nuclear; y Siria se encuentra dividida entre su deseo de colaborar con Occidente y su autoproclamado papel como líder panárabe. Los israelíes están también descontentos y persiguen una arriesgada alianza con los kurdos, mientras que Siria, Irán y Turquía han dejado de

lado sus rivalidades regionales para formar una nueva alianza. Todos estos países se han visto directamente afectados por el caos que se vive en la región, para el cual la Administración Bush parece tener pocas respuestas. El resultado: la tensión va en aumento y el peligro también.

Arabia Saudí: corrupción y compromiso

Desde 1994, o antes, la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) ha estado interceptando electrónicamente conversaciones telefónicas entre miembros de la familia real saudí, encabezada por el rey Fahd. Estas conversaciones revelaban un régimen cada vez más corrupto, alejado de las masas religiosas del país y tan debilitado y atemorizado que, buscando congraciarse con el fundamentalismo, había hipotecado su futuro canalizando cientos de millones de dólares precisamente hacia grupos que sólo deseaban derrocarlo.

Las interceptaciones demostraron que en 1996 el dinero saudí fluía hacia Al Qaeda y otros grupos extremistas de Afganistán, Líbano, Yemen, Asia Central y la región del Golfo. «El año clave fue 1996 —me comentó un funcionario de la inteligencia norteamericana—. Bin Laden consiguió aglutinar a todos los malos, formar algo así como la «Gran Alianza», y a partir de entonces dispuso de capacidad para llevar a cabo operaciones a gran escala». A medida que Bin Laden se convirtió en «una fuerza demasiado poderosa para hacerle frente», el régimen saudí «pasó al lado oscuro».

En entrevistas realizadas poco después del 11-S, funcionarios de los servicios de inteligencia y militares consideraron que la inestabilidad del régimen saudí y la vulnerabilidad de sus pozos petrolíferos a los ataques terroristas constituían la amenaza más inmediata para la economía norteamericana y los intereses políticos en Oriente Próximo. Y añadieron que la Administración Bush, igual que la de Clinton, se negaba a afrontar esta realidad, incluso tras los atentados terroristas.

Saudíes y norteamericanos coordinaron una reunión entre el secretario de Defensa Donald Rumsfeld y el rey Fahd durante una visita del primero a Arabia Saudí, poco después del inicio de la ofensiva aérea en Afganistán, en octubre de 2001, y posteriormente se distribuyeron por todo el mundo las fotografías de la reunión. Estados Unidos, sin embargo, sabía que el rey Fahd estaba incapacitado desde que sufriera una grave apoplejía a finales de 1995. Un asesor saudí me comentó que durante la visita el rey, sometido a tratamiento constante, había conseguido sentarse en una silla y abrir los ojos, pero que habitualmente ni siquiera reconocía a sus viejos amigos. Las conversaciones interceptadas indicaban que Fahd seguía en el trono debido a una amarga disputa familiar por el poder. El sucesor nominal de Fahd a la corona es el príncipe heredero Abdulah, su hermanastro, quien hasta cierto punto es el verdadero gobernante del país; él y el príncipe Sultán, ministro de Defensa, eran las personas a quienes Rumsfeld fue realmente a ver. Pero había una lucha interna por cuestiones de dinero: Abdulah llevaba tiempo instando a Sultán a que abordara el problema de la corrupción en el reino (sin éxito, a tenor de las interceptaciones). «El único motivo por el que mantienen a Fahd con vida es porque no quieren que Abdulah se convierta en rey», me dijo un antiguo asesor de la Casa Blanca.

Anteriormente, los funcionarios del espionaje norteamericano se habían mostrado particularmente molestos ante la negativa de los saudíes a proporcionarles pistas de identificación —es decir, comprobaciones de nombres y otra información básica— sobre los diecinueve hombres que tomaron parte en los ataques a las Torres Gemelas y el Pentágono, cuando se creía que quince de ellos procedían de Arabia Saudí. «Sabían que en cuanto empezáramos a seguir las pistas la lista aumentaría —me dijo un ex funcionario—. Les pareció mejor cerrar la boca de entrada». Y mencionó que miles de saudíes descontentos se habían unido a grupos fundamentalistas de todo Oriente Próximo. Un mes después de los atentados, un funcionario de inteligencia me confirmó la falta de

cooperación saudí y me dijo, enfadado, que la familia real «tiene una única constante: mantenerse en el poder».

Las conversaciones interceptadas por la NSA revelaron la hipocresía de muchos miembros de la familia real y por qué ésta estaba cada vez más apartada de la amplia mayoría de sus súbditos. Con el paso de los años, acobardados por la fuerza creciente del movimiento fundamentalista, no habían abordado los conflictos subyacentes que una elevada tasa de desempleo y una pobre política de educación provocaban en un país donde la mitad de la población tiene menos de dieciocho años de edad. La rigurosa interpretación del islam por parte de Arabia Saudí, conocida como wahabismo, y su utilización de la policía religiosa para obligar al cumplimiento de la oración, sólo encontraba rival en los talibanes. Y aun así, los periódicos sensacionalistas aparecían llenos de noticias sobre los príncipes saudíes (los hay a miles) emborrachándose y yendo de juerga con prostitutas, dilapidando millones de dólares de las arcas estatales. Las conversaciones interceptadas ofrecían datos más concretos. En una llamada, el príncipe Nayef, durante más de dos décadas ministro del Interior, instaba a un subordinado a ocultar a la policía las pruebas del alquiler de prostitutas realizado, presumiblemente, por miembros de la familia real. Según el resumen de la conversación, Nayef decía que no quería que la «lista de clientes» se hiciera pública bajo ninguna circunstancia.

Estas llamadas entre diversos miembros de la familia real, entre ellos Abdulah, Nayef, Sultán (cuyo hijo, el príncipe Bandar, era embajador en Estados Unidos desde 1983) y el príncipe Salman (gobernador de la capital, Riad), dieron como resultado un torrente de información, algunas veces tediosa pero a menudo fascinante. Después de la apoplejía sufrida por el rey Fahd se produjo un aluvión de llamadas relacionadas con su estado de salud y con disputas para aprovecharse de la situación. El 8 de enero de 1997, el príncipe Sultán le comentó a su hijo Bandar las circunstancias de un vuelo que él y Salman habían hecho con el rey. Sultán se que-

jaba de que el monarca «apenas habló con nadie» porque estaba «excesivamente medicado». Y añadió que el rey parecía «un prisionero».

Los comentarios de Sultán se hicieron mucho más significativos unos días después, cuando la NSA interceptó una conferencia en la que le explicaba a su hijo que el rey había dado su conformidad a una complicada compra de aviones a Estados Unidos que aportaría cinco F-16 a la fuerza aérea saudí. Evidentemente, Fahd era incapaz de llevar a buen fin tal acuerdo, o de evitar que alguien hablara en su nombre en un trato para ganar dinero.

En las llamadas interceptadas, los príncipes hablaban abiertamente sobre sus estafas al Estado y discutían incluso acerca de qué porcentaje exigir. Algunas indicaban que, siendo embajador, el príncipe Bandar había estado implicado en negocios de armas en Londres, Yemen y la Unión Soviética que le habían reportado millones de dólares en «comisiones». El 9 de octubre de 2001, en una entrevista radiofónica en el programa *Frontline* de la PBS, cuando se le preguntó a Bandar sobre los informes de corrupción de la familia real, respondió con soltura. La familia había gastado casi cuatrocientos mil millones de dólares en el desarrollo de Arabia Saudí, dijo. «Si me dice usted que para modernizar nuestro país [...] hemos utilizado de forma indebida o malversado cincuenta mil millones, le diré que sí [...]. ¿Y qué? Nosotros no hemos inventado la corrupción, como tampoco la descubrieron esos disidentes, que, por cierto, tan geniales son».

Sin embargo, otras conversaciones revelaron que el príncipe heredero Abdulah insistía en frenar la corrupción. En noviembre de 1996, por ejemplo, se quejó sobre los miles de millones de dólares que los miembros de la familia real desviaban de un importante proyecto financiado por el Estado para la renovación de la mezquita de La Meca, e instó a los príncipes a controlar sus gastos extrapresupuestarios; se sabe que dichos gastos son el refugio del dinero procedente de sobornos. (A pesar de sus beneficios petroleros, Arabia Saudí ha arrastrado déficit presupuestario durante las dos últimas

décadas, excepto en un año, y actualmente tiene una importante deuda internacional). Unos meses después, Abdulah bloqueó una serie de negocios inmobiliarios de uno de los príncipes, enfureciendo con ello a la familia real. Abdulah alarmó aún más a los príncipes al promulgar un decreto prohibiendo que sus hijos tuvieran tratos con empresas extranjeras radicadas en el país.

Abdulah estaba considerado por Sultán y otros rivales un líder capaz de hacer peligrar la relación con el mejor amigo extranjero, como alguien dispuesto a penalizar a Estados Unidos, y a sus empresas petroleras y de gas, debido al apoyo que prestaba a Israel. En una conversación interceptada el 13 de julio de 1997, el príncipe Sultán le contó a su hijo: «Le he dicho a Abdulah que no busque tanto enfrentamiento con Estados Unidos».

El régimen de Fahd fue uno de los principales respaldos financieros de la campaña anticomunista que la Administración Reagan emprendió en Latinoamérica y de su exitosa guerra por poderes en Afganistán contra la Unión Soviética. El dinero del petróleo proporcionaba a los saudíes un enorme acceso político y muchas influencias en Washington. A través del príncipe Bandar, contribuyeron con cientos de millones de dólares en obras de caridad y programas educativos en Estados Unidos. Las empresas constructoras y petroleras norteamericanas hacían cada año negocios de miles de millones de dólares en Arabia Saudí, el mayor productor mundial de petróleo. (A finales de 2000, Halliburton, la compañía petrolera con sede en Texas y dirigida anteriormente por el vicepresidente Cheney, poseía diversas franquicias en Arabia Saudí).

En la era Clinton, la Casa Blanca siguió haciendo negocios con los saudíes, animándolos a comprar productos norteamericanos, como aviones Boeing. El reino estaba considerado un socio de Estados Unidos entre las naciones productoras de petróleo de Oriente Próximo. Se advertía a la CIA que no llevase a cabo operaciones arriesgadas en el inte-

rior del país y, según un antiguo funcionario, hubo escaso reclutamiento entre la población saudí, lo que limitó los conocimientos que pudiera tener el Gobierno norteamericano sobre el crecimiento de la oposición a la familia real.

En 1994, Muhamad al Jileui, primer secretario de la delegación saudí en las Naciones Unidas, desertó y pidió asilo político en Estados Unidos. Se llevó consigo, según su abogado neoyorquino Michael J. Tildes, cerca de catorce mil documentos internos del Gobierno en los que se describía la corrupción de la familia real, las violaciones de los derechos humanos y el apoyo económico a los terroristas. Declaró disponer de pruebas de que los saudíes habían proporcionado ayuda financiera y técnica a Hamás, el grupo extremista islámico cuyo objetivo es Israel. Hubo una reunión en el despacho del abogado con dos funcionarios del FBI y un ayudante del fiscal general. «Les enseñamos una muestra de los documentos y los pusimos sobre la mesa —me dijo Tildes un mes después del 11-S—. Pero los funcionarios se negaron a aceptarlos». Ni él ni su cliente tuvieron más noticias de las autoridades federales. Al Jileui, a quien se le concedió el asilo, vive actualmente con medidas de protección.

Los saudíes estaban además resguardados de la burocracia de la política exterior de Washington. Un experto del Gobierno en tales asuntos me dijo que el príncipe Bandar trataba exclusivamente con los peces gordos y que nunca se reunía con mandos intermedios. «Sólo unos pocos miembros del Gobierno conocen las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudí —explicó—. Y es algo totalmente intencionado».

Después del 11-S, la familia real insistió repetidamente en que Arabia Saudí no había realizado ningún tipo de contribución a grupos radicales islámicos. Y con respecto a los informes de prensa que afirmaban que parte de los sustanciosos fondos proporcionados rutinariamente por la monarquía a instituciones benéficas islámicas podían, en realidad, haber ido a parar a Al Qaeda y a otros grupos terroristas, negaron tener conocimiento de esos traspasos. (El príncipe Sultán repitió esta historia en su conferencia de prensa con

Rumsfeld el 3 de octubre, declarando que su país «no aprueba bajo ningún concepto ni está de acuerdo bajo ningún concepto con el apoyo al terrorismo», y que nadie en el reino financia a esos grupos).

Las conversaciones interceptadas, sin embargo, han llevado a muchos miembros de los servicios de inteligencia a pensar precisamente lo contrario. Por ejemplo, según un funcionario que conocía sus contenidos, las conversaciones demuestran que el Gobierno saudí, a través del príncipe Salman, contribuía con millones de dólares a organizaciones benéficas que, a su vez, redistribuían el dinero a fundamentalistas. «Sabíamos que Salman estaba apoyando esas causas», me dijo.

El 31 de julio de 1996, la NSA interceptó un mensaje en clave procedente de los servicios de inteligencia iraníes que revelaba que Abdulah Nuri, un fundamentalista radical por entonces embarcado en una guerra política en Tajikistán, había asistido a una reunión en Irán con Bin Laden (descrito por los iraníes como «la cabeza del movimiento islámico en Arabia Saudí»). En la reunión, Bin Laden pidió a Nuri «abandonar la guerra civil contra el Gobierno de Tajikistán y luchar contra Estados Unidos». Bin Laden envió un mensaje similar a un importante terrorista egipcio. Por entonces, o poco después, el espionaje norteamericano dispuso de información suficiente para llegar a la conclusión de que tanto Nuri como Bin Laden estaban recibiendo dinero de destacados saudíes.

La Administración decidió no enfrentarse al Gobierno saudí por su apoyo económico a organizaciones terroristas y por su negativa inicial a colaborar en la investigación. «En cuanto a Arabia Saudí, no hemos tenido otra cosa que cooperación», dijo el presidente Bush en una rueda de prensa el 24 de septiembre de 2001. Al día siguiente, los saudíes rompieron formalmente las relaciones diplomáticas con el Gobierno talibán afgano. Una semana después, en una conferencia de prensa en Arabia Saudí con el príncipe Sultán, a Rumsfeld le preguntaron si había proporcionado a los saudíes una lista de sospechosos del 11-S para que sus servicios de inteligen-

cia pudieran procesarla. El secretario de Defensa, apreciado por muchos periodistas por su franqueza, respondió con evasivas: «Como he dicho, no estoy en contacto con la oficina federal que está llevando a cabo la investigación [...]. Pero tengo todas las razones del mundo para creer que la relación entre nuestros dos países es tan estrecha que sin duda hemos proporcionado a Arabia Saudí cualquier información que tengamos disponible».

Los saudíes dieron a Rumsfeld algo a cambio: permiso para que el ejército norteamericano utilizara para la ofensiva aérea contra los talibanes un centro de mando y control construido antes de la guerra del Golfo. En los años precedentes habían permitido asimismo que Estados Unidos utilizase bases en suelo saudí para operaciones especiales, siempre y cuando no se hiciera mención pública de los acuerdos.

La intervención norteamericana en Afganistán desató la alarma en la comunidad petrolera internacional y entre los funcionarios de inteligencia que habían sido informados de un estudio de la CIA, compilado a mitad de los ochenta y que seguía siendo secreto, sobre la vulnerabilidad de los campos saudíes a los ataques terroristas. El informe era «tan susceptible», me dijo un ex funcionario de la CIA, «que estaba mecanografiado», y no se había introducido en el sistema informático de los servicios, por lo que su distribución estaba limitada a unas pocas personas seleccionadas. Según alguien que lo leyó, el informe concluía que los terroristas podían inutilizar los campos petrolíferos durante dos años con sólo una pequeña cantidad de explosivos.

Después del 11 de septiembre, la preocupación, tanto en Estados Unidos como en Arabia Saudí, por la seguridad de los campos petrolíferos se convirtió en un asunto de máxima prioridad. Un antiguo funcionario de inteligencia describió a los gobernantes saudíes como nerviosamente «sentados sobre un barril de dinamita —es decir, las reservas petrolíferas—. Están aterrorizados ante la idea de que a alguien se le ocurra prender la mecha».

«Estados Unidos es rehén de la estabilidad del sistema saudí —me dijo pocas semanas después de los atentados un destacado petrolero de Oriente Próximo, que solicitó que su nombre no fuese mencionado—. Ha llegado el momento de enfrentarse a la verdad. La guerra la declaró Bin Laden, pero hay centenares de Bin Laden. Y son ellos los que imponen las reglas del juego. Se trata de un nuevo tipo de guerra, una guerra para la cual esta fabulosa maquinaria militar vuestra es completamente inútil». El petrolero, que lleva tres décadas trabajando estrechamente con el Gobierno saudí, añadió: «He estado hablando con esa gente, y también les he escuchado. Muchas personas como yo han estado engañándoos. Sabemos que no comprendéis el islam, que no hacéis más que análisis tremendamente genéricos. Intentamos complaceros, pero llevamos años sintiéndonos ofendidos».

El régimen saudí «explotará con el tiempo —añadió—. Han estado jugando a un juego muy peligroso». En cuanto a los terroristas responsables del 11-S, dijo: «Ahora son ellos quienes deciden el lugar y el momento adecuado. Si llevan a cabo una operación similar en Arabia Saudí, el precio del petróleo subirá hasta cien dólares el barril. Estamos ante un asunto complicado y de difícil solución. Los norteamericanos tienen que comprender las sutilezas y los matices. Pero no hay nadie, se lo aseguro, desde George Bush a Colin Powell, capaz de sentarse con usted y ofrecerle un análisis serio del mundo islámico, y eso que son ellos los que toman las decisiones. Me temo que esto llegará a un punto en que ningún norteamericano podrá pasear tranquilamente por las calles de una sociedad fundamentalista».

En la década de 1980, en su esfuerzo por aliviar la presión política sobre el régimen, el Gobierno saudí renunció a parte de su autoridad para traspasarla a la policía religiosa y permitirle tener un papel más destacado en la vida diaria. En octubre de 2001, un experto norteamericano en asuntos saudíes se quejaba de que se había permitido a los líderes religiosos hacerse con el control de la prensa y el sistema educativo. «Hoy en día, dos tercios de los licenciados saudíes lo son en estudios islámi-

cos», me dijo un antiguo asesor presidencial. En todos estos años, la diplomacia norteamericana y la Casa Blanca han llevado a cabo pocos intentos de moderar la cada vez más dura retórica antiamericana. «Nuestro país se vio atrapado en acuerdos privados [con los príncipes saudíes] mientras la prensa saudí vomitaba toda esa mierda. Eso fue un grave error».

Un diplomático norteamericano que sirvió muchos años en Arabia Saudí recordó el presentimiento que tuvo mientras asistía a un ejercicio de prácticas en la academia militar más prestigiosa del reino, en Riad: «Hacía calor, y estaba observando a los cadetes hacer instrucción. Mientras, los oficiales ganduleaban en el interior de un *suradiq* [un amplio pabellón], tomando bebidas frías y vociferando órdenes por los altavoces. Entonces me pregunté: ¿cuántos de estos jóvenes seguirían y morirían por estos oficiales?». Y añadió que estaba convencido de que «a un grupo de veinte o treinta fundamentalistas bien entrenados no le costaría mucho hacerse con el poder. ¿Cómo reaccionaría el reino ante el ataque por sorpresa de un grupo implacable, pequeño, tremendamente motivado y de gran rapidez de acción?».

«Los saudíes llevan muchas décadas de indulgencia —prosiguió—. Están muy mimados. Siempre lo han hecho todo a su manera. Apenas podemos decir nada que pueda impedir la "majestuosa inminencia" de sus avances. Somos sus jenízaros [los cautivos que se convirtieron en las tropas de élite del Imperio otomano]».

«El dilema político es el siguiente —me dijo un general—: ¿cómo ayudamos a los saudíes a realizar una transición sin arrojarlos por la borda?». Y refiriéndose a los jóvenes fundamentalistas que habían estado manifestándose por las calles saudíes, dijo: «Los niños son más grandes que el papá».

Siria: la oportunidad perdida

La noche del 18 de junio de 2003, la Task Force 20, una unidad de Operaciones Especiales estacionada en Irak, llevó sus

acciones docenas de kilómetros en el interior de Siria. La inteligencia militar había observado la presencia de un gran número de vehículos dirigiéndose a la frontera y se sospechó que transportaban miembros huidos del Gobierno iraquí. La interceptación de diversas comunicaciones indicaba que a lo largo de la frontera había más soldados sirios de lo habitual, entre ellos algunos oficiales de alto rango. Los norteamericanos llegaron a la conclusión, según un funcionario, de que «algo se traían entre manos». Dos días antes había sido capturado uno de los colaboradores más cercanos a Sadam, Abid Hamid Mahmud, quien había confesado que él y los dos hijos de Sadam habían buscado refugio en Siria, pero luego habían regresado a su país. A pesar de que el Gobierno sirio negó tener conocimiento del paradero de los hermanos Husein, el ejército estaba preparado para cruzar la frontera y frustrar cualquier intento de fuga. Poco después de la medianoche, helicópteros y blindados Bradley atacaron dos caravanas de vehículos que se internaban en Siria, provocando grandes explosiones y bolas de fuego que iluminaron el cielo nocturno. Resultaron destruidas una gasolinera y las casas cercanas. La Task Force 20 cruzó la frontera y se adentró en Siria. Cinco guardias sirios resultaron heridos y trasladados a Irak en helicópteros norteamericanos para recibir asistencia médica, y otros sirios fueron capturados y esposados antes de ser liberados.

Funcionarios del Pentágono elogiaron posteriormente la misión nocturna. «Confío en la calidad de la información de que disponemos», dijo el 24 de junio, en una rueda de prensa en el Pentágono, el general Richard B. Myers, jefe del Estado Mayor Conjunto. Rumsfeld dijo a los periodistas: «Había razones, buenas razones, para creer que los vehículos que estaban violando el toque de queda en la zona estuvieran haciéndolo por motivos distintos del comercio normal». Preguntado por si creía que en la incursión habían muerto importantes líderes iraquíes, respondió: «Estamos intentando averiguarlo».

En realidad, según funcionarios y diplomáticos norteamericanos, la operación fue un fiasco en el que perdieron

la vida hasta ochenta personas: los ocupantes de los vehículos y civiles que vivían en los alrededores. Al final resultó que se trataba de contrabandistas de gasolina. El Gobierno sirio habló públicamente poco sobre la violación de su soberanía, aun cuando el Pentágono retrasó diez días la repatriación de los guardias fronterizos heridos (a los periodistas se les dijo que no habían acabado de interrogarlos).

Semanas después seguían sin respuesta varias preguntas sobre la incursión: ¿por qué habían cruzado la frontera los efectivos norteamericanos? ¿Y por qué la respuesta siria había sido tan silenciosa? Un asesor norteamericano que acababa de regresar de Irak dijo: «No me importa tanto lo que hicimos como la incompetencia con la que lo hicimos». Al mes siguiente, dos veteranos retirados de la CIA, Vincent Cannistraro y Philip Giraldo, que asesoraban en asuntos de información, destacaron que los ataques se habían basado en información «fragmentaria y ambigua» y que la tensión entre Rumsfeld y el director de la CIA, George Tenet, era cada vez mayor.

La implicación de Tenet fue significativa. Funcionarios de la inteligencia norteamericana y del Departamento de Estado me dijeron que a principios de 2002 Siria se había convertido en uno de los aliados más efectivos de la CIA en su lucha contra Al Qaeda, proporcionando una profusa información que se interrumpió tras la invasión de Irak. Tenet se había erigido en uno de los defensores de Siria en el debate interno de la agencia sobre cómo tratar con su Gobierno. Entre sus antagonistas se encontraban elementos civiles del Pentágono que consideraban a Siria, a pesar de su colaboración, como parte del problema. «Tenet ha evitado todo tipo de acción contra Siria», me dijo un diplomático conocedor de las discusiones internas de la agencia.

Siria es uno de los siete países que el Departamento de Estado considera patrocinadores del terrorismo. Ocupa un puesto en la lista desde 1979, en gran parte debido a su apoyo público a Hezbolá, el partido radical islámico que controla

buena parte del sur del Líbano. Hezbolá se responsabilizó, entre otras acciones, del atentado de 1983 en Beirut que acabó con la vida de doscientos cuarenta y un marines. Siria ha permitido también que Hamás y la Yihad Islámica Palestina, dos grupos que han cometido numerosos actos terroristas suicidas en Israel, mantengan oficinas en Damasco.

A pesar de ello, después del 11-S el líder sirio Bashar Assad decidió colaborar con Estados Unidos. Los sirios habían reunido centenares de archivos sobre Al Qaeda, incluyendo los de hombres que habían participado, y los de otros que querían participar, en los atentados del 11-S. Siria se infiltró además en células de Al Qaeda a través de comunidades de exiliados de Oriente Próximo y del mundo árabe diseminadas por Europa. Estos datos empezaron a fluir hacia la CIA y el FBI.

Siria había obtenido gran parte de su información gracias a los vínculos de Al Qaeda con la Hermandad Siria Musulmana, un grupo terrorista que estaba en guerra con el Gobierno sirio desde hacía más de dos décadas. Muchos de los secuestradores del 11-S habían surgido de las células de Aquisgrán y Hamburgo, donde Al Qaeda trabajaba con la Hermandad. A finales de los noventa, Mohamed Atta y otros miembros de Al Qaeda, entre ellos Mohamed Haydar Zamar, considerado uno de los principales reclutadores de la organización, trabajaron temporalmente en una empresa alemana llamada Tatex Trading. En los años ochenta, Tatex tenía infiltrados en su nómina diversos miembros del espionaje sirio; uno de sus accionistas era Mohamed Majed Said, jefe de los servicios de inteligencia sirios desde 1987 hasta 1994. A mediado de 2002, Zamar se encontraba bajo custodia siria.

Semanas después del 11-S, el FBI y la CIA, con permiso de Siria, iniciaron operaciones en Alepo, cerca de la frontera con Turquía, con el objetivo de obtener información. Alepo era el tema de la tesis que Mohamed Atta había realizado sobre planificación urbanística y viajó allí dos veces mediada la década de 1990. «La Hermandad Musulmana aparece en todas las etapas del viaje de Atta —me dijo un ex agente de la CIA que había trabajado en Damasco—. En España

mantuvo contactos con la Hermandad de Hamburgo». Robert Baer, funcionario retirado de la CIA que también trabajó en Siria, coincidía en que los sirios tenían más cosas que ofrecer. «Saben que los saudíes estaban implicados en la financiación de la Hermandad Musulmana, y estoy seguro de que conocen los nombres», me dijo.

Siria proporcionó también información sobre planes futuros de Al Qaeda. En un caso, los sirios se enteraron de que la red terrorista se había infiltrado en los servicios de seguridad de Bahrein y había hecho los preparativos para que un planeador lleno de explosivos se estrellara contra un edificio del cuartel general que la Quinta Flota norteamericana tiene allí. Flynt Leverett, ex analista de la CIA que trabajó para el Consejo de Seguridad Nacional, me dijo que la ayuda siria «nos permitió desbaratar una operación que, de haberse llevado a cabo, habría matado a muchos norteamericanos».

La voluntad de colaboración de Siria pareció confundir a la Administración Bush, que seguía obsesionada con Irak. Según muchos funcionarios a los que entrevisté, la Administración no estaba preparada para aprovechar la situación y tampoco dispuesta a revisar su relación con el Gobierno de Assad. Leverett me dijo que «la calidad y la cantidad de la información proporcionada por Siria excedía las expectativas de la agencia. Pero los sirios, desde su perspectiva, estaban obteniendo muy poco a cambio».

Hafez Assad, el padre de Bashar Assad, gobernó Siria durante treinta años a través del partido socialista Baaz. El periodista Thomas Friedman le ha descrito como «un hombre que hacía muchos años que había perdido todas sus ilusiones sobre la naturaleza humana». Trataba a sus oponentes con brutalidad. En 1982, después de años de atentados terroristas cada vez más violentos por toda Siria, Hafez Assad ordenó un ataque militar contra la Hermandad Musulmana en la ciudad norteña de Hama. Consideraba al grupo una amenaza a su control de Siria, y sus fuerzas, exhibiendo escasa piedad, acabaron con la vida de al menos cinco mil personas, muchas

de ellas civiles, en una batalla de un mes de duración que dejó la ciudad en ruinas. Su hijo asumió la presidencia poco después de la muerte de Hafez, en junio de 2000.

A diferencia de su padre, Bashar ha sido casi siempre definido por la prensa occidental no como una persona despiadada, sino como alguien inseguro, inexperto e incapaz de controlar una vieja guardia corrupta. En junio de 2003 lo visité en su despacho de Damasco. Alto, desgarbado y aparentemente tímido y dispuesto a complacer, Assad me aguardaba en la puerta. Compensaba con humor su aspecto indeciso y, en cierto sentido, quisquilloso. Se mostró franco al explicarme los motivos por los que deseaba hablar conmigo: quería cambiar su imagen y la de su país. «El 11 de septiembre pareció extraído de una película de Hollywood... más allá de la imaginación de cualquiera —dijo—. Pero el sentimiento resultante no fue ninguna sorpresa para nosotros. Hemos experimentado la muerte de inocentes en nuestras propias calles y sabemos lo que se siente». Siria había enviado sus condolencias oficiales, respaldadas con ofertas para compartir información. «Pensábamos que Al Qaeda no era distinta de la Hermandad Musulmana en cuanto a sus métodos», comentó.

«Para nosotros, [el 11-S] fue una buena oportunidad. La necesidad de cooperar era patente y nos interesaba. Era también una manera de mejorar relaciones». Siria esperaba salir de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo; su defensa se basaba en parte en el hecho, reconocido por el Departamento de Estado, de que no se había visto directamente implicada en ningún acto terrorista desde 1986. En un nivel práctico, su exclusión de la lista habilitaría a Siria para el comercio y las ayudas económicas —y ventas de armas—, que tenía prohibidas.

En entrevistas y declaraciones públicas, Assad había intentado establecer una distinción entre los terroristas internacionales y los que él denominaba «resistentes», localizados en Israel y los territorios ocupados, incluyendo a los jóvenes suicidas palestinos. Una distinción que muy pocos en la Administración Bush aprobarían. La enemistad de Siria con Is-

rael ha sido inflexible, igual que sus críticas a Estados Unidos por su apoyo a este país. En un comentario típico, realizado a finales de marzo en *Al Safir*, un periódico libanés, Assad declaraba: «Nadie entre nosotros confía en Israel; ni los sirios ni los demás países árabes [...]. Debemos ir con mucho cuidado. La traición y las amenazas han sido siempre características israelíes. Israel ha supuesto una amenaza a lo largo de toda su existencia».

Assad y sus asesores, muchos de los cuales habían sido compinches de su padre, esperaban que su cooperación en la caza de Al Qaeda les permitiera mejorar y redefinir sus relaciones con Estados Unidos. Pero había un importante obstáculo: el apoyo de Siria a Hezbolá. En otoño de 2002, sin embargo, el general Hasan Jalil, jefe de los servicios de inteligencia sirios, explicó a Washington que su país estaba dispuesto a discutir la imposición de algunas restricciones a las actividades políticas y militares de Hezbolá. Los sirios querían un canal especial con Washington, es decir, un medio seguro para comunicar directamente con el presidente y sus principales colaboradores. El general solicitó que la CIA se convirtiera en ese canal de comunicación.

La propuesta no fue a ninguna parte. Un antiguo funcionario del Departamento de Estado me dijo que la CIA, extasiada ante el elevado nivel de cooperación con los servicios de inteligencia sirios, «no quería malograr la "feliz conversación" sobre Al Qaeda tratando los restantes asuntos problemáticos por esa vía». Y al Departamento de Estado, añadió, no le gusta que la agencia tenga acceso a la correspondencia diplomática entre Estados Unidos y Siria. Por su parte, el Pentágono, preocupado por la guerra de Irak e ideológicamente hostil a Siria, se opuso con vehemencia a este canal directo.

Itamar Rabinovich, antiguo embajador israelí en Washington, reconoció en aquel momento estar al corriente del papel clave que la información proporcionada por Siria tenía en la guerra contra Al Qaeda, pero dejó claro que la desconfianza de Israel respecto a los sirios seguía siendo muy grande.

Rabinovich se preguntaba si, dada la calidad de sus fuentes, los sirios habían dispuesto de información previa sobre la trama del 11-S y no quisieron dársela a Estados Unidos. Dijo que con el viejo Assad, los sirios habían sido «maestros de las posiciones ambiguas». Y añadió: «Hafez negociaba con nosotros y al mismo tiempo apoyaba a Hezbolá. El hijo no es tan hábil como el padre, que era capaz de mantener cinco bolas en el aire simultáneamente. Bashar sólo puede manejar tres... si es que puede. Tiene buenas intenciones, pero no controla. No da más de sí».

A principios de 2003, y a pesar de la intensa presión norteamericana, Assad decidió que Siria no apoyaría la invasión de Irak. La cooperación respecto al tema de Al Qaeda pasaba a ser un asunto secundario.

Durante nuestra entrevista, Assad dijo que la oposición a la guerra era una cuestión de principios. «¿Puede el pueblo iraquí aplaudir una ocupación norteamericana porque odien a Sadam? Estados Unidos no comprende a la sociedad iraquí, ni siquiera el análisis más sencillo de la misma». Su decisión estaba además basada en cuestiones de política interna. Antes de la guerra, Estados Unidos había exigido que Siria controlase y cortara el importante contrabando hacia Irak de armas y material militar fabricado en empresas sirias, muchas de ellas con conexiones políticas de alto nivel. «Estados Unidos poseía fotografías tomadas por satélite del material, así como información sobre oficiales sirios de alto rango —dijo un diplomático extranjero que mantenía estrechas relaciones con Washington—. Bashar no lo cortó. Y Estados Unidos se puso furioso».

Incluso los más optimistas partidarios de Assad me dijeron que no estaba claro cuánto control tenía sobre su propio Gobierno. Murhaf Jouejati, un politólogo de origen sirio que trabaja actualmente en el Middle East Institute de Washington, me dijo: «Bashar está intentando llegar al pueblo, y el pueblo está contento con él, pero en su camino se interpone un Estado financieramente corrupto».

Hafez Assad había apoyado la guerra del Golfo y Dennis Ross, que fue el enviado especial de Clinton a Oriente Próximo, me dijo a mediados de 2003 que Bashar Assad había «apostado mal» al negarse a apoyar a Estados Unidos esta vez. «Después de iniciada la guerra se puso nervioso y envió una serie de mensajes diciendo que quería la paz —dijo Ross. Assad tiene que saber que no saldrá adelante si se anda con titubeos, que tiene que cortar de verdad el apoyo a Hezbolá, Hamás y la Yihad Islámica». Además, continuó, si lo hace, Estados Unidos le recompensará «reanudando las conversaciones sobre los Altos del Golán», el territorio ocupado por Israel en 1967. Ross dijo que no había ninguna indicación de que la Administración Bush estuviera buscando esta postura.

Todo lo contrario, pues a finales de marzo de 2003 Rumsfeld acusó a Siria de suministrar a Irak gafas de visión nocturna y otros materiales militares. Sugirió asimismo que las armas de destrucción masiva iraquíes podían estar escondidas allí. Siria negó las acusaciones y los funcionarios de inteligencia con los que hablé calificaron de muy cuestionables las pruebas contra Siria. No obstante, los sirios se asustaron, en parte porque muchas personas en y cercanas a la Administración Bush han estado instando un cambio de régimen en Damasco durante muchos años. En 2000, el Middle East Forum de Washington, un gabinete de estudios estratégicos de corte conservador, publicó un informe en el que ofrecía motivos para emprender acciones militares contra Siria, muchos de los cuales serían luego utilizados contra Irak. «El Departamento de Defensa presionó por la línea dura contra Siria —me dijo un antiguo funcionario del Departamento de Estado—. Pienso que Rumsfeld estaba tanteando las aguas —para ver hasta dónde podía llegar—, pero que la Casa Blanca no estaba preparada».

En Washington, unos meses después de iniciada la guerra, había una sensación de rabia por lo que muchos consideraban una decisión errónea de la Administración: preferir el enfrentamiento con Siria antes que su colaboración contra Al

Qaeda. En cierto sentido, el problema principal no era tanto la política respecto a Siria, sino la irresuelta competencia que había en la Administración Bush entre ideología y pragmatismo, entre la determinación de ir a la guerra en Irak y la necesidad de combatir el terrorismo con eficacia. El colapso de la colaboración siria frustró a muchos en la CIA. «Nos sentimos increíblemente fastidiados viendo que lo estábamos echando todo a perder —me dijo un ex alto funcionario—. En Alepo hubo una excelente comunicación. Los sirios estaban más que dispuestos a ayudarnos, pero ellos [Rumsfeld y sus colegas] quieren atacar allí a continuación».

«Ya no existe relación de seguridad entre ambos países —me dijo por entonces un funcionario del Ministerio de Exteriores sirio—. A nosotros nos entristece tanto como a ustedes. Podríamos proporcionarles información sobre organizaciones que no creemos que debieran existir. Ayudándoles a ustedes con Al Qaeda nos ayudamos también a nosotros». Y añadió, casi con pesar, que si Washington hubiese accedido a discutir determinados asuntos a través de un canal de comunicación especial, «les habríamos dado aún más. Pero si ustedes intentan humillar públicamente a un país, dicho país se cierra en banda».

«Hasta enero de 2003 la cooperación fue de primerísimo categoría —comentó un ex funcionario del Departamento de Estado—. Luego nos metimos en lo de Irak y ciertas miembros de la Administración empezaron a aplicar la mano dura. Querían que Siria se implicara en asuntos operativos que nada tenían que ver con Al Qaeda y sí con Irak. Era algo que Washington quería de los sirios y que éstos se negaron a hacer».

Las diferencias respecto a Irak «destruyeron la apuesta siria», dijo Ghassan Salamé, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de París que, hasta 2003, fue ministro de Cultura del Líbano. «Siria apostó porque era posible encontrar un terreno común con Estados Unidos. Lo apostó todo por la cooperación con Norteamérica», añadió. Un funcionario del Departamento de Defensa me dijo que

los sirios, a pesar de sus diferencias con Washington, han mantenido a Hezbolá tranquila durante la guerra de Irak. Esto fue, añadió, «una señal para nosotros, y estamos desperdiciándola. Los sirios intentan comunicarse, pero nosotros no les escuchamos».

Irán: ¿la próxima potencia nuclear?

A finales de 2001, la República Islámica de Irán, considerada por el Departamento de Estado uno de los patrocinadores más activos del terrorismo de Estado, parecía estar en camino de convertirse en uno de los nuevos y más sorprendentes aliados de Estados Unidos en la guerra contra Bin Laden y Al Qaeda, algo que no gustaba a uno de los más sólidos aliados de Norteamérica. El 24 de octubre, más de dos semanas después de que se iniciara la ofensiva aérea en Afganistán, Israel envió una delegación a Washington para mantener conversaciones oficiales. En la delegación iba Gideon Frank, director de la Comisión Israelí para la Energía Atómica, y el general Uzi Dayan, jefe del Consejo de Seguridad Nacional israelí, y su objetivo era alertar a los norteamericanos, no por vez primera, sobre nuevas pruebas que demostraban las intenciones de Irán de convertirse en la próxima potencia nuclear.

El mensaje israelí, según lo resumió un participante, fue característicamente franco: el programa de la bomba atómica iraní estaba avanzando rápidamente y algo se tenía que hacer al respecto. La alerta supuso un dilema para la Administración Bush. Irán, predominantemente chií y desde siempre con vínculos religiosos y políticos con Afganistán (cerca de una sexta parte de la población afgana es chií), se ofrecía a permitir que los helicópteros norteamericanos de reconocimiento y rescate organizaran operaciones desde bases situadas en su territorio y había transmitido valiosa información sobre Afganistán a Estados Unidos.

Desde el 11 de septiembre, el presidente de Irán, Mohamed Jatamí, un reformista que buscaba mejorar las relaciones

con Washington, había criticado repetidamente la interpretación que Bin Laden hacía del islam. En 1998, los talibanes habían asesinado a casi una docena de diplomáticos iraníes en Mazar-i-Sharif, dos años después de su llegada al poder. Irán estaba ansioso por proteger sus intereses políticos... y sus fronteras. La inteligencia norteamericana, sin embargo, no estaba segura del alcance de la independencia de Jatamí respecto a los líderes religiosos conservadores de Irán. Los mulás seguían controlando los servicios de inteligencia del país, que financiaban y colaboraban estrechamente con Hezbolá y otras organizaciones terroristas que operan en el interior de Israel.

El clandestino programa nuclear de Irán estaba siendo controlado muy de cerca por el espionaje norteamericano, y funcionarios estadounidenses e israelíes llevaban reuniéndose en secreto desde la década de 1990 para compartir información. (Israel lleva décadas en posesión de un arsenal nuclear, a pesar de no haberlo reconocido nunca públicamente). Irán siempre ha negado que estuviera intentando fabricar la bomba. («Odio esa arma», declaró en 1997, en el programa *60 Minutes*, el presidente Hashemi Rafsanyani, predecesor de Jatamí). A pesar de ello, muchos funcionarios del espionaje norteamericano e israelí estimaron que a Irán sólo le faltaban entre tres y cinco años para disponer de cabezas nucleares operativas. La pregunta inmediata era si el país había superado el punto de no retorno: el punto en que su capacidad de continuar adelante ya no podía pararse mediante controles de exportación o la interdicción de proveedores potenciales. «Están más cerca de ese punto de lo que nos haría sentirnos cómodos... y el hecho de que no podamos concretarlo también me incomoda», me dijo un funcionario de los servicios de inteligencia norteamericanos.

Irán inició su carrera nuclear a mitad de los setenta, cuando el sha Reza Pahlevi estaba rebosante de dinero del petróleo, ambición y apoyo norteamericano. El sha invirtió unos seis mil millones de dólares en proyectos nucleares y Siemens, la multinacional alemana, construyó más de la mitad de las

instalaciones necesarias para albergar dos reactores en Busher, cerca del golfo Pérsico. Miles de iraníes se trasladaron al extranjero para estudiar física y temas afines. Los informes de la inteligencia norteamericana indicaban que el sha tenía también planeado fabricar una bomba nuclear; había puesto en marcha un equipo de diseño de armas nucleares y se estaban llevando a cabo actividades clandestinas para adquirir los materiales y los conocimientos necesarios a tales efectos.

Este proceso tocó abruptamente a su fin en 1979, cuando el sha fue derrocado y el Gobierno Revolucionario Provisional, encabezado por el ayatolá Jomeini, se hizo cargo del país. En *Going Nuclear*, un estudio llevado a cabo en 1987 sobre la proliferación de armas nucleares, el experto Leonard D. Spector apuntaba con visión de futuro que si los políticos norteamericanos hubieran comprendido mejor el poder del fundamentalismo musulmán y el sentimiento antiamericano que reinaba en Irán, habrían actuado más expeditivamente para mantener los activos nucleares del sha alejados de las manos del nuevo Gobierno. A pesar de ello, a lo largo de los ochenta no hubo muchos motivos para mostrar una preocupación oficial, ya que Irán e Irak se enzarzaron en una guerra devastadora que debilitó a ambos países. El programa nuclear de Irán fue cancelado y los edificios a medio terminar en Busher quedaron muy maltrechos tras un bombardeo iraquí.

La guerra terminó en 1988 con la derrota de Irán. Los mulás gobernantes acudieron una vez más a Alemania Occidental y Siemens, pero el Gobierno alemán, presionado por Washington («Muerte a Estados Unidos» seguía siendo el grito de guerra iraní), decidió acabar su relación nuclear con Irán.

En aquella época, el antiamericanismo que se vivía en Irán y la Unión Soviética no se tradujo en una relación estrecha entre ambos. Sin embargo, tras la muerte del ayatolá Jomeini en 1980, el liderazgo religioso iraní, en un importante giro geopolítico, firmó un amplio acuerdo armamentístico y comercial con los soviéticos que incluía la coopera-

ción en «los usos pacíficos de la energía atómica». El Gobierno de Yeltsin acordó reconstruir las bombardeadas instalaciones de Busher y, en 1995, los dos países firmaron un contrato por valor de ochocientos millones de dólares según el cual los rusos ayudarían a instalar allí un potente reactor nuclear que sería controlado por un equipo ruso-iraní. Desde entonces se ha construido en este lugar un amplio complejo de edificios. Rusia inició además un programa de formación para físicos y técnicos iraníes. Sin embargo, a finales de 2001, funcionarios de los servicios de inteligencia me dijeron que las instalaciones nucleares más importantes de Irán no se encuentran en Busher, lugar abierto a las inspecciones del Organismo Internacional para la Energía Atómica, sino en localizaciones clandestinas bajo control militar.

Siguiendo el modelo paquistaní, Irán entretejió un laberinto de empresas encubiertas para esconder su programa nuclear. En los dos años anteriores al 11-S, según un ex funcionario del Pentágono, los servicios de inteligencia observaron «excavaciones extensivas» en el país; los ingenieros nucleares se apresuraban a esconder las instalaciones de fabricación. «Sabemos que son subterráneas y clandestinas», dijo el ex funcionario. Un funcionario israelí confirmó que las instalaciones ocultas estaban «diseminadas por todo el país». Al parecer, los iraníes buscaban minimizar los daños potenciales que podía provocar lo que un agente del espionaje norteamericano denominó «la versión israelí de la contraproliferación»: un ataque aéreo preventivo. (En 1981, la fuerza aérea israelí atacó y destruyó el nuevo reactor iraquí Osirak escasos meses antes de que entrara en funcionamiento). A finales de 2001, un diplomático europeo que había llevado a cabo misiones muy delicadas en Irán por encargo de las Naciones Unidas durante las dos últimas décadas me dijo: «Ha llegado el momento de desenmascararlos. Ha llegado el momento de que Estados Unidos juegue o rompa la baraja con Irán».

Inicialmente, el espionaje norteamericano y el israelí se fijaron menos en los avances iraníes en la construcción de la

bomba que en lo que Irán podía comprar a Rusia ya confeccionado. Después de la desintegración de la Unión Soviética en 1991, militares ávidos de dinero se mostraban a veces dispuestos a vender armas, incluyendo misiles, a prácticamente cualquiera. Además, la antigua URSS dejó atrás material para la fabricación de armamento nuclear en una de sus ex Repúblicas, y se cree que Irán realizó un esfuerzo importante a principios de los noventa para adquirirlo al recién independizado Kazajistán.

La Administración Clinton logró pequeños éxitos en su lucha por reprimir la codicia rusa y evitar que Irán consiguiera la bomba atómica. Con la ayuda del Mossad, los servicios de inteligencia israelíes, los agentes de Estados Unidos descubrieron una serie de empresas privadas en Alemania, Ucrania y la República Checa dispuestas a vender tecnología nuclear a clientes dudosos y las convencieron de interrumpir sus contactos iraníes. A través de iniciativas diplomáticas, sanciones económicas o ayudas, y presiones políticas, se desalentó a otros potenciales socios comerciales a entablar negocios con Irán. Aunque dejándolo en segundo término, la Administración Clinton siguió subrayando públicamente la amenaza que suponía el régimen iraquí, un énfasis que tendió a disminuir la presión sobre Irán. «Siempre fue una cuestión de prioridades —recordó un antiguo funcionario del Pentágono—. La expansión de la OTAN era un asunto más importante, y luego estaban Bosnia, Kosovo y Chechenia».

La elección de George W. Bush en 2000 llevó a la suspensión de las reuniones entre Estados Unidos e Israel para tratar el tema de Irán. Un ex funcionario explicó que ambos bandos se mostraron reacios a continuarlas. «La subida al poder de Bush apagó el radar de la Casa Blanca —dijo—. Y los israelíes no presionaron a los recién llegados. Parte de ello pudo deberse a que los nuevos necesitaban tiempo, y parte a la Intifada [la renovada guerra de guerrillas entre Israel y los palestinos]». Otro funcionario, sin embargo, dijo que los israelíes «no se anduvieron con chiquitas» durante los primeros días de la presidencia de Bush.

El proyecto de presupuesto para 2002 presentaba una notable reducción de la asignación que la Administración Clinton había hecho para programas destinados a salvaguardar el arsenal nuclear ruso. Un factor fue la determinación de la Administración Bush de convencer a Putin de que abandonara el tratado antibalístico de 1972 y acompañara a Washington en la construcción de un sistema mundial de defensa con misiles.

En 2001, según funcionarios norteamericanos, Israel reunió las pruebas que demostraban que al menos dos empresas exportadoras rusas habían proseguido con los envíos ilegales a Irán de productos hechos con el aluminio y el acero especiales que se utilizan para el montaje y el funcionamiento de las centrifugadoras. Los israelíes comunicaron su inquietud a Washington en octubre de 2001 —su contacto era ahora John Bolton, subsecretario de Estado para el control de armas y seguridad internacional—, pero en ese momento la Administración sólo estaba preocupada por Irak, por la guerra contra Bin Laden y los talibanes y por sus nuevos aliados en la guerra contra el terrorismo.

A finales de 2001, los servicios de inteligencia norteamericanos, en evaluaciones formales, catalogaban a Irán como una amenaza más inmediata que Irak en cuanto a proliferación nuclear. «Todo el mundo sabe que Irán será el siguiente en poseer un arma nuclear —me dijo un analista norteamericano especializado en el tema nuclear—. En los niveles más altos del Gobierno, y durante los dos últimos años, Irán ha sido la preocupación número uno en cuanto a quién será el siguiente». Y añadió que, después de la guerra del Golfo, el tan criticado programa de inspección de las Naciones Unidas había «cancelado en gran parte el programa nuclear iraquí». Los iraquíes, continuó, «poseen los conocimientos, podrían ponerse al corriente muy rápidamente, pero la comunidad internacional no permitirá que lo hagan. No están tan avanzados como Irán».

La Administración Bush siguió concentrándose en la amenaza representada por Irak. «Es más importante gestionar Irak

que Irán, porque nada de lo que suceda en Irak irá a mejor —me dijo un estratega a finales de 2001—. En Irán, el pueblo está desafiando abiertamente al Gobierno y existe alguna esperanza de que ese país mejore. Pero en Irak no hay nada que nos dé esperanzas, porque Sadam gobierna despiadadamente. ¿Qué vamos a hacer si proporciona ántrax a los de Al Qaeda? Si Irak desaparece de la escena, nos concentraremos en Irán de una forma completamente distinta».

La colaboración de Irán en la campaña de Afganistán y muchos de sus cambios internos —desde el descontento cada vez mayor con las censuras religiosas hasta el aumento de la participación de la mujer en la vida política— eran factores que animaban a Estados Unidos. Pero, según me dijo un funcionario norteamericano, Washington comprendía también que Irán seguiría persiguiendo la bomba y que Rusia seguiría ayudándole. «Aunque Thomas Jefferson salga de la tumba para retomar la presidencia, Irán acabará siendo potencia nuclear», dijo.

Algunos funcionarios israelíes reconocieron en privado que el alcance de la determinación de la Administración Bush por hacer descarrilar los esfuerzos iraníes por fabricar una bomba estaría relacionado con los progresos y los resultados de la guerra contra el terrorismo. «Dependerá del éxito que tengan con Bin Laden —dijo uno de ellos—. Si el terror continúa, Estados Unidos no tendrá otra alternativa que recurrir a la ayuda de Irán».

Un general norteamericano de cuatro estrellas, con quien hablé a finales de 2001, describió el tema de las prioridades en términos muy gráficos: «Diremos a los paquistaníes y a los rusos que retiren su ayuda nuclear a Irán, pero ése es el capítulo dos, después de que tengamos a nuestro hombre [Bin Laden] muerto y en la fosa».

En agosto de 2002, el Consejo Nacional de la Resistencia Iraní, un grupo de la oposición que iba a desaparecer muy pronto, ofreció una rueda de prensa en Washington. El Consejo había sido el ala política de Muyahidin Jalq, un grupo que

desde 1997 figuraba en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado. Llevaba décadas ejerciendo presión en Washington y ofreciendo información, no siempre exacta, sobre Irán. Esta vez, el Consejo se presentaba con algo nuevo: anunciaba que disponía de pruebas de que Irán había construido en el desierto dos grandes instalaciones para la fabricación de armas nucleares, al sur de Teherán. Describieron ambas plantas con impresionante detalle. Una, cerca de Natanz, que en apariencia formaba parte de un programa de erradicación del desierto, estaba rodeada de alambradas de espino e incluía dos zonas de trabajo a más de siete metros bajo tierra y con muros de hormigón de dos metros y medio de grosor. La segunda planta, de la que se aseguró que servía para producir agua pesada para la fabricación de plutonio refinado para armamento, estaba situada en Arak y aparentemente funcionaba como una planta energética.

Los inspectores del OIEA llevaron finalmente a cabo el seguimiento y la comprobación de esta información. En un viaje posterior descubrieron que un edificio al que no habían tenido acceso completo durante la visita realizada en marzo de 2003, contenía instalaciones de centrifugadoras ocultas detrás de una pared. Los inspectores determinaron que algunas centrifugadoras habían sido suministradas por Pakistán. Encontraron también rastros de uranio altamente enriquecido en componentes fabricados en Irán y Pakistán. El OIEA no pudo determinar de inmediato si el uranio era originario de Pakistán: los materiales enriquecidos podían provenir del mercado negro, de un proliferador nuclear aún por descubrir o de las propias plantas de producción iraníes.

En octubre de 2003, el Gobierno iraní, después de meses de negativas y ofuscación (y de inspecciones cada vez más reveladoras), reconoció formalmente ante el OIEA que había fabricado en secreto pequeñas cantidades de uranio y plutonio enriquecido, y desarrollado un programa piloto para un reactor de agua pesada, todo ello en violación de sus obligaciones para con el Tratado de No Proliferación Nuclear. Algunos de sus programas secretos se remontaban a más de die-

ciocho años. Al principio, los líderes religiosos declararon que sus científicos habían trabajado por su cuenta y sin la ayuda de proveedores externos. Los ayatolás admitieron posteriormente que no era así, pero se negaron a revelar de dónde había venido la ayuda.

Durante un viaje a Oriente Próximo que realicé a principios de 2004, me dijeron que varios años antes, la inteligencia de comunicaciones israelí, conocida como Unidad 8200, había descifrado un sofisticado código iraní y empezado a controlar comunicaciones entre las que destacaban conversaciones entre Irán y Pakistán sobre el próspero programa de armas nucleares iraní. Desde la época del sha, el espionaje israelí tenía muchos contactos clandestinos en Irán, y mantenía además un estrecho contacto con diversos grupos de la oposición, como el Consejo Nacional de la Resistencia Iraní. Se produjo una filtración —directa o indirecta— y la información israelí sobre el programa nuclear iraní llegó al Consejo. Un funcionario del OIEA me explicó posteriormente que sabía que la información del Consejo procedía del espionaje israelí, pero se negó a decir dónde se había enterado de ello. (Un diplomático israelí en Washington, a quien solicité sus comentarios, me dijo: «¿Por qué querríamos trabajar con una tienda de productos de Mickey Mouse como el Consejo?»).

De un modo u otro, las interceptaciones israelíes fueron compartidas por el espionaje norteamericano y vinieron a demostrar que funcionarios de alto nivel de Islamabad y Teherán mantenían conversaciones frecuentes sobre la investigación del OIEA y sus implicaciones. «El problema aquí es la interpretación —dijo el funcionario—. Quitándole toda la paja, la postura iraní era: "Vamos a jugar con el OIEA. No queremos destapar nuestro secreto, pero tenemos que mostrarles algún movimiento. No podemos enfrentarnos a la opinión pública mundial, de ninguna manera. Debemos aparentar que estamos cooperando y tener así a los europeos de nuestro lado"». (En aquel momento, Irán había entablado negociaciones con la Unión Europea para establecer relaciones co-

merciales y para otros temas). Las conversaciones interceptadas dejaban claro, me dijo el funcionario, que Irán no quería renunciar a su programa nuclear. La respuesta paquistaní, añadió, fue: «No abandonéis a mitad del partido y cuidaremos de vosotros». Y Pakistán remitía un mensaje adicional: «Velad por vuestros intereses».

En opinión del funcionario, Pakistán e Irán han sobrevivido a la crisis: «Ambos hicieron lo que dijeron que harían y ninguno de los dos ha salido perjudicado. No han sufrido daños. La historia que el público conoce es que Irán nunca lo consiguió... sandeces». (En junio de 2004, inspectores del OIEA me dijeron que el gigantesco complejo de Natanz, del que se decía que abarcaba 240 000 metros cuadrados y que seguía en construcción, quedaría protegido en cuestión de meses por un tejado cuyo diseño permitirá camuflarlo con arena. Cuando las obras terminen, el complejo «será invisible para los satélites y los iraníes podrán añadir pisos subterráneos adicionales», dijo un funcionario del OIEA).

Durante una entrevista en Tel Aviv, un alto funcionario de los servicios de inteligencia con acceso al intercambio secreto entre Irán y Pakistán me dijo que Israel seguía convencido de que «los iraníes no piensan abandonar la idea de la bomba. Lo que ha hecho Irán ha sido transmitir al OIEA la información que ya estaba al descubierto y que no podían proteger. Pero hay mucho más escondido». La inteligencia israelí, añadió, seguía detectando excavaciones y otras actividades subterráneas en Irán relacionadas con el programa nuclear.

Los líderes iraníes continuaron insistiendo en que su objetivo era producir energía nuclear, no armas nucleares, y en un informe público de noviembre de 2003 el OIEA dejó de repente de acusarlos de fabricar la bomba. Diplomáticamente, declaraba: «Es evidente que a lo largo de un período prolongado Irán ha fracasado varias veces en el cumplimiento de sus obligaciones [...], de informar sobre material nuclear y su procesamiento y utilización [...]. Hasta la fecha no hay pruebas de que tales materiales y actividades

nucleares no declarados estuvieran relacionados con un programa de armamento nuclear».

En privado, sin embargo, los expertos en proliferación nuclear con los que hablé se mostraron menos reservados. «Sé lo que hicieron —me dijo un funcionario en Viena, refiriéndose a los iraníes—. Han mentido todo el tiempo y han engañado todo el tiempo». Preguntado acerca de si creía que Irán tenía ya la bomba, el funcionario dijo que no. Preguntado acerca de si creía que Irán poseía el uranio enriquecido necesario para fabricar una bomba, dijo: «No estoy seguro».

Israel, Turquía y los kurdos

En julio de 2003, Israel, que se había situado entre los más entusiastas defensores de la guerra de Irak, empezó a alertar a los norteamericanos de que en las postrimerías del verano se enfrentarían a una intensa insurgencia: una campaña de atentados y asesinatos. Agentes del espionaje israelí instalados en Irak informaban que los insurgentes tenían el apoyo de la inteligencia iraní y de otros combatientes extranjeros que cruzaban a voluntad la frontera no vigilada entre Irán e Irak. Los israelíes instaban a Estados Unidos a precintar a cualquier coste una frontera que se extendía a lo largo de casi mil quinientos kilómetros.

Pero la frontera siguió abierta. «La Administración no ignoraba la información israelí sobre Irán —explicó a mediados de 2004 Patrick Clawson, director del Instituto para la Política en Oriente Próximo, en Washington, y que mantiene estrechos vínculos con la Casa Blanca—. Nadie cuestiona que el verano pasado dimos pasos para cerrar la frontera, pero consideramos que resultaba más útil que los iraquíes tuvieran contacto con los iraníes de a pie que la cruzaban por miles cada día, entre otras cosas para realizar el peregrinaje. Nos enfrentábamos a un dilema: ¿merece la pena esta concesión o debemos aislar a los iraquíes? Y nuestra respuesta fue que merecía la pena pagar aquel precio, siempre y cuando los

iraníes no cogieran las armas y dispararan contra nosotros. Los israelíes se mostraron en abierto desacuerdo con nosotros el pasado verano. Tenían una preocupación muy clara: que los iraníes crearan organizaciones sociales y benéficas en Irak y las utilizasen para reclutar gente que después llevara a cabo ataques contra los norteamericanos».

Un ex funcionario de la Administración que había apoyado la guerra finalizó el pasado otoño un desalentador viaje por Irak. A continuación visitó Tel Aviv y averiguó que los israelíes estaban igualmente desalentados. Según el punto de vista israelí, los norteamericanos habían ignorado sus advertencias y sus consejos, y la guerra contra la insurgencia iraquí seguía yéndose a pique. «Pasé horas hablando con miembros de la comunidad política y de los servicios de inteligencia israelíes —dijo—. Lo que les preocupaba era lo siguiente: "No vais a conseguirlo en Irak, por tanto ¿no deberíamos estar pensando en la peor situación y en cómo gestionarla?"».

Ehud Barak, ex primer ministro israelí, que apoyó la invasión de Irak, se atrevió a advertir personalmente en privado al vicepresidente Cheney que Estados Unidos había perdido en Irak; según un norteamericano allegado a Barak, éste dijo que Israel «había aprendido que es imposible ganar una ocupación». El único problema, le dijo Barak a Cheney, está en «elegir la magnitud de tu humillación». Cheney no respondió a la valoración de Barak. (La oficina del vicepresidente declinó hacer comentarios al respecto).

En una serie de entrevistas realizadas la primavera de 2004 en Europa, Oriente Próximo y Estados Unidos, diversos funcionarios me comentaron que hacia finales del año anterior Israel había llegado a la conclusión de que la Administración Bush no sería capaz de aportar estabilidad o democracia a Irak, y que Israel necesitaba otras alternativas. Según me dijo un antiguo miembro del espionaje israelí, el Gobierno de su país creía que, en términos de salvar la situación en Irak, «no tiene gran importancia. Eso se ha acabado. No militarmente (Estados Unidos no puede ser derrotado militarmente en Irak), pero sí políticamente». El Gobierno de Ariel Sharon,

para minimizar los perjuicios que la guerra estaba ocasionando a la posición estratégica de Israel, había decidido incrementar su ya larga relación con los kurdos iraquíes y establecer una presencia significativa en la región semiautónoma del Kurdistán. Varios funcionarios consideraron la decisión de Sharon, que implica un importante compromiso económico, un movimiento potencialmente imprudente que podría generar incluso más caos y violencia si la insurgencia en Irak sigue creciendo.

A mediados de 2004, agentes del espionaje y el ejército de Israel trabajaban silenciosamente en el Kurdistán, entrenando unidades de comando kurdas y, aún más importante para los israelíes, realizando operaciones clandestinas en las zonas kurdas de Irán y Siria. Los operativos israelíes incluyen miembros del Mossad que trabajan clandestinamente en Kurdistán como hombres de negocios y, en algunos casos, no portan pasaporte israelí.

Cuando solicité una entrevista con Mark Regev, portavoz de la Embajada de Israel en Washington, a raíz de un artículo sobre la presencia israelí en esa zona publicado en *The New Yorker*, me dijo: «Se trata de una historia falsa, y los Gobiernos saben que es falsa». Los funcionarios kurdos declinaron hacer comentarios en ese momento, igual que el portavoz del Departamento de Estado.

Sin embargo, un funcionario de la CIA reconoció que los israelíes estaban operando en el Kurdistán. «Piensan que tienen que estar allí», me dijo. Cuando le pregunté si habían pedido a Washington su aprobación, se echó a reír y repuso: «¿Conoce usted a alguien capaz de decirles a los israelíes lo que tienen que hacer? Siempre harán lo que más les interese». Y añadió que la presencia israelí era ampliamente conocida en los servicios de inteligencia norteamericanos.

La decisión israelí de buscar un asidero más firme en el Kurdistán —el plan B, como lo llamó el antiguo miembro del espionaje israelí— elevó la tensión entre Israel y Turquía. Provocó duras declaraciones de políticos turcos y, en un impor-

tante vuelco regional, una nueva alianza entre Irán, Siria y Turquía, todo ello de gran importancia para las minorías kurdas. A primeros de junio, *Intel Brief*, un boletín de noticias de circulación restringida editado por Vincent Cannistraro, jefe de asuntos contraterroristas de la CIA en la reserva, y Philip Giraldo, ex jefe del puesto de la CIA en Estambul a finales de los ochenta, publicaba: «Fuentes turcas informan confidencialmente que los turcos están cada vez más preocupados por la creciente presencia de Israel en el Kurdistán y por sus supuestos incentivos a las ambiciones kurdas de crear un estado independiente [...]. Los turcos destacan que las amplias operaciones del espionaje israelí en el norte de Irak incluyen actividades antisirias y antiiraníes, entre ellas el apoyo a los kurdos iraníes y sirios que se encuentran en la oposición de sus respectivos Gobiernos».

En los años posteriores a la guerra del Golfo, los kurdos de Irak, ayudados por la zona de exclusión aérea impuesta internacionalmente y por un mandato de la ONU que les proporcionaba una parte de los beneficios petroleros del país, consiguieron una considerable independencia en tres provincias del norte. Sin embargo, por lo que a la mayoría de kurdos se refiere, el Kurdistán se extiende más allá de las fronteras de Irak, abarcando partes de Irán, Siria y Turquía. Estos tres países temían que el Kurdistán, a pesar de las garantías públicas de lo contrario, declarara la independencia si las condiciones no mejoraban después de la transferencia de soberanía a un Gobierno provisional iraquí.

La implicación de Israel en el Kurdistán no era nueva. A lo largo de los años sesenta y setenta había apoyado activamente una rebelión kurda contra Irak como parte de su política estratégica de buscar alianzas con elementos no árabes en Oriente Próximo. En 1975, los kurdos se sintieron traicionados por Estados Unidos cuando Washington acató la decisión del sha de dejar de apoyar las aspiraciones autonómicas de los kurdos iraquíes. La traición y la violencia fueron la constante durante las dos décadas siguientes. Los kurdos fueron brutalmente reprimidos por Sadam, que utilizó la avia-

ción y las armas químicas contra ellos. En 1984, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) inició una campaña de violencia separatista en Turquía que se prolongó quince años; más de treinta mil personas, en su mayoría kurdos, perdieron la vida y el Gobierno turco aplastó implacablemente a los separatistas. En la primavera de 2004, el PKK, conocido actualmente como Kongra-Gel, anunció el final de cinco años de alto el fuego unilateral y sus intenciones de volver a poner en su punto de mira a ciudadanos turcos.

En Irak temían que los kurdos se movilizaran para tomar la ciudad de Kirkuk, junto con las importantes reservas petrolíferas de la región circundante. Kirkuk está dominada por iraquíes árabes, muchos de los cuales se instalaron allí a principios de los setenta como parte de la campaña llevada a cabo por Sadam para «arabizar» la región, pero los kurdos consideran Kirkuk y su zona petrolífera su hogar histórico. «Si Kirkuk se ve amenazada por los kurdos, los insurgentes suníes se trasladarán allí, junto con los turcos, y habrá un baño de sangre —me dijo un experto militar que está estudiando la situación de Irak—. E incluso aunque los kurdos tomaran Kirkuk, no podrían transportar el petróleo fuera del país, ya que todos los oleoductos corren a través de suelo árabe suní».

El liderazgo kurdo iraquí se puso furioso cuando, a primeros de junio de 2004, Estados Unidos accedió a una resolución de la ONU sobre la restauración de la soberanía iraquí que no confirmaba la puesta en marcha de la constitución provisional que garantizaría el poder de veto para la minoría kurda en una futura constitución permanente. Los líderes kurdos advirtieron de inmediato al presidente Bush, mediante una carta, que no participarían en un nuevo gobierno controlado por los chiíes a menos que se garantizaran sus derechos. «El pueblo del Kurdistán no aceptará nunca más una ciudadanía de segunda clase en Irak», rezaba la carta.

Poco antes de que se produjera la transferencia de soberanía, un destacado funcionario de la seguridad alemana declaró que «un Kurdistán independiente y con petróleo suficiente tendría enormes consecuencias para Siria, Irán y Tur-

quía» y llevaría a la continua inestabilidad en Oriente Próximo, independientemente de lo que ocurriese en el resto de Irak. Había también la creencia extendida, dijo otro funcionario alemán, de que algunos elementos de la Administración Bush (se refería especialmente a la facción encabezada por Paul Wolfowitz) tolerarían un Kurdistán independiente. Esto, afirmaba el alemán, sería un error.

Una declaración kurda de independencia desencadenaría una respuesta turca y posiblemente una guerra, y además daría al traste con una alianza importante para Israel. A lo largo de la última década, Turquía e Israel se han convertido en robustos socios diplomáticos y económicos. Miles de turistas israelíes viajan a Turquía cada año. La oposición turca a la guerra de Irak ha tensado la relación. Aun así, Turquía sigue orientada hacia Occidente, a pesar de la victoria de un partido islámico, relativamente secular, en las elecciones de 2002. El país lucha en estos momentos por ingresar en la Unión Europea. Por el contrario, Turquía y Siria llevan años de enemistad y han estado cerca del enfrentamiento abierto en diversas ocasiones, y Turquía e Irán llevan mucho tiempo sumidos en rivalidades regionales; uno de los puntos de tensión es el conflicto entre la postura prooccidental de Turquía y la rígida teocracia de Irán, pero el recelo de ambas respecto a los kurdos ha trascendido estas diferencias.

Un ministro de Asuntos Exteriores europeo, en una conversación mantenida en mayo de 2004, dijo que el fracaso de la alianza de Israel con Turquía representaría un retraso importante para la región. Y añadió: «Para evitar el caos, se necesitan vecinos que trabajen como una entidad común». Los israelíes, sin embargo, consideraban hostil a todo su vecindario, salvo el Kurdistán.

Según un ex funcionario de la inteligencia norteamericana, el Gobierno de Israel creía que los líderes de la milicia chií iraquí, como Muqtada al Sáder, eran «pretextos» de los que Irán se valía para atribuirse gran parte de su éxito, en cuanto a desafiar la coalición, ya que los iraníes les propor-

cionaban logística, apoyo y formación en comunicaciones. El ex funcionario dijo: «El verano pasado empezamos a ver signos reveladores de entrenamiento organizado. Pero la Casa Blanca no quiso ni oír hablar de ello: "No podemos asumir un problema más en estos momentos. Ahora no podemos permitirnos presionar a Irán hasta un punto de abierto enfrentamiento"».

En verano de 2003, según un documento que llegó a mis manos, la Administración Bush ordenó a los marines preparar un plan detallado, llamado operación *Stuart*, para llevar a cabo el arresto y, en caso de necesidad, la eliminación de Al Sáder. Pero la operación fue cancelada, me dijo el ex funcionario, cuando se supo que Al Sáder había recibido «un chivatazo» sobre el plan. Varios meses después, la coalición cerró su periódico, provocando una crisis de la que Al Sáder salió más consolidado y, en consecuencia, asegurándose un papel más importante en las maquinaciones políticas y militares posteriores a la transferencia de soberanía.

El ex funcionario me dijo que el objetivo inmediato de Israel después de la transferencia de soberanía era «concentrar las unidades de comando kurdas para equilibrar las milicias chiíes, especialmente aquellas que se mostraran hostiles al tipo de orden que a Israel le gustaría ver en el sur de Irak». Y añadió: «Naturalmente, si tomara el control una milicia fanática baazista —tan hostil a Israel como lo era Sadam—, Israel lanzaría sobre ella a los kurdos». Se estima que las fuerzas armadas kurdas, conocidas como la *peshmerga*, cuentan con setenta y cinco mil efectivos, un total que excede en mucho las cifras conocidas de milicias suníes y chiíes.

Un ex funcionario de la inteligencia israelí reconoció que, desde finales de 2003, su país ha estado entrenando comandos kurdos para operar con el mismo estilo y la misma efectividad que las unidades de comando israelíes más secretas, los Mistaravim. El objetivo inicial del apoyo de Israel a los kurdos, dijo, era prepararlos para que hicieran lo que los comandos norteamericanos habían sido incapaces de hacer: infiltrarse, reunir información y luego eliminar a los líderes de la insurgencia.

(No conseguí averiguar si parte de esta misión se había realizado ya). «La sensación era que se trataba de una forma mucho más efectiva de controlar la insurgencia», añadió.

Y prosiguió: «Mire, Israel ha apoyado siempre a los kurdos siguiendo un estilo maquiavélico, para mantener el equilibrio con Sadam. Es *realpolitik* —añadió—. Aliándose con los kurdos, gana vista y oídos en Irán, Irak y Siria. Lo que Israel hacía con los kurdos tampoco resultaba del todo inaceptable para la Administración Bush».

El problema era que «la creciente relación kurdo-israelí empezó a irritar, y mucho, a los turcos. Les preocupa que los mismos comandos kurdos que se entrenaban para Irak puedan también infiltrarse y operar en Turquía». En entrevistas realizadas a mediados de 2004, miembros de la inteligencia alemana me dijeron, alarmados, que sus servicios tenían pruebas de que Israel estaba utilizando su nueva influencia en el Kurdistán y en las comunidades kurdas de Irán y Siria con el objetivo de obtener información para iniciar operaciones.

Patrick Clawson me dijo que Irán tenía que ser la principal preocupación para la seguridad nacional de Israel. Dado que una presencia en el Kurdistán proporcionaría a Israel una manera de controlar los esfuerzos nucleares iraníes, dijo, «sería una negligencia por parte de los israelíes no estar allí presentes». El ex oficial de la inteligencia israelí dijo también que, para su país, el vínculo con el Kurdistán «sería de mayor valor que su creciente alianza con Turquía. Nos encanta Turquía, pero tenemos que seguir ejerciendo presión sobre Irán».

Un alto funcionario de seguridad alemán, sin embargo, opinó que la Administración Bush malinterpretaba continuamente a Irán. «Los iraníes querían mantener a Estados Unidos atado a Irak, mantenerlo ocupado allí, pero no querían el caos», dijo. Un alto funcionario europeo comentó: «Los iraníes harían algo positivo en el sur del Irak si obtuvieran algo positivo a cambio, pero Washington no se lo dará. La Administración Bush no pedirá ayuda a los iraníes, y no puede pedírsela a los sirios. ¿Quién salvará a Estados Unidos?».

Y añadió que al principio de la invasión de Irak varios altos funcionarios europeos habían comentado a sus colegas iraníes: «Vosotros seréis los que saldréis ganando en la región».

«Los kurdos fueron el último grupo cercano a Estados Unidos con algo que decir en Irak. La única cuestión era cómo hacerlo cuadrar con Turquía», explicó el ex funcionario de la inteligencia israelí. La verdad, tal vez no se acabe de cuadrar. Desayunando en Ankara a mediados de 2004, un funcionario turco me dijo: «Antes de la guerra, Israel se mostraba activo en el Kurdistán, y ahora vuelve a estarlo. Es muy peligroso para nosotros, y también para ellos, pero no queremos un Irak dividido». Luego, citando un proverbio popular turco dijo: «No te tenemos miedo, pero tú si deberías tenerlo de nosotros». (Un diplomático turco con quien hablé posteriormente fue más directo: «Decimos a nuestros amigos israelíes y kurdos que la buena voluntad de Turquía descansa en mantener Irak unido. No admitiremos soluciones alternativas»).

Otro alto cargo turco explicó que su Gobierno había «compartido abiertamente sus preocupaciones» con el ministro de Exteriores israelí respecto a las actividades militares de Israel en el Kurdistán. «Niegan el entrenamiento y la compra de propiedades y afirman que no se trata de nada oficial sino que es cuestión de entidades privadas. Evidentemente, nuestros servicios de información están al corriente de que no es así».

Esa primavera, en una entrevista con diplomáticos de Oriente Próximo, uno de ellos me dijo que el ministro de Asuntos Exteriores turco, Abdulah Gul, había descrito las actividades israelíes, y la posibilidad de un Kurdistán independiente, como «la propuesta de una alternativa que no es una verdadera alternativa: la elección entre la supervivencia y la alianza». Un tercer funcionario turco me dijo: «Podemos tolerar un "Kurdistán" si Irak permanece intacto, pero nadie conoce el futuro... ni siquiera los norteamericanos».

«Si acabas con un Irak dividido, lo único que conseguirás es traer más sangre, lágrimas y dolor a Oriente Próximo,

y encima ser culpado de todo ello —dijo el primer funcionario turco—. Desde México hasta Rusia, todo el mundo declarará que Estados Unidos tenía una agenda secreta para Irak: que llegaron allí con la intención de dividir el país. Y si Irak se divide, Estados Unidos no podrá explicarlo al mundo». Comparó la situación con la escisión de Yugoslavia, pero añadió: «En los Balcanes no había petróleo. La lección de Yugoslavia es que cuando das independencia a un país, después todo el mundo la quiere». Si esto sucede, «Kirkuk se convertirá en el Sarajevo de Irak. Si algo sucede allí, la crisis será imposible de contener».

Epílogo

En mayo de 2004, en el punto culminante del escándalo por los abusos cometidos en la prisión de Abu Ghraib, un congresista del partido republicano recibía la tranquilizadora noticia de que el vicepresidente Cheney se había hecho cargo del tema, con su habitual franqueza. El congresista sabía que Cheney había comunicado por teléfono a Donald Rumsfeld un mensaje muy simple: «Nada de dimisiones. Nos pondremos en cuclillas y nos mantendremos firmes».

Lo que le preocupaba a Cheney no era la seguridad nacional. Aquello era un asunto político: un recordatorio de que la Casa Blanca tomaría las riendas para controlar cualquier crisis que pudiera afectar a la reelección de George W. Bush. Las revelaciones de Abu Ghraib, si no se comprobaban, podían provocar más dudas públicas acerca de lo acertado de la guerra de Irak y de las a veces brutales operaciones que los servicios de inteligencia habían llevado a cabo para librarla. La Casa Blanca y el Pentágono, además, tendrían que trabajar unidos para evitar que el Congreso y la prensa desvelaran un secreto incendiario: que en Abu Ghraib habían estado presentes clandestinamente miembros de una unidad de los servicios de inteligencia que operaba en secreto en nombre de todos los norteamericanos. La cúpula de la Casa Blanca conocía desde enero el caos de Abu Ghraib y, aún más importante, conocía la existencia de las fotografías y las cintas de video, y que algún día podían llegar a conocerse públicamente. Como hemos visto, la cadena de mando militar había

ignorado una posible implicación de los altos mandos y pasado rápidamente a perseguir a los miembros de la policía militar que habían cometido los actos, a «los niños que se encuentran al final de la cadena alimenticia», según palabras de un antiguo funcionario de inteligencia. «Se nos han descontrolado unos cuantos pueblerinos».

Persiste la percepción de que ésta fue la guerra de Rumsfeld, y de que fue su firmeza y su inflexibilidad lo que llevó a veces a bombardear al blanco equivocado o al arresto de inocentes. Pero la implicación de Cheney en el intento de ocultar la importancia de Abu Ghraib no era una situación inusual; era la señal de que en las altas esferas se trabajaba en equipo. George Bush habló de «hacerlos salir de sus madrigueras prendiéndoles fuego» y de atraparlos «vivos o muertos», y Rumsfeld fue quien orquestó el mecanismo para hacerlo. El secretario de Defensa ofrecería complicadas ruedas de prensa y soportaría los ataques airados del público, como hizo con lo de Abu Ghraib, pero el presidente y el vicepresidente habían estado en ello, y con él, a lo largo de todo el proceso. Rumsfeld gestionaba el trabajo sucio y guardaba los secretos, pero él y los dos líderes de la Casa Blanca eran un equipo.

Hay muchas cosas que no sabemos sobre esta presidencia, y que puede que nunca sepamos. Algunas de las preguntas más importantes ni siquiera se han formulado. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo se salieron con la suya ocho o nueve neoconservadores que creían que una guerra en Irak era la respuesta al terrorismo internacional? ¿Cómo cambiaron el rumbo del Gobierno y reorganizaron con tanta facilidad prioridades y políticas norteamericanas que llevaban mucho tiempo vigentes? ¿Cómo superaron la burocracia, intimidaron a la prensa, engañaron al Congreso y dominaron al ejército? ¿Tan frágil es nuestra democracia? En este libro he intentado describir algunos de los mecanismos utilizados por la Casa Blanca: los conductos de la información, la confianza en Chalabi, la negativa a escuchar opiniones discrepantes, la

dificultad de hablar con franqueza sobre operaciones militares que habían ido mal y la incapacidad —o la desgana— del presidente y sus principales colaboradores de distinguir entre aquellos musulmanes que apoyaban el terrorismo y los que lo aborrecían. Periodistas, politólogos e historiadores se enfrentarán al reto de comprender a fondo estos últimos años.

Muchas de las flaquezas, no obstante, se veían a simple vista. La manipulación y la distorsión que la Administración llevó a cabo con la información que vinculaba a Irak con Al Qaeda y sus amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos eran en Washington cualquier cosa menos un secreto, según se muestra en las páginas de este libro. Y aun así, y después de un año de investigación, el Comité de Inteligencia del Senado, liderado por los republicanos, en julio de 2004 publicó un informe en el que se afirma que no fue la Casa Blanca la que cometió los mayores errores, sino la CIA, cuyos analistas, básicamente, erraron en la interpretación. Se produjo entonces un asombroso epílogo que dijo mucho sobre la confusión reinante en Washington. Tres demócratas, John D. Rockefeller IV, de Virginia Occidental y vicepresidente del comité, Carl Levin, de Michigan y el demócrata de más categoría en el Comité de las Fuerzas Armadas, y Richard Durbin, de Illinois, firmaron una declaración por separado rechazando los principales hallazgos del informe. «Lamentablemente, el informe esboza una imagen incompleta de lo sucedido durante este período de tiempo», escribieron, y destacaron que el «tema central» de cómo la Administración había empleado erróneamente la información y del papel desempeñado por Chalabi antes de la guerra se incluiría en un segundo informe (que no sería hecho público hasta después de las elecciones presidenciales). «Como resultado de ello —escribieron—, el informe presentado por el comité no explica por completo el entorno de intensa presión en que se solicitó a los funcionarios de los servicios de inteligencia que ofrecieran sus opiniones sobre cuestiones relacionadas con Irak, cuando los funcionarios políticos ya habían declarado enérgicamente en público sus propias conclusiones».

Y aun así, Rockefeller, Levin y Durbin estamparon sus nombres en el informe, colaborando con ello a su aspecto de unanimidad en los dos partidos. Y se plantean una vez más preguntas sin respuesta. ¿Por qué los demócratas no adoptaron una postura más firme? ¿Cuánta influencia ejerció la Casa Blanca sobre los miembros republicanos del comité? ¿Por qué la presión no fue más allá de los hechos inmediatos? El funcionamiento interno del comité fue, en muchos sentidos, una historia más importante que sus hallazgos.

En el momento de escribir este epílogo, agosto de 2004, la Administración Bush sigue librando una guerra en Irak con medios que garantizan que no podrá ganarla. La inversión norteamericana de billones de dólares en satélites de alta tecnología y vigilancia electrónica, los millones nunca revelados pagados a los informadores, y el despliegue de las mejores Fuerzas Especiales no han conseguido, desde los primeros días de la guerra, aportar información crucial sobre la insurgencia (del mismo modo que todos estos sistemas fueron incapaces de decirnos que Sadam Husein no poseía armas de destrucción masiva). En primavera y verano de 2003, los insurgentes operaban en pequeñas células de dos o tres miembros en las que era imposible infiltrarse. Un año después, las células se han convertido en grupos de diez a quince hombres que operan a voluntad en Bagdad y en el norte, y los servicios de inteligencia norteamericanos siguen sin encontrar una solución al tema de la insurgencia. La influencia de Ahmad Chalabi en Washington se derrumbó en cuanto quedó claro el alcance de sus manipulaciones. La Casa Blanca se vio forzada a poner en el cargo de nuevo al primer ministro iraquí a Iyad Alaui, el antiguo contrincante de Sadam que posteriormente se convirtió en colaborador de la CIA. La Administración no dispone de un plan estratégico que vaya más allá de sostener en el poder el insostenible Gobierno de Alaui hasta pasadas las elecciones presidenciales norteamericanas, en noviembre de 2004.

Algunos estrategas militares habían esperado que, con los iraquíes ahora nominalmente bajo control, los sobreexpues-

tos y poco protegidos norteamericanos que se encuentran en Irak podrían limitar sus operaciones ofensivas a lugares sospechosos de albergar insurgentes, y batirse en retirada si los ataques terroristas arrecian, una estrategia que en el Estado Mayor Conjunto se conocía como «concepto del cuadrado hueco» (una serie de retiradas graduales que terminarían en el aeropuerto internacional de Bagdad, controlado por Estados Unidos). La misión norteamericana quedaría reducida a proteger a sus soldados y el control del país dependería de la policía y el recién creado ejército iraquí, entrenado por los norteamericanos. La retirada del las tropas sería cubierta, igual que lo han sido las reducidas patrullas norteamericanas desde la primavera de 2004, por un aumento firme y continuo de los bombardeos desde tierra y aire. A finales de verano, sin embargo, la Administración Bush, que en anteriores crisis se había resistido a poner soldados norteamericanos bajo mando extranjero, estaba enviando sus efectivos contra el líder chií Al Sáder por requerimiento, según sus comandantes, del primer ministro Alaui.

Pero el atolladero norteamericano en Irak no tocará a su fin hasta que se produzca un cambio en la cúpula de Washington. «Si lo que se pretende es cambiar la situación —me dijo en verano de 2004 un alto funcionario de inteligencia europeo—, es necesario tener una visión de conjunto. Y ser respetado. Ustedes no son respetados».

Los europeos consideran aún posible una solución si la Administración Bush estuviese dispuesta a negociar con los vecinos más próximos de Irak, entre ellos Siria e Irán. Pero los ideólogos de Washington se han negado hasta ahora a negociar con ese mundo que existe, y tienen todavía que mostrar su conformidad con una reunión regional. «Para evitar el caos —me dijo un ministro de Exteriores europeo— se necesitan los vecinos. Las opciones positivas son muy limitadas, pero debemos preservar la integridad territorial de Irak. Celebrar una conferencia internacional sería importante para estabilizar la situación». Uno de los objetivos es evitar que los kurdos, o cualquier otro grupo que lo intente, traten de apo-

derarse de territorio iraquí y llevar a cabo una secesión, desencadenando más guerras como consecuencia. «La mentalidad norteamericana ha cambiado —dijo el ministro de Exteriores—. La mentalidad es ahora distinta. Y la verdad, no la comprendo».

La otra guerra, la de Afganistán, pese a que los soldados norteamericanos mueren y resultan heridos en cifras mayores, ya no concita demasiado interés en la prensa y la televisión. En verano de 2004, a pesar de la presencia de diecisiete mil soldados norteamericanos y seis mil quinientos de la OTAN, los talibanes controlaban franjas de territorio cada vez mayores en el sur y el este, y Hamid Karzai, el presidente afgano nombrado por Estados Unidos, seguía siendo incapaz de realizar una aparición pública en el centro de Kabul sin ir protegido por un escudo de seguridad en gran parte norteamericano. Las tan anunciadas elecciones parlamentarias se han retrasado indefinidamente, mientras que las elecciones presidenciales, buscadas con tanta avidez por la Administración Bush, fueron retrasadas un mes y programadas de nuevo, en el momento de escribir esto, para noviembre de 2004. Con o sin esas elecciones, la democracia sigue sin florecer en Afganistán. Los líderes europeos continúan temiendo un colapso político en ese país y el consecuente daño que esto podría causar a la OTAN, que, ante la insistencia de Washington, ha puesto también allí su reputación en juego.

A lo largo de su campaña electoral, en verano de 2004, Bush ha intentado repetidamente tranquilizar a su público, asegurándole que su política ha creado un Estados Unidos más seguro. «Hemos salido del apuro —ha sido el estribillo de su discurso electoral—. Extendiendo la libertad y la paz por todo el mundo también hacemos avanzar a nuestro país». Irak y Afganistán «están ahora gobernados por líderes fuertes, y van en camino de unas elecciones libres». Norteamérica librará batalla contra sus enemigos en todo el mundo «para no tener que enfrentarnos a ellos aquí en casa». Pero no ha hecho mención de las armas de destrucción masiva nunca en-

contradas, ni del creciente problema que representa el peaje que hay que pagar por las muertes, ni de las bajas civiles en Afganistán e Irak, ni de la devastación de todos los aspectos de la vida civil en Irak. Tampoco ha hecho mención de las decisiones del Tribunal Supremo que, en junio de 2004, desacreditaron la endeble base legal del sistema carcelario militar implantado tras la guerra y afirmaron que los extranjeros, igual que los norteamericanos, tienen derecho al debido proceso incluso en tiempo de guerra. Y no ha comentado el creciente malestar y amargura que la división de opiniones sobre asuntos políticos y económicos ha generado en los últimos cuatro años entre los norteamericanos, separados ya por diferencias raciales y religiosas.

Tenemos un presidente que ha pasado meses aterrorizando a la nación con advertencias fatalistas sobre hongos nucleares surgidos del arsenal de Sadam para luego decir, como hizo en un discurso de su campaña en agosto de 2004, que aquello no tenía importancia. «Puede que aún encontremos armas —dijo—. Todavía no las hemos encontrado. Dejadme sólo que os diga una cosa: sabiendo lo que hoy sabemos, de todos modos habríamos ido a Irak». Tenemos un presidente que puede mirar para otro lado mientras les sueltan los perros a los prisioneros iraquíes y luego declarar, como hizo en junio de 2004, que «Estados Unidos está en contra y no tolerará las torturas. Investigaremos y llevaremos a juicio todo acto de tortura, nos comprometemos a evitar cualquier castigo excesivo o cruel en todo el territorio bajo nuestra jurisdicción [...]. No padecer tortura es un derecho humano inalienable». Muchos creen que George Bush es un mentiroso, un presidente que a sabiendas y premeditadamente altera los hechos en su beneficio político. Pero mentir indicaría una comprensión de lo que se desea, de lo que es factible, y el mejor camino para llegar a ello. Una explicación más verosímil es que para este presidente las palabras sólo poseen significado en el momento inmediato, y, en consecuencia, cree que el mero hecho de pronunciar una frase —de pronunciarla él— la convierte en algo real. Una posibilidad muy inquietante.

Agradecimientos

Ningún profano puede llegar a comprender hasta qué punto el ejercicio de las labores periodísticas en *The New Yorker* es un proceso de colaboración. Mis editores, colegas y amigos en la revista me han abrumado con su apoyo, su tolerancia y su rigurosa revisión y verificación de los hechos a medida que preparábamos el terreno para llegar a la hora del cierre y más allá. David Remnick, director de la revista, antepuso siempre la imparcialidad y la exactitud a la velocidad; incluso los buenos artículos podían esperar si aún no eran tan buenos como podían llegar a ser. Dorothy Wickenden, directora editorial, y Pam McCarthy, subdirectora editorial, hicieron gala de una política de puertas abiertas en cuanto a su apoyo y su disposición para escucharme. Jacob Lewis, jefe de redacción, y Kate Julian consiguieron que los trenes llegaran puntuales. John Bennet y posteriormente Amy Davidson, mis principales redactores, compartieron mi a veces sobreexcitado sentido de la inmediatez y la importancia, aunque de forma mucho más comedida. Lauren Porcaro, del comité de redacción, lo tuvo todo listo para cuando debía estarlo. Perri Dorset, director de relaciones públicas, es un profesional de excelente criterio. Ed Klaris, asesor general de la revista, mantuvo su habitual e imperturbable omnipresencia. Natasha Lunn y Kilian Schalk se ocuparon con esmero de las importantes fotografías de Abu Ghraib. Ann Goldstein y sus colegas del departamento de corrección tra-

bajaron horas heroicas ocupándose de los antecedentes y temas afines, y cumplieron con todos los plazos de entrega. Risa Leibowitz y Francine Schore, del departamento de administración, me proporcionaron el dinero, los billetes de avión y muchos ánimos. Los célebres verificadores de datos de *The New Yorker*, encabezados por Peter Canby, se mostraron dedicados y discretos, como era de esperar, en su trato con fuentes de información muy sensibles para verificar información también muy sensible. Doy las gracias especialmente a Anne Stringfield, Dan Kaufman, Marina Harss, Andy Young, Gita Daneshjoo, Boris Fishman, Allison Hoffman, Nana Asfour y Raffi Jatchadurian. Mis colegas periodistas de la revista se mostraron indefectiblemente generosos y colaboradores en cuanto a compartir información y facilitarme el trabajo.

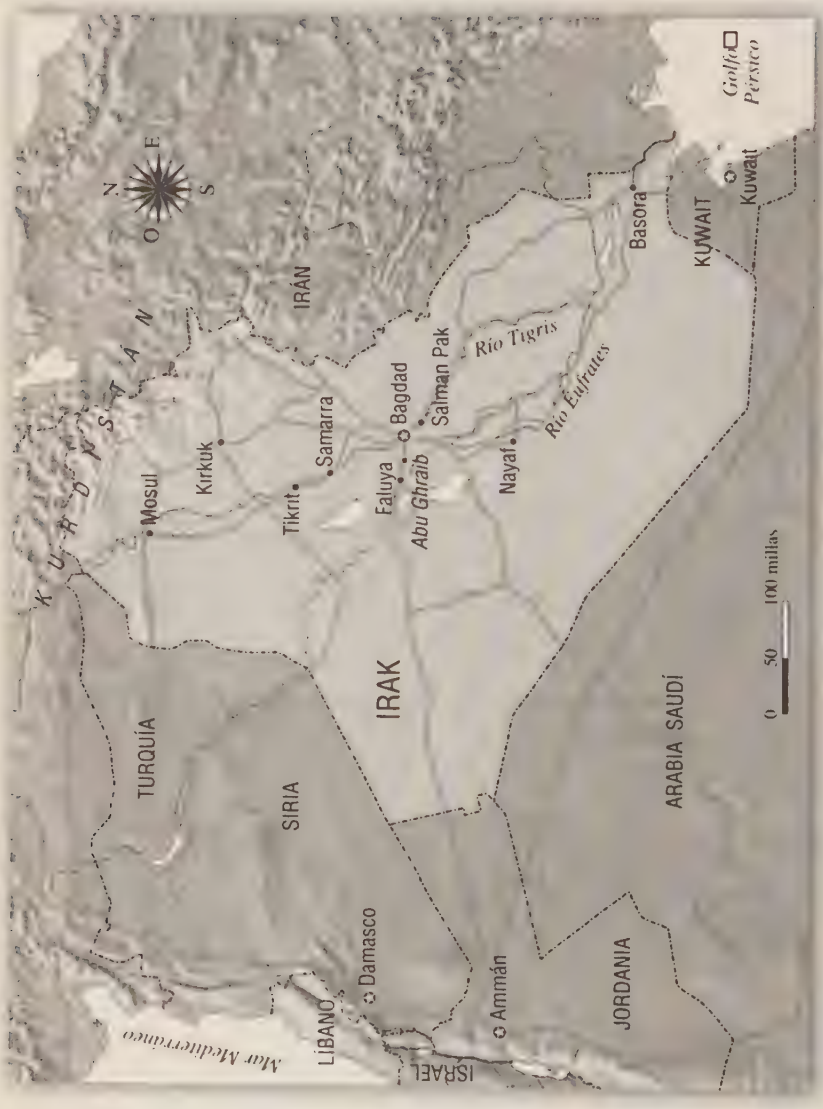
Los nuevos artículos publicados en este libro fueron cuidadosamente fusionados por Amy Davidson de *The New Yorker*, en cuyo sentido de la narrativa y del flujo del relato confío, además de respetar. Dan Kaufman, como es habitual, se mostró tranquilo y resuelto en su rápida verificación de la nueva información que aparece en el libro. Gil Shochat, mi fiel investigadora, fue repetidamente más allá de mis solicitudes en cuanto a elaborar calendarios y resúmenes de los acontecimientos clave. David Hirshey, de HarperCollins, esperó pacientemente durante años la llegada de este libro y proporcionó a lo largo del proceso una orientación muy valiosa. Gracias también a John Jusino, de HarperCollins. Esther Newberg de ICM, mi agente de siempre y mi amiga de siempre, es capaz de cerrar tratos como nadie en el sector. Mi abogado, Michael Nussbaum, sigue manteniéndome a salvo de problemas.

Los mayores colaboradores de este libro, funcionarios del Gobierno y de los servicios de inteligencia y oficiales del ejército, tanto en activo como en la reserva, que han estado suministrándome una historia alternativa desde el 11 de septiembre, no pueden ser nombrados por razones evidentes. Su anonimato les honra.

Este libro, y todo mi trabajo, no existirían sin el apoyo y la orientación de Elizabeth, mi esposa desde hace cuarenta años. Ella es el amor de mi vida.

Seymour M. Hersh
Washington, DC

Mapas


KURDISTAN
N
O
E
S
TURQUÍA
SIRIA
IRÁN
IRAK
ARABIA SAUDÍ
KUWAIT
JORDANIA
LÍBANO
ISRAEL
Mar Mediterráneo
Golfo Pérsico
Mosul
Kirkuk
Tikrit
Samarra
Faluya
Abu Ghraib
Bagdad
Salman Pak
Nayaf
Río Tigris
Río Eufrates
Basora
Kuwait
Damasco
Ammán
0 50 100 millas

N
O
E
S
UZBEKISTÁN
TAJIKISTÁN
CHINA
Dushambe
Taloqan
Kunduz
Mazar-i-Sharif
Pul-i-Jumri
Cordillera de Hindu Kush
CACHEMIRA
Provincias fronterizas del Noroeste
Base aérea de Bagram
Paso del Jáiber
Kabul
Tora Bora
Peshawar
Islamabad
Río Indo
Lahore
INDIA
PAKISTÁN
TURKMENISTÁN
Herat
AFGANISTÁN
Gardez
Khost
Provincia de Beluchistán
Quetta
Kandahar
IRÁN
0
50
100 millas

Índice analítico

11 de septiembre (11-S), atentados 16, 17, 26, 39, 69, 79, 84, 95, 97, 99-101, 104, 106-110, 112-124, 126, 129, 133-135, 140, 141, 143, 146, 164, 192, 194, 206, 217, 220, 221, 223, 234, 236, 237, 243, 244, 249, 252, 254, 256, 271, 295, 297, 298, 303, 321, 322, 325, 334, 335, 346, 359, 365-368, 372, 374, 376, 379
60, Minutes 380
60, Minutes II 20, 45, 64

ABC 345
Abdulah (Arabia Saudí, príncipe) 361-364
Abizaid, John 65, 81
Abrams, Elliott 28
Abu Ghraib (cárcel) 17, 20-22, 27, 36, 39, 43, 44, 47-49, 51, 54, 55, 57-69, 71, 76, 78, 79, 83-95, 399, 400
Acta Patriótica 141
Addington, David 28, 32
Administración Federal de Aviación (FAA) 115, 116, 118, 119, 121, 122
Administración para la Seguridad en el Transporte (Transportation Security Administration) 119
Aerotransportada, 101ª División 164
Afganistán 17, 23, 27, 40, 41, 60, 71, 93, 99, 101, 120, 130, 138, 148, 153, 155, 157, 158, 160, 161, 166, 169, 170, 173-175, 177-183, 185, 187, 188, 200, 209, 210, 213, 293, 294, 299, 301, 305, 315, 322, 325, 327, 328, 334, 341, 352, 356, 357, 360, 364, 379, 405
Afganistán (guerra de) 51, 73, 147, 151, 152, 155, 160, 164, 171, 173, 174, 176, 195, 196, 205, 355, 361, 367, 385, 404
Agencia Central de Inteligencia *véase* CIA
Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA) 234, 245, 249, 252
Agencia Internacional para el Desarrollo 180
Agencia Nacional de Seguridad *véase* NSA

Agiza, Ahmed 77, 78
Ahmed, Samina 347
Air France 121
Airman (academia de pilotos) 130
Airports Council International 118
Al Dawa 286, 290, 291
Al Hayat 226
Al Qaeda 23, 27, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 54, 60, 71, 72, 78, 80, 86, 97, 112, 113, 115-119, 121, 123-126, 129-131, 134, 136, 137, 144-146, 154-156, 158, 161-163, 165-169, 171-174, 176-179, 182, 210, 215, 234, 235, 237, 238, 245, 246, 252, 292, 294-296, 299, 300, 302, 303, 305, 315, 322, 325, 355-358, 360, 365, 371-379, 385, 401
Al Safir 227, 375
Al Yazira 134, 154
Alaui, Iyad 206, 207, 402
Albright, David 240
Alemania (República Federal) 78, 103, 381, 383
Alemania nazi 246
Alghamdi, Said 125
Alhazmi, Nawaf 124
Alí, Hazrat 178
Alianza del Norte 154-156, 158, 159, 169, 200, 205
Alomari, Abdulaziz 125
Alshehri, Waleed 124
Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU) 79
Altos del Golán 377
Amador, Xavier 138, 143
Ambuhl, Megan 45
American Airlines (vuelo 11) 124
American Enterprise Institute 194, 203
Ammán (Jordania) 106
Amnistía Internacional 299
AQSL (Lista de Líderes de Al Qaeda) 315
Aquisgrán (Alemania) 372
Arabia Saudí 16, 80, 104, 190, 196, 208, 217, 221, 222, 224, 294, 359, 361-367, 369
Arafat, Yaser 336
Argentina 297
armas biológicas y químicas *véase* guerra química
armas de destrucción masiva *véase* guerra química
Armitage, Richard 195, 196, 197, 209, 212, 335, 348
Arquilla, John 24
Ashcroft, John 129, 133, 135, 141, 144, 272
Asociación para el Estudio del Pensamiento Social 248
Assad, Bashar 372-377
Assad, Hafez 373, 374, 376, 377
Associated Press 14
Ataturk, Kemal 335
Atta, Mohammed 123, 372
Australia 169
Autonomy Corporation 220
Autoridad Provisional de la Coalición (Irak, CPA) 81, 82, 192, 241, 312, 318
AVS Asset-Validation System (Sistema de Validación de Elementos Valiosos) 105

Azaui, Haifa al 206, 207
Aziz, Nauaf Abdul 226
Aziz, Tariq 290

Baaz (partido), baazistas 80-82, 201, 206, 207, 289, 290, 305-308, 313, 316, 373
Baccus, Rick 31, 35
Baer, Robert 102, 106, 128, 190, 286, 373
Bagdad (Irak) (objetivo, asalto, caída) 75, 80, 81, 203, 210, 285, 289, 290
Bagdad Zona Verde 81
Bagram (base aérea) 41, 183
Bahía de Cochinos 193, 201
Bahrein 373
Balcanes 398 *(véase también* Bosnia, Kosovo, Yugoslavia)
Ball, Desmond 169
Baltimore Sun 125
Bandar (Arabia Saudí, príncipe) 226, 362, 363, 364, 365
Bank of Credit and Commerce International (BCCI) 216
Baradei, Mohamed el 231, 232, 266, 352
Barak, Ehud 390
Basora (Irak) 190, 193
Baute, Jacques 232, 275, 265
BBC 270
BBC China 352
Bearden, Milton 185, 334, 356
Beirut (Líbano) 103, 106, 119, 227
Bellinger, John 41, 42, 94,
Benjamin, Judy 180
Berlusconi, Silvio 259, 260
Bernstein, Carl 15
Biden, Joseph R. (Jr.) 324
Billingslea, Marshall 31, 32
Bin Laden, Osama 72, 98, 99, 102, 106, 108-110, 112, 113, 121, 122, 154, 160, 172, 175, 185, 202, 315, 322, 334, 348, 356, 358, 360, 366, 368, 379, 380, 384, 385
Black Hawk derribado (Black Hawk Down, Bowden) 310, 149
Blair, Tony 112, 203, 214, 230, 258, 259, 350
Blitzer, Wolf 20
Blix, Hans 243, 270
Bobeck, Scott 47, 49
Boinas Verdes 12
Boivin Leo, 118
Bolton, John 249, 250, 251, 256, 341, 384
Bonn (Alemania) 103
Bosnia 137, 138, 260, 383
Bowden, Mark 149, 310, 311
Boykin, William G. 75, 309, 310, 311
Brasil 297
Bremer, Paul 313
Brinkema, Leonie M. 136, 137, 138, 142, 143, 146
Brown, Bruce 68
Bruner, Whitley 319
Burba, Elisabetta 259, 260, 261, 262, 266
Burkhalter, Holly 41
Busby, Morris 311
Bush, George (padre) 171, 191, 196, 325

Bush, George W. (Administración, actuación presidencial) 14, 16, 17, 18, 25, 27, 35, 42, 65, 69, 70, 71, 74, 79, 89, 94, 109, 111-113, 127, 147, 156, 159-161, 172, 173, 175, 178, 184, 186, 187, 189, 191, 193, 196-198, 202, 212, 215, 217, 220, 222, 226, 229, 245, 247, 251, 254, 258, 262, 268, 269, 271, 275, 276, 279, 286, 289, 291, 293, 295, 304, 305, 309, 313, 318, 321-323, 325-327, 333, 336, 337, 341, 342, 344-346, 348-350, 354, 359, 360, 366, 368, 374, 377-379, 383-385, 390, 393, 394, 396, 399, 400, 402-405
Bush at War (Bush en guerra, Woodward) 21, 341
Bybee, Jay S. 26, 27

Caballería 1ª División 284
Cachemira 323, 324, 330, 332-336
CACI International 55, 56
Calley, William L., Jr. *Rusty* 11, 12
Cambone, Stephen 71, 74-76, 79, 83, 84, 87, 88, 90, 91, 95, 247, 308, 309
Camboya 15
Canadá 202
Cannistraro, Vincent 207, 249, 261, 371, 392
CARE International 180
Carlucci, Frank 192
Carnegie Endowment for International Peace 354
Casa Blanca *véase* Bush, George W.; Bush, George; Clinton, Bill
Castro, Fidel 295
CBS 13, 21, 45, 153, 344
Cecil, Charles O. 254
CENTCOM *véase* Mando Central
Center for Responsive Politics 219
Centro Antiterrorista 103, 104
Centro Conjunto de Interrogatorios e Informes 55
Centro de Inteligencia de Armas para la No Proliferación Nuclear y Control de Armas (CIA) 264
Chalabi, Ahmad 189-197, 199, 200, 205-208, 210, 221, 234, 238, 242, 245, 252, 287, 316, 400-402
Chechenia 383, 129, 138,
Cheney, Dick 28, 32, 109, 110, 122, 170, 171, 194, 214, 233, 239, 242, 255, 258, 264, 268, 276, 364, 390, 399, 400
Chevron 197
Chicago Tribune 180
China 335
Chiradio, Robert 114
Christian Peacemaker Teams 58
Christian Science Monitor 304
Church, Frank 295
CIA (Agencia Central de Inteligencia) 23, 24, 28, 30, 34, 37-39, 49, 52, 68-75, 79, 80, 85, 86, 98, 100-111, 113, 115, 118-121, 123, 126, 128, 129, 131, 139, 143, 153, 156, 157, 159, 160,

165, 166, 168-170, 178, 182, 186, 187, 190, 191, 194, 198, 201, 204-208, 217, 229-231, 234-238, 241, 242, 244, 246, 248-250, 252, 254-257, 259, 261, 263, 264, 268, 272, 273, 275, 286, 295, 301-304, 306, 308, 319, 322, 325-328, 330, 331, 333, 334, 338, 341-344, 346, 351, 356, 364, 367, 371-373, 375, 378, 391, 392, 401, 402
CID *véase* División de Investigación Criminal del Ejército
Cisjordania 312, 336
Clark, Wesley 161, 166, 169
Clarke, Richard A. 173, 174, 178
Clarke, Victoria 37
Clarridge, Duane *Dewey* 102, 103, 198
Clawson, Patrick 389, 396,
Clinton, Bill 103, 109, 111, 189, 190-193, 200, 208, 253, 256, 267, 282, 300, 303, 330, 338, 342, 343, 345, 360, 377, 383, 384
Clinton, Hillary 87
Clover, Charles 168
CNI *véase* Congreso Nacional Iraquí
CNN 20, 105, 172, 329, 358
CNS *véase* Consejo de Seguridad Nacional
Código de Justicia Militar 91
Collins, Joseph 174, 177, 182
Colombia 310, 311
Comisión 11/S (Comisión de investigación sobre el 11 de septiembre) 97, 111, 112, 114, 120, 126, 128, 173, 237 *(véase también* 11 de septiembre)
Comisión de Cambios y Valores 216, 228
Comisión de Energía Atómica Paquistaní 325, 328
Comisión Israelí para la Energía Atómica 379
Comisión Nacional sobre los Atentados Terroristas contra Estados Unidos *véase* Comisión 11/S
Comité de Inteligencia (Congreso) 231
Comité de Inteligencia (Senado) 97
Comité de las Fuerzas Armadas (Senado) 59, 90-92
Comité de Relaciones Exteriores (Congreso) 256
Comité de Relaciones Exteriores (Senado) 229, 230
Conferencia de Comandantes del Ejército 283
Congreso de Estados Unidos 34, 40, 65, 66, 70, 71, 74, 79, 87, 118, 127, 139, 140, 191, 192, 216, 229, 232, 233, 256, 270, 302, 304, 310, 317, 342, 344, 399, 400
Congreso General del Pueblo (Yemen) 304
Congreso Nacional Iraquí (CNI) 189, 191, 192, 194, 196-200, 202, 205, 206, 209, 210, 234, 238, 240, 242, 243, 287
Consejo de Gobierno iraquí 81

Consejo de Seguridad Nacional (CSN, CNS) 28, 39, 41, 94, 109, 128, 129, 173, 203, 204, 208, 213, 215, 251, 257, 315, 373
Consejo de Seguridad Nacional Israelí 379
Consejo Nacional de la Resistencia (Irán) 385, 386, 387
Consejo Supremo de la Revolución Islámica (SCIRI) 206, 287
Contra todos los enemigos (Against All Enemies, Clarke) 173
Control de Armas y Seguridad Internacional (Subsecretaría de Estado) 250, 341 *(véase también* Departamento de Estado)
Convención contra la Tortura 26, 42
Convención de Ginebra 21, 23, 26-29, 39, 41, 55, 63, 69, 70, 89, 90, 95
Copper Green (clave) 70
Corea del Norte 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 354
Corea del Sur 337, 343
Cropsey, Joseph 248
Cruz Roja 35, 36, 38, 48, 67, 92
CSN *véase* Consejo de Seguridad Nacional
Cuarta Enmienda (Constitución de Estados Unidos) 140, 141
Cuerpo de Fiscales Generales del Ejército (JAG) 89, 90, 94, 95
Cuerpo de Marines 162, 165, 209, 210, 372
Current History (Rubin) 179
Dacca (Bangladesh) 107
Daily Mirror 20
Damasco (Siria) 372, 374, 377
Darby, Joseph M. 47, 48
Davis, Javal 45, 47, 52, 53
Dayan, Uzi 379
Delta Force 74, 147, 148-153, 159, 167, 199, 297, 305, 306, 310, 311, 317
Dempsey, Martin 82
Denber, Rachel 79
Denver Post 48
Departamento de Defensa (Estados Unidos) 21, 29, 38, 40, 60, 73, 80, 88, 91, 157, 164, 170, 174, 179, 191, 201, 205, 217, 220, 234, 235, 249, 252, 276, 279, 281, 282, 286, 295-299, 304, 308, 316, 317, 361, 367, 378, 400
Departamento de Energía (Estados Unidos) 262, 338,
Departamento de Estado (Estados Unidos) 16, 108, 183, 191, 192, 195, 196, 200, 202-204, 210, 221, 231, 238, 242, 245, 249, 250, 253, 262, 264, 311, 326, 328, 338, 371, 374, 375, 377-379, 386, 391
Departamento de Justicia (Estados Unidos) 23, 26, 99, 114, 127, 129, 135, 137, 144
Departamento de Recursos Humanos (Estados Unidos, Administración) 251
Departamento del Tesoro (Estados Unidos, Oficina de Control de Capitales Extranjeros) 197

Derwish, Kamal 293
Deutch, John 104
Dewey véase Clarridge, Duane
Di Rita, Lawrence 22, 91
DIA *véase* Agencia de Inteligencia de la Defensa
Dillon, Gary 253,
Dinamarca 208
Directorio de Operaciones (DO) 100, 102, 104, 106, 107
Directorio Nacional de Seguimiento 273
Dispatch News Service 11
División de Investigación Criminal del Ejército (CID) 47-49, 50, 52, 86, 87, 90
DO *véase* Directorio de Operaciones
Dostum, Abdul Rashid 159, 184, 185
Downing, Wayne 164, 198, 199, 204, 209,
DPB *véase* Junta de Política de Defensa
Dubai 350,
Dunham, Frank W. (Jr.) 135, 136, 143, 144
Dunlavey, Michael 29, 30, 35
Durbin, Richard 401, 402
Duri, Izzat al 290,
Dushanbe (Tajikistán) 103
Düsseldorf (Alemania) 134

Eagleburger, Lawrence 16
Egipto 77, 78
Ejército Islámico de Adén-Abyan 293
El Al 108
El Peregrino (Buyan) 14
Eliezer, Binyamin ben 211
Emiratos Árabes 273, 294
England, Lynndie 45, 46
Epoca 260
Erie Times-News 29
Escobar, Pablo 310, 311
Escuela Naval (EE UU) 175
España 266, 372
Estado Mayor Conjunto 21, 64, 147, 164, 199, 203, 279, 282, 286, 297, 318, 370
Estado Mayor del Ejército 282, 315
Estado Mayor iraquí 207
Executive Intelligence Review 221
ExxonMobil 197

FAA *véase* Administración Federal de Aviación
Face the Nation 344
Fagi, Shakir al Kha 273
Fahd (rey de Arabia Saudí) 216, 360-364
Fahim, Mohammed 178, 179, 184, 185
Faluya (Irak) 58, 313
FBI (Federal Bureau of Investigation) 23, 28, 35, 36, 98, 99, 102, 112-119, 121-131, 133, 137, 140-144, 263, 269, 272, 293, 365, 372
Feith, Douglas 193, 194, 195, 220, 249, 281
Fernandes, George 333
Fidell, Eugene R. 145, 146

Filipinas 297
Financial Times 168
FISA (Ley de Vigilancia del Espionaje Extranjero) 133, 139, 141
Fisher, Ian 61
Flohr, Linda 204, 205
Ford, Gerald 295
Foreign Affaires 208
Foro Económico Mundial (Davos, Suiza) 355, 262
Francia 139, 210, 215, 216, 223, 266
Frank, Gideon 379
Franks, Tommy R. 152, 162-165, 209, 283
Frederick, Ivan L. *Chip* (II) 45, 47-50, 52, 53, 61, 68
Freeh, Louis 121
Frontline 243, 363
Fuerzas Especiales (Estados Unidos) 44, 72, 80, 84, 148, 149, 151, 154, 164, 165, 167, 174-178, 182, 185, 193, 198, 201, 209, 292, 296, 298, 300, 301, 303, 305, 307, 309-311, 314-317, 327, 349, 355, 358, 402 *(véase también* Delta Force, Task Force-20, Task Force-121, Gray Fox)
Fuller, Myron 119, 120

Gaddafi, Muammar el 350-352
Gallucci, Robert 345, 346
Gaza 312
Gerecht, Reuel Marc 101, 159, 206
Giraldo, Philip 371
Girod, Christophe 36
Glennon, Michael 300
Gobierno Revolucionario Provisional (Irán) 381
Goebbels, Joseph 298
Going Nuclear (Spector) 381
Goldberg, Jeffrey 329
Golfo Pérsico 178, 208, 215, 281, 319, 360, 381
Gonzales, Alberto R. 27
Gordon, John A. 25, 26, 28, 29, 31, 43
Gore, Al (comisión) 118, 193, 229
Graffenreid, Kenneth de 76
Gran Alianza 360
Gran Bretaña 122, 231, 267
Graner, Charles A. 52, 53, 45-47, 49
Gray, David 168
Gray Fox 297, 304, 307, 315
Grupo de Investigación para Irak (Congreso) 275
Grupo de Operaciones Iraquí (CIA) 204
Guantánamo 23-26, 28-35, 37, 38, 40-43, 53-55, 74, 78, 80, 83, 87
Guardia Nacional 31
Guardia Republicana 199, 201, 285, 288, 289
Guerra del Golfo (1991) 44, 164, 191-193, 196, 198, 209, 211, 225, 235, 239, 240, 253, 254, 274, 289, 343, 367, 377, 384, 392
guerra fría 101
guerra química y bacteriológica, armas químicas y biológicas,

armas de destrucción masiva 75, 129, 192, 212, 215, 229, 233, 235, 236, 238-244, 253, 256, 269, 270, 274-276, 402, 404
Gul, Abdulah 397
Gul, Hamid 349
Gwozdecky, Mark 265

Habibou, Allele 232
Hadley, Stephen
Hagenbeck, Frank 164
Haideri, Adnan Ihsan Said al 243
Haini, Husain 354
Halliburton 364
Hamás 312, 365, 372, 377
Hamburgo (Alemania) 119, 134, 372
Hamza, Jiyir 240, 241
Haq, Abdul 153
Harethi, Qaed Salim Sinan al 292-294, 299
Harlow, William 230, 263
Harman, Sabrina 45, 46, 52
Harriman, Christopher 222
Hashim, Ahmed S. 314
Haykel, Bernard 46
Haynes, William J. (II) 29, 33
Hellfire (misiles) 292, 293, 301, 303
Hermandad Siria Musulmana 372, 373, 374
Hersh, Seymour M. 11-14, 16-22
Heymann, Philip 300
Heynes, William 41
Hezbolá 371, 375, 377, 379, 380
Hijazi, Faruq 308, 315
Hillman, Gerald 217, 219, 222-226
Hines, Charles 59
Hitler, Adolf 248, 298
Hoagland, Jim 202
Holland, Charles 296, 297, 303, 315
Holmes, Stephen 248
Hoover, Edgar 127
Horton, Scott 89, 94
Human Rights Watch 41, 48, 63, 78, 79, 88, 94
Husein, hermanos (hijos de Sadam Husein) 370
Husein, Sadam 19, 20, 43, 75, 82, 111, 189, 191-195, 198-205, 208-210, 212-215, 220, 223, 225, 227, 231, 233, 235, 238-243, 251, 253, 255, 258, 260, 262, 269, 270, 271, 273-276, 285, 287-291, 307, 308, 312, 313, 315, 345, 356, 359, 370, 376, 385, 392, 393, 402, 405
Hussein de Jordania 108

India 159, 322, 323, 331, 332, 334, 336, 337, 354
Infantería, 11ª Brigada 11, 12
Infantería, 3ª División 281, 287
Infantería, 4ª División 283, 284
Infocus Tech 134
INR *véase* Oficina de Inteligencia e Investigación
Inspección General del Ejército (Pentágono) 94, 228, 310
Instituto de Estudios de Política Exterior 195
Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional 240

Intel Brief 392
Interlink 114
Irak 65, 76, 93, 173, 174, 178, 187, 189, 190, 191, 193, 195, 198, 200, 202, 206, 210, 211, 213, 221, 222, 226, 239, 241, 243, 251, 254, 255, 267, 270, 271, 273, 276, 286, 289, 290, 298, 305, 306, 311-313, 317-319, 328, 334, 342, 344, 351, 354, 356, 359, 369, 370, 371, 377, 378, 381, 384, 385, 390, 392-396, 398, 400, 401, 403-405 *(véase también* Irán, guerra Irak)
Irak (armas) 197, 201, 202, 229, 230, 236, 237, 240, 253, 254, 270, 273, 275, 343, 376,
Irak (cárceles) 51, 54, 55, 67, 70, 92, 93 *(véase también* Abu Ghraib)
Irak (guerra) 17, 19, 20, 27, 33, 41-43, 51, 75, 83, 90, 192, 197, 199, 200, 211, 214-216, 223-225, 227, 230, 233, 234, 242, 269, 271, 279-281, 287, 341, 375, 376, 378, 379, 389, 391, 397, 402
Irak (programa nuclear) 231, 232, 257, 259, 262, 264, 265
Irán 190, 198, 287, 328, 340, 346, 347, 359, 379, 380, 382-389, 392, 393-396, 403,
Irán (guerra Irak) 244, 288, 316, 381
Irán-Contra 205, 216
Irlanda 78
ISI (Servicio de Inteligencia de Pakistán) 157, 158, 322, 323, 329, 330, 333, 336, 347, 354, 355, 358
Islamabad (Pakistán) 322, 346, 387
Israel 56, 208, 211-213, 266, 311, 312, 354, 364, 365, 375, 377, 379, 380, 383, 384, 391, 394, 395-397
Italia 260

Jacoby, Lowell E. 181
Jafar, Dhia Jafar y Hamir (hermanos) 273, 275
JAG *véase* Cuerpo de Fiscales Generales del Ejército
Jalil, Hasan 375
Jamadi, Manadel al 68, 69
Japón 266
Jarrah, Kamal 319
Jartum (Sudán) 102
Jashba, Saad al 58
Jatamí, Mohamed 197, 379, 380
Jazrayi, Nizar al 207, 208
JDAM (Joint Direct Attack Munition) 284
Jefferson, Thomas 385
Jemais, Essid Sami Ben 125, 126
Jileui, Muhamad al 365
Jomeini, Ruhollah (ayatolá) 381
Jones, B. Todd 142
Jonson, Kjell 78
Jordan, Steven 55, 56
Jordania 80, 106, 108, 190, 286, 287, 319
Josrojavar, Farhad 138, 139
Jouejati, Murhaf 376,
Junta de Estado Mayor (Estados Unidos) 279, 281, 283, 286, 303

Junta de Política de Defensa (Defense Policy Board, DPB) 19, 194, 217-219, 221, 222, 224, 228

Kabul (Afganistán) 154, 160, 170, 172, 174, 179, 180, 183, 185-187, 404,
Kamel, Husein y Sadam (hermanos) 238-240
Kandahar (Afganistán) 121, 147, 153, 162, 180, 181
Kang Suk Ju 344
Kant, Krishan 334
Karachi (Pakistán) 107, 120
Karpinski, Janis 44, 45, 51, 62, 63, 64, 65,
Karzai, Hamid 160, 172, 174, 178, 181, 184-188, 404
Kay, David 275
Kazajistán 383
Keller, Bill 299
Kelly, James A. 343-345
Kemp, Geoffrey 213
Kenia 102
Kennedy, Edward M. 79
Kennel, Jason 53
Kerrey, Bob 111, 112, 271
Ketzer, John Harold 59
Khan, Abdul Qadeer 325, 328, 340, 346-350, 352-354, 357
Khan, Chaudry Nisar Ali 357
Khan, Ismail 185, 186, 187
Khashoggi, Adnan 216-218, 221-223, 225, 226
Kim Jong Il 338, 341
Kimbro, William J. 57
Kindy, Cliff 58
King, Larry 172, 329
Kirkuk (Irak) 190, 393, 398
Kissinger, Henry 16, 217
Koening, Lyle 315
Kosovo 383
Kristof, Nicholas 272
Kristol, William 247
Kubba, Basam Salih 319
Kunduz (Afganistán) 155, 156, 158, 159, 169, 181
Kurdistán (kurdos) 190, 201, 206, 208, 290, 391-397
Kusa, Musa 351
Kuwait 78, 214, 281, 284

La Meca (Arabia Saudí) 363
LaRouche, Lyndon H. (Jr.) 221
Laurin, Fredrik 78
Le Carré, John 247
Leahy, Patrick 113, 127
Leo Strauss and the World of Intelligence (Schmitt) 247
Leverett, Flynt 373
Levin, Carl 401, 402
Lewis, Anthony 40
Ley de Poderes de Guerra 295
Líbano 103, 302, 319, 359, 360, 372, 378
Libby, I. Lewis *Scooter* 194, 256
Libertad Duradera 51
Libia 346, 347, 350, 351, 352
Lincoln, Abraham 282
Lindborg, Nancy 181
Lindh, Anna 299
Lindh, John Walker 26, 60
Lofgren, William 106

Lohbeck, Kurt 153
London Times 245
Londres (Reino Unido) 130, 132, 138, 191, 206, 207, 227, 230, 267, 363
Los Angeles Times 167, 168, 309
Loya Jirga (consejo tribal afgano) 160
Luck, Gari 343
Luti, William 204, 234, 235, 249, 270

MacMahon, Edward B. (Jr.) 145
Mahmood, Sultan Bashiruddin 326
Mahmud, Abid Hamid 370
Majad, Chaudry Abdul 326
Malasia 130, 347, 350, 354
Mamadou, Tandja 232
Mando Central (CENTCOM) 48, 65, 72, 150-153, 159, 161-165, 191, 200, 209, 282, 285, 301
Mando de la Fuerza Aérea 25, 164
Mando de las Fuerzas Especiales 297, 306
Mando de Operaciones Especiales 175, 303, 356
Manila (Filipinas) 121
Manners, David 106
Marruecos 78, 80
Marsella (Francia) 222, 224, 225
Martillo de Hierro (operación) 314
Martin, Cathie 255, 256
Matar a Pablo Escobar (Bowden) 310
Mauritania 297
Mazar-i-Sharif (base) 26
McCarthy, Eugene 14
McCarthy, Tim 199
McClellan, George 282
McCloskey, Robert 16
McGarvey, Patrick 302
McKinsey & Co. 219
McNamara, Robert S. 286
McNulty, Paul J. 135
McRaven, William 315, 358
Medellín (Colombia) 310
Meet the Press 233, 276
Mehmood, Anuar 155
Mercy Corps 181
México 123, 398
MI6, 244, 267
Mikolashek, Paul T. 93
Milán (Italia) 263
Miller, Geoffrey 35, 36, 43, 53-55, 83, 87, 88, 90
Mishra, Brajesh 158, 335
Mistaravim (comandos israelíes) 312, 395
Mogadiscio (Somalia) 149, 151, 153, 159, 310
Mohamed, Jalid Sheij 121, 146
Montaña, 10ª División, 2ª Brigada 164, 166, 167, 168
Moseley, T. Michael *Buzz* 163
Mossad (Servicio de Inteligencia de Israel) 383, 391
Mosul (Irak) 190, 290
Moussaoui, Zacarias 17, 129-139, 141-146
Mueller, Robert 112-114, 126-128, 139, 141, 269
Muhamad, Faiz 37
Muhamad, Jan 37

Mujabarat (Servicio de Inteligencia de Irak) 207, 289, 308
Múnich (Alemania, Juegos Olímpicos, 1972) 122
Murad, Abdul Hakim 121
murafaquin 315
Murawiec, Laurent 221
Musharraf, Pervez 21, 156, 158, 321-324, 326, 329, 330, 333-336, 340, 347-350, 352-355, 357, 358,
Mutawakel, Yahua al 304
Muttawakil, Wakil Ahmed 185
Muyahidin Jalq 385
My Lai 12-14, 21, 22, 50
Myers, Gary 50, 61, 64, 74, 84, 88, 147, 148, 152, 155, 203, 282, 285
Myers, Richard B. 370

Naciones Unidas *véase* ONU
Naibzadah, Abdul Zaher 186
Nakhla, Adel L. 53
National Review 221
Naval Institute Proceedings 200
Nayef (Arabia Saudí, príncipe) 362
NBC News 67
Nehru, Jawaharlal 332
New York City Bar Association's Commitee on International Human Rights 89
New York Review of Books 40
New York Times 15, 17, 20, 36, 37, 61, 93, 114, 122, 155, 205, 219, 237, 243, 272, 315, 340, 347, 358
New York Times Magazine 299
Newsday 125
Newsweek 26, 102, 169
Niamey (Níger) 266
Nidal, Abu 108
Níger 17, 230-232, 254, 255, 257, 258, 260-262, 264-266, 269, 272
Nightline 345
Nixon, Richard 15, 300
Nixon Center 213
Noble, Larry 219
North, Oliver 205, 216
Northwest Airlines 131
NSA (Agencia Nacional de Seguridad) 15, 16, 73, 107, 331, 360, 362, 363, 366
Nueva Delhi (India) 121, 158, 331, 333
Nuri, Abdulah 366

O'Connell, Thomas 315
Observer 149
Obst, David 13
Oficina de Edificios Extranjeros 251
Oficina de Influencia Estratégica (Pentágono) 205
Oficina de Inteligencia e Investigación (INR) 249-252
Oficina de Planes Especiales (Pentágono) 17, 251, 234-236, 238, 242, 249, 270
Oficina de Seguridad Interior 128, 129
OIEA (Organización Internacional para la Energía Atómica) 231-233, 253, 255, 263-266,

275, 342, 350-353, 382, 386-388
Omar, Muhammad (mulá) 72, 87, 147-150, 152, 172
Onstad, Clark 116
ONU (Consejo de Seguridad, inspecciones Irak) 191, 231, 243, 254, 262, 265, 266, 270, 273
ONU (Organización de Naciones Unidas) 26, 42, 78-80, 172, 174, 181-183, 186, 187, 197, 202, 210, 215, 216, 236, 238-240, 242, 244, 264, 267, 270, 273, 275, 288, 315, 332, 345, 365, 382, 384, 392, 393
Operación *Anaconda* 161, 165, 168-171
Operación *Stuart* 395,
Operaciones de Información, I/Ops (Reino Unido) 267
Operaciones Especiales y Conflictos de Baja Intensidad *véase* SOLIC
Organización Internacional para la Energía Atómica *véase* OIEA
Organization for Human Rights 58
OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) 161, 193, 404

Pace, Peter 64
Pacto Nacional Iraquí 206
Pahlevi, Reza 380, 387
Pakistán 15, 42, 78, 120, 130, 134, 154-156, 159, 160, 169, 173, 183, 287, 321, 322, 324-334, 336-341, 346-350, 353, 355-358, 386-388
Palestina 213, 383
Pan Am (academia internacional de pilotos) 131, 132
Pan Am (vuelo 103) 118
Panorama 259, 260, 261, 263
Pape, Robert 199
Pappas, Thomas 55, 56, 59, 69
Paraguay 297
París (Francia) 138, 378,
Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK, Kongra-Gel) 393
Patai, Raphael 61, 62
Patterson, Raymond 137, 138
Patton, George S. 13
Pavitt, James 116, 117
Pentágono *véase* Departamento de Defensa; Rumsfeld, Donald; Oficina de Planes Especiales
Perle, Richard 189, 194, 195, 204, 209, 212, 213, 217, 218, 220-228, 234, 240
Peshawar (Pakistán) 322
Petróleo por Alimentos (programa) 191, 197
Phillabaum, Jerry 50
Phillips, David Graham 15
Phoenix (programa) 85, 301, 302, 307
Physicians for Human Rights 41
Pinochet, Augusto 15
Platón 248
Plavin, David 118, 119
Policía Militar (PM) 44, 46, 49-52, 54, 56, 57, 59, 62, 64, 69, 84, 85

Pollack, Kenneth 208, 251
Povich, Shirley 13
Powell, Colin 32, 97, 171, 184, 195, 197, 230, 232, 250, 253, 256, 261, 262, 265, 340, 368
Predator 72, 292, 294, 295, 296, 301, 304,
Prevost, Clancy 131, 132
Primera División Acorazada 82
Programas Estratégicos Regionales 213
Promesa rota (documental) 77, 78
Putin, Vladimir 384
Pyongyang (Corea del Norte) 337, 338, 342, 344, 345

Qatar 121
Quinta Enmienda (Constitución de Estados Unidos) 50, 146
Quinta Flota 373

Rabinovich, Itamar 375, 376
Rafsanyani, Hashemi 380
Ramada (Irak) 58
Ramadan, Taha Yasi 290
Rand Corporation 221, 234
Rangers 147-149
Ranguala, Glen 242
Rather, Dan 20
RAW (Research and Analysis Wing, Ala de Investigación y Análisis) 158, 159
Rawalpindi (Pakistán) 146
Reagan, Ronald 194, 205, 216, 234, 322, 325, 364
Reese, Donald 69
Regev, Mark 391
Reino Unido 78, 80, 206
Remnick, David 11-22
Rendon, John 205
Rendon Group 204, 205
República Checa 383
Resumen Diario al Presidente 112, 231, 237
Riad (Arabia Saudí) 369
Rice, Condoleezza 25, 28, 30, 33, 38, 41, 42, 73, 94, 95, 112, 115, 193, 204, 259, 262, 272, 276, 342, 344, 345
Riedel, Bruce 204
Ritter, Scott 210, 285
Rockefeller, Jay 269,
Rockefeller, John D. (IV) 401, 402
Rockwell, Norman 19
Rocky Mountain News 125
Roosevelt, Theodore 14
Ross, Denis 377
Rossella, Carlo 260, 263
Roth, Kenneth 41, 42, 94, 95
Rothstein, Hy 174, 175, 177, 178
Rowell, Willie J. 90
Rowley, Coleen 139-141
Rubin, Barnett R. 179
Rumsfeld, Donald 19, 31, 33, 37-39, 42, 49, 63-66, 69, 70-74, 80, 82-84, 87-89, 91, 92, 94, 95, 109, 147, 152, 155, 160, 162, 172, 174, 175, 186, 192-194, 217, 220, 235-237, 242, 252, 264, 279, 280-286, 288, 292, 296, 297, 298, 301-305, 308-310, 314-318, 335, 361, 366, 371, 377, 378, 399, 400
Rusia 174, 210, 382, 383, 385, 398

Ryder 51, 52
Ryder, Donald 50

Sabbar Abd, Hayder 61
Sabelli, Martin 145
Sadam's Bombmaker (Hamza) 240
Sáder, Muhamad Baqir al 290
Sáder, Muqtada al 290, 394, 395
Sadik, Ahmad 288-291
Said, Mohamed Majed 372
Salamé, Ghassan 378
Salman (Arabia Saudí, príncipe) 362, 366
Samaha, Michel 319
Samarra (Irak) 314
Sánchez, Ricardo S. 44, 54, 55, 59, 60, 65, 66, 87
SAP (Special Access Program) 38, 40, 70, 71, 73, 74, 76, 80, 83, 85-89, 91
Sarajevo 398
SAS (Australia) 167
SAS (Special Air Service) 152
Sayed, Mushahid Husain 347
Sayeret Matkal (operaciones especiales, Israel) 327
Schmitt, Gary 247, 248
Schomaker, Peter 315
SCIRI *véase* Consejo Supremo de la Revolución Islámica
scrub order (orden de depuración) 104, 105
SCS (Special Collection Service) 107
Scud (misiles) 211-213, 351
SEAL (Armada) 74, 163, 164, 167, 297, 305, 317
See No Evil (Soldados de la CIA, Clarridge) 102
Segunda Guerra Mundial 162
Senado (Comité de Inteligencia) 109, 111, 181, 234, 263, 401
Senado (Comité de Relaciones Exteriores) 31, 122, 324
Senado (Estados Unidos) 59, 64, 70, 75, 79, 87, 88, 92, 93, 110, 113, 126, 127, 230, 231, 272, 295, 317
señores de la droga 183
Septiembre Negro 122
Servicio de Inmigración 122
servicios de inteligencia *véase* CIA, FBI
Seúl (Corea del Sur) 343
Sharon, Ariel 211, 390, 391
Shelby, Richard C. 109, 110
Shibh, Ramzi bin al 134, 136, 145, 146
Shinseki, Eric 282
Shuck, Robert 50
Shulski, Abram 234, 235, 237, 241, 246-249
Siemens 381
SIGINT (inteligencia) 356
Sinclair, Upton 14
Singapur 42, 217
Siria 80, 190, 213, 270, 286-288, 359, 369-371, 373-378, 391-394, 396, 403
SISMI (Servicio de Inteligencia, Italia) 254-256, 259, 267, 268
Sitio Duro 67
Sivits, Jeremy 45
Smidovich, Nikita 239

Smiley, George 247
Smith, Douglas 106
Smith, I. C. 114, 116, 126
Smith, Jeffrey H. 300
Smith, Lance 65, 66
SOLIC (Operaciones Especiales y Conflictos de Baja Intensidad) 31, 66, 147, 151, 174, 176, 296, 298, 369
Somalia 297, 334
Spector, Leonard D. 381,
Spiller, Roger J. 280
SSO (Organización Especial de Seguridad) 289
St. Petersburg Times 44
Stefanowicz, Steven 55, 56
Steffens, Lincoln 14
Stein, Jeff 241
Stejskal, William 138, 143
Stone, I. F. 14
Strauss, Leo 234, 246, 247, 248, 249
Suecia 77, 78, 299
Sultán, Bandar bin (Arabia Saudí, príncipe) 224, 225, 361, 362, 364-366
Summers, Harry G. 177
Sunday Telegraph 152

Taguba, Antonio M. (informe) 44, 45, 49-57, 62-64, 66, 67, 69
Tailandia 42, 216
Tajikistán 103, 106, 366
Talent, James 93
talibanes 23, 26, 34, 37, 41, 60, 72, 97, 103, 106, 147-160, 162, 169, 170, 172-174, 176-178, 181, 182, 184, 185, 187, 197, 200, 205, 240, 295, 322, 323, 326, 362, 366, 367, 380, 384, 404 *(véase también* Omar, mulá)
Tanzania 102
Tarbell, Ida 14
Task Force-20 369, 370
Task Force-121 305, 315, 349, 355, 358
Tatex Trading 372
Teherán (Irán) 198, 287, 386, 387
Tel Aviv (Israel) 212, 388, 390
Teller, Edward 348,
Tenet, George 24, 109-111, 120, 229, 230, 252, 257, 262, 351, 371
The Arab Mind (Patai) 61
The Atlantic 101
The End Game (Fase Final) 189
The New Republic 14
The New Yorker 14-18, 21, 45, 91, 161, 189, 228, 287, 292, 391
The Price of Power (Hersh) 16
The Threatening Storm (Pollack) 251
The Times 262
Thielmann, Greg 245, 249-251, 253
Tikrit (Irak) 314
Tildes, Michael J. 365
Time 146
Titan (empresa civil) 53, 56
Todos los hombres del presidente (Woodward y Bernstein) 15
Tomahawk (misiles) 284
Tonga 252
Tora Bora (Afganistán) 162

Tormenta del Desierto 159
TPFDL *(time-phased forces-deployment list;* relación de despliegue escalonado de fuerzas) 280
Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares 330, 337, 353, 386
Tribunal Supremo 71, 78, 139, 405
Triple Frontera 297
Trireme Partners L. P. 217-219, 221-225, 227
Turley, Jonathan 140, 141
Turquía 190, 283, 359, 372, 391-394, 396, 397
TWA (vuelo 800) 118

Ucrania 383
Unidad 262, *véase* Sayeret Matkal
Unidad 8200 (inteligencia israelí) 386
Unión Europea (UE) 387, 394
Unión Patriótica del Kurdistán 206,
Unión Soviética 100, 103, 111, 130, 153, 154, 187, 247, 325, 363, 364, 381, 383
Union Texas Petroleum 120
United Airlines (vuelo 77) 124
United Airlines (vuelo 93) 125, 128
UPI (agencia) 14
URSS *véase* Unión Soviética
USA Today 60, 110
USS Cole 293,
Uzbekistán 106

Vajpayee, Atal Behari 334
Vaticano 254
Veteranos de Guerra 80
VFR (directrices militares) 203
Vieira de Mello, Sergio 80
Viena (Austria) 265, 352, 353, 389
Vietcong 11, 13, 301
Vietnam 11, 19, 85, 111, 157, 179, 301, 315

Wafi, Aicha al 138
Wall Street Journal 40, 92
Wallace, William S. 285
Warner, John 90-92
Washington Post 12, 13, 15, 35, 36, 41, 59, 67, 72, 93, 110, 121, 202, 221, 232, 310, 344
Watergate 15
Webster, William 118
Weekly Standard 247
Weinberger, Caspar 191
Wilson, Joseph 257, 258, 266, 271, 272, 277
Winall, Raymond 122
Wisdom, Matthew 47
Wolfowitz, Paul 179, 193-195, 203, 209, 213, 220, 234, 235, 242, 246, 256, 281, 295, 299, 394
Woods, James 116, 117
Woodward, Bob 15, 21, 341,
Woolsey, James 194, 195, 201, 241

Yeltsin, Boris 382
Yemen 222, 292-294, 299, 304, 305, 360, 363
Yemen Times 305

Yibuti 292
Yihad Islámica, *yihad* 78, 106, 130, 287, 372, 377
Yihad Islámica Egipcia 78
Yihad Islámica Palestina 372
Yugoslavia 175, 398
Yusuf, Ramzi Ahmed 100, 107, 121
Zahauie, Wisam al 254
Zamar, Mohamed Haydar 372
Zauahiri, Ayman al 78, 358
Zery, Mohamed al 77, 78
Zifferaro, Mauricio 239
Zinni, Anthony 191, 200, 201, 209
Zuhair, Harb Sale al 216, 218, 221-223, 225, 226

Obediencia debida se terminó de imprimir en noviembre de 2004, en Litográfica Ingramex, S.A. de C.V. Centeno162, Col. Granjas Esmeralda, C.P. 09810, México, D.F.

Certificado No. 02-2082

«Los artículos de Hersh en *The New Yorker* han contribuido a fijar la agenda política informando que, una vez más, los soldados estadounidenses han cometido actos atroces en una guerra donde el enemigo es escurridizo y la causa compleja.»

The New York Times

«Un *outsider* sagaz y dotado de una energía preternatural… el conjunto de cuya obra contribuye a revisar radicalmente la opinión de los estadounidenses respecto a su gobierno.»

The Washington Post

«Es el mejor periodista de investigación. No creo que nadie pueda discutirlo.»

Leslie Gelb, presidente emérito del Council on Foreign Relations

«Un periodista demoledor que ha desvelado algunos de nuestros más siniestros secretos.»

Chicago Tribune

«Gracias a Hersh disponemos de una historia alternativa a la 'guerra contra el terror'. En una ciudad y una cultura donde los *talk-shows* barriobajeros y los columnistas jactanciosos han suplantado casi al reportero que no ganaba para zapatos, donde la mayor parte del 'periodismo de investigación' consiste en reunir filtraciones cuidadosamente dispensadas, Hersh constituye casi un ejemplar único.»

The Independent

«Hay ahí una especie de audacia, un amor a la justicia y un sentido del puritanismo norteamericano. Hersh cuenta con fuentes de primer orden porque la gente confía en él. Saben que es honrado.»

David Halberstam

DC PUBLIC LIBRARY
3 1172 06719 5032

Seymour M. Hersh

Obediencia debida

Del 11 de septiembre a las torturas de Abu Ghraib

Desde el 11 de septiembre de 2001, Seymour M. Hersh ha mantenido fascinados a los lectores (e irritada a la Administración Bush) con sus artículos en *The New Yorker*, entre ellos la reveladora serie sobre las torturas en Abu Ghraib. Ahora, en *Obediencia debida*, da respuesta a la pregunta clave de los últimos tres años: ¿cómo pasó Estados Unidos de aquella mañana en que unos secuestradores estrellaron aviones contra el World Trade Center y el Pentágono a una guerra sucia y polémica en Irak?

Hersh se situó a la vanguardia del periodismo de investigación hace treinta y cinco años cuando desveló la matanza de My Lai, en Vietnam, hecho que le valdría un premio Pulitzer. Desde entonces ha desafiado a la elite del poder en Estados Unidos publicando cosas que otros no pueden, o no quieren, contar. En temas que van desde la corrupción del régimen saudí hasta el mercado negro de las armas nucleares y a las falsas afirmaciones de la Casa Blanca sobre las armas de destrucción masiva, Hersh ha reafirmado su reputación como el periodista indispensable de nuestra época.

En *Obediencia debida*, examina inexorablemente lo que se esconde tras la "guerra contra el terror" del presidente Bush y las mentiras y obsesiones que han llevado a Estados Unidos a Irak. Revela las conexiones entre los primeros pasos en falso en la caza de Al Qaeda y los desastres militares en Irak. El libro incluye una nueva aproximación al escándalo de Abu Ghraib y señala a aquellos que, en su opinión, son los verdaderos responsables. Hersh echa mano de fuentes del más alto nivel dentro del gobierno de Estados Unidos y de sus servicios de inteligencia, así como en capitales extranjeras y en el campo de bata-

LIT
MAY 06 2010
MLK Language & Literature
901 G St. NW 727-1111
dclibrary.org

l en la

ración

n con-

57.

AGUILAR
9 789707 700543
Col. Del Valle
03100 México, D.F.
Tel (54) 5420 75 30
Fax (52) 5604 23 04
www.editorialaguilar.com
info@editorialaguilar.com